

**ASÍ EN LA TIERRA COMO EN EL CIELO**  
**Familia e Iglesia: intereses contrapuestos en torno a una**  
**capellanía guipuzcoana (1778-1866)**

Jesús María Pitarque de la Torre

A mi maestro, el profesor Ángel Martínez de Velasco, por sus enseñanzas, por su estímulo y por su generosidad.



# Sumario

## Abreviaturas y siglas

### 1- Introducción. Objetivos, metodología, estado de la cuestión y fuentes

- La historia de un propósito y el propósito de una historia.
- Capellanías y Patronatos de laicos. Piedad y negocio más allá de la muerte.
- Estado de la cuestión.
- Fuentes utilizadas en esta investigación.

### 2- Un marco geográfico e histórico.

- Placencia. Una villa guipuzcoana en torno a la industria de las armas.
- Placencia. Un cabildo eclesiástico en torno al negocio de las almas.

### 3- Un seguro para el alma: legados píos y capellanías, el precio del descanso eterno.

- Juan Antonio de Azcarate. El fundador de la capellanía.

### 4- Un patrimonio para la Iglesia.

- Las capellanías, instituciones financieras.
- Capellanías y sistema benefical.

### 5- Unas rentas para la familia.

- José María de Aguirre. El primer capellán.
- Miguel Antonio de Jauregui. Maestro arquitecto y capellán consorte.
- María Bárbara de Aguirre. La capellana.
- Miguel de Mendiguchia. El pariente pobre.
- José Cruz de Azcaray. Capellán a los dos años.

### 6- Unos intereses en conflicto: interés de la Iglesia e intereses privados.

- Las visitas del obispo.
- Atanasio Puyal y Poveda, obispo de Calahorra. Un hombre de principios.
- Intereses contrapuestos y conflicto de jurisdicciones.

### 7- Cien años después.

### 8- Conclusiones

## Fuentes impresas

## Bibliografía

## Apéndice documental

## Abreviaturas y siglas\*

AAB: Archivo del Ayuntamiento de Bergara

ACC: Archivo Catedralicio de Calahorra

ADP: Archivo Diocesano de Pamplona

AFB: Archivo Foral de Bizkaia

AGI: Archivo General de Indias

AHDC: Archivo Histórico Diocesano del Obispado de Calahorra y La Calzada - Logroño

AHN: Archivo Histórico Nacional

AMS: Archivo Municipal de Soraluze-Placencia

AMU: Archivo Municipal de Urretxu

AMZ: Archivo Municipal de Zumarraga

ARCV: Archivo de la Real Chancillería de Valladolid

ARSB: Archivo de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País

BDFB: Biblioteca de la Diputación Foral de Bizkaia

BOPV: Boletín Oficial del País Vasco

DEAH: Donostiako Elizbarrutiko Artxibo Historikoa - Archivo Histórico Diocesano de San Sebastián

CSC-1698: Constituciones Sinodales del obispado de Calahorra y La Calzada del año 1698.

\* Teniendo en cuenta que las competencias de la normalización de nombres geográficos y de entidades de población corresponden a las Comunidades Autónomas, para los topónimos de los territorios históricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de sus entidades de población, en este trabajo se utilizarán las denominaciones oficiales aprobadas por las correspondientes normas forales y por la Resolución de 15 de diciembre de 1994 (BOPV nº 243 de 1994) sobre publicidad de los nombres oficiales de los municipios de la Comunidad Autónoma del País Vasco. En aquellos casos en los que existe una denominación diferente para cada una de las lenguas oficiales se utilizará la denominación en castellano. En el caso de la villa guipuzcoana de “Soraluze – Placencia de las Armas” se utilizará la forma abreviada, Placencia, de su denominación en castellano. Los apellidos en lengua vasca se escribirán sin signos de acentuación.

# **Introducción. Objetivos, metodología, estado de la cuestión y fuentes.**

## **La historia de un propósito y el propósito de una historia.**

*Un árbol tan corpulento que son precisos  
ambos brazos para rodearlo  
empieza como un minúsculo brote...  
Un viaje de mil leguas  
comienza con un paso.  
Lao Tse, Tao Te Ching, 64.*

Este trabajo de investigación, tan sólo un primer paso con el que aspiro a iniciar el camino que me conducirá a investigaciones de mayor calado, se inscribe en un amplio proyecto, diseñado por quien fue mi maestro y guía, y en el que inicié mi participación cuando comenzaba tímidamente mi aprendizaje del oficio de historiador.

Su principal objetivo era entonces y ahora investigar y profundizar, desde perspectivas diferentes, libres de ataduras de cualquier signo, una época, la de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, considerada clave en la configuración de los modelos sociales, políticos, económicos e incluso religiosos, predominantes durante los últimos siglos.

A su vez, una de las características más importantes radicaba en la heterogeneidad de los ámbitos espaciales en los que se desarrollan las distintas investigaciones, abarcando territorios de los diferentes reinos y regiones sobre los que se trató de construir en el siglo XIX, a partir de un complejo conglomerado de jurisdicciones diversas y de diferentes tradiciones, el Estado español.

Incidir en aspectos muchas veces olvidados y muy poco investigados era otro de sus objetivos iniciales. La iglesia y el papel que esta institución desempeñó en una época histórica de grandes cambios; la libertad de prensa y las Juntas de Censura; los movimientos revolucionarios y pronunciamientos, poco conocidos algunos de ellos, promovidos por ciertos sectores que deseaban vivamente la implantación de profundos cambios políticos, son, entre otras, algunas de las temáticas genéricas abordadas por las diferentes investigaciones que se han realizado y que se encuentran en curso, en el marco del citado proyecto.

Son ya varias las tesinas de licenciatura y tesis doctorales leídas y en curso de realización de las que somos autores quienes de una u otra forma nos sentimos partícipes y herederos de un proyecto que la triste pérdida de su promotor no ha impedido que se mantenga cada vez más vivo.

La decisión de emprender esta investigación, tomando como punto de partida un pleito desarrollado durante el primer tercio del siglo XIX por la sucesión en una

capellanía fundada en una villa guipuzcoana, tuvo mucho que ver con la orientación de un primer trabajo de investigación que realicé<sup>1</sup>, en el que trataba de iniciar una aproximación a las relaciones entre la Iglesia y las elites de poder local en unos territorios, el Señorío de Bizkaia y la Provincia de Gipuzkoa, en los que, por su singularidad, éstas se conservaban con características propias y con gran vitalidad desde los tiempos altomedievales. A pesar de ello, he de confesar que la elección del asunto concreto sobre el que se centra la investigación no responde a un plan deliberado, sino que se debe a un hecho más bien fortuito. La idea de trabajar sobre un pleito que tuvo lugar en la época histórica en la que se centraba mi principal interés surgió a partir de una documentación encontrada en el Archivo Histórico Nacional<sup>2</sup>, y de la sugerencia que me hizo en tal sentido quien fue mi maestro.

Desde la primera toma de contacto con la documentación percibí la riqueza de matices y de aspectos diferentes que podría desvelar un cuidadoso análisis de la misma. Una mujer era presentada para suceder a su difunto hermano, presbítero, cura y beneficiado de la iglesia parroquial de Placencia de las Armas, en la posesión de una capellanía, permaneciendo en la *quieta y pacífica posesión* de la misma hasta que varios años después intervino el obispo de Calahorra, Atanasio Puyal y Poveda<sup>3</sup>. A partir de una visita suya se inició un largo pleito que recorrió diversas instancias judiciales, permitiendo observar, entre muchas otras cosas, el conflicto existente entre las diferentes jurisdicciones, la civil y la eclesiástica. La intervención de las más altas instancias como la Cámara de Castilla, el Consejo de Estado y el propio rey en un pleito aparentemente sin importancia; la "intromisión" de una mujer en una institución eclesiástica; el enfrentamiento del obispo y la Cámara de Castilla; la figura del marido de la aspirante a la capellanía, un conocido arquitecto guipuzcoano<sup>4</sup>; la personalidad del obispo, Atanasio Puyal, protagonista de un

---

<sup>1</sup> PITARQUE DE LA TORRE, Jesús M., "Los patronatos de laicos en la crisis del Antiguo Régimen", en *Hispania Nova*, Madrid, 2000. Este trabajo fue presentado como Comunicación en el Primer Congreso Virtual de Historia Contemporánea de España, Madrid, Octubre, 2000. Cfr. MARTÍNEZ DE VELASCO, Ángel (Dir.), *La Iglesia y la crisis del Antiguo Régimen. Actas del I Congreso Virtual de Historia Contemporánea de España. Madrid, 1 de julio al 12 de octubre de 2000*, Madrid, 2000, edición en CdRom. ISBN 84-607-1345-8. Para mayor información, se puede encontrar en la Biblioteca Nacional, con la signatura DGcd/306.

<sup>2</sup> Se trata del expediente nº 2 del legajo 15.754 del Archivo Histórico Nacional, Sección de Consejos Suprimidos, Cámara de Castilla. El expediente se encuentra identificado mediante una pequeña tarjeta en la que se lee: "Calahorra. 1819 a 1834. Don Miguel Antonio de Jauregui, vecino de Bergara, sobre que no se declare colativa una capellanía fundada en la Iglesia de Placencia por Don Antonio de Azcarate". Este expediente está formado de dos partes claramente diferenciadas. La primera parte, que consta de 49 hojas 1/2 y 17 hojas 1/4, todas ellas manuscritas, contiene la documentación generada en la Cámara de Castilla y en el Consejo de Estado. La segunda parte contiene 174 hojas 1/2, todas manuscritas, pertenecientes al expediente de la causa que se inició en 10 de Diciembre de 1819 en el tribunal eclesiástico de Calahorra hasta su traslado al Metropolitano de Burgos en 1824.

<sup>3</sup> El título previsto inicialmente para este trabajo era el de "Una capellana contra el obispo de Calahorra durante el Trienio Liberal". Sin embargo, el estudio en profundidad del pleito que parecía constituir el núcleo de la investigación y de las instituciones implicadas, así como la indagación en los antecedentes del mismo, ampliaron notablemente el ámbito temporal del estudio, por lo que fue preciso sustituir el título por otro más general.

<sup>4</sup> Miguel Antonio de Jauregui, marido de quien fue presentada para ocupar la capellanía en el año 1812, era maestro arquitecto y profesor de dibujo del Seminario de Nobles de Bergara.

interesante episodio durante el reinado de José Bonaparte<sup>5</sup>, eran algunas de las cuestiones que despertaron poderosamente mi interés.

Por otra parte, las capellanías, unas instituciones eclesiásticas estrechamente relacionadas con los vínculos y mayorazgos, que fueron desde finales del siglo XVIII, y más aún durante el siglo XIX, objeto de las medidas desvinculadoras y desamortizadoras, por parte de la monarquía ilustrada en primer lugar y de los primeros gobiernos liberales posteriormente, constituían un interesante objeto de estudio para profundizar en el conocimiento de las complejas redes de solidaridad a través de las cuales se ejercía el poder y el dominio en las sociedades tradicionales, y de su evolución en una época que la historiografía ha considerado siempre como de grandes y profundos cambios y transformaciones.

La pretensión de contribuir a profundizar en el conocimiento de una época<sup>6</sup> en la que, al amparo de importantes reformas políticas e institucionales, tuvo lugar el fortalecimiento de determinados modelos económicos y sociales, que no eran nuevos en absoluto, pero que la historiografía muchas veces ha estimado como novedosos e incluso revolucionarios, y el aparente debilitamiento de otros considerados como feudales, es la que ha orientado el planteamiento de este trabajo. En la medida de lo posible, he tratado deliberadamente de huir de las grandes simplificaciones, de los tópicos historiográficos y de los lugares comunes con el fin de descubrir los aspectos escondidos de una realidad compleja, difícilmente explicable en muchos casos por medio de los paradigmas tradicionales, eludiendo conscientemente el principio de causalidad interna entre los fenómenos históricos defendido por la ciencia histórica desde el positivismo<sup>7</sup>. En este trabajo no se buscan respuestas definitivas sino que fundamentalmente lo que se persigue es problematizar y organizar preguntas que permitan enriquecer en profundidad la comprensión de la complejidad de los fenómenos históricos abordados.

El objetivo de este trabajo -el propósito de esta historia- es estudiar, por medio de la investigación de un caso concreto, el papel de la Iglesia, y especialmente el de algunas de sus instituciones, como instrumento de poder económico y social

---

<sup>5</sup> Tal como se verá más adelante, Atanasio Puyal se enfrentó en 1810 a José Bonaparte renunciando al nombramiento que éste le había hecho para la sede de Astorga.

<sup>6</sup> Es la época que la historiografía oficial ha considerado como el punto de partida de la Historia Contemporánea, es decir, la de la revolución liberal-burguesa y el final de lo que, desde Alexis de Tocqueville, se ha llamado el Antiguo Régimen. Una época histórica en la que, en muchos aspectos, se trató de crear la apariencia de un nuevo orden para apuntalar el que se estaba desmoronando.

<sup>7</sup> Giovanni Levi señala que en la actualidad, por medio de las últimas tendencias historiográficas, "*ha quedado socavada la hipótesis del automatismo del cambio*", es decir, que se ha puesto en duda "*la idea del progreso constante a través de una serie uniforme y predecible de etapas en las que, según se pensaba, los agentes sociales se ordenaban de acuerdo con solidaridades y conflictos que, en cierto sentido, estaban dados y eran inevitables*". LEVI, Giovanni, "Sobre microhistoria", en BURKE, P. (ed.), *Formas de hacer Historia*, Madrid, Alianza Universidad, 1999, p. 120. Esta superación de una concepción lineal de la historia como un constante progreso, concepción que procede, en palabras de Josep Fontana, de la "falacia cientifista", requiere nuevos métodos de investigación y de análisis. No obstante, tal como sugiere Josep Fontana, "*La crítica justificada de los viejos métodos no debe llevarnos a la negación del proyecto de un nuevo tipo de historia total que nos permita entender los mecanismos esenciales de funcionamiento de la sociedad, lo cual no significa buscar unas leyes que determinen su evolución...*". FONTANA, Josep, *La Historia de los hombres*, Barcelona, Crítica, 2001, p. 354.

utilizado por ciertos grupos privilegiados para extender sus redes de influencia y perpetuar su preponderancia y su supremacía, y su evolución en una coyuntura de profundos cambios políticos, la correspondiente a los años finales del siglo XVIII y primera mitad del XIX. Aunque se trata de un objetivo excesivamente ambicioso para el alcance de un trabajo de estas características, su formulación es necesaria como guía y horizonte de referencia.

La presente investigación es tributaria de una continuada reflexión teórica, tanto en relación con los grandes procesos que la historiografía considera como los configuradores de la época estudiada, como sobre la crisis de determinadas instituciones vinculadas a unos modelos sociales que se han reputado de premodernos, y que han sido denominados como feudales o señoriales, así como sobre el mismo concepto de investigación histórica y de ciencia histórica, que incide directamente en el planteamiento de los objetivos y en la metodología utilizada. No obstante, aunque los presupuestos teóricos, inevitablemente, condicionan el análisis histórico, no se trata en este trabajo de confirmar presupuesto teórico alguno, sino de criticarlos constantemente para revalidarlos o modificarlos, retomando continuamente el proceso de reflexión en función de los interrogantes surgidos durante la propia investigación. Las teorías y las hipótesis son importantes para el trabajo científico, pero, según la fórmula acertadamente expresada por Lucien Febvre, pueden convertirse fácilmente en "grandes máquinas de impedir la comprensión"<sup>8</sup>, por lo que es preciso estar abierto a su continuo y constante replanteamiento y crítica. Por otra parte, la historia como narración de un pasado anecdótico y una mera descripción de las fuentes, despojada de la crítica y al margen de la necesaria reflexión teórica, aporta muy poco al conocimiento histórico y carece de sentido.

Los historiadores italianos Carlo Ginzburg y Giovanni Levi, pioneros e impulsores de la práctica historiográfica que se conoce como *microhistoria*<sup>9</sup>, han insistido en la

---

<sup>8</sup> Esta cita de L. Febvre es recogida por MARROU, H. I., *El conocimiento histórico*, Barcelona, Idea, 1999, p. 157.

<sup>9</sup> La microhistoria carece de una teoría sistematizada, pudiendo ser considerada como un conjunto de prácticas historiográficas, entre las que destaca la producción de los historiadores italianos citados. Las más emblemáticas de las obras en las que se pone en práctica esta metodología son la de Carlo GINZBURG, *El queso y los gusanos. El cosmos según un molinero del siglo XVI*, Madrid, Muchnik editores, 1981, y la de Giovanni LEVI, *La herencia inmaterial. La historia de un exorcista piemontés del siglo XVII*, Madrid, Nerea, 1990. Básicos para una aproximación a la teoría y práctica de esta forma diferente de hacer historia, conocida como "microhistoria", son los artículos y libros siguientes: GINZBURG, C., y PONI, C., "El nombre y el cómo: intercambio desigual y mercado historiográfico", en *Historia Social*, 10 (1991), 63-70; GINZBURG, C., *Mitos, emblemas, indicios: Morfología e historia*, Barcelona, Gedisa, 1989; LEVI, G., "Sobre microhistoria", en BURKE, P. (ed.), *Formas de hacer historia*, Madrid, Alianza Universidad, 1999; PONS, A., y SERNA, J., "El ojo de la aguja. ¿De qué hablamos cuando hablamos de microhistoria?", en RUIZ TORRES, P. (ed.), "La Historiografía", *Ayer*, 12 (1993), pp. 93-133, artículo en el que se puede encontrar una abundante bibliografía sobre el tema; PONS, A., y SERNA, J., *Cómo se escribe la microhistoria. Ensayo sobre Carlo Ginzburg*, Madrid, Cátedra, 2000. Recientemente algunos historiadores han abordado también ciertos aspectos de la historia del País Vasco en clave microhistórica, como es el caso de IPARRAGIRRE BURGOA, Gotzon, *Txano frigarretik karlisten txapelera. Irún, 1789-1839*, Boletín de Estudios del Bidasoa. Estudios IV, Irún, 1999, en donde se realiza un estudio de la evolución social e ideológica que tiene lugar entre la Revolución francesa y la primera Guerra Carlista por medio del análisis de una sociedad concreta que el autor restringe a la villa guipuzcoana de Irún y su ámbito de influencia. Otros

importancia de la utilización de una escala reducida en el proceso de comprensión de la totalidad. Los seguidores de esta tendencia historiográfica sostienen que la observación en detalle de los casos particulares es la mejor forma de aproximarse al estudio de los procesos generales. No obstante, quien utiliza esta metodología de análisis histórico corre el riesgo de caer en análisis fragmentarios que no tengan en cuenta el contexto general en el que se desarrollan los acontecimientos estudiados, perdiendo de vista los grandes procesos que configuran la época estudiada. Es por ello por lo que en este trabajo se ha partido del convencimiento de que no es posible la investigación histórica de un hecho o acontecimiento cualquiera sin tener en cuenta en todo momento el contexto en el que se produjo. Sin embargo no es posible huir de las absurdas simplificaciones, consecuencia de la exagerada generalización a la que obligan los análisis macrohistóricos, si no se reduce la escala de análisis de tal forma que sea factible explorar en detalle multitud de factores diversos imposibles de observar en los grandes sistemas. En el caso sobre el que se desarrolla este trabajo, la reducción de la escala de observación ha permitido conocer en detalle algunas de las estrategias personales y colectivas a través de las cuales se ejerce y se perpetúa el poder y se reproduce el sistema social<sup>10</sup>.

El análisis de un caso singular, la historia de una capellanía y la del pleito que mantuvo con el obispo de Calahorra una mujer de comienzos del siglo XIX por su posesión, no constituye un fin en sí mismo. No se trata de hacer historia local, sino de descubrir la complejidad de la sociedad de comienzos del siglo XIX por medio del estudio de un caso concreto, teniendo siempre presente que la dimensión del objeto de análisis no debe condicionar en ningún momento la dimensión de los problemas que se plantean. No se trata de realizar la historia anecdótica de un pueblo o de una familia, pero tampoco de producir una gran síntesis histórica de una época.

El hecho de reducir la escala de la investigación<sup>11</sup> a un caso concreto, supone obvias limitaciones si el objetivo es llegar a una comprensión global de la época histórica estudiada o del funcionamiento de las estructuras de poder y de dominación, pero constituye un punto de partida de enorme valor para establecer pautas, criterios, y, sobre todo, para plantear las vías de investigación que pueden

---

ejemplos de esta orientación en la investigación histórica son los aportados por Carlos Riloja Jericó, cuyas investigaciones históricas circunscritas en la mayoría de las ocasiones a la ciudad de Hondarribia, trascienden la simple historia local: RILOVA, Carlos, *Marte cristianísimo. Guerra y paz en la frontera del Bidasoa (1661-1714)*, Boletín de Estudios del Bidasoa. Estudios nº 1, Irún, 1999; RILOVA, Carlos, *Dueño y señor de su estado. Un ensayo sobre la persistencia del feudalismo. El señorío colectivo de la ciudad de Hondarribia (1499-1834)*, Boletín de Estudios del Bidasoa, Estudios nº 3, Irún, 2000; y el artículo RILOVA, Carlos, "Fueros, nobleza universal, honor y muerte", en *Boletín de Estudios del Bidasoa*, 16 (1998), Irún, 1998.

<sup>10</sup> Giovanni Levi advierte acertadamente que "*ciertos fenómenos que anteriormente se consideraban suficientemente descritos y entendidos, se revisten de significados completamente nuevos al alterar la escala de observación*". LEVI, G., "Sobre microhistoria", en BURKE, P. (ed.), *Formas de hacer Historia*, Madrid, Alianza Universidad, 1999, p. 126.

<sup>11</sup> Por otra parte, hay que tener en cuenta que, como advierten Carlo Ginzburg y Carlo Poni en su artículo ya citado "El nombre y el cómo...", la reducción de la escala de investigación constituye la forma más adecuada y accesible para quienes emprenden una investigación con métodos más o menos artesanales, es decir, sin ningún tipo de financiación ni la existencia de grandes equipos multidisciplinares.

abrirse en el futuro. Además, es preciso tener en cuenta que los enfoques utilizados tradicionalmente por la historiografía, basados en la delimitación de grupos sociales partiendo de modelos teóricos, conducen irremediablemente a una simplificación exagerada de la realidad<sup>12</sup>. Prestando atención a los casos particulares se encuentran formas de relación y de conductas sociales que en muchos casos no pueden explicarse por medio de los modelos teóricos al uso, pero que aportan una valiosísima información acerca de la manera en la que se estructuran las relaciones interpersonales en determinadas sociedades.

No se ha pretendido en este trabajo defender tesis alguna, sino preparar el camino para ello, planteando las cuestiones que surgen al hilo de la investigación de un largo pleito en el que se ven envueltas diversas instituciones políticas, sociales y religiosas. Esta investigación, además de dotarme de un importante bagaje metodológico, me ha proporcionado multitud de elementos y de datos a partir de los cuales es posible replantear determinados tópicos historiográficos, cuestionándolos en profundidad, con el fin de esbozar interpretaciones alternativas. Ideas fuertemente arraigadas en la historiografía se muestran tremendamente frágiles ante un análisis riguroso y una atenta observación de algunos hechos históricos.

La época en la que se centra esta investigación, considerada por la historiografía como la de la revolución liberal o la de la revolución burguesa, o como la de la crisis del Antiguo Régimen, dependiendo de que el punto focal se sitúe en las transformaciones políticas o en las sociales y económicas, es una época que, como ha señalado Juan Pro Ruiz refiriéndose a la historia social, "sigue constituyendo todavía un enigma o, peor aún, un campo abonado para malentendidos, anacronismos y prejuicios"<sup>13</sup>.

En esta investigación he partido de la convicción de la necesidad de superar las visiones simplificadoras de la historia en las que predominan las oposiciones binarias mutuamente excluyentes. Son estas visiones, exageradamente dualistas y empobrecedoras de la realidad las que alimentan los tópicos sobre los que en muchas ocasiones se han construido las grandes síntesis históricas. La dualidad entre sociedad tradicional y sociedad moderna, entre Antiguo Régimen y Liberalismo, entre Iglesia y Estado, entre feudalismo y capitalismo, entre riqueza de la Iglesia y pobreza del bajo clero rural, son parte de la larga lista de tópicos que conviene replantear y poner en cuestión. En el caso del siglo XIX, además, se produce el enfrentamiento entre dos discursos opuestos, ambos igualmente superficiales y empobrecedores, el de la continuidad y el de la ruptura, que deben ser superados si se pretende profundizar en la forma en la que en el seno de una sociedad conviven diversos sistemas y modelos que interactúan entre ellos de múltiples maneras.

---

<sup>12</sup> La propuesta metodológica de Carlo Ginzburg y Carlo Poni, en el artículo citado anteriormente, se orienta en este sentido, ya que supone una apuesta por una historia que estudie a los individuos concretos a través de los contextos en los que se mueven en lugar de tratar de encajarlos en el anonimato de las series y en estructuras teóricas.

<sup>13</sup> PRO RUIZ, Juan, "La élites de la España liberal: clases y redes en la definición del espacio social (1808-1931)", en *Historia Social*, 21 (1995), pp. 47-69.

El discurso narrativo del trabajo se ha estructurado de tal forma que, al mismo tiempo que se analizan los hechos desde un punto de vista cronológico, no se pierda una perspectiva global. Para ello se ha elegido un esquema de desarrollo según el cual el punto de vista diacrónico se entrelaza con otro de carácter interpretativo, tratando de buscar en cada momento de la evolución de los acontecimientos objeto de la investigación, y en cada hecho singular, el hilo conductor que permita modelar una narración coherente, orientada no sólo a los hechos históricos, sino también a sus más profundos significados, y a los actores sociales que intervinieron en los mismos, a los que se ha tratado de conceder el protagonismo que les corresponde.



## Capellanías y Patronatos de Laicos. Piedad y negocio más allá de la muerte.

Las capellanías<sup>14</sup>, originalmente instituciones de la Iglesia destinadas a la creación de nuevos beneficios eclesiásticos<sup>15</sup> con fines teóricamente espirituales, constituyeron durante bastantes siglos un medio de control social muy eficaz. Con frecuencia fueron uno más de los resortes utilizados para garantizar el ejercicio del poder por parte de los grupos dominantes, al tiempo que aseguraban la perpetuación del sistema por medio de la vinculación de ciertos patrimonios en el seno de determinadas familias y linajes. Las capellanías fueron durante muchos siglos un instrumento fundamental, aunque no el único, en la configuración de los engranajes con los que funcionaban unas sociedades en las que la Iglesia era una pieza clave para el tejido de las redes de solidaridad que aseguraban el orden y el equilibrio social. Junto con el patronato de laicos y los beneficios patrimoniales, las capellanías constituían uno de los más importantes puntales sobre los que se asentaba la intervención de los poderes intermedios en la Iglesia.

---

<sup>14</sup> "Se da el nombre de capellanía a la fundación perpetua hecha con la obligación aneja de cierto número de misas u otras cargas espirituales en iglesia determinada, que debe cumplir el obtentor en la forma y lugar prescritos por el instituyente". En ÁLVAREZ Y GÓMEZ, Mariano, *Manual de Capellanías y Pías Memorias*, Vitoria, 1903, p. 9. Una definición más precisa, en la que se tiene en cuenta la complejidad de esta institución, es la que nos ofrecen BRAVO Y TUDELA y FRANCO Y ORTIZ: "Capellanía es un Beneficio excepcional, impropio, de fundación particular en iglesia, capilla o altar, que obliga a su poseedor a celebrar o mandar celebrar una o más misas, auxiliar al Párroco en sus funciones, servir en altar, o recitar horas canónicas u otras obligaciones, según la tabla de fundación; con derecho a los emolumentos señalados por el fundador y al goce de los bienes que constituyen la fundación". BRAVO Y TUDELA, A. y FRANCO Y ORTIZ, J. M., *Novísima legislación comentada sobre Capellanías colativas de sangre y fundaciones análogas*, Madrid, Imprenta de Miguel Campo Redondo, 1868. Se han dado numerosas etimologías a la palabra *capilla* de la que procede la de *capellanía*; haciéndola derivar algunos autores de las palabras 'capra' y 'pellis' por la costumbre de cubrir con pieles de cabra las techumbres de los oratorios campestres; otros la hacen derivar del verbo latino 'capio' y del sustantivo griego 'laos' dándole el sentido de contener al pueblo cuando asiste a los oficios litúrgicos; la etimología más extendida es la de la palabra francesa 'chapelle', diminutivo de capa que hace referencia a la media capa de San Martín de Tours. Cfr. GONZÁLEZ RUIZ, M., "Las capellanías españolas en su perspectiva histórica", en AA. VV., *El patrimonio eclesiástico. Estudios de la Tercera Semana de Derecho Canónico*, Salamanca, 1950, p. 415. De lo que no cabe duda es de que el nombre de *capellanía* está relacionado con la realización de determinados oficios litúrgicos y la celebración de misas en los altares de las capillas existentes en casi todas las iglesias. La voz *capilla* daría origen también a la palabra *capellán* con la que se designa a quien posee una *capellanía*, pero que también ha sido y es utilizada de una forma mucho más genérica en muchos lugares para referirse a un clérigo cualquiera.

<sup>15</sup> El sistema benefical tiene su origen más remoto en la institución feudal del "beneficium", gratificación en forma de concesión de tierras que daba el señor a quienes hacían algún servicio en sus dominios o a los que se acogían a su protección. Según Gómez-Salazar, la palabra beneficio no se usó en los primeros siglos de la Iglesia, "porque los clérigos eran adscritos al servicio de la Iglesia, y de ella percibían lo necesario para la vida, siendo lo principal el oficio que habían de cumplir, y lo accesorio y secundario el alimento que la Iglesia les suministraba". Sin embargo, según el mismo autor, ya se usaba la palabra beneficio en el siglo VIII, "según consta del Concilio de Francfort de 794 y del Concilio de Macón de 813, y parece que se trasladó del derecho feudal". Este mismo autor, define el beneficio como "El derecho perpetuo a percibir las rentas de los bienes eclesiásticos por algún servicio espiritual constituido por la autoridad eclesiástica". GÓMEZ-SALAZAR, F., *Instituciones de Derecho Canónico*, León, Imp. de Herederos de Miñón, 1891, t. III, p. 173-174.

Son muchos los autores que han adjudicado a la Iglesia, como sujeto colectivo, un desmesurado papel en las estructuras dominantes y de poder a lo largo de los siglos, participando de la peyorativa interpretación de la historia anterior a la ilustración y al liberalismo, según la cual la humanidad se encontraba dominada por la superstición y la violencia. La Historia institucional, preponderante durante mucho tiempo, al tomar como objeto de estudio las instituciones, tales como la Iglesia, ha descuidado el estudio en profundidad de los sistemas sociales y de los sujetos individuales y colectivos que actuaban a través de dichas instituciones. No se puede negar que la Iglesia, durante muchos siglos, ha controlado los aspectos fundamentales de la vida<sup>16</sup>, controlaba el tiempo a través del calendario litúrgico, de las festividades, de los momentos más importantes de la vida como son el nacimiento, el matrimonio y la muerte; ejercía un enorme poder de control sobre los marcos espaciales mediante la organización del territorio con el establecimiento de la red de parroquias y de los límites diocesanos, así como de los recorridos ceremoniales por los que discurrían procesiones y romerías; controlaba directamente las creencias y la moral, la enseñanza, los lazos de parentesco y las formas de matrimonio, el funcionamiento de la economía mediante la condena de la usura, la producción agropecuaria mediante el diezmo, los sistemas de asistencia, e incluso la producción artística. Según Alain Guerreau, refiriéndose a la época medieval, la Iglesia ejercía "*poder sobre ámbitos ilimitados, sobre el tiempo, sobre el espacio, sobre el parentesco, sobre la enseñanza, sobre el saber, las creencias y la moral, sobre las representaciones, sobre las obras de asistencia, sobre los fundamentos del poder y de la justicia; sería más fácil inventariar lo que la Iglesia no controlaba: en teoría, nada*"<sup>17</sup>. A pesar de la rotundidad de estas afirmaciones, habría que plantearse si éste enorme poder de la Iglesia era ejercido directamente por dicha institución o si la Iglesia no era sino un instrumento en manos de una compleja red de dominación en la que como tal institución no era necesariamente, ni siempre, la principal beneficiaria.

Desde esta perspectiva, el estudio de las capellanías permite aproximarse a los mecanismos por medio de los cuales se conformaban redes clientelares que aseguraban la casi perfecta reproducción del sistema de dominación a lo largo de generaciones, garantizando el orden social en beneficio de los grupos de poder. En las sociedades tradicionales, el poder político, social y económico se estructuraba a través de determinadas instituciones jurídicas privilegiadas puestas al servicio de las familias dominantes. Las capellanías, junto a los mayorazgos<sup>18</sup> eran en muchos lugares las más importantes de estas instituciones.

---

<sup>16</sup> Todos los aspectos de la vida sobre los que influía la Iglesia en las sociedades tradicionales son expuestos para las sociedades feudales con gran detalle y precisión por Alain Guerreau en *El Feudalismo. Un horizonte teórico*, Barcelona, Crítica, 1984.

<sup>17</sup> GUERREAU, Alain, *El Feudalismo. Un horizonte teórico*, Barcelona, Crítica, 1984, p. 233.

<sup>18</sup> El mayorazgo es una forma de propiedad vinculada, en la cual su titular dispone de la renta, pero no de los bienes que la producen, ya que éstos se encuentran vinculados, por tanto amortizados, y sujetos a sustitución sucesoria u orden de sucesión prefijado. Esta forma de propiedad vinculada, según Bartolomé Clavero, fue "*impropiamente calificada y conocida con un término que sólo hace referencia inmediata a uno de los modos posibles de la sustitución sucesoria consiguiente a la vinculación: mayorazgo, es decir, primogenitura*". CLAVERO, B., *Mayorazgo. Propiedad feudal en Castilla 1369-1836*, Madrid, Siglo XXI, 1974, p. 22. Desde este punto de vista las capellanías pueden

Durante bastantes siglos, las capellanías constituyeron un modo alternativo de vinculación de determinados patrimonios, que permitía mantener con decencia a los segundones de algunos linajes importantes y a los miembros de pequeñas familias de hidalgos, al tiempo que se establecían lazos perpetuos con los antepasados y con el más allá. Tal como señala Antonio Irigoyen, "*la capellanía al ser una fundación perpetua se constituía como una estrategia familiar a largo plazo que determinaba destinar a un miembro de la parentela a la Iglesia*"<sup>19</sup>. Por otra parte, a través del patronato, elemento fundamental en las capellanías familiares o de sangre, proporcionaron uno de los más eficaces medios de intervención directa en los mecanismos de control social que ofrecía la Iglesia.

Por otra parte, las capellanías y los legados píos en general, implicarían a la Iglesia en la gestión de ciertos patrimonios de origen burgués y en la participación en rendimientos de origen capitalista. Según la tesis defendida por Elena Catalán, la Iglesia vizcaína y guipuzcoana, como consecuencia por una parte del régimen de patronato y por otra de una agricultura mediocre, al verse privada de una gran parte de la renta eclesiástica por excelencia, el diezmo, se vio obligada a regular los mecanismos necesarios para participar de los rendimientos de otras actividades económicas, con mayor peso específico que la agricultura en la economía de la región<sup>20</sup>. Las capellanías y los legados píos fueron el medio más apropiado para incorporar este tipo de rentas a su patrimonio. La idea comúnmente aceptada del carácter feudal de las rentas eclesiásticas de finales del siglo XVIII, es puesta en cuestión por las investigaciones desarrolladas por Elena Catalán. Sus trabajos demuestran también la falacia de suponer que las estructuras de la Iglesia y el origen de sus rentas y de sus patrimonios eran homogéneos en todas partes, ya que, aunque la Iglesia se encontraba organizada sobre una doctrina y unos fundamentos jurídicos comunes, los del derecho canónico, demostró una gran capacidad de adaptación a factores geográficos, históricos, culturales, lingüísticos, sociales, políticos y económicos diferentes.

Bajo el nombre de capellanías se agrupan todas aquellas fundaciones en las que una determinada masa de bienes, afectos a un fin religioso, se gravan con una carga espiritual consistente en la obligación de celebrar o hacer celebrar una serie de misas en un altar o capilla determinados. Dependiendo del carácter de los bienes afectos a las capellanías, éstas se consideran laicales o merelegas cuando aquéllos son profanos, y eclesiásticas cuando los bienes gravados han sido espiritualizados, es decir, han pasado a formar parte del patrimonio de la Iglesia. A su vez, las

---

ser consideradas también como una forma de mayorazgo, ya que se trata de propiedades vinculadas con unas cargas espirituales anexas. En la fundación de capellanías se establece también el sistema sucesorio tanto para la ocupación de la capellanía como en el patronato de las mismas. Las capellanías conocidas como *familiares* o *de sangre* se caracterizan porque el sistema sucesorio establecido en su fundación las vincula a una familia o linaje determinados.

<sup>19</sup> IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio, "Clero secular, familia y movilidad social: Actores y directores. (Murcia, Siglo XVII)", en CHACÓN JIMÉNEZ, F. y HERNÁNDEZ FRANCO, J. (eds.), *Familia, poderosos y oligarquías*, Murcia, Universidad de Murcia, 2001, p. 143.

<sup>20</sup> CATALÁN, Elena, *El precio del purgatorio. Los ingresos del clero vasco en la Edad Moderna*, Bilbao, UPV, 2000, p. 25.

capellanías eclesiásticas pueden ser colativas<sup>21</sup>, si constituyen un beneficio eclesiástico, que, por lo tanto, requiere de la colación y canónica institución del mismo por parte del Ordinario. Las capellanías, tanto las laicales como las eclesiásticas, requieren de la vinculación de unos bienes, que constituyen el capital principal, cuyas rentas se destinan al cumplimiento de las cargas impuestas por el fundador. No se deben confundir las capellanías con las memorias de misas, los aniversarios y con otras clases de legados píos, ya que éstos no siempre requerían de la existencia de una fundación, la cual siempre precisa de la vinculación de unos bienes. Las capellanías eran siempre fundaciones piadosas, aunque no todas las fundaciones piadosas fueran capellanías. En la práctica, sin embargo, en todas las épocas, ha sido frecuente la confusión entre unas y otras instituciones, bien por desconocimiento, o incluso de forma interesada.

La fundación de capellanías respondía a variadas motivaciones. Quien fundaba una capellanía aspiraba, teóricamente al menos, a asegurarse la gloria eterna acortando el tiempo de permanencia de su alma en el purgatorio por medio de sufragios y misas por su alma<sup>22</sup>. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, las principales razones eran otras. Perpetuar la memoria del fundador<sup>23</sup>, asegurar unas rentas para algunos segundones de la familia que les permitieran seguir unos estudios y acceder al estamento clerical, estrechar los lazos con la Iglesia como instrumento de control social, obtener para su familia un medio de acceso a las redes de poder local a través del patronato; todas éstas eran otras tantas razones por las que alguien podía estar interesado en fundar una capellanía. Estas finalidades se conseguían por medio de la vinculación de unos bienes que aseguraban unas rentas perpetuas, normalmente para miembros del linaje del fundador.

El deseo de lograr la eternidad fue el origen de unas instituciones reguladas por la Iglesia y protegidas por la monarquía, que formaban parte importante de la

---

<sup>21</sup> Las capellanías eclesiásticas que no constituyen un beneficio, bien por no alcanzar la dotación suficiente para ello o por haber sido expresamente establecido por el fundador, se asemejaban más a las laicales, diferenciándose de éstas exclusivamente en que los bienes que constituían su principal formaban parte del patrimonio de la Iglesia. La confusión aumentaba cuando a capellanías cuyos bienes no habían pasado al patrimonio de la Iglesia se les consideraba como eclesiásticas en razón a que su patronato fuera eclesiástico. Estas cuestiones serán analizadas en detalle a lo largo de la presente investigación.

<sup>22</sup> Era una fórmula habitual en los testamentos de quienes hacían legados piadosos o fundaban capellanías o memorias de misas la de declarar "al alma por heredera". A modo de ejemplo, entre muchos otros que se pueden aportar, en la fundación en 1692 de una capellanía en el lugar alavés de Foronda se observa este tipo de fórmula: "*Don Diego Lopez de Arana, el qual por el testamento cerrado que hizo y otorgo en la dicha Villa de Madrid en ocho de Maio de mil seiscientos noventa y dos ante Blas Gomez mi Escribano, que fue avierto con la solemnidad del derecho, dexó a su Alma por heredera, en cuio beneficio declaro era su voluntad que todo el remanente de sus vienes se combirtiese en una Capellania de trescientos ducados de renta al año con carga de una Misa rezada cada día en la dicha Iglesia Parroquial de San Martin del dicho lugar de Foronda*". AHN, Consejos suprimidos, Legajo 9849.

<sup>23</sup> La Iglesia "*ha querido perpetuar la memoria de hombres piadosos, que al paso que establecieron sufragios permanentes por su alma, dieron medios adecuados a los individuos de su familia, para que a título de ellas pudieran ordenarse*". CAMPOS Y PULIDO, José M., *Las capellanías colativas en España. Estudio de su historia, sus vicisitudes y su situación actual, seguido de las leyes y preceptos aplicables y completado con la jurisprudencia más importante sobre la materia*, Hijos de Reus, Madrid, 1910, p. 41.

configuración de los linajes familiares, por medio de la comunión solidaria entre los antepasados ya fallecidos y los descendientes. En las capellanías laicales, también llamadas habitualmente "patronatos de legos"<sup>24</sup>, los patrimonios vinculados permanecían en poder de las familias. Sin embargo, en el caso de las capellanías eclesiásticas colativas, éstas se erigían como beneficios eclesiásticos y sus bienes eran espiritualizados, es decir, pasaban a formar parte del patrimonio de la Iglesia.

El origen de las capellanías está relacionado con el del sistema benefical de la Iglesia<sup>25</sup>. La organización del sistema benefical tenía como objetivo primordial impedir la existencia de clérigos carentes de rentas que tuvieran que dedicarse a vagar y a mendigar o dedicarse a oficios considerados poco apropiados para quienes tenían encomendada una función sagrada. Ningún clérigo podía ser ordenado si no poseía un beneficio que le sirviera como *título de ordenación*<sup>26</sup>.

La posibilidad de fundar capellanías facultaba a los laicos a intervenir en la creación de beneficios eclesiásticos que pudieran servir como título de ordenación, aumentando el número de eclesiásticos y propiciando la intromisión directa de los laicos en los asuntos eclesiásticos y en el control de una institución, la Iglesia, de poderosa influencia social.

---

<sup>24</sup> No se deben confundir estos "patronatos de legos" con el régimen de patronato laical, que tiene su origen en las iglesias propias, característico de muchas iglesias, especialmente en las del Señorío de Bizkaia. Durante los siglos XVIII y XIX, se solía denominar patronatos de legos a las capellanías que no constituirían Beneficios eclesiásticos, es decir, a las capellanías laicales. También se conocían estas capellanías como "merelegas" y como "mercenarias", ya que el clérigo que se encargaba de levantar las cargas espirituales de las mismas, lo hacía a cambio de un estipendio o merced.

<sup>25</sup> Mientras que el canon VI del Concilio de Calcedonia (año 451) establecía que nadie podía ser ordenado ni presbítero ni diácono si no se le había asignado una comunidad eclesiástica, en el III Concilio de Letrán (año 1179), el papa Alejandro III estableció la necesidad de disponer de una renta para poder ser ordenado, pudiéndose deducir la vigencia para entonces del sistema benefical. Al igual que todas las demás instituciones del derecho canónico clásico, el sistema benefical de la Iglesia, tiene su origen en la reforma gregoriana del siglo XI, fundamentalmente a partir del Decreto de Graciano (1140). Cfr. GOLMAYO, P. B., *Instituciones del Derecho Canónico*, Madrid, 1859, tomo I, pp. 367-369.

<sup>26</sup> Se entiende por título de ordenación, el derecho a percibir una renta anual según la tasa determinada por el obispo para la honesta sustentación del clérigo. *"La Iglesia ha exigido siempre en una u otra forma el título de ordenación, a fin de que los clérigos no se vean precisados a mendigar o a ejercer oficios indecorosos a su estado con desdoro del sagrado ministerio"*. GÓMEZ-SALAZAR, F., *Instituciones de Derecho Canónico*, t. II, León, 1891, pp. 561. El Concilio de Trento (Ses. XXI, De Reformat., cap. II) previene que no se ordene a nadie sin que tenga título de ordenación, y siguiendo el espíritu del Concilio de Calcedonia, dispone (Ses. XXIII, De Reformat., cap. XVI) *"que ninguno sea ordenado en lo sucesivo, sin que se destine o adscriba a una iglesia o lugar pío, por cuya necesidad o utilidad se ha ordenado"*. Esto mismo era prescrito por Inocencio XIII en su constitución Apostolici Ministerii (13 de Mayo de 1723), lo que indica a las claras que no se estaba respetando. El título de ordenación podía ser de varias clases: Beneficio (Título ordinario), Título de patrimonio o pensión (Título extraordinario), Pobreza religiosa (Basta a los clérigos regulares), Mesa común (exclusivo de Alemania), o Servicio de la Iglesia. Cfr. GÓMEZ-SALAZAR, F., *Instituciones de Derecho Canónico*, t. II, León, 1891, pp. 562. *"Título canónico es el de beneficio, y, en su defecto, el de patrimonio o pensión, y, a falta de éstos, el de servicio de la diócesis o el de misión, que obligan con juramento a perseverar en el servicio de la diócesis o misión, y tratándose de religiosos, el título de pobreza para los regulares, el de mesa común o de Congregación u otro parecido... El Obispo debe alimentar al clérigo a quien ordenó sin congrua (c. 980)"*. POSTÍUS Y SALA, J., *El Código Canónico aplicado a España*, Madrid, 1926, p. 763. El título de ordenación era un requisito imprescindible para acceder a las órdenes mayores (c. 974).

Por una corrupción del espíritu original que animaba la fundación de capellanías, éstas en muchos casos, tal como ya se ha esbozado anteriormente, se convirtieron en simples vínculos, especie de mayorazgos, a los que la voluntad del fundador, movido por una aspiración de trascendencia y por el miedo a la condenación eterna, gravaba con ciertas cargas espirituales como la celebración de misas en sufragio de su alma. Estas serían las capellanías laicales o merelegas, para cuya fundación no se precisaba la aprobación del obispo y cuyos bienes no pasaban a formar parte del patrimonio eclesiástico.

Estas capellanías no constituían beneficios eclesiásticos y por tanto no servían como título de ordenación. Las capellanías laicales compartían con las capellanías eclesiásticas la finalidad espiritual de ofrecer sufragios, en forma de misas, por las almas del purgatorio, pero al no requerir la espiritualización de los bienes patrimoniales sobre los que se fundaban, y excluir de forma explícita, en la mayoría de las ocasiones, la intervención del obispo tanto en su institución, como en las posteriores sucesiones y en los pleitos que tuvieran lugar, no pasaban de ser una clase de vinculaciones, o pequeños mayorazgos.

## Estado de la cuestión.

"Somos como enanos sentados sobre los hombros de gigantes para ver más cosas que ellos y ver más lejos, no porque nuestra visión sea más aguda o nuestra estatura mayor, sino porque podemos elevarnos más alto gracias a su estatura de gigantes".

Bernardo de Chartres (s. XII)

Para un conocimiento en profundidad del origen y significado de las capellanías y sus diferentes clases, así como de su relación con otros tipos de fundaciones y legados píos, y con los aniversarios y memorias de misas es imprescindible acudir a las fuentes impresas de los siglos XVI y XVII, tales como el tratado *De aniversariis et capellaniis* de Pérez de Lara<sup>27</sup>, y el *Tractatus de iure patronatus*<sup>28</sup>. Martín de Azpilcueta escribió un *Tractado de las rentas de los beneficios Ecclesiasticos*<sup>29</sup> publicado en Valladolid en 1566, que constituye una fuente excepcional para entender el sistema benefical, su significado y su funcionamiento en la Iglesia del Concilio de Trento. La tradición de estos tratados se encuentra recogida en los principales manuales y tratados de Derecho Canónico publicados durante el siglo XIX y que tuvieron una gran acogida en las universidades españolas, especialmente en las *Instituciones del Derecho Canónico* de Cavallari<sup>30</sup>, y el *Manual del Derecho eclesiástico universal* de Walter<sup>31</sup>.

En 1807, un presbítero español, Juan Julián Caparrós, publicó un tratado en dos tomos, *Disciplina eclesiástica, general del oriente y occidente, particular de España, y última del Santo Concilio de Trento*<sup>32</sup>, en la que aporta importantes datos relativos a la disciplina particular de España. Por otra parte, a partir de mediados del siglo XIX se publicaron como libros de texto para las cátedras de Derecho Canónico de las universidades españolas varios tratados básicos para el conocimiento de las instituciones eclesiásticas de los siglos XVIII y XIX en los que se abordan en profundidad muchas de las cuestiones que entonces eran debatidas acerca de las capellanías y de los beneficios eclesiásticos. Entre ellos se debe destacar el de Pedro Benito Golmayo<sup>33</sup>, auditor supremo del Tribunal de la Rota y catedrático de Derecho Canónico de la Universidad Central.

---

<sup>27</sup> PÉREZ DE LARA, Ildefonsus, *De aniversariis et capellaniis*, Matriti. Existen varias ediciones del mismo. En la Biblioteca Nacional se pueden consultar dos ediciones, la de 1608 y la de 1622.

<sup>28</sup> LAMBERTINI, C., DE CURTE, R., DE CITIDINIS, P., NICOLAI, I., *Tractatus de iure patronatus*, Lugduni, 1580.

<sup>29</sup> AZPILCUETA, Martín de, *Tractado de las rentas de los beneficios Ecclesiasticos: para saber en que se han de gastar, y a quien se han de dar, y dexas*, Valladolid, 1566.

<sup>30</sup> CAVALARIO, D., *Instituciones del Derecho Canónico*, traducidas al castellano por Tejada y Ramiro, 3 tomos, Paris, 1846. Existe también una traducción de José Antonio de Ojea editada en Madrid en 1838.

<sup>31</sup> WALTER, F., *Manual del Derecho eclesiástico universal*, Madrid, 1844.

<sup>32</sup> CAPARROS, J. J., *Disciplina eclesiástica, general del oriente y occidente, particular de España, y última del Santo Concilio de Trento*, Madrid, Gómez Fuentenebro y Compañía, 1807.

<sup>33</sup> GOLMAYO, P. B., *Instituciones del Derecho Canónico*, 2 tomos, Madrid, 1859.

Por su parte, quien fuera obispo de León, Francisco Gómez-Salazar y Vicente de la Fuente, ambos catedráticos en la Universidad Central, compusieron un amplio y completísimo *Tratado teórico-práctico de procedimientos eclesiásticos*<sup>34</sup> en cuatro volúmenes, en el que se pueden contrastar diferentes casos prácticos de provisión de capellanías, según sus diferentes clases. Gómez-Salazar es autor también de otras obras esenciales para el estudio del Derecho Canónico y de la disciplina particular de España<sup>35</sup>.

Son abundantes los diccionarios y enciclopedias que aportan abundante información sobre numerosos conceptos de Derecho Canónico, especialmente sobre capellanías y patronatos, como el de Isidro de la Pastora, y el de Alonso Perujo y Pérez Angulo<sup>36</sup>. El *Diccionario de historia eclesiástica de España*<sup>37</sup> dirigido por Quintín Aldea Vaquero y otros, recoge de forma clara y concisa numerosos conceptos de Derecho Canónico desde una perspectiva histórica que facilita la comprensión de la evolución de determinadas instituciones. Esta misma perspectiva es la aportada por el diccionario elaborado por Manuel Teruel<sup>38</sup>, en el que se aclaran de forma muy didáctica una serie de conceptos claves para los estudiosos de la historia de la Iglesia. Por otra parte, son varios los diccionarios de derecho y de ciencias jurídicas que amplían determinados conceptos desde un punto de vista más alejado de los canonistas y por tanto más relacionado con los sistemas jurídicos vigentes todavía en los primeros años del siglo XIX. Conceptos como amortización, vinculación y mayorazgos, derechos jurisdiccionales, además de los puramente eclesiásticos como beneficios, capellanías, legados píos, se encuentran ampliamente tratados en diccionarios como el de Escriche o el de Martínez Alcubilla<sup>39</sup>.

Una obra esencial para comprender la forma en la que se regularon a lo largo de la historia los legados piadosos y la fundación de capellanías en el derecho castellano, es la de José Maldonado, *Herencias en favor del alma en el Derecho español*<sup>40</sup>. En este estudio se analizaba, desde un punto de vista estrictamente jurídico, la

---

<sup>34</sup> GÓMEZ-SALAZAR, F. y DE LA FUENTE, V., *Tratado teórico-práctico de procedimientos eclesiásticos*, 4 tomos, Madrid, 1868.

<sup>35</sup> GÓMEZ-SALAZAR, F., *Instituciones de Derecho Canónico*, 3 tomos, León, 1891; y *Lecciones de disciplina eclesiástica*, Madrid, 1874. Otras obras de Derecho Canónico y parroquial cuya consulta puede resultar de interés para aclarar determinados conceptos son: POSTIUS Y SALA, Juan, *El código canónico aplicado a España*, Madrid, 1926; MUNIZ, T., *Derecho parroquial según el Codex Iuris Canonici*, Madrid, 1918; y F. REGATILLO, Eduardo, *Derecho parroquial*, Santander, 1959.

<sup>36</sup> PASTORA Y NIETO, Isidro, *Diccionario de Derecho Canónico*, Madrid, 1847; y ALONSO PERUJO, N. y PÉREZ ANGULO, J., *Diccionario de ciencias eclesiásticas*, Barcelona, 1885.

<sup>37</sup> ALDEA VAQUERO, Quintín, MARÍN MARTÍNEZ, Tomás, VIVES GATELL, José (dirs.), *Diccionario de historia eclesiástica de España*, Madrid, Instituto Enrique Flórez, 1972.

<sup>38</sup> TERUEL, Manuel, *Vocabulario básico de la historia de la Iglesia*, Barcelona, Crítica, 1993.

<sup>39</sup> ESCRICHE, Joaquín, *Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia*, 4 tomos, Madrid, 1838; MARTÍNEZ ALCUBILLA, Marcelo, *Diccionario de la Administración española*, Madrid, 1892. Además de estos la *Nueva enciclopedia jurídica*, dirigida por Carlos E. Mascarenas, contiene algunos artículos muy interesantes, como el relativo a las capellanías, de Víctor Covián, en el tomo III. MASCARENAS, Carlos E., *Nueva Enciclopedia jurídica*, Barcelona, F. Seix, 1978.

<sup>40</sup> MALDONADO Y FERNÁNDEZ DEL TORCO, José, *Herencias en favor del alma en el Derecho español*, Madrid, Revista de Derecho Privado, 1944.

evolución a través del Derecho castellano<sup>41</sup> de todos los actos jurídicos en los que aparece la finalidad "pro anima".

Una fuente de enorme importancia para conocer de cerca el funcionamiento de las distintas clases de capellanías y de todos los mecanismos legales involucrados en las mismas, desde la expresión de la voluntad de su fundación en los distintos tipos de testamentos, codicilos y memorias testamentarias, la forma de redactar las escrituras de fundación, su presentación y provisión, la aporta una obra de finales del siglo XVIII dirigida a la instrucción de notarios y escribanos: la *Librería de escribanos* de José Febrero<sup>42</sup>. Este libro, que conoció muchas reediciones y ampliaciones a lo largo del siglo XIX, aporta ejemplos de testamentos y de escrituras que pueden servir de modelo de referencia para el estudio de las escrituras de fundación a fin de detectar en las mismas omisiones voluntarias o cambios deliberados de algunas de las fórmulas.

Fuentes imprescindibles para el estudio de las instituciones de la Iglesia son los cánones y decretos del Concilio de Trento<sup>43</sup>, y la colección de cánones y de los concilios españoles compilada por Juan Tejada y Ramiro<sup>44</sup>. Para esta investigación se han manejado además, como fuente de información de primer orden, las Constituciones Sinodales del Obispado de Calahorra y La Calzada<sup>45</sup>.

Las colecciones legislativas españolas<sup>46</sup> y el Fuero de Bizkaia<sup>47</sup> contienen una plétora de leyes y normas de todo tipo por medio de las cuales se regulan

---

<sup>41</sup> Como ha sido habitual en casi toda la historiografía española hasta épocas muy recientes, la confusión interesada o no de lo español con lo castellano ha llevado a ignorar otras realidades, teniendo como consecuencia determinadas generalizaciones inadmisibles. En la obra mencionada, a pesar de que en su título se alude al derecho español, se ignoran casi por completo las disposiciones particulares de las codificaciones legales de la corona de Aragón o de Navarra y las del derecho foral vizcaíno, a excepción de una breve "Referencia a datos de otras regiones".

<sup>42</sup> FEBRERO, José, *Librería de escribanos e instrucción jurídica theorico práctica de principiantes. Parte Primera dividida en tres tomos. Trata de testamentos y contratos*, 3 tomos, Madrid, 1797.

<sup>43</sup> *Concilio de Trento (1545-1563)*, Trad. de Ignacio López de Ayala, Barcelona, 1845. Existe una versión electrónica, fácil de consultar en [www.mercaba.org/CONCILIOS/Trento.htm](http://www.mercaba.org/CONCILIOS/Trento.htm).

<sup>44</sup> TEJADA Y RAMIRO, Juan, *Colección de cánones y de todos los concilios de la Iglesia española*, 5 tomos, Madrid, 1855.

<sup>45</sup> MANSO, Pedro, *Constituciones Synodales del Obispado de Calahorra y La Calzada. Hechas y ordenadas por el Señor Obispo Don Pedro Manso, Obispo del dicho Obispado en el Synodo Diocesano que se celebró en la ciudad de Logroño y se acabó en el año de 1601*, Logroño, Diego Mares, 1602; GONZÁLEZ DE CASTILLO, Pedro, *Constituciones Synodales del Obispado de Calahorra y La Calzada. Hechas y ordenadas por su Señoría del Señor don Pedro Gonçalez de Castillo, Obispo de Calahorra y la Calçada, Predicador de Su Magestad, y de su Consejo en el Synodo Diocesano que se celebrou en la ciudad de Logroño en el año de mil y seyscientos y veynte*, Madrid, Viuda de Alonso Martín, 1621; y LEPE, Pedro de, *Constituciones Synodales antiguas, y modernas del Obispado de Calahorra y La Calzada. Reconocidas, reformadas y aumentadas novissimamente por el Ilustrissimo Señor Don Pedro de Lepe Obispo deste Obispado, del Consejo de Su Magestad, &c, en el Synodo Diocesano, que celebrou en la ciudad de Logroño, en el año de mil y seiscientos y noventa y ocho*, Madrid, Antonio González de Reyes, 1700. Existen ejemplares de estas Constituciones Sinodales en la Biblioteca Foral de Bizkaia, en donde han sido consultadas.

<sup>46</sup> *Novísima Recopilación de las leyes de España*, Madrid, 1805. El Libro I de la *Novísima Recopilación* está dedicado íntegramente a cuestiones relacionadas con la Iglesia, siendo su título "De la Santa Iglesia, sus derechos, bienes y rentas. Prelados y súbditos, y Patronato Real". El Título XII de este libro contiene la legislación anterior a 1805 relacionada con la fundación de Capellanías

numerosas cuestiones relacionadas con la Iglesia y con sus instituciones, así como relativas a sistemas sucesorios, testamentos, legados y fundaciones, y que no pueden ser ignoradas para obtener una visión completa de la problemática relacionada con la fundación de capellanías. La legislación liberal de comienzos del siglo XIX y las actas de las sesiones de Cortes<sup>48</sup> aportan también datos fundamentales para el estudio de estas instituciones y de las transformaciones a las que se vieron sometidas durante el siglo XIX.

A lo largo de los siglos han sido frecuentes las reformas planteadas en el seno de la Iglesia. Este continuo reformismo eclesiástico desvela una constante preocupación por parte de algunos sectores de la misma por reconducir los aparatos institucionales hacia sus auténticos objetivos. Por otra parte, durante el siglo XVIII, alentado en muchos casos por el ambiente intelectual ilustrado y por los movimientos de reforma surgidos en el seno de la propia Iglesia y vinculados con lo que genéricamente se llamó el jansenismo, se produjo, desde diversas instancias, un replanteamiento de las funciones de la Iglesia en la sociedad. Desde diferentes ámbitos se planteó la necesidad de una reforma en profundidad de las estructuras eclesiásticas. Una prueba de la preocupación por mantener o recuperar el auténtico espíritu de las instituciones eclesiásticas desde la propia Iglesia son los numerosos breves y bulas papales<sup>49</sup> en los que se abordan cuestiones relativas a la disciplina eclesiástica.

Ilustrados y liberales coincidieron en muchas cuestiones con algunos de los moderados planteamientos reformistas de la propia Iglesia y con los más avanzados de algunos eclesiásticos, entre ellos varios obispos considerados como jansenistas, aunque no siempre con los mismos objetivos. El exagerado número de clérigos, el

---

perpetuas y de patrimonios temporales eclesiásticos. Para el reinado de Carlos IV existe, además, una colección de leyes publicada durante el mismo reinado, con varios suplementos, en la que se recoge la documentación legal generada durante los primeros años de dicho reinado: SÁNCHEZ, Santos, *Colección de todas las pragmáticas, cédulas, provisiones, circulares, autos acordados, vandos y otras providencias publicadas en el actual reynado del Señor Don Carlos IV, con varias notas instructivas y curiosas*, Madrid, 1794-1799.

<sup>47</sup> La versión que se ha manejado para este trabajo es la impresa en Bilbao, en 1762, por Antonio de Egusquiza, de *El Fuero, Privilegios, Franquezas, y Libertades de los Cavalleros hijosdalgo de el Muy Noble, y Muy Leal Señorío de Vizcaya confirmados por el Rey D. Carlos tercero nuestro Señor y por los Señores Reyes sus Predecesores*, que corresponde al Fuero Nuevo de Bizkaia de 1526.

<sup>48</sup> *Diarios de Sesiones de Cortes, Cortes de Cádiz y Legislaturas de 1820-1822*, Congreso de los Diputados, edición electrónica, 2002. *Decretos de las Cortes de Cádiz. 1810-1814*, Madrid, Imprenta Nacional, 1820. *Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias... desde 1810 hasta 1822*, Madrid, 1822. *Decretos del Rey Fernando VII*, Madrid, 1817-1828. *Decretos del Rey nuestro señor Fernando VII*, Madrid, 1829-1833. *Colección de leyes, decretos y declaraciones de las Cortes... 1814-1886*, 35 tomos, Madrid, 1816-1887.

<sup>49</sup> Un claro ejemplo de estos intentos reformadores durante el siglo XVIII fue la bula de Inocencio XIII, del 13 de Mayo de 1723, "Apostolici Ministerii", dirigida a restablecer la disciplina eclesiástica de los reinos de España. Esta bula, aunque trataba de imponer reformas cuyo origen era anterior, constituyó el punto de partida de numerosas medidas reformadoras de la Iglesia española que llevarían a las reformas benéficas que se emprendieron en todas las diócesis españolas durante la segunda mitad del siglo XVIII y que en algunos casos se dilataron durante largos años, hasta bien entrado el siglo XIX. Existe una traducción del latín al castellano de María Auxiliadora Pérez, en *Reforma benéfica en Zamora*, Tesis doctoral inédita, U.N.E.D. , 1995, pp.327-338, recogida en el Anexo IV de la tesis doctoral inédita de SARMIENTO, José, *La Reforma Benéfica en la Diócesis de Badajoz*, UNED, 2001.

absentismo, y las reducidísimas rentas de muchos de ellos propiciadas por el abuso en la creación de beneficios y de capellanías, eran algunos de los problemas a los que la Iglesia trataba de poner remedio en colaboración con la monarquía ilustrada de los Borbones. Por otra parte, las capellanías, por su relación con la vinculación de patrimonios y la enajenación de los mismos en manos de la Iglesia, fueron uno de los objetivos de muchas de las reformas propuestas por ilustrados como Campomanes y Jovellanos.

En muchas ocasiones, incluso desde las propias estructuras de la Iglesia, se plantearon durante el siglo XVIII duras críticas relacionadas con cuestiones de disciplina eclesiástica por medio de pastorales y de escritos, pero en la mayoría de los casos las aspiraciones reformistas de muchos eclesiásticos, incluidos algunos obispos, fueron inmediatamente tachadas de jansenistas y sus obras fueron prohibidas como heréticas. Un ejemplo de este tipo de obras fue el folleto titulado *Abusos introducidos en la disciplina de la Iglesia, y potestad de los príncipes en su corrección que a la soberanía de la nación en sus Cortes Generales ofrece un Prebendado de estos Reynos*, publicado en Madrid en 1813<sup>50</sup>, y que fue incluido en el *Índice de libros prohibidos* en 1820. La proliferación de capellanías fue uno de los aspectos en los que incidía la crítica y para cuya corrección se apelaba al regalismo y a la intervención de la Corona para la reforma de la Iglesia.

Con espíritu crítico también, se publicaron a finales del siglo XVIII, algunas obras en las que se abordaba el sistema benéfico de la Iglesia en su aspecto económico. Dos ejemplos paradigmáticos de este tipo de obras son la de Juan Sempere Guarinos<sup>51</sup>, y la de Manuel Ros<sup>52</sup>, en las que tanto ilustrados como liberales buscaron apoyo teórico para sus planes de reforma política y económica del Estado y de la Iglesia. Mientras que en la obra de Manuel Ros se realizaba una dura crítica

---

<sup>50</sup> *Abusos introducidos en la disciplina de la Iglesia, y potestad de los príncipes en su corrección que a la soberanía de la nación en sus Cortes Generales ofrece un Prebendado de estos Reynos*, Madrid, Imprenta de Ibarra, 1813.

<sup>51</sup> SEMPERE, GUARINOS, Juan, *Historia de las rentas eclesiásticas de España*, Madrid, 1822.

<sup>52</sup> Un Presbítero Secular, *Historia de las rentas de la Iglesia de España*, 1793. Esta pequeña obra, reeditada en 1828 por la Imprenta de Repullés, se publicó sin el nombre del autor. Sin embargo, Juan Sempere, en el prólogo de su *Historia de las rentas eclesiásticas de España*, (Madrid, 1822), atribuía esta obra a quien fuera diputado en las Cortes de Cádiz y posteriormente obispo de Tortosa, Manuel Ros y Medrano: "en el año de 1793 se publicó en esta corte la **Historia de las rentas de la Iglesia de España, desde su fundación**, por un presbítero secular, quien en su dedicatoria al Sr. Mariño, camarista de Castilla, se firmaba M. R. letras iniciales de su nombre y apellido Manuel Ros". Según Sempere este anonimato estaba justificado por el miedo a la publicación de una obra en la que se combatían opiniones y prácticas religiosas muy comunes en aquel tiempo, como por ejemplo, el escandaloso tráfico de las misas, y la institución divina de los diezmos. Según Sempere, sin embargo, aunque en este libro se combatieran ciertas prácticas de la Iglesia, no se criticaba la existencia de las rentas de la Iglesia, ni se consideraban exageradas, sino la mala distribución de las mismas. Como ya se ha dicho existe una edición de 1828 de esta misma obra: *Historia y origen de las rentas de la Iglesia de España desde su fundación, por un presbítero secular*, Madrid, Imprenta de Repullés, 1828. En las Cortes del año 1820, en la discusión de las bases que proponía la comisión de la administración de las rentas para el establecimiento de un plan fijo de hacienda, durante la discusión de la base segunda, en la que se proponía la modificación de los diezmos, el diputado Sr. Victorica recordó el posicionamiento ante los diezmos del entonces obispo de Tortosa, el Señor Ros, manifestado en una pequeña obrita que publicó en 1793, en la que, según este diputado, "dijo lo bastante para demostrar el indisputable derecho que tiene sobre ellos la autoridad civil". Cfr. Diarios de Sesiones de Cortes, 14 de Octubre de 1820, núm. 102, p. 1629.

de la corrupción de determinadas prácticas religiosas, pero sin poner en cuestión en ningún momento la independencia de la Iglesia y el derecho de la misma a disponer libremente de su patrimonio, Juan Sempere, en su libro, que fue incluido en el *Index librorum prohibitorum*, denuncia la exorbitancia de las rentas eclesiásticas y señala a éstas como responsables del entorpecimiento de la industria y como un obstáculo para la prosperidad pública.

La importancia que tuvieron las reformas benéficas iniciadas durante el siglo XVIII por una monarquía ilustrada y regalista y que en muchos casos se prolongaron hasta bien entrado el XIX, entre las alternancias de regímenes liberales y absolutistas y en un contexto político totalmente diferente de aquel en el que se iniciaron, no se corresponde en absoluto con la escasez de estudios, monografías y tesis doctorales existentes sobre tal materia. Maximiliano Barrio, gran conocedor del sistema benéfico en la Iglesia española del siglo XVIII, ha publicado en fechas recientes un interesante artículo<sup>53</sup> en el que se analizan sus rasgos más característicos, abordando aspectos de especial interés para este trabajo, como son los patronatos y las capellanías. El mismo autor, aborda la cuestión de la reforma benéfico como parte de una investigación de mayor amplitud sobre la diócesis de Segovia<sup>54</sup>. Las tesinas inéditas de Almudena García Herreros<sup>55</sup> sobre la reforma benéfico en la diócesis palentina y la de Ricardo Montolió<sup>56</sup> sobre la ciudad de Segovia, han sido completadas recientemente con las tesis doctorales de María Auxiliadora Sevilla Pérez<sup>57</sup> sobre la reforma en la diócesis de Zamora y la de José Sarmiento Pérez<sup>58</sup> para Badajoz. Otros trabajos como la tesis doctoral de Montserrat Jiménez Sureda<sup>59</sup> y los publicados recientemente por Antonio Prada Santamaría<sup>60</sup>, constituyen también aportaciones esenciales para el estudio del papel de la Iglesia durante una época en la que se gestaron importantes cambios políticos, sociales, económicos y en las mentalidades.

El papel de la Iglesia y la influencia ideológica que un importante sector de ella tendría en la sociedad española del siglo XIX, no puede ser comprendido sin acercarse a las fuentes impresas más significativas. Las obras de autores como Félix Amat y Juan Antonio Llorente, o las de Pedro Inganzo, Rafael de Vélez, o Francisco Alvarado, el "Filósofo Rancio", son indispensables para acercarse a los discursos ideológicos en torno al papel de la Iglesia en la sociedad.

---

<sup>53</sup> BARRIO GOZALO, Maximiliano, "El sistema Benéfico en la España del siglo XVIII. Pervivencias y cambios", en *Cuadernos Dieciochistas*, vol. 2 (2001), Universidad de Salamanca, Salamanca, 2001.

<sup>54</sup> BARRIO GOZALO, Maximiliano, *Estudio socio-económico de la iglesia de Segovia en el siglo XVIII*, Segovia, 1982.

<sup>55</sup> GARCÍA HERREROS, Almudena, *La reforma benéfico en Palencia a finales del Antiguo Régimen*, tesina presentada en la U.N.E.D. en 1990.

<sup>56</sup> MONTOLIÓ HERNÁNDEZ, Ricardo, *La Reforma Benéfico en la ciudad de Segovia*, tesina inédita.

<sup>57</sup> SEVILLA PÉREZ, María Auxiliadora, *Reforma benéfico en la diócesis de Zamora*, Tesis doctoral inédita presentada en la U.N.E.D. en 1995.

<sup>58</sup> SARMIENTO PÉREZ, José, *La Reforma Benéfico en la diócesis de Badajoz*, Tesis doctoral inédita presentada en la U.N.E.D. en 2002.

<sup>59</sup> JIMÉNEZ SUREDA, Montserrat, *L'Església catalana sota la monarquia dels Borbons: la catedral de Girona en el segle XVIII*, Barcelona, Abadía de Montserrat, 1999.

<sup>60</sup> PRADA SANTAMARÍA, Antonio, "Los planes benéficos en los templos parroquiales del Alto Valle del Urola", en *Hispania Nova*, 2002.

Un estudio esencial para aproximarse al conocimiento de la Iglesia española a comienzos del siglo XIX, de plena vigencia en la actualidad, lo constituye la tesis doctoral de Emilio La Parra<sup>61</sup>. Este autor aborda el estudio de la situación de la Iglesia española durante el primer periodo constitucional español, la importancia del hecho religioso y la política del primer liberalismo en relación con la Iglesia, desde una perspectiva en la que no se pierden de vista los antecedentes relacionados con la mentalidad religiosa, y con la política ilustrada y regalista practicada durante los últimos años del siglo XVIII. Para una aproximación a la situación de la Iglesia española entre la ilustración y el liberalismo no se debe prescindir de la abundante bibliografía de autores como José Manuel Cuenca Toribio<sup>62</sup>, el ya citado Maximiliano Barrio Gozalo, Manuel Revuelta, o Francisco Rodríguez de Coro, entre otros.

De gran interés por la abundancia de datos, procedentes de diversas fuentes, que aporta sobre la Iglesia española, es el libro de Juan Sáez Marín<sup>63</sup>. Los trabajos de J. A. Portero<sup>64</sup> y Christian Hermann<sup>65</sup>, amplían el conocimiento de la Iglesia desde diferentes perspectivas, como la del poder ideológico de la Iglesia, o la de las relaciones de la Iglesia con la corona a través del patronato regio.

El patronato es una cuestión clave en la configuración de la Iglesia como agente de control social y como mecanismo a través del cual se desarrollaron durante siglos las estrategias de poder de las clases dominantes. Estrechamente relacionado con las capellanías, ya que éstas, en la mayoría de los casos, principalmente en las capellanías familiares, no son sino una forma más de patronato en el que en lugar de ejercerse el control sobre todos los beneficios de una iglesia, éste se ejerce solamente sobre un determinado beneficio como consecuencia de su fundación.

La iglesia propia como antecedente del sistema de patronato fue estudiada por V. Stütz<sup>66</sup>, siendo en España el profesor Torres López<sup>67</sup>, el responsable de los primeros estudios relacionados con el tema con un enfoque estrictamente jurídico y de Historia del Derecho. Un enfoque diferente fue el que aportó al tema Ramón Bidagor<sup>68</sup>, quien parece querer justificar desde el Derecho Canónico la existencia de una institución que en principio puede parecer contraria a la independencia de la

---

<sup>61</sup> LA PARRA LÓPEZ, Emilio, *El primer liberalismo español y la Iglesia. Las Cortes de Cádiz*, Alicante, Instituto de Estudios Juan Gil-Albert, 1985.

<sup>62</sup> CUENCA TORIBIO, J. M., "La Iglesia española en el Trienio Constitucional (1820-1823)", en *Hispania Sacra*, 18 (1965), pp. 333-362; *La Iglesia española ante la revolución liberal*, Madrid, 1971; *Estudios sobre la Iglesia española del XIX*, Madrid, 1973; y *Sociología del episcopado español e hispanoamericano (1789-1985)*, Madrid, 1986.

<sup>63</sup> SÁEZ MARÍN, Juan, *Datos sobre la Iglesia española contemporánea, 1768-1868*, Madrid, Editora Nacional, 1975.

<sup>64</sup> PORTERO, J. A., *Púlpito e ideología en la España del siglo XIX*, Zaragoza, 1978.

<sup>65</sup> HERMANN, Christian, *L'Eglise d'Espagne sous le patronage royal (1476-1834) : essai d'ecclésiologie politique*, Madrid, 1988.

<sup>66</sup> STÜTZ, V., *Das Eigenkirchenrecht. Element des mottelalterlich-germanischen Kirchenrechtes*, Berlin, 1895.

<sup>67</sup> TORRES LÓPEZ, M., "La doctrina de las Iglesias propias en los autores españoles", en *Anuario de Historia del Derecho español*, 2 (1925) pp. 402-461; "El origen del sistema de iglesias propias", en *Anuario de Historia del Derecho español*, 5 (1928), pp. 83-217.

<sup>68</sup> BIDAGOR, R., *La Iglesia propia en España. Estudio histórico-canónico*, Roma, 1933.

Iglesia con respecto al poder laico. Recientemente, Magdalena Rodríguez Gil<sup>69</sup>, desde la excepcional tribuna que constituía un número especial en homenaje al profesor Manuel Torres López de la revista *Cuadernos de Historia del Derecho*, hace una extraordinaria síntesis del estado de la cuestión en relación con el complejo asunto de las "iglesias propias".

Germán Gamazo, en el acto de recepción de la investidura de doctor en Derecho Civil y Canónico, pronunció un discurso directamente relacionado con el patronato eclesiástico, titulado "*Origen y naturaleza del Patronato eclesiástico. ¿Son justificables todas las causas que se alegan para adquirirlo?*"<sup>70</sup>. Gamazo consideraba el patronato como un derecho honorífico que demandaba urgentemente la reforma de la legislación relativa al mismo, siendo de la opinión de que la intervención directa de los legos en el nombramiento de beneficiados era contraria a la libertad y a la independencia de la Iglesia. Más próximo al Derecho Canónico es el breve tratado que sobre la misma materia redactó en 1921 Ángel Garrote Martín<sup>71</sup>, al que añadió como apéndice una relación de los patronatos particulares del obispado de Lugo. Relacionada directamente con la cuestión del patronato y de las prerrogativas de todo tipo, pero fundamentalmente con las económicas, que otorgaba dicha institución a quienes disfrutaban de ella, se encuentra la obra de José de Vinuesa Blázquez<sup>72</sup>.

El patronato regio, aunque comparte orígenes y características generales con el patronato laical, al vincularse directamente con la corona poseía algunas singularidades, ya que a los derechos derivados de la fundación o dotación de iglesias y monasterios se añadieron los procedentes de determinadas concesiones pontificias<sup>73</sup>. El patronato regio fue fortalecido por la dinastía borbónica, inspirándose en la experiencia de la iglesia galicana, llegando a conseguir la implantación del patronato universal como consecuencia del concordato de 1753. Un documento de gran interés para el conocimiento del estado de opinión existente en el siglo XVIII sobre el derecho de patronato regio es el *Propugnáculo histórico-canónico-político-legal que descubre los fondos de la más preciosa piedra de la Corona de España, y comprueba con sus antiguos monumentos, y Memorias el incontrastable derecho de sus Monarcas, a la protección de las Iglesias de su Monarquía, y al Universal Patronato de los Beneficios de ellas...*<sup>74</sup> de Miguel Cirer y Zerdá. Esta obra

---

<sup>69</sup> RODRÍGUEZ GIL, Magdalena, "Consideraciones sobre una antigua polémica: las Iglesias propias", en *Cuadernos de Historia del Derecho*, 6 (1999), pp. 247-262.

<sup>70</sup> Este discurso fue publicado en Madrid, por la Imprenta de El Cascabel, en 1865.

<sup>71</sup> GARROTE MARTÍN, Ángel, *El derecho de patronato en la presentación a beneficios eclesiásticos según las leyes canónicas y el derecho particular de España*, Lugo, 1921.

<sup>72</sup> VINUESA BLÁZQUEZ, José de, *Diezmos de legos en las iglesias de España*, Madrid, 1791.

<sup>73</sup> El papa Inocencio VIII, en 1486, por medio de la bula *Orthodoxae fidei*, otorgó a los Reyes Católicos un derecho de designación o presentación con ciertas limitaciones. Este derecho se fue ampliando considerablemente, principalmente por la necesidad de crear un tejido eclesiástico en los territorios de ultramar constituyéndose el *Patronato Universal*.

<sup>74</sup> CIRER Y ZERDÁ, Miguel, *Propugnáculo histórico-canónico-político-legal que descubre los fondos de la más preciosa piedra de la Corona de España, y comprueba con sus antiguos monumentos, y Memorias el incontrastable derecho de sus Monarcas, a la protección de las Iglesias de su Monarquía, y al Universal Patronato de los Beneficios de ellas. Derivado de la Catholica piedad de sus primeros gloriosos Reyes, en fundarlas: De su gloriosa liberalidad, en enriquecerlas: De su invencible valor, y poder, en restaurarlas: De su vigilante providencia, en defenderlas: Y de su Real*

constituye una defensa del derecho de patronato regio como una de las regalías de la corona y por tanto que le correspondería como un derecho inherente a la dignidad real, al margen de las concesiones pontificias. Este estado de opinión es patente así mismo en el *Dictamen en justicia sobre la jurisdicción de los Señores Reyes de Castilla, y su Supremo Consejo de la Camara, para el conocimiento de todos los negocios pertenecientes al Real Patronato de la Corona...*<sup>75</sup>, o en el tratado que escribió Campomanes<sup>76</sup> en 1753. Más tardías, pero escritas con el mismo espíritu regalista predominante durante el siglo XVIII, fueron las obras de Juan Antonio Llorente, *Disertación sobre el poder que los reyes ejercieron hasta el siglo duodécimo en la división de obispados*, y *Discursos histórico-canónicos sobre los Beneficios Patrimoniales de las Iglesias Parroquiales del Obispado de Calahorra y la Calzada*<sup>77</sup>. En esta última, a la defensa del derecho de patronato de los reyes, se añade la de los patronos particulares, además de lo que constituye el objeto principal de la misma, un alegato en favor del sistema de beneficios patrimoniales propio de las iglesias de la diócesis de Calahorra.

El real patronato o patronato regio ha sido objeto del interés de juristas e historiadores, de entre los cuales es preciso citar a Martínez Marina<sup>78</sup>, cuyo pensamiento regalista se encuentra a caballo entre la ilustración del siglo XVIII y el constitucionalismo liberal del XIX. Desde un punto de vista historiográfico, el real patronato, además de algunas obras del siglo XIX dedicadas a su examen, como la de Gómez Zamora<sup>79</sup>, ha sido objeto de algunos estudios como el ya citado de Christian Hermann<sup>80</sup> y de diversos artículos<sup>81</sup>, la mayoría de los cuales tienen como objeto de estudio el patronato regio en la época medieval.

---

*solicitud, en conservarlas. Elucidación canónico-legal, de la Ley XVIII. Título V. Partida I, y sus Concordantes. Sobre el Real Patronato de la Corona de España. Consagrale a la Augusta, Catholica Magestad del Rey Nuestro Señor Don Phelipe Quinto, por mano del Excelentissimo Señor Don José Patiño, Cavallero de la Insigne Orden del Toyson de Oro, Comendador de Alcuesca, en la de Santiago, del Consejo de Estado de su Magestad, &c., Madrid, 1736.*

<sup>75</sup> HONTALBA Y ARZE, Pedro, *Dictamen en justicia sobre la jurisdicción de los Señores Reyes de Castilla, y su Supremo Consejo de la Camara, para el conocimiento de todos los negocios pertenecientes al Real Patronato de la Corona...*, Madrid, Oficina de Diego Miguel de Peralta, 1738.

<sup>76</sup> RODRÍGUEZ DE CAMPOMANES, Pedro, *Tratado de la regalía de España, o sea el derecho Real de nombrar a los beneficios eclesiásticos de toda España y guarda de sus iglesias vacantes*, Oviedo, Junta General del Principado de Asturias, 1994.

<sup>77</sup> LLORENTE, Juan Antonio, *Disertación sobre el poder que los reyes ejercieron hasta el siglo duodécimo en la división de obispados*, Madrid, Imprenta de Ibarra, 1810; y *Discursos histórico-canónicos sobre los Beneficios Patrimoniales de las Iglesias Parroquiales del Obispado de Calahorra y la Calzada*, Pamplona, Juan Antonio Castilla, 1789.

<sup>78</sup> MARTÍNEZ MARINA, Francisco, *Ensayo histórico-crítico sobre la legislación y principales cuerpos legales de los reinos de León y Castilla, especialmente sobre el código de las Siete Partidas de D. Alonso el Sabio*, Madrid, Biblioteca de Autores Españoles, 1966. En esta obra, Martínez Marina hizo una apasionada defensa del derecho de patronato regio y de la autoridad de los monarcas en materia religiosa.

<sup>79</sup> GÓMEZ ZAMORA, M., *Regio patronato español e indiano*, Madrid, 1897.

<sup>80</sup> HERMANN, Christian, *L'Eglise d'Espagne sous le patronage royal (1476-1834) : essai d'ecclésiologie politique*, Madrid, 1988.

<sup>81</sup> GARCÍA LOBO, Vicente, "A propósito del Patronato Real. Un documento de 1419", en *Hispania Sacra*, vol. XXXVI, nº 74, (1984), pp. 457-484; DE LA FUENTE COBOS, Concepción, "La documentación sobre patronato eclesiástico de Castilla", en *Hispania Sacra*, v. 47, n. 96 (1995), pp. 625-655; MADURELL MARIMÓN, José María, "Patronatos Reales Eclesiásticos en los reinos de Aragón", en *Hispania Sacra*, vol. XIII, nº 26 (1960), pp. 413-421; NIETO SORIA, José Manuel,

En cuanto a las capellanías, las instituciones más directamente relacionadas con este trabajo, son numerosas las obras de todo tipo que abordan cuestiones relativas a las mismas desde diversas perspectivas. La mayoría de las obras del siglo XIX se centran en las cuestiones jurídicas relacionadas con la abundante legislación desvinculadora y desamortizadora que se inició a finales del siglo XVIII con el Real decreto de 28 de Abril de 1789, por el que se prohibía la fundación de Mayorazgos y Vinculaciones sin preceder licencia Real, con el fin de evitar "*los daños que causa al Estado el abandono de casas y tierras vinculadas, y otras cuya enajenación está prohibida*". El objetivo era por una parte impedir la proliferación de pequeños vínculos y mayorazgos, los llamados "mayorazgos cortos", y por otra reducir al mínimo la amortización de bienes raíces contra la que clamaban los ilustrados.

A esta ley siguieron las de 20 de Febrero de 1796 prohibiendo "*hacer Capellanías u otras fundaciones perpetuas sin la Real licencia*"; y el Real decreto de 19 de Septiembre de 1798 "*Mandando enajenar todos los bienes raíces pertenecientes a Hospitales, Hospicios, Casas de Misericordia, de Reclusión y de Expósitos, Cofradías, Memorias, Obras pías y Patronatos de legos, poniéndose los productos de estas ventas en la Caxa de Amortización*". A partir de este momento se produjo una profusión de medidas legislativas apoyadas, en varias ocasiones, en Breves papales que autorizaban las enajenaciones de predios rústicos y urbanos pertenecientes a Capellanías. Desde las primeras disposiciones, cuya finalidad era impedir la amortización de bienes raíces y su transformación en vales reales de la Real Caja de Amortización, se llegaría hasta las complejas y contradictorias disposiciones desamortizadoras del siglo XIX.

Estas cuestiones son afrontadas por numerosos tratados en los que se aborda el estudio de las capellanías desde un punto de vista legal y jurídico. Aparte de algunos folletos dedicados a comentar la legislación más reciente<sup>82</sup>, en el siglo XIX se publicaron varias obras dedicadas al estudio de la legislación vigente sobre capellanías<sup>83</sup>, algunas de ellas dedicadas específicamente al comentario del

---

"Algunas consideraciones sobre el Patronato Real castellano-leonés en los siglos XIII y XIV", en *Anuario de Estudios Medievales*, 15 (1985); AZCONA, Tarsicio de, *Juan de Castilla, Rector de Salamanca: su doctrina sobre el derecho de los Reyes de España a la presentación de obispos. Edición crítica de la "Conclusión" de Juan de Castilla*, Salamanca, Universidad Pontificia, 1975; OLEA ÁLVAREZ, Pedro, "El Real Patronato (1868-1876)", en *Hispania Sacra*, vol. XLI, nº 84 (1989), pp. 667-697; VINCKE, Johannes, "El derecho de patronato de la Corona de Aragón en el Reino de Valencia", en *Primer Congreso de Historia del País Valenciano*, vol. II, pp. 837-849, Universidad de Valencia, 1980. Finalmente, hay que mencionar el exhaustivo estudio sobre la documentación referente al patronato eclesiástico de DE LA FUENTE COBOS, Concepción, "La documentación sobre patronato eclesiástico de Castilla", en *Hispania Sacra*, v. 47 (96), pp. 625-655.

<sup>82</sup> A mediados del siglo XIX, como consecuencia de la abundante legislación relativa a estos temas se publicaron algunos pequeños folletos como el titulado *Legislación novísima en materia de Vinculaciones, Capellanías... Restablecida por Real Decreto de 1855*, Madrid, 1855, o *Novísima legislación sobre Capellanías colativas de sangre y otras fundaciones piadosas*, Madrid, 1867.

<sup>83</sup> Entre otras, cabe destacar algunos artículos publicados en la *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*: IBAÑEZ, Domingo, "De las capellanías laicales", en *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, t. XVII (1860), p. 510-516; y el de MIQUEL IBARGÜEN, Luis M., "Capellanías colativas y laicales", en *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, t. LXIV (1884), p.424-437.

Convenio-Ley de Capellanías familiares de 1867, como las de Antonio Bravo y Tudela<sup>84</sup>.

Desde una perspectiva también jurídica se publicaron posteriormente varios tratados y manuales, como el *Manual de capellanías y pías memorias*, de Mariano Álvarez y Gómez<sup>85</sup>; el *Método práctico para los párrocos en la reclamación de Memorias-Aniversarios y reivindicación de bienes de Capellanías*, de Francisco Ruiz de Velasco<sup>86</sup>; o el que quizá sea el más completo de todos ellos, el tratado sobre capellanías colativas de Campos y Pulido<sup>87</sup>. En este último tratado, tal como el propio autor indica en el subtítulo de la obra, se aborda un estudio bastante completo de la historia y vicisitudes de las capellanías en España. Una característica común a todas estas obras del siglo XIX es el apasionamiento partidista con el que se estudian las vicisitudes de estas instituciones, sometidas a numerosas, y muchas veces contradictorias, medidas desamortizadoras y desvinculadoras.

También desde el punto de vista del Derecho Canónico, pero de una forma mucho más imparcial, a partir de mediados del último siglo, lejos ya de las medidas desamortizadoras y, por tanto, con una mayor perspectiva histórica, Lorenzo Miguélez presentó un interesante trabajo sobre la situación de las capellanías en España, en la III Semana de Derecho Canónico de Salamanca<sup>88</sup>. También se encuentra dentro del ámbito de los estudios propios del Derecho Canónico, el estudio de Carlos Aguilera Soler<sup>89</sup>. El más reciente estudio de las capellanías colativas familiares, el de Vázquez García-Peñuela<sup>90</sup>, ofrece un completo panorama de la legislación que durante los siglos XVIII, XIX y XX afectó a estas instituciones, que se completa con un capítulo introductorio, enormemente esclarecedor, en el que se aborda el concepto, clases y naturaleza de las capellanías.

No faltan tampoco los trabajos en los que sus autores se han aproximado a la temática de las capellanías desde una perspectiva fundamentalmente histórica, analizando su evolución y la relación con diversos aspectos de historia social o de historia económica. El artículo de M. González Ruiz, "Las Capellanías españolas en su perspectiva histórica"<sup>91</sup> ofrece una visión general del origen y significado de la

---

<sup>84</sup> BRAVO Y TUDELA, Antonio, *Derecho vigente sobre capellanías colativas de sangre, beneficios y legados píos, patronatos laicales y fundaciones de la propia índole*, Madrid, 1879; BRAVO Y TUDELA, Antonio; FRANCO Y ORTIZ, José María, *Novísima legislación comentada sobre Capellanías colativas de sangre, y fundaciones análogas*, Madrid, 1868.

<sup>85</sup> ÁLVAREZ Y GÓMEZ, Mariano, *Manual de capellanías y pías memorias*, Vitoria, 1903.

<sup>86</sup> RUIZ DE VELASCO, Francisco, *Método práctico para los párrocos en la reclamación de Memorias-Aniversarios y reivindicación de bienes de Capellanías*, Madrid, 1905.

<sup>87</sup> CAMPOS Y PULIDO, José M., *Las capellanías colativas en España. Estudio de su historia, sus vicisitudes y su situación actual, seguido de las leyes y preceptos aplicables y completado con la jurisprudencia más importante sobre la materia*, Hijos de Reus, Madrid, 1910.

<sup>88</sup> MIGUÉLEZ, Lorenzo, "Situación actual del problema de las Capellanías en España", *Estudios de la III Semana de Derecho Canónico*, Salamanca, 1950.

<sup>89</sup> AGUILERA SOLER, Carlos, *Fundaciones, capellanías y causas pías en el patrimonio de la Iglesia*, Separata de "Instituciones Canónicas y Reordenación Jurídica", Salamanca, 1979.

<sup>90</sup> VÁZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA, José María, *Las Capellanías colativo-familiares. (Régimen legal vigente)*, Pamplona, EUNSA, 1992.

<sup>91</sup> GONZÁLEZ RUIZ, M., "Las capellanías españolas en su perspectiva histórica", en *III Semana de Derecho Canónico*, pp. 413-441, Salamanca, 1950.

fundación de capellanías y traza un cuadro bastante completo de su evolución histórica. Para una introducción histórica es fundamental también el artículo "Las capellanías: familia, Iglesia y propiedad en el Antiguo Régimen" de Juan Pro Ruiz<sup>92</sup>. La perspectiva histórica con la que este autor aborda su análisis de las capellanías durante el Antiguo Régimen, aporta un interesante punto de vista para analizar las relaciones de carácter social y económico en las que se basaban las fundaciones piadosas, tan abundantes en la España de los siglos XVII y XVIII<sup>93</sup>. Pro Ruiz incide especialmente en la consideración de las capellanías como un medio de vincular bienes laicos a la Iglesia, de tal forma que las familias lograban salvaguardar su patrimonio en unas condiciones fiscales ventajosas, al mismo tiempo que conseguían poner a salvo sus almas asegurándose el descanso eterno, y asegurando el porvenir dentro del estamento eclesiástico de algunos de sus descendientes<sup>94</sup>.

Recientemente, un breve, aunque interesante trabajo de Enrique Soria Mesa<sup>95</sup>, ha puesto de relieve el vacío historiográfico que existe en torno a este tipo de fundaciones desde la perspectiva de la historia social, recalcando la importancia del papel social de las capellanías como instrumento de promoción social y de solidaridad familiar. Este artículo se integra en el conjunto de estudios y de proyectos de investigación surgidos en el seno del Seminario "Familia y Elite de poder" de la Universidad de Murcia, el cual constituye un ambicioso proyecto que tiene como finalidad profundizar en el conocimiento del papel que la familia ha desempeñado en las sociedades modernas en la configuración de las elites de poder y en la perpetuación de las mismas. En las últimas dos décadas este Seminario ha impulsado de forma notable los estudios históricos sobre la familia, una institución clave durante el Antiguo Régimen y en la génesis y desarrollo de las sociedades burguesas. Sus frutos son casi una decena de publicaciones en las que destaca la participación de investigadores como Francisco Chacón Jiménez, Juan Hernández Franco, Antonio Irigoyen y Antonio L. Pérez Ortiz.

Aunque en general la bibliografía historiográfica específica sobre capellanías es escasa, existen algunos pequeños trabajos en forma de artículos o monografías, en los que, en la segunda mitad del siglo XX, se ha abordado esta cuestión en el marco de estudios referidos generalmente a ámbitos locales. Soria Mesa, en el artículo mencionado, aporta varias referencias de monografías de este tipo, como el artículo de Calvo Poyato<sup>96</sup> sobre las capellanías de la villa de Cabra, el caso malagueño

---

<sup>92</sup> PRO RUIZ, Juan, "Las capellanías: familia, Iglesia y propiedad en el Antiguo Régimen", en *Hispania Sacra*, 1989, XLI, pp. 585-602.

<sup>93</sup> Para hacerse una idea de la importancia que llegaron a tener las fundaciones de capellanías basta recordar los cálculos que hacen algunos autores como Mostaza Rodríguez, quien calcula que en el siglo XVII había en España cerca de doscientas mil capellanías. Cfr. MOSTAZA RODRÍGUEZ, A., "Derecho Patrimonial Canónico", en AA. VV., *Derecho Canónico*, vol. I, Pamplona, 1974, pp. 324.

<sup>94</sup> La relación de las capellanías con la vinculación de patrimonios y con la institución del mayorazgo ha sido estudiada también por CLAVERO, Bartolomé, *Mayorazgo. Propiedad feudal en Castilla 1369-1836*, Madrid, Siglo XXI, 1974.

<sup>95</sup> SORIA MESA, Enrique, "Las capellanías en la Castilla Moderna: familia y ascenso social", en IRIGOYEN, A. y PÉREZ ORTIZ, A. (eds.), *Familia, transmisión y perpetuación (siglos XVI-XIX)*, Murcia, Univ. de Murcia, 2002, pp. 135-148.

<sup>96</sup> CALVO POYATO, J., "La crisis de las capellanías. El caso de la villa de Cabra", en *Homenaje a Antonio Domínguez Ortiz*, Madrid, 1981, pp. 551-571.

estudiado por Alfonso Santorio<sup>97</sup>, las fundaciones de Trujillo a las que dedica un artículo Lebrato Fuentes<sup>98</sup>, un estudio sobre las capellanías de la zona de La Sagra<sup>99</sup>, y otros como los dedicados a la isla de El Hierro<sup>100</sup>, o a la región manchega de Valdepeñas<sup>101</sup>. Entre estas monografías no se puede dejar sin citar el estudio de Navarro Godoy sobre un caso de desvinculación de una capellanía guipuzcoana<sup>102</sup>.

Otra óptica diferente desde la que se ha estudiado el fenómeno de la fundación de capellanías es la de los llamados historiadores de las mentalidades, que han seguido la estela de los historiadores franceses Vovelle, Lebrun, Chaunu, o incluso, Le Goff<sup>103</sup>. En esta línea se encuentran numerosos trabajos, como los de Barreiro Mallón<sup>104</sup>, al que se puede considerar como un pionero en el estudio de las mentalidades religiosas durante el Antiguo Régimen y de las actitudes ante la muerte. Barreiro plantea en su trabajo la utilización de los métodos seriales puestos a punto por el historiador-economista para abordar lo que él llama el "tercer nivel" de la Historia Cuantitativa: la incorporación de los sistemas de civilización en su totalidad dentro del campo de lo serial. Este tercer nivel trata de pasar de lo puramente económico y demográfico al campo de las mentalidades, de las ideologías y del pensamiento político y religioso. Aporta como novedad el rechazo del estudio de las actitudes ante la muerte basándose exclusivamente, como otros autores principalmente los franceses, en el análisis de los testamentos notariales, ya que esta documentación no es representativa de todas las clases sociales.

Posteriormente otros trabajos, llevados a cabo durante la década de los ochenta y los noventa, como el de Rivas Álvarez<sup>105</sup> para Sevilla, el de Reder Gadow<sup>106</sup> para

---

<sup>97</sup> ALFONSO SANTORIO, P., "Religiosidad y nobleza. La fundación de capellanías. Un ejemplo malagueño", en *Religiosidad popular en España*, San Lorenzo de El Escorial, 1997.

<sup>98</sup> LEBRATO FUENTES, F., "Trujillanos: sus fundaciones, capellanías y obras pías", en *Revista de Estudios Extremeños*, 41 (1985), pp. 97-122.

<sup>99</sup> SÁNCHEZ GONZÁLEZ, R., "Las capellanías en el Antiguo Régimen (siglos XVI-XIX): estudio de la zona de la Sagra", en *Anales Toledanos*, 23 (1985), pp. 101-147.

<sup>100</sup> ACOSTA BARROS, L. M., "Las capellanías de la isla de El Hierro durante el Antiguo Régimen", en *Anuario de Estudios Atlánticos*, 38 (1992), pp. 141-198.

<sup>101</sup> JIMÉNEZ DE GREGORIO, F., "Las capellanías en el año 1697 (para la historia socioeconómica de Valdepeñas)", en *Cuadernos de Estudios Manchegos*, 20 (1990), pp. 317-332.

<sup>102</sup> NAVARRO GODOY, Mario J., "Un intento de desvinculación de propiedades eclesiásticas: el caso de una capellanía fundada por D. Antonio Sánchez de Ayala en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de las Mercedes de Oria", en *Roel*, 5 (1984), pp. 135-145.

<sup>103</sup> Estos historiadores han abordado en varias ocasiones la temática de las actitudes ante la muerte, de la religiosidad popular y del purgatorio: VOVELLE, M., *La mort et l'occident de 1300 a nos jours*, Paris, 1983; CHAUNU, P., *La mort a Paris: XVI, XVII et XVIII siècles*, Paris, 1978; LEBRUN, F., *Les Hommes et la mort en Anjou*, Paris, 1971; LE GOFF, Jacques, *El nacimiento del purgatorio*, Madrid, Taurus, 1985.

<sup>104</sup> BARREIRO MALLÓN, Baudilio, "El sentido religioso del hombre ante la muerte en el Antiguo Régimen, un estudio sobre archivos parroquiales y testamentos notariales", en *Actas de las I Jornadas de Metodología aplicada a las Ciencias Históricas*, Santiago de Compostela, 1975, vol. 5, p. 181-197.

<sup>105</sup> RIVAS ÁLVAREZ, J. A., *Miedo y piedad: testamentos sevillanos del siglo XVIII*, Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 1986.

<sup>106</sup> REDER GADOW, Marion, *Morir en Málaga, testamentos del siglo XVIII*, Málaga, Universidad de Málaga, 1986.

Málaga, el de Anastasio Alemán<sup>107</sup> para Murcia, o los de Soledad Gómez Navarro<sup>108</sup> para Córdoba, han continuado profundizando en el estudio de los mecanismos a través de los cuales la Iglesia y las clases más poderosas ejercían su control y perpetuaban los sistemas de poder por medio de la manipulación de la esperanza en la salvación del alma. En el mundo hispanoamericano tampoco faltan estudios similares, siendo un ejemplo los realizados para México por Alma Victoria Valdés Dávila<sup>109</sup>, y por Gisela Von Wobeser<sup>110</sup>, o el de Abelardo Levaggi<sup>111</sup> para Argentina.

Para el País Vasco existe un estudio pionero, resultado del trabajo de campo de un antropólogo procedente del ámbito académico norteamericano. Se trata de un estudio del que fuera director hasta 1999 del *Basque Studies Program* de la Universidad de Nevada, en Reno (Estados Unidos), W. A. Douglass<sup>112</sup>. Este autor analiza el conjunto de las relaciones sociales en una pequeña comunidad rural a partir de lo que él considera como un fenómeno fundamental para tal sociedad: la muerte. En palabras del propio Douglass, "*las relaciones sociales de los vivos se definen y expresan -con significativa intensidad- mediante la MUERTE*"<sup>113</sup>. De este trabajo se deduce que en una sociedad en la que los antepasados tienen una presencia tan real como la de los vivos, la muerte constituye un hecho clave, un hito que marca el momento en el que se manifiesta más claramente esta relación entre los vivos y los muertos. La muerte es el momento en el que se hace patente esta relación, y en el que, a través de los rituales que conlleva, se manifiesta la familia como una colectividad formada tanto por los vivos como por los antepasados que ya fallecieron, porque son éstos precisamente quienes otorgan la legitimidad del patrimonio, del solar, que constituye el modo de vida de los vivos.

Algunos trabajos, publicados recientemente, aportan una visión en profundidad de aspectos fundamentales para la comprensión del entramado social en el que se desarrollaron y pervivieron a lo largo de muchos siglos unas instituciones en torno a las cuales se establecían las estrategias que permitían la perpetuación del propio sistema social que las sustentaba. Una visión de conjunto, a pesar de que el mismo autor reconoce haber priorizado en su estudio el área castellanoandaluza, del estamento clerical en la España del Antiguo Régimen, es la proporcionada por

---

<sup>107</sup> ALEMÁN, Anastasio, *Actitudes colectivas ante la muerte en Murcia durante el siglo XVIII*, Murcia, 1992.

<sup>108</sup> GÓMEZ NAVARRO, Soledad, *El sentido de la muerte y la religiosidad a través de la documentación notarial cordobesa (1790-1814)*, Boletín de información de la Academia granadina del notariado, Granada, 1985; *Una elaboración cultural de la experiencia del morir : Córdoba y su provincia en el Antiguo Régimen*, Córdoba, 1998; y "La letra y el espíritu de la letra: Notario, formulario notarial e historia. Edad Moderna", en *Tiempos Modernos*, nº 4, 2001.

<sup>109</sup> VALDÉS DÁVILA, Alma Victoria, "¿Para Garantizar la Vida Después de la Muerte...? Legados Piadosos al Doblar del Siglo XVIII", en *HISTORIA Y GRAFÍA*, 10, México, 1998.

<sup>110</sup> VON WOBESER, Gisela, *Vida eterna y preocupaciones terrenales. Las capellanías de misas en la Nueva España, 1700-1821*, México, UNAM, 1999.

<sup>111</sup> LEVAGGI, Abelardo, *Las capellanías en la Argentina. Estudio histórico-jurídico*, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio L. Gioja, 1992.

<sup>112</sup> DOUGLASS, W. A., *Muerte en Murélagu. El contexto de la muerte en el País Vasco*, Barcelona, Barral, 1973.

<sup>113</sup> DOUGLASS, W. A., o.c., p. 247.

Arturo Morgado García<sup>114</sup> en un libro relativamente reciente, en el que hace un completo repaso de las estructuras eclesíásticas españolas que pretendieron reformar ilustrados y liberales. Por otra parte, ajustándose más precisamente a la cuestión de la fundación de capellanías, en el ámbito catalán, Montserrat Giménez Sureda estudia su significación durante la época medieval, en un contexto de análisis en el que se hace hincapié en la relación con la génesis del poder y de los patrimonios<sup>115</sup>.

Una aproximación al régimen económico de la Iglesia en la diócesis de Calahorra, a la que pertenecía la mayor parte del Señorío de Bizkaia y una parte de la provincia de Gipuzkoa, es la que presenta Santiago Ibáñez Rodríguez<sup>116</sup>, a partir fundamentalmente del estudio de las rentas decimales. Sin embargo, el régimen específico de patronato al que estaban sometidas la mayor parte de las iglesias de Bizkaia y de Gipuzkoa, queda tratado muy superficialmente en el estudio de Santiago Ibáñez. Esta carencia es suplida por investigaciones como la de Elena Catalán Martínez<sup>117</sup>, la de José Manuel Cifuentes Pazos<sup>118</sup>, y la de Ángel Larrea Beobide<sup>119</sup>. El trabajo de Ángel Larrea, en el que se examina el origen y el desarrollo a lo largo de la Edad Media y de la Edad Moderna del patronato laico vizcaíno, permite situar el régimen de patronato de las iglesias vizcaínas en el contexto histórico de finales del Antiguo Régimen con unas sólidas bases. Tanto Elena Catalán como José Manuel Cifuentes realizan un análisis pormenorizado de las economías eclesíásticas vascas, ciñéndose el estudio de Cifuentes exclusivamente a las iglesias vizcaínas, aportando una información fundamental para la realización de estudios más amplios.

Dentro del ámbito geográfico vasco, una importante contribución al conocimiento de las estructuras eclesíásticas en la época que se ha considerado como de tránsito desde el Antiguo Régimen a los nuevos modelos sociales y políticos fomentados por el liberalismo, es la que ofrecen las investigaciones de Antonio Prada Santamaría<sup>120</sup>.

---

<sup>114</sup> MORGADO GARCÍA, Arturo, *Ser clérigo en la España del Antiguo Régimen*, Cádiz, Universidad de Cádiz, 2000.

<sup>115</sup> GIMÉNEZ SUREDA, Montserrat, "Una parte de la gestación del poder y el patrimonio. La adquisición de Capellanías en la sede de Girona durante la época medieval", en *Annals de l'Institut d'Estudis Gironins*, 38 (1996-1997), pp. 1555-1568.

<sup>116</sup> IBÁÑEZ RODRÍGUEZ, Santiago, *El Pan de Dios y el Pan de los Hombres. Diezmos, primicias y rentas en la diócesis de Calahorra (siglos XVI-XVIII)*, Logroño, Universidad de La Rioja, 1999.

<sup>117</sup> CATALÁN MARTÍNEZ, Elena, *El precio del purgatorio. Los ingresos del clero vasco en la Edad Moderna*, Bilbao, UPV-EHU, 2000.

<sup>118</sup> CIFUENTES PAZOS, José Manuel, *La economía de las iglesias vizcaínas en el siglo XVII*, Bilbao, edicionesbeta, 2000.

<sup>119</sup> LARREA BEOBIDE, Ángel, *El Patronato Laico vizcaíno en el Antiguo Régimen*, Bilbao, edicionesbeta, 2000.

<sup>120</sup> PRADA SANTAMARÍA, Antonio, *El paso del Antiguo al Nuevo Régimen en el alto valle del Urola y su zona de influencia*, Zumarraga, ed. por el autor, 1998; *Aspectos de la Historia Eclesiástica de Zumarraga. Los templos de Santa María*, Zumarraga, Parroquia de Santa Maria de la Asunción, 1999; "Los planes beneficiales en los templos parroquiales del Alto Valle del Urola", en *Hispania Nova*, 2, (2002); y "El territorio del Obispado de Pamplona bajo los carlistas. El Tribunal Diocesano de Estella", en *Príncipe de Viana*, año LXIII, num. 226 (2002), pp. 391-430.

Un pormenorizado estudio sociológico del clero vitoriano del siglo XVIII, es el que presenta María Teresa Benito<sup>121</sup> en un trabajo de investigación recientemente publicado, en el que a partir de una detallada prosopografía del clero vitoriano, a través de la cual se establecen las relaciones que configuran las redes de poder, se profundiza en el conocimiento de la configuración social de una ciudad periférica. La estructura social, las prácticas de solidaridad y las estrategias de poder son minuciosamente analizadas a partir del estudio de los comportamientos del estamento clerical, de su religiosidad, de sus relaciones familiares, de su economía y de su participación en las redes de poder.

En la misma línea de análisis de la sociedad vasca de finales del Antiguo Régimen desde una perspectiva en la que se pone de relieve la importancia de la configuración de las redes familiares y de las relaciones de patronazgo como estrategias básicas para la perpetuación de los sistemas sociales, se sitúa la publicación de un conjunto de artículos recientemente publicados, bajo la dirección de José María Imízcoz<sup>122</sup>. Finalmente, debo mencionar los trabajos de Jesús Arpal<sup>123</sup>, de Carlos Martínez Gorriarán<sup>124</sup>, de Mikel Azurmendi<sup>125</sup>, de Alfonso Otazu<sup>126</sup>, de Coro Rubio Pobes<sup>127</sup> y de José María Portillo<sup>128</sup>, que me han iluminado en muchos aspectos, me han dado pistas y me han planteado multitud de interrogantes que me han servido como punto de partida para profundizar en aspectos relacionados con las estructuras de la sociedad vasca tradicional. Estas obras constituyen una aportación de primer orden para la comprensión global de la sociedad guipuzcoana, de las ideologías que la sustentaban, de las elaboraciones culturales a que dieron lugar, y de las transformaciones políticas y sociales que se operaron en su seno, indispensable para la realización de este trabajo.

---

<sup>121</sup> BENITO AGUADO, María Teresa, *La sociedad vitoriana en el siglo XVIII: El clero, espectador y protagonista*, Bilbao, UPV-EHU, 2001.

<sup>122</sup> IMÍZCOZ, J.M. (dir.), *Redes familiares y patronazgo. Aproximación al entramado social del País Vasco y Navarra en el Antiguo Régimen (siglos XV-XIX)*, Bilbao, UPV-EHU, 2001. En esta obra colectiva contribuyen los siguientes especialistas: José María Imízcoz, Tomás A. Mantecón, José Martínez Millán, José M<sup>a</sup> Portillo Valdés, José Ángel Achón, José Antonio Marín, José Miguel Aramburu, Rafael Guerrero, Alberto Angulo y Enriqueta Sesmero.

<sup>123</sup> ARPAL POBLADOR, Jesús, *La sociedad tradicional en el País Vasco (El estamento de los hidalgos en Guipúzcoa)*, San Sebastián, L. Haranburu, 1979.

<sup>124</sup> MARTÍNEZ GORRIARÁN, Carlos, *Casa, Provincia, Rey. Para una historia de la cultura del poder en el País Vasco*, Irún, Alberdania, 1993.

<sup>125</sup> AZURMENDI, Mikel, *Nombrar, embrojar. Para una historia del sometimiento de la cultura oral en el País Vasco*, Irún, Alberdania, 1993.

<sup>126</sup> OTAZU Y LLANA, Alfonso, *La burguesía revolucionaria vasca a fines del siglo XVIII*, San Sebastián, Txertoa, 1982; y *El igualitarismo vasco: Mito y realidad*, San Sebastián, Txertoa, 1986.

<sup>127</sup> RUBIO POBES, Coro, *Revolución y tradición. El País Vasco ante la Revolución liberal y la construcción del Estado español, 1808-1868*, Madrid, Siglo XXI 1996.

<sup>128</sup> PORTILLO VALDÉS, José María, *Monarquía y gobierno provincial. Poder y Constitución en las provincias vascas (1760-1808)*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1991.

## Fuentes utilizadas en esta investigación.

Este trabajo está basado en el estudio de una capellanía fundada a finales del siglo XVIII en la villa guipuzcoana de Placencia. Partiendo del significado de la fundación tanto desde el punto de vista del fundador, desde el de su familia, el de la Iglesia, o el de la comunidad en la que éstos se insertan, he estudiado la vida de la capellanía durante una época considerada por la historiografía como un tiempo de grandes cambios políticos, sociales y económicos; la correspondiente al último tercio del siglo XVIII y el primer tercio del siglo XIX. Una época en la que las relaciones entre la Iglesia y el Estado son replanteadas en profundidad en medio de grandes convulsiones, y en la que las bases jurídicas, sociales, políticas y económicas en las que se apoyaban las elites privilegiadas se tambalean y son renovadas.

Los expedientes formados en la Cámara de Castilla y en el tribunal diocesano de Calahorra, con motivo de varios pleitos que enfrentaron a la poseedora de la capellanía con otros aspirantes a la misma y con el obispo de Calahorra entre los años 1819 y 1834, constituyen el principal soporte documental del que me he valido a lo largo de la investigación<sup>129</sup>. Se trata de dos expedientes, el primero de los cuales contiene el expediente de la causa seguida en la Cámara de Castilla a raíz de un escrito dirigido a la misma por Miguel Antonio de Jauregui, vecino de Bergara, para que no se declarase como colativa la capellanía, fundada en la villa de Placencia por Juan Antonio de Azcarate, que poseía su mujer María Bárbara de Aguirre, sobrina del fundador. El escrito estaba motivado por un auto del obispo de Calahorra en el que se declaraba vacante la capellanía por tratarse de una capellanía colativa y por tanto no tener ningún valor la presentación efectuada en una mujer. El segundo es el expediente de la causa seguida en el tribunal diocesano de Calahorra sobre el goce de dicha capellanía. En este segundo expediente se entrecruza el pleito proveniente de la Cámara de Castilla por resolución del propio Fernando VII y el iniciado por otro aspirante a la capellanía en 1819.

En el Archivo Histórico Nacional he consultado también otros documentos relacionados indirectamente con la historia de esta capellanía. Uno de ellos ha sido el expediente del pleito mantenido entre los años 1763 y 1767 por el cabildo eclesiástico de Placencia contra el de Hondarribia como patrono y llevador de diezmos de la parroquial de Hondarribia, reclamando un aumento de la congrua de los beneficiados<sup>130</sup>. Información adicional sobre la iglesia de Placencia me la ha aportado el Memorial presentado a la Cámara de Castilla en 1775 por el cura y el alcalde de Placencia solicitando facultad para la construcción de un nuevo retablo en su iglesia parroquial<sup>131</sup>.

El fondo en el que he consultado un mayor número de documentos ha sido el Archivo Catedralicio de Calahorra. Se pueden dividir en cuatro grandes grupos los documentos consultados en este archivo. Por una parte los relativos a la capellanía fundada por Juan Antonio de Azcarate, tanto los concernientes a la fundación y aprobación de la misma, como los referentes a diversos pleitos que tuvieron lugar

<sup>129</sup> AHN, Consejos suprimidos, Cámara de Castilla, leg. 15754, 2, expte. 1 y 2.

<sup>130</sup> AHN, Consejos suprimidos, Cámara de Castilla, leg. 15693, 2/2.

<sup>131</sup> AHN, Consejos suprimidos, Cámara de Castilla, leg. 15737, 4.

relacionados con ella. En segundo lugar varios documentos relacionados con diversos pleitos en los que se vieron involucrados los miembros del cabildo eclesiástico de Placencia en la época estudiada. Un tercer conjunto de documentos es el formado por todos aquellos relacionados con la figura del obispo Atanasio Puyal, notable protagonista en el pleito en torno al cual se estructura esta investigación. Finalmente, el último grupo lo constituye toda la documentación relativa a los diversos procesos desamortizadores, a las enajenaciones de capellanías y a los informes sobre capellanías vacantes.

Relativos a la capellanía en la que se centra este estudio, he consultado el expediente del proceso que tuvo lugar en el tribunal diocesano de Calahorra entre 1778 y 1779 para la fundación, aprobación y adjudicación de la citada capellanía<sup>132</sup>. Otro documento que aporta abundante información sobre el funcionamiento de las capellanías y sobre el cabildo eclesiástico de Placencia es el formado por un abultado expediente que contiene documentación sobre varios pleitos que tuvieron lugar entre 1781 y 1796 sobre la reducción de cargas de esta capellanía y la conmutación de las misas cantadas por rezadas<sup>133</sup>. En los años 1796 y 1797, el que entonces era primer capellán de esta capellanía mantuvo varios pleitos con el resto del cabildo eclesiástico, en cuyos expedientes se descubren numerosos aspectos de la conflictividad existente en el seno de un cabildo eclesiástico por cuestiones diversas<sup>134</sup>. También he consultado el expediente relativo al ascenso al orden de evangelio, en 1785, de quien fuera el primer capellán de la capellanía<sup>135</sup>, así como las licencias de celebrar y confesar concedidas al mismo entre los años 1790 y 1796<sup>136</sup>. Relacionado con el pleito mantenido en el tribunal diocesano de Calahorra entre los años 1819 y 1826, he tenido acceso también al expediente formado en 1825 como consecuencia de la apelación presentada por Miguel Antonio de Jauregui ante el tribunal metropolitano de Burgos<sup>137</sup>. He consultado también alguna documentación posterior, concretamente una reclamación efectuada en 1866 por un aspirante a ocupar esta capellanía que de nuevo se encontraba vacante<sup>138</sup>.

La documentación consultada en el Archivo Catedralicio de Calahorra sobre los numerosos procesos seguidos en el tribunal diocesano entre los años 1775 y 1825 es abundantísima. De la misma cabe destacar un abultado expediente formado como consecuencia de la petición, en el año 1795, de una parte del cabildo eclesiástico de Placencia de reducción de las fundaciones perpetuas, tales como memorias de misas y aniversarios, con que se hallaba gravado dicho cabildo<sup>139</sup>. El resto de la documentación consultada se encuentra en las secciones siguientes: *Secretaría del Tribunal*<sup>140</sup>, *Pleitos civiles*<sup>141</sup>, *Pleitos criminales*<sup>142</sup> y *Pleitos Beneficiales*<sup>143</sup>.

---

<sup>132</sup> ACC, Capellanías, 16/239.

<sup>133</sup> ACC, Secretaría del Tribunal, 17/795/24.

<sup>134</sup> ACC, Pleitos Beneficiales, 21/229.

<sup>135</sup> ACC, Órdenes sagradas, 11/409/46.

<sup>136</sup> ACC, Libros de Registro, 09/329.

<sup>137</sup> ACC, Capellanías, 16/972/107.

<sup>138</sup> ACC, Capellanías, 16/986/17.

<sup>139</sup> ACC, Secretaría del Tribunal, 17/795/20.

<sup>140</sup> ACC, Secretaría del Tribunal, signaturas: 17/724/66, 17/741/119, 17/743/36, 17/754/5, 17/799/8 y 17/799/94.

Entre la documentación relacionada con el obispo Atanasio Puyal, hay que destacar una copia manuscrita de la carta redactada por él, de fecha 3 de julio de 1810, cuando aún era obispo auxiliar de Madrid, en la que manifestaba su renuncia al nombramiento como obispo de Astorga que José Bonaparte había hecho en su persona<sup>144</sup>. De los papeles varios del obispo Puyal hay algunos que me han ayudado especialmente a acercarme a su personalidad, como una circular de mayo de 1815 en la que, recientemente nombrado obispo de Calahorra, solicitaba información sobre el clero de la diócesis<sup>145</sup>; otra circular de diciembre del mismo año previniendo los excesos que solían ser habituales en la noche de Navidad<sup>146</sup>; un borrador manuscrito del informe que elaboró en respuesta al oficio de fecha 29 de Mayo de 1817 en el que se le transmitió "el deseo del Rey de que le informara acerca de su opinión sobre la utilidad pública de una amnistía general o con excepciones"<sup>147</sup>; un expediente de 1818 relativo a la provisión de curatos propios relacionado con la reclamación de algunos pueblos de la diócesis que solicitaban que se continuase con la costumbre del nombramiento de los ntuales patrimoniales<sup>148</sup>; las pastorales de mayo de 1821 y de agosto de 1822 apoyando la Constitución Política de la Monarquía y defendiendo la conformidad de la misma con la Religión Católica<sup>149</sup>; varios escritos de 1821 y 1822 relacionados con la secularización de religiosos y con la creación de una división de voluntarios realistas<sup>150</sup>; un escrito de mayo de 1823 relativo a la conflictiva situación del clero de la diócesis<sup>151</sup>; un edicto del mismo año "en el que se advierte sobre los gravísimos males que ha producido durante los últimos años una desenfrenada licencia de leer y escribir"<sup>152</sup>; una "comunicación de la Real Orden de 28 de Septiembre de 1823 sobre reforma del estrago que la licencia hizo en las costumbres durante la fatal época del pretendido sistema constitucional"<sup>153</sup>; y varios papeles manuscritos sobre libros prohibidos, juntas de censura, manuscritos sobre los males derivados de la licencia de las lecturas, apuntes sobre doctrinas peligrosas, así como una crítica sobre el Sínodo de Pistoia, entre otras cosas<sup>154</sup>.

Mención aparte, por su especial interés, merece el expediente relativo a la separación de su cargo del provisor Francisco Baeza, solicitada por Puyal en 1824, una vez transcurrido el periodo constitucional<sup>155</sup>.

---

<sup>141</sup> ACC, Pleitos civiles, signaturas: 22/112/62, 22/744/63, 22/750/73, 22/757/60, 22/761/115, 22/792/27, 22/799/28 y 22/821/11.

<sup>142</sup> ACC, Pleitos criminales, 23/96/229.

<sup>143</sup> ACC, Pleitos Beneficiales, signaturas: 21/125/13, 21/201/03 y 21/36/06.

<sup>144</sup> ACC, Obispos, 07/15/01/04.

<sup>145</sup> ACC, Obispos, 07/15/02a.

<sup>146</sup> ACC, Obispos, 07/15/02d.

<sup>147</sup> ACC, Obispos, 07/15/01/01.

<sup>148</sup> ACC, Obispos, 07/15/07.

<sup>149</sup> ACC, Obispos, 07/15/02e y 02g.

<sup>150</sup> ACC, Obispos, 07/15/11 y 12.

<sup>151</sup> ACC, Obispos, 07/15/01/03.

<sup>152</sup> ACC, Obispos, 07/15/09/x2.

<sup>153</sup> ACC, Obispos, 07/15/02f.

<sup>154</sup> ACC, Obispos, 07/15/09.

<sup>155</sup> ACC, Obispos, 07/15/05.

Finalmente, la documentación referente a los procesos desamortizadores consultada en este archivo constituye un conjunto variopinto de documentos manuscritos que hacen referencia a procesos concretos, así como una colección de documentos impresos conteniendo órdenes, circulares, cartas, oficios, y breves papales, que abarcan un ámbito temporal delimitado entre 1793 y 1822. Este conjunto de documentación se encuentra en las secciones *Asuntos gubernativos*<sup>156</sup>, *Autoridades*<sup>157</sup>, *Capellanías*<sup>158</sup> y *Secretaría del Tribunal*<sup>159</sup>.

En el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, los expedientes de otro pleito de finales el siglo XVIII sobre la posesión de una capellanía fundada también en la iglesia de Placencia, y en el que también figuraba como aspirante a la misma una mujer, me han aportado una abundante información de gran valor para situar adecuadamente el contexto en el que tenía lugar el pleito que estaba investigando. Este pleito pasó sucesivamente por diversas instancias judiciales, desde el tribunal diocesano de Calahorra al tribunal del Corregimiento de la Provincia de Gipuzkoa y desde éste al de la Real Chancillería de Valladolid<sup>160</sup>.

En el Archivo General de Indias he encontrado cierta información sobre el fundador de la capellanía en un "Expediente de información y licencia de pasajero a Indias de Agustín de Zabala, mercader, vecino de Cádiz, con su criado Juan Antonio Azcarate, natural de Placencia, a Nueva España"<sup>161</sup>.

La investigación sobre uno de los principales protagonistas del pleito que se analiza en este trabajo, el maestro arquitecto Miguel Antonio de Jauregui, me condujo hasta el Archivo de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, en donde he trabajado con algunos documentos que aportan ciertos datos sobre él<sup>162</sup>, y al Archivo Municipal de Urretxu, en donde se encuentra el expediente seguido por Miguel Antonio de Jauregui para entroncarse con la hidalguía litigada por su abuelo paterno<sup>163</sup>. En la cercana villa de Zumarraga he consultado también algunos documentos, especialmente los relacionados con fundaciones de capellanías<sup>164</sup>.

---

<sup>156</sup> ACC, Asuntos gubernativos, 06/461/12, 06/475 y 06/483/41.

<sup>157</sup> ACC, Autoridades, 05/21.

<sup>158</sup> ACC, Capellanías, 16/982/03.

<sup>159</sup> ACC, Secretaría del Tribunal, 17/799/94.

<sup>160</sup> En el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid se conservan tres expedientes de este pleito que recorrió varias instancias judiciales entre los años 1790 y 1793. El expediente principal es el formado en el tribunal de la Real Chancillería como consecuencia de la apelación de una de las partes. Los otros dos expedientes son los relativos a los autos seguidos en el tribunal eclesiástico de Calahorra y en el del Corregimiento de la Provincia de Gipuzkoa. El pleito motivado por la renuncia de Manuel de Barrutia a la capellanía que había fundado su tío Sebastián de Barrutia a cuya vacante aspiraba un sobrino suyo, fue promovido por uno de los beneficiados de la iglesia parroquial de Placencia que, movido por intereses particulares, se oponía a la presentación del aspirante, pretendiendo que la capellanía era laical y por tanto correspondía a Teresa Antonia de Barrutia, sobrina del fundador. ARCV, Pleitos, Escribanía de Zarandona y Wals, C2981/03.

<sup>161</sup> AGI, Contratación, 5485, N.2, R.1

<sup>162</sup> ARSB, 075-04-07 y 100-03-01.

<sup>163</sup> AMU, Hidalguías, Libro 14, exp. 5.

<sup>164</sup> AMZ, E/7/I, Libro 4.

En el Archivo Histórico Diocesano de San Sebastián he consultado los libros sacramentales de las iglesias de Placencia<sup>165</sup>, Bergara<sup>166</sup> y Tolosa<sup>167</sup> con el fin de obtener datos precisos sobre las fechas de nacimiento y defunción, así como sobre los matrimonios y la estructura de parentesco de las familias involucradas en la investigación.

En el Archivo Municipal de Placencia encontré un expediente que aun estando alejado del ámbito temporal de la investigación, tiene suficiente interés como para ser citado. Se trata de un expediente del año 1865 sobre la presentación de la capellanía fundada por Juan Antonio Azcarate, que de nuevo se encontraba vacante<sup>168</sup>.

Al Archivo Diocesano de Pamplona he acudido en busca de algunos datos sobre el cabildo eclesiástico de Hondarribia, ciudad fronteriza perteneciente al obispado de Pamplona, poseedor del patronato de la parroquial de Placencia<sup>169</sup>.

En la Biblioteca de la Diputación Foral de Bizkaia he tenido acceso a varios impresos relacionados con los procesos desamortizadores<sup>170</sup>, y con las uniones de capellanías que fueron consecuencia de los planes beneficiales<sup>171</sup> del siglo XVIII, que me han aportado datos importantes a lo largo de la investigación.

Así mismo, en esta biblioteca he tenido acceso a determinada información sobre la producción de armas en las Reales Fábricas de Placencia y sobre la Compañía Guipuzcoana de Caracas, a partir de la *"Nueva contrata por tiempo de siete años, para la provisión de armas de fuego, bayonetas, y Instrumentos de Gastadores de las Fábricas Reales de la Villa de Placencia en Guipuzcoa, para los Reales Ejércitos de su Magestad. Por la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas. Año 1761. Impreso en Madrid, en la Oficina de Antonio Sanz, Impresor del Rey nuestro Señor, y su Consejo"*<sup>172</sup>.

Por último, he de mencionar la documentación consultada en el Archivo Foral de Bizkaia, en donde además de los fondos procedentes de las instituciones del Señorío de Bizkaia, se encuentran los de la mayoría de las villas y anteiglesias vizcaínas. El trabajo con estos fondos me ha permitido conocer una gran diversidad de situaciones y de casos particulares que han enriquecido de manera notable la

---

<sup>165</sup> DEAH, Placencia, A.1-4, A.1-6, A.1-7, A.1-18 y A.1-23.

<sup>166</sup> DEAH, Bergara, Santa Marina, A.1-25.

<sup>167</sup> DEAH, Tolosa, Libro 9 de bautizados.

<sup>168</sup> AMS, 77A.

<sup>169</sup> ADP, C-2696 y C-3061.

<sup>170</sup> "1802- Circular de la Diputación de Vizcaya sobre el pago de la octava parte del precio de venta a los poseedores de patronatos y capellanías laicales que enajenen las fincas anexas a ellas" (BDFB, VAHS-18,2). "Decreto de la Diputación de Vizcaya mandando se circulase a todos los Ayuntamientos mandamiento para que dieran razón circunstanciada de los bienes de capellanías, obras pías y cofradías sin haberse todavía enajenado, estando el valor de dichos bienes destinado a parte de la deuda pública de la Provincia, tal como previene el artículo tercero del decreto de 25 de Junio de 1821" (BDFB, VAF-23).

<sup>171</sup> Sobre los Planes Beneficiales que afectaron al Señorío de Bizkaia, he consultado los siguientes documentos: BDFB, VAHS-10,11, VA-117, VAF-93 y VR-759.

<sup>172</sup> BDFB, VRF-134.

investigación aportando referencias muy valiosas para la comprensión de determinados fenómenos. La mayor parte de los documentos consultados han sido escrituras de fundación de capellanías, tanto laicales como colativas, pleitos motivados por la concurrencia de varios aspirantes a las vacantes de capellanías, y expedientes de subasta de bienes de capellanías con motivo de los sucesivos procesos de desamortización. La documentación consultada en este archivo procede tanto de los fondos municipales como del fondo administrativo. En este último fondo he consultado documentación correspondiente al periodo entre 1798 y 1839, de las secciones *Escrituras varias*<sup>173</sup>, *Capellanías*<sup>174</sup>, *Patronatos*<sup>175</sup> y *Culto y Clero*<sup>176</sup>, y de los Fondos Municipales, el de Bilbao<sup>177</sup>, el de Cenarruza<sup>178</sup> y el de Areatza-Villaro<sup>179</sup>.

---

<sup>173</sup> AFB, Administrativo, Escrituras varias, J-00882/005, J-00883/076, J-00884/051.

<sup>174</sup> AFB, Administrativo, Capellanías, 1/01 (signatura antigua).

<sup>175</sup> AFB, Administrativo, Patronatos, 4/94 (signatura antigua).

<sup>176</sup> AFB, Administrativo, Culto y Clero, J-01331/002, y 96/08 (signatura antigua).

<sup>177</sup> AFB, Fondos Municipales, Bilbao-Antigua, 0011/001/28.

<sup>178</sup> AFB, Fondos Municipales, Cenarruza, Lib. 0181/001.

<sup>179</sup> AFB, Fondos Municipales, Areatza, 0005/001, 0010/007, 0011/002, 0012/001, 0012/002, 0012/005, 0012/007 y 0012/008.

## Un marco geográfico e histórico.

*Abunda esta tierra de diversos generos de armas, assi ofensivas, como defensivas, que en ella se labran, especialmente arcabuzes, moxquetes versos, y otros instrumentos de fuego, que mas que en otra parte se labran en Mondragón y Bergara, y muchos mas en Plazencia.*

Esteban de Garibay, *Compendio historial*

Las provincias de Gipuzkoa y Bizkaia, en una región holohúmeda, ocupan un territorio de tortuosa orografía, con un clima muy lluvioso, en el que la escasa insolación y la acidez de los suelos, unidos a la escabrosidad del terreno, dificultan el cultivo de los cereales tradicionales. Se trata por tanto de unos territorios de limitados recursos agrícolas<sup>180</sup> en los que, sin embargo, otros factores favorecieron las actividades ganaderas y otros tipos de actividades relacionadas con la explotación forestal, así como un temprano desarrollo protoindustrial siderometalúrgico y de construcción naval, y una importante actividad comercial. El déficit crónico de subsistencias se trataba de compensar con la importación de alimentos, desarrollándose paralelamente un importante comercio exportador, principalmente del hierro elaborado en las numerosas ferrerías vizcaínas y guipuzcoanas, y participando en el transporte de las exportaciones castellanas, especialmente, en el comercio castellano de la lana. Se suele culpar al déficit de subsistencias y a la pobreza agrícola de estas tierras de la incapacidad de las sociedades vizcaína y guipuzcoana para absorber un crecimiento demográfico natural, explicando de esta manera la necesidad de convertirse irremediabilmente en sociedades exportadoras de hombres a otras tierras, principalmente a Castilla y a América. Sin embargo, es preciso tener en cuenta otros factores de naturaleza jurídica que condicionaron de forma notable las principales características de unas sociedades extremadamente cerradas sobre sí mismas, en las que el principio de troncalidad y la importancia del solar y el linaje, fueron consecuencia del pacto bajomedieval con el que se resolvió el conflicto cuasipermanente de las guerras de bandos. Aunque también haya habido autores que, como Llorente, estimasen que incluso los Fueros fueron privilegios concedidos por los reyes "en atención a la esterilidad natural de la tierra"<sup>181</sup>.

---

<sup>180</sup> Según la valoración de Fernández de Pinedo para el quinquenio 1771-1775, en Gipuzkoa se producían 5 fanegas de cereal panificable por habitante, frente a las 10 que se producían en Álava. No obstante hay que tener en cuenta que durante el siglo XVII, gracias a la introducción y expansión del cultivo del maíz la producción agrícola mejoró notablemente paliando el tradicional déficit de subsistencias. Cfr. FERNÁNDEZ DE PINEDO, E., *Crecimiento económico y transformaciones sociales del País Vasco (1100-1850)*, Madrid, Siglo XXI, 1974, p. 154.

<sup>181</sup> Juan Antonio Llorente, en su obra *Noticias históricas de las tres provincias vascongadas, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, y del origen de sus Fueros*, defiende la tesis de que los Fueros de Bizkaia fueron privilegios concedidos por los reyes. Tal como afirma él mismo en la *Noticia biográfica*, estos privilegios se habrían concedido "con atención a la esterilidad natural de la tierra". En LLORENTE, J. A. *Noticia biográfica de D. Juan Antonio Llorente o Memorias para la historia de su vida escritas por él mismo*, Paris, 1818. La cita está extraída de la edición de Taurus, Madrid, 1982, p. 97.

A lo largo de los siglos de la llamada Edad Moderna, la sociedad vascongada fue consolidando un modelo particular basado en una jurisdicción privilegiada que configuró un sistema social muy cerrado en un territorio abierto a los intercambios comerciales. Se fue modelando así una sociedad de rasgos contradictorios, cerrada y abierta al mismo tiempo, rústica y urbana. Una sociedad aparentemente autárquica, pero firmemente asentada sobre un sistema de constantes intercambios con el exterior, tanto de mercancías como de fuerza de trabajo. Una sociedad muy tradicional, en la que, sin embargo, se había instalado firmemente una economía monetaria de base mercantil. Estas contradicciones eran más acusadas en unos lugares que en otros. Serían las poblaciones costeras y las villas industriales como Placencia las que destacarían por su apertura en contraste con las poblaciones del interior mucho más cerradas.

Hay que tener en cuenta que a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, lo que se ha llamado la crisis del Antiguo Régimen tuvo en las provincias vascas costeras un importante alcance económico, produciéndose una grave crisis estructural en medio de una coyuntura de gran conflictividad, marcada por guerras como la de la Convención, la guerra contra Gran Bretaña, y la Guerra de la Independencia, y por movimientos populares como la zamacolada.

En una sociedad que había contado hasta entonces con la exportación del hierro local y de la lana castellana para hacer frente a las necesarias importaciones de alimentos, tanto el hierro como la lana entraron en un profundo declive frente a los productos europeos, provocando una situación de profunda crisis económica<sup>182</sup> que se desarrolló en medio de un imparable proceso de oligarquización de las instituciones municipales y provinciales controladas por la burguesía mercantil de las grandes villas y por algunos notables rurales. Por otra parte, la función legitimadora de la religión era hábilmente utilizada por estas oligarquías por medio de los mecanismos de control de la institución eclesiástica como las fundaciones pías, los patronatos y los beneficios patrimoniales entre otros.

---

<sup>182</sup> Un reflejo de esta situación se encuentra en el escrito presentado por el cabildo eclesiástico de Placencia en 1793 solicitando ante el tribunal eclesiástico la reducción de las fundaciones de misas y aniversarios, en el que se culpa de las dificultades económicas del cabildo a la inflación que tuvo como consecuencia la minoración de los rendimientos de los capitales sobre los que se realizaron muchas de las fundaciones debido al *"estado de los tiempos, que todos los viveres se han duplicado en precio con atencion al tiempo en que se fundaron; lo segundo porque el precio del trigo es insufrible especialmente en aquella Provincia, de que ha resultado decaer casi enteramente la oblación, en que es bien notorio y no se le oculta al Tribunal, consiste la congrua en aquel Pais, y no se extraña por la miseria que experimentan en los fieles, y no tienen ni para su escaso alimento"*. ACC, Secretaría del Tribunal, 17/795/20, 1.

Como contrapunto a esta descripción, uno de los beneficiados del mismo cabildo que se opuso a éste en el pleito por la reducción de misas solicitada, afirmaba que *"los fieles de aquella feligresía, no se hallan tampoco en la estrechez y miseria que se aparenta, pues tienen muchas ganancias, y se emplean en la labor de Armas, y hazen buena cosecha de Maiz que es la mas esencial para los Labradores de aquel Pais"*. Sin embargo, a esta opinión, la parte contraria respondió invalidando sus argumentaciones, señalando que *"los Mayores y Ancianos no se acuerdan de tiempo tan calamitoso como este, en que aquellos pobres fabricantes tienen que mantenerse con la misma ganancia que haora treinta o mas años; que muchissimos escasamente ganan à la semana para media fanega de trigo"* (sic). ACC, Secretaría del Tribunal, 17/795/20.

## Placencia. Una villa guipuzcoana en torno a la industria de las armas.

La villa guipuzcoana de Placencia, donde nació el que sería el fundador de la capellanía cuyos avatares van a ser examinados en el presente trabajo, está situada en la orilla derecha del río Deba, en el estrecho valle por el que éste discurre. Fue fundada por el rey de Castilla Alfonso XI en el año 1343<sup>183</sup>. Su población a comienzos del siglo XIX consistía en 250 casas en el cuerpo de la villa y 80 caseríos dispersos<sup>184</sup>. Desde hacía varios siglos, se trataba de una población eminentemente industrial, ocupándose sus pobladores, agrupados en los cuatro gremios de chisperos, cañonistas, aparejeros y caxistas<sup>185</sup>, en la fabricación de armas. Según los datos recogidos por el *Diccionario Histórico-Geográfico* de 1802, la producción agraria era escasa, no alcanzando al abastecimiento de la población.

En Octubre de 1793, con motivo de una petición del cabildo eclesiástico solicitando del Provisor la reducción de las misas y aniversarios, cuya celebración le correspondía debido a diversas fundaciones y legados, el vicario foráneo<sup>186</sup> de la vicaría de Elgoibar, a la que pertenecía la villa de Placencia, elaboró un informe en el que aportaba ciertos datos acerca de dicha villa y de las condiciones de vida de sus habitantes. Según este informe, el vecindario se componía mayormente de operarios de las Reales Fábricas, además de los labradores "*que viven en 83 caserías distantes y dispersas en sitios por la mayor parte casi intransitables a pie, ni a caballo*"<sup>187</sup>.

La vida económica de la villa de Placencia giraba desde finales del siglo XVI en torno a las Reales Fábricas de Armas, siendo el primer lugar de la corona de Castilla donde se comenzó la fabricación de armas de fuego en serie.

---

<sup>183</sup> "Mandó fundar esta villa el rey de Castilla D. Alonso XI, ordenando que los hombres de Marquina, así se llamaba antiguamente el valle en que está situada, que habitaban en Soraluze, y los que moraban en el campo de Herlaivia hiciesen esta población, mandándola llamar Plasencia, y que la cercasen e hiciesen en ella iglesia: concediéndola sus términos y el fuero de Logroño por privilegio despachado en el real de Algeciras a 15 de octubre era 1381, año 1343...", en *Diccionario Geográfico-Histórico de España*, Madrid, Real Academia de la Historia, 1802.

<sup>184</sup> Datos obtenidos del *Diccionario Geográfico-Histórico de España*, Madrid, Real Academia de la Historia, 1802.

<sup>185</sup> Los "chisperos" o "llaveros" se ocupaban de la fabricación de los mecanismos de disparo de las armas de fuego; los "cañonistas" eran los encargados de la fabricación de los cañones de las armas de fuego; los "aparejeros" eran los que construían las guarniciones y aparejos necesarios para el montaje definitivo de las armas; a los "cajeros" era a los que correspondía la fabricación de las partes no metálicas, es decir de madera, como las culatas de las armas de fuego. Cfr. LARRAÑAGA, Ramiro, *Armeros vascos. Repaso histórico, raíces y desarrollo*, Eibar, Ayuntamiento de Eibar, 2001.

<sup>186</sup> Desde muy antiguo se llamaron vicarías los tribunales de justicia eclesiásticos, y vicarios quienes las administraban. Cuando se comenzaron a instalar tribunales eclesiásticos en pueblos y ciudades diferentes de la capital de la diócesis, éstos se denominaron *vicarías foráneas*, es decir, de fuera de la ciudad episcopal. Los vicarios foráneos -a quienes se suele confundir con los arciprestes al igual que se confunden arciprestazgos y vicarías foráneas- tenían asignado un territorio en el que ejercían su jurisdicción eclesiástica, debiendo visitar las parroquias de su vicaría. Ejercen determinados aspectos de la jurisdicción eclesiástica como delegados del Obispo de la diócesis.

<sup>187</sup> Informe del vicario foráneo de Elgoibar, de 21 de Noviembre de 1793. ACC, Secretaría del Tribunal, 17/795/20, fol. 2.

Lo que se conoce como las Reales Fábricas de Armas de Placencia era en realidad un centro de recepción, almacenamiento y examen de las armas que se fabricaban en los diversos talleres gremiales existentes en una amplia zona que incluía a las poblaciones de Bergara, Eibar y Elgoibar.

En Placencia se situaba desde 1573 la llamada "Errege-etxea" o "Casa Real", en donde residían los militares designados por el monarca para inspeccionar la fabricación y en donde se encontraban los almacenes y se hacían las pruebas de las armas antes de su expedición. La industria armera ocupaba también a un numeroso colectivo no ligado directamente con la fabricación, como directores, contadores, veedores, almaceneros, pagadores, mayordomos y examinadores, de tal forma que esta industria ocupaba a la mayor parte de la población activa de la villa.

La abundancia de mineral de hierro de buena calidad procedente sobre todo de Bizkaia, los fértiles bosques que aportaban madera abundante y de buena calidad para la elaboración de carbón vegetal y para las culatas de las armas, la energía hidráulica proporcionada por los numerosos ríos que descienden de las altas montañas que rodean el estrecho valle, junto a una situación geográfica estratégica, cercana a los puertos marítimos, y a la frontera con Francia, y situada entre las montañas que protegían y ocultaban las forjas de posibles invasiones, convirtieron el área de la cuenca del Deba en la más importante región manufacturera de armamento de la corona castellana. Sin embargo, a finales del siglo XVIII, la situación de esta industria estratégica en una zona de permanentes conflictos bélicos aconsejó a la Corona a pensar en su traslado a otras zonas más seguras, comenzando así el declive de la industria armera guipuzcoana<sup>188</sup>.

La industria armera de Placencia estaba formada por numerosos talleres artesanos independientes distribuidos por su zona de influencia, los cuales se organizaban gremialmente, respetando unas normas de fabricación comunes<sup>189</sup>. Los artesanos

---

<sup>188</sup> A pesar de la situación estratégica entre altas montañas, la proximidad de la frontera francesa, se reveló como claramente antimilitar a raíz de las guerras con Francia de finales del siglo XVIII y especialmente durante la Guerra de la Independencia. Cfr. SUÁREZ MENÉNDEZ, Roberto, "La industria militar ante la Guerra de la Independencia", en *La Guerra de la Independencia. Estudios*. Congreso Internacional celebrado en Zaragoza, 3-5 de diciembre de 1997, t. I, pp. 453-477.

<sup>189</sup> Una interesante descripción del modo en el que se organizaba la producción de armas en Placencia es la que realizó Jovellanos en sus *Diarios* como consecuencia de la visita que hizo a Eibar el 21 de agosto de 1791 en el marco de un largo viaje que inició en Gijón el día 6 del mismo mes comisionado por Godoy, posiblemente con el fin de alejarlo de la corte, para que informase sobre el estado de la minería. En su informe, Jovellanos señalaba que: "*Lo que llaman fábrica de armas no significa lo que se cree de ordinario. Varios artistas establecidos en Ermua, Eibar, Placencia, Elgoibar y Mondragón trabajan las varias piezas de que se compone el fusil... En cada pueblo están reunidos en gremio los artistas de cada ramo y eligen anualmente sus prohombres, a que llaman diputados, para el gobierno de los negocios comunes y contratas que diremos; por lo demás, cada uno trabaja para sí con sus oficiales; ninguno, y nada, de cuenta del Rey, quien contrata con la Compañía de Filipinas, y ésta, por medio de su presupuesto (que es D... Lardizábal), contrata con los diputados de cada pueblo y gremio el número de piezas correspondiente a su contenido. El Rey tiene en Placencia un director, quien preside a la entrega. De este modo la Compañía usurpa unas ganancias intermedias que pudieran recaer sobre los artistas, en fomento de este arte importantísima*". Texto citado por VILLOTA, Juan Luis, "El País Vasco visto por Jovellanos a finales del siglo XVIII", en *Estudios Vizcainos*, 7-8, (1972), p. 34.

que se dedicaban en Placencia a la fabricación de armas, que debían obtener el título profesional de maestro armero mediante el correspondiente examen, se organizaban en los cuatro gremios anteriormente señalados. A finales del siglo XVIII se contabilizaban en Placencia, entre los cuatro gremios, según Tellechea Idígoras<sup>190</sup>, 264 maestros armeros. Las ferrerías de la cuenca del Deba suministraban a los talleres armeros hierro de buena calidad, y los montes de los alrededores excelente madera para los cajistas.

En varias ocasiones, durante el siglo XVIII, la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas obtuvo, por medio de contratas de varios años de duración, el asiento de la provisión de armas de fuego, bayonetas e instrumentos de gastadores de las fábricas de Placencia. A partir de la documentación en la que se recogen las condiciones de estas contratas se puede obtener una valiosa información sobre la producción de armas en dichas fábricas.

Según la contrata realizada por siete años en 1761, la Compañía se comprometía a entregar un total de 100.800 fusiles de infantería, lo que suponía una media mensual de 1.200, además de un número variable de carabinas y pistolas. Así mismo se comprometía a la entrega mensual de 400 "instrumentos de los siete géneros"<sup>191</sup>. A partir de los precios fijados en esta contrata se puede calcular el volumen de ingresos totales procedentes de la fabricación de armas, que se aproximaría a los 120.000 reales mensuales sin contar las piezas sueltas, las carabinas y las pistolas para las que no se exigía una producción determinada<sup>192</sup>.

La Real Compañía de Caracas<sup>193</sup>, una prueba más del empuje comercial de los guipuzcoanos, y la más larga experiencia de compañía mercantil de la corona

---

<sup>190</sup> TELLECHEA IDÍGORAS, J. I., "Noticia del número de Maestros asentistas matriculados en sus respectivos gremios, que con sus fraguas y talleres se hallan en Placencia de Guipúzcoa y pueblos adyacentes a su Real Fábrica de armas de fuego, elaborando con arreglo a las leyes que rigen en este brillante establecimiento", en *El Diario Vasco* (8-2-1974). La reseña es de ASTIAZARAIN, M. I., "Un ejemplo de arquitectura industrial en la Guipúzcoa del siglo XVIII. La Real Fábrica de Armas de Placencia", en *Cuadernos de Sección. Artes Plásticas*, 10 (1992), pp. 9-28.

<sup>191</sup> Se refiere a los siguientes instrumentos: 30 hachas grandes, 30 hachas pequeñas, 50 marracos, 80 picos azadones, 80 picos a roca o de dos puntas, 80 azadas y 50 palas. En: "Nueva contrata por tiempo de siete años, para la provisión de armas de fuego, bayonetas, y Instrumentos de Gastadores de las Fábricas Reales de la Villa de Placencia en Guipuzcoa, para los Reales Exercitos de su Magestad. Por la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas. Año 1761. Impreso en Madrid, en la Oficina de Antonio Sanz, Impressor del Rey nuestro Señor, y su Consejo". BDFB: VRF-134.

<sup>192</sup> Entre las numerosas condiciones que se establecen en esta contrata de 1761 con la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, se fijaron algunas como la facultad de denunciar las armas de fuego que se fabricasen para particulares, la de obligar a cualquier maestro u oficial residente en un contorno de tres leguas de Placencia a matricularse en los gremios de sus fábricas de armas. Al mismo tiempo se obligaba a los corregidores de Bizkaia y Gipuzkoa y al Diputado general de Álava a que permitiesen que en las villas y lugares de su jurisdicción se cortasen los nogales que fueran necesarios para montar las armas objeto del contrato.

<sup>193</sup> Sobre la Compañía Guipuzcoana de Caracas existe un trabajo reciente de gran envergadura en el que se pretende responder las cuestiones que quedaron pendientes en trabajos anteriores: GÁRATE OJANGUREN, M<sup>a</sup> Monserrat, *La Real Compañía de Caracas*, San Sebastián, Sociedad Guipuzcoana de ediciones y publicaciones, 1990. Según esta autora, la obra más completa escrita sobre la Compañía de Caracas, que ella trata de completar, sería la de HUSSEY, Ronald, *The Caracas Company, 1728-1784*, Cambridge, Harvard University Press, 1934. A la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas dedica también un amplio capítulo de la segunda parte de su obra, EGAÑA, Bernabé

española durante el siglo XVIII, fue constituida en sociedad comercial por acciones en 1728, y erigida como compañía privilegiada sólo dos lustros más tarde. En marzo de 1785, se clausuraba de forma oficial, tras la creación de la Compañía de Filipinas, que le sucedería también en las contratas de las Reales Fábricas de Placencia, aunque para entonces ya se habría iniciado el declive de una industria que ya nunca volvería a tener la relevancia económica que había tenido para la villa guipuzcoana.

En contraste con la imagen estereotipada de la rusticidad de los vascos y de las descripciones que proponen una visión rural y pastoril de los pueblos y de los habitantes de Bizkaia y de Gipuzkoa, la villa de Placencia se mostraba como un centro de producción industrial y de comercio en el que predominaba la sociedad urbana sobre la rural, y una economía mercantil e industrial sobre la agrícola tradicional.

---

Antonio de (h. 1753-1804), *Instituciones y colecciones histórico-legales pertenecientes al gobierno municipal, fueros, privilegios y exempciones de la M.N. y M.L. Provincia de Guipúzcoa*, edición preparada por DIEZ DE SALAZAR, L. M., y AYERBE, M. Rosa, San Sebastián, Diputación Foral de Gipuzkoa, 1992, libro II, pp. 502-548.

## Placencia. Un cabildo eclesiástico en torno al negocio de las almas.

En consonancia con un sistema económico basado fundamentalmente en la industria y el comercio, el mantenimiento de la iglesia tampoco dependía ni de diezmos ni de primicias. No sólo porque fueran escasos, sino porque no los percibían la iglesia de Placencia ni su cabildo, ya que correspondían al cabildo eclesiástico de Fuenterrabía como patrono que era, por merced real, de la iglesia de Placencia. La principal fuente de ingresos de los beneficiados de Placencia eran por tanto las capellanías, misas, aniversarios y diversos tipos de legados y fundaciones piadosas.

Mientras que la mayor parte de la Provincia de Gipuzkoa pertenecía a finales del siglo XVIII a la diócesis de Pamplona, todo el valle del Deba dependía de la de Calahorra y La Calzada, desde su restauración en el siglo XI<sup>194</sup>. Aunque la mayor parte de las parroquias guipuzcoanas del obispado de Calahorra constituían el arciprestazgo de Léniz, la zona del bajo Deba, vinculada incluso lingüísticamente a Bizkaia, perteneció durante la Edad Media al vizcaíno arciprestazgo de Tavira. A este viejo arciprestazgo pertenecieron las parroquias guipuzcoanas de Eibar, Elgoibar, Astigarribia y Placencia junto a las vizcaínas de Durango, Elorrio, Markina y Zornoza. Sin embargo, en el *Libro de visita del Licenciado Martín Gil*<sup>195</sup>, de 1551, las citadas parroquias aparecían ya formando parte, junto con el resto de parroquias del valle del Deba, del arciprestazgo de Léniz<sup>196</sup>. A finales del siglo XVIII, las parroquias guipuzcoanas que habían pertenecido al arciprestazgo de Tavira formaban entre ellas la vicaría de Elgoibar.

La parroquia de Placencia, dedicada a la Asunción de Nuestra Señora, titulada de Santa María la Real<sup>197</sup>, estaba servida a comienzos del siglo XIX por seis beneficiados, cuatro de entera ración y dos de media<sup>198</sup>. La cura de almas la ejercía uno de los beneficiados, aunque habitualmente los demás solían colaborar con él en

<sup>194</sup> La diócesis de Calahorra fue restaurada por el rey Alfonso VI el año 1076, independizándola de Nájera e incorporándole la sede episcopal de Armentia. SOLANO ANTOÑANZAS, José M<sup>a</sup>, *El gobierno eclesiástico de la vasta diócesis de Calahorra. Sus obispos durante XX siglos*, Calahorra, 1967, p. 47.

<sup>195</sup> DÍAZ BODEGAS, Pablo, *Libro de visita del licenciado Martín Gil*, Logroño, 1998.

<sup>196</sup> Según Javier Elorza Maiztegui, la inclusión de estas parroquias en el Arciprestazgo de Leniz pudo haber sido "error voluntario" del Licenciado Martín Gil para poder visitarlas, ya que él no estaba autorizado a visitar las iglesias del Señorío de Bizkaia. Ver: ELORZA MAIZTEGUI, Javier, *Eibar: orígenes y evolución (siglos XIV-XVI)*, Eibar, Eibarko Udala, 2000, p.149.

<sup>197</sup> Ramiro Larrañaga señala la probabilidad de que el calificativo de "Real" provenga del hecho de que esta iglesia fue de patronato real. LARRAÑAGA, Ramiro, *Placencia de las Armas*, San Sebastián, Caja de Ahorros Municipal, 1970, p. 58. Es probable que esta creencia esté basada en la afirmación hecha por Gorosabel, quien afirma que "*La única iglesia parroquial se titula Santa María la Real, como de patronato de su magestad*". GOROSABEL, Pablo, *Diccionario histórico-geográfico-descriptivo de los pueblos, valles, partidos, alcaldías y uniones de Guipúzcoa*, Tolosa, Imp. De Pedro Gurruchaga, 1862.

<sup>198</sup> *Diccionario Geográfico-Histórico de España*, Real Academia de la Historia, Madrid, 1802. En 1793 el cabildo eclesiástico de Placencia estaba compuesto por seis beneficiados, cuatro enteros y dos de media ración. Sin embargo, según se desprende del traslado de los libros de Aniversarios realizado en 1793 con motivo de la petición del cabildo de reducción de cargas, en el año 1743 el número de beneficiados era de cinco. ACC, Secretaría del Tribunal, 17/795/20.

determinadas funciones. Al igual que en muchas otras iglesias vizcaínas y guipuzcoanas de la diócesis de Calahorra, el cabildo de Placencia era un cabildo capitular en el que la cura de almas correspondía al propio cabildo *in universum*<sup>199</sup>.

Las iglesias del obispado de Calahorra no tuvieron hasta el siglo XIX, y no sin grandes dificultades, un sistema de curatos propios<sup>200</sup>. En las iglesias de la diócesis situadas en las provincias de Álava y Gipuzkoa y en el Señorío de Bizkaia no llegaría a implantarse este sistema al menos hasta después del Concordato de 1851<sup>201</sup>. Hasta la puesta en vigor de los planes beneficiales y de curatos propios, en el obispado de Calahorra, la cura de almas correspondía exclusivamente al obispo<sup>202</sup>, quien designaba en las parroquias, eligiéndolo de entre los beneficiados patrimoniales de sus cabildos, a un vicario al que encomendaba la *cura animarum*. Generalmente designaba para este oficio al beneficiado que le presentaba el patrono, en el caso de las iglesias de patronato vizcaínas y guipuzcoanas, o al que

<sup>199</sup> En relación con la forma en la que se ejercía la cura de almas en la iglesia de Placencia, el vicario foráneo de Elgoibar en el ya mencionado informe de 1793 afirmaba lo siguiente: "*En atención a esto, y a que el ejercicio de la cura de Almas reside en aquel cabildo in universum sin embargo de nombrarse por S.S.I. uno o mas sujetos para el desempeño de esta principal pesada carga...*". ACC, Secretaría del Tribunal, 17/795/20, 9.

<sup>200</sup> Con el fin de obedecer los mandatos del Concilio de Trento (cap. 18, ses. 24 de Reformat.) y como respuesta a las exigencias en tal sentido planteadas en la bula Apostolici Ministerii, la monarquía emprendió diversas medidas de reforma del sistema benefical, expidiéndose varias órdenes en los años 1769, 1788, 1800, 1801 y 1802 para que se estableciesen Curas Propios en aquellos obispados que carecían de ellos como los Arzobispados de Sevilla y Granada, y los obispados de Guadix, Almería, Málaga, Palencia, Santander y Calahorra. En la diócesis de Calahorra el sistema de curatos propios chocaba frontalmente con el tradicional sistema de beneficios patrimoniales, por lo que se produjeron numerosas reclamaciones por parte de los patronos laicos vizcaínos, así como por parte de varios pueblos de la Rioja. Todavía en 1818, con motivo de la petición de varios pueblos de la Rioja para que no se llevase a efecto el Plan de establecimiento de curas propios, restableciéndose el sistema tradicional fundamentado en la patrimonialidad de los Beneficios, el Rey solicitó el informe del obispo de Calahorra. Atanasio Puyal, emitió en Noviembre de 1818 un largo y detallado informe en el que exponía los motivos por los que debía proseguirse en la aplicación del Plan de establecimiento de curatos propios. Como consecuencia de este informe el Rey mandó, en enero de 1819, que se continuase adelante en dichas iglesias con el referido Plan de curatos propios. ACC, Obispos, 07/15/07.

<sup>201</sup> Debido a la fuerte oposición de los patronos laicos a la reforma benefical y al apoyo que éstos siempre encontraron en las principales instituciones de la monarquía, se crearon unas Juntas especiales en el Señorío de Vizcaya y en las provincias de Álava y Gipuzkoa para la redacción de un Plan Benefical, que fue aprobado por Real Cédula Auxiliatoria de 10 de enero de 1808. En éste se recogía una de las principales reivindicaciones de los pueblos y de los patronos, respetándose el sistema tradicional de provisión de curatos. Una orden de la Cámara de 20 de abril de 1807 dirigida al obispo de Calahorra mandaba a éste el cumplimiento de dicho Plan elevándolo a auto en forma. En dicha orden se indicaba que "*aunque por un concepto general, la mayor utilidad de la Iglesia resulta de que sus Beneficios curados se provean por concurso general y abierto... las particulares circunstancias que concurren en los pueblos de las Provincias, obligan a no seguir la regla establecida por punto general...*". En *Plan Benefical de las Iglesias Parroquiales del Señorío de Vizcaya. Aprobado por S. M. en 10 de Enero de 1808*. Bilbao, Francisco San-Martin, Impresor del Señorío, 1815. (BDFB: VA-117). El Concordato de 1851, en su artículo 26, establecía que todos los curatos, sin excepción alguna, fueran provistos en concurso abierto, cesando el privilegio de patrimonialidad. Cfr: GOLMAYO, P. B., *Instituciones del Derecho Canónico*, Madrid, 1859, tomo I, Apéndice nº 4, p. 452.

<sup>202</sup> La Constitución I del Título X, Libro I de las Constituciones Sinodales del obispado de Calahorra y La Calzada de 1698, así lo declara bajo el siguiente epígrafe: "El Obispo es Cura universal del Obispado, y se declara por tal". CSC-1698, const. I, tit. X, lib. I.

elegían el propio cabildo y el pueblo<sup>203</sup>, en las demás. Sin embargo, en muchas de las iglesias vizcaínas y guipuzcoanas, quizá como consecuencia, y como un símbolo, de su tradicional independencia del obispo, se atribuía a todo el cabildo la responsabilidad de la cura de almas, aunque el ejercicio de la misma se encomendase a uno o varios de sus miembros. En un gran número de las parroquias guipuzcoanas, especialmente en las de la diócesis de Pamplona, a quien ejercía la cura de almas se le llamaba vicario. Esta denominación podría responder según la opinión de Insausti Treviño<sup>204</sup> al hecho de que quien ejercía la cura de almas lo hacía en nombre y representación del resto del cabildo, en quien recaía de forma colegiada y como persona moral dicha responsabilidad. Aunque en el resto del obispado de Calahorra, la denominación de vicario, cuando se aplicaba al beneficiado que ejercía la cura de almas se refería a su papel de representante del obispo, pues éste era el *cura universal* del obispado.

La iglesia de Placencia era de patronato regio<sup>205</sup>, aunque durante el siglo XVII lo disfrutaba, por merced real, el marqués de Villa Alegre<sup>206</sup>. En 1721 el patronato fue concedido por Felipe V al cabildo eclesiástico de la ciudad de Hondarribia con el fin de contribuir al remedio de los daños que había sufrido la ciudad en el lejano asedio de 1638. Esta concesión que se hizo por catorce años, con declaración explícita de que se le concederían las prórrogas sucesivas, fue consecuencia del compromiso adquirido por Felipe IV, quien concedió al cabildo eclesiástico de Hondarribia 800 ducados de renta perpetua en los patronatos que vacasen en la provincia de Gipuzkoa con el fin de hacer frente a los perjuicios que padeció en sus rentas en el sitio y bombardeo que sufrió aquella villa<sup>207</sup> de las armas de Francia el año de 1638.

---

<sup>203</sup> Un testimonio de este sistema de presentación para el oficio de cura de almas, es el consignado en un documento de Urretxu del año 1471 según el cual, en la parroquia de dicha villa se suprimió el cargo de rector, estableciéndose un cabildo de cuatro beneficiados, de entre los cuales era elegido y presentado al obispo por el clero y pueblo el que había de ocuparse en la cura de almas con título de vicario. Este documento es citado y transcrito en parte en INSAUSTI TREVIÑO, Sebastián, *Las Parroquias de Guipúzcoa en 1862*, San Sebastián, Diputación de Guipúzcoa, 1964, p. 22.

<sup>204</sup> Ibídem. Según el canon 471 del Código de Derecho Canónico de 1917, las parroquias que se hallan unidas a una casa religiosa, a una iglesia capitular o a otra persona moral, requieren del nombramiento de un vicario que ejerza en ellas la cura actual de almas. Estos serían los vicarios parroquiales conocidos como vicarios actuales y que corresponderían a quienes ejercían la cura de almas, en nombre de todo el cabildo, en las iglesias guipuzcoanas a las que se refiere Insausti.

<sup>205</sup> El patronato regio de las iglesias vizcaínas y guipuzcoanas, al igual que el patronato de laicos, tenía unos orígenes remotos en las iglesias propias de la alta Edad Media. En virtud del derecho de patronato, la corona, al igual que los demás patronos laicos, tenía derecho a la presentación de los beneficios de las iglesias y a la percepción de los diezmos, además de una serie de derechos honoríficos. A cambio tenía la obligación de mantener a los beneficiados y atender a la conservación de la fábrica de las iglesias. La diferencia fundamental con los patronatos de laicos era que los reyes solían concederlos como merced a aquellos de sus súbditos a quienes deseaban premiar por los servicios prestados o cuya fidelidad pretendían asegurar. Estas mercedes se solían conceder por una o varias vidas y en algunos casos a perpetuidad por juro de heredad. Cfr. LARREA BEOBIDE, Ángel, *El patronato laico vizcaíno en el Antiguo Régimen*, Bilbao, edicionesbeta, 2000.

<sup>206</sup> LARRAÑAGA, Ramiro, *Placencia de las Armas*, San Sebastián, Caja de Ahorros Municipal, 1970, p. 58.

<sup>207</sup> En aquellos veraniegos meses del año 1638, Hondarribia era todavía villa, ya que el título de ciudad se le concedió precisamente a raíz del comportamiento observado durante el sitio al que fue sometida.

En 1748, Fernando VI despojó a Hondarribia del patronato de Placencia concediéndoselo, por real decreto de 13 de enero, a José Basilio de Aramburu, teniente general de los reales ejércitos. Esta concesión fue revocada por el rey en 1755, como consecuencia de la representación que el cabildo eclesiástico de Hondarribia elevó a la corona reclamando dicho patronato. Fernando VI confirmó en esta fecha la concesión del patronato de la iglesia de Placencia al cabildo eclesiástico de Hondarribia por un periodo de catorce años prorrogable, mandando *"que el cura o vicario y beneficiados, capellanes y demás ministros de dicha iglesia parroquial de la villa de Placencia, como los feligreses y mayordomos de ella, siendo requeridos con este mi Real Título, o su traslado signado de escribano, hayan y tengan por patrono de aquella iglesia al cabildo eclesiástico de Fuenterrabía, y que desde el día en que este tome posesión de dicho patronato, le acudan, y hagan acudir, o a quien su poder tuviere por el tiempo de dichos catorce años, con todos los frutos, rentas, provenidos y emolumentos a él anexos y pertenecientes, según los llevaron y debieron llevar los que por Real Merced han gozado el mismo patronato sin diferencia alguna, y que así tenga el referido cabildo eclesiástico la presentación y provisión de vicarios, beneficiados, capellanes y otros ministros de la dicha iglesia parroquial de Placencia, pagándoseles sus salarios, y haciendo los gastos necesarios para el servicio de la expresada iglesia, conforme a las leyes, sentencias y cartas ejecutorias que sobre ello estuvieren dadas, sin que se le ponga embarazo en esto, ni en el uso de las demás regalías, y preeminencias, honores y franquezas que por razón del dicho patronato debe haber y gozar, y mando se le guarden bien y cumplidamente, de manera que no le falte cosa alguna"*<sup>208</sup>.

El 5 de octubre de 1763, se iniciaba un pleito en el que el cabildo eclesiástico de Placencia reclamaba del Cabildo eclesiástico de la ciudad de Fuenterrabía, como patrono de la parroquial de Placencia y llevador de los diezmos de ella, un aumento de la congrua, ya que únicamente contribuía con 58 ducados para el cura y su teniente y 1652 reales para los 6 beneficiados. Los beneficiados de Placencia se quejaban de la cortedad de la congrua que percibían del patrono y de la falta de otros ingresos, ya que *"las oblacones y emolumentos de Pie de altar que sobre ser inciertos son tambien mui cortos en un Pueblo cuia feligresia se compone de pobres Labradores y Lavorantes de las Reales fabricas de armas, que se construien en dicha villa de Placencia, y aunque su Cavildo Ecclesiastico viendose en necesidad ha recurrido al de la expresada ciudad de Fuenterrabia representandole sus justos motibos se ha negado a consignar la correspondiente congrua sustentacion para dichos Beneficiados, y no siendo la mente y voluntad de V.M. en la concesion y merced de dicho Patronato el defraudar ni perjudicar a los Ministros de la Iglesia en su precisa congrua decente sustentacion a cuia carga estan priMaríamente afectos los Diezmos"*<sup>209</sup>.

Esta reclamación no tuvo éxito, ya que en 1793, en el ya mencionado informe del vicario foráneo de Elgoibar, éste se refería al patronato de Hondarribia como una de

---

<sup>208</sup> Este documento se encuentra transcrito junto a otros papeles del año 1789, entre la documentación relativa al Plan Beneficial de Hondarribia. ADP., C-3061, 1-B.

<sup>209</sup> Placencia: Pleito del Cabildo eclesiástico contra el Cabildo eclesiástico de Hondarribia, patrono y llevador de diezmos de la parroquial de Placencia, reclamando aumento de la congrua de los beneficiados. AHN, Consejos suprimidos, leg. 15693, 02/2.

las causas de la falta de recursos del cabildo de Placencia, ya que su única congrua estaba constituida por el pie de Altar y el corto producto que rendían las fundaciones de aniversarios y de misas<sup>210</sup>. En 1793, el cabildo de Hondarribia llevaba los diezmos íntegros de Placencia, de los cuáles sólo contribuía con 58 ducados anuales para el cura y un teniente o coadjutor, y con cuatro reales diarios que daba al cabildo de Placencia como estipendio "*con la carga de cantar y aplicar por aquel Pueblo (Hondarribia) las Misas conventuales de todo el año a horas determinadas y gravosas sin Ministros en los dias de labor, y en todos los festivos con ellos, organo, quando no lo embarazan las Rubricas, y asistencia de todo el cabildo*"<sup>211</sup>. El vicario se refería al fracaso de la petición que motivó el pleito de 1763, como un argumento más en favor de la petición de reducción de misas y aniversarios<sup>212</sup>.

En 1811, el cabildo de Hondarribia, con ocasión de la petición que hizo de licencia para tomar a censo 660 reales de vellón para poder seguir una causa promovida por el cabildo parroquial de Irún ante el Gobernador de Vizcaya, a la sazón el General francés Thouvenot, sobre separación de diezmos y hórreos<sup>213</sup>, se lamentaba de la pérdida del patronato de Placencia. Sin embargo, posteriormente, el cabildo de Hondarribia continuaría disfrutando del patronato hasta mediados del siglo XIX en que fue concedido por merced real al duque de Ciudad Real<sup>214</sup>. Según las contestaciones dadas al cuestionario que la Comisión eclesiástica establecida para disponer el arreglo parroquial de la provincia, que se emprendió en 1863, el patronato de Placencia era mixto, correspondiendo al párroco y al alcalde tanto el derecho de presentación como la administración de la parroquia<sup>215</sup>.

La escasez de rentas procedentes del diezmo sería compensada por la abundancia de aniversarios, capellanías y otros tipos de legados píos, que se habían convertido en la principal fuente de ingresos de los beneficiados de Placencia de finales del siglo XVIII. De esta forma, la industria de las armas y el negocio de las almas entrarían en relación por medio de legados, fundaciones y patronatos. Los capitales generados por la industria armera y las remesas procedentes de los naturales de la villa emigrados a América acrecentaron por medio de diversas fundaciones el

<sup>210</sup> "sera preciso que en adelante cuide de la conservación del pie de Altar, en que unicamente consiste su congrua, para que no llegue el caso de que sus Individuos se vean alguna vez sin tener que comer, como empieza a verificarse con la falta de la ofrenda de Pan, sin que se extrañe por la miseria, que se experimenta en los feligreses, que tienen que pagar 66 rs. fanega de trigo". ACC, Secretaría del Tribunal, 17/795/20, fol. 2.

<sup>211</sup> ACC, Secretaría del Tribunal, 17/795/20, fol. 2.

<sup>212</sup> "Por cuio motivo introduxo hace tiempo aquel cabildo en la Camara su pretensión a aumento de congrua, y despues de haber seguido la instancia con esfuerzo y mucha costa, y con no menor esperanza de buen suceso, que se le daba por sus Abogados, fue absuelto de ella el Patrono". ACC, Secretaría del Tribunal, 17/795/20, fol. 2.

<sup>213</sup> 1811, Petición de licencia del cabildo parroquial de Hondarribia para tomar 660 ducados a censo. ADP, C) 2696, nº 31.

<sup>214</sup> A mediados del siglo XIX, según Gorosabel, el patronato de Placencia lo disfrutaba por merced real el duque de Ciudad Real. GOROSABEL, Pablo, *Diccionario histórico-geográfico-descriptivo de los pueblos, valles, partidos, alcaldías y uniones de Guipúzcoa*, Tolosa, Imp. De Pedro Gurruchaga, 1862.

<sup>215</sup> A partir de las respuestas al mencionado cuestionario, el presbítero Sebastián Insausti publicó en 1964 un interesante estudio sobre la situación de las parroquias guipuzcoanas en el año 1862. El dato sobre el patronato de Placencia se ha obtenido de dicho estudio. INSAUSTI TREVIÑO, Sebastián, *Las parroquias de Guipúzcoa en 1862*, San Sebastián, Diputación de Guipúzcoa, 1964.

patrimonio de la iglesia, con cuyas rentas se pudo mantener un cabildo eclesiástico con escasa participación en los ingresos decimales.

Tal como ya se ha dicho, a finales del siglo XVIII, el cabildo eclesiástico de Placencia, de la parte de los diezmos que cobraba íntegramente el cabildo de Hondarribia, solamente percibía cuatro reales diarios con la carga de cantar y aplicar por los de aquella población las misas conventuales de todo el año, que en los días festivos debían ser con asistencia de todo el cabildo y acompañadas de órgano. El patrono, es decir, el cabildo de Hondarribia, contribuía también con 58 ducados anuales para el cura y su teniente<sup>216</sup>. Aparte de esto, todos los ingresos del cabildo eclesiástico de Placencia, compuesto por seis beneficiados, cuatro enteros y dos de media ración, procedían exclusivamente de la corona<sup>217</sup>, la ofrenda de pan de los feligreses y de los aniversarios y de las misas de fundaciones y legados píos, así como de las misas encargadas por las diversas cofradías existentes en la villa.

Las misas con las que estaba gravado el cabildo de Placencia eran de varias clases. Había misas rezadas y misas cantadas con diferentes grados de solemnidad. Las misas rezadas normalmente eran celebradas por un solo sacerdote. Las misas cantadas podían exigir la asistencia de todo el cabildo o no y podían ser con o sin órgano. Cuando requerían de la participación de varios ministros como diáconos y subdiáconos, se llamaban misas diaconadas. Había misas que podían celebrarse en un altar cualquiera y no era preciso que fuera en fecha determinada, pero muchas de ellas tenían señalada la fecha y la hora, y debían celebrarse en altar señalado.

Diariamente se celebraba la misa *pro populo*, también llamada misa conventual<sup>218</sup>. En fechas determinadas debían celebrarse ciertas misas que eran pagadas por las distintas cofradías existentes en la villa y las encargadas por la propia villa o por instituciones como la Real Fábrica de Armas con motivo de determinadas festividades o de ciertos acontecimientos tanto sociales como religiosos o incluso políticos. Además, el cabildo debía celebrar un buen número de misas procedentes de diversas fundaciones y legados, los aniversarios o memorias de misas. En ocasiones el cabildo debía ayudar también en la celebración de las misas de determinadas capellanías, bien por la solemnidad impuesta por el fundador o por la imposibilidad del capellán de celebrarlas personalmente.

De las informaciones recogidas en el expediente que se formó para resolver la petición de reducción de misas y aniversarios que hizo el cabildo eclesiástico en

---

<sup>216</sup> Datos extraídos del informe del vicario foráneo de Elgoibar en relación con el expediente promovido por la petición que hizo el cabildo de Placencia en 1793 de reducción de cargas de las fundaciones perpetuas con que se hallaba gravado. ACC, Secretaría del Tribunal, 17/795/20.

<sup>217</sup> Las remuneraciones que provenían exclusivamente de la *corona* eran aquellas que se percibían por la realización de servicios que no estaban incluidos entre los que correspondían obligatoriamente en razón de las rentas asignadas a los beneficios eclesiásticos. En las parroquias guipuzcoanas se solía decir que *vivían de la corona* aquellos sacerdotes que no tenían asignada una dotación y por tanto debían sostenerse realizando determinados servicios religiosos como celebración de determinadas misas o ayudando en las misas cantadas. Cfr. INSAUSTI TREVIÑO, Sebastián, *Las parroquias de Guipúzcoa en 1862*, San Sebastián, Diputación de Guipúzcoa, 1964, p. 25.

<sup>218</sup> La misa conventual propiamente dicha era la que diariamente se celebraba en los conventos y comunidades, y a la que debían asistir todos sus miembros. Aunque también se llamaba misa conventual a la que se celebraba diariamente en una parroquia capitular como era la de Placencia.

1793<sup>219</sup>, se deduce que en Placencia se celebraban en total 1775 misas al año. Del total de misas, 365 eran las misas conventuales cantadas con participación de todo el cabildo; 200 de aniversarios; otras 242 misas cantadas de varias fundaciones y legados píos; 104 misas cantadas de las diversas cofradías existentes; 52 misas cantadas que se celebraban todos los lunes por los fieles difuntos; 6 misas cantadas con gran solemnidad y con participación de todo el cabildo por encargo de la villa en distintas festividades; y 806 misas rezadas que se repartían entre los beneficiados. Por todas estas misas, incluyendo los cuatro reales diarios que pagaba el cabildo de Hondarribia por las misas conventuales, el cabildo de Placencia obtenía unos ingresos anuales de 12.367 reales de vellón, que correspondían a 2.061 reales para cada beneficiado si el reparto fuera igualitario.

Los Aniversarios, también llamados Memorias de Misas, constituían una carga perpetua que tenían su origen en legados píos<sup>220</sup> otorgados por medio de los testamentos, mediante los cuales el testador imponía la obligación perpetua de celebrar anualmente una liturgia específica en sufragio de su alma. Los Aniversarios solían ser "*un oficio de Difuntos con todo el Cabildo, misa cantada con Diaconos y dos responsos*"<sup>221</sup>. Al oficio de difuntos solía llamársele nocturno. Cuando no se especificaba la obligatoriedad del oficio de difuntos y de los responsos, a los Aniversarios se les denominaba simplemente Misas Perpetuas, ya que la única carga que imponía el testador era la celebración de una misa. Otros legados píos, mucho más modestos, únicamente imponían la celebración de un número determinado de misas, denominadas *misas manuales*.

La solemnidad de todas estas misas, tanto las manuales como las perpetuas o los Aniversarios dependía de lo que hubiera estipulado el instituyente y de los capitales que hubiera destinado al efecto. El estipendio que debía destinarse para estas celebraciones variaba según la solemnidad de las mismas y estaba también en función de si el instituyente había señalado día y hora determinados para su celebración, o si había impuesto una iglesia o altar específicos.

En ocasiones el testador que dejaba entre sus últimas voluntades algún legado pío, se limitaba a disponer que sus legatarios o sus herederos se hicieran cargo del pago de los estipendios a quien hubiera de levantar las cargas en las que consistía su legado: "*asi sucede con las quatro Memorias, ó Aniversarios, que en aquella Iglesia fundó María Ortiz de Churruca en virtud de su testamento que otorgó en 25 de Diciembre de 1653 ante Juan Ernizqueta, mandando, que los herederos de su Casa de Calebarren, pagasen anualmente al cabildo el correspondiente estipendio*"<sup>222</sup>. En estos casos, aunque el control económico del legado quedaba fuera de la

<sup>219</sup> ACC, Secretaría del Tribunal, 17/795/20.

<sup>220</sup> "*Un legado es un acto de liberalidad del testador a cargo de la herencia y a favor de un legatario*". Enciclopedia de Historia de España dirigida por Miguel Artola, Diccionario temático, Madrid, Alianza, 1995, p. 724. Los legados tuvieron su origen en el derecho romano, pero la recepción del ius commune operada en las Partidas trajo consigo la recuperación del legado bajo la denominación de manda: "*manda es una manera de donación que dexa el testador en su testamento, o en cobdillo a alguno por amor de Dios, o de su anima, o por fazer algo aquel a quien dexa la manda*" (6, 9, 1).

<sup>221</sup> ACC, Secretaría del Tribunal, 17/795/20, 12.

<sup>222</sup> ACC, Secretaría del Tribunal, 17/795/20, 33.

jurisdicción eclesiástica, el cumplimiento de las cargas impuestas por el testador quedaba bajo la vigilancia y supervisión de la Iglesia.

No obstante, en Placencia como en muchos otros sitios, la mayor parte de las veces, los testadores, a fin de garantizar la perpetuidad de estos legados, realizaban una fundación o expresaban su voluntad de que se hiciera ésta. Éstas eran las llamadas fundaciones piadosas o pías fundaciones<sup>223</sup>, por medio de las cuales se asignaba un capital como principal, cuyas rentas se destinaban al cumplimiento de los fines, de carácter religioso o caritativo, propuestos por la propia fundación. Los bienes que constituían el capital de la fundación se entregaban a la Iglesia para que sus rentas totales o parciales fueran destinadas al levantamiento de las cargas religiosas impuestas por el fundador.

Los capitales procedentes de estas fundaciones pasaban a engrosar el patrimonio de la Iglesia y eran invertidos en propiedades y, más comúnmente, en censos. De esta forma la Iglesia de Placencia, al igual que en muchos otros lugares, ejerció durante mucho tiempo un papel de gran relevancia como institución financiera. Todas las fundaciones se registraban en las tablas de fundación y la supervisión del cumplimiento de sus cargas se llevaba a cabo por medio de anotaciones en los libros de cumplimiento de cargas.

En Placencia existían también a finales del siglo XVIII varias capellanías, de las cuales, al menos dos, habían sido fundadas en la segunda mitad del siglo XVIII por naturales de la villa que fallecieron en América. Las capellanías eran fundaciones piadosas con una característica importante que las distinguía del resto. En las demás fundaciones, el capital que dejaba el fundador garantizaba unas rentas suficientes para el cumplimiento de las cargas espirituales establecidas. En el caso de las capellanías, además del cumplimiento de las cargas, se pretendía asegurar unas rentas que permitieran mantener a un capellán y, en el caso de las eclesiásticas y colativas, que garantizaran la congrua suficiente para la creación de un beneficio eclesiástico perpetuo.

Las capellanías eran fundaciones mucho más complejas y suponían una mayor intervención por parte de los laicos en la Iglesia. Dado que éstas eran instituciones con afán de perdurabilidad, dotadas de capitales importantes y rentas sustanciosas, en las que se disponían, a veces, complejos sistemas sucesorios, lo habitual era la creación de un patronato que se ocupaba de la administración de los bienes, de las rentas que éstos producían y de la presentación o elección de los sucesores en las

---

<sup>223</sup> "Son los bienes temporales dados en cualquier forma a alguna persona moral eclesiástica, con la carga perpetua o por largo tiempo, de con las rentas anuales, decir algunas misas o celebrar otras funciones eclesiásticas señaladas o practicar determinadas obras piadosas o de caridad (cánones 1544-1551). La disposición ha de hacerse a favor de una persona moral eclesiástica, iglesia, parroquia, convento, orden, congregación, etc. Si se hace a favor de un sacerdote, entonces no hay fundación, sino fideicomiso (can. 1516) con la consecuencia de que los bienes no se hacen eclesiásticos y siguen con su carácter de laicales aunque sujetos a la ejecución y vigilancia de los Ordinarios. Igual ocurre si la causa pía se impone como una carga al heredero o legatario. En este caso, tratándose de misas, se da la figura de lo que el Códex llama misas manuales, y en nuestro Derecho histórico memorias de misas". CÁRDENAS, Luis, "Fundación", en MASCARENAS, Carlos E. (dir.), *Nueva enciclopedia jurídica*, Barcelona, F. Seix, 1978.

mismas, aunque la existencia del patronato no era imprescindible, ya que, aunque era menos frecuente, también existían capellanías de derecho eclesiástico común y de libre colación. En las capellanías familiares lo normal era que el fundador estableciera un patronato como forma de garantizar los intereses de la familia.

Las capellanías eran frecuentemente una fuente de ingresos extraordinarios para algunos de los beneficiados del cabildo, ya que además de participar en el reparto de las cargas del cabildo, el beneficiado que poseía una capellanía contaba con las rentas de la propia capellanía. En otros casos el poseedor de una capellanía no era beneficiado del cabildo, aunque si la capellanía era colativa, ésta le servía como título de ordenación para poder ir haciendo la carrera eclesiástica y estar así en disposición de ocupar un beneficio en el momento en que se produjese una vacante. En tal caso, algunos al acceder a un beneficio parroquial renunciaban a la capellanía que quedaba vacante y pasaba, en el caso de tratarse de una capellanía familiar, a otro miembro de su misma familia. Otros, sin embargo, no renunciaban a la capellanía y disfrutaban simultáneamente de las rentas de ésta y de los ingresos procedentes del beneficio parroquial.

Cuando el poseedor de una capellanía no estaba ordenado *in sacris*, situación bastante habitual teniendo en cuenta que para acceder al disfrute de una capellanía únicamente se requería estar tonsurado, no estaba capacitado para levantar por sí mismo las cargas de la misma, generalmente la celebración de un determinado número de misas, por lo que debía pagar el correspondiente estipendio a un presbítero servidor que celebrase las misas. De esta forma algunos beneficiados obtenían unos ingresos adicionales.

Además de las misas y aniversarios procedentes de legados piadosos, el cabildo tenía la obligación de celebrar otras misas por encargos particulares o de la propia villa, así como un buen número de ellas que se celebraban en días y en altar señalados por encargo de las diversas cofradías<sup>224</sup> existentes en la villa. A partir de la documentación del expediente mencionado anteriormente sobre reducción de misas, se conoce la existencia en Placencia de las siguientes cofradías: la de la Vera Cruz, la de Nuestra Señora del Rosario, la de Nuestra Señora de la Concepción, la de Santa Rita, la de Santa Bárbara y la de San Martín. Las dos últimas de claras resonancias armeras y ferronas.

Las misas que no requerían la participación de todo el cabildo eran repartidas entre los beneficiados que podían celebrarlas, es decir, entre los que estuvieran ya ordenados de presbíteros. El reparto se solía hacer el primer día del año por medio de las *hijuelas*. Estas eran los documentos en los que se reseñaban las misas en las que debía tomar parte a lo largo del año cada uno de los beneficiados del cabildo

---

<sup>224</sup> Las cofradías eran asociaciones de fieles con fines religiosos o benéficos, organizadas bajo la jurisdicción de la Iglesia que se regían por constituciones u ordenanzas que debían ser aprobadas por el ordinario. Estas asociaciones solían tener un marcado carácter profesional, gremial o vecinal. Cfr. TERUEL, Manuel, *Vocabulario básico de historia de la Iglesia*, Barcelona, Crítica, 1993, p. 83.

parroquial, indicando el fundador de las mismas y el estipendio que les correspondía<sup>225</sup>. A la hijuela se llamaba también *cartel*<sup>226</sup>.

Los capitales procedentes de legados píos eran invertidos por la Iglesia en la compra de propiedades, pero más comúnmente en el otorgamiento de censos, con cuyas rentas se aseguraba la perpetuidad de las celebraciones expresadas en las últimas voluntades de los fundadores. Sin embargo la inflación y la pérdida de valor de los bienes raíces y censos, así como la minoración de sus rentas, daría lugar a conmutaciones y reducciones de misas y aniversarios, reuniéndose varios en uno sólo, reduciendo sus solemnidades, o pasando a celebrarse, en el caso de los Aniversarios, en años alternos<sup>227</sup>. La reducción legal de los réditos de los censos del cinco al tres por ciento tuvo como consecuencia la consiguiente reducción de las rentas y por tanto de las cantidades disponibles para el pago de los estipendios por la celebración de las misas<sup>228</sup>, con grave perjuicio para los ingresos de los miembros del cabildo y originando una importante disminución del culto<sup>229</sup>.

Las fundaciones de Aniversarios y Misas Perpetuas más rentables eran las que se habían hecho durante los últimos años del siglo XVIII. La mayor parte de las fundaciones tenían una antigüedad inferior a cien años, pues aunque había bastantes del siglo XVII, eran muchas las que habían caído en el olvido como consecuencia de la pérdida de los documentos de fundación, así como por haber

---

<sup>225</sup> "en las Hijuelas, que se formaron, y repartieron á los cinco Beneficios de esta Parroquial el año pasado de 1743 el primer día de enero, se aplicaron á cada uno por razón de misas cantadas de antiguas fundaciones á noventa y quatro rs., treinta y un mrs. ... y que á cada uno de los Beneficiados se expresa en dicha hijuela el Fundador, por quien ha de celebrar las misas". ACC, Secretaría del Tribunal, 17/795/20, 17.

<sup>226</sup> "cuios reditos debian invertirse, y se invierten en misas rezadas de Domingo Espilla, M<sup>a</sup> Magna Aguirre, D<sup>a</sup> Ursula de Arteaga, las hermanas de Espilla, y Pedro de Arreguia; y pertenecian al cartel, ó Hijuela, que haora tiene Barrutia, cinqüenta y nueve rs., y al de los medio-Beneficiados siete rs". ACC, Secretaría del Tribunal, 17/795/20, 37.

<sup>227</sup> "que con atención a que algunos censos se impusieron quando los censos rendían el cinco por ciento, con la disposición posterior de tres por ciento se minoraron asi los redituados, como las obligaciones, y que con esta consideración este Ilustre Cabildo celebra los Aniversarios que quepan al estipendio de dos ducados, suspendiendo un año los de los que se dotaron con un principal, cuio redito es necesario duplicarse para que se completen los repetidos dos ducados, y que un año celebra sobre ciento treinta y cinco; y otro doscientos". ACC, 17/795/20.

<sup>228</sup> "Los mas de los Aniversarios antiguos se fundaron con la principalidad de quarenta ducados; estos puestos a censo producian dos al año, á causa de que rendían el cinco por ciento; se promulgó la ley, de que los censos no produxesen mas que el tres por ciento, y de consiguiente bajó quasi la mitad el redituado". ACC, 17/795/20, 33.

En efecto, la Pragmática de 12 de Febrero de 1705, teniendo en cuenta "la calamidad de los tiempos" y las peticiones e instancias de villas y lugares, mandaba reducir, en los Reinos de Castilla y León, al tres por ciento, es decir, al precio de treinta y tres mil y un tercio al millar, los réditos de los censos que hasta entonces habían sido del cinco por ciento, o al precio de veinte mil maravedís al millar. No sólo se fijaban los réditos de los censos que se hicieran en adelante, sino que los existentes deberían quedar reducidos a dicho tres por ciento. Nov. Recop., Ley VIII, Tit. XV, Lib. X. En el Reino de Aragón se haría lo mismo por Pragmática de 6 de Julio de 1750. Nov. Recop., Ley IX, Tit. XV, Lib. X.

<sup>229</sup> Las consecuencias que las citadas pragmáticas por las que se redujeron los réditos de los censos tuvieron en la disminución del culto son mencionadas por J. M. Puigvert en el estudio que realizó de la consuetud de la parroquia catalana de Riudellots de la Selva. PUIGVERT I SOLÀ, J. M., *Una parròquia catalana del segle XVIII a través de la seva consuetud (Riudellots de la Selva)*, Barcelona, 1986, pp. 135-136.

sido objeto de la reducción de sus cargas. No obstante, todavía subsistían a finales del siglo XVIII varias fundaciones muy antiguas y de muy corto estipendio<sup>230</sup>; lo que motivó la petición que en 1793 hizo el cabildo para la reducción de las misas y aniversarios con el fin de ajustar el número de ellas a las rentas obtenidas para su estipendio<sup>231</sup>.

---

<sup>230</sup> "algunos de ellos son de haora siglo y medio". ACC, Secretaría del Tribunal, 17/795/20, 33.

<sup>231</sup> El Concilio de Trento ya preveía los problemas derivados del excesivo número de legados píos consistentes en misas y aniversarios, y trató de solucionarlos dando atribuciones a los obispos para que tomaran las medidas que fueran necesarias para ajustar su celebración a las posibilidades de cada iglesia, sin perjuicio de la voluntad de los testadores y del culto divino: "*Donde es excesivo el número de misas que deban celebrarse, den los Obispos, abades y generales de religiones, las providencias que juzgaren ser más convenientes. Ocurre muchas veces en algunas iglesias, o ser tantas las misas que tienen obligación de celebrar por varios legados de difuntos, que no se les puede dar cumplimiento en cada uno de los días que determinaron los testadores; o ser tan corta la limosna asignada por celebrarlas, que con dificultad se encuentra quien quiera sujetarse a esta obligación; por cuya causa queda sin efecto la piadosa voluntad de los testadores, y se da ocasión de que graven su conciencia las personas a quienes pertenece el cumplimiento...* Y deseando el santo Concilio que se cumplan estos legados para usos píos, cuanto más plena y útilmente se puede; da facultad a los Obispos para que en su sínodo diocesano, así como a los abades y generales de las religiones en sus capítulos generales, puedan, tomando antes diligentes informes sobre la materia, determinar según su conciencia, respecto de las iglesias expresadas que conocieren tener necesidad de esta resolución, cuanto les pareciere más conveniente al honor y culto de Dios, y a la utilidad de las iglesias; con la circunstancia no obstante, de que siempre se haga conmemoración de los difuntos que destinaron aquellos legados a usos píos por la salvación de sus almas". Concilio de Trento, Sesión XXV, Decreto sobre la Reforma, Capítulo IV.



## Un seguro para el alma: legados píos y capellanías, el precio del descanso eterno.

*...temiéndome de la muerte que es cosa natural a toda criatura viviente, deseando poner mi Alma en Carrera de Salvación, hago y ordeno este mi testamento en la forma y manera siguiente...*<sup>232</sup>

### Juan Antonio de Azcarate. El fundador de la capellanía.

En agosto de 1772, en la lejana ciudad de Guadalajara de Indias, en el reino de Nueva Galicia<sup>233</sup>, Juan Antonio de Azcarate, un guipuzcoano, natural de la industriosa villa de Placencia, redactaba su segunda memoria testamentaria, en la que expresaba su voluntad, entre otras cosas, de fundar una capellanía en su villa natal<sup>234</sup>.

Juan Antonio de Azcarate, que había pasado la mayor parte de su vida en América, cuando vio cerca la hora de su muerte, trató de perpetuar su memoria en su tierra natal, en su patria como él mismo dice, destinando una parte de sus riquezas a conseguir el descanso eterno de su alma, la de sus padres, e incluso la de aquellos a quienes *"yo les hice daño quando mancebo en robarles las frutas y otras trabesuras"*<sup>235</sup>. Por este medio lograría rescatar su propia alma del purgatorio

---

<sup>232</sup> Del testamento de Juan Perez de Eguilleor, presbitero, Beneficiado de la iglesia de San Bartolomé de la villa vizcaína de Villaro, 16 de julio de 1660. AFB, Fondos municipales, AREATZA 0012/008, fol. 25vº.

<sup>233</sup> Guadalajara, en la actualidad capital del estado de Jalisco, se encuentra situada a 1500 metros sobre el nivel del mar en el occidente del territorio mexicano. Tras varios cambios de ubicación de la primera villa fundada por Juan de Oñate con el nombre de Guadalajara en honor del conquistador Nuño de Beltrán de Guzmán, natural de la Guadalajara peninsular, ésta se asentó definitivamente en su actual emplazamiento hacia 1542, con el título de ciudad otorgado por Carlos V. Poco después, con la autorización del papa Paulo III, se convirtió en sede del obispado de Nueva Galicia, y en 1560 se estableció en ella la Audiencia, convirtiéndose en la capital del Reino de Nueva Galicia que llegó a comprender lo que hoy es Jalisco, Nayarit, Aguascalientes, Zacatecas parte de Colima y San Luis Potosí.

<sup>234</sup> Esta segunda memoria revocaba expresamente la primera, que había hecho en el año 1765, *"por haberse aumentado mi caudal, segun parece en el valance de la tienda*. Una Memoria Testamentaria es un documento privado, sellado o no, en que el testador consigna varias disposiciones, por separado del testamento, mandando que se tengan como parte de éste. En Castilla, las memorias testamentarias no estaban reconocidas ni reguladas por la ley, sin embargo, fueron introducidas por la práctica, y la costumbre las hizo de uso general, aunque eran consideradas como un medio de disponer arriesgado y sujeto a fraudes. En Aragón estaban reguladas por el Fuero. Cfr. Enciclopedia Ilustrada ESPASA. En este caso no parece existir otro documento o testamento, ya que no se hace mención a él en ningún momento. La memoria en la que Juan Antonio de Azcarate expresa sus últimas voluntades en cuanto a la distribución de sus bienes aparece dada por testimonio del escribano público y Real de Guadalajara, Ignacio de Sierra, por lo que se trataría de un documento perfectamente legal equivalente a un testamento.

<sup>235</sup> En su memoria testamentaria dejaba 4.000 pesos fuertes para la fundación de una capellanía en su villa natal, así como otros pequeños legados: uno de 80 pesos para sufragios *"por la almas de aquellos a quienes yo les hice daño quando mancebo en robarles las frutas"*; y otro de 20 pesos para

limpiando sus culpas pasadas y realizando una acción que creía que le sería tenida en cuenta en el más allá. Al mismo tiempo aseguraba su patrimonio en manos de su familia permitiendo que algunos miembros de ella tuviesen los medios necesarios para introducirse en la carrera eclesiástica, perpetuaba su memoria y la de sus padres, y ayudaba a la Iglesia con unas rentas que favorecían el culto y las atenciones pastorales, como la celebración de misas y la atención al confesionario *"para el bien y consuelo de sus compatriotas"*.

Lo que probablemente no podía imaginar era que sus legados serían objeto de la ambición de algunos de los miembros de su familia y la causa de varios pleitos, especialmente de uno que tuvo ocupados durante largos años a los tribunales civiles y eclesiásticos, y en el que intervinieron el obispo de Calahorra, la Cámara de Castilla, el Consejo de Estado y el propio rey Fernando VII.

La institución del mayorazgo, las actividades industriales y mercantiles y la emigración constituían los mecanismos básicos en los que se apoyaba la estrategia de una sociedad cerrada para hacer frente a la escasez de sus recursos y al crecimiento demográfico. América, la navegación, el estamento eclesiástico y la administración de la Monarquía serían destinos casi obligados para los segundones de las familias guipuzcoanas. Fueron numerosos los guipuzcoanos que se dirigieron a América durante los siglos XVII y XVIII. A pesar de que generalmente se admiten como causas de la emigración vasca, las tres mencionadas: escasez de recursos, crecimiento demográfico e institución del mayorazgo, las tres estrechamente relacionadas entre sí, algunos autores consideran que el crecimiento económico, vinculado no sólo al comercio y a la siderurgia sino también al aumento de la productividad agraria relacionado con la extensión del cultivo del maíz, también pudo ser un factor de emigración, ya que una buena situación familiar permitiría financiar la emigración de algunos miembros de la familia en buenas condiciones de partida<sup>236</sup>.

Von Humboldt señalaba a comienzos del siglo XIX que *"Guipúzcoa es el caso que está demasiado poblada para que no tuviera que buscar su acomodo fuera todos los años una parte considerable de sus habitantes. Como los vascongados, en general, están acostumbrados a la laboriosidad y el orden, y también en su mayor parte tienen buena letra, se les busca por toda España en casas de comercio, y también en las oficinas reales se les admite de muy buena gana. Ninguna otra provincia cuenta relativamente con tantas personas de su vecindad en empleos del Estado de bajas y altas categorías. Otra parte van a América y muchos finalmente trabajan en el resto de España como artesanos o fabricantes"*<sup>237</sup>.

Refiriéndose a los vascos, a comienzos del siglo XVI, Andrés Navagero, embajador veneciano ante la corte del emperador Carlos V, decía: *"Salen mucho al mar por*

---

que se aplicasen en sufragios en la parroquia de la vecina villa de Elgoibar. AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/1, 46-47. (Apéndice 2, nº 1).

<sup>236</sup> Cfr. ARIZCUN CELA, A., *Economía y sociedad en un valle pirenaico de Antiguo Régimen. Baztán, 1600-1841*, Pamplona, Departamento de Educación y Cultura, 1988.

<sup>237</sup> VON HUMBOLDT, A., *Apuntaciones sobre un viaje por el País Vasco en primavera del año 1801*, San Sebastián, Auñamendi, 1975, p. 65

*tener muchos puertos y muchas naves construidas con poquísimo gasto, por la gran cantidad de robles y de hierro que poseen; por otra parte, la poca extensión de la región, y el gran número de gente que la habita, les obliga a salir fuera para ganarse la vida*<sup>238</sup>.

Juan Antonio de Azcarate fue bautizado en la iglesia de Placencia el día 20 de marzo de 1722<sup>239</sup>, siendo su padrino el alcalde de la villa José de Mendiola. Su padre, Pedro de Azcarate, natural de Angiozar<sup>240</sup>, era un segundón que tuvo que abandonar la casa solar de Gongueta<sup>241</sup>, de la que su madre, Graciana de Gongueta, era la dueña. Por línea paterna descendía del solar de Azcarate en Antzuola<sup>242</sup>. Juan Antonio era uno de tantos hidalgos guipuzcoanos carentes de fortuna. Entrar como criado al servicio de un comerciante era una de las opciones que tenía quien no heredaba un mayorazgo. Esto es lo que hizo, ya que en enero de 1742 le encontramos en Cádiz<sup>243</sup> como criado de un mercader avecindado allí, Agustín de Zavala, matriculado en el registro de cargadores a Indias, quien por aquellas fechas solicitaba licencia para embarcarse en el navío San Jorge con destino al puerto de Veracruz<sup>244</sup>.

---

<sup>238</sup> *Viaje a España del magnífico Señor Andrés Navajero*, Valencia, 1951, pp. 102-103; citado por URRUTIKOETXEA, J. "Movilidad poblacional en la Guipúzcoa del siglo XVIII", en *Boletín de estudios sobre historia de San Sebastián*, 1982-1983, pp. 569-602.

<sup>239</sup> Su partida de bautismo en: DEAH, Iglesia de Placencia de las Armas. Libro 4º de bautizados, folio 79. Traslado en AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/1, 34rº.

<sup>240</sup> Angiozar a finales del siglo XVIII pertenecía a la jurisdicción de la villa de Elgeta, a muy poca distancia de Bergara y de Placencia. Se componía de 16 casas alrededor de la parroquia y de 66 caseríos dispersos. La parroquia dedicada a San Miguel era de patronato, siendo su patrono el duque de Granada de Ega, quien presentaba al cura y a los tres beneficiados de la misma. *Diccionario Geográfico-Histórico de España*, Madrid, Real Academia de la Historia, 1802, Sección I, Tomo I.

<sup>241</sup> Sobre el origen del apellido Azcarate y sus conexiones con otros solares como el de Gongueta: GUERRA, Juan Carlos, *Ensayo de un padrón histórico de Guipúzcoa según el orden de sus familias pobladoras*, San Sebastián, 1928, pp. 102-103.

<sup>242</sup> Villa próxima a Bergara, perteneciente también al obispado de Calahorra, que contaba a finales del siglo XVIII con 1200 habitantes repartidos en 7 barrios. Tenía en la misma época, dos parroquias, una posada y un hospital para pobres enfermos. *Diccionario Geográfico-Histórico de España*, Madrid, Real Academia de la Historia, 1802, Sección I, Tomo I. Probablemente fuera un pariente de Juan Antonio, Francisco Ignacio de Iraeta y Azcarate, natural de Antzuola y emigrado a Nueva España en 1732, a quien recientemente ha dedicado una monografía el historiador Stanley Stein: STEIN, Stanley, "Francisco Ignacio de Yraeta y Azcarate, almacenero de la ciudad de México, 1732-1797. Un ensayo de microhistoria", *Historia Mexicana*, L, 3 (2001), pp. 459-512.

<sup>243</sup> Cádiz, como cabecera del monopolio comercial americano desde 1717, era un destino obligado para quienes pretendían llevar a cabo actividades comerciales y para quienes su destino era la emigración a América. La presencia de vascongados en Cádiz durante el siglo XVIII ha sido estudiada por Victoria E. Martínez del Cerro en un reciente artículo, en el que se analizan algunas de las relaciones de solidaridad familiar sobre las que gravitaban este tipo de movimientos migratorios, afirmando que "no era extraño que el hombre de negocios establecido en Cádiz, solicitara a sus parientes o paisanos que enviasen a un joven, con el objeto de formarlo y tener ayuda en sus negocios". MARTÍNEZ DEL CERRO, Victoria E., "Movimientos migratorios internos: Hombres de negocios navarros y vascos en el Cádiz del siglo XVIII", en ÁLVAREZ GILA, O. y ANGULO MORALES, A. (eds.), *Las migraciones vascas en perspectiva histórica (siglos XVI-XX)*, Bilbao, UPV-EHU, 2002, pp. 73-92.

<sup>244</sup> 10 de enero de 1742: Expediente de información y licencia de pasajero a Indias de Agustín de Zavala, mercader, vecino de Cádiz, con su criado Juan Antonio Azcarate, natural de Placencia, a Nueva España. AGI, Contratación, 5485,N.2,R.1.

Agustín de Zavala solicitaba licencia para embarcar en el navío San Jorge, con el fin de comerciar con "*diferentes mercaderías, que de mi cuenta y a mi consignación tengo en él cargadas*"<sup>245</sup>. En su petición solicitaba también el correspondiente permiso para embarcar con él a un criado: "*para cuyo manejo, despacho y asistencia de mi persona necesito llevar en mi Compañía un criado, y a este fin propongo a Juan Antonio de Azcarate de diez y ocho años natural de la villa de Placencia en la Provincia de Guipuzcoa, Alto, delgado y Blanco, soltero natural de estos Reynos, y de los no prohibidos a pasar a los de Indias, lo que me consta y así lo Juro, y me obligo a restituirlo a buelta de mi viaje; Y respecto de ser soltero ofresco justificarlo*"<sup>246</sup>. No era tan fácil embarcar para las Indias. Había que ser, al menos, blanco y soltero. Además quien solicitaba el permiso para embarcar a un criado suyo se comprometía expresamente a restituirlo a la península. En el caso de Juan Antonio de Azcarate lo más probable es que esto no ocurriera, ya que no volvemos a tener noticias suyas hasta el momento de la redacción de su testamento y su posterior fallecimiento en la ciudad de Guadalajara, en el reino de Nueva Galicia.

Así pues, Juan Antonio de Azcarate se convirtió en un "indiano"<sup>247</sup> como tantos otros, pero que nunca regresó a su patria. El hecho de no regresar, sin embargo, no le impidió tener presente a su familia y a sus compatriotas en sus últimas voluntades. El interés de los enriquecidos indianos por perpetuar su memoria y la de su familia en su patria de origen fue durante mucho tiempo una motivación de primer orden para la fundación de numerosas obras pías. La fundación de una capellanía constituía el medio más eficaz para vincular patrimonios procedentes de los beneficios del comercio. Mientras que los mayorazgos eran constituidos por los grandes propietarios con bienes raíces, las capellanías eran en muchas ocasiones una especie de mayorazgos para comerciantes y pequeños propietarios, o para grandes propietarios que deseaban vincular una pequeña parte de sus bienes en beneficio de determinadas ramas colaterales de sus familias. Además, tal como señala Elena Catalán, "*la carga religiosa que llevaba implícita toda capellanía, le*

---

<sup>245</sup> Ibídem, fol 1.

<sup>246</sup> Ibídem, fol. 2º. "*En 10 de Henero de 1742 se dio despacho de embarcacion al expresado D. Augustin de Zauala de edad de 33 años mediano de cuerpo, tigueño, con el criado del nombre edad, estado naturaleza, y señas que expresa el pedimento para qualquiera Nauio de los de rexistro que estan despachandose a la Veracruz...*".

<sup>247</sup> Se denominaba así a aquellos personajes de una extracción social baja o mediocre que, tras hacer una importante fortuna en América, regresaban a la comunidad de origen pretendiendo ubicarse en una posición social elevada, muy distinta a la posición de la que procedían. El regreso de estos personajes a sus comunidades de origen solía tener como consecuencia la creación de un nuevo linaje por medio de la adquisición de propiedades con las que constituir un mayorazgo. Estos indianos solían hacerse también, mediante compra o nueva construcción, con una vivienda que contribuyera a su prestigio, acorde con el lugar que pretendían ocupar en la sociedad. En relación con algunos casos de la relación entre indianos y arquitectura en la zona de influencia a la que se circunscribe este estudio: GIL MASSA, Jesús Ángel, "Vivienda y prestigio social: los indianos y sus moradas en la Bergara barroca", en *Ondare*, 19 (2000). Sobre la emigración a América, aunque estos estudios se centran fundamentalmente en el siglo XIX, ver: PILDAIN SALAZAR, M. Pilar, *Ir a América. La emigración vasca a América (Guipúzcoa 1840-1870)*, San Sebastián, Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones, 1984; y FERNÁNDEZ DE PINEDO, E., *La emigración vasca a América, siglos XIX y XX*, en colección "Cruzar el Charco", nº 6, Principado de Asturias, ediciones Jucar, Caja de Ahorros de Asturias, 1993.

*proporcionaba la protección de la autoridad eclesiástica*"<sup>248</sup>, asegurando de esta forma la perpetuidad de la vinculación y, por tanto, la perdurabilidad y el progreso del linaje. En definitiva, la fundación de capellanías y de otros tipos de obras pías se puede considerar como una forma más de incrementar las remesas indianas, es decir, las que los emigrantes a América aportaban a sus comunidades de origen.

La fundación de capellanías en la península por parte de indianos<sup>249</sup> fue una costumbre muy extendida, tal como lo atestiguan autores como Javier Ortiz de la Tabla Ducasse<sup>250</sup> y Gisela von Wobeser. Esta última afirma que "*entre los españoles radicados en Nueva España existió la costumbre de ubicar las capellanías en la península Ibérica, en sus lugares de origen, con el objeto de beneficiar a sus parientes pobres y de favorecer el culto en las iglesias de sus pueblos o villas*"<sup>251</sup>. Desde los primeros tiempos de la conquista de América, la costumbre generalizada de disponer legados y fundaciones de obras pías con destino a la Península por parte de numerosos emigrantes que fallecían al otro lado del Atlántico, hizo necesaria la adopción de determinadas medidas tendentes a que los vecinos de aquellas tierras legaran sus bienes a las iglesias, obras pías y personas pobres de ellas<sup>252</sup>.

A pesar de tan tempranas medidas, en los siglos XVII, XVIII e incluso en el XIX perduró dicha costumbre, en parte debido a que las fundaciones tenían entre sus finalidades la de realizar sufragios por las almas de los ascendientes de los fundadores, cuyas sepulturas se encontraban en el lugar de origen de los mismos. El deseo de perpetuar la memoria del fundador y de su familia sería también un factor importante a tener en cuenta en la etiología de estas fundaciones por parte de

---

<sup>248</sup> CATALÁN, Elena, *El precio del purgatorio. Los ingresos del clero vasco en la Edad Moderna*, Bilbao, UPV-EHU, 2000, p. 163.

<sup>249</sup> La importancia de la acumulación de riqueza que se llevó a cabo en las provincias vascas durante los siglos XVI, XVII y XVIII a través de los capitales procedentes de fuera del País, ha sido puesta de relieve por varios autores, que han destacado los efectos que los procesos de acumulación de capitales tuvieron sobre los cambios de las estructuras sociales. Uno más de los aspectos de esta acumulación de capitales lo constituyen las fundaciones piadosas que muchos indianos hacían en su tierra natal. Esta cuestión es abordada por ARAMBURU, J. M. y USÚNARIZ, J. M., "La emigración de navarros y guipuzcoanos hacia el Nuevo Mundo durante la Edad Moderna. Fuentes y estado de la cuestión", en EIRAS ROEL, A. (ed.), *La emigración española a Ultramar, 1492-1914* Madrid, Tabapress, 1991. La importancia de los capitales indianos en la configuración del sistema económico guipuzcoano del Antiguo Régimen es destacada por FERNÁNDEZ ALBALADEJO, P., *La crisis del Antiguo Régimen en Guipúzcoa, 1766-1833. Cambio económico e historia*, Madrid, Akal, 1975. Las fundaciones piadosas por parte de segundones emigrados son analizadas por ARPAL, Jesús, *La sociedad tradicional en el País Vasco (El estamento de los hidalgos en Guipúzcoa)*, San Sebastián, L. Haranburu, 1979.

<sup>250</sup> ORTIZ DE LA TABLA DUCASSE, Javier, *Emigración a Indias y fundación de capellanías en Guadalcanal. Siglos XVI y XVII*. Citado por VON WOBESER, Gisela, *Vida eterna y preocupaciones terrenales*, México, UNAM, 1999, p. 73.

<sup>251</sup> VON WOBESER, Gisela, *Vida eterna y preocupaciones terrenales*, México, UNAM, 1999, p. 73.

<sup>252</sup> Una de estas medidas sería la Real Cédula de 1 de mayo de 1543, en la que se exhortaba a los religiosos residentes en las Indias a que procurasen que los vecinos de aquellas tierras mandaran sus últimas voluntades a las Iglesias, lugares píos y personas pobres de ellas. MALDONADO, J., *Herencias en favor del alma en el derecho español*, Madrid, Revista de Derecho Privado, 1944, p. 141.

indianos en sus poblaciones de origen<sup>253</sup>. De esta forma se conseguía una importante reversión de capitales hacia las comunidades de origen de los fundadores<sup>254</sup>.

Un motivo importante que induciría a numerosos indianos a fundar capellanías, es el apuntado por Nora L. Siegrist de Gentile y Oscar Álvarez Gila<sup>255</sup>. Estos investigadores han estudiado las pautas de comportamiento de los vascos emigrados a América al encontrarse con un régimen sucesorio diferente del que regía en sus comunidades de origen. Dado que los sistemas de herencia tenían un papel clave en la configuración de las sociedades y especialmente en los sistema de reproducción social, los vascos americanos se vieron abocados a diseñar sus propias estrategias tendentes a evitar la desmembración del capital familiar. El derecho castellano, imperante en la América hispana, restringía la libertad de testar característica de los sistemas jurídicos vascongados<sup>256</sup>, ya que obligaba a respetar las legítimas de los sucesores, aunque con las excepciones del tercio de mejora y el quinto de libre disposición. La fundación de capellanías, con el quinto de libre disposición, era uno de los pocos medios que estaban a su alcance para la vinculación de bienes hereditarios.

Al sentir próximo el fin de sus días, Juan Antonio de Azcarate, como tantos otros en todas las épocas, decidió dejar constancia de sus últimas voluntades. El testamento, durante la Edad Moderna se había convertido en un elemento que, además de ser el instrumento para regular la herencia y el destino de los bienes del testador, formaba parte de una compleja estrategia dirigida a la salvación del alma. Desde el punto de

---

<sup>253</sup> Según consta en el legajo 444 del Archivo Diocesano de Calahorra, La Calzada y Logroño, en el año 1838, todavía el general Juan de Urdanegui, marqués de Villafuerte, caballero del Orden de Santiago, vecino de Lima en el reino del Perú, heredero de los bienes del capitán Diego Fernández del Campo, también vecino de Lima y natural de Lejarzu, en Bizkaia, fundó una capellanía en la capilla de la Concepción de la iglesia de Lejarzu e hizo donación de bienes para hacer sacristía, campanario y retablo dorado, así como para dotarla y alhajarla de los ornamentos necesarios. Este caso es citado por Ildefonso Rodríguez R. Lama, canónigo archivero, en su *Guía-Inventario del archivo diocesano de Calahorra, La Calzada y Logroño. Capellanías y Órdenes sagradas*, Calahorra, 1982.

<sup>254</sup> La relación entre los capitales indianos y las fundaciones piadosas en la Península ha sido estudiada por varios autores, pudiéndose destacar los siguientes trabajos: GONZÁLEZ SÁNCHEZ, C. A., *Dineros de ventura. La varia fortuna de la emigración a Indias (siglos XVI-XVII)*, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1995; ESPINOSA MORO, M<sup>a</sup> J., "Fundación de capellanías y otros destinos de las rentas de oro y plata enviadas por zamoranos residentes en Indias. Siglos XVI-XVII", en *Anuario de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo*, 1989-1990, pp. 543-614 y 483-546; y GARCÍA-ABÁSULO GONZÁLEZ, A., "Inversiones indianas en Córdoba. Capellanías y patronatos como entidades financieras", en *Actas de las II Jornadas de Andalucía y América*, I, Sevilla, 1983, pp. 427-453.

<sup>255</sup> SIEGRIST DE GENTILE, Nora L. y ÁLVAREZ GILA, Oscar, "Herencias e institución de legados en sucesiones vascas en Buenos Aires, 1750-1845", en *Vasconia*, 28, San Sebastián, Eusko Ikaskuntza (1999), pp. 249-259.

<sup>256</sup> La ley XI del título XX del Fuero de Bizkaia, comienza con un significativo epígrafe: "Como los Padres pueden dexar su hacienda á uno de sus hijos, apartando á los otros con alguna Tierra...". Más adelante, en el texto de la ley se confirma la libertad de testar estableciendo que "qualquier Hombre, ó Muger, que oviere hijos de legitimo Matrimonio, pueda dar, assi en vida, como en el articulo de la muerte á uno de sus Hijos, ó Hijas legitimos ... todos sus bienes, muebles, y rayzes, apartando con algun tanto de tierra, poco, ó mucho á los otros Hijos, ó Hijas, y descendientes...".

vista de Anastasio Alemán<sup>257</sup> el testamento sería el elemento indispensable para lo que él, junto con Antonio Peñafiel<sup>258</sup>, denominan la “buena muerte”. Sin embargo, la costumbre de hacer donaciones a la iglesia y dejar legados piadosos para el sufragio de las almas procedía de tiempos muy antiguos, pues ya en la Alta Edad Media había comenzado a destinarse a la Iglesia de forma exclusiva la cuota de libre disposición<sup>259</sup> establecida por el derecho visigodo, e incluso en el propio Fuero Juzgo se mencionan las donaciones a la Iglesia para la redención de las almas<sup>260</sup>.

Cuando Juan Antonio de Azcarate, en agosto del año 1772, manifestaba sus últimas voluntades por medio de una memoria testamentaria, estableciendo su deseo de fundar una capellanía, expresaba unas preocupaciones que, aparentemente al menos, eran fundamentalmente de tipo espiritual y religioso, aunque otras motivaciones, como la perpetuación de su memoria y la de sus padres, y el futuro de los miembros de su familia, también estuvieran presentes. La fundación de una capellanía familiar o de sangre<sup>261</sup> era al mismo tiempo una forma de herencia material, ya que se vinculaba un patrimonio en el seno de la propia familia, y una forma de herencia inmaterial, puesto que las capellanías constituían un signo de ascenso social, y otorgaban un prestigio que se transmitía por herencia dentro de la familia. Así pues la fundación de una capellanía cumplía varias funciones. Además de asegurar el eterno descanso del fundador, era un seguro que evitaba la dispersión del patrimonio del fundador, garantizando su reproducción en el seno de la misma familia; formaba parte de una compleja estrategia orientada a la cohesión familiar por medio del prestigio que se conseguía con ella; y a través del patronato y de su vinculación con la Iglesia, se convertía en un importante instrumento de control social. La integración social y el reforzamiento de los mecanismos de solidaridad era una de las principales funciones de la Iglesia, por lo que ésta sería una pieza fundamental para el control social por parte de las elites de poder.

El miedo a la muerte, pero sobre todo, el miedo al castigo eterno, ha sido a lo largo de la historia un componente fundamental en las decisiones relacionadas con las

---

<sup>257</sup> ALEMÁN, A., *Actitudes colectivas ante la muerte en Murcia durante el siglo XVIII*, Murcia, 1992, p. 167.

<sup>258</sup> PEÑAFIEL, A., *Testamento y buena muerte (Un estudio de mentalidades en la Murcia del siglo XVIII)*, Murcia, Academia Alfonso X el Sabio, 1987.

<sup>259</sup> El quinto de libre disposición, cuyo origen se encuentra en la legislación visigoda, fue adoptado con excepciones por la mayor parte del derecho sucesorio de los reinos hispanos como una limitación de la libertad de disponer en beneficio de los legítimos herederos. Esta cuota voluntaria se transformaría posteriormente en algunos fueros locales en una cuota “pro anima” obligatoria. En relación con estas cuestiones, ver: MALDONADO, J., *Herencias en favor del alma en el Derecho español*, Madrid, Revista de Derecho Privado, 1944. El Fuero Nuevo de Bizkaia, en su título XX, ley XVIII, se ocupa también del quinto de libre disposición estableciendo la prohibición expresa de hacer donación alguna de los bienes raíces habiendo descendientes o ascendientes legítimos, pero permitiendo disponer del quinto de éstos solamente en el caso de que sea por el alma: “Y que de la raíz pueda disponer fasta el quinto por su alma, aunque aya los tales herederos legítimos, o profincos”.

<sup>260</sup> “Si nos somos tenudos de gualardonar a los que nos sirven, ¿quanto mas devemos dar las cosas terrenales por redemiento de nuestras almas, e guardar las que son dadas?”. Fuero Juzgo, libro V, tit. I, I.

<sup>261</sup> Se llamaban así, o de llamamiento de sangre, porque la sucesión en las mismas correspondía por voluntad del fundador al pariente del mismo que cumpliera las condiciones de grado y línea de descendencia establecidas en la fundación.

sucesiones y los testamentos. Tras una vida de intensa búsqueda de la satisfacción de las necesidades materiales, los hombres y las mujeres, en sus testamentos, se interesaban por el futuro de sus almas y por asegurarse el descanso eterno. Aunque a finales del siglo XVIII, la Ilustración y las “luces” habían introducido nuevos modelos de pensamiento, y éste había comenzado a liberarse de la tutela de la Iglesia, no sería fácil modificar determinados comportamientos y actitudes, especialmente aquellos relacionados con la muerte y con la trascendencia, ya que la Iglesia ejercía todavía un enorme poder de influencia y de control sobre las mentalidades y sobre las actitudes de una población para la que, especialmente en el ámbito hispano, la religión constituía en muchas ocasiones un signo de identidad. El arrepentimiento de última hora y el forzado desprendimiento material que impone la muerte seguía siendo a finales del siglo XVIII el origen de multitud de legados y de fundaciones piadosas.

Gracias a la existencia del purgatorio, incluso los pecadores más recalcitrantes, tras un más o menos largo periodo de purgación, podrían alcanzar la salvación eterna. Sin embargo, a pesar del tópico igualitarismo ante la muerte, el periodo de purgación no estaría únicamente en función de los pecados cometidos, sino que dependería de la capacidad de redención de los mismos por otros medios, tal como lo atestiguan la existencia de las indulgencias y de los sufragios por las almas de los difuntos. Estos medios tuvieron durante mucho tiempo un carácter fundamentalmente económico. De tal forma que, quienes podían permitírselo, invertían una parte de su patrimonio y de sus bienes en beneficio de su alma. Este aspecto comercial del descanso eterno sería uno de los principales medios de los que se valió la Iglesia para aumentar su patrimonio y para mantener a un elevado y creciente número de clérigos<sup>262</sup>.

Diversas circunstancias, principalmente la distancia entre el reino de Nueva Galicia y la pequeña villa guipuzcoana, nos han escatimado muchos detalles del testamento de Juan Antonio de Azcarate, gracias a los cuales habríamos podido conocer más de cerca los motivos que le llevaron a realizar la fundación de una capellanía. En los sucesivos traslados que se realizaron de la memoria testamentaria de Juan Antonio de Azcarate, tanto para la fundación de la capellanía que establece el fundador, como en los posteriores pleitos motivados por la sucesión en su posesión, tan sólo se recogieron las cláusulas en las que se disponían los legados piadosos, por lo que no podemos conocer su contenido completo.

A pesar de ello, la parte que conocemos nos descubre un documento breve y conciso, en el que se miman algunos pequeños detalles, y en el que se aprecia la escrupulosidad de su autor. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico tiene grandes lagunas y carece de la precisión que se puede observar en otros documentos similares de la época. Fue esta imprecisión la que daría lugar

---

<sup>262</sup> La costumbre de realizar donaciones a la Iglesia en sufragio de las almas de los difuntos era muy antigua y constituía uno de los principales medios por los que rápidamente aumentó el patrimonio eclesiástico. Se constata esta antigüedad en testimonios como el siguiente: “...*donamus pro anima de filio nostro Sancio Ennecones in Bizcaglia collazos et hereditates*”. Donación de D. Iñigo López y su esposa Doña Toda en sufragio del alma de su hijo D. Sancho Iñiguez a San Millán. Año de 1070. Becerros de San Millán, fol. 82 y 186; Llorente, *Noticias...*, tomo III, p. 403. Recogido por LABAYRU, Estanislao Jaime de, *Historia General del Señorío de Bizcaya*, tomo II, p. 771, Ed. Facsimil: Bilbao, La Gran Enciclopedia Vasca, 1967.

posteriormente a diversas interpretaciones, respondiendo a los diversos intereses de las partes implicadas. Formalmente, era de una gran simplicidad. Carecía casi totalmente de las habituales fórmulas expositivas de profesión de fe, así como de la también habitual retórica utilizada en tantos otros testamentos para expresar la aspiración al disfrute de la gloria eterna y a la salvación de las almas del purgatorio<sup>263</sup>.

En 1764, pocos años antes de que Juan Antonio de Azcarate redactara su testamento, Simón de Obiaga<sup>264</sup>, presbítero beneficiado que fue de la iglesia de Placencia, así como de la de la Santa Cruz de Madrid, además de secretario del Consejo Supremo de la Inquisición, hizo su testamento en el que disponía también la fundación de una capellanía. Este testamento constituye un ejemplo paradigmático de las fórmulas habitualmente utilizadas. En él se pueden observar los componentes más comunes de las mismas, tales como la declaración de fe en la Santísima Trinidad, la encomendación a la Virgen María y a los santos para que intercedan por su alma, la certeza de la muerte y su incierta hora, y el deseo de poner los medios necesarios para conseguir la salvación del alma y el disfrute de la gloria eterna:

*En el Nombre de Dios todo Poderoso Amen: Sepan quantos vieren esta publica escritura de testamento ultima y postrimera voluntad, como yo Don Simon de Obiaga Presvitero Beneficiado de las Iglesias Parroquiales de Santa Cruz de la coronada Villa de Madrid, y Santa María la Real de esta de Plazencia vecino de ella y secretario Jubilado del Consejo Supremo de Ynquisicion estando en sana salud y en mi Cabal Juicio y entendimiento natural, creiendo como firmemente creo y confieso el misterio de la Santisima Trinidad, Padre, hijo y Espiritu Santo, tres personas distintas y una exencia Dibina y todo lo demas que cree y confiesa nuestra Santa Madre Yglesia Catholica Apostolica Romaana devajo de cuia fe y crehencia he vivido y protesto vibir y morir, como catholico fiel christiano tomando por mi abogada e interzadora a la Santisima Señora reina de los Anjeles, María Santisima Madre de Dios y señora nuestra, al santo Anjel de mi Guarda, a San Simon de mi nombre y a todos los santos y santas de la Corte Celestial para que alcancen de Dios nuestro señor el perdon de mis culpas y pecados y llebe mi Alma a gozar de la Gloria eterna premio de los buenos; Y*

<sup>263</sup> Las fórmulas por las que se hacía profesión de fe y con las que se introducía la expresión de las últimas voluntades eran muy frecuentes sobre todo en los testamentos de los clérigos, y habían sido profusamente utilizadas durante el siglo XVII, decayendo en el siglo XVIII. Un ejemplo de estas expresiones nos los da, en la segunda mitad del siglo XVII, el testamento de Juan Pérez de Eguilleor, presbítero beneficiado de la iglesia parroquial de la villa vizcaína de Villaro: "*Sepan quantos esta carta de testamento ultima y postrimera voluntad vieren como yo el Licenciado Don Juan Perez de Eguilleor Cura y Beneficiado de la Iglesia de San Bartolome de esta villa de Villaro estando enfermo de una enfermedad grave que Dios nuestro Señor ha sido servido de me dar aunque sano en mi juicio y entendimiento natural y creyendo como firmemente creo en el Misterio de la Santisima Trinidad Padre Hijo y Espiritu Santo tres Personas y un solo Dios verdadero tomando por mi Abogada a la Virgen María y a los Santos y Santas de la Corte del Cielo temiendome de la muerte que es cosa natural a toda criatura viviente deseando poner mi Alma en Carrera de Salvacion hago y ordeno este mi testamento en la forma y manera siguiente= Primeramente encomiendo mi Alma a Dios que la crío y redimio con su preciosa sangre, y el cuerpo a la tierra de que fue tomado...*". AFB, Municipal, AREATZA 0012/008, fol. 25-31.

<sup>264</sup> Simón de Obiaga fundó una capellanía en la iglesia parroquial de Placencia, y además hizo un legado para la celebración de varias misas cantadas y otras rezadas en el mismo altar en el que las impuso posteriormente Azcarate, el de Jesús Nazareno. El testamento de Obiaga se encuentra parcialmente transcrito en el expediente del pleito que se inició en 1781 a consecuencia de la petición del primer poseedor de la capellanía fundada por Juan Antonio de Azcarate, José María de Aguirre, de que se redujeran las cargas de la misma sustituyendo las misas cantadas por rezadas. ACC, Secretaría del Tribunal, 17/795/24.

*temiendo de la muerte que es cosa cierta, y su ora incierta queriendo estar prebenido hago y hordenó este mi testamento en la forma siguiente=*

Contrastando con el testamento de su paisano, la memoria testamentaria de Juan Antonio de Azcarate, prescindía de las mencionadas fórmulas, y comenzaba suplicando a sus albaceas que se encargasen de ejecutar su voluntad tal como quedaba expresada en diversas cláusulas<sup>265</sup>. La voluntad de que se funde una capellanía en su villa natal se encontraba expresada en la primera cláusula. En ella, Juan Antonio de Azcarate, estableció la dotación asignada a la misma en un capital de 4.000 pesos fuertes, equivalentes a 80.000 reales, disponiendo que el capellán tuviese la obligación de decir una misa cantada todos los viernes del año, con diácono y subdiácono, y para que no hubiese dudas acerca de la solemnidad que deseaba para dichas misas dispuso que se celebrasen de la misma forma "*que se dice los sabados á Nuestra Señora del Rosario en dicha Parroquia*". Dispuso así mismo que las misas se celebrasen en el altar principal de la capilla de Jesús Nazareno de la iglesia parroquial de su villa natal.

Tal como se puede deducir de la definición que daba Álvarez y Gómez de la capellanía como una "*fundación perpetua hecha con la obligación aneja de cierto número de misas u otras cargas espirituales en iglesia determinada, que debe cumplir el obtentor en la forma y lugar prescritos por el instituyente*"<sup>266</sup>, los tres elementos básicos para la fundación de una capellanía: las cargas espirituales, el lugar en el que deben llevarse a cabo éstas y la dotación de un capital que se constituya como el principal que permita obtener una renta perpetua, quedaban claramente consignados. A la celebración de las misas se añaden otras obligaciones como la del rezo, todos los viernes tras la misa cantada, de un responso en la sepultura en la que estaban enterrados los padres del fundador, la participación los domingos y fiestas de guardar en la misa mayor y en vísperas, y la asistencia al confesonario "*para el bien y consuelo de sus compatriotas*"<sup>267</sup>.

Dejó encomendadas todas las cargas espirituales al capellán que fuere, pero cuando estableció la obligación del rezo de un responso, tras la misa cantada de los viernes, tuvo en cuenta la posibilidad de que no fuese el mismo capellán quien dijese la misa y, por tanto, el responso, encargando del mismo al capellán o a quien celebrase la misa. La eventualidad de que no fuera el propio capellán quien dijera las misas y por tanto quien asumiera el resto de las cargas espirituales, aconsejaría al fundador a encargar el rezo del responso al propio capellán o a quien celebrase la misa<sup>268</sup>.

Esta pequeña indicación, sin ninguna trascendencia aparente, sería uno de los caballos de batalla utilizados en los pleitos que tuvieron lugar posteriormente por quienes tenían interés en demostrar que la voluntad del fundador era la de fundar una capellanía laical y no eclesiástica. Sin embargo, esta indicación estaba

<sup>265</sup> "*Memoria de la distribución de mis bienes habidos y por haber para que mis Albaceas arreglados a esta memoria les suplico pido y ruego por el amor de Dios executen mi voluntad que es en la forma siguiente...*". AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/1, 46. (Apéndice 2, nº 1).

<sup>266</sup> ÁLVAREZ Y GÓMEZ, Mariano, *Manual de capellanías y pías memorias*, Vitoria, 1903, p. 9.

<sup>267</sup> AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/1, 46. (Apéndice 2, nº 1).

<sup>268</sup> "... y acabada la misa hechará el responso dicho capellan, ó el que la dijere en la sepultura que estan enterrados mis Padres". *Ibídem*, fol. 46.

plenamente justificada incluso tratándose de una capellanía eclesiástica, pues era muy frecuente en estas capellanías, que hasta que el titular de la misma obtenía el orden de presbítero, la celebración de las misas fuera encargada a cambio de un estipendio<sup>269</sup> a quien pudiera celebrarlas. Es lógico que esto fuera así, ya que las capellanías eclesiásticas eran beneficios eclesiásticos y como tales servían como título de ordenación<sup>270</sup>, por lo que era muy frecuente que se adjudicasen a jóvenes que no estaban ordenados como sacerdotes, para quienes el disfrute de un beneficio era la única forma que tenían de iniciar la carrera eclesiástica y de obtener las órdenes sagradas.

Otro de los aspectos esenciales que debían ser recogidos en la escritura de fundación de una capellanía era la forma de nombrar al capellán y el sistema que se debía seguir en la sucesión en la misma. Juan Antonio de Azcarate expresó claramente su voluntad de que la capellanía se adjudicase a su pariente más próximo, principiando por los descendientes de su única hermana Ana María. Juan Antonio ejercía de esta forma el papel de protector de la familia, que en la sociedad tradicional se asignaba a los segundones que habían conseguido establecer una red de relaciones que permitiera situar a otros segundones del mismo linaje<sup>271</sup>. Al igual

---

<sup>269</sup> Cantidad que se pagaba por cada misa al sacerdote al que se encargaba su celebración. En las capellanías era frecuente que se encargase la celebración de las misas a otro sacerdote, bien porque el capellán era un laico, en el caso de las capellanías merelegas o laicales, bien porque el capellán todavía no se había ordenado de presbítero, o bien porque no podía hacerse cargo personalmente de la celebración.

A finales del siglo XVIII, en la fundación de una capellanía en la anteiglesia de Deusto, el fundador establece que en caso de tener que encargar la celebración de las misas a otro sacerdote distinto del capellán se pague por ellas un estipendio de 8 reales: "*que no celebrandolas por si dicho Don Bernave Antonio, y los demas Capellanes, que por tiempo fueren, hayan de satisfacer al Sacerdote, que se las encomendaren ocho reales de vellon por el estipendio, y limosna de cada una de dichas misas*". AFB, Capellanías, 1/1/2.

<sup>270</sup> Según el Derecho Canónico, el título de ordenación es un requisito imprescindible para acceder a las órdenes mayores (c. 974).

"Se entiende por título de ordenación: El derecho a percibir una renta anual según la tasa determinada por el obispo para la honesta sustentación del clérigo. La Iglesia ha exigido siempre en una u otra forma el título de ordenación, a fin de que los clérigos no se vean precisados a mendigar o a ejercer oficios indecorosos a su estado con desdoro del sagrado ministerio". GÓMEZ-SALAZAR, F., Instituciones de Derecho Canónico, t. II, León, 1891, p. 561.

El Concilio de Trento (Ses. XXI, De Reformat., cap. II) previene que no se ordene a nadie sin que tenga título de ordenación, y siguiendo el espíritu del Concilio de Calcedonia, dispone (Ses. XXIII, De Reformat., cap. XVI) que ninguno sea ordenado en lo sucesivo, sin que se destine o adscriba a una iglesia o lugar pío, por cuya necesidad o utilidad se ha ordenado. Lo mismo fue prescrito por Inocencio XIII en su constitución Apostolici ministerii (13/5/1723), lo que hace sospechar que no se estaba respetando esta norma.

Según el canon 980: "*Título canónico es el de beneficio, y, en su defecto, el de patrimonio o pensión, y, a falta de éstos, el de servicio de la diócesis o el de misión, que obligan con juramento a perseverar en el servicio de la diócesis o misión, y tratándose de religiosos, el título de pobreza para los regulares, el de mesa común o de Congregación u otro parecido... El Obispo debe alimentar al clérigo a quien ordenó sin congrua*". POSTÍUS Y SALA, J., El Código Canónico aplicado a España, Madrid, 1926, p. 763.

<sup>271</sup> En relación con este papel asignado a los segundones es de gran valor la aportación realizada por Jesús Arpal, quien señala que "... el segundón, y especialmente el segundón eclesiástico aparece como responsable de la tutela de sus sobrinos; a parte de las sugerencias antropológicas con respecto al rol del tío materno y además de que aparezcan con titulación jurídica de 'tutores y curadores', se puede definir una norma muy significativa para el País Vasco: a través de los

que en el resto de disposiciones de su memoria testamentaria, ésta resultaba también extraordinariamente breve y escueta, lo que sería posteriormente la causa de los problemas de interpretación que ocasionaron diversos pleitos entre los aspirantes a la sucesión en la capellanía. Lo único que quedaba claro era que la capellanía que pretendía fundar era de las llamadas familiares o de sangre<sup>272</sup>, caracterizadas porque la sucesión en las mismas debía llevarse a cabo según el parentesco con el fundador.

Tanto las últimas voluntades de los fundadores de capellanías familiares como las propias escrituras de fundación solían contener complejas fórmulas que pretendían resolver cualquier tipo de problema sucesorio, dejando en manos del patrono la aplicación de las normas de sucesión y la resolución de los conflictos que se pudieran producir en la interpretación de las mismas. Lo más habitual solía ser establecer las líneas de sucesión, definiendo claramente las posibles alternativas ante el agotamiento de la línea principal, estableciendo las preferencias de las posibles líneas familiares, excluyendo o no a los hijos ilegítimos, prefiriendo a los primogénitos o no, o excluyendo o no a las mujeres, tanto para el disfrute como para la transmisión del derecho. Pero esto no se hacía siempre así, y el caso que nos ocupa es un ejemplo de ello.

Una vez fijado el capital que destinaba para la fundación, establecidas las cargas espirituales de la misma y quienes debían ser sus poseedores, Juan Antonio de Azcarate se ocupó de disponer quien debería ser el patrono de la misma. Quizá buscando en el poder de las instituciones locales un apoyo para su familia, o el aumento del prestigio de la fundación, dispuso que el patrono de la capellanía fuera el ayuntamiento de la villa de Placencia. El patrono era el responsable de hacer la presentación del candidato a ocupar una vacante en las capellanías y por tanto debía interpretar las reglas de sucesión impuestas por el fundador y resolver los conflictos entre los aspirantes en caso de duda.

El sistema de patronato de las capellanías estaba relacionado remotamente con las iglesias propias y con el régimen de patronato que aún estaba vigente en la mayor parte de las iglesias vizcaínas y en gran número de las guipuzcoanas a finales del siglo XVIII, y que continuó en vigor durante gran parte del siglo XIX. El patronato, heredero directo del sistema de iglesias propias altomedieval, había sido tolerado por la Iglesia como una práctica que permitía la participación de los laicos en la fundación, la dotación y el sostenimiento de muchas iglesias, pero que tenía su contrapartida, ya que dejaba en manos de éstos la presentación de los beneficios y la percepción de los diezmos, otorgándoles un inusitado poder sobre las estructuras

---

*segundones situados como funcionarios y especialmente como eclesiásticos se institucionalizará una pauta orientadora del comportamiento de sus descendientes de gran trascendencia para la dinámica de la sociedad vascongada y nacional...". ARPAL, Jesús, La sociedad tradicional en el País Vasco (El estamento de los hidalgos en Guipúzcoa), San Sebastián, L. Haranburu, 1979.*

<sup>272</sup> Era muy frecuente confundir, en muchas ocasiones de forma interesada, las capellanías familiares o de sangre con las capellanías laicales. Lo que definía a las capellanías familiares era el orden de sucesión establecido para las mismas, que se basaba en los diferentes grados de parentesco que hubiera dispuesto el fundador. Estas capellanías podían ser tanto colativas como laicales, ya que el hecho de ser de una u otra naturaleza no dependía de las reglas de sucesión establecidas por el fundador sino de si constituían o no beneficios eclesiásticos.

más básicas de la Iglesia. Al igual que ocurría con la fundación de iglesias y su dotación, la fundación de beneficios también daba lugar a un patronato. Dado que las capellanías, cuando eran eclesiásticas o colativas, consistían básicamente en la creación de un beneficio eclesiástico, llevaban consigo también el establecimiento de un régimen de patronato. Las capellanías laicales fueron una derivación de las eclesiásticas y, aunque en ellas no se creaba ningún beneficio, también se fundaban sujetas a un régimen de patronato, denominándoseles frecuentemente *patronatos de legos*<sup>273</sup>.

El patrono de una capellanía eclesiástica podía ser una persona cualquiera física o moral. Los fundadores disponían quién debía ser el patrono y establecían las reglas de sucesión del patronato en los casos en los que fuera necesario. Había capellanías cuyo patrono era el cabildo eclesiástico de la iglesia en la que se fundaba. En otros casos el patrono podía ser el cura de la iglesia o el beneficiado más antiguo. En ocasiones, tal como hizo Juan Antonio Azcarate, se elegía por patrono al ayuntamiento del lugar o de la villa en la que se fundaba la capellanía. Y a veces el fundador establecía un patronato mixto del que formaban parte el cabildo eclesiástico y el ayuntamiento. Sin embargo, lo más habitual, especialmente en las capellanías familiares, solía ser que el patronato siguiera también vinculado a la familia del fundador, normalmente en una línea diferente a la que se imponía para la propia capellanía. Para distinguir el sistema sucesorio en uno y otro caso se denominaba al patronato propiamente dicho como patronato activo y a la posesión de la capellanía como patronato pasivo, de donde derivaba una amplia tipología de capellanías en función del tipo de uno u otro. Había capellanías de patronato activo de sangre, de patronato pasivo de sangre, e incluso de patronato activo y pasivo de sangre. Las de patronato activo de sangre eran aquellas en las que el patronato estaba reservado a la familia del fundador en las líneas y según el régimen sucesorio establecido por éste. Las de patronato pasivo de sangre eran aquellas en las que, como la que fundó Juan Antonio Azcarate, el capellán debía ser un descendiente del fundador en la línea y con el régimen sucesorio que se hubiera fijado<sup>274</sup>.

---

<sup>273</sup> Se denomina así a las Capellanías laicales, es decir, aquellas capellanías en las que se prescindía de la autoridad eclesiástica en su fundación y que por lo tanto no constituyen un beneficio eclesiástico, ni sirven de título de ordenación. Según la definición de Gómez-Salazar, un *Patronato de Legos* era un "vínculo fundado con el gravamen de una obra pía". El mismo autor afirmaba que constituían "verdaderos mayorazgos vergonzantes, que se habían formado en fraude de la ley, llamándolos capellanías, cuando aquellas prohibieron fundar mayorazgos". GÓMEZ-SALAZAR, F., *Lecciones de disciplina eclesiástica*, Madrid, 1874, p. 453.

<sup>274</sup> Las capellanías de llamamiento de sangre pasivo hacían forzosa la presentación en el sujeto a quien correspondiese la sucesión según las reglas establecidas, por lo que el papel del patrono se limitaba a interpretar correctamente las reglas de sucesión establecidas en la fundación.



## Un patrimonio para la Iglesia.

*Porque los Fundadores de las Capellanías, no solamente en fundarlas atendieron á los Sufragios de los difuntos, sino tambien al aumento del Culto Divino...*  
(CSC-1698, tit. V, const. I)

La existencia de las capellanías permitía a la Iglesia, entre otras cosas, contar con un medio para la creación y dotación de beneficios eclesiásticos. La fundación de capellanías era una forma de incrementar el patrimonio de la Iglesia y el número de clérigos valiéndose de las donaciones que los fieles hacían a la Iglesia con el fin de redimir sus pecados y lograr la vida eterna. La recomendación, recogida en el evangelio de Lucas, hecha por Jesús al hombre rico que le preguntó lo que debía hacer para heredar la vida eterna: "vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y tendrás un tesoro en el cielo"<sup>275</sup>, hábilmente utilizada por la Iglesia, la convirtió desde los primeros siglos en la destinataria de las limosnas entregadas por los fieles para los pobres, dando lugar a un sistema de captación de legados con el que se fue acumulando el inmenso patrimonio de la Iglesia.

Por medio de legados píos y fundaciones piadosas la Iglesia incrementaba su patrimonio, que quedaba amortizado, y obtenía unas rentas con las cuales se mantenía un número creciente de clérigos<sup>276</sup>. De esta forma la presencia de la Iglesia en todos los ámbitos de la sociedad era cada vez más fuerte, presencia que era utilizada por quienes controlaban sus estructuras, a través de la institución del patronato fundamentalmente, y por medio de ellas se valían del enorme poder de influencia y de control social que tenía la religión y la Iglesia.

Al poco tiempo de morir Juan Antonio de Azcarate se pusieron en marcha los mecanismos necesarios para la fundación de la capellanía, su aprobación por el ordinario de Calahorra y La Calzada, y la colación del beneficio en la persona de José María de Aguirre, primer poseedor de la capellanía.

Instituida la capellanía por acto entre vivos o por causa de muerte debía otorgarse la correspondiente escritura de fundación, con inserción de las cláusulas necesarias según el derecho: nombre del fundador, capital asignado, objeto, y la designación del primer patrono y del primer capellán, y el método de sucesión en ambos oficios.

---

<sup>275</sup> Evangelio según San Lucas, 18, 22.

<sup>276</sup> Fueron muchas las voces que se levantaron, sobre todo durante el siglo XVIII, en contra de la costumbre de estas fundaciones, puesto que la amortización de los bienes en manos de la Iglesia, al igual que la que se producía con los mayorazgos, excluía de la participación en el mercado de una gran parte de los bienes raíces. Ilustrados como Campomanes, Cabarrús o Sempere clamaron contra cualquier forma de amortización. En su *Manifiesto Universal de los males envejecidos que España padece, y de las causas de que nacen, y remedios que a cada uno en su clase corresponde, sin que tenga nota de arbitrio; antes sí para que se conozca el daño de los que se establecieron...*, Francisco Máximo de Moya Torres y Velasco, culpaba a la continua fundación de capellanías de que "quede el público universal sin bienes fructíferos, lo que está resistiendo el Derecho Natural, y de Gentes, y el Divino". MOYA TORRES, F. *Manifiesto Universal de los males envejecidos...*, Madrid, 1727.

En 1775, al poco tiempo de morir Juan Antonio de Azcarate, se inició el proceso que concluyó en la fundación de la capellanía. Andrés de Aguirre, marido de Ana María de Azcarate y padre de José María, inició los trámites necesarios que se materializaron en las diligencias realizadas por el escribano de Placencia, Manuel Antonio de Larreategui.

Cuando el fundador de una capellanía expresaba en un testamento su voluntad de erigirla, el encargado de formalizar la fundación era el albacea, también conocido como cabezalero, comisario o testamentario. Lo habitual era nombrar uno o varios albaceas, como hizo Juan Antonio de Azcarate, pero si esto no ocurría, la obligación de realizar la fundación recaía sobre los herederos, el juez o incluso el obispo<sup>277</sup>. Según la doctrina jurídica actual el cargo de albacea es personalísimo, por lo que es indelegable. No obstante, lo que es indelegable es el cargo como tal, pues, según algunos autores, sería admisible el encargo, por razones técnicas o de conveniencia, de determinadas funciones del albacea a terceros<sup>278</sup>. Los albaceas nombrados por Juan Antonio de Azcarate, Juan Gárate y Bedoña, Andrés Ignacio Arzamendi y José Sarobe, al no poder realizar la fundación por sí mismos, el 6 de octubre de 1777, otorgaron, en la ciudad de Guadalajara de Indias, poder para la fundación de la capellanía en favor de José Andrés de Eguizabal, Ramón Elías de Junguitu y Francisco Ignacio de Ibarra. Los tres eran vecinos de Placencia; los dos primeros vinculados a la Real Fábrica de Armas, siendo el tercero beneficiado de su iglesia parroquial.

## **Las capellanías, instituciones financieras.**

Una vez remitido desde el otro lado del océano el testimonio de la memoria testamentaria y los 4.000 pesos de capital asignados para la fundación, era preciso invertir este capital de tal forma que produjera las rentas que debían constituir la dotación de la capellanía. Lo habitual solía ser imponer estos capitales a censo sobre fincas seguras. De esta manera, las capellanías, al igual que las otras clases de fundaciones pías eran el motivo por el que cuantiosos capitales eran vinculados y amortizados en manos de la Iglesia siendo invertidos en lo que constituiría el mayor sistema crediticio de la época. La Iglesia pasaba así a convertirse en una entidad financiera de primer orden<sup>279</sup>. En el caso de las capellanías, fueran laicales o eclesiásticas, se interponía siempre la figura del patrono en la administración y en la gestión de estos censos, pero, al menos en el caso de las eclesiásticas, siempre bajo la atenta vigilancia de la propia Iglesia.

---

<sup>277</sup> Cfr. LEVAGGI, Abelardo, *Las capellanías en la Argentina. Estudio histórico-jurídico*, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio L. Gioja, 1992.

<sup>278</sup> CASTÁN TOBEÑAS, José, *Derecho Civil español, común y foral*, Madrid, Reus, 1979, tomo VI, pp. 370.

<sup>279</sup> En relación con el papel que desempeñaron los capitales indianos en otros lugares desde este punto de vista de entidades de crédito, ver: GARCÍA-ABÁSULO GONZÁLEZ, A., "Inversiones indianas en Córdoba. Capellanías y patronatos como entidades financieras", en *Actas de las II Jornadas de Andalucía y América*, I, Sevilla, 1983, pp. 427-453.

Mediante el censo consignativo<sup>280</sup>, el censalista, en este caso el fundador de la capellanía, compraba al censatario, por una cantidad de dinero determinada, el derecho a percibir una renta asegurada por una propiedad cuyo dominio útil y directo quedaban en poder del censatario. Los censos consignativos constituyeron una forma de crédito que tuvo una gran importancia en la España moderna. Se trataba de un préstamo encubierto o camuflado bajo la forma de una compraventa en el que la renta cobrada por el censalista no tenía el carácter de interés por un préstamo. De esta forma resultó muy útil a la Iglesia, que condenaba doctrinalmente la usura y el préstamo con interés, permitiéndole obtener rentas de los capitales con los que se realizaban los distintos tipos de fundaciones piadosas<sup>281</sup>.

El primer paso que dio Francisco Ignacio de Ibarra, como poderhabiente de los testamentarios de Juan Antonio de Azcarate y comisionado para la inversión de los caudales "*remitidos para principalidad y renta de congrua de la capellanía*", para hacer la fundación de la capellanía, fue constituir un censo con el capital de 4.000 pesos que habían enviado desde Guadalajara los albaceas de Juan Antonio de Azcarate.

El 27 de noviembre de 1778, Margarita Antonia de Alava, y en su nombre José María de Lardizabal, otorgó un censo<sup>282</sup>, con la garantía de sus bienes y propiedades y de las de sus fiadores, a favor de la capellanía que mandó fundar Juan Antonio de Azcarate. Margarita Antonia de Alava era viuda del capitán Santiago de Aranguren y Areizaga<sup>283</sup>, y sus fiadores fueron dos personas de gran

---

<sup>280</sup> Para un mejor conocimiento de lo que supusieron los censos, en especial los consignativos, durante los siglos XVII-XIX, desde diversos puntos de vista, es de gran interés la consulta de SÁNCHEZ DE OCAÑA, Ramón, *Estudio crítico de las diversas especies de censos en la historia, en la legislación y en las costumbres*, Madrid, Imp. y Lit. de los Huérfanos, 1892. Para profundizar en las distintas especies de censos, sus características y su reglamentación a finales del siglo XVIII es fundamental la obra: FEBRERO, José, *Librería de escribanos e instrucción jurídica theorico práctica de principiantes. Parte Primera dividida en tres tomos. Trata de testamentos y contratos*, Madrid, Imprenta de la Viuda e Hijo de Marín, 1797.

<sup>281</sup> Contra la abundancia de censos otorgados a favor de instituciones vinculadas a la Iglesia, como las capellanías, también se levantó la voz de Moya Torres en su *Manifiesto...* anteriormente citado, afirmando que "*el mayor mal de los Censos consiste, en que siendo los dueños de ellos, por la mayor parte, Iglesias, Colegios, Comunidades, Obras Pías, Patronatos, Capellanías, y Hospitales, han sido, y son medio, con que los bienes de naturaleza profana, pasan a los referidos; y que siendo assi, son causa también de hacerse inexigibles las contribuciones públicas, y Reales, e insuperable con ellos el mal, como probaré, y passaré al medio de sus erradicaciones...*". MOYA TORRES, F. *Manifiesto Universal de los males envejecidos...*, Madrid, 1727.

<sup>282</sup> En la forma en la que está redactada la escritura de censo queda patente el sentido de compraventa que tenía, pues en ella se declaraba que Margarita Antonia de Alava otorgaba un censo "vendiendo al Patrono, y Capellán de la Capellanía... dos mil reales de vellón de renta, y censo en cada un año, a razón de dos y medio por ciento...". ACC, Capellanías, 16/239.

<sup>283</sup> Margarita Antonia de Alava casó en 1753 con su primo segundo Santiago de Aranguren y Areizaga, capitán de caballería del regimiento de Borbón, y sucesor, por renuncia de su hermano mayor el jesuita Francisco de Aranguren, del mayorazgo de Aranguren y palacio de Zarugalde. Margarita Antonia era hija de Gaspar de Alava y Aranguren, Señor de las villas de Estarrona y Quintana y lugares de Rituerto y Urturi y tierra de Isqui en la provincia de Álava, y hermana del brigadier Ignacio María de Alava y Navarrete, quien tras participar en la batalla de Trafalgar como segundo jefe de la escuadra a las órdenes del general Gravina llegó a ser nombrado en 1814 ministro del Consejo supremo del Almirantazgo y en 1817 capitán general de la Armada. Su hijo Santiago Elías de Aranguren, heredero del mayorazgo, heredó también el título de Conde Monterrón y su hija

relevancia y prestigio: Xavier María de Munibe e Idiáquez, conde de Peñaflorida, y Joaquín de Eguía, marqués de Narros<sup>284</sup>. El capital enviado por Juan Antonio de Azcarate a su villa natal produciría de esta manera no sólo unas rentas materiales, sino que proporcionaría a su familia otro tipo de rentas inmateriales al abrirles las puertas a unas relaciones de tipo mercantil con representantes de las elites del poder local y provincial.

Entre los bienes y propiedades de todo tipo hipotecadas por la censataria se mencionan en la escritura seis caseríos con todos sus pertenecidos y heredades de pan sembrar, manzanales, montes y prados, la mayor parte de ellos en el término de Mondragón; varias heredades sueltas en varios pueblos; dos montes jarales y cuatro suertes de dehesas en el común; además del edificio de la Barrena<sup>285</sup> de Arizapata, y media ferrería en Zaldibar de la que se informa que había sido construida de nueva planta en el año 1748. También se relacionan en la escritura los bienes hipotecados por sus fiadores. El conde de Peñaflorida hipotecó varios montes y molinos situados en jurisdicción de la villa vizcaína de Markina y la ferrería de Gaviola en jurisdicción de Elgoibar. Por su parte, el marqués de Narros hipotecó *"veinte, y quatro acciones de á cada quinientos pesos que tiene á interes en la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, y producen nueve mil reales de renta al año"*<sup>286</sup>.

Además de consignarse detalladamente los bienes que se hipotecaban, en la escritura se disponía la forma en la que se podía redimir el censo si las partes quisieren hacerlo, *"por entero o por quartas partes"*<sup>287</sup>, así como la manera en que debían ser conservados los bienes hipotecados y el sistema en que ambas partes y sus herederos debían reconocer el censo cada diez años *"o quando su Patrono o Capellán lo pidiese ante escrivano..."*<sup>288</sup>.

A continuación, la escritura de censo, según la Real Pragmática Sanción<sup>289</sup> de 31 de enero de 1768 y publicada el 5 de febrero por la que se establecía el oficio de hipotecas, debía ser registrada en los oficios de hipotecas de las cabezas de partido

---

Josefa Joaquina casó en 1785 con Antonio de Munibe y Areizaga, Conde de Peñaflorida. Ver: GUERRA, Juan Carlos, *Ensayo de un padrón histórico de Guipúzcoa según el orden de sus familias pobladoras*, San Sebastián, Joaquín Muñoz-Baroja, 1928, p. 63.

<sup>284</sup> Estos dos personajes, junto a Manuel Ignacio de Altuna, conocidos como los *caballeritos de Azcoitia*, fueron los responsables de la organización de unas tertulias científicas que constituyeron el origen de un proceso que culminó en 1763 en la fundación de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País. Sobre la Bascongada y sobre la personalidad de sus fundadores existe una abundante bibliografía, entre la cual es preciso destacar la obra recientemente publicada por un especialista en la historia del pensamiento económico: ASTIGARRAGA, Jesús, *Los ilustrados vascos. Ideas, instituciones y reformas económicas en España*, Barcelona, Crítica, 2003.

<sup>285</sup> La "barrena" era una industria dedicada a barrenar cañones. En ella había un ingenio o aparato conocido como tornillo de barrenar cañones, movido por fuerza hidráulica, que se utilizaba para barrenar los cañones de las armas de fuego.

<sup>286</sup> ACC, Capellanías, 16/239.

<sup>287</sup> *Ibidem*.

<sup>288</sup> *Ibidem*.

<sup>289</sup> *"Establecimiento del Oficio de hipotecas en las cabezas de partido de todo el reyno, á cargo de los Escribanos de Ayuntamientos"*. Nov. Recop. ley III, tit. XV, lib. X. Esta ley pretendía evitar los problemas derivados los numerosos pleitos que se producían con motivo del desconocimiento de las cargas con las que estaban gravados muchos bienes.

a las que correspondían los distintos bienes hipotecados. Por tanto ésta fue registrada en los primeros días de diciembre de 1778 en los libros de hipotecas de Mondragón, del Valle Real de Leniz, de la villa de Elgoibar y de la villa de Markina.

Con la escritura de censo y con una renta asegurada de 2.000 reales anuales, Francisco Ignacio de Ibarra, tras excusarse los otros dos apoderados por los albaceas por legítimas ocupaciones, procedió a efectuar la fundación ante el escribano del número de Placencia, Manuel Antonio de Larreategui. Juan Antonio de Azcarate no había sido explícito al manifestar su voluntad y no había indicado si la capellanía debía ser colativa o laical. En la escritura de fundación tampoco se establecía la naturaleza de la capellanía, pero finalizaba con una suplica dirigida al obispo de Calahorra y La Calzada para que se hiciese canónica institución y colación de la capellanía, "*para que sea perpetuamente yrevocable (sic) la voluntad del expresado D. Juan Antonio de Azcarate*"<sup>290</sup>.

La perpetuidad quedaba así asegurada, ya que la canónica institución era el medio por el cual la autoridad eclesiástica, es decir, el obispo, procedía a la erección de las capellanías con todas las cualidades de los beneficios eclesiásticos y estos eran perpetuos por naturaleza. Por tanto, tras la aprobación por el obispo de la fundación, sus bienes habrían de ser espiritualizados<sup>291</sup> y la colación del beneficio debía ser hecha necesariamente en un eclesiástico, para lo que bastaba que fuera tonsurado. Si había alguna duda en la naturaleza que debía tener la capellanía, ésta quedaba despejada al pedir en la escritura de fundación que se hiciese de ella canónica institución y al hacer referencia a la perpetuidad de la misma.

## Capellanías y sistema benefical.

Las capellanías, en origen, tal como ya se ha dicho anteriormente, constituían un medio para la creación de beneficios eclesiásticos. Se imponían unas cargas espirituales, generalmente la celebración de una o varias misas y asistencia a determinados actos litúrgicos, a cambio de cuyo cumplimiento se dotaba al capellán con unas rentas suficientes para su congrua sustentación. De esta manera se conseguía que quien accedía como capellán a una de estas capellanías pudiera iniciar la carrera eclesiástica, ya que para obtener un beneficio sólo se precisaba la *prima tonsura*<sup>292</sup>.

---

<sup>290</sup> AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/1, fol. 49. Ver: Apéndice 3.

<sup>291</sup> La espiritualización de los bienes significaba que estos pasaban a formar parte del patrimonio de la Iglesia, quedando sujetos por tanto a la autoridad eclesiástica: "*Bona destinata pro Capellania sunt facta patrimonium Ecclesiae, debent esse in potestate Episcopi et conditio contraria reiicitur secundum communem sententiam*". PÉREZ DE LARA, Ildefonsus, *De anniversariis et capellaniis*, Matriti, 1622, Lib. II, Cap. I, n. 19.

<sup>292</sup> La prima tonsura consistía en un acto simbólico por medio del cual se pasaba a formar parte del estamento clerical. Según afirma Golmayo "*era una ceremonia por la cual el Obispo confería solemnemente al candidato el traje eclesiástico, tonsurándole al mismo tiempo, por cuyo acto salía de la clase de los legos, se inscribía en la matrícula de la Iglesia, y principiaba a gozar de los derechos y*

Una vez en posesión de un beneficio eclesiástico, sin embargo, era posible acceder a las órdenes sagradas, para las que se requería un título de ordenación, sin el cual no era posible ordenarse *in sacris*. Si la finalidad del fundador era exclusivamente la celebración de una o varias misas por la salvación de su alma, podía fundar un Aniversario, o Memoria de Misas, pues en este caso sólo se precisaba del capital imprescindible para producir las rentas con las que pagar el estipendio correspondiente a las misas que se hubieran de celebrar.

La fundación de capellanías conllevaba además de la celebración de misas por la salvación del alma del fundador, y del prestigio que otorgaban a su familia, la vinculación de unos bienes en la familia que produjeran unas rentas con las que pudiera sustentarse algún miembro de la misma perpetuamente. Esto se conseguía mediante la creación de un beneficio eclesiástico, que favorecía no sólo a quien lo poseía, sino también a la Iglesia, que de esta manera aumentaba su patrimonio y se creaban nuevos beneficios<sup>293</sup> aumentando así el número de miembros pertenecientes al estamento clerical. Las capellanías que suponían la creación de un beneficio eclesiástico eran las capellanías llamadas colativas<sup>294</sup>, aunque según Gómez-Salazar, las capellanías colativas eran exclusivamente aquellas que siendo eclesiásticas se conferían libremente por el prelado a persona idónea, sin necesidad de mediar la presentación por parte del patrono<sup>295</sup>.

---

*privilegios clericales de la misma manera que los ordenados de orden sagrado*". GOLMAYO, P. B., *Instituciones del Derecho Canónico*, Madrid, 1859, p. 158.

La tonsura era imprescindible para acceder a las órdenes menores (ostiariado, lectorado, exorcistado y acolitado) y a las órdenes mayores o sagradas (subdiaconado, diaconado y presbiterado), así como para obtener un beneficio eclesiástico. Con el fin de remediar numerosos abusos, el Concilio de Trento, reguló algunos aspectos relacionados con la tonsura: "*No se ordenen de primera tonsura los que no hayan recibido el sacramento de la Confirmación, y no estén instruidos en los rudimentos de la fe, ni los que no sepan leer y escribir, ni aquellos de quienes se conjeture prudentemente que han elegido este género de vida con el fraudulento designio de eximirse de los tribunales seculares, y no con el de dar a Dios fiel culto... Ningún ordenado de primera tonsura, ni aun constituido en las órdenes menores, pueda obtener beneficio antes de los catorce años de edad. Ni este goce del privilegio de fuero eclesiástico si no tiene beneficio o si no viste hábito clerical, y lleva tonsura, y sirve para asignación del Obispo en alguna iglesia, o esté en algún seminario clerical, o en alguna escuela, o universidad con licencia del Obispo, como en camino para recibir la órdenes mayores*". Concilio de Trento, Ses. XXIII, Dec. Ref., Cap. IV, V y VI.

<sup>293</sup> Los beneficios eclesiásticos eran perpetuos, aunque había determinadas circunstancias extraordinarias que autorizaban a la Iglesia a la reunión de beneficios o incluso a la supresión de algunos, tal como se hizo durante el siglo XVIII y comienzos del XIX cuando como consecuencia de los Planes Beneficiales se reunían en uno solo varios beneficios incongruos.

<sup>294</sup> Según Mariano Álvarez Gómez, "*son capellanías colativas o eclesiásticas, las instituidas con intervención del Ordinario de la diócesis y erigidas por éste en beneficio eclesiástico mediante la espiritualización de sus bienes*". ÁLVAREZ GÓMEZ, Mariano, *Manual de capellanías y pías memorias*, Vitoria, 1903, p. 9.

<sup>295</sup> Cfr. GÓMEZ-SALAZAR, F., *Instituciones de Derecho Canónico*, León, 1891, tomo III, p. 308. Este criterio de designar como colativas exclusivamente a las capellanías que eran libremente conferidas por el ordinario, concuerda con la distinción que hace José Febrero en su *Librería de escribanos*, entre la colación de beneficios y la institución canónica de los mismos. Sin embargo, en la práctica, las capellanías que constituían beneficios eclesiásticos eran siempre denominadas capellanías colativas, ya que para ocuparlas se precisaba de la colación del beneficio, fuera ésta *libre* o *necesaria*.

Con el fin de evitar los problemas derivados de la existencia de beneficios eclesiásticos incongruos<sup>296</sup>, es decir, con rentas inferiores a lo que se consideraba el mínimo necesario para la subsistencia, la Iglesia no autorizaba la fundación de capellanías que no tuviesen una rentas mínimas que se solían fijar en las Constituciones Sinodales de cada obispado<sup>297</sup>.

Por otra parte, la política regalista de Carlos III y las tesis ilustradas inspiraron leyes como la Real resolución de 10 de marzo de 1763 tendentes a evitar los perjuicios que los bienes de manos muertas ocasionaban a la economía de la nación. La citada resolución de Carlos III ordenaba que no se admitiesen instancias de manos muertas para la adquisición de bienes, *"aunque vengan vestidas de la mayor piedad y necesidad; y que el Consejo de Hacienda, siempre que vea este género de concesiones, ó se le pida informe sobre ellas, antes de darles cumplimiento ni informar, represente todas las órdenes dadas en contrario, y los intolerables daños que se siguen a la causa pública, de que a título de una piedad mal entendida se vaya acabando el patrimonio de legos"*<sup>298</sup>.

Estas restricciones a la fundación de capellanías fueron algunas de las razones por las que se empezaban a fundar capellanías laicales, similares a las eclesiásticas, pero en las que no se creaba un beneficio eclesiástico. Los bienes que constituían el vínculo no se espiritualizaban, por lo que no pasaban a engrosar el patrimonio de la Iglesia. Estas capellanías no quedaban sujetas a la jurisdicción eclesiástica, aunque el cumplimiento de las cargas espirituales debía siempre ser supervisado por el ordinario.

---

<sup>296</sup> La congrua era la renta que mínima que debía tener el que se quisiera ordenar *in sacris*. "Congrua clerical o título canónico es una garantía legítima de la conveniente y perpetua sustentación del ordenado". POSTÍUS Y SALA, J., El Código Canónico aplicado a España, Madrid, 1926, p. 763. La congrua solía ser establecida por las Constituciones Sinodales de los obispados, fijando la renta mínima requerida para la fundación de beneficios: "Que no se admita fundación de Capellanía colativa que no llegue en su renta a 40 ducados annuos". CSC-1698, const. III, tit. V, lib. III. "Que el título para ordenarse de orden sacro en este obispado, sea de cantidad de 80 ducados de buena renta annua". CSC-1698, const. XI, tit. V, lib. I. Un Real decreto de José Bonaparte, de 6 de Julio de 1809 fijaba "el minimum de la congrua de los Curas parrocos a 400 ducados". Cfr. AFB, Fondos Municipales, Bilbao-Antigua 0011/001/51.

<sup>297</sup> En las Constituciones Sinodales del obispado de Calahorra y La Calzada, la mínima congrua para admitir la fundación de una capellanía se fija en 40 ducados anuales, mandando que las que no llegasen a dicha renta se admitiesen como Memorias de Misas: "Porque la fundación de capellanías tenues, es ocasión de muchos fraudes, assi para gozar del fuero, como exemptarse de las contribuciones comunes; y para obtener los Ordenes Sagrados, sin tener con que se alimentar: Ordenamos, y mandamos, S.S.A. que de aqui adelante no se admiten en nuestro Tribunal fundaciones de Capellanías de menos cantidad, que quarenta ducados de renta: por quanto assi conviene, para la buena conservación de la disciplina Eclesiástica". CSC-1698, const. III, tit. V, lib. III. Sin embargo, para que un beneficio pudiera servir como título para ordenarse de orden sacro, las mismas Constituciones Sinodales exigían que su renta no fuera inferior a 80 ducados anuales. CSC-1698, const. XI, tit. V, lib. I.

<sup>298</sup> Don Carlos III en el Pardo, por Real resolución del 10 de marzo de 1763. Nov. Recop., lib. I, tit. V, ley XVII. Al parecer esta medida no tuvo demasiado éxito, ya que en 1796, bajo el reinado de Carlos IV, hubo de ser reiterada la misma orden de forma mucho más clara y concisa. La Real resolución de 20 de febrero de 1796 prohibía explícitamente "hacer capellanías u otras fundaciones perpetuas sin la Real licencia", mandando que esta orden fuera comunicada a todos los arzobispos y obispos. Nov. Recop., lib. I, tit. XII, ley VI.

Al no existir ninguna restricción a la fundación de capellanías laicales o patronatos de legos, éstas proliferaron de forma escandalosa, hasta el punto de que se ha calculado que en España, en el siglo XVII, había alrededor de doscientas mil capellanías<sup>299</sup>. La amortización de pequeñas propiedades, bien fuera en manos de la Iglesia o en manos particulares fue el caballo de batalla de fisiócratas e ilustrados<sup>300</sup> que la criticaban con dureza por sustraer una extraordinaria masa de bienes raíces de la circulación en el mercado.

Pocos años después de la fundación de la capellanía de Juan Antonio de Azcarate, el Real Decreto de 28 de abril de 1789 prohibía la fundación de mayorazgos cortos sin preceder licencia Real<sup>301</sup>. Esta prohibición se fundamentaba en la convicción de que la abundancia de este tipo de vinculaciones era el origen de numerosos males, ya que fomentaban la ociosidad y la soberbia de sus poseedores, privaban de brazos al ejército, al comercio y a la agricultura, y eran la causa del abandono de muchas casas y tierras. El Señorío de Bizkaia, apoyándose en la ley 7, título 21 de los Fueros<sup>302</sup>, se opuso a este decreto, presentando un recurso con fecha 20 de agosto de 1790, y dirigiendo varias representaciones en las que expusieron las razones de su oposición<sup>303</sup>.

Otras razones para la fundación de capellanías laicales fueron la voluntad del fundador de mantener los bienes vinculados a la familia sin ninguna intervención por parte de la Iglesia, o la de mantenerse al margen de la jurisdicción eclesiástica, o incluso la de que pudiera poseer la capellanía cualquier miembro de la familia sin necesidad de que perteneciera al estamento eclesiástico, pudiendo disfrutar de la misma incluso las mujeres. El prestigio y el poder de influencia y de control social que otorgaba la posesión de una capellanía se mantenía invariable fuera ésta colativa o laical.

No hay que pensar, sin embargo, que la fundación de capellanías laicales estaba relacionada con un menor interés por el aspecto espiritual de las mismas, ya que,

---

<sup>299</sup> MOSTAZA RODRÍGUEZ, A., *Derecho Patrimonial Canónico*, en AA.VV., *Derecho Canónico*, vol. I, Pamplona, 1974, p. 324. Citado por VÁZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA, J. M., *Las capellanías colativo-familiares (Régimen legal vigente)*, Pamplona, EUNSA, 1992, p. 26.

<sup>300</sup> Una historia crítica de las instituciones que permitían la vinculación y amortización de bienes raíces en SEMPERE Y GUARINOS, Juan, *Historia de los vínculos y mayorazgos*, Madrid, 1805. El problema de la proliferación de vínculos y mayorazgos cortos, es decir, de pequeñas rentas, fue abordado también por Campomanes y por Cabarrús, entre otros. RODRÍGUEZ CAMPOMANES, P., *Tratado de la regalía de amortización*, Madrid, Imprenta Real de la Gaceta, 1765; y CABARRUS, Francisco, *Cartas sobre los obstáculos que la naturaleza, la opinión y las leyes oponen a la felicidad pública*, Madrid, Ferreira, 1933, publicadas por primera vez en 1809.

<sup>301</sup> Este Real Decreto prohibía la enajenación de bienes raíces sin preceder licencia Real, la cual solamente se concedería si el vínculo "*llega, o excede como deberá ser a tres mil ducados de renta, si la familia del fundador por su situación puede aspirar a esta distinción para emplearse en las carreras Militar o Política con utilidad del Estado, y si el todo o la mayor parte de los bienes consiste en raíces, lo que se deberá moderar, disponiendo que las dotaciones perpetuas se hagan y sitúen principalmente sobre efectos de rédito fijo, como censos, juros, efectos de Villa, acciones de Banco, u otros semejantes, de modo que quede libre la circulación de bienes estables...*". Novísima Recopilación, ley XII, tit. XVII, lib. X.

<sup>302</sup> Esta ley trata sobre los casos en los que "*se puede poner gravamen a los hijos*".

<sup>303</sup> Estas representaciones a Su Majestad, fueron realizadas en 19 de enero y 8 de marzo de 1793. AFB, Administrativo, J-00883/075.

aunque pueda parecer contradictorio, muchas veces se fundaban con un objetivo puramente espiritual, estableciéndose expresamente que fueran presbiteriales, es decir, que sólo pudieran ser adjudicadas a quienes ya fueran sacerdotes en el momento de acceder a ellas, y que no pudieran servir como título de ordenación<sup>304</sup>. En las capellanías colativas, sin embargo, en un gran número de ocasiones primaba el interés de la Iglesia por aumentar su patrimonio y por crear nuevos beneficios que permitieran la ordenación de más clérigos, o el interés de los aspirantes por conseguir unas rentas con las cuales hacer una carrera, la eclesiástica, como una forma de asegurarse el futuro, sobre el puramente espiritual de celebrar misas por el alma de los difuntos.

La fundación de la capellanía se hizo el día 11 de diciembre de 1778, y pocos días después, a pesar de la mencionada resolución de 1763, el 27 del mismo mes se inició en el Tribunal Eclesiástico del obispado de Calahorra, el proceso<sup>305</sup> para la aprobación de la capellanía, la espiritualización de sus bienes y la adjudicación de la misma a José María de Aguirre, quien presentó una petición<sup>306</sup> para que se le diese el testimonio conducente que le permitiera solicitar la prima tonsura, y en vista del título de ella despachar a su favor el de colación y canónica institución de la capellanía.

La aprobación de la capellanía requería, por una parte, la seguridad de que los bienes sobre los que se fundaba estaba garantizada, por lo que se debía informar a quienes pudieran tener intereses en los mismos, pidiendo información de testigos sobre su seguridad y garantizando que se encontraban libres de todo tipo de cargas, interesándose incluso la Iglesia por la existencia de posibles herederos del fundador que pudieran hacer alguna reclamación relativa a los mismos. Por otra parte era necesario informar a la comunidad de la fundación y de la persona que había sido presentada para la posesión de la capellanía con el fin de oír a todo aquel que tuviera que hacer algún tipo de reclamación. Para todo ello el Provisor y Vicario General del obispado, José Ángel Ruiz de Otheo, mandó hacer pública una carta de justicia haciendo saber a los interesados en los bienes afectados por la fundación el pedimento de José María de Aguirre, por si tuvieran algo que alegar. Así mismo se comisionó al cura de la parroquial de Placencia a fin de que obtuviese la información de testigos sobre la libertad, seguridad y permanencia de los bienes con los que se hacía la fundación.

La carta de justicia, como era costumbre, debía leerse en *lengua vulgar vascongada* en el tiempo del ofertorio de la misa conventual del siguiente día festivo, fijándose después en las puertas de la iglesia durante seis días seguidos un traslado fehaciente de la misma. El día 3 de enero de 1779 fue leída la carta de justicia y el

---

<sup>304</sup> Un ejemplo de esto se puede comprobar en el caso de la capellanía fundada en Munilla por Antonio Sáenz de Cabezón, según testamento del 3 de Octubre de 1710, quien estableció explícitamente que la capellanía que mandaba fundar no fuera colativa: "*Item es mi voluntad que esta dicha capellanía no pueda ser colativa por ningún derecho ni acontecimiento, ni tampoco título eclesiástico para hordenes sino que el capellán que la hubiese de poseer aia de ser sacerdote y no siéndolo no se haga presentación de ella*". AHDC, Munilla, 19.

<sup>305</sup> La aprobación de una capellanía se desarrollaba en forma de pleito que se litigaba en el tribunal eclesiástico entre el aspirante y el fiscal general eclesiástico.

<sup>306</sup> ACC, Capellanías, 16/239, 1. (Apéndice 2, nº 3).

día 7 fue recibida por el cura de la iglesia de Placencia la información de testigos solicitada por el Provisor. Para este acto, José María de Aguirre presentó como testigos a José Francisco de Lacunza, de 61 años, presbítero y capellán en la parroquial de Placencia; a Manuel José de Iraola Mendiola, de 40 años poco más o menos, presbítero, capellán y cura de la misma; a Manuel de Barrutia, de 31 años cumplidos, presbítero capellán; y a Ramón Elías de Junguitu y Arechaga, uno de los tres apoderados de los testamentarios de Azcarate, de 36 años de edad, contador y tesorero de las Reales Fábricas de Armas de Placencia. Los cuatro testigos afirmaron que conocían que Juan Antonio de Azcarate mandó fundar una capellanía perpetua colativa. Era importante poder presentar unos testigos de cierto prestigio que apoyasen su solicitud y José María de Aguirre pudo hacerlo.

El día 1 de febrero se reportaron al tribunal eclesiástico, con comunicación al fiscal general eclesiástico, todos los informes y diligencias realizadas en relación con el expediente formado para la aprobación de la fundación, la espiritualización de sus bienes y su adjudicación; y dos días después el fiscal se pronunció favorablemente a la misma por medio de un dictamen en el que afirmaba no hallar ningún reparo a su aprobación. Pero la escrupulosidad del Provisor retuvo el expediente por algo en lo que no había reparado el fiscal. En un auto del 10 de febrero, el Provisor y Vicario General del obispado de Calahorra, se reservaba proveer sobre la aprobación de la capellanía hasta que el citado José María de Aguirre y Azcarate presentase la información de utilidad y la licencia de la justicia que debió preceder para el otorgamiento de la escritura de censo por parte de Margarita Antonia de Alava, pues, como madre, tutora y curadora de sus hijos menores, dicha licencia era un requisito indispensable para poder sujetar los bienes de éstos.

Se trataba de dos problemas diferentes. La información de utilidad era necesaria para la aceptación de un censo como capital de la capellanía para su espiritualización. Se necesitaba además la licencia judicial que permitiera a la madre hipotecar los bienes pertenecientes a sus hijos menores, a pesar de ser su tutora y curadora. Tras este auto, José María de Aguirre presentó una instancia solicitando se procediese a la aprobación y confirmación de la dicha fundación por considerar que del otorgamiento del censo se seguía notoria utilidad, ya que el capital serviría para la dotación y casamiento de una de las hijas de la otorgante, y en consideración a que los bienes de la otorgante y de sus fiadores eran bastantes para la seguridad del censo. A pesar de ello, en un nuevo auto de fecha 9 de marzo el Provisor se ratificaba en lo proveído en su auto anterior. Como consecuencia de este segundo auto, el procurador de José María de Aguirre presentó apelación ante el tribunal Metropolitano de Burgos, protestando el Real auxilio. Mientras tanto, de forma paralela, se desarrollaría un complejo proceso con el fin de probar la utilidad del censo, obtener la licencia judicial y finalmente ratificar la escritura de censo.

El día 26 de marzo, Margarita Antonia de Alava presentaba un pedimento dirigido al Alcalde y Juez ordinario de Mondragón, en el que tras una exposición de los hechos que motivaron la fundación del mencionado censo con la finalidad de dotar a sus hijas menores, suplicaba se sirviera recibir información de utilidad y dar licencia para que en su virtud pudiera ser ratificada, por lo que tocaba a los menores, la escritura de fundación de censo otorgada el 27 de noviembre de 1778 en Placencia. Así

mismo solicitaba que se incluyeran las compulsas de las cláusulas del testamento de su difunto marido, de fecha de 20 de febrero de 1764, relativas a la tutela y curaduría de sus hijos menores, al legado del quinto de libre disposición que hizo en su favor, y al nombramiento de herederos. En su pedimento, la censataria se justificaba de no haber pedido con anterioridad la información de utilidad amparándose en que no se le pidió por parte del comprador del censo.

Según Margarita Antonia de Alava, la utilidad que se derivaba de la venta del censo radicaba en que el capital obtenido se había invertido en la dote y acomodo de sus dos hijas, María Jesús y María Eulalia. Desde el punto de vista de la peticionaria la utilidad que se derivaba para sus hijos era notoria, ya que no sólo permitía a sus hijas acceder al mercado matrimonial en inmejorables condiciones, sino que además liberaba a sus otros dos hermanos, especialmente al primogénito y heredero del mayorazgo, Santiago Elías, de la pesada carga que supondría para ellos dotar convenientemente a sus hermanas. Otros motivos que exponía como justificativos de la utilidad del censo eran su naturaleza de redimible por cuartas partes, y un rédito más bajo que el legal<sup>307</sup>.

En el proceso de información de utilidad que se inició inmediatamente por decreto del alcalde y juez ordinario de la villa de Mondragón, Juan Ascensio de Azcarate, se presentaron entre otros documentos las compulsas de la carta de pago de 8.800 ducados de la dote de María Eulalia de Aranguren, y del contrato matrimonial que se hizo el 3 de diciembre de 1778, justo una semana después de la fecha en la que se otorgó la escritura de censo.

De la información de testigos que tuvo lugar el 26 de marzo ante el alcalde y juez ordinario de la villa de Mondragón, sobre la utilidad del censo, resulta evidente el valor que para la familia del capitán Aranguren tenía el acceso de dos de sus hijas al matrimonio de forma que no significara un descenso social. Como indican los testigos, era preciso que *"Margarita Antonia aprontara para las citadas sus dos hijas, las dotes correspondientes á su calidad, y haveres, y circunstancias de los respectibos enlaces"*, a fin de que contrajesen matrimonio con *"sujetos de la maior distincion y lustre"*<sup>308</sup>.

En virtud de las declaraciones de los testigos presentados, al día siguiente el alcalde y juez ordinario de la villa de Mondragón concedió a Margarita Antonia de Alava *"permiso, facultad y licencia"* para que en nombre de sus hijos menores y representando a sus personas pudiera ratificar el censo fundado a favor de la capellanía. El censo fue ratificado y el procurador de José María de Aguirre, remitió al tribunal eclesiástico un escrito apartándose de la apelación que había presentado ante el tribunal metropolitano de Burgos<sup>309</sup>, enviando una copia fehaciente, de la

<sup>307</sup> Los réditos legales eran del tres por ciento desde 1705 en Castilla y desde 1750 en Aragón, según fue dispuesto en las Pragmáticas de 12 de febrero de 1705 y de 6 de julio de 1750. Según estas leyes no se permitían réditos superiores.

<sup>308</sup> Declaración del testigo Santiago de Aranguren, presbítero beneficiado de la iglesia de San Juan Bautista de Mondragón. ACC, Capellanías, 16/239, 44.

<sup>309</sup> En su escrito, el procurador de José María de Aguirre afirmaba que *"mejor instruido mi parte, ha resuelto apartarse, y yo lo ejecuto en su nombre, de la apelación que interpuse del auto dado en esta causa en 10 de febrero de este año..."*. ACC, Capellanías, 16/239, 59rº.

Información de utilidad solicitada, con las compulsas de varios documentos, y la licencia judicial para el otorgamiento de la escritura de aprobación y ratificación de dicho censo, así como el instrumento de ratificación del mismo.

De esta forma, el 20 de abril de 1779, el Provisor y Vicario general del obispado aprobó la fundación de la capellanía, erigiendo sus bienes de temporales y profanos en espirituales y eclesiásticos<sup>310</sup>, ordenando la adjudicación de la misma a José María de Aguirre como capellanía perpetua eclesiástica colativa, y mandando se le diese el testimonio conducente para que solicitase la prima tonsura, reservándose despachar la colación del beneficio hasta el momento en que el aspirante presentase el título que acreditase que había obtenido ésta. Finalmente, el auto del Provisor recogía la orden de que se diese por principio un libro en el que se debería recoger un traslado de la fundación, del propio auto del Provisor y de la escritura de censo sobre el que se fundó, que debería ser presentado en todas las visitas pastorales.

La colación del beneficio no podía ser hecha a un laico por lo que era preciso que previamente éste fuera tonsurado<sup>311</sup>. Una vez conseguida la tonsura, José María de Aguirre pasaría a formar parte del estamento eclesiástico y quedaría sujeto a su jurisdicción. Éste recibió la tonsura en las órdenes generales celebradas por el obispo Juan de Luelmo y Pinto el 28 de mayo de 1779, y la colación y canónica institución<sup>312</sup> del beneficio perpetuo el día 11 de junio<sup>313</sup>. Como solía ser habitual, José María de Aguirre, en mérito de su habilidad y suficiencia probadas, fue dispensado del examen<sup>314</sup> que debía preceder a la colación de un beneficio eclesiástico y después de comprobar la suficiencia de las rentas de la capellanía

---

<sup>310</sup> "y sus bienes erigio de temporales y profanos en espirituales y eclesiasticos para que in perpetuum gozen del fuero de tales". La espiritualización de los bienes suponía su paso al patrimonio de la Iglesia, sujetándolos por tanto a su fuero y jurisdicción. Era una condición imprescindible para la creación de un beneficio eclesiástico. ACC, Capellanías, 16/239, fol. 59vº. (Apéndice 2, nº 4).

<sup>311</sup> Para obtener un beneficio eclesiástico era necesario: pertenecer al estamento eclesiástico, es decir, haber recibido, al menos, la prima tonsura; tener edad conveniente, es decir, al menos 14 años para los beneficios simples que no requieren residencia ni llevan aneja la cura de almas (Trento, Ses. XXIII, Cap. 6 de ref.); ser hijo de legítimo matrimonio; ser célibe; vida honesta y probidad de costumbres; y ciencia competente. Cfr. GÓMEZ-SALAZAR, *Instituciones de Derecho Canónico*, León, 1891, t. I, p.259.

<sup>312</sup> La colación es el acto por el cual el ordinario confiere un título benefical. Únicamente la potestad eclesiástica es competente para conferir los oficios y beneficios eclesiásticos, por tanto la colación sólo puede ser hecha por el ordinario eclesiástico, es decir, el obispo o su vicario. La colación podía ser necesaria o libre. La necesaria, también llamada institución canónica, es la que se debía hacer, con arreglo a derecho, en favor de una persona determinada por elección o por presentación. En este caso, por ser un beneficio de patronato, se trataba de una colación necesaria, ya que se hacía en la persona que había designado el fundador.

"Previniendo que quando el Obispo nombra por sí solo al Capellan, ò Beneficiado, se llama con propiedad colacion este nombramiento; y quando se hace primero la presentacion por el Patrono, se llama institucion la que en vista del nombramiento hace el Obispo". FEBRERO, José, *Librería de escribanos é instrucción jurídica theórico práctica de principiantes. Parte primera*, Viuda e Hijo de Marín, Madrid, 1797, tomo III, p. 82.

<sup>313</sup> ACC, Capellanías, 16/239, fol. 61. (Apéndice 2, nº 5).

<sup>314</sup> La dispensa del correspondiente examen era lo más frecuente, a pesar de que las Constituciones Sinodales lo exigían de acuerdo con lo dispuesto por el Concilio de Trento: "Que todos los presentados en beneficios de patronato, comparezcan personalmente a ser examinados, sin excusa alguna". CSC-1698, const. VII, tit. XVII, lib. III.

para ser colativa, el Provisor y Vicario General hizo en él colación y canónica institución del beneficio eclesiástico.

El ritual de la colación de un beneficio consistía en la imposición de un bonete que se ponía sobre la cabeza del aspirante, estando éste arrodillado. En el caso de que no pudiera estar presente el aspirante, el mismo ritual se cumplía en la persona de su procurador. José María de Aguirre no estaba presente en el acto de la colación y la imposición del bonete se hizo en la persona de su procurador, Bentura de Molina.

La posesión de un beneficio eclesiástico solía requerir de tres actos diferentes. El primero de ellos era la presentación, por parte del patrono, del aspirante al mismo. No había presentación en el caso de los beneficios de libre colación en los que el ordinario libremente hacía la colación en el sujeto que considerase idóneo. El segundo acto era la colación del beneficio. Ésta siempre requería la participación del ordinario. Finalmente el último acto era el de la toma de posesión. La posesión "*real, actual, corporal, velquasi*"<sup>315</sup> podía ser dada por cualquier notario o escribano que fuera requerido para ello<sup>316</sup>.

La Iglesia tenía un nuevo beneficio y el cabildo de Placencia tendría la esperanza de ver incrementados sus ingresos con los estipendios que debería pagar el nuevo capellán al cabildo por las misas que todos los viernes del año debían celebrarse en el altar de Jesús Nazareno de su iglesia, tal como había dispuesto el fundador de la capellanía en su memoria testamentaria: "*Y el capellán tenga la obligación de decir una misa cantada todos los viernes del año con diácono y subdiácono, en el altar principal de la capilla de Jesús Nazareno que es sita en la parroquial de dicha villa... y acabada la misa echará el responso dicho capellán o el que la dijere en la*

<sup>315</sup> Según el *Diccionario de la R.A.E.*, la posesión *vel cuasi* denota que no es tan sólo *real* y *corporal*, es decir, de la cosa en sí o tenencia material de alguna cosa, sino "*además comprensiva de los derechos y demás bienes inmateriales objeto de la cuasi posesión*". En cuanto a la posesión *actual*, se entiende por tal "*la que se ejerce de hecho y efectivamente en el momento presente o en el de surgir un conflicto sobre ella... En principio, en las controversias posesorias estrictas, que versan sobre esta cuestión en concreto, el poseedor actual tiene preferencia, al menos inicialmente, frente a todo otro que ha de probar mejores títulos posesorios o reivindicadores plenos. Otro favor de este poseedor consiste en que, si demuestra haber poseído en otra época, se presume que ha poseído desde entonces, salvo impugnación suficiente. Y el legislador completa la protección de este poseedor permitiéndole, para la prescripción adquisitiva del dominio que sume a su tiempo el del causante*". CABANELLAS, Guillermo, *Diccionario Enciclopédico de Derecho usual*, Buenos Aires, 1981.

<sup>316</sup> El acto de la toma de posesión solía ir acompañado de un complejo ritual del que es una buena muestra el que tuvo lugar en 1796 en la toma de posesión de una capellanía en la villa guipuzcoana de Villarreal: "*En el pórtico de la iglesia parroquial de esta villa de Villarreal à 5 de Agosto de 1796, Bartolomé de Pildain, alguacil de ella, en cumplimiento del auto antecedente, dió à Don Antonio Lucas de Izuzquiza, clérigo de Prima tonsura en él contenido, la posesión real, actual, corporal, velquasi, de la Capellanía fundada en dicha parroquial por Doña Ángela de Arriaran, tomándole de la mano, è introduciéndole en dicha iglesia, donde el mismo Don Antonio Lucas, después de hauer tomado la agua vendita, hizo oracion al Santísimo Sacramento, hizo la de S. Martín en un misal que estaua prevenido en el altar maior, tocó la campanilla, vajo al cuerpo de la iglesia, y rezó un responso, y todos los quales dichos actos, hizo en señal de dicha posesión, que la aprendió quieta y pacíficamente sin contradicción de persona alguna, y pidió de ello testimonio, y el dicho alguacil mandó dársele, y que nadie le inquiete ni perturbe, penas de las que contiene dicho Auto*". AMZ, E/7/I, Libro 4, exp. 28, "Presentación de una capellanía merelega, con sus diligencias, hasta la posesión".

*sepultura que están enterrados mis padres*<sup>317</sup>. Sin embargo no llegaron a ningún acuerdo. Se entablaron varios pleitos entre el capellán y el cabildo, y las misas quedaron sin celebrar durante varios años, hasta el momento en que Aguirre alcanzó el orden del presbiterado.

---

<sup>317</sup> AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/1, 46. (Apéndice 2, nº 1).

## Unas rentas para la familia.

### José María de Aguirre. El primer capellán.

A partir del momento en que recibió la colación, José María de Aguirre, de 22 años de edad, comenzó a disfrutar de unas rentas de 2.000 reales anuales que le permitirían seguir los estudios con los que hacer la carrera eclesiástica. A cambio de estas rentas tenía la obligación de celebrar o hacer celebrar una misa cantada, con ministros, y con responso al finalizar la misma, todos los viernes del año, además de atender el confesonario y de asistir los domingos y días festivos a la celebración de la misa mayor y a vísperas. Hasta que no estuviera ordenado *in sacris*, no podía hacerlo por sí mismo, debiendo pagar un estipendio al cabildo eclesiástico de Placencia.

Poco más de un año después de obtener la institución canónica de la capellanía, el 23 de diciembre de 1780, José María de Aguirre, por medio de su procurador solicitó en el tribunal eclesiástico del obispado la reducción de las cargas de la capellanía, quejándose de que tenía *"la pesada carga de haver de sufrir en todos los viernes del año una misa cantada..."*<sup>318</sup>. Aguirre consideraba, en el escrito presentado por su procurador, que las obligaciones impuestas por el piadoso instituyente de la capellanía eran excesivas, sobre todo teniendo en cuenta el estado en que se hallaban los precios de los víveres y de todo lo preciso para la congrua sustentación del capellán, que, según afirmaba, fue el único objeto del fundador<sup>319</sup>. En definitiva, la petición de Aguirre era que se redujesen las misas cantadas que debían celebrarse todos los viernes del año a rezadas, y que no se exigiera residencia ni la participación en la misa y en vísperas de los días festivos, ni la asistencia al confesonario, ya que todo ello era excesivamente gravoso.

Por medio de esta petición, realizada un año después de la toma de posesión de la capellanía, y siendo todavía simple tonsurado, Aguirre pretendía dos objetivos fundamentalmente, resolver el problema que tenía con el cabildo relativo al estipendio que debería abonar por las misas que él no podía celebrar, y asegurarse para el futuro unas cargas menores de las que había querido imponer el fundador de la capellanía, ya que en la petición no sólo se tenía en cuenta la situación del momento, sino que se trataba de reducir las cargas económicas en previsión del futuro, pues, según su argumentación, si se redimiese el censo en el que se hallaba impuesto el capital fundacional al dos y medio por ciento, no sería posible imponerlo de nuevo a más del dos por ciento, que era el premio al que la propia villa de Placencia estaba tomando censos.

---

<sup>318</sup> ACC, Secretaría del Tribunal, 17/795/24, 1.

<sup>319</sup> *"la decente congrua sustentación del Capellán, que fue el único objeto del fundador"*. ACC, Secretaría del Tribunal, 17/795/24, 1.

A esta pretensión se opusieron las comunidades eclesiástica y secular<sup>320</sup> de la villa de Placencia, iniciándose un pleito en el tribunal eclesiástico de Calahorra<sup>321</sup>. En el escrito de alegaciones que presentaron calificaban de irracional y sin ningún fundamento la petición de Aguirre, afirmando que todavía no se había celebrado ninguna de las misas de la capellanía desde su fundación<sup>322</sup>, por lo que era preciso compeler y apremiar al capellán al cumplimiento de las cargas y gravámenes impuestos por el fundador. En su argumentación, destacaban la inconsistencia de la petición de Aguirre en la que se consideraba que las cargas eran excesivas, pues no había habido ninguna variación en las mismas ni en las rentas de la capellanía desde su fundación<sup>323</sup>. Además de esto, sostenían que la renta de la capellanía era muy decente, más aún teniendo en cuenta que las cargas no eran excesivas, y que eran muchos los beneficiados que carecían de una renta similar.

Desde el punto de vista de ambas comunidades, eclesiástica y secular, era inadmisibile la petición de sustituir la misa cantada de los viernes por otra rezada, ya que era preciso respetar puntualmente la voluntad del fundador, quien, en su opinión, sabía perfectamente la forma en la que quería que se celebrase esta misa, pues en su memoria testamentaria había dispuesto que se hiciera como la de Nuestra Señora del Rosario de los sábados; y esta misa era cantada, con diácono y subdiácono, asistencia del cabildo y acompañada del órgano<sup>324</sup>.

En la declaración de testigos que presentó como prueba la parte del solicitante, todos los testigos manifestaron unánimemente el criterio de que si bien las misas cantadas deberían celebrarse por el propio capellán, al no haber recibido éste la orden de presbítero, y no ser más que un simple tonsurado, no podía hacerlo personalmente, de forma que si tuviera que pagar el estipendio correspondiente a las misas cantadas con diácono y subdiácono, no le quedaría congrua suficiente para continuar los estudios que le permitieran ordenarse *in sacris*, por lo que parecía justo que en tanto no se ordenase pudieran celebrarse las misas rezadas.

En vista de que parecía que el pleito no se iba a resolver de forma favorable a sus intereses y con el fin de no aumentar los gastos que le ocasionaría la prolongación del mismo, el 2 de Abril de 1782, Aguirre pidió su apartamiento del pleito, solicitando licencia para celebrar rezadas todas las misas atrasadas, y que se señalase un estipendio para las que se habían de celebrar cantadas en el futuro, probablemente con la esperanza de que no fuera tan elevado como el que le pedía el cabildo de

---

<sup>320</sup> Hay que tener en cuenta que el patrono de la capellanía era el ayuntamiento de la villa, lo que significa que el patrono no estaba de acuerdo con las pretensiones del capellán.

<sup>321</sup> Juan Sempere y Guarinos, en su *Historia de los vínculos y mayorazgos*, menciona el excesivo número de pleitos relacionados con patronatos y obras pías como una de las causas de la ruina y pérdida de fincas y rentas de éstas y, por consiguiente, de la inobservancia de las intenciones religiosas de los fundadores. SEMPERE, Juan, *Historia de los vínculos y mayorazgos*, Madrid, 1805, capítulo XXX.

<sup>322</sup> "porque lo mas gracioso es que haziendo cerca de dos años se le adjudicó la Capellanía; está todabía por celebrarse la primera missa, de las preuenidas por dicho fundador". ACC, Secretaría del Tribunal, 17/795/24, 21.

<sup>323</sup> "porque los grabamenes impuestos al Capellán los tubo este bien presentes, y lo mismo el Tribunal para adjudicarle dicha Capellanía; y como entonces no los tubo por excesibos, tampoco los puede tener en el dia", ACC, Secretaría del Tribunal, 17/795/24, 21.

<sup>324</sup> ACC, Secretaría del Tribunal, 17/795/24, 20.

Placencia, pues es de suponer que antes de hacer esta petición, Aguirre habría tratado de llegar a algún acuerdo con el cabildo, no lográndolo. Al parecer, ante las exageradas exigencias económicas que le habría planteado el cabildo, José María de Aguirre habría intentado en un primer momento conseguir la sustitución de las misas cantadas por rezadas. Posteriormente, viendo que la reducción no iba a ser posible, aceptaría mantenerlas como cantadas, solicitando que se acordara un estipendio adecuado.

Con el fin de resolver al respecto, el día 19 de abril de 1782, un auto del Provisor mandaba al vicario del partido en que estaba comprendida la villa de Placencia que, a la vista de el libro de la capellanía que fundó Juan Antonio de Azcarate, informase del número de misas que se hallaban retrasadas y sin celebrar de las que tenía de carga la citada capellanía, así como del estipendio que se considerase como el regular con que se contribuía al cabildo y beneficiados la iglesia de Placencia por cada una de las misas cantadas con ministros y responso que celebraban en ella en altar señalado y sepultura de los interesados. En su informe, el vicario foráneo de Elgoibar, manifestaba que no se había celebrado ninguna misa en la citada capellanía desde su fundación, y que tampoco tenía libro de cumplimientos su capellán. Informaba también de que en dicha iglesia no existía ninguna fundación de misas de similares características, aunque cuando la villa o la Real Fábrica de Armas encargaban al cabildo la celebración de alguna misa de similares características pagaban como estipendio 42 reales con *Te Deum*<sup>325</sup> y 32 sin él.

El Provisor, no satisfecho con el informe del vicario, dispuso que se llevara a cabo una conciliación entre el Cabildo y José María de Aguirre para que se conformasen en la limosna que se debía pagar por cada una de las misas de la fundación. En el caso de que no llegasen a un acuerdo pedía que se le informara del estipendio que se paga por misas de similar solemnidad en dicho cabildo o en otros de los pueblos de las inmediaciones. Así mismo, mandó que se le informara del número de misas que estaban sin celebrar desde el día en "*que empezaron a correr los réditos del censo sobre que está fundada*". Casi dos meses después, al no haber obtenido respuesta del vicario foráneo de Elgoibar, el Provisor en un nuevo auto mandó que se llevase a cabo la conciliación decretada en el auto anterior y el informe consiguiente.

Finalmente, el día 7 de agosto de 1782, por intermediación del vicario foráneo de Elgoibar, se reunieron los miembros del cabildo eclesiástico de Placencia con José María de Aguirre. Según dijeron los beneficiados de Placencia, en aquella Iglesia no había fundación alguna de Capellanía o Aniversario de igual solemnidad y circunstancias que la fundada por Juan Antonio de Azcarate, pues la misa que se celebraba los sábados en el Altar del Rosario, cantada de coro, con asistencia del cabildo, con diácono y subdiácono, no pertenecía a fundación alguna, ni había estipendio alguno por ella, ya que se celebraba por costumbre muy antigua del cabildo y del pueblo de Placencia. Tal como afirmaba el cabildo existían muchas

---

<sup>325</sup> En el escrito con el que el procurador de las comunidades eclesiástica y secular de Placencia remitía al tribunal el informe del vicario foráneo se hacía la aclaración de que el responso que dispuso Juan Antonio de Azcarate que se rezase sobre la sepultura de sus padres era equivalente al *Te Deum*.

fundaciones de aniversarios y misas perpetuas que se celebraban en días y horas señalados, siendo algunas en altar señalado y otras no; algunas eran cantadas y otras rezadas, y los aniversarios solían ser con oficio de difuntos. Según el cabildo no se podían tomar como referencia los estipendios correspondientes a estas fundaciones, ya que muchas de ellas eran muy antiguas y sus estipendios demasiado tenues. Estos estipendios, según afirmaron, eran tolerados por el cabildo por evitar gastos y recursos<sup>326</sup>.

Se deja ver en este pleito que no existía una regla clara a la que atenerse a la hora de fijar los estipendios por las misas. Era la costumbre la norma principal que fijaba la cuantía de los estipendios, dependiendo éstos de la solemnidad de la misa, de si era cantada o no, acompañada o no de órgano, o si requería asistencia de todo el cabildo o si era diaconada. Para las misas perpetuas se fijaba un estipendio más elevado. Lo mismo ocurría si eran en día y hora señaladas y si debían celebrarse en altar señalado<sup>327</sup>.

El cabildo hizo una oferta al capellán consistente en celebrar las misas, incluido el responso que había de hacerse al finalizar las mismas, a cambio de la mitad de la renta. Dado que la renta anual de la capellanía era de 2.000 reales, el cabildo percibiría 1.000, quedando otros tantos libres de cargas para el capellán. El estipendio correspondiente a cada misa era aproximadamente de 20 reales. José María de Aguirre no aceptó.

Con el fin de justificar su desacuerdo con los estipendios que pretendía cobrar el cabildo por las misas de su capellanía, José María de Aguirre recurrió a unas memorias de misas perpetuas, la mitad de las cuales debían ser cantadas y la otra mitad rezadas, que fundó en 1764 Simón de Obiaga<sup>328</sup>, quien también fundó una capellanía en la misma iglesia de Placencia. En su testamento, Simón de Obiaga, dispuso que sus testamentarios pagasen por las misas cantadas dos reales más del estipendio acostumbrado. Resultando que por dichas misas se estaba pagando un estipendio de siete reales y medio, significaba que el estipendio acostumbrado por el cabildo debería ser de cinco reales y medio por cada misa. El cabildo, en su

---

<sup>326</sup> Varios años más tarde, en 1793, se inició un proceso judicial en el tribunal eclesiástico para resolver la petición del cabildo de Placencia de reducción de las misas y aniversarios con que se hallaba gravado. El proceso concluyó el 25 de julio de 1795 con una sentencia del Provisor por la que se aprobaba la reducción pedida por el cabildo. ACC, Secretaría del Tribunal, 17/795/20.

<sup>327</sup> En 1795, en el dictamen del fiscal general eclesiástico en el que se resolvía favorablemente a la petición del cabildo de Placencia de reducción de misas y aniversarios se establecieron los siguientes estipendios:

- aniversarios, con nocturno, misa cantada con ministros, y dos responsos: 30 reales
- aniversarios de misa cantada con ministros y responso, en capilla y altar determinados: 18 reales
- aniversarios de misa cantada con ministros y responso, sin capilla y altar determinados: 15 reales
- misas cantadas sin ministros: 11 reales
- misas rezadas con responso, y capilla determinada: 8 reales
- misas rezadas: 6 reales

ACC, 17/795/20, 85.

<sup>328</sup> Simón de Obiaga, natural de Placencia, era según consta en el libro de la capellanía que fundó en su villa natal "Presvitero Beneficiado de las Iglesias Parroquiales de Santa Cruz de la coronada villa de Madrid y Santa María la Real de esta recordada villa de Plazencia, y secretario Jubilado del Consexo supremo de Ynquisicion". ACC, Secretaría del Tribunal, 17/795/24, 79.

respuesta a la pretensión de Aguirre de equiparar las misas de su capellanía con las de la fundación de Simón de Obiaga<sup>329</sup>, reiteró sus argumentaciones en favor de un estipendio próximo a los 32 reales que se cobraba por las misas que encargaba la villa y la Real Fábrica de Armas.

Se enfrentaban los intereses contrapuestos del cabildo y del capellán. El cabildo, apoyado por el ayuntamiento como patrono de la capellanía, utilizaba hábilmente sus argumentaciones de tal forma que sus intereses económicos quedaban encubiertos tras los de la salvación del alma del fundador y el aumento del culto. Mientras que Aguirre reclamaba un estipendio que le permitiese mantener unas rentas con las que atender a su subsistencia con el fin de poder continuar sus estudios y la carrera eclesiástica, el cabildo se ratificaba en la necesidad de imponer un estipendio justo sin que pudiera embarazarlo el hecho de que al capellán le quedase más o menos producto, pues, según afirmaban, el fundador en primer lugar atendió precisamente al sufragio de su alma en la celebración de dichas misas, razón por la que legó parte de su hacienda. Nadie, ni el capellán ni ningún otro debería poder, en opinión del cabildo, llevar la parte más mínima de las rentas que produjese el capital reservado por el fundador para un fin espiritual sin cumplir primero con dicho fin. Teniendo en cuenta además que fue voluntad del fundador dejar al cuidado de su fundación, como patrono, al ayuntamiento de la villa, y que éste se oponía a las pretensiones de Aguirre, el cabildo se veía reforzado en su postura intransigente. El cabildo manifestaba su extrañeza de que en unos tiempos en los que ni siquiera las misas rezadas se encargaban por menos de cuatro reales, pretendiera Aguirre que por sólo siete *"se diga cantada con Ministros acompañamiento de organo, y asistencia del todo el Cauildo, que se compone de seis individuos, teniendo a mas que pagar al organista, y sachristan como a los Ministros de Altar"*<sup>330</sup>.

El pleito concluyó con la sentencia que dictó el Provisor el 1 de Octubre de 1783, según la cual se establecía el importe del estipendio por las misas en 16 reales *"hasta tanto que dicho Dn. Joseph María ascienda al sagrado Presviterado, en cuio caso ha de ser del cargo de este la celebracion de dichas misas en la forma dispuesta por el fundador, y entonces ha de cesar el Cavildo en ella"*<sup>331</sup>. Con respecto a las misas atrasadas desde el 27 de noviembre de 1778, se mandaba al capellán el pago de las mismas al mismo estipendio de 16 reales, lo que suponía un total de 3.952 reales que mandaba que se remitiesen al tribunal eclesiástico para que se invirtieran en la celebración de 988 misas rezadas al estipendio de 4 reales cada una, *"dispensando como dispensa su mrd. para este caso la solemnidad, y localidad prebenida por el fundador, con el objeto de que con la maior brebedad se verifique el sufragio de su alma"*<sup>332</sup>.

<sup>329</sup> En relación a las misas de la fundación de Simón de Obiaga, el cabildo afirmaba que *"las Misas de la fundacion de Dn. Simon de Obiaga por ser de las que comunmente se llaman cantadillas, y no tienen dia ni hora precisa, ni asistencia del Cauildo, ni acompañamiento de organo, y se ofician solo por un subdiacono o por schristan lego o por un chico a el pie del Altar sin cantar responso (no) pueden compararse con las de la capellania de dicho Aguirre por ser notable la diferencia entre una y otras"*. ACC, Secretaría del Tribunal, 17/795/24, 93.

<sup>330</sup> ACC, Secretaría del Tribunal, 17/795/24, 94.

<sup>331</sup> ACC, Secretaría del Tribunal, 17/795/24, 100.

<sup>332</sup> ACC, Secretaría del Tribunal, 17/795/24, 100.

La sentencia fue apelada por ambas partes ante el tribunal metropolitano de Burgos, retirándose posteriormente. Sin embargo José María de Aguirre hizo un último intento, sin ningún éxito, para que se le moderase el estipendio que debía pagar por cada una de las misas atrasadas debido a que se hallaba *"imposibilitado de apromptar las cantidades que refiere el auto de 1º del corriente por haver venido a suma pobreza, mediante el fallecimiento de su Padre, y haver mantenido, y mantener a su Madre viuda, y dos hermanas solteras; en lo que ha invertido los productos de dicha Capellanía a excepción de los del año corriente"*<sup>333</sup>.

Un buen número de pleitos, de la larga lista de los que tuvieron lugar entre los beneficiados de Placencia en las últimas décadas del siglo XVIII, jalonaría en adelante la carrera eclesiástica de José María de Aguirre<sup>334</sup>, quien tras recibir el subdiaconado en 1784, al año siguiente fue propuesto por el mismo cabildo para el orden de evangelio a fin de que fuese ordenado de misa a la mayor brevedad posible. En el informe que redactó el vicario foráneo de Elgoibar relativo a la solicitud de José María de Aguirre de ordenarse de Evangelio, señalaba que no encontraba impedimento alguno para ello, y que teniendo en cuenta la necesidad de sacerdotes que había en la parroquia, sería utilísimo que se le dispensara de los intersticios ascendiéndole al presbiterado en las mismas órdenes<sup>335</sup>.

Aguirre se ordenó de presbítero y alcanzó un beneficio<sup>336</sup> en la iglesia de Placencia, pero nunca renunció a la capellanía a pesar de que en 1793, en el transcurso de un pleito se quejase de los pesares *"que le iba ocasionando la buena Capellanía, que no le ha producido asta aqui lo suficiente para los gastos, que sufre por causa de ella"*<sup>337</sup>. En las iglesias de patronato y en las que estaba vigente el sistema de

<sup>333</sup> ACC, Secretaría del Tribunal, 17/795/24, 108.

<sup>334</sup> Él mismo afirmó en 1793 que había tenido cinco pleitos con el cabildo. Todavía tendría algunos más. En 1796, mantuvo un pleito contra el cabildo que no le había convocado a una reunión del mismo (ACC, Pleitos beneficiales, 21/229/6), y en 1797 otro relacionado con el nombramiento para mayordomo del cabildo (ACC, Pleitos beneficiales, 21/229/5).

<sup>335</sup> Las órdenes venían a ser en la Iglesia del Antiguo Régimen como una especie de "cursus honorum". La carrera clerical que conducía hasta la "cura animarum" era un proceso dividido en cinco fases: prima tonsura, los cuatro grados u órdenes menores (ostiario, lector, exorcista y acólito), epístola o subdiaconado, evangelio o diaconado, y misa o presbiterado.

Las órdenes eran conferidas exclusivamente por el Obispo de la diócesis a la que pertenecía el aspirante. En el caso de querer ordenarse en otra diócesis el aspirante necesitaba que su obispo remitiese una "dimisoria" dirigida al obispo que había de ordenarle. Una vez examinados, aprobados y ejercitados, el Obispo confería las órdenes a los aspirantes en días señalados: San Mateo (Septiembre), La Trinidad (Primavera) o Adviento (Noviembre-Diciembre).

Para acceder a una orden era necesario pasar por las anteriores y cumplir con los "intersticios", es decir, con el tiempo que debía transcurrir obligatoriamente entre un orden y el siguiente.

Estaban reguladas las edades mínimas para recibir cualquiera de las órdenes. Si no se cumplía con este requisito se podían obtener dispensas especiales en caso de necesidad.

<sup>336</sup> En 1795, en un escrito que formaba parte del expediente del pleito que mantuvo en relación con la conmutación de las misas cantadas por rezadas, aparecía todavía como "presbítero capellán" (ACC, 17/795/24, p. 183). Pero en 1796, en otro escrito relativo al mismo pleito, figuraba ya como "presbítero beneficiado de ración entera de la iglesia parroquial de Placencia" (ACC, 17/795/24, p. 195). En 1799 era mayordomo del cabildo de Placencia (ACC, 17/799/8, p. 3), y tal como se deduce del auto de visita al libro de finados que realizó en 1819 el obispo Puyal, en aquel año de 1799, José María de Aguirre disfrutaba ya del curato (DEAH, 2931/001, Placencia, libro 4º de finados).

<sup>337</sup> ACC, Secretaría del Tribunal, 17/795/24, 144.

beneficios patrimoniales<sup>338</sup> la posesión de una capellanía colativa, por el hecho de tratarse de un beneficio eclesiástico, era un medio para poderse ordenar de presbítero y de esta forma tener acceso a ocupar un beneficio patrimonial.

Es importante no confundir el hecho de que una capellanía sea un beneficio eclesiástico con los beneficios parroquiales. En una parroquia podía haber muchas capellanías eclesiásticas ocupadas por capellanes residentes o no. Las capellanías eclesiásticas constituían beneficios, pero no eran equiparables a los beneficios parroquiales, pues no formaban parte del cabildo parroquial. Por ello a los capellanes no se les solía denominar beneficiados sino capellanes, distinguiéndose así de quienes poseían un beneficio parroquial. Sólo quienes poseían un beneficio parroquial formaban parte del cabildo eclesiástico. Los capellanes solían permanecer en la iglesia de la que eran patrimoniales como expectantes. Tras hacer la carrera eclesiástica y ordenarse de sacerdotes a título de la capellanía, esperaban a que se produjera alguna vacante en algún beneficio de la iglesia para ocuparlo. Los beneficios que ocupaban estos expectantes solían ser muy tenues, es decir, de rentas muy bajas. En muchos casos se trataba de capellanías, pero en otros eran sacristías o capellanías de ánimas. Estos beneficios, cuando eran muy tenues e incongruos, en el obispado de Calahorra, eran conocidos como "beneficios de aire"<sup>339</sup>.

Algunos capellanes al conseguir un beneficio parroquial renunciaban a la capellanía que de esta forma podía pasar a otro miembro de su familia al que le serviría tanto por las rentas como por constituir un título de ordenación para emprender la carrera eclesiástica. Ya fuera por no querer renunciar a una renta nada despreciable, o por tener unas cargas que, tal como se ha podido comprobar, eran excesivamente gravosas para quien no fuera sacerdote, o incluso por no haber en la familia ningún otro posible aspirante, José María de Aguirre continuó como capellán de la que fundara su tío hasta su fallecimiento en el año 1812.

Con motivo de la visita pastoral que realizó el obispo de Calahorra en 1819 a las parroquias de su diócesis situadas en Gipuzkoa y en el Señorío de Bizkaia, la misma que daría lugar a un larguísimo pleito por la sucesión de la capellanía vacante tras el fallecimiento de Aguirre, queda constancia de que, al menos desde 1799, fecha de la anterior visita pastoral, José María de Aguirre era el cura de la

---

<sup>338</sup> Los beneficios patrimoniales eran aquellos que se debían proveer en naturales del lugar al que pertenecía la iglesia a la que correspondían. Algunos estaban reservados exclusivamente para los "pilogos", es decir, para los bautizados en la pila bautismal de la iglesia a la que pertenecía el beneficio. Los niños y jóvenes que aspiraban a hacer la carrera eclesiástica que iniciaban con la tonsura, debían obtener algún beneficio o capellanía que les permitiera disponer de un título de ordenación, gracias al cual se convertían en "expectantes" hasta el momento en que se producía una vacante en la iglesia de la que eran patrimoniales para la que eran presentados por el propio cabildo o por el patrono si la iglesia era de patronato. La patrimonialidad de los beneficios era una característica de varias diócesis, entre ellas la de Calahorra y La Calzada. En el caso de la mayor parte de las iglesias de Bizkaia y Gipuzkoa, al régimen de patronato iba unida generalmente la patrimonialidad de los beneficios. Cfr. GALARRAGA, L. M., "Los beneficios patrimoniales", en *Scriptorium Victoriense* (1956), pp. 113-143.

<sup>339</sup> "Y lo mismo se entienda de los Beneficios, que llaman de ayre, que son un título mero para ir entrando a gozar frutos, según las vacantes de aquella Iglesia, en donde están". CSC-1698, const. XV, tit. V, lib. I.

parroquial de Placencia. En el auto de visita de los libros de finados de esta parroquia<sup>340</sup>, el obispo hizo constar los numerosos defectos de forma y la poca escrupulosidad demostrada por Aguirre en el registro de las defunciones, sin anotar las últimas voluntades y las mandas pías de los finados y por tanto no dejando constancia del cumplimiento de las mismas. Según consta en el auto de visita, Aguirre ya había sido amonestado por la misma razón en la anterior visita de 1799, por lo que el obispo deducía "*que no se leen las providencias de los Prelados ó que se miran con desprecio*"<sup>341</sup>.

Una vez alcanzado el orden presbiterial, José María de Aguirre podría cumplir personalmente con las cargas de la capellanía, pero dado que la misa de los viernes había de celebrarse diaconada y con asistencia del cabildo, no tuvo más remedio que seguir pagando algún estipendio al cabildo por ello, hasta que en 1792, con motivo de la falta de acuerdo con el cabildo<sup>342</sup>, que se excusó a la asistencia por ningún estipendio, solicitó la reducción de las misas cantadas a rezadas, logrando, por el auto de 19 de julio del mismo año la conmutación de las mismas, de tal forma que a partir de ese momento Aguirre pasaría a disfrutar íntegramente de la renta de una capellanía cuyas cargas se habían reducido a la asistencia a vísperas y a la misa mayor de domingos y festivos y al confesionario, algo que ya debía hacer por su condición de beneficiado del cabildo, y a una simple misa rezada que debía celebrar todos los viernes del año en el altar de Jesús Nazareno.

Pero en junio de 1793 se inició un nuevo pleito cuando Andrés Ignacio de Urquiola, presbítero, abogado de los Reales Consejos, y servidor del beneficio, que en la parroquial de la villa de Placencia poseía Manuel Vicente de Tobar, interpuso una demanda reclamando la nulidad de la conmutación de las misas cantadas por rezadas que se decretó en 1792, por no haber motivo para ello y por no haber contado con el patrono de la capellanía.

En esta ocasión, sin embargo, ni el patrono de la capellanía, es decir, el ayuntamiento de la villa de Placencia, ni la mayoría de los beneficiados del cabildo tomaron parte en el pleito, al que únicamente se adhirió uno de los beneficiados de media ración, José Ángel de Azcarate, que se había distinguido hasta el momento por haber protagonizado en solitario multitud de pleitos contra el resto del cabildo<sup>343</sup>.

---

<sup>340</sup> DEAH, 2931/001, Placencia, libro 4º de finados, "Difuntos de Placencia, visita del año 1819".

<sup>341</sup> *Ibídem*.

<sup>342</sup> Posteriormente, en el pleito que mantuvo en relación con la petición de nulidad de la conmutación de las misas, declararía que: "*hauiendose celebrado esta Misa puntualmente (despues de cinco pleytos, que he tenido con el Cauildo de esta Villa) asta el dia veinte y ocho de Octubre de mil, setecientos, y nobenta, y uno, emque esperimente la novedad, de que los Indibiduos del Cauildo, se escusaban a asistirme por ningun estipendio a Diaconada, por cuiu causa imculpable en mi, comque me hallaba imposibilitado a celebrar la referida Misa, recurri el dia Trece de Abril de mil, setecientos nobenta, y dos, al Señor Dn. Felipe Prado Provisor, y Vicario general de este obispado de Calahorra, declarandole quanto espongo arriba, y suplicandole, se sirbiese declarar, que en adelante cumpliria yo con celebrar la referida Misa rezada en lugar de cantada, mediante la escusa de dichos señores Beneficiados de asistirme a Diaconar, por cuio medio no se retrasaria el sufragio del Alma del fundador*". ACC, Secretaría del Tribunal, 17/795/24, 148.

<sup>343</sup> En el pleito sobre reducción de misas y aniversarios pedida por el cabildo en 1793, a la que se oponía José Ángel de Azcarate, se lanzaron durísimas acusaciones contra él: "*es un litigante temerario, y que por lo mismo a mas de condenarsele en costas, debe ser castigado exemplarmente*".

Urquiola acusó a Aguirre de preferir sus intereses al culto divino y de no haber contado con el patrono para solicitar la conmutación de las misas, aunque éste<sup>344</sup> se manifestó favorable a la conmutación decretada por el Provisor en respuesta a un escrito que le remitió el propio Aguirre a los pocos días de que Urquiola presentase su demanda. Después de un año en el que las dos partes se intercambiaron durísimas acusaciones de todo tipo, Urquiola retiró la demanda, probablemente porque habían cesado sus intereses en el asunto.

Quien después del fallecimiento del capellán pleiteó por la posesión de la capellanía durante varios años, el arquitecto Miguel Antonio de Jauregui, marido de la hermana de José María de Aguirre, aparece por primera vez en la documentación como instigador de la reducción de misas pedida en 1792. En la información de testigos que se hizo el 17 de julio de 1793 como parte de las pruebas presentadas por Urquiola para declarar nula la conmutación concedida por auto de 19 de julio de 1792, Manuel de Barrutia, presbítero y beneficiado de la parroquial de Placencia, a la pregunta de *"si es cierto que el citado Aguirre, buscó y preparó a los referidos Lasalde y Barrutia, para la respuesta que habian de dar a las Letras que se libraron por este Tribunal el año proximo pasado relatibas a las Misas de dicha fundacion, por medio de que persona, o personas, y en que terminos, y circunstancias"*, respondió que *"es cierto, que Dn. Miguel de Jauregui Hermano Politico de Dn. Joseph María de Aguirre Capellan de la Capellanía referida le hablo sobre el asunto, pero le dixo que el motivo, que tenia para acceder a que se reduciese a rezada la Misa de la referida Capellanía, consistía en que Dn. Joseph Angel de Azcarate mi conbeneficiado se resistia a asistir a ella a la hora asignada por el Fundador"*<sup>345</sup>.

Al parecer, Miguel Antonio de Jauregui ya tenía algún interés en que se redujesen las cargas de la capellanía. Para que su interés por la capellanía se manifestase explícitamente faltaban aún veinte años, durante los cuales se puso en marcha un

---

*para que otros se escarmienten, debiendo advertir de paso, que la condenacion de costas, y exaccion de multas no son para Azcarate castigo, que pueda contenerle; pues ha haber sido así, tenía ya bastantes exemplares de la temeridad, conque ha procedido en muchos Pleitos, y particularmente en el que siguió con D<sup>a</sup> Juaquina de Solaguen, en que fue condenado en costas; en otro con Dn. Manuel de Barrutia sobre un incidente en la testamentaria de Dn. Francisco Ignacio de Ibarra, en que tubo igual suerte de condenacion de costas, y a mas fue multado en veinte ducados; en otro con dicho Barrutia sobre nulidad de execucion librada en este Tribunal a instancia de dicho Azcarate por la paga del salario del organo fue condenado en costas, y multado en diez ducados; y en otro con Dn. Antonio de Ibarra sobre el derecho a una capellanía fundada por Dn. Juan Sebastian de Barrutia, en que fue condenado en costas en el correximiento de la Provincia de Guipuzcoa, y Chancilleria de Valladolid con expresion del ningun derecho, conque se opuso Azcarate á dicha Capellanía; y si en los trece Pleitos, que actualmente tiene pendientes".* ACC, 17/795/20, 46-47.

<sup>344</sup> El ayuntamiento de la villa de Placencia, reunido el 17 de junio de 1793, en vista del memorial que le remitió José María de Aguirre, se mostró conforme con que las misas de la capellanía fundada por Juan Antonio de Azcarate se celebrasen rezadas en lugar de cantadas, manifestando también que *"se adhieren al consentimiento que sobre este particular presto el Illtre. Cavildo eclesiástico de la Iglesia Parroquial de esta insinuada Villa Patrono tambien de la indicada Capellanía"*. Los miembros del ayuntamiento estaban demostrando su desconocimiento acerca de la capellanía, ya que consideraron al cabildo también como patrono de la capellanía. ACC, Secretaría del Tribunal, 17/795/24, 150.

<sup>345</sup> ACC, Secretaría del Tribunal, 17/795/24, 137.

proceso desamortizador<sup>346</sup> que tendría muy pocas consecuencias para las capellanías de Placencia y absolutamente ninguna para la que había fundado Juan Antonio de Azcarate, ya que al igual que en la mayor parte de las capellanías de esta villa, su capital no consistía en fincas ni en ninguna otra clase de bienes raíces sino en censos.

---

<sup>346</sup> Este proceso se inició con el Real decreto de 19 de septiembre de 1798 que mandaba enajenar todos los bienes raíces pertenecientes a Hospitales, Hospicios, Casas de Misericordia, de Reclusión y de Expósitos, Cofradías, Memorias, Obras pías y Patronatos de legos, poniéndose los productos de estas ventas en la Caja de Amortización. De esta orden quedaban excluidos los patronatos activos o pasivos de sangre y las capellanías colativas. En el caso de los patronatos de legos que fueran de sangre se les autorizaba para disponer la enajenación de sus bienes poniéndolos en la Caja de Amortización. En el de las capellanías colativas, sin embargo, se invitaba a los obispos a que "*por un efecto de su celo por el bien del Estado*" promovieran espontáneamente la enajenación de los bienes correspondientes a capellanías colativas, u otras fundaciones eclesiásticas, poniendo su producto en la Caja de Amortización con el tres por ciento de renta anual, y sin perjuicio del derecho de patronato activo y pasivo. Nov. Recop., Ley XXII, tit.V, lib. I.

## Miguel Antonio de Jauregui. Maestro arquitecto y capellán consorte.

El papel que en este pleito desempeñó Miguel Antonio de Jauregui puede ayudar a valorar en su justa medida la importancia de lo que se ha llamado el "capital relacional"<sup>347</sup>. Su profesión de arquitecto y su puesto de profesor de dibujo en el Seminario de Nobles de Bergara, casi desde su fundación, le permitieron relacionarse con las elites de poder del ámbito vascongado y con las oligarquías locales guipuzcoanas. La posesión de una capellanía no sólo le permitiría disfrutar de unas rentas, si no cuantiosas, tampoco despreciables, sino que además le convertía, junto a su mujer, que era la auténtica heredera del vínculo, en poseedor de un cargo honorífico dentro de la Iglesia y de la comunidad. El capital relacional del maestro arquitecto de Bergara se vería aumentado con la posesión de una capellanía, al igual que lo fue a través de otro tipo de inversiones inmateriales como la prueba de hidalguía que obtuvo en 1816, o el cargo de comisario de tránsitos para el que consiguió el nombramiento de la Provincia.

Miguel Antonio de Jauregui<sup>348</sup> era hijo del retablista guipuzcoano Tomás de Jauregui, cuya figura ha sido puesta de relieve recientemente por Juan José Martín González<sup>349</sup>, por Ignacio Cendoya Echániz<sup>350</sup>, por María Concepción García Gainza<sup>351</sup>, y, sobre todo, por María Isabel Astiazarain, quien ha dedicado varias investigaciones al estudio de su personalidad y de su producción artística<sup>352</sup>. Tomás de Jauregui fue un importante tracista y constructor de retablos<sup>353</sup>, aunque en ocasiones trasladase sus conocimientos y su arte al terreno del diseño de fachadas,

<sup>347</sup> Pro Ruiz señala que el "capital relacional" se alimenta tanto con la inversión de bienes materiales como inmateriales. Entre estos últimos estarían los favores prestados desde determinadas posiciones institucionales, el honor y el poder simbólico que otorga el contacto con las elites de poder. PRO RUIZ, J., "Las élites de la España liberal: clases y redes en la definición del espacio social (1808-1931)", en *Historia Social*, 21 (1995), pp. 47-69.

<sup>348</sup> Miguel Antonio de Jauregui nació en la villa guipuzcoana de Tolosa, siendo bautizado en la parroquia de Santa María el 25 de junio de 1745, hijo del escultor Tomás de Jauregui y de Agustina de Ondarra. DEAH, Tolosa, Libro 9 de bautizados (1741-1759), pág. 68.

<sup>349</sup> MARTÍN GONZÁLEZ, J. J., *Escultura barroca en España*, Madrid, Cátedra, 1998, pp. 489-490. Según este autor, "no hay duda de que a Tomás de Jauregui hay que situarlo entre los grandes retablistas españoles del siglo XVIII".

<sup>350</sup> CENDOYA ECHÁNIZ, I., "Tomás de Jauregui, Maestro retablista guipuzcoano del siglo XVIII. Aproximación a su obra", *BSEAA*, 57 (1991).

<sup>351</sup> GARCÍA GAINZA, M. C., "Los Retablos de Lesaca", en *Homenaje a Don José Esteban Uranga*, Pamplona, 1971, pp. 327-343.

<sup>352</sup> ASTIAZARAIN, M. I., *Gipuzkoako erretablistika I. Tomás de Jauregui*, San Sebastián, Gipuzkoako Foru Aldundia, 1994; ASTIAZARAIN, M. I., *Arquitectos guipuzcoanos del siglo XVIII*, San Sebastián, Gobierno Vasco, 1988; ASTIAZARAIN, M. I., "El pórtico y cancel de Santa María de Tolosa: Tomás de Jauregui y José Ignacio de Lavi", en *Archivo Español de Arte*, 63 (1990), pp. 633-640; ASTIAZARAIN, M. I., "El arquitecto Tomás de Jauregui y el escultor Juan Bautista Mendizábal en el Retablo Mayor de Zumárraga", en *Boletín de la RSBAP*, 46 (1990), pp. 359-397.

<sup>353</sup> Los retablos de Tomás de Jauregui se encuadran en la tipología conocida como retablo-cascarón, de planta curva y formado, según la descripción del mismo que hace Ignacio Cendoya Echániz en la obra citada, por un basamento pétreo, alto banco, cuerpo principal y único ordenado por columnas y pilastras gigantes, y remate en cascarón a modo de verdadera bóveda celeste. Esta tipología de retablo, de la que el retablo mayor de la iglesia parroquial de Zumárraga diseñado por Jauregui es uno de los mejores ejemplos, tuvo un gran éxito en Gipuzkoa, pudiéndose reputar a Tomás de Jauregui como el maestro más representativo de la misma.

como en el caso del pórtico de la iglesia de Santa María de Tolosa. En el contexto de la negativa valoración del barroco por parte de la crítica académica, Cean-Bermúdez, en sus *Adiciones a las Noticias de los arquitectos y de la arquitectura de España* de Eugenio Llaguno, considera a Tomás de Jauregui como un representante del mal gusto del "churriguerismo", "*con raras y extravagantes invenciones en el adorno*"<sup>354</sup>. Sin embargo, la crítica de Cean-Bermúdez no alcanza al hijo de Tomás de Jauregui, Miguel Antonio, de quien dice que era "*maestro del diseño en el Seminario de Bergara, que trabaja con juicio y arreglo a los órdenes de arquitectura*"<sup>355</sup>.

La tradición familiar fue un factor importante en la carrera de Miguel Antonio. El 1 de abril de 1766, con sólo 22 años, aparecía junto a su padre, como maestro escultor, en el contrato para la realización del retablo mayor de la iglesia de Gaviria<sup>356</sup>. Posteriormente, tras el fallecimiento de su padre en 1768, continuó los trabajos junto a Juan Elías de Inchaurrendiaga, maestro arquitecto también y cuñado de Tomás de Jauregui. Algo parecido ocurrió con la construcción de los retablos colaterales de Nuestra Señora del Rosario y de las Benditas Ánimas de la iglesia de San Martín de Zegama, cuyas trazas habían sido realizadas por su padre en 1757, aunque el contrato para su construcción no se firmó hasta el 20 de agosto de 1766, ya que la muerte de Tomás de Jauregui hizo que los patronos acordaran la construcción de dichos retablos con Miguel Antonio de Jauregui y Tomás de Aizquibel. En este caso, Miguel Antonio se ocuparía exclusivamente de la escultura, encargándose de la arquitectura Tomás de Aizquibel.

Las esculturas de Miguel Antonio en los retablos de Zegama, según afirma Ignacio Cendoya<sup>357</sup>, son de tipo popular, con incorrecciones anatómicas y modelados poco logrados. En opinión de este autor, Miguel Antonio de Jauregui se muestra en esta obra como un escultor falto de recursos, aunque se pudiera aducir a su favor su juventud, ya que en el momento de finalización de las obras contaba con 24 años.

En otro artículo posterior en el que analiza su participación en el retablo de la iglesia de Asteasu, el mismo autor manifiesta un juicio más positivo acerca del arte de Miguel Antonio: "*hay que reconocer una evidente mejora con respecto a sus primeras obras*"<sup>358</sup>, y, con respecto a la evolución de su estilo, añade: "*En unos momentos en los cuales la herencia del rococó se tiñe de porte neoclásico..., el escultor avecindado en Bergara no puede sustraerse a esa realidad. En cualquier caso, hay que recordar que en esa fecha, hacia 1779, el autor contaría con 34 años,*

<sup>354</sup> CEAN-BERMÚDEZ, J. A., *Adiciones a las Noticias de los arquitectos y arquitectura de España de Eugenio Llaguno*, Madrid, Turner, 1977, t. IV, p. 118. Cean-Bermúdez añade que "*por fortuna no se conocen otras obras de su capricho sino retablos, que son más fáciles de apejar que los edificios de piedra y ladrillo. Tales son los altares nuevos del convento de Aránzazu, los colaterales del Rosario y de las Animas en la parroquia de Zegama, el retablo mayor de la iglesia de Gaviria, el de Ormaiztegui, el de Zumarraga, el de Sta. Catalina, o del consulado en la parroquia de Sta. María de la ciudad de San Sebastián, y otros*".

<sup>355</sup> *Ibíd.*, p. 118.

<sup>356</sup> AHPG, Tolosa, leg. 573. Pedro de Osinalde. 1766. Citado por CENDOYA ECHÁNIZ, I., "Tomás de Jauregui...", p. 478.

<sup>357</sup> CENDOYA ECHÁNIZ, I., "Tomás de Jauregui...", p. 482.

<sup>358</sup> CENDOYA, I., "El retablo mayor de la iglesia parroquial de Asteasu", *Cuadernos de Sección. Artes plásticas y documentales*, 10 (1992), p. 167.

*habiendo alcanzado una cierta madurez que tiene su plasmación en las imágenes comentadas. Quizá sea ésta la razón por la cual sus intervenciones en el rococó, complementando muchas veces lo trazado, y en ocasiones ejecutado, por su padre, adolecen de evidentes defectos que hacen poco atractivos esos años formativos*"<sup>359</sup>.

Pero Miguel Antonio no se dedicaría sólo al diseño y construcción de retablos como su padre, aunque continuó haciéndolo<sup>360</sup>, ya que intervino también en diseños de arquitectura urbana<sup>361</sup> e industrial. El proyecto más significativo de arquitectura industrial fue el que presentó el 23 de septiembre de 1785 al Conde de Lacy para la construcción de los nuevos almacenes para la Real Fábrica de Armas de Placencia. Contemplaba la construcción de un nuevo edificio junto al existente, con el que se pretendía resolver un gran número de problemas derivados del mal estado de las instalaciones existentes, debido al poco espacio para el almacenamiento de las armas y a las malas condiciones generales debido a la humedad y al deterioro de los edificios que corrían riesgo de ruina. Este proyecto, que ha sido estudiado por María Isabel Astiazarain<sup>362</sup>, nunca llegó a realizarse, levantándose otro mucho más amplio en otra ubicación diferente entre los años 1804 y 1809.

La amplia red de relaciones sociales y de influencias que Jauregui fue tejiendo por medio de su actividad como maestro arquitecto, se vio reforzada gracias a su dedicación en el Seminario de Nobles de Bergara como profesor de dibujo. Las escuelas gratuitas de dibujo fueron creadas, siguiendo el ejemplo de las existentes en Francia, por la recién fundada Real Sociedad Bascongada de Amigos del País en 1774, dos años antes de que se abriesen por primera vez las aulas del Real Seminario Patriótico Vascongado<sup>363</sup> en el antiguo colegio de los jesuitas de Bergara. Fueron tres las escuelas gratuitas de dibujo, una en Vitoria, otra en Bilbao y otra en Bergara. Para esta última se eligió como maestro a Miguel Antonio de Jauregui<sup>364</sup>.

---

<sup>359</sup> *Ibídem*, p. 167.

<sup>360</sup> En 1818, Jauregui hizo los planos del retablo del altar mayor de Hondarribia, pagándosele 2.000 reales, procedentes de los diezmos que se recogían de Elgoibar. Ese retablo, con los añadidos que le hizo Pedro Nolasco de Echeverría, no sería instalado sino hasta después de 1850. Los planos de Jauregui habían sido aprobados por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1818. AGG, Juntas y Diputaciones. Serapio Mugica, JD SM 12,1. Ver también: PORTU IRIBARREN, Florentino, *Hondarribia. Notas históricas y curiosidades*, Hondarribia, Hondarribiako Udala, 1989, p. 557. Mi agradecimiento a Antonio Prada Santamaría por haberme proporcionado esta información.

<sup>361</sup> Entre otras obras llevadas a cabo, en 1788 realizó el diseño para el Juego de pelota de la villa de Placencia. ASTIAZARAIN, M. I., *Arquitectos guipuzcoanos del siglo XVIII*, San Sebastián, Gobierno Vasco, 1988, p. 78.

<sup>362</sup> ASTIAZARAIN, M. I., "Un ejemplo de arquitectura industrial en la Guipúzcoa del siglo XVIII. La Real Fábrica de Armas de Placencia", en *Cuadernos de Sección. Artes Plásticas y Documentales*, 10, San Sebastián, Eusko Ikaskuntza, 1992, pp. 9-28. En este artículo se analiza en todos sus detalles el proyecto presentado por Jauregui y se realiza un pequeño estudio comparativo con los planos de los edificios que hizo Iñigo Espada en 1751, a partir de la documentación existente en el Archivo General de Simancas de ambos proyectos.

<sup>363</sup> El Real Seminario Patriótico, por Real Orden de 23 de julio de 1804, dejó de depender de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, para pasar a funcionar bajo la única e inmediata protección y autoridad del Gobierno, pasando desde entonces a denominarse Real Seminario de Nobles. Ver: MENDIOLA QUEREJETA, Rufino, *Los estudios en el Real Seminario de Bergara*, Bergara, 1961.

<sup>364</sup> *Resumen de Actas de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País en sus Juntas Generales*, San Sebastián, 1985, "Juntas Generales celebradas en Vitoria por setiembre de 1774", Día 21 por la tarde, Junta ordinaria y de conclusión, p. 22

Una vez creado el Seminario Patriótico estas escuelas continuaron funcionando de forma independiente, pero ya en las Juntas Generales de la Real Sociedad Bascongada celebradas en Vitoria en septiembre de 1779 se trató de la decadencia de éstas y de las dificultades para su subsistencia, decidiéndose en las mismas Juntas Generales que *"al maestro de dibuxo de Bergara se le consignent cincuenta ducados mas de salario por maestro del seminario patriótico"*<sup>365</sup>, de donde se deduce que a partir de aquel momento Miguel Antonio pasaría a formar parte del profesorado del Seminario Patriótico.

El prestigio del Seminario Patriótico redundaba lógicamente en el reconocimiento social y en la reputación de quienes pertenecían a él. Para Miguel Antonio de Jauregui, su puesto de maestro de dibujo, además de proporcionarle unas rentas seguras, formaba parte de su capital inmaterial, del que se valía cuando era necesario, como cuando para apoyar su solicitud, en nombre de su mujer, de la capellanía vacante por fallecimiento de José María de Aguirre, en su memorial dirigido en 1812 al alcalde y municipales de la villa de Placencia, como patronos de la capellanía, hacía referencia a sus *"dilatados méritos ... contraídos en estos treinta y ocho años de enseñanza pública ... en el Seminario de Bergara"*<sup>366</sup>.

El salario que obtenía como maestro de dibujo del Real Seminario de Bergara debía de ser bastante modesto a tenor de las solicitudes que realizó en 1815 para conseguir una dotación acorde con sus méritos y con su dedicación.

A lo largo de sus años de dedicación como maestro de dibujo sus ingresos se habrían complementado con los obtenidos por los proyectos arquitectónicos que llevó a cabo. El prestigio que le otorgaba el puesto en el Seminario de Bergara, y las buenas relaciones que mantuvo con los directores del mismo serían las llaves que le abriesen muchas puertas. Tal como ocurrió en 1815 cuando gracias a la recomendación de Miguel de Lardizabal y Uribe<sup>367</sup>, por entonces secretario de estado del Ministerio Universal de Indias, obtuvo una dotación de seiscientos ducados anuales y una jubilación de trescientos para cuando quedara impedido<sup>368</sup>.

Unos meses antes de conseguir la mencionada dotación, había remitido, a través del director del Seminario, Domingo de Iribe, un memorial dirigido a Miguel de

---

<sup>365</sup> *Resumen de Actas de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País en sus Juntas Generales*, San Sebastián, 1985, "Juntas Generales celebradas en Vitoria por setiembre de 1779", Día 2 de octubre por la tarde, Junta ordinaria, p. 13.

<sup>366</sup> AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/1, 50.

<sup>367</sup> Miguel de Lardizabal, que había ocupado hasta su supresión en 28 de junio de 1814 la Secretaría de Estado y del Despacho de la Gobernación de Ultramar, y ocupó hasta el 18 de septiembre de 1815, fecha en que éste también fue suprimido, el Ministerio Universal de Indias, había sido director del Seminario de Bergara. Como director de esta institución, planteó una reforma completa del régimen del centro, a raíz de la cual Godoy decretó en 1804 el paso del Seminario a la única e inmediata dirección del Gobierno dejando de depender de la Bascongada. Cfr. URQUIJO GOITIA, José R., *Diccionario biográfico de los ministros españoles en la Edad Contemporánea (1808-2000)*, Madrid, CSIC, 2000, y ASTIGARRAGA, Jesús, *Los ilustrados vascos. Ideas, instituciones y reformas económicas en España*, Barcelona, Crítica, 2003, p. 246.

<sup>368</sup> "S. M. ha tenido a bien señalarle seiscientos ducados de sueldo al año, y trescientos de jubilacion quando llegue a tenerla. De Real Orden lo comunico á V. S. para su inteligencia y cumplimiento. Dios guarde á V. S. muchos años Madrid 28 de Agosto de 1815 = Lardizabal". ARSB, 075-04-07.

Lardizabal en el que solicitaba una dotación suficiente que le permitiera seguir dedicándose a la enseñanza del dibujo sin tener que valerse de otros medios, "*tal como lo hago para no perecer de necesidad*"<sup>369</sup>. En su memorial justificaba su solicitud en base a los méritos contraídos durante 41 años de dedicación al Seminario de Bergara y a su avanzada edad de 70 años.

Algunos meses después, al no obtener ninguna respuesta, por medio de un nuevo memorial solicitaba la recomendación de Lardizabal ante el rey a fin de que le designase para el empleo de Guarda almacén ordinario que se hallaba vacante en las Fábricas Reales de armas de fuego de Placencia. Lardizabal dio traslado de la solicitud al Secretario de Estado del Despacho de la Guerra con un escrito de recomendación en el que afirmaba conocer personalmente los méritos del solicitante y los buenos servicios prestados, que le constaban del tiempo en que fue director del Seminario, y que le hacían acreedor de la gracia que solicitaba. A pesar de esta recomendación no pudo conseguir el empleo, ya que éste, por ser un empleo del ramo de Guerra, sólo podía ser obtenido por rigurosa escala de antigüedad.

Ante el fracaso, Jauregui volvió a solicitar por el mismo medio "*una dotación correspondiente a mi mérito, con la que pueda subsistir con decencia, así como se ha hecho con otros, en quienes tal vez no concurrían tantos requisitos como los míos*". El 28 de agosto de 1815, una semana después de remitir su último memorial, Miguel Antonio de Jauregui recibía, a través del director del Seminario, el oficio remitido por Miguel de Lardizabal en el que le anunciaba la concesión de la dotación mencionada anteriormente.

La capellanía que fundó en Placencia el tío de su mujer, y para la que ésta fue presentada en concepto de capellanía merelega en 1812, constituiría también un importante capital relacional. En este caso también se trataba de un capital tanto material como inmaterial, ya que además del prestigio social y de las oportunidades de ampliar las redes de relaciones, la capellanía le proporcionaría unas rentas nada despreciables<sup>370</sup>.

El fallecimiento de José María de Aguirre el 11 de julio de 1812 fue seguido por un escrito fechado tres días después y dirigido por Miguel Antonio al Alcalde y municipales de la villa, como patronos de la capellanía, solicitando para su mujer, María Bárbara de Aguirre, como hermana del difunto capellán y por ser la aspirante con mayor derecho, la presentación a la capellanía vacante, lo que le fue concedido por el Consejo Municipal de Placencia el mismo día.

En 1816, Miguel Antonio de Jauregui obtuvo por medio de un pleito establecido con el Ayuntamiento de Urretxu, en el que aportó las pruebas que permitían reconocerle como descendiente de hidalgos y oriundo de solares y de linajes guipuzcoanos, la información de hidalguía<sup>371</sup>, que no sólo le otorgaba una posición social

---

<sup>369</sup> ARSB, 100-03-1.

<sup>370</sup> La renta anual de la capellanía era de 2.000 reales, procedentes del censo al dos y medio por ciento en el que estaba impuesto el capital de 80.000 reales que dejó el fundador.

<sup>371</sup> La hidalguía universal reconocida a vizcaínos y guipuzcoanos debía ser probada mediante un pleito establecido con las instituciones provinciales en el que el interesado, dado que la fuente de

preeminente, sino que además le abría las puertas a la obtención de determinados cargos y a la participación en las instituciones locales y provinciales.

Efectivamente, en diciembre de 1816, y por medio de un pedimento dirigido al alcalde de la villa de Urretxu, Miguel Antonio solicitaba se le proveyese de la correspondiente certificación de hidalguía por ser "*noble notorio de sangre como descendiente y originario de las casas solares de Jauregui y Ondarra, sitas la primera en la villa de Arama y la segunda en la citada villa de Bergara de esta M.N. y M.L. Provincia de Gipuzkoa*"<sup>372</sup>. La descendencia de linajes oriundos de la provincia de Gipuzkoa era considerada además como una prueba de limpieza de sangre: "*siendo a más por mi mismo, y medio de mis autores por ambas líneas Christiano viejo, limpio y de limpia sangre y generación sin mancha rara de Judíos Moros Hereges ni penitenciados por el Santo Tribunal de la Inquisición ni otro alguno*"<sup>373</sup>.

Para conseguir este reconocimiento, aportaba las pruebas necesarias para entroncarse con la información de hidalguía obtenida en 1725 por su abuelo Juan de Jauregui conjuntamente con sus hermanos, y con la obtenida en 1647 por el abuelo de éstos, Vicente de Jauregui, además de los correspondientes traslados de las partidas de bautismo y matrimonio que probaban su descendencia legítima de los mencionados Juan y Vicente de Jauregui.

Tras la información de testigos que se llevó a cabo el día 23 de diciembre de 1816, por medio de la cual quedaría ratificada la nobleza y limpieza de sangre del solicitante, al día siguiente, día 24 de diciembre de 1816, el Alcalde y Juez Ordinario de Urretxu expidió la certificación del entroncamiento de nobleza y limpieza de sangre por medio de la cual, Miguel Antonio de Jauregui, a la avanzada edad de 71 años, conseguía la incorporación de derecho a un estamento al que ya pertenecía de hecho, el de la pequeña y mediana nobleza de linaje.

Dos años antes de obtener esta información de hidalguía, Miguel Antonio había sido nombrado por la Provincia *Comisario de tránsitos*. Este nombramiento fue utilizado como prueba de nobleza en el pleito seguido en 1816. Era costumbre de la Provincia de Gipuzkoa nombrar en sus Juntas Generales, a algunos caballeros como *Comisarios de tránsitos*<sup>374</sup>, con la obligación de salir a recibir a las tropas y

---

legitimación de la hidalguía universal era el solar de origen, debía probar su condición de cristiano viejo y oriundo de linajes antiguos sin mezcla de gentes extrañas.

<sup>372</sup> Autos. JAUREGUI, Miguel Antonio - maestro arquitecto y del Real Seminario de Nobles de Bergara, natural de Tolosa y vecino de Bergara-, para entroncarse con la hidalguía litigada por su abuelo paterno Juan de Jauregui y consortes en 1725. Traslado realizado en 1775, por petición de Tomás de Jauregui, de Información de hidalguía de Juan, Vicente, Ignacio y Sebastián de Jauregui - hermanos -, ante la justicia ordinaria de Villarreal en 1725. AMU, Hidalguías, Libro 14, Exp. 5.

<sup>373</sup> *Ibidem*.

<sup>374</sup> La costumbre de nombrar comisarios de tránsito en las Juntas Generales de Gipuzkoa, fue mandada respetar por Real Cédula de 29 de Agosto de 1637. Esta Real Cédula se halla inserta en los FUEROS DE GUIPÚZCOA, tit. XXIV, cap. VI. La Junta General celebrada en Azpeitia en 1779 pidió un dictamen sobre la reducción del número de Comisarios de Tránsitos a los que fueran suficientes. El dictamen de los Caballeros Procuradores de Segura, Mondragón, Ordizia y Hondarribia expresaba que parecían bastantes seis Comisarios de Tránsitos distribuidos en Oiartzun, Hernani, Tolosa, Ordizia, Bergara y Mondragón, ya que estas poblaciones se encontraban distribuidas de forma que se pudiera ir de una a otra en una sola jornada. En el mismo dictamen se recomendaba

acompañarlas hasta el tránsito inmediato, ocupándose de que estuviesen dispuestos los alojamientos necesarios, los bagajes y utensilios, y responsabilizándose de la paz y quietud entre la tropa y los vecinos. Estos Comisarios, elegidos en las villas más importantes por las que pasaban los caminos reales, tenían señaladas unas dietas que cobraban por cada día que se ocupaban en acompañar y asistir a las tropas. Una vez más, Jauregui se beneficiaba de un cargo que le reportaría beneficios materiales e inmateriales.

Miguel Antonio de Jauregui, falleció en la villa de Bergara el 29 de mayo de 1833, a los 88 años de edad, unos meses antes que su mujer. Tuvo funeral de primera clase, que se celebró en la parroquia de Santa Marina de Oxirondo, en la villa de Bergara<sup>375</sup>.

---

que los Comisarios llevasen consigo una copia auténtica del Reglamento de 1719 para que les sirviese de guía de sus operaciones. EGAÑA, Bernabé Antonio de (h. 1753-1804), *Instituciones y colecciones histórico-legales pertenecientes al gobierno municipal, fueros, privilegios y exempciones de la M.N. y M.L. Provincia de Guipúzcoa*, edición preparada por DIEZ DE SALAZAR, L. M., y AYERBE, M. Rosa, San Sebastián, Diputación Foral de Gipuzkoa, 1992, pp. 165-190

<sup>375</sup> DEAH, Bergara, Santa Marina, Libro tercero de finados (1786-1834), A.1-25 (0737-002).



## María Bárbara de Aguirre. La capellana.

En un momento histórico en el que la mujer todavía tenía acceso a determinados espacios de los que poco después, con el triunfo de la ideología burguesa de los ámbitos separados, quedaría totalmente excluida<sup>376</sup>, María Bárbara de Aguirre, una mujer con un nombre de indudables resonancias armeras, se presentó como aspirante a la capellanía vacante que fundó en Placencia su tío Juan Antonio de Azcarate. No le resultó difícil conseguir la presentación y el nombramiento correspondiente, para poseerla *quieta y pacíficamente* durante varios años.

En base a algunas de las actitudes que se reflejan en los expedientes de los pleitos relacionados con la posesión de esta capellanía, podríamos considerarla como una mujer de fuerte carácter. Según la opinión del procurador de la parte contraria en el pleito que se entabló por la posesión de la capellanía que había fundado en la iglesia de Placencia su tío Juan Antonio de Azcarate, expuesta en un pedimento presentado ante el tribunal eclesiástico de Calahorra el 22 de septiembre de 1820, la respuesta dada por "*Doña Bárbara de Aguirre es orgullosa, insubordinada, falta de todo respeto, vilipendiadora de la Autoridad eclesiástica y altamente repugnante a la potestad de un Juez eclesiástico, y la elevadísima dignidad del sucesor de los Apóstoles...*"<sup>377</sup>. Sin embargo no parece que esta caracterización sea demasiado fiel a la realidad a tenor de las declaraciones que justifican la ira del procurador de su oponente en el pleito que seguían ante el tribunal eclesiástico. Si la misma actitud hubiera sido adoptada por un hombre es muy probable que no habría dado lugar a los mismos calificativos.

El de María Bárbara es el caso de una mujer a la que habría correspondido la sucesión en el patronato pasivo de la capellanía que quedó vacante tras el fallecimiento de su hermano José María de Aguirre, si ésta hubiera sido realmente una capellanía laical o merelega como pretendían ella y su marido, el maestro arquitecto Miguel Antonio de Jauregui. Lo que se cuestionó en un largo pleito que discurrió a través de varias instancias y diversas jurisdicciones, durante varios años, fue precisamente la naturaleza de la capellanía, puesto que era ésta lo que condicionaba el derecho de María Bárbara a la sucesión en la misma.

El hecho de ser mujer introducía algunos elementos peculiares en el largo pleito que mantuvieron ella y su marido. Desde el punto de vista de la participación de las mujeres en determinadas instituciones, del papel que les correspondía en las mismas y, sobre todo, de la capacidad de intervenir por sí mismas en ellas, una característica constante en todas las actuaciones en las que María Bárbara se vio involucrada fue la ambigüedad, ya que, aunque ella era la sucesora del fundador y

---

<sup>376</sup> A pesar de las limitaciones impuestas a las mujeres en su capacidad legal desde tiempos remotos, tal como queda patente en varias disposiciones de las leyes de Toro, su exclusión total de los ámbitos públicos no sería efectiva hasta la promulgación de los códigos civiles derivados del código napoleónico de 1804. En los proyectos de código civil, herederos del código napoleónico, que se elaboraron durante el siglo XIX, respondiendo a la ideología burguesa de los ámbitos separados, la mujer pasaría de tener limitada su capacidad de contratar, tal como había sido hasta entonces, a ser considerada como incapaz de hacerlo. Cfr. MUÑOZ GARCÍA, M. José, *Limitaciones a la capacidad de obrar de la mujer casada: 1505-1975*, Madrid, UNEX, 1991.

<sup>377</sup> AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/2, fol. 31rº.

por tanto la aspirante a ocupar la vacante, fue su marido el que actuaba en su nombre y representación en la mayoría de las ocasiones, e incluso más de una vez aparecía él como el poseedor de la capellanía; en otras muchas ocasiones se mostraban ambos como aspirantes o poseedores, de forma conjunta.

Cuando Juan Antonio de Azcarate manifestó su voluntad de fundar una capellanía en la iglesia parroquial de su villa natal, es casi seguro que no sospechó que lo que él creía encaminado a la salvación de su alma y a la perpetuación de su memoria y la de su familia, podría ser el origen de un larguísimo pleito en el que se verían implicadas numerosas instancias como la Cámara de Castilla, el Consejo de Estado, los tribunales eclesiásticos de Calahorra y Metropolitano de Burgos e incluso el propio rey, quien en diciembre de 1820 resolvió que el expediente que se había iniciado en la Cámara de Castilla pasase al tribunal eclesiástico de Calahorra<sup>378</sup>.

Treinta y tres años después de la toma de posesión de la capellanía fundada por su tío, el 11 de julio de 1812 fallecía José María de Aguirre<sup>379</sup>, y tan sólo tres días después, el 14 de julio de 1812, Miguel Antonio de Jauregui dirigió un memorial al Consejo Municipal de Placencia<sup>380</sup> en el que, *"en representación de mi mujer..."*<sup>381</sup>, solicitaba para ella la capellanía fundada por Juan Antonio de Azcarate y que había quedado vacante tras el fallecimiento de su hermano político José María de Aguirre, cura y beneficiado de ración entera de la parroquial de Placencia. Por la forma en la que redactó su memorial, Jauregui era consciente de las dificultades que podía encontrarse para conseguir su objetivo, ya que en él advertía que si el primer capellán había logrado espiritualizarla lo hizo en perjuicio de sus sucesores e ignorando la voluntad del fundador. Años más tarde, cuando tuvo que defender los derechos de su mujer frente a las pretensiones del obispo de Calahorra, su defensa se vería reforzada con argumentos más elaborados, pero en estos momentos en los que probablemente contaba con el acuerdo del propio Consejo Municipal, no necesitó aportar demasiadas pruebas que demostrasen que la capellanía era merelega o laical. La situación política favorecía sus propósitos. La jurisdicción eclesiástica había sido suprimida y el obispo de Calahorra, Francisco Mateo

<sup>378</sup> *"El Rey en vista del dictamen del Consejo de Estado acerca de que se declare por eclesiástica y colativa una Capellanía fundada en la Iglesia de Placencia de la Diócesis de Calahorra, contra lo que solicita Don Miguel Antonio de Jauregui; ha tenido a bien resolver se remita el expediente al ordinario para que en uso de sus facultades proceda en su vista con arreglo a las Leyes. Lo que de Real orden comunico a V. S. para su inteligencia y la del Consejo de Estado. Dios guarde a V. S. muchos años. Palacio 15. de Diciembre de 1820. Manuel García Herrero".* AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/1, 1.

<sup>379</sup> Según el traslado de la partida de defunción de José María de Aguirre efectuado en 1820, éste falleció el día 11 de julio de 1812 a la edad de 55 años, siendo cura y beneficiado entero de la parroquial de Placencia. AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/2, 1.

<sup>380</sup> La Provincia de Gipuzkoa se encontraba en aquel momento formando parte del Gobierno de Vizcaya creado por Decreto de Napoleón del 8 de febrero de 1810. El gobernador del mismo era el general francés Thouvenot. Los ayuntamientos tradicionales habían sido sustituidos por los nuevos Consejos Municipales, creados por un decreto de Thouvenot del 6 de marzo de 1810. Los miembros de estos Consejos Municipales eran elegidos por el Consejo de Provincia *"entre los propietarios más ilustrados y más idóneos para contribuir al buen orden y a la tranquilidad pública, por su exemplo, su probidad e influxo"*. En SÁNCHEZ TERRADILLOS, Josu, *El Señorío de Vizcaya durante el primer periodo constitucional*, Tesis doctoral inédita, 1998, p. 98. (Existe una copia microfilmada en la Biblioteca Nacional, sig. X/8639).

<sup>381</sup> AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/1, 49vº. (Apéndice 2, nº 6).

Aguiriano, estaba en Cádiz. No era probable que encontrase oposición a sus pretensiones por parte de la Iglesia. Según manifestó en su memorial, la capellanía era de sangre y merelega, y como prueba de ello señalaba el orden regular que fue establecido para la sucesión en la misma por su fundador, de tal forma que sirviese para sufragio por las almas de los padres de éste y para sustento a quien la gozase.

Así pues, para él era obvio que la capellanía era merelega, "*pues aunque el primer capellán logró el espiritualizarla, no podía hacer en notable perjuicio del inmediato sucesor*"<sup>382</sup>. No hay duda de que la obtención de los 2.000 reales de renta anual que proporcionaba la capellanía, aun no siendo mucho dinero<sup>383</sup>, era un objetivo demasiado atractivo al que no estaba dispuesto a renunciar.

En su solicitud, Miguel Antonio de Jauregui recurrió a su expediente de ininterrumpidos servicios a la nación y al Rey, por medio de una exposición en la que se plasmaban a la perfección los mecanismos de intercambio de servicios a cambio de mercedes y protección que caracterizaban a las redes de intercambio y de solidaridad. La capellanía pertenecía a su mujer, pero él recurría a sus propios méritos en un intento desesperado de acceder a un privilegio, más que de obtener justicia.

Los argumentos de Miguel Antonio de Jauregui debieron de ser convincentes, aunque quizá hubiera otras razones desconocidas, porque el mismo día, el Consejo Municipal, como patrono de la capellanía, realizó la presentación para la capellanía en ambos cónyuges<sup>384</sup>. En un escrito que días después dirigía Miguel Antonio de Jauregui al alcalde de Placencia solicitando que se le diese la posesión "*real, corporal vel quasi*", éste afirmaba que se había hecho la presentación y nombramiento en María Bárbara de Aguirre, pero, sin embargo, pedía que se le diese posesión a él, en nombre de su mujer, "*y que los deudores censualistas me acudan con los réditos devengados*"<sup>385</sup>. Al parecer, no había ninguna duda de que una mujer casada debía estar representada por su marido para este tipo de negocios.

En efecto, el día 1 de agosto de 1812 se concedió a Miguel Antonio de Jauregui, en representación de su mujer, la posesión "*real, corporal, vel quasi*" de la capellanía<sup>386</sup>.

---

<sup>382</sup> AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/1, 50.

<sup>383</sup> Hay que tener en cuenta que los estipendios que deberían ser pagados al sacerdote que se encargaría de celebrar las 52 misas anuales que constituían la carga espiritual de la capellanía rondarían los 400 reales anuales, pues según el dictamen del fiscal general eclesiástico en el que se resolvía favorablemente a la petición del cabildo de Placencia de reducción de misas y aniversarios, de 1795, a las misas rezadas con responso, y capilla determinada, les correspondía un estipendio de 8 reales. ACC, 17/795/20, 85.

Las misas de la capellanía habían sido reducidas a rezadas por un auto de 19 de julio de 1792. ACC, 17/795/24.

Descontados los 400 reales que podían suponer los estipendios, quedaría una renta líquida de 1.600 reales, aproximadamente 145 ducados. Teniendo en cuenta que Miguel Antonio de Jauregui percibía a partir de 1815 una dotación anual de 600 ducados (ARSB, 075-04-7), la posesión de la capellanía incrementaría sus rentas en un 25% aproximadamente.

<sup>384</sup> AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/1, 50-51. (Apéndice 2, nº 7).

<sup>385</sup> *Ibidem.*, 51vº.

<sup>386</sup> AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/1, 52. (Apéndice 2, nº 8).

Jauregui se apoderó del libro de la capellanía, así como de otros papeles y diligencias concernientes a ella. Cuatro días más tarde una requisitoria del alcalde de Placencia dirigida al Alcalde de Mondragón mandaba practicar las diligencias correspondientes para que se notificase al censualista principal la existencia de un nuevo poseedor de la capellanía para que acudiese a él con los réditos devengados por el censo en el que estaba impuesto su capital. El censualista era el hijo de Margarita Antonia de Alava, Santiago Elías de Aranguren, a quien se le hizo la notificación el día 7 de agosto.

La capellanía, en el caso de ser merelega<sup>387</sup>, le habría correspondido a María Bárbara de Aguirre, ya que el fundador, en su memoria testamentaria, expresó claramente "*que para capellán se elija el Pariente mío más cercano principiando por los descendientes de mi hermana Ana María*"<sup>388</sup>. Nadie puso en duda que María Bárbara, a pesar de ser una mujer, pudiera tener derecho a suceder en una capellanía merelega, pero, sin embargo, la posesión de la misma se dio a su marido, "*en voz, nombre y representación de Doña María Bárbara de Aguirre*"<sup>389</sup>. Lo que se puso en duda, años más tarde, cuando en 1819 el obispo de Calahorra, Atanasio Puyal, realizaba una visita pastoral a las iglesias guipuzcoanas pertenecientes a su diócesis, era que la capellanía en cuestión fuera merelega. En ese momento se inició un largo pleito en el que María Bárbara y su marido se vieron involucrados hasta su fallecimiento en 1833. El pleito se complicó aún más al concurrir al mismo otro pariente del fundador como aspirante a la capellanía.

Dos años antes de la visita del obispo y cinco después de que se adjudicase la capellanía a María Bárbara, la legitimidad de esta adjudicación empezó a ser puesta en tela de juicio cuando apareció en escena otro aspirante a la capellanía: Miguel de Mendiguchia. La lucha de intereses contrapuestos entre distintos herederos se entrecruzó durante varios años con la lucha entre las jurisdicciones civil y eclesiástica en un momento histórico en el que diferentes modelos sociales, políticos y económicos se encontraban también enfrentados.

Finalmente, por sentencia del tribunal eclesiástico de Calahorra, corroborada por el metropolitano de Calahorra, en 1828, María Bárbara y su marido fueron desposeídos de la capellanía y condenados a devolver todas las rentas percibidas por ella. Poco tiempo después, en 1833, fallecieron ambos en la villa de Bergara. Según las partidas de defunción, Miguel Antonio murió el 29 de mayo de vejez, y el 27 de noviembre María Bárbara de perlesía. Tuvieron funeral de primera clase<sup>390</sup>.

<sup>387</sup> En las capellanías colativas, el orden de sucesión era respetado siempre que el sujeto a quien correspondiera la misma fuera idóneo, ya que, al tratarse de beneficios eclesiásticos, su poseedor debería pertenecer al estamento eclesiástico, para lo que forzosamente habría de ser varón y hallarse tonsurado. En las capellanías merelegas o laicales, sin embargo, cualquiera, laico o clérigo, varón o mujer, podía ser candidato a suceder en la misma, por lo que se respetaba el orden de sucesión de forma estricta. En este tipo de capellanías, cuando el poseedor era un laico, la denominación de "capellán" se solía aplicar al sacerdote que celebraba las misas a cambio de un estipendio y no a quien poseía la capellanía. Estas capellanías, cuando eran poseídas por laicos, se llamaban también "mercenarias", ya que forzosamente debían ser servidas por un sacerdote a cambio de un estipendio por cada misa.

<sup>388</sup> AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/1, 46vº.

<sup>389</sup> AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/1, 52rº.

<sup>390</sup> DEAH, Santa Marina de Oxirondo, Bergara, libro 3º de finados, 1786-1834, sig.: 0737/002.

## Miguel de Mendiguchia. El pariente pobre.

El 23 de marzo de 1822, un año después de que fuera solicitada la información de pobreza<sup>391</sup> por su procurador, el Provisor del tribunal diocesano de Calahorra, atendiendo al dictamen favorable del fiscal, aprobó que Miguel de Mendiguchia, opositor a la capellanía fundada en Placencia por Juan Antonio de Azcarate, fuera defendido en la causa en concepto de pobre, sin cobrarle derecho alguno. En la información de pobreza practicada por orden del mismo provisor, el 27 de marzo de 1821, los tres testigos presentaron afirmaron que Miguel de Mendiguchia "*es y ha sido pobre, y miserable, que bibe alimentandose con la industria y trabajo de su persona en su oficio de cajero de armas, y que no tiene, ni se le reconocen bienes, muebles, raices, censos, ni otros derechos, y acciones*"<sup>392</sup>.

Miguel de Mendiguchia, el pariente pobre, era nieto, por parte de padre, de Ana María de Azcarate Gongueta, hija de un hermano del padre de Juan Antonio de Azcarate, es decir, prima carnal del fundador de la capellanía<sup>393</sup>. Éste había manifestado en su testamento que en la sucesión de la capellanía que deseaba fundar se eligiera para capellán al pariente suyo más cercano, principiando por los descendientes de su hermana Ana María. En el caso de no haber ningún descendiente de la citada Ana María que fuera idóneo, sería necesario seguir otras líneas. Miguel de Mendiguchia había nacido el día 7 de febrero de 1785 en la villa guipuzcoana de Elgeta. Aunque según las declaraciones de los testigos que tomaron parte en la información de pobreza que se practicó en el tribunal diocesano en 1821, tenía el oficio de cajero de armas<sup>394</sup>, en la escritura de poder que otorgó en noviembre de 1819 para seguir el pleito por la capellanía ante el tribunal diocesano, figuraba como estudiante<sup>395</sup>.

Después de cinco años durante los cuales María Bárbara de Aguirre había disfrutado *quieta y pacíficamente* de la capellanía que fundara su tío, en el mes de septiembre de 1817, el beneficiado decano y cura de la iglesia parroquial de Placencia, Manuel de Barrutia, a petición de Miguel de Mendiguchia, emitió un certificado en el que hacía constar la situación en la que se hallaba la capellanía, ocupada desde el fallecimiento de José María de Aguirre por su hermana María

---

<sup>391</sup> Con anterioridad a la ley de Enjuiciamiento criminal de 1872, quien era considerado como pobre, aun teniendo lo suficiente para vivir, era eximido del pago de las costas y derechos devengados por su defensa en los pleitos. "*El pobre que, aunque tenga lo suficiente para vivir, carece de lo necesario para litigar, no ha de ser compelido a pagar las costas y derechos que devengue en defenderse; con tal que haga constar su pobreza mediante información ante cualquier Juez, presentando además un testigo fidedigno ante el Tribunal en que se sigue el pleito: ley 20, tit. 23, Part. 3ª; ley 2, tit. 17, Part. 6ª; ley 2, tit. 1, Part. 7ª; ley 8, tit. 16, Part. 3ª*". ESCRICHE, J., *Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia*, Madrid, Imprenta de Eduardo Cuesta, 1876, tomo IV.

<sup>392</sup> Información de pobreza de Miguel de Mendiguchia, practicada ante testigos por el cura y beneficiado de Elgeta, el día 27 de marzo de 1821. AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/2, 116-117.

<sup>393</sup> En el expediente formado en el tribunal diocesano aparece un árbol genealógico de Miguel de Mendiguchia, aportado por éste junto a varios traslados de partidas de bautismo y de matrimonio justificativas de su pretensión a la capellanía. AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/2, 6-12.

<sup>394</sup> Los cajeros de armas eran quienes fabricaban las piezas de madera, es decir, las culatas o cajas, de las armas de fuego.

<sup>395</sup> Hay que tener en cuenta que en 1819, Miguel de Mendiguchia tenía ya 34 años.

Bárbara<sup>396</sup>. A partir de aquel momento se desencadenó un largo proceso en el que se puso en duda la legitimidad de la presentación efectuada en 1812 por el patrono de la capellanía.

Inmediatamente, María Bárbara, ante los rumores que habían llegado a sus oídos de que alguien pensaba estorbarle en la posesión de la capellanía<sup>397</sup>, solicitó el dictamen de un experto, preguntando si con arreglo a las cláusulas de la memoria testamentaria del fundador podía considerarse con título eficaz y fundado para el goce de la misma. Según el asesor consultado, la presentación hecha en 1812 por el Ayuntamiento de Placencia, como patrono de la capellanía, reunía todos los caracteres de justa y legítima<sup>398</sup>. Éste señalaba en su dictamen, en el que en más de una ocasión se confunde la memoria testamentaria del fundador con la escritura de fundación, que formalmente la presentación era correcta, ya que había sido hecha por el patrono competente en la persona que reunía los requisitos expresados por el fundador, por ser la parienta en el grado más próximo y de la línea predilecta. Por otra parte, la pacífica posesión durante cinco años continuados, con el consentimiento de los presuntos competidores, corroboraba, según él, la legitimidad de la presentación efectuada en 1812.

Los fundamentos en los que basaba su parecer fueron, en primer lugar, la voluntad del fundador, considerada como la suprema ley, y que quedaba expresada en dos cuestiones básicas: el sufragio por su alma y las de sus padres, la primera, y la segunda, la protección de su familia mediante la asignación de una renta a uno de sus parientes. El cumplimiento estricto de esta voluntad era el fin de la fundación. En ningún momento el fundador señaló quién debía celebrar las misas y rezar los responsos, por lo que dejaba entera libertad de poder cumplir por tercera persona las cargas prescritas. Según esta interpretación se ponía al mismo nivel de importancia la finalidad espiritual y la material de la fundación. La voluntad del fundador debía ser respetada en los dos aspectos, asegurando el cumplimiento de las cargas espirituales y garantizando unas rentas a "*la línea de parientes asignada*"<sup>399</sup>.

En segundo lugar, hacía referencia a la ausencia de indicaciones del fundador sobre la naturaleza de la capellanía, por lo que se debería entender que dejaba total

---

<sup>396</sup> AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/2, 5.

<sup>397</sup> "... con ocasión de haber llegado a su noticia algún rumor de que se piensa en turbarle de dicha posesión, y disputarle el goce sucesivo...". Dictamen del Doctor Juan Bautista de Cortavarria, dado en Oñate el 23 de septiembre de 1817. AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/2, 66-69. (Apéndice 2, nº 9).

<sup>398</sup> *Ibidem*, 66-70.

<sup>399</sup> *Ibidem*, 67rº. Es importante destacar que el fundador, en su memoria testamentaria, únicamente dispuso que para capellán se eligiera a su pariente más cercano, principiando por los descendientes de su hermana Ana María. En las sucesivas vacantes, el pariente más cercano podría encontrarse en otras líneas, por lo que sería más correcto hablar de la línea preferida. En la sucesión de las capellanías, al igual que en los demás vínculos y en los mayorazgos, no se debía tener en cuenta el grado de parentesco con el último poseedor, sino con el fundador, pues, tal como señala Bartolomé Clavero refiriéndose a los mayorazgos, "*en el mayorazgo se sucede por derecho de sangre y no por derecho hereditario; el sucesor en el mayorazgo lo es estrictamente del fundador, aunque medien siglos, y no del antecesor*". CLAVERO, B., *Mayorazgo. Propiedad feudal en Castilla 1369-1836*, Madrid, Siglo XXI, 1989, p. 251.

libertad para que pudiera ser considerada como merelega o para espiritualizarla si quien fuera legítimamente presentado deseara ordenarse a título de ella. En contra de la opinión que sostuvieron posteriormente quienes defendían la naturaleza de merelega de esta capellanía como expresión indudable de la voluntad del fundador, en este dictamen se afirmaba que, atendiendo a la voluntad del fundador, la capellanía podría considerarse tanto merelega como colativa. El interés del primer presentado por espiritualizarla, a fin de poder ordenarse a título de ella, no debería alterar en ningún caso, en opinión del asesor, el orden de los llamamientos, ya que éste respondía a la voluntad expresamente manifestada por el fundador, y ésta debía ser la ley y la norma principal.

La argumentación expuesta no era consistente, carecía del suficiente rigor en alguno de sus razonamientos y revelaba por parte del asesor o un desconocimiento o una manipulación interesada de varias cuestiones de derecho canónico. Para poder ordenarse a título de la capellanía, ésta debía ser un beneficio eclesiástico, ya que eran los beneficios eclesiásticos los que tenían validez como título de ordenación. Los bienes de la capellanía fueron espiritualizados en 1779 y ésta fue instituida como un beneficio eclesiástico, que además sirvió como título de ordenación para su primer poseedor. Los beneficios eclesiásticos son perpetuos<sup>400</sup> y por esta razón una capellanía no podía ser de una naturaleza o de otra según la voluntad del que la poseyese en cada momento<sup>401</sup>. De forma extraordinaria la Iglesia solía admitir también como título de ordenación los llamados títulos de patrimonio<sup>402</sup>. Esta era

<sup>400</sup> "No hay verdadero beneficio sin el carácter de perpetuidad". GOLMAYO, P. B., *Instituciones del Derecho Canónico...*, tomo II, p. 147. El art. 6 del Concordato de 1737 abolió la costumbre existente de erigir beneficios eclesiásticos temporales: "Que la costumbre de erigir beneficios eclesiásticos que hayan de durar por limitado tiempo, queda abolida del todo, y S. S. expedirá letras circulares a los Obispos de España, si fuere necesario, mandándoles que no permitan en adelante semejantes erecciones de beneficios ad tempus, debiendo estos ser instituidos con aquella perpetuidad que ordenan los cánones sagrados". GOLMAYO, P. B., *Instituciones...*, tomo I, p. 417. Para la observancia de esta disposición se promulgó el Real decreto de 28 de febrero de 1741 (ley 5, tit. XII, lib. I de la Novísima Recopilación).

<sup>401</sup> En este mismo sentido, las Constituciones Sinodales del Obispado de Calahorra de 1698, prohibían expresamente la fundación de capellanías vitalicias: "Aviendo reconocido, que muchas personas, que pretenden el estado Eclesiástico, para poder conseguirlo fundan Capellanías colativas vitalicias, solo à fin de que sirvan à ellos de título, para ordenarse, disponiendo en la Fundacion, que despues de ellos se deshaga la Capellania, y sus bienes como antes queden secularizados, y profanos. Y conociendo, que esto es cosa muy sugeta à fraudes; y asimismo contra la perpetuidad, que sigue la naturaleza del Beneficio colativo: Ordenamos, y mandamos, S.S.A. que Fundaciones de Capellanías, de esta calidad, no se admitan en este nuestro Tribunal, ni de ellas se dê colacion en manera alguna". CSC-1698, const. VII, tit. V, lib. III.

<sup>402</sup> Según GÓMEZ-SALAZAR, no se puede considerar propiamente como un título de ordenación, "sino que se equipara a él, en cuanto que el clérigo puede por su medio ascender a orden sacro". GÓMEZ-SALAZAR, F., *Instituciones de Derecho Canónico*, t. II, León, 1891, pp. 563. Se entiende por patrimonio, los bienes propios del clérigo, poseídos por cualquier título legítimo. El papa Alejandro III dio ocasión al título de patrimonio cuando dispuso que el obispo que haya ordenado a uno sin título, tenga obligación de mantenerlo hasta que obtenga un beneficio eclesiástico con el que pueda atender a su honesta sustentación. El espíritu de esta disposición era evitar las ordenaciones sin título. Los canonistas, apoyados en esta disposición crearon la figura del título de patrimonio. GÓMEZ-SALAZAR, F., o.c. El Concilio de Trento (Ses. XXI, De Reformat., Cap. II) admitió el título de patrimonio sólo en el caso de necesidad o utilidad de la Iglesia, a juicio del obispo: "que en adelante no sea promovido clérigo ninguno secular, aunque por otra parte sea idóneo por sus costumbres, ciencia y edad, a las órdenes sagradas, a no constar antes legítimamente que está en posesión pacífica de beneficio eclesiástico, que baste para pasar honradamente la vida... Los que obtienen

una alternativa para poderse ordenar aun no teniendo ningún beneficio. Las capellanías laicales o merelegas podían ser utilizadas por tanto como título de patrimonio para ordenarse, pero para ello no era necesario espiritualizar sus bienes ni erigirlas en beneficios eclesiásticos, que es lo que se hizo en 1779 con la capellanía fundada por Juan Antonio de Azcarate, y era requisito imprescindible solicitar la autorización del obispo. Podía haberse hecho así, pero no se hizo. La capellanía había sido erigida como beneficio eclesiástico el 20 de abril de 1779 y en virtud de ello se hizo la colación y canónica institución en José María de Aguirre el día 11 de junio<sup>403</sup>.

Al igual que había hecho María Bárbara, Miguel de Mendiguchia también consultó a un asesor sobre si la poseedora de la capellanía podía tener derecho fundado para percibir los productos de la misma y si podría pretender su presentación con éxito favorable, a pesar de no hallarse tonsurado, aunque "*sí con deseos de entrar en el Estado Eclesiástico*"<sup>404</sup>. El dictamen fue emitido el 20 de diciembre de 1817 y era favorable a sus pretensiones, por lo que lo remitió junto a un memorial que había escrito el 12 de noviembre, perfectamente conocido por el asesor, ya que lo mencionaba en su dictamen, el cual terminaba recomendando al aspirante que solicitase del Ayuntamiento de Placencia la presentación, aconsejándole finalmente que en el caso de no obtenerla, recurriera con el testimonio de la negativa al tribunal eclesiástico, en donde consideraba que obtendría una sentencia favorable.

La argumentación del asesor de Mendiguchia se fundamentaba en la consideración de la capellanía como eclesiástica y colativa, por lo que la presentación que hizo el patrono en 1812 era nula y de ningún efecto por falta de idoneidad en la persona nombrada. Se invocaba la disposición general del derecho según la cual tratándose de la fundación de capellanías, éstas debían entenderse como eclesiásticas siempre que no se expresara lo contrario<sup>405</sup>. Y aunque no fuera así, la capellanía fue erigida como eclesiástica, no pudiendo ya salir de esta clase ni reducirse a laical, puesto

---

*patrimonio, o pensión, no puedan ordenarse en adelante, sino los que juzgare el Obispo debe ordenar por necesidad, o comodidad de sus iglesias, certificándose antes de que efectivamente tienen aquel patrimonio o pensión...*". GOMAYO, P. B., *Instituciones...*, t. I, pp. 369-373.

<sup>403</sup> "... mediante constarnos de la habilidad y suficiencia del susodicho porque le dispensamos en el examen que debia preceder, y llegar sus rentas a las necesarias para quedar en el estado de Colativa Beneficio Eclesiástico, de ella le hicimos colación y canónica institución...". AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/2, 103vº.

<sup>404</sup> Dictamen del Licenciado José de Apoyta Mallagaray, dado en Durango el 20 de diciembre de 1817. AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/2, 62-64. (Apéndice 2, nº 10). Teniendo en cuenta la edad del aspirante parece más probable que se tratara de un plan para garantizarse unas rentas para el futuro que de una vocación religiosa, en cuyo caso sería bastante tardía. En este dictamen, al igual que en el memorial que el aspirante presentaría al Ayuntamiento de Placencia, éste aparece como José María de Mendiguchia. Sin embargo el memorial está firmado por Miguel de Mendiguchia. Este hecho podría deberse a una confusión en el nombre del aspirante o al hecho de que la solicitud fuera presentada en un primer momento por su hermano José María, quien aparecerá posteriormente sucediendo a su hermano en la pretensión a la capellanía tras el fallecimiento de aquel.

<sup>405</sup> Esta opinión concuerda con la expuesta por Gómez-Salazar, quien haciendo referencia a VECCHIOTTI, *Inst. Canon.*, lib. III, cap. II, par. 12, afirma que "*si el fundador se expresó con palabras ambiguas; de manera que es difícil conocer la naturaleza de la capellanía y por otra parte faltan documentos que aclaren esta duda, entonces habrá de considerarse como capellanía eclesiástica*". GÓMEZ-SALAZAR, F., *Instituciones de Derecho Canónico*, León, 1891, tomo III, p. 310.

que la espiritualización de sus bienes así como la creación de un beneficio, debido a la perpetuidad que le era inherente, era irreversible.

El dictamen fue favorable a sus pretensiones y por tanto lo presentó como apoyo de su reivindicación, junto al memorial por medio del cual se dirigió a los corporativos de la villa de Placencia solicitando que hicieran en él la presentación para la capellanía que a su entender se encontraba vacante desde el fallecimiento de José María de Aguirre<sup>406</sup>.

El aspirante a la capellanía estimaba que no había ninguna duda de que ésta era eclesiástica y colativa, y que la obligación de cumplir con las cargas espirituales de la misma era personal, por lo que no podía desempeñarlas una mujer. A su memorial adjuntaba el árbol genealógico del parentesco que le unía al fundador y las partidas de bautizados y casados que lo justificaban, exponiendo que no había ningún pariente del fundador, en disposición de cumplir personalmente las obligaciones de la capellanía, que se hallase en mejor grado de parentesco que él.

A los pocos días de que fuera presentado el memorial, el 24 de enero de 1818, se formó un expediente en el Ayuntamiento con el fin de resolver sobre la petición, que fue notificada a María Bárbara de Aguirre y a su marido, quien presentó un escrito memorial dirigido al Ayuntamiento en el que, apoyándose en el dictamen del Doctor Cortavarria y en otro anterior, de la época de la fundación, emitido por Francisco Xabier de Ureley el 5 de mayo de 1778, conceptuaba a la capellanía como merelega. Jauregui recordaba al Ayuntamiento que en virtud de tal naturaleza y como patrono de la capellanía, había hecho la presentación y adjudicación de la misma en 1812 en la persona de María Bárbara de Aguirre legítimamente. Pedía al Ayuntamiento que declarara que no tenía facultades para acceder a la solicitud de Mendiguchia, ya que la presentación de María Bárbara se había hecho legítimamente, y por tanto no podía hacer nuevas presentaciones mientras no se produjera una nueva vacante. En su memorial Jauregui manifestaba que desde que su mujer tomó posesión judicial de la capellanía, se estaban cumpliendo las cargas de la misma, aunque por el momento no se estaban cobrando sus productos<sup>407</sup>.

El día 29 de enero de 1818, el Alcalde y juez ordinario de la villa de Placencia, proveyó un auto asesorado por el Licenciado José Antonio de Orbegoza, en el que declaraba no haber lugar al nombramiento solicitado por Mendiguchia, por ser la capellanía merelega y por tanto ser perfectamente legítima la presentación y el nombramiento hechos en 1812<sup>408</sup>.

El dictamen del asesor al que había realizado la consulta Mendiguchia, le aconsejaba que, en el caso de no obtener la presentación por parte del Ayuntamiento, recurriera con el testimonio de la negativa al tribunal eclesiástico, en

---

<sup>406</sup> Memorial presentado al Ayuntamiento de Placencia por Miguel de Mendiguchia. AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/2, 64-65. (Apéndice 2, nº 11).

<sup>407</sup> Memorial presentado el 27 de enero de 1818 por Miguel Antonio de Jauregui. AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/2, 78vº-79. (Apéndice 2, nº 12).

<sup>408</sup> Auto asesorado del alcalde de Placencia, de fecha 29 de enero de 1818. AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/2, 80. (Apéndice 2, nº 13).

donde consideraba que obtendría una sentencia favorable, pero Mendiguchia tardó casi dos años en hacerlo. La reclamación de la capellanía ante el tribunal eclesiástico la realizó después de que el obispo, tras efectuar la visita de la iglesia de Placencia como comisionado de la Cámara de Castilla, proveyera un auto<sup>409</sup> en el que estimaba que la capellanía estaba vacante por haber sido hecha la presentación en sujeto no idóneo. De esta manera confluían, algunos meses después, en el tribunal eclesiástico de Calahorra dos procesos en los que se trataba de resolver la verdadera naturaleza de la capellanía y la adjudicación de la misma a quien correspondiera.

Por medio de un poder que otorgó a Juan Manuel de Garro, procurador de causas en el tribunal eclesiástico de Calahorra, Miguel de Mendiguchia presentó, en el mes de noviembre de 1819<sup>410</sup>, ante el tribunal eclesiástico de Calahorra, su reclamación sobre la capellanía que fundara Juan Antonio de Azcarate, basándose en que por su naturaleza de eclesiástica no había sido realizada la presentación en un sujeto idóneo y por tanto se encontraba vacante, resultando ser él el pariente de mejor grado del fundador que podía aspirar a la misma.

La causa dio principio en el tribunal diocesano de Calahorra el 10 de diciembre de 1819, pero para entonces en la Cámara de Castilla se había iniciado otro pleito en el que se enfrentaban los intereses particulares y materiales de Miguel Antonio de Jauregui y su mujer, y los generales y espirituales de la Iglesia, representados por el obispo de Calahorra.

La situación política, marcada por el regreso al sistema constitucional y la supresión de la Cámara de Castilla con el traspaso consiguiente de sus asuntos al Consejo de Estado, junto a la incertidumbre general, un cierto desgobierno y la lentitud de los tribunales, condicionaron el desarrollo de ambos procesos, el de Miguel Antonio de Jauregui y su mujer contra el obispo de Calahorra, y el de Miguel de Mendiguchia como aspirante a la capellanía "vacante".

Después de más de un año durante el cual Miguel de Mendiguchia veía cada vez más lejos la sentencia favorable que le había asegurado su asesor, el mantenimiento del pleito empezaba a resultar excesivamente gravoso para su pobre economía, por lo que en marzo de 1821, su procurador manifestaba que su parte no podía continuar las diligencias que se seguían en la causa sobre pertenencia de la

---

<sup>409</sup> El auto del obispo, de fecha 23 de agosto de 1819, tenía como objeto denunciar la nulidad de la presentación que se hizo en 1812 en sujeto no idóneo por tratarse de una capellanía eclesiástica, ya que como tal había sido aprobada y erigida. El auto concedía al patrono un plazo de dos meses para que hiciese la presentación en sujeto "*haval, idoneo y capaz*". AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/2, 82-84.

<sup>410</sup> Escritura de poder otorgada el 27 de noviembre de 1819 por Miguel de Mendiguchia a favor del procurador Juan Manuel de Garro. AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/2, 3-4. Se considera la capellanía como colativa y él como el pariente más próximo con derecho a ocuparla. El poder se otorga para pedir al Señor Provisor de la Diócesis que le haga el nombramiento de capellán. Menciona que recurrió a la Justicia de la villa de Placencia con la solicitud de que se le hiciese nombramiento.

capellanía, solicitando se recibiera información de testigos, a fin de que pudiera ser defendido en las sucesivas diligencias en concepto de pobre<sup>411</sup>.

La información de pobreza con el testimonio de testigos fue presentada por el cura de Elgeta pocos días después, el día 28 de marzo<sup>412</sup>. Sin embargo, el dictamen favorable del fiscal en el que manifestaba que no encontraba reparo en que a Mendiguchia se le declarase por pobre y por tanto se le defendiera como tal, no se emitió hasta después de un año, el 20 de marzo de 1822<sup>413</sup>. Tres días después el Provisor mandaba que se declarase por pobre a Miguel de Mendiguchia y como a tal se le defendiera en la causa sin llevarle derechos algunos<sup>414</sup>.

Dilaciones deliberadas, reclamaciones de incompetencia del tribunal eclesiástico, recursos y apelaciones, fueron las estrategias utilizadas por parte de quienes continuaban mientras tanto disfrutando de la percepción de unas rentas cuya legitimidad se había puesto en tela de juicio. Entre tanto, el día 3 de octubre de 1823, falleció en Pamplona, en accidente, Miguel de Mendiguchia, a los 38 años de edad<sup>415</sup>. Su hermano José María, de 23 años de edad, sucedería a Miguel como aspirante a la capellanía y, al igual que había hecho éste, solicitó la declaración de pobreza *"para el seguimiento de esta causa con unas partes poderosas como son las contrarias"*<sup>416</sup>.

En 1823 de nuevo intervino la Cámara de Castilla. Este alto tribunal ordenó al tribunal eclesiástico de Calahorra la inhibición en el caso y pidió que se le remitiese el expediente por tratarse de una capellanía laical. Así se hizo, pero posteriormente, en 1825, se resolvió el recurso de apelación que había interpuesto Jauregui ante el tribunal metropolitano de Burgos por medio de una sentencia contraria a las pretensiones de Jauregui de que se inhibieran los tribunales eclesiásticos. Esta sentencia condenó a Jauregui a las costas y devolvió el expediente al tribunal de Calahorra.

Un enorme vacío documental impide conocer lo que ocurrió entre 1825 y 1827. Sin embargo, y a pesar de que el expediente había vuelto a la Cámara de Castilla, cuyo fiscal no se pronunciaría hasta 1833, con fecha 26 de enero de 1828 el tribunal eclesiástico de Calahorra dictó sentencia en el pleito que se había entablado entre Mendiguchia y un nuevo aspirante, Juan Bautista de Beiztegui, declarando que se trataba de una capellanía colativa y adjudicándola a este último<sup>417</sup>. Miguel Antonio

---

<sup>411</sup> AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/2, 114rº.

<sup>412</sup> Información de pobreza formada por el cura de Elgeta a partir del testimonio de tres testigos. AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/2, 116-118.

<sup>413</sup> AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/2, 120.

<sup>414</sup> AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/2, 121vº.

<sup>415</sup> Según consta en el traslado de la partida de defunción obtenida del folio 77 del libro de difuntos de la Parroquial de San Juan Bautista de la Catedral de Pamplona, que dio principio en dos de agosto de 1814. AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/2, 149-167.

<sup>416</sup> Decreto del Provisor del 12 de febrero de 1824, subiendo a los Autos el escrito de Juan Manuel de Garro, en nombre de Mendiguchia, suplicando se sirva acceder a la declaración de pobreza de éste, tal como lo había solicitado. AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/2, 149-170.

<sup>417</sup> El expediente de este pleito ya había desaparecido en 1865, puesto que en junio de dicho año, cuando un hermano de Juan Bautista, José Matías de Beiztegui, acudió al tribunal eclesiástico de la diócesis de Calahorra y La Calzada, solicitando una copia del expediente relativo al pleito entablado

de Jauregui y su mujer fueron condenados, por haberla poseído indebidamente, a devolver al nuevo capellán todos los réditos y emolumentos percibidos de dicha pieza eclesiástica. Acudieron estos en apelación al metropolitano de Burgos, pero este tribunal corroboró la sentencia de Calahorra<sup>418</sup>.

Así pues, después de varios años esperando a que el tribunal eclesiástico se pronunciara definitivamente acerca de la naturaleza eclesiástica y colativa de la capellanía con el fin de obtener su posesión, en 1828 José María de Mendiguchia, hermano de Miguel, se encontró con que ésta era concedida a un nuevo aspirante, Juan Bautista de Beiztegui, clérigo próximo a ordenarse de presbítero que ya ocupaba otra capellanía en la iglesia parroquial de Santa Marina de Oxirondo, en la villa de Bergara. Juan Bautista estaba emparentado con el fundador por otra línea, ya que era descendiente de un segundo matrimonio de la madre de aquel. Curiosamente su padre, Andrés Agustín de Beiztegui, era preceptor de Gramática en el Real Seminario de Bergara, en donde Miguel Antonio de Jauregui era maestro de Dibujo<sup>419</sup>, y durante la época del Trienio Liberal había sido alcalde constitucional primero de Bergara<sup>420</sup>.

Beiztegui llegó a ordenarse de presbítero a título de la capellanía, pero, según el testimonio aportado por su hermano<sup>421</sup>, le sobrevino la muerte en 1833<sup>422</sup> cuando trataba de ir a residenciar a Placencia como tal capellán. Inmediatamente, según su propio testimonio<sup>423</sup>, su hermano José Matías, revestido ya para entonces del título de prima tonsura, solicitó su adjudicación al tribunal eclesiástico de Calahorra. Este tribunal, al parecer sin respetar las prerrogativas que le correspondían al Ayuntamiento de Placencia como patrono de la capellanía en relación con la presentación de los aspirantes a la misma, expidió el título de colación a favor de José Matías de Beiztegui, quien tomó posesión ante el notario eclesiástico en la parroquia de Santa María la Real de Placencia<sup>424</sup>.

---

en 1827-1828 entre José María de Mendiguchia y Juan Bautista de Beiztegui por la posesión de la capellanía fundada por Juan Antonio de Azcarate, que se resolvió por sentencia del 26 de Enero de 1828 a favor de Juan Bautista de Beiztegui, éste no pudo ser hallado. La petición de José Matías de Beiztegui y las diligencias que se llevaron a cabo para la localización del expediente, se encuentran en: ACC, Capellanías, 16/986/17.

<sup>418</sup> Estos datos son conocidos gracias al testimonio aportado por José Matías de Beiztegui, hermano de Juan Bautista, en un escrito, fechado el 19 de enero de 1866, remitido al alcalde de Placencia solicitando para su hijo la presentación a la capellanía que había vuelto a quedar vacante por fallecimiento de su último poseedor, José Cruz de Azcaray. AMS, 77A.

<sup>419</sup> DEAH, Bergara, San Pedro, Libro 11 de bautizados, 1798-1815. Sign.: 1764/001-00. Pág. 106 vto.

<sup>420</sup> AAB, Documentación de los años 1820-1822 sin catalogar.

<sup>421</sup> AMS, 77A.

<sup>422</sup> Según la partida de defunción, Juan Bautista de Beiztegui, presbítero capellán asignado a la parroquia de Sta Marina de Oxirondo, natural de la misma, falleció el día 14 de marzo de 1833 de tisis pulmonar, a quien se le hizo funeral de primera clase gratis por el cabildo de Santa Marina. DEAH, Sta. Marina de Oxirondo, Bergara, 3º libro de finados, 1786-1834, p. 196.

<sup>423</sup> El aportado en su escrito del 19 de enero de 1866. AMS, 77A.

<sup>424</sup> *Ibidem*.

## José Cruz de Azcaray. Capellán a los dos años.

Según el relato de los hechos que en 1866 hizo José Matías de Beiztegui<sup>425</sup>, en el mismo acto en el que, en la sacristía de la iglesia de Placencia, el notario eclesiástico procedía a extender el documento de posesión *real vel quasi* en su favor, se presentó José Domingo de Azcaray con cuatro testigos alegando que aquella capellanía era una simple memoria de misas, y que como tal pertenecía a su hijo José Cruz, quien por entonces era de dos años de edad, por ser el pariente más cercano del fundador.

José Cruz de Azcaray nació en Placencia el 4 de mayo de 1830<sup>426</sup> y menos de tres años después fue presentado por el Ayuntamiento de Placencia para ocupar la capellanía que había quedado vacante tras el fallecimiento de Juan Bautista de Beiztegui, y que anteriormente había detentado durante casi veinte años la hermana de su abuela. Su padre, José Domingo, era "*oficial del Ministerio de Artillería en las reales fábricas de armas de chispa*"<sup>427</sup>, y su madre María Josefa de Vergara, hija de Mariano de Vergara y de María Manuela de Aguirre, hermana esta última de María Bárbara.

De nuevo se planteaba el conflicto entre dos aspirantes a la capellanía. El derecho de cada uno de los dos aspirantes se encontraba respaldado por una distinta jurisdicción y se basaba en los diferentes criterios utilizados para determinar la naturaleza de la capellanía. Tanto el Ayuntamiento como el tribunal del Corregimiento y la misma Cámara de Castilla estimaban que se trataba de una capellanía laical y por tanto les correspondía a ellos, como tribunales civiles, juzgar y determinar todo lo relativo a ella. El tribunal eclesiástico de Calahorra, sin embargo, consideraba con toda evidencia y sin ninguna duda que se trataba de una capellanía eclesiástica colativa. Si la capellanía era colativa sólo podía ser ocupada por un sujeto que fuera capaz de ordenarse a título de ella, por lo que quedaban excluidas las mujeres y los niños menores de catorce años que era la edad mínima establecida por el Concilio de Trento para la obtención un beneficio eclesiástico<sup>428</sup>.

El tribunal eclesiástico adjudicó la capellanía a José Matías de Beiztegui, hermano del último capellán, expidiéndole, según confesaba él mismo, título de colación, mientras que el Ayuntamiento de Placencia nombró a José Cruz de Azcaray. Años después, en el relato de los hechos que hizo el propio Beiztegui, éste manifestó su sospecha de que en el nombramiento hecho por el Ayuntamiento era posible que "*mediaran algunas influencias*"<sup>429</sup>, afirmando que tenía noticias de que el alcalde, Manuel de Guisasola, conocedor de las últimas sentencias de los tribunales, debió de tratar de explicar a los demás miembros del Ayuntamiento los antecedentes del

---

<sup>425</sup> En el ya mencionado escrito de 19 de enero de 1866. *Ibídem*.

<sup>426</sup> DEAH, Placencia, Libro 11 de bautizados, 1820-1844, signatura 2924/002, p. 168.

<sup>427</sup> Según consta en la partida de bautismo de José Cruz de Azcaray. *Ibídem*.

<sup>428</sup> No existía ningún límite de edad para la obtención de la prima tonsura, pero se ordenaba que "*ningún ordenado de primera tonsura, ni aun constituido en las órdenes menores, pueda obtener beneficio antes de los catorce años de edad*". Concilio de Trento, Ses. XXIII, Dec. Ref., Cap. VI.

<sup>429</sup> Escrito de José Matías de Beiztegui del 19 de enero de 1866. AMS, 77A.

caso y la incompatibilidad del nombramiento de José Cruz de Azcaray, por lo que en el acta que se redactó debía de constar alguna protesta del propio alcalde<sup>430</sup>.

José de Azcaray, en representación de su hijo, tomó posesión de la capellanía por mandato del Corregidor de Gipuzkoa, ya que, según expresaba Azcaray en el escrito que poco después dirigió a la Cámara de Castilla, era quien debía entender en el asunto "*por ser profano y laycal*"<sup>431</sup>. Pero ante el temor de las acciones que pudiera emprender el otro pretendiente y de los posibles resultados de las mismas, José de Azcaray recurrió, al igual que lo había hecho Miguel Antonio de Jauregui años atrás, a la suprema instancia de la Cámara de Castilla, cuyo fiscal acababa de emitir un nuevo dictamen favorable a sus pretensiones considerando la capellanía como laical<sup>432</sup>. En su escrito a la Cámara, fechado el 1 de junio de 1833, hacía un breve repaso de los antecedentes de la capellanía reiterando los argumentos que apoyaban su consideración de la misma como laical, y pedía que se le diese una certificación de todo lo ocurrido en el expediente relativo a la capellanía, con el fin de hacer frente a las acciones que pudiera emprender el otro aspirante, quien, según sus palabras, "*cuando no ha podido conseguir que el Patrono lo eligiese ha ocurrido al propio R. Obispo, con solicitud de que vuelva á declararla por colativa, y á disponer que bajo de este caracter se haga la eleccion*"<sup>433</sup>.

Beiztegui, por su parte, viendo conculcados sus derechos acudió al tribunal del Corregimiento, obrante en aquel momento en Azpeitia, en donde se entabló un nuevo litigio sobre la posesión de la capellanía, pero éste fue sobreseído antes de que fueran presentados en aquel tribunal los documentos relativos a los expedientes que se tramitaron en los tribunales eclesiásticos de Calahorra y Burgos, como consecuencia del traslado del tribunal a San Sebastián con motivo de la guerra civil. Posteriormente Beiztegui trasladó su residencia a Burdeos y en 1847 contrajo matrimonio, por lo que debido a la incompatibilidad de su nuevo estado civil con sus pretensiones a la capellanía se dirigió al Ayuntamiento de Placencia presentando su renuncia para que declarándola vacante hiciera el nombramiento en quien tuviera mejor derecho<sup>434</sup>. No obstante, esto no fue necesario, ya que José Cruz de Azcaray se encontraba disfrutando de las rentas de la capellanía sin ningún obstáculo, y continuó haciéndolo hasta su fallecimiento a los 35 años de edad, el día 3 de diciembre de 1865. Según la partida de defunción, murió de tisis pulmonar. En ella también consta que era soltero, que hizo testamento y que "*no era pobre*"<sup>435</sup>. Era licenciado en jurisprudencia y, al parecer no siguió la carrera eclesiástica, ya que no se menciona en la partida de defunción.

<sup>430</sup> No ha sido posible localizar la citada acta, por lo que no hay pruebas de que esto hubiera sido exactamente así.

<sup>431</sup> Escrito dirigido a la Cámara de Castilla por José de Azcaray, de fecha 1 de junio de 1833. AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/1, 65-66.

<sup>432</sup> Después de más de ocho años, el fiscal emitió su dictamen con fecha 8 de marzo de 1833. AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/1, 63-64. La orden de la Cámara de Castilla por la que se pasaba el asunto al fiscal fue dada por un decreto de Ésta del 4 de octubre de 1824. AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/1, 62vº.

<sup>433</sup> Escrito de José Azcaray de fecha 1 de junio de 1833 dirigido a la Cámara de Castilla. AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/1, 65-66.

<sup>434</sup> Esta información se desprende del escrito remitido por José Matías de Beiztegui el 19 de enero de 1866 al Ayuntamiento de Placencia. AMS, 77A.

<sup>435</sup> DEAH, Placencia, 5º libro de finados, 1846-1878, signatura 2931/002, p. 162.

## Interés de la Iglesia e intereses privados.

### Las visitas del Obispo.

*Otro si dijeron que por quanto antiguamente auian de fuero é uso é costumbre que en dicho condado no entrase Obispo ni sus Vicarios...*  
Fuero Viejo de Bizkaia, 1452.

Etimológicamente, la palabra obispo procede del griego *episcopos*, que significa supervisor. Así pues, y como consecuencia de sus obligaciones relativas a la cura de almas y a los aspectos puramente doctrinales, el obispo es responsable de supervisar el cumplimiento de las leyes eclesiásticas y de las prácticas religiosas en el territorio que tiene encomendado. La visita de la diócesis es por tanto uno de los principales deberes de los obispos. Golmayo asegura que la visita episcopal es tan antigua como la organización de las parroquias, y de importancia fundamental para el buen gobierno de las diócesis<sup>436</sup>.

La obligación de visita es un cargo personal del obispo, aunque éste siempre ha podido delegar sus facultades en los vicarios y visitadores. El Concilio de Trento, con el fin de centralizar el poder en manos de los obispos, impuso ciertas limitaciones a los visitadores exigiendo en todo caso la aprobación del obispo y la obligación de los visitadores de dar cuenta exacta de la visita al obispo<sup>437</sup>.

El fin de la visita era la conservación de la fe, la observancia de la moral y el cuidado y vigilancia de la disciplina. Durante la visita, el obispo, o quien la hiciera en su nombre, debía inspeccionar los libros parroquiales, comprobando el cumplimiento de los aniversarios, fundaciones y legados piadosos, la recaudación y distribución de las rentas de la iglesia, el estado de los templos y de los ornamentos y reliquias. Las

---

<sup>436</sup> GOLMAYO, P. B., *Instituciones...*, tomo I, p. 143.

<sup>437</sup> "CAP. III. *Cómo han de hacer los Obispos la visita. Si los Patriarcas, Primados, Metropolitanos y Obispos no pudiesen visitar por sí mismos, o por su Vicario general, o Visitador en caso de estar legítimamente impedidos, todos los años toda su propia diócesis por su grande extensión; no dejen a lo menos de visitar la mayor parte(...) El objeto principal de todas estas visitas ha de ser introducir la doctrina sana y católica, y expeler las herejías; promover las buenas costumbres y corregir las malas; inflamar al pueblo con exhortaciones y consejos a la religión, paz e inocencia, y arreglar todas las demás cosas en utilidad de los fieles (...) Guárdense entre tanto de ser gravosos y molestos a ninguna persona por sus gastos inútiles; ni reciban, así como ninguno de los suyos, cosa alguna con el pretexto de procuración por la visita, aunque sea de los testamentos destinados a usos piadosos, a excepción de lo que se debe de derecho de legados pios; ni reciban bajo cualquiera otro nombre dinero, ni otro don cualquiera que sea, y de cualquier modo que se les ofrezca: sin que obste contra esto costumbre alguna, aunque sea inmemorial (...) Ni presuman los patronos entremeterse en materias pertenecientes a la administración de los Sacramentos, ni se mezclen en la visita de los ornamentos de la iglesia, ni en las rentas de bienes raíces o fábrica, sino en cuanto esto les competa según el establecimiento y fundación: por el contrario los mismos Obispos han de ser los que han de entender en ello, cuidando de que las rentas de las fábricas se inviertan en usos necesarios y útiles a la iglesia, según tuviesen por más conveniente". Conc. Trento, ses. 24, de Reform., cap. 3.*

Constituciones Sinodales del Obispado de Calahorra dedicaban un extenso capítulo a regular las visitas del obispo y de sus visitadores a las parroquias de la diócesis<sup>438</sup>.

La importancia de las visitas fue reconocida también por las leyes castellanas, como consta de la ley de Juan I dada en Guadalajara en 1390, en la que se mandaba "*que ningunos sean osados de estorbar ni embargar la visitacion é correccion é justicia de los Perlados é sus oficiales en publico, ni en escondido*"<sup>439</sup>. Otra ley, ésta promulgada por Carlos III en 1765, exhortaba a los Prelados a que visitasen las iglesias de sus diócesis para la reforma de abusos y el restablecimiento del buen gobierno y de la disciplina<sup>440</sup>.

Si en 1390 Juan I se vio obligado a mandar que nadie estorbara las visitas de los obispos, era porque no siempre eran bien recibidos. Concretamente en los territorios en los que la propiedad privada de las iglesias se mantuvo durante siglos bajo la forma del patronato, como en el Señorío de Bizkaia, la visita del obispo se consideraba una injerencia intolerable. El Fuero de Bizkaia de 1452 consignaba expresamente que los vizcaínos tenían desde antiguo por uso y costumbre que en el condado de Bizkaia no entrase obispo ni sus vicarios, llegando incluso a exculpar a aquellos vizcaínos que hirieren o dieran muerte al vicario del obispo que pretendiera quebrantar dicha costumbre: "*E otro si alguno ó algunos dieren favor el tal vicario ó vicarios fiscal ó fiscales comisario ó comisarios ó Presentadores de cartas del dicho Obispo, fueren muertos ó feridos por alguno de los Vizcainos por ser quebrantadores del dicho fuero, que los tales no aian pena alguna ni los Jueces ni Justizias puedan prender ni mandar prender ni tomar por bista, y en caso que lo fagan que lo tal no bala*"<sup>441</sup>.

En 1519, se firmó un capitulado entre varios procuradores de las villas y de la tierra llana de Bizkaia y el obispo de Calahorra Juan Castellanos y Villalba, en el que se regulaba la forma en que debía procederse en las visitas del obispo a aquellas tierras. A pesar de este acuerdo, el obispo de Calahorra no llegó a entrar en Bizkaia hasta después de un nuevo pacto que se firmó con el obispo Alonso de Castilla<sup>442</sup>.

En el Fuero Nuevo de Bizkaia redactado en 1526, no se prohibía la visita de los obispos al Señorío, pero eran varias las leyes dirigidas a restringir el poder de los mismos en dicho territorio. El régimen de patronato característico de las iglesias vizcaínas, protegido por el propio Fuero de Bizkaia, daba lugar a un continuo conflicto de jurisdicciones. El Título 32 del Fuero, bajo el epígrafe *De los patronazgos, y Jueces eclesiásticos, y Fiscales*, defendía el derecho de los patronatos frente a la injerencia de los obispos e incluso del papa, estableciendo en su ley 2ª que no se cumplan las Bulas y Cartas contrarias al derecho de los patronos vizcaínos, ya sean estas "del Papa, ó de otro Prelado".

<sup>438</sup> CSC, Lib. III, tit. XIX, Const. XI.

<sup>439</sup> Nov. Recop., Lib. I, tit. VIII, ley 3ª.

<sup>440</sup> Nov. Recop., Lib. I, tit. VIII, ley 5ª.

<sup>441</sup> Fuero de Bizkaia de 1452, *Título de los Patronazgos de los Monasterios y de los derechos de ellos, y á quien pertenecen é por quien deben ser juzgados*. LABAYRU, E. J., *Historia General del Señorío de Bizcaya*, Bilbao, 1899, tomo III, p. 208-211.

<sup>442</sup> LABAYRU, E. J., *Historia General del Señorío de Bizcaya*, Bilbao, 1899, tomo IV, p. 93-104.

En lo referente a las iglesias de Real Patronato, el rey mostraba una actitud similar a la de los patronos vizcaínos, impidiendo a los obispos la realización de visitas a las iglesias del Real Patronato sin autorización expresa para ello, y estableciendo las condiciones en que estas visitas debían llevarse a cabo. Mientras que los patronos vizcaínos se apoyaban en la legitimidad que les otorgaba el Fuero de Bizkaia, el Rey encontraba su legitimidad en el Patronato Real y en su calidad de protector de la Iglesia y del Santo Concilio de Trento. Tal como se recordaba al obispo de Calahorra en la Real Cédula de 9 de agosto de 1770, el rey había concedido a dicho obispo la facultad de visitar las iglesias del Real Patronato de su diócesis por medio de las Reales Cédulas de 14 de marzo de 1756, y de 10 de febrero y 28 de abril de 1757 *"en todo lo Espiritual y también en lo temporal, sin perjuicio de mis Regalías, y facultad de nombrar yo personas que en mi Real nombre hagan la visita, y con la calidad y condición de que vos, ni vuestros subcesores os mezcléis con pretexto alguno en dar licencias para imponer censos, ni enagenar, ni disponer de los bienes de las fábricas de dichas Anteiglesias, Hermitas y Hospitales, sin dar cuenta antes a mi Consejo de la Cámara y esperar mi expreso Real consentimiento para ello"*<sup>443</sup>. En la misma Real Cédula de 1770 se recordaba al obispo de Calahorra que en las visitas a las iglesias del Real Patronato no debía proceder como Ordinario, sino como delegado y en nombre del Rey, por lo que antes de realizar cualquier visita a dichas iglesias, el obispo debería dar cuenta al secretario del Real Patronato del Consejo de la Cámara y obtener su permiso. Además las visitas a estas iglesias, previo permiso, debería realizarlas él mismo, sin poder encomendarlas a ninguna otra persona.

El conflicto de jurisdicciones era patente también en sentido inverso, ya que son abundantes los casos en los que en la documentación del tribunal eclesiástico de Calahorra se encuentran referencias al mismo. Hay varios ejemplos de documentos emitidos por el tribunal eclesiástico de Calahorra en los que explícitamente se hace referencia a la libertad e independencia de la jurisdicción eclesiástica con respecto a la civil, no sometiéndose sus decisiones a la aprobación de instancias civiles<sup>444</sup>.

Este es el marco previo en el que se sitúa la visita que en el año 1819 realizó el obispo de Calahorra a varias iglesias de su diócesis, entre ellas la de Placencia. El obispo de Calahorra era entonces, desde el 26 de septiembre de 1814, Atanasio Puyal y Poveda.

---

<sup>443</sup> Real Cédula de 9 de agosto de 1770. Transcripción realizada en Elorrio el 16 de junio de 1828. AFB, Patronatos, 1/14.

<sup>444</sup> *"Para efecto de hacer notorio dicho despacho al citado Cavildo mandamos a su Presidente o Persona a cuio cargo esta el juntarlo que dentro de veinte y quatro horas de su notificacion lo congrege en el sitio y forma acostumbrado pena de diez Ducados y vajo la de quatro lo notifique qualquiera clerigo in sacris o Presbitero requerido a quien para el efecto avilitamos, sin que sea necesario tomar el uso de la Junta de la Provincia de Guipuzco (sic) por ser opuesto y contrario a la libertad y practica inconcusa de este tribunal: Dado en Logroño a veinte de Junio de mil setecientos nobenta y tres" (sic). ACC, Secretaría del Tribunal, 17/795/24.*



## Atanasio Puyal y Poveda, obispo de Calahorra. Un hombre de principios.

Calificado como teólogo antijansenista por Eliseo Sáinz Ripa<sup>445</sup>, Atanasio Puyal fue un prelado contradictorio. En sus actuaciones se mostraba como un hombre de una gran categoría académica, buen conocedor del Derecho Canónico, pero sobre todo un experto teólogo. No en vano había sido asesor en materia teológica del cardenal Lorenzana, arzobispo de Toledo. A pesar de haber protagonizado episodios como el de la oposición al nombramiento que le hizo José Bonaparte como obispo de Astorga, y de manifestarse en otros muchos escritos como un escrupuloso defensor de la independencia de la Iglesia, fue siempre un obispo contemporizador, que se adaptaba bien a las autoridades políticas, participando aparentemente de ideas contradictorias, dependiendo del sistema político triunfante en cada momento.

Un hombre de indudable talante conservador como él, ha llegado a ser considerado como próximo al heterogéneo grupo de obispos a los que por su actitud aperturista y de reforma durante el Trienio Constitucional se les puede considerar como reformadores<sup>446</sup>, ya que, si bien durante los años del gobierno absolutista de Fernando VII no dejó dudas de su postura tradicionalista, durante el Trienio no dio muestras de oposición al Gobierno y al sistema político en ningún momento<sup>447</sup>. El 21 de marzo de 1820, en Calahorra se pudo escuchar el redoblar de las campanas de su catedral por el retorno de la Constitución de Cádiz, y los días 20 de mayo y 8 de julio del mismo año, Atanasio Puyal exhortó a los párrocos de la diócesis para que la explicasen desde el púlpito los domingos y días festivos. Sin embargo, en 1817, se había opuesto rotundamente al proyecto de amnistía, respondiendo con un informe de extraordinaria dureza al oficio de finales de mayo de ese mismo año por el que se les pedía a todos los obispos españoles su opinión sobre la conveniencia de una amnistía, de carácter general o restringida a determinados supuestos, que afectara tanto a quienes se habían declarado partidarios del rey intruso, como a aquellos que suscribieron las opiniones y criterios que en Cádiz vieron la luz pública.

La fidelidad de Atanasio Puyal al Gobierno constitucional durante el trienio 1820-1823, contrasta, como ocurrió con un gran número de obispos, con sus escritos posteriores, aunque sus ideas y sus escritos nunca partieron de un posicionamiento

<sup>445</sup> SÁINZ RIPA, Eliseo, *Sedes episcopales de la Rioja, siglos XVIII-XIX*, Logroño, Obispado de Calahorra y La Calzada-Logroño, 1997, p. 280.

<sup>446</sup> Eliseo Sáinz Ripa, cita a Díaz de Cerio, quien menciona la existencia durante el Trienio Constitucional de un heterogéneo grupo de obispos reformadores del que formarían parte "el romántico e inseguro obispo de Mallorca (riojano de Soto de Cameros), el convencido constitucionalista y ortodoxo obispo de Astorga Martínez Riaguas; Posada y Rubín de Celis, obispo de Cartagena; García Benito, obispo de Tuy; Fraile García, obispo de Sigüenza; y el que por estos años era canónigo de Pamplona, y ardiente liberal, Miguel José Irigoyen, lo cual no le impidió ser obispo de Zamora y luego de Calahorra; y claro está, el que luego fue obispo de Astorga Félix Torres Amat". DÍAZ DE CERIO, F., "Notas sobre el jansenismo español en 1820-1825", en *Scriptorium Victorienense*, 23 (1976), pp. 303-341. Sáinz Ripa, añade tras la cita: "Puyal no pertenece a este grupo, pero se le acerca". SÁINZ RIPA, E., o.c., pp. 277.

<sup>447</sup> El amplio colectivo de obispos que acataron el nuevo sistema político y que respetaron su legitimidad no pueden ser considerados como reformadores por este hecho. Atanasio Puyal, como tantos otros obispos, adoptó una posición cautelosa, recomendando a sus feligreses diocesanos la obediencia a las autoridades legítimas como un deber cristiano.

abiertamente antiliberal, como el de tantos otros representantes del clero, sino que se basaban en una radical defensa de la independencia de la Iglesia, de sus doctrinas, de sus prácticas y de una moral tradicional<sup>448</sup>.

Hombre de paz y de orden, respetuoso con el poder temporal y sumiso al mismo cuando fuera necesario, pero capaz de enfrentarse a las más altas instancias del poder y dispuesto a correr riesgos por seguir los dictados de su conciencia en defensa de la independencia de la Iglesia, de una religiosidad tradicional, de los sagrados cánones y de las doctrinas emanadas del Santo Concilio de Trento. Puyal defendía una Iglesia tradicional, dependiente de Roma y de su Supremo Pastor, consintiendo el regalismo como una forma de protección de la Iglesia por parte de los poderes temporales, pero sin admitir en ningún caso, como se verá más adelante, la injerencia de éstos en los asuntos eclesiásticos. Desde este punto de vista se le puede considerar como un obispo intransigente.

Atanasio Puyal había nacido en Alpera, en la diócesis de Cartagena, en 1751<sup>449</sup>. Hizo sus estudios en el seminario de San Fulgencio<sup>450</sup>, en Murcia, doctorándose en Teología por la Universidad de Toledo<sup>451</sup>. Con sólo veinticinco años de edad fue nombrado consultor de la Sede de Toledo por el Cardenal Lorenzana, y pocos años

---

<sup>448</sup> En un edicto de 1823 en el que se advierte sobre los gravísimos males que ha producido durante los últimos años una desenfundada licencia de leer y escribir, mandando retirar de la circulación toda clase de libros, periódicos, folletos y escritos atentatorios contra la sagrada religión y contra la moral, Atanasio Puyal extendía su crítica a la coyuntura política por la que había pasado la monarquía española: "*Ademas de estos escandalos hemos sentido los terribles males de una revelion contra la sagrada Autoridad Real: hemos visto insultada la Magestad del Rey, desconocido el yugo saludable de las leyes, atropellada la justicia, y la anarquia difundida por toda la extensión de la Monarquia española*" (sic). ACC, Obispos, 07/15/09/x2.

<sup>449</sup> Para los datos biográficos de Atanasio Puyal he consultado: BAQUERO ALMANSA, A., *Hijos ilustres de la Provincia de Albacete*, Madrid, A. Pérez Dubrull, 1884, p. 156; BAYLE, C., "Un Obispo auxiliar de Madrid en 1790 y un decreto de José Napoleón en 1810", en *Razón y Fé*, 1953, pp. 171-177; SÁINZ RIPA, Eliseo, *Sedes episcopales...*, pp. 272-286; CANDEL CRESPO, Francisco, "Tres obispos albacetenses en la España de Fernando VII", en *Al-Basit*, 1994, 20 (35), pp. 113-130; y PERLADO, P. A., *Los obispos españoles ante la amnistía de 1817*, Pamplona, EUNSA, 1971, p. 220.

<sup>450</sup> El seminario de San Fulgencio, fundado por el obispo Sancho Dávila y Toledo en 1592, como uno de los primeros frutos del espíritu contrarreformista de Trento, tuvo un gran prestigio durante varios siglos. Por sus claustros pasaron personalidades como Saavedra Fajardo y el Conde de Floridablanca y de ellos salieron hasta veinte obispos. El seminario de San Fulgencio y el importante papel que jugó en el mundo de las elites intelectuales del siglo XVIII ha sido estudiado por varios autores: CANDEL CRESPO, *Rectores del Seminario de San Fulgencio de Murcia (1700-1961)*, Murcia, 1995; MAS GALVAN, C., "De la Ilustración al Liberalismo: El Seminario de San Fulgencio", en *Trienio*, 1988, 12, pp. 102-175; MAS GALVAN, C., "Jansenismo y regalismo en el Seminario de San Fulgencio de Murcia", en *Anales de la Universidad de Alicante. Historia Moderna*, 2, 1982, pp. 259-290; MAS GALVAN, C., "Un aspecto de la influencia valenciana en la renovación de los estudios: José Pérez y la reforma del Seminario de San Fulgencio de Murcia", en *La Ilustración Española. Actas del Coloquio Internacional celebrado en Alicante*, 1-4 octubre 1985, pp. 151 -173; VIÑAO FRAGO, ANTONIO, "El Colegio-Seminario de San Fulgencio: Ilustración, Liberalismo e Inquisición", en *Áreas. Revista de Ciencias Sociales*, nº 6, Murcia, 1986, págs. 19-48; MARTÍN HERNÁNDEZ, FRANCISCO, *Los seminarios españoles. Historia y pedagogía I. (1563-1700)*. Salamanca, Sígueme, 1964, 399; MARTÍN HERNÁNDEZ, FRANCISCO, "Estudios eclesiásticos españoles en la primera mitad del siglo XIX", en SECO SERRANO, C. Y OTROS: *La cuestión social en la iglesia española contemporánea*, págs. 177-224.

<sup>451</sup> Este dato es mencionado por PERLADO, P. A., *Los obispos españoles ante la amnistía de 1817*, Pamplona, EUNSA, 1971, p. 220, a partir de RITZLER-SEFRIN, VI, 151 y VII, 125.

después obtuvo una canonjía por oposición en la antigua Colegiata de San Isidro en Madrid, logrando grandes éxitos oratorios en el púlpito. En 1790 fue nombrado, a propuesta del Cardenal Lorenzana, Obispo auxiliar de Madrid con el título *in partibus infidelium*<sup>452</sup> de Obispo titular de Caristo. Puyal desempeñaba este cargo cuando se instaló en Madrid el gobierno de José Bonaparte, y protagonizó un conocido incidente al negarse a aceptar el nombramiento que éste le hizo como Obispo de Astorga en 1810. Más tarde, según la brevísima nota biográfica de Baquero Almansa, en 1823<sup>453</sup>, se resistió a asumir el gobierno de toda la archidiócesis de Toledo para la que habría sido propuesto, destacando el hecho de que el Nuncio Apostólico tuvo que trabajar mucho para que no se opusiera a ser presentado para la sede de Calahorra y La Calzada, para la que finalmente fue nombrado el 26 de septiembre de 1814<sup>454</sup>. Su negativa a aceptar el nombramiento para la sede toledana puede ser interpretada como un intento de mostrar la humildad de su carácter, aunque podría haber habido otras razones que le indujeran a oponerse a este nombramiento, ya que al parecer no se encontró muy cómodo durante los últimos años entre los canónigos de Toledo<sup>455</sup>.

Atanasio Puyal fue Obispo de Calahorra y La Calzada hasta su fallecimiento el día 21 de octubre de 1827, correspondiéndole vivir en una época de grandes y constantes cambios, lo que le obligó a adaptarse a circunstancias políticas muy diferentes. Anteriormente había ejercido su cargo de Obispo auxiliar de Madrid bajo el gobierno de José Bonaparte, así como bajo el gobierno constitucional, cuando Bonaparte abandonó Madrid definitivamente a comienzos de 1813. A partir de 1814, como Obispo de Calahorra, vivió el gobierno absolutista de Fernando VII, los años del Trienio Liberal y la vuelta al absolutismo en 1823.

---

<sup>452</sup> Según GOLMAYO, se llaman Obispos titulares los que se consagran a título de una iglesia que no pueden gobernar por estar situada en países dominados por los infieles, *in partibus infidelium*. En España la consagración de obispos titulares procede de la época medieval, como consecuencia de las cruzadas. La Iglesia trató de recuperar la memoria de los países que fueron cuna del cristianismo y que, conquistados después durante las cruzadas, volvieron nuevamente al poder de los infieles. Cuando una diócesis era muy extensa, como era el caso de la metropolitana de Toledo, se nombraban Obispos auxiliares a quienes se encomendaban determinadas poblaciones, cuyo título de ordenación era un obispado *in partibus*. Ver: GOLMAYO, P. B., *Instituciones del Derecho Canónico*, t. I, p. 374. La Iglesia católica abolió oficialmente la denominación *in partibus infidelium* por la Constitución apostólica *In suprema*, de 10 de junio de 1882, sustituyéndola, simplemente, por la de *titulares* o *del título* a la que sigue el nombre de curia de la diócesis. Con posterioridad al Concilio Vaticano II la praxis dio un paso más, asignándose títulos de sedes orientales a obispos orientales. Cfr. TERUEL, Manuel, *Obispos liberales*, Lleida, Milenio, 1996, nota en p. 48. Sobre los Obispos titulares: FORT, Carlos Ramón, "De los obispos españoles titulares de iglesias in partibus infidelium, o auxiliares en las de España", en *España Sagrada*, tomo LI, Madrid, 1879.

<sup>453</sup> No hay ninguna duda de que la fecha de 1823 se trata de un error, tratándose probablemente de 1813, ya que en 1814 fue nombrado Obispo de Calahorra. El propio Baquero Almansa dice que Puyal desempeñó el Obispado de Calahorra durante quince años hasta su muerte en 1828. Sin embargo Bayle no perdona este error y lo utiliza como un argumento más para descalificar a su autor.

<sup>454</sup> SÁINZ RIPA, Eliseo, *Sedes episcopales...*, p. 274.

<sup>455</sup> Según SÁINZ RIPA, Eliseo, *Sedes episcopales...*, p. 273, "la renuncia de Puyal (se refiere al nombramiento que le hizo José Bonaparte en 1810) le valió el intento del ministro de Asuntos Eclesiásticos de suspenderle en su sueldo capitular. Al lado del ministro estaban los canónigos de Toledo, metidos en intenciones de revancha contra Puyal".

Atanasio Puyal, un hombre con matices de ingenuo según Sáinz Ripa, aparece mencionado por Menéndez Pelayo en su *Historia de los Heterodoxos españoles* en el capítulo en el que da noticia de algunos casos de *alumbrados* de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX<sup>456</sup>. Siendo a la sazón Obispo auxiliar de Madrid, estuvo implicado involuntariamente en lo que el propio Menéndez Pelayo denominó una *estafa a lo divino*. Fue el caso de la madrileña *Beata Clara*, quien aconsejada, al parecer, por su madre y su confesor, se fingía tullida y poseedora de ciertos dones para resolver todo tipo de problemas y hasta para curar enfermedades. Esta mujer llegó a conseguir de Roma un breve de dispensa para hacer los votos de religiosa de Santa Clara sin necesidad de hacer vida de clausura, amparándose en la enfermedad que pretextaba, haciendo ante el Obispo auxiliar de Madrid su profesión de religiosa de Santa Clara, aunque por los comentarios que hizo Antonio Flores en su libro *Ayer, Hoy y Mañana*<sup>457</sup>, se puede sospechar algún otro tipo de participación junto al Nuncio Apostólico, Pedro Gravina<sup>458</sup>. En 1802, la *Beata Clara*, fue castigada con pena de reclusión por el Santo Oficio, junto a sus dos principales cómplices, la madre y el confesor, quienes al parecer recaudaban crecidísimas limosnas para la beata.

Ante la instalación en Madrid del Gobierno afrancesado de José Bonaparte, la jerarquía eclesiástica respondió de formas diversas. Muchos obispos, ante la obligación de jurar fidelidad al nuevo monarca y de escribir pastorales a su favor, decidieron huir, abandonando sus diócesis o refugiándose en lugares ocultos de las mismas. Otros muchos sin embargo colaboraron, con más o menos pasividad, con el nuevo Gobierno. La pastoral que Félix Amat<sup>459</sup>, arzobispo titular de Palmira y abad de San Ildefonso, dirigió en junio de 1808 al clero y fieles de su abadía, es quizá el mejor testimonio del argumento providencialista con el que los obispos colaboracionistas justificaban su cooperación con el gobierno josefino. En ella, Félix Amat afirmaba que "*Dios es quien da y quita los reinos y los imperios*"<sup>460</sup>, y animaba a sus fieles a respetar el precepto natural de obedecer a las potestades constituidas. La exhortación a la sumisión y la repulsa de la rebeldía fue el mensaje transmitido constantemente por la jerarquía eclesiástica que se mantuvo al frente de sus sedes.

Atanasio Puyal, se mostró desde un principio contemporizador y sumiso al poder constituido, hasta el punto de que se le ha llegado a considerar por algunos

---

<sup>456</sup> MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, *Historia de los Heterodoxos españoles*, Madrid, CSIC, 1947, t. V, pp. 471-472.

<sup>457</sup> FLORES, Antonio, *Ayer, Hoy y Mañana*, 1ª ed. 1853. Menéndez Pelayo cita la edición de Barcelona, 1883, tomo I, pp. 309-323.

<sup>458</sup> En el libro citado, Antonio Flores dice que "*no se concibe cómo pudieron engañar al Ilmo. Sr. D. Atanasio Puyal y Poveda, Obispo auxiliar de Madrid, y al Nuncio Apostólico, el Arzobispo de Nicea, Sr. D. Pedro Gravina, hasta el punto de alcanzar para aquella miserable tan grandes como absurdos privilegios. Estos prelados, a pesar de la elevadísima posición que ocupaban en la corte, quedaron muy mal parados de resultas de esa farsa, aunque no tanto como merecía su extremada candidez*".

<sup>459</sup> Esta pastoral se encuentra íntegra en TORRES AMAT, F., *Vida del Ilmo. Sr. Don Félix Amat, arzobispo de Palmyra...*, Madrid, Imprenta que fue de Fuentenebro, 1835, pp. 173-176. Las citas y la referencia proceden de LÓPEZ TABAR, Juan, *Los famosos traidores. Los afrancesados durante la crisis del Antiguo Régimen (1808-1833)*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2001, p. 43.

<sup>460</sup> *Ibidem*.

historiadores como perteneciente al grupo de afrancesados y colaboracionistas<sup>461</sup>. Su actitud de colaboración le llevó a pronunciar varios discursos laudatorios hacia el nuevo monarca, que fueron aprovechados por Juan Antonio Llorente<sup>462</sup>, para tratar de justificar su propia conducta. Llorente se defendió equiparando su conducta a la de otros eclesiásticos que, a pesar de haber mostrado actitudes colaboracionistas como las suyas, fueron aceptados posteriormente y reconocidos por el Gobierno de Fernando VII, manifestando lo siguiente:

*"El Reverendo don Atanasio Puyal juró al Rey Joseph, y le manifestó adhesión visitándolo al frente del Clero de Madrid, cuyas arengas pronunció en julio de 1808, enero de 1809 y otras varias veces, concurrió a las visitas voluntarias de Corte los domingos y otros días: sirvió como Obispo Auxiliar de Madrid en varias concurrencias solemnes del Rey a la iglesia de San Isidro, y en fin practicó todo lo que pudiera practicar otro cualquiera... Esto no obstante, Fernando VII le nombró después Obispo de Calahorra; el Papa Pío VII le libró institución canónica, y ahora es mi prelado por razón de origen"*<sup>463</sup>.

Sin embargo, lo que podría considerarse como un premio por su actitud de colaboración, nos muestra los límites hasta los que Puyal podía llegar en su sumisión a los poderes constituidos. Quien se había comportado de manera prudente aceptando al nuevo gobierno, a partir del momento en el que consideró que se atacaba directamente a la independencia de la Iglesia por medio de la intervención de la potestad civil en algo que era de competencia exclusiva de la Iglesia, manifestó sin lugar a dudas su intransigencia y su radical oposición. Un Real Decreto de 13 de junio de 1810 nombraba a Atanasio Puyal como obispo de Astorga, tras destituir a Manuel Martínez y Ximénez *"por haberse ausentado de su Diócesis, abandonando sus ovejas..."*. La carta que remitió Puyal pocos días después al Ministro de Asuntos Eclesiásticos renunciando al nombramiento, constituye un testimonio de entereza y de valentía que no deja lugar a dudas sobre su actitud de defensa de las prerrogativas de la Iglesia<sup>464</sup>.

Mostrando una gran honestidad, se atrevió a renunciar a su nombramiento argumentando la duda positiva sobre la validez de la destitución del obispo propietario por la autoridad civil, ya que sólo la Iglesia podía destituir a un obispo. La

---

<sup>461</sup> Manuel Revuelta lo incluye entre los obispos que mostraron una adhesión explícita al rey José. Según Revuelta, el nombramiento para la diócesis de Astorga sería una forma de premiar su adhesión, al igual que su designación como caballero de la Orden Real de España. A pesar de estas afirmaciones, este mismo autor considera que *"el ascenso que Puyal recibió del rey Fernando es una prueba de que su patriotismo no quedó empañado durante su convivencia con los afrancesados"*. REVUELTA GONZÁLEZ, Manuel, "La Iglesia española ante la crisis del Antiguo Régimen (1808-1833)", en GARCÍA VILLOSLADA, R. (dir.), *Historia de la Iglesia en España*, Madrid, B.A.C., 1982, t. V, p. 28.

<sup>462</sup> LLORENTE, Juan Antonio, *Defensa canónica y política de Don Juan Antonio Llorente contra injustas acusaciones de fingidos crímenes*, París, 1816, p. 76. Citado por SÁINZ RIPA, E., *Sedes episcopales...*, p. 273., y por CANDEL CRESPO, F., o.c., p. 117.

<sup>463</sup> Transcripción del texto de Llorente en CANDEL CRESPO, F., o.c., p. 117.

<sup>464</sup> La carta de Puyal ha sido transcrita íntegramente en BAYLE, C., "Un obispo auxiliar de Madrid en 1790 y un decreto de José Napoleón en 1810", en *Razón y Fé*, 1953, pp. 171-177. Este autor reitera la opinión de que Puyal, aunque *"en lo político aparentó ceder; en lo eclesiástico estuvo inmovible"*.

forma en la que expuso su razonamiento demuestra sus conocimientos de Derecho Canónico y su inflexibilidad ante cualquier ataque contra la independencia de la Iglesia.

La extensa carta<sup>465</sup>, fechada el 3 de julio de 1810, comenzaba con una introducción laudatoria del monarca, ensalzando su bondad, agradeciéndole la consideración que había mostrado hacia él y excusándose por no sentirse capaz, por su débil constitución, de asumir la terrible responsabilidad que se cargaba sobre sus hombros. De esta forma, Puyal no sólo renunciaba al nombramiento que se le hacía en aquel momento sino a cualquier otro que se le hiciera en el futuro. De alguna manera estaba tratando de suavizar lo que expondría a continuación. A partir del cuarto párrafo expuso sus razonamientos canónicos y teológicos, con los que defendía la tesis principal de su escrito, consistente en afirmar que la potestad episcopal *"sola la Iglesia la confiere, y sola puede pribar de ella a un obispo"*<sup>466</sup>. Por medio de abundantes referencias eruditas citaba numerosos cánones y concilios en los que apoyaba su argumentación, recurriendo incluso a la fuerza probatoria de un caso similar al suyo ocurrido en los primeros siglos de la Iglesia. Para finalizar su escrito, Puyal hacía una exposición, en medio de alabanzas hacia Napoleón por el respeto que manifestaba hacia la autoridad del Papa, de las funestas consecuencias que podría tener para la Iglesia y para todos sus fieles la aceptación de semejante nombramiento, que no haría sino levantar una revolución religiosa que se añadiría a la convulsión política: *"si se quiere apagar un fuego deborador, ¿cómo ha de ser medio para conseguirlo, encender de nuevo otro mayor y más voraz?"*<sup>467</sup>. Su negativa a aceptar el nombramiento fue presentada como la única forma de evitar los males que podrían resultar de su aceptación. Su conciencia no le permitía aceptar un nombramiento que atacaba directamente las prerrogativas de la Iglesia, y estaba dispuesto a lo peor antes que ceder y que transigir. El "in crescendo" en que se había convertido su carta de renuncia al nombramiento terminaba con una rotunda negativa a la aceptación del cargo para el que se le había nombrado, afirmando que prefería incluso la misma muerte antes que hacerlo: *"y digo a V.E., que elijo y prefiero, la suerte más infeliz, y la vida más trabajosa aun la misma muerte, antes que aceptar este cargo, ni contribuir en la más mínima parte a semejantes desgracias"*<sup>468</sup>.

Otros obispos auxiliares fueron designados por el mismo decreto para ocupar varias sedes de las que sus obispos se hallaban ausentes y que habían sido declaradas vacantes. Entre éstos, se encontraba Alfonso Aguado y Xarabo, obispo auxiliar de

---

<sup>465</sup> Varias copias manuscritas de esta carta en: ACC, Obispos, 07/15/01/04 y 08.

<sup>466</sup> Ibidem.

<sup>467</sup> Ibidem.

<sup>468</sup> Ibidem. Este incidente de Atanasio Puyal con el Gobierno josefino es recogido también en SALMON, P., *Resumen histórico de la revolución de España*, 6 tomos, Madrid, 1820. En esta obra se ensalza la valentía y el patriotismo de Puyal *"que dio las más relevantes pruebas de ciencia, religiosidad y virtud; pues a pesar de las repetidas instancias y argumentos que le hicieron los ministros y agentes de José, desechó la mitra de Astorga, para la que fue nombrado. Las ofertas mezcladas con amenazas que hicieron a este buen español no surtieron otro efecto que desengañarlos de su temerario y porfiado empeño"*. En 1815 se dictó una R. O. en la que se ordenaba la retirada en mano de todos los ejemplares de esta obra por verter opiniones contrarias a los padres del Rey.

Toledo, que fue nombrado obispo de Calahorra, en sustitución del destituido Francisco Mateo Aguiriano. La actitud de Alfonso Aguado, al aceptar el nombramiento, contrasta con la de Puyal y le convirtió en el objeto de las iras de Aguiriano. Éste puso en marcha un proyecto para excomulgar al intruso, redactando un edicto que fue distribuido por la diócesis de Calahorra, en el que se declaraba a Aguado incurso en los anatemas fulminados por la disciplina eclesiástica para los usurpadores de una mitra en vida y posesión legítima de su propietario. Se le calificaba en él de "cismático, adúltero, (...) heresiarca, peste, nuevo Menelao y Jasón..."<sup>469</sup>. La mala acogida por parte de los diocesanos y la no aceptación del nombramiento por parte del cabildo catedralicio de Calahorra impidieron al intruso la toma de posesión de la sede calagurritana. Finalmente, el decreto de provisión de obispados fue revocado en el verano de 1811.

A Atanasio Puyal la oposición al nombramiento realizado por José Bonaparte le costó el intento, al menos, del Ministro de Asuntos Eclesiásticos, el conde de Montarco, de suspenderle la paga de su sueldo capitular, y la hostilidad del cabildo toledano<sup>470</sup>.

Sin embargo, su actitud y los años de marginación que vivió después le valieron un cierto prestigio de patriota y antifrancés, que le ayudaron en la promoción a la sede calagurritana. Presentado por el rey para dicha sede el 19 de agosto de 1814, no tomó posesión de la misma hasta el 18 de marzo de 1815<sup>471</sup>.

En sus primeros años al frente de este nuevo obispado se mostró preocupado por el deterioro en la disciplina eclesiástica del clero y de las costumbres en general, consecuencia en gran parte de los efectos de la guerra. Ya en fecha tan temprana como el 24 de mayo de 1815, redactó una circular solicitando información sobre el clero de la diócesis en la que entre otras cosas se preguntaba por el restablecimiento de las conferencias morales y la asistencia del clero diocesano a las mismas<sup>472</sup>. El 11 de diciembre del mismo año otra circular alertaba y prevenía a sus feligreses de los excesos que solían ser habituales en las iglesias en la noche de Navidad<sup>473</sup>.

En estos primeros años al frente del obispado se ocupó de la puesta en marcha de los planes beneficios y de curatos propios que se habían iniciado en la anterior centuria, frente a los cuales había una fuerte oposición por parte de muchos pueblos que pedían el restablecimiento del sistema de provisión de beneficios patrimoniales. En 1818, con motivo de la petición dirigida al rey por varias poblaciones de la Rioja para que no se llevase a efecto el plan de establecimiento de curas propios,

---

<sup>469</sup> SIERRA, Luis, *Alfonso Aguado y Xarabo: un obispo intruso en Calahorra durante la Guerra de la Independencia, 1812*, Bilbao, 1964.

<sup>470</sup> Una transcripción de un escrito del cabildo, de 1811, en el que exponían las quejas contra Puyal, en SIERRA, Luis, *Alfonso Aguado y Xarabo: un obispo intruso en Calahorra durante la Guerra de la Independencia, 1812*, Bilbao, 1964. Este autor señala que "*la prudencia de Puyal se manifestó en no exceder los límites de una colaboración meramente material con el Gobierno josefino*".

<sup>471</sup> Para estos datos sigo a SÁINZ RIPA, Eliseo, *Sedes episcopales de la Rioja, siglos XVIII-XIX*, Logroño, 1997.

<sup>472</sup> ACC, Obispos, 07/15/02/a.

<sup>473</sup> ACC, Obispos, 07/15/02/d.

restableciéndose el sistema tradicional fundamentado en la patrimonialidad de los beneficios<sup>474</sup>, Fernando VII solicitó el informe del obispo. Atanasio Puyal emitió en noviembre de 1818 un largo informe en el que exponía los motivos por los que debía proseguirse con el Plan de establecimiento de curatos propios. Como consecuencia de este informe el Rey mandó, en enero de 1819, que se continuase adelante con el referido Plan.

En este mismo sentido, los aspectos prácticos del conflictivo Plan Beneficial de las iglesias de Bizkaia también fueron abordados por Puyal en estos años, pero quedaron en suspenso hasta después del Trienio, no aprobándose el "Arreglo de congruas beneficiales"<sup>475</sup> para las iglesias del Señorío hasta octubre de 1824.

Durante los años que siguieron al regreso de Fernando VII, tras la represión y la persecución que se llevó a cabo inicialmente tanto contra afrancesados como contra liberales y constitucionalistas con el fin de poner freno a las doctrinas revolucionarias, se planteó en varias ocasiones la necesidad de adoptar ciertas medidas encaminadas a lograr la conciliación entre los españoles. En muchos casos la política del gobierno fernandino intentó buscar fórmulas que permitiesen tal conciliación, olvidando el pasado, por medio de indultos parciales. Las medidas que tímidamente se fueron adoptando culminaron en un proyecto de amnistía que se puso en marcha definitivamente en 1817, después de un fracasado intento en marzo de 1816<sup>476</sup>.

---

<sup>474</sup> "En España: los que se han de conferir necesariamente a los naturales de un pueblo, diócesis o provincia". GOLMAYO, *Instituciones...*, t. II, § 169.

Fueron estudiados por Juan Antonio Llorente: LLORENTE, J.A., *Discursos histórico-canónicos sobre los Beneficios Patrimoniales...*, Pamplona, 1789. Llorente atribuye el origen de la patrimonialidad de los beneficios al hecho de que, al no ser necesario en aquella época (siglos XII-XIV) poseer un beneficio para ser ordenado, la ordenación suponía automáticamente la adscripción a la iglesia a la que pertenecía el ordenado, de tal forma que se reguló la manera de que no se buscasen clérigos extraños para servir en iglesias en las que hubiera clérigos ordenados en calidad de expectantes. Regulados por Breve de Clemente VIII de 28 de abril de 1596 (Cfr. RUIZ DE VELASCO, *Método práctico...*, p. 209), y por la Ley del Emperador Carlos I y su madre en la ley 4ª, tit. XXI, lib. I de la Nov. Recop. (GOLMAYO, *Instituciones...*, t. II, § 169).

El antecedente más remoto de la patrimonialidad de los beneficios eclesiásticos, según Postíus, se encuentra en la ley 11 cap. de episc. et cleric. de los emperadores Arcadio y Honorio, según la cual se daba preferencia para los beneficios curados a los hijos de cada feligresía y a falta de éstos a los naturales del obispado. De aquella ley vino la de Partida (L. 13, tit. 15, part. I). "El espíritu de localidad dominó aun en los Padres españoles del Concilio de Trento, pero aquellos tiempos pasaron cuando el Concordato de 1851 abolió el privilegio de patrimonialidad o exclusiva para curatos y otros beneficios (art. 26)". POSTÍUS Y SALA, J., *El Código Canónico aplicado a España*, Madrid, 1926, p. 764.

El privilegio de patrimonialidad, abolido definitivamente por el Concordato de 1851, constituía un derecho de patronato pasivo, ya que establecía el derecho de determinadas personas para optar a un beneficio eclesiástico con exclusión de las demás. Ver: GARROTE MARTÍN, Ángel, *El Derecho de Patronato*, Lugo, La voz de la verdad, 1921.

<sup>475</sup> *Arreglo de congruas beneficiales, dotación de Fábricas, reunion de Capellanías y Beneficios de las Iglesias de este M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya, situadas en el Obispado de Calahorra*, Bilbao, Eusebio de Larumbe, impresor del Señorío, s.a. (BDFB, VA-117).

<sup>476</sup> Sobre el proyecto de amnistía de 1817, sus antecedentes y los informes que acerca del mismo emitieron los obispos españoles es imprescindible la consulta de PERLADO, Pedro Antonio, *Los obispos españoles ante la amnistía de 1817*, Pamplona, EUNSA, 1971. Esta obra contiene la transcripción de todos los informes de los obispos españoles.

Con el fin de asegurar el acierto en las medidas proyectadas, el Gobierno dirigió una consulta a varios organismos y personalidades, y a todos los obispos y arzobispos. Por medio de un oficio fechado a finales de mayo de 1817 se pidió a los prelados su opinión sobre la proyectada amnistía que habría de afectar a los que se declararon partidarios del rey francés y a aquellos que suscribieron las opiniones y criterios que en Cádiz vieron la luz pública<sup>477</sup>.

El pronunciamiento de Atanasio Puyal sobre este proyecto es muy significativo<sup>478</sup>. En su informe, tal como él mismo señala, hablaba, como un particular y no como obispo<sup>479</sup>, desde la propia experiencia<sup>480</sup>. Una experiencia que le habría llenado de amargura y de resentimiento. Después de su renuncia al nombramiento que hizo en él José Bonaparte, su situación no debió de ser muy halagüeña. Su oposición a cualquier clase de amnistía era radical, aunque, como él mismo reconocía, si tuviera que opinar como obispo, tendría que pedir perdón para todos aquellos contemplados en el proyecto de amnistía que se le sometía a consulta. Puyal no se pronunciaba en este informe como teólogo ni como obispo, sino como un hombre dolido, ofendido y sobre todo resentido.

Puyal, en su informe, vertió durísimas acusaciones contra afrancesados y contra constitucionalistas, asegurando que *"unos y otros son perversísimos y perjudicialísimos en cualquier sociedad"*<sup>481</sup>, aunque los segundos eran *"mucho peores y mucho más perjudiciales al Estado, al Soberano y a la Religión que los primeros"*<sup>482</sup>. Denunció como doctrinas nefastas, procedentes de la lectura de los libros de los filósofos impíos, el amor a la igualdad, a la libertad y a la independencia; así mismo, la libertad de imprenta la consideraba como un medio para esparcir sus máximas y errores y para aumentar la impiedad y la persecución del clero y sus prelados. Concluía su informe con unas palabras en las que no había ni un mínimo rastro de indulgencia ni de piedad cristiana: *"juzgo que no solamente no es conveniente el concederles una amnistía general, ni tampoco con excepciones, sino que sería perjudicialísima al bien del Estado, a la tranquilidad de la Nación y a la seguridad de S. M., sin que pueda hallar una medida conciliatoria en sana política para usar de contemplación con tal linaje de fieras enemigas de la sociedad. Deben mantenerse lejos de la Patria los que la abandonaron, y los que*

---

<sup>477</sup> En el mencionado oficio dirigido a los obispos se hacían auténticos equilibrios con el lenguaje con el fin de evitar términos como "afrancesados", "revolucionarios" o "constitucionalistas", que podía inducir a divisiones de las que precisamente se trataba de huir.

<sup>478</sup> El texto completo del informe de Puyal se encuentra transcrito en PERLADO, P. A., *Los obispos españoles ante la amnistía de 1817*, Pamplona, EUNSA, 1971, pp. 221-226. Existe una copia manuscrita en ACC, Obispos, 07/15/01/01.

<sup>479</sup> "... no hablo ahora como Obispo (pues como tal me tocaba cerrar los ojos sobre tantos delitos y solamente pedir el perdón para sus autores, implorando a su favor la Real clemencia), sino como un particular". PERLADO, P. A., *Los obispos...*, p. 221.

<sup>480</sup> "la triste experiencia de estos últimos años y las observaciones que me han obligado a hacer sobre los hombres que han figurado y hecho papel en las varias escenas, la misma situación bien pública en que me he hallado y los varios sucesos de que he sido testigo...". PERLADO, P. A., *Los obispos...*, p. 221.

<sup>481</sup> *Ibíd.*

<sup>482</sup> *Ibíd.*

*están dentro de ella confinados, lo deberán estar como apestados, para que no puedan propagar el contagio...*"<sup>483</sup>.

Muy diferente fue la opinión expresada por quien fuera condiscípulo suyo en el seminario de San Fulgencio y a quien el mismo Atanasio Puyal ayudó en su ascenso al episcopado, el obispo de Barbastro Juan Nepomuceno de Lera y Cano. Este obispo, consagrado en febrero de 1815 por Puyal, había participado en las Cortes de Cádiz, aunque, como él mismo reconocía, estuvo muy lejos de adherirse a las nuevas ideas, *"llevado de la opinión de que en las Cortes no debían hacerse innovaciones hasta que restituido nuestro Monarca a su trono, juntase Cortes con arreglo a nuestras leyes y con ellas se hiciesen las reformas convenientes"*<sup>484</sup>. En su informe, fechado el mismo 17 de junio de 1817, en contestación al oficio por el que se le solicitaba su opinión acerca de la utilidad política de una amnistía general, después de hacer un análisis de la situación previa a los acontecimientos revolucionarios, mencionando *"las tristes circunstancias en que nos había dejado el Gobierno anterior"*<sup>485</sup>, se mostró indulgente y benévolo con quienes desempeñaron empleos bajo el gobierno de José Bonaparte, ya que *"lo contrario era entregar los pueblos sometidos a la anarquía o a que el enemigo pusiese jueces y gobernadores que fuesen de su íntima confianza"*<sup>486</sup>. Así mismo, su indulgencia se extendió hacia los comprendidos bajo el eufemístico *"título de opiniones políticas"*, aunque pensaba que debían excluirse de la amnistía aquellos particulares de quienes *"el Gobierno tenga noticias positivas de su malicia y refinada malignidad"*<sup>487</sup>. Aprovechó este prelado para demostrar su lealtad al legítimo rey, incluso en la época en la que participó en las Cortes de Cádiz, mostrando su desacuerdo con las nuevas ideas que allí se defendieron. Sin embargo, creía que no por ello se debía renunciar a la compasión y a la clemencia. Afirmó que su actitud crítica durante las Cortes de Cádiz le hizo objeto de burlas, aunque las consideraba consecuencia de una imaginación acalorada y no por ello menos dignos sus responsables de la compasión y benignidad.

Ante el restablecimiento de la Constitución en 1820, la actitud de Puyal, al igual que la de la mayor parte de la Iglesia española, fue de aceptación de los hechos consumados<sup>488</sup>. La figura del rey otorgaba al nuevo sistema político una legitimidad que obligaba a la jerarquía eclesiástica a aceptarlo. Puyal se mostró durante todo el período de gobiernos constitucionales obediente y sumiso a la autoridad legítima, promoviendo entre sus diocesanos esta sumisión como la única garantía de orden y de paz. No admitía el regalismo, ni aceptaba que se pusiera en duda la independencia de la Iglesia, pero era partidario de una monarquía comprometida en la defensa de la Iglesia, por lo que una Constitución que amparaba la religión

---

<sup>483</sup> *Ibíd.*

<sup>484</sup> PERLADO, Pedro Antonio, *Los obispos españoles ante la amnistía de 1817*, Pamplona, EUNSA, 1971, p. 194.

<sup>485</sup> *Ibíd.*, p. 191.

<sup>486</sup> *Ibíd.*, p. 191.

<sup>487</sup> *Ibíd.*, p. 192.

<sup>488</sup> Una visión general de la situación de la Iglesia española durante los años del Trienio Constitucional, que aunque ya haya sido revisada en muchos aspectos continúa siendo perfectamente válida, en CUENCA TORIBIO, J. M., "La Iglesia española en el Trienio Constitucional (1820-1823). Notas para su estudio", en *Hispania Sacra*, 18 (1965), pp. 333-362.

católica podía ser admitida como una garantía suficiente. En sus pastorales en defensa de la Constitución y del régimen político, quedó patente su preocupación por la paz y el orden y por la necesaria obediencia a los poderes políticos legítimamente constituidos.

Las medidas radicales proyectadas y puestas en marcha ya desde la primera legislatura del Trienio que afectaron directamente a la Iglesia, como la supresión de los jesuitas, la supresión del fuero eclesiástico, la libertad de imprenta, o las medidas desamortizadoras, fueron debilitando los ya de por sí frágiles apoyos con los que la jerarquía eclesiástica acogió el nuevo sistema político. Sin embargo, Atanasio Puyal se mantuvo hasta el último momento como un prelado dócil y sumiso, publicando cuantas pastorales le fueran encomendadas por el gobierno en defensa de la Constitución y del sistema político constitucional.

Tras los sucesos ocurridos en Álava a comienzos de 1821<sup>489</sup>, el día 16 de mayo, escribió una pastoral<sup>490</sup> en la que hacía un llamamiento a la obediencia a las autoridades y a "*las legítimas Potestades civiles*"<sup>491</sup>, "*porque no hay potestad que no venga de Dios*"<sup>492</sup>, como único medio de conservar la paz, la tranquilidad y la prosperidad. Imploraba a sus diocesanos que conservasen el espíritu de obediencia y sumisión a toda autoridad. No obstante, es preciso tener en cuenta que esta pastoral fue consecuencia de una orden expresa recibida desde el Gobierno por medio de un escrito que con fecha de 3 de mayo de 1821 le comunicaba una Real Orden para que en el término de ocho días publicase un edicto pastoral con el fin de promover en sus diocesanos la obediencia a las legítimas potestades<sup>493</sup>.

Un año después, cuando la situación política estaba ya muy deteriorada, el 11 de agosto de 1822, obedeciendo el Decreto de 29 de Junio anterior, en el que se mandaba a los obispos la publicación de pastorales en las que se manifestara la conformidad de la Constitución con la Religión Católica Apostólica Romana, Puyal publicó una nueva pastoral<sup>494</sup> que comenzaba reiterando la necesidad de obedecer las leyes y someterse a las autoridades políticas con el fin de evitar la anarquía y la guerra civil, "*que es el más terrible de los males, y el más horroroso azote con que Dios en su ira aflige a las Naciones temporalmente*"<sup>495</sup>. El texto de la pastoral es una larguísima y retórica argumentación en la que se esforzó en demostrar precisamente lo que se le había ordenado, es decir, que "*la Constitución Política de la Monarquía*

---

<sup>489</sup> En enero de 1821, en Labastida, se produjo una sublevación contra el régimen constitucional. El cabecilla de la rebelión fue precisamente un sacerdote llamado Antonio Amurrio Sáenz de Cuesta. Los movimientos insurreccionales durante el Trienio fueron dirigidos en muchas ocasiones por sacerdotes y religiosos. Cfr. MONTROYA, Pío de, *La intervención del clero vasco en las contiendas civiles. 1820-1823*, San Sebastián, Izarra, 1971.

<sup>490</sup> ACC, Obispos, 07/15/02/e.

<sup>491</sup> Ibídem.

<sup>492</sup> Ibídem.

<sup>493</sup> Este escrito, al igual que otro anterior del Jefe Político de Álava, se encuentran transcritos en MONTROYA, Pío de, *La intervención del clero vasco en las contiendas civiles. 1820-1823*, San Sebastián, Izarra, 1971, pp. 79-80.

<sup>494</sup> ACC, Obispos, 07/15/02/g.

<sup>495</sup> Ibídem.

*no se opone ni disuena en un punto de la Religión Católica Apostólica Romana, antes bien la establece y asegura*"<sup>496</sup>.

Por medio de un recorrido a través de los artículos más polémicos de la Constitución en los que se trataba de la libertad de imprenta o del reconocimiento de la igualdad de todos los ciudadanos, intentó convencer de que era un error atribuir a la Constitución los excesos cometidos en contra de sus propios preceptos o por el abuso de los mismos. Una rápida lectura de esta pastoral podría hacernos pensar que quien la redactó era alguien convencido de los ideales de igualdad y de libertad que animaban al liberalismo más radical de la época.

La sumisión a la autoridad civil que practicó y que defendió con tanto ahínco, lo mismo bajo el reinado de José Bonaparte que durante los años del Trienio, estaba justificada por su concepción del papel de la Iglesia y de las relaciones entre ésta y el Estado. Esta concepción era patente en sus pastorales. Según expuso en la del año 1822, la religión "*no se entromete en arreglar los Gobiernos Políticos, ni dictarles las Leyes Civiles, tampoco reprueba ninguno de aquellos que están reconocidos por legítimos...*"<sup>497</sup>.

La proclamada sumisión a la autoridad civil y a la potestad legítimamente constituida, sin embargo, no impidió que a finales de 1822, ante la petición de ayuda económica para la creación de una División realista, contribuyese con 1.500 reales. Por medio de un escrito fechado en Irurozqui, Navarra, el día 4 de diciembre de 1822, se le pedía un préstamo de 50.000 reales destinados a la creación de una división de las tropas realistas. El escrito iba dirigido al obispo "*por su conocido amor a la Santa causa que defendemos, y a la persona del Rey N. S.*"<sup>498</sup>. Al margen del escrito figura el recibo de la cantidad realmente entregada: 1.500 reales. Posteriormente, en un impreso<sup>499</sup> fechado en julio de 1824 en el que figura una relación de particulares y corporaciones del clero que *generosamente* contribuyeron con aportaciones económicas a la División de voluntarios realistas, aparece el obispo de Calahorra con una aportación de 1.000 reales.

Desde el punto de vista del funcionamiento del obispado, los años del Trienio supusieron una época de paralización de la diócesis<sup>500</sup>, durante la cual casi la única

---

<sup>496</sup> En el preámbulo de la pastoral mencionaba expresamente la orden que había recibido de publicar una pastoral con dicho fin: "... *estimados al mismo tiempo de una orden de S.M., que acabamos de recibir, en la cual se sirve mandar de conformidad con lo resuelto por las Cortes en su Decreto de 29 de Junio último "que publiquemos inmediatamente en nuestra Diócesis una Pastoral en la que clara y terminantemente manifestemos la conformidad de la Constitución Política de la Monarquía con la Religión Católica Apostólica Romana"*. ACC, Obispos, 07/15/02/g.

<sup>497</sup> ACC, Obispos, 07/15/02/g.

<sup>498</sup> ACC, Obispos, 07/15/12.

<sup>499</sup> "1824. Contribución del clero para la División de Voluntarios realistas". ACC, Obispos, 07/15/11.

<sup>500</sup> Esta paralización fue consecuencia de las medidas que sucesivamente fueron adoptando las Cortes relacionadas con el arreglo del clero y la reforma de los regulares, así como de las leyes de desvinculación y contra la amortización eclesiástica.

Una orden de 8 de marzo de 1821 mandaba suspender la provisión de beneficios y capellanías que no tuvieran aneja la cura de almas en tanto no se redactase un plan general del clero definitivo. Ver: *Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes ordinarias de los años de 1820 y 1821*, Madrid, Imprenta Nacional, 1821, tomo VII, p. 31.

preocupación del obispo fue el mantenimiento de la paz y el orden, correspondiendo a una actitud personal de prudencia y de inhibición. Por otra parte, una gran incertidumbre sobre el futuro y sobre las acciones más convenientes impidió cualquier toma de decisiones. El conflicto que mantuvo con su provisor y que concluyó, una vez restablecido el gobierno absoluto de Fernando VII, con la petición de destitución del mismo dirigida a la Cámara de Castilla, refleja una situación en la que, al amparo de la inhibición y del absentismo del prelado, el provisor y vicario general de la diócesis asumiría algunas competencias que no le correspondían<sup>501</sup>.

---

Por otra parte, el decreto XXIV de 26 de abril de 1822, disponía que los arzobispos y obispos no expidieran dimisorias ni confiriesen órdenes mayores hasta el arreglo del clero. Ver: *Colección de los decretos y órdenes generales...* tomo IX, p. 95. En relación con la suspensión de las órdenes mayores, el día 1 de octubre de 1820, en la discusión del proyecto de ley de reforma de regulares, el diputado Marín Tauste pedía que se suspendiesen las órdenes mayores que se estaban confiriendo por los obispos, en perjuicio de lo que habían determinado las Cortes con el fin de que los religiosos suprimidos pudiesen optar a beneficios y prebendas. Los obispos presentes, Castrillo y Fraile, manifestaron su extrañeza por semejante petición, pues según ellos las órdenes mayores habían decaído extraordinariamente, señalando, entre otras razones, que se habían vendido los bienes de muchas capellanías y que en muchas otras sus capitales se habían impuesto en el crédito público, que no pagaba réditos. Ver: *Diario de las Sesiones de Cortes. Legislatura de 1820*, nº 89, p. 1339, en *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Serie Histórica*, Madrid, Congreso de los Diputados, 2002.

<sup>501</sup> En el año 1824, Puyal solicitó de la Cámara de Castilla su autorización para destituir a su provisor y vicario general, alegando incompatibilidad con el mismo y acusándole de haberle usurpado determinadas competencias aprovechándose del "estado de abyección y abatimiento en que desgraciadamente se hallaban los Obispos en tiempos del Gobierno revolucionario". El expediente relativo a la separación del cargo de provisor de Francisco Baeza se encuentra en: ACC, Obispos, 07/15/05.



## Intereses contrapuestos y conflicto de jurisdicciones.

### El obispo y la capellana. Intereses de la Iglesia e intereses privados.

En el verano de 1819, el obispo de Calahorra realizó visita pastoral a las iglesias de su diócesis situadas en Gipuzkoa. Estando en la cercana villa de Elgoibar, efectuó la visita de los libros de la iglesia parroquial de Placencia. Es preciso destacar que se advierte una exquisita meticulosidad en los autos de visita que redactó. Al inspeccionar el libro de la capellanía fundada por Azcarate, descubrió que estaba siendo ocupada desde el año 1812 por una mujer, María Bárbara de Aguirre, quien desde entonces disfrutaba de sus rentas en concepto de merelega. Por lo que se deduce del auto que proveyó al respecto, disponía de suficiente información para no tener ninguna duda de que la capellanía de que se trataba era eclesiástica y colativa. Independientemente de lo que dijera la escritura de fundación y de la dificultad para interpretar la voluntad del fundador en su memoria testamentaria, había algo que era incuestionable: la fundación fue aprobada por el ordinario de Calahorra, sus bienes habían sido espiritualizados y se había despachado el título de colación correspondiente a favor de su primer capellán. Estos hechos por sí solos parecían suficientes para probar que la capellanía era eclesiástica y colativa. Por ello, el auto del obispo se refiere a la visita que hizo del "*Libro de la Capellanía Colativa*"<sup>502</sup>.

La evidencia aportada por los hechos mencionados era reforzada por medio de otros argumentos, como la alusión a la voluntad del fundador, que según la interpretación del obispo era indudable que fue la de fundarla en concepto de eclesiástica y colativa<sup>503</sup>. El recurso a la interpretación de la voluntad del fundador sería una constante a lo largo del pleito que se inició a raíz de este auto, ya que tanto una parte como la otra basaban gran parte de sus argumentos en la clarísima voluntad del fundador, que para unos fue la de que fuera eclesiástica y para otros meramente laical.

Como consecuencia de su convicción acerca de la naturaleza de la capellanía, era obvio que la presentación que hizo el patrono en una mujer debía ser reputada por nula por no haber recaído en sujeto idóneo y capaz para obtenerla. Por tanto, el auto del obispo consideraba la capellanía como vacante desde la muerte de José María de Aguirre, hacía siete años, por lo que al haber pasado con exceso el término que el derecho canónico concedía a los patronos para efectuar la presentación<sup>504</sup>, ésta

---

<sup>502</sup> Auto de visita de la capellanía, de fecha 23 de agosto de 1819. AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/2, 82-84. (Apéndice 2, nº 14).

<sup>503</sup> "Y por quanto la mente del instituyente de esta capellanía fue fundarla en concepto de puramente *Eclesiastica colativa...*". Ibidem.

<sup>504</sup> "Por espacio de muchos siglos no se fijó tiempo dentro del cual el patrono había de hacer la presentación; pero como esto era un mal, porque podía dar lugar a largas vacantes, el Concilio III de Letrán señaló cuatro meses para los patronos legos, y Alejandro III después señaló seis para los eclesiásticos". GOLMAYO, P. B. *Instituciones del Derecho Canónico*, Madrid, 1859, tomo II, p. 251.

correspondía al obispo por *jure devoluto*<sup>505</sup>. Sin embargo, procedió el obispo excepcionalmente a no utilizar este derecho, concediendo a los patronos dos meses para que hicieran una nueva presentación "*en sugeto haviel, idoneo y capaz, que con arreglo a la fundacion pueda cumplir sus cargas y obligaciones*"<sup>506</sup>. Pasado el plazo de dos meses, el vicario debía comunicar la resolución recaída al fiscal del tribunal doicesano para que resolviese en consecuencia.

El auto finalizaba dando las instrucciones habituales dirigidas a los que en el futuro accedieran a la posesión de la capellanía, mandando que fueran cumplidas todas las cargas impuestas a la misma, certificando su exacto cumplimiento en el libro de la capellanía, y ordenando hacer un inventario de los censos en los que se encontraban impuestos sus capitales, así como que dichos censos fueran reconocidos periódicamente y siempre que las hipotecas pasaren a terceros. Todo ello con las consiguientes cláusulas penales para el caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones impuestas.

Este auto fue el inicio de varios pleitos a lo largo del cuales entraron en conflicto las jurisdicciones civil y eclesiástica a través de diferentes instancias. Se vieron directamente involucrados en los mismos los poseedores de la capellanía en concepto de merelega, varios aspirantes a ella, el Ayuntamiento de Placencia, la Cámara de Castilla y su fiscal, el Consejo de Estado, el tribunal del Corregimiento de Gipuzkoa, el tribunal eclesiástico de Calahorra, el metropolitano de Burgos, el obispo de Calahorra e incluso el propio rey Fernando VII.

El conflicto de jurisdicciones era algo inherente al propio pleito. Se trataba de un conflicto de intereses enfrentados en los que la jurisdicción a la que correspondía la resolución del conflicto era parte del propio conflicto. Si se llegaba a resolver el problema de la jurisdicción competente en el asunto, automáticamente el pleito quedaba resuelto, ya que el hecho de reconocer la competencia de una de las jurisdicciones en conflicto conllevaba automáticamente el reconocimiento del derecho de una de las dos partes sobre la otra.

El conflicto se apoyaba básicamente en dos cuestiones. La primera de ellas era la naturaleza de la capellanía, ya que si era colativa debía someterse a la jurisdicción eclesiástica, y por el contrario, si era merelega correspondería exclusivamente a los tribunales civiles. La segunda cuestión clave era la jurisdicción delegada que tenía el obispo sobre las iglesias del Real Patronato, apoyada en una larga tradición de muchos siglos que durante el último siglo se había visto reforzada por el regalismo borbónico e ilustrado.

---

<sup>505</sup> Este derecho consiste en la devolución al Ordinario del derecho a presentar un beneficio, que puede ser, según su causa, temporal o perpetua. El derecho a nombrar o presentar se devuelve al Ordinario, ya porque falten los parientes llamados por el fundador, a causa de haberse extinguido por completo las líneas, ya porque llegado el caso de una vacante, o no se persona a solicitarla en tiempo ninguno de los llamados, o el patrono o patronos dejen transcurrir el señalado en la fundación para hacer la presentación, o que ésta haya tenido lugar a ciencia del patrono contra las condiciones expresadas en la fundación o requeridas por derecho. Sólo en el primer caso la devolución es perpetua, y en los demás por aquella vez. Cfr. COVIÁN, V., "Capellanías", en *Nueva Enciclopedia Jurídica*, t. III, Barcelona, 1951, p. 635-643.

<sup>506</sup> AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/2, 83.

El obispo de Calahorra, Atanasio Puyal, había desafiado directamente a los poseedores de la capellanía a quienes pretendía despojar de su goce, al Ayuntamiento de Placencia que se consideraba con la jurisdicción competente para decidir por sí mismo en cualquier asunto relacionado con la misma, y finalmente, a la Cámara de Castilla a quien correspondía toda la jurisdicción relacionada con el Real Patronato. Las tres instancias directamente involucradas reaccionaron y se opusieron con dureza al auto del 23 de agosto.

La primera reacción al auto del obispo se hizo esperar algo más de un mes. El 7 de octubre de 1819, Miguel Antonio de Jauregui se dirigió al rey por medio de una representación, poniéndose bajo su protección y solicitando la adopción de las providencias necesarias para evitar el despojo ordenado por el obispo<sup>507</sup>. En su escrito hacía mención explícita a las dos cuestiones que constituyeron la clave del conflicto: que la capellanía era indiscutiblemente merelega y que el obispo se había excedido en la declaración que hizo sin obtener previamente la aprobación de la Real Cámara, rivalizando con la jurisdicción que privativamente correspondía a ésta.

Comenzaba su representación informando de que su mujer se hallaba en posesión de una "*Capellanía ó memoria de Misas lega*"<sup>508</sup>, para pasar inmediatamente a lanzar dos graves acusaciones contra el obispo de Calahorra. En primer lugar le culpaba de no acomodarse al encargo que se le había encomendado por medio de la orden que le comisionaba para que visitase las iglesias de Real Patronato, y a continuación denunciaba su intento de hacer colativa una capellanía que era simplemente una memoria de misas, acusándole de suponer gratuitamente que la voluntad del fundador había sido la de que fuera colativa.

La argumentación con la que defendía la condición de merelega de la capellanía se basaba en los mismos razonamientos que unos años antes había utilizado el asesor Juan Bautista de Cortavarria<sup>509</sup>, a quien consultaron alarmados por las pretensiones de Mendiguchia. Fundamentalmente se basaba en que el fundador no había dispuesto que la capellanía fuera colativa; que el cumplimiento de las cargas espirituales de la misma no era personalísimo, ya que el propio fundador previó la posibilidad de que las misas y los responsos no fueran celebrados por el propio capellán<sup>510</sup>; y que el patrono de la misma era el Ayuntamiento de Placencia a quien le competía exclusivamente entender en todo tipo de pleitos relacionados con ella.

---

<sup>507</sup> Representación de Miguel Antonio de Jauregui, del 7 de octubre de 1819. AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/2, 86-87. (Apéndice 2, nº 15).

<sup>508</sup> *Ibidem*.

<sup>509</sup> El doctor Juan Bautista de Cortavarria emitió su dictamen el 23 de septiembre de 1817 como respuesta a la consulta realizada por María Bárbara de Aguirre. AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/2, 66-69. (Apéndice 2, nº 9).

<sup>510</sup> En las capellanías colativas, a no ser que fueran presbiteriales, hasta que el capellán no se ordenara de presbítero, las misas debían ser celebradas por un sacerdote a cambio de un estipendio. Dado que las capellanías colativas podían servir como título de ordenación, el capellán que las ocupaba podía, también, a su vez, tardar algún tiempo en ordenarse a título de ellas. En el caso en que el fundador de una capellanía dispusiera que el capellán tenía obligación personal de levantar las cargas espirituales por sí mismo, significaba que a capellanía debía ser presbiterial, no sirviendo como título de ordenación, no pudiendo ser presentado para la misma ningún aspirante que no estuviera ordenado *in sacris*.

Del dictamen de Cortavarría adoptaba el criterio de que si José María de Aguirre había obtenido la colación, lo había hecho "*para solo su vida y elevarse con ello al sacerdocio*"<sup>511</sup>, restituyéndose con su fallecimiento a su propia e indiscutible naturaleza de merelega.

### **El patrono. Los intereses del Ayuntamiento.**

Tan solo dos días después de que Miguel Antonio de Jauregui dirigiera su representación, el 9 de octubre el Ayuntamiento de Placencia remitió un oficio al obispo de Calahorra en el que se transcribía literalmente la memoria testamentaria de Juan Antonio de Azcarate<sup>512</sup>. Mientras que los poseedores intervenían defendiendo sus intereses particulares, el principal objetivo del Ayuntamiento, al menos explícitamente, era la defensa de la institución a la que representaba y por tanto de la jurisdicción Real frente a la eclesiástica.

El Ayuntamiento también recurría a la voluntad del fundador como la única ley que debía gobernar en las cuestiones que se pudieran plantear en relación con las capellanías, pero en su interpretación de esta voluntad no acudía a la forma en la que debían levantarse las cargas ni al orden de llamamiento en la sucesión, sino a algo que le concernía directamente, deduciendo de la memoria testamentaria de Azcarate que cuando nombró como patrono al Ayuntamiento y Justicia de la villa estaba disponiendo que la capellanía fuese lega, encomendando al juez secular la administración de justicia en todos los asuntos y pleitos pertenecientes a la misma.

En cuanto a la espiritualización de los bienes de la capellanía y el título de colación que se despachó en 1779 en favor del primer capellán, manifestaba semejantes opiniones a las expresadas en el dictamen de Cortavarría ya mencionado. Según el Ayuntamiento de Placencia, "*la conveniencia que resultó a D. José María de Aguirre de colarla no puede despojar a la Capellanía de la naturaleza de lega, y mucho menos privar a la Real jurisdicción del ejercicio y conocimiento que le compete*"<sup>513</sup>. En su opinión, la muerte de Aguirre debía restituir la capellanía a la naturaleza de lega y a sus bienes a la de profanos, "*como sucede en los casos que algunos poseedores de bienes profanos para elevarse al sacerdocio suelen espiritualizarlos para sus días*"<sup>514</sup>.

El Ayuntamiento negaba al obispo cualquier competencia relacionada con la capellanía, ya que por voluntad del fundador ésta sólo correspondía al Ayuntamiento de Placencia, recordándole además que, siendo la iglesia parroquial de Placencia de Real Patronato, no ejercía en ella sino jurisdicción delegada en virtud de la correspondiente Real Cédula "*que no dudamos la tenga para la visita*"<sup>515</sup>. Es decir, que sin una orden expresa, el obispo ni siquiera podría haber realizado la visita, que

---

<sup>511</sup> *Ibídem*.

<sup>512</sup> Oficio del Ayuntamiento de Placencia del 9 de octubre de 1819. AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/1, 31-32. (Apéndice 2, nº 16).

<sup>513</sup> *Ibídem*.

<sup>514</sup> *Ibídem*.

<sup>515</sup> *Ibídem*.

sólo podía hacer como comisionado de la Cámara, *"sin inobar (sic) el estado de posesión de cosa alguna de la Iglesia sin previa aprobación del consejo de la Real Cámara de donde dimana la comisión de V.S.I. para la visita"*<sup>516</sup>

Invitaba al obispo a acudir ante la justicia ordinaria representada por el alcalde y Regimiento de la villa si tuviera alguna reclamación que hacer o si considerase que la actual poseedora fuera persona incapaz de obtener la capellanía. Para ello invocaba expresamente al cumplimiento de las leyes del reino y de los fueros de Gipuzkoa, ya que no se podía dejar usurpar la Real jurisdicción que ejercía el alcalde. El oficio terminaba amenazando al obispo y conminándole a dejar el asunto en manos de la Real jurisdicción ordinaria *"aorrándole (sic) el desagradable caso de la formación de la competencia que en defecto le será necesario a que esperamos no dará lugar la rectitud de V.S.I. porque así como en lo pío y su cumplimiento no nos mezclamos, y nos hacemos un deber en que V.S.I. ejerza su jurisdicción, nos prometemos que en igual buena armonía dejará espedito y libre el ejercicio de la Cámara y Real ordinaria que me compete..."*<sup>517</sup>.

Tanto en la representación de Jauregui como en el oficio del Ayuntamiento se trataba de eludir algo que era fundamental desde el punto de vista del obispo. Independientemente de la forma en la que se hubiera establecido la sucesión de la capellanía, de la obligación personalísima o no de acometer las cargas espirituales, o de la designación del patrono con poder para presentar a los sucesores y de decidir en los posibles conflictos que se suscitaran entre distintos aspirantes, había un hecho incontrovertible: la capellanía había sido aprobada por el ordinario, sus bienes habían sido espiritualizados y se había despachado el correspondiente título de colación al primer capellán. Probablemente apoyados en el dictamen que en 1817 emitió el asesor Cortavarria, consideraban que la espiritualización de los bienes y la colación habían sido consecuencia del interés del primer capellán que lo había hecho por su propia conveniencia y que por tanto, muerto aquél, los bienes volvían a ser profanos. El Ayuntamiento, además, apuntalaba este criterio haciendo referencia a la costumbre de algunos poseedores de bienes profanos que para elevarse al sacerdocio a título de ellos solían espiritualizarlos.

Las capellanías eclesiásticas, para poder constituir un beneficio eclesiástico, requerían necesariamente ser instituidas a perpetuidad y estar constituidas con ciertos bienes que, como consecuencia de la erección o aprobación canónica, debían ser espiritualizados. La espiritualización de los bienes consistía en su integración en el patrimonio de la Iglesia, saliendo por tanto del comercio al sujetarse a las leyes eclesiásticas de amortización que prohibían su venta y enajenación, asegurando así la perpetuidad de la renta con la que se creaba el beneficio. La creación de beneficios eclesiásticos por tiempo limitado, aunque nunca había sido aceptada por la Iglesia, puesto que la perpetuidad es inherente a cualquier beneficio eclesiástico, debió de ser una costumbre bastante extendida a tenor de lo que se desprende del oficio del Ayuntamiento de Placencia y del contenido del Real decreto

---

<sup>516</sup> Ibídem.

<sup>517</sup> Ibídem.

de 28 de febrero de 1741 dado por Felipe V<sup>518</sup>, que ratificaba lo dispuesto en el artículo 6 del Concordato de 1737<sup>519</sup>. No obstante, algunos autores, como el Abate Andrés<sup>520</sup>, citado por Campos y Pulido<sup>521</sup>, distinguen dos tipos de capellanías eclesiásticas: por una parte se encuentran las que se erigen a perpetuidad por la autoridad eclesiástica, las cuales constituyen auténticos beneficios eclesiásticos y por tanto sirven como título de ordenación; y por otra las que se fundan por tiempo limitado, siendo revocables *ad nutum*. Estas últimas, aun pudiendo ser consideradas como capellanías eclesiásticas, no constituyen beneficios, ya que para ello se requiere la perpetuidad inherente a los mismos, y por tanto no podían servir como título de ordenación y sus bienes no eran espiritualizados, pudiendo "*poseerse, venderse y enajenarse por los legos sin simonía ni pecado*"<sup>522</sup>.

Desde la perspectiva del Ayuntamiento de Placencia, sin embargo, la cuestión fundamental era que se había puesto en tela de juicio su legitimidad no sólo para el nombramiento de los sucesores en la capellanía sino incluso para entender en los conflictos que pudieran suscitarse en relación con la misma. El Ayuntamiento defendía su competencia invocando, como siempre, a la voluntad del fundador. Sin embargo, de ésta era difícil deducir la naturaleza de la capellanía y por tanto las competencias que correspondían al patrono, ya que éstas dependían directamente de aquélla. Juan Antonio de Azcarate no dispuso en su memoria testamentaria nada relacionado con la jurisdicción a la que había de someterse la capellanía, ya que de tal disposición se habría deducido automáticamente la naturaleza de la misma y no habrían tenido cabida los pleitos que se derivaron de su ambigüedad. El Ayuntamiento se acogía a la cláusula por la cual se le nombraba patrono de la capellanía y se le adjudicaba la facultad de decidir quién era el de mejor derecho entre los parientes que pretendieran la sucesión a la misma.

Es preciso aclarar las funciones de los patronos de las capellanías dependiendo de la clase a la que éstas pertenecieran. Las capellanías laicales habitualmente eran de la clase de las que se conocían como de patronato activo de sangre, llamadas popularmente patronatos de legos. Estas capellanías solían ser fundadas con la finalidad de vincular ciertos patrimonios de menor entidad que permitiesen asegurar unas rentas con las que se pudiera mantener algún miembro de la familia del

---

<sup>518</sup> El mencionado Real decreto disponía lo siguiente: "*Porque la forma de erigir Beneficios en la Iglesia, establecida desde su principio por los sagrados Cánones, consta haber sido siempre el que no se fundasen por tiempo limitado, sino para conservarse y mantenerse perpetuamente; por lo tanto para que los Beneficios eclesiásticos, que acaso hasta ahora se hubiesen fundado de otra forma que la que prescriben los sagrados Cánones, queden enteramente abolidos...*". Nov. Recop., lib. I, tit. XII, ley V.

<sup>519</sup> El artículo 6 del Concordato de 1737 disponía que quedaba abolida del todo la costumbre de erigir beneficios eclesiásticos que durasen por tiempo limitado, señalando que el papa expediría las letras circulares que fueran necesarias mandando a los obispos que no permitiesen "*en adelante semejantes erecciones de beneficios ad tempus, debiendo estos ser instituidos con aquella perpetuidad que ordenan los cánones sagrados*". Ver: GOLMAYO, P. B., *Instituciones del Derecho Canónico*, tomo I, Madrid, 1859, p. 417.

<sup>520</sup> Artículo *Capilla-Capellanía*, en PASTORA, Isidro de la, *Diccionario de Derecho canónico*, tomo I, Madrid, 1847.

<sup>521</sup> CAMPOS Y PULIDO, José M., *Las capellanías colativas en España*, Madrid, Hijos de Reus, 1910, p. 21.

<sup>522</sup> *Ibidem.*, p. 21.

fundador, al mismo tiempo que se garantizaba la celebración de sufragios en beneficio de las almas del purgatorio y sobre todo de la del fundador y de su familia. En este tipo de capellanías se establecía un sistema sucesorio para el patronato, que era quien percibía sus rentas, así como el responsable de encomendar el cumplimiento de las cargas espirituales a quien considerase oportuno. Por esta razón estas capellanías solían ser llamadas también mercenarias<sup>523</sup>. Al tratarse de capellanías laicales no constituían beneficios eclesiásticos y por tanto no era posible ordenarse a título de ellas. No solía existir la figura del capellán, ya que las cargas espirituales y la celebración de misas se cumplían a cambio de un estipendio por un sacerdote que era elegido por el patrono y que podía ser removido por el mismo sin ningún obstáculo. En el caso de que el fundador hubiera dispuesto la existencia de un capellán y una línea sucesoria para el mismo, el patrono sería el encargado de vigilar el cumplimiento de la voluntad del fundador y realizar el nombramiento del aspirante que más derecho tuviera. La jurisdicción eclesiástica no tenía ninguna competencia en las capellanías laicales a excepción de la vigilancia del cumplimiento de las cargas espirituales establecidas por el fundador.

Las capellanías eclesiásticas, y por tanto sometidas a la jurisdicción eclesiástica, podían ser colativas o no, y familiares o no, pudiendo participar de alguna de estas características, de ambas o de ninguna. Si no eran colativas podían ser de patronato o no, pero si eran de patronato, el patrono era el encargado del nombramiento de los capellanes respetando la voluntad del fundador. Las capellanías colativas, sin embargo, constituían beneficios eclesiásticos y por tanto las funciones del patrono, en caso de existir éste, se limitaban a la presentación del aspirante a quien el ordinario debía despachar la colación. Estas capellanías podían ser de patronato o no. Si no eran de patronato, era el ordinario quien designaba al aspirante que cumpliera las condiciones establecidas en la fundación. Las capellanías colativas familiares o de sangre, generalmente solían ser de las que eran denominadas de patronato pasivo de sangre, pero también podía haberlas de patronato activo, o incluso de ambos tipos. En cualquier caso la colación debía ser despachada por el ordinario en sujeto idóneo para gozar de un beneficio eclesiástico, es decir, al menos debía ser un varón tonsurado de más de catorce años de edad<sup>524</sup>.

La capellanía fundada por Juan Antonio de Azcarate era de patronato pasivo de sangre por cuanto el fundador había establecido una línea sucesoria vinculada a su familia para el acceso a la misma. Sin embargo el patronato activo no era de sangre puesto que fue adjudicado al Ayuntamiento de la villa. En las capellanías de patronato pasivo, el patrono en caso de existir debía velar por el correcto cumplimiento de la voluntad del fundador en orden a la presentación del sujeto que más derechos tuviera en cada vacante. Esto fue precisamente lo que encomendó Juan Antonio de Azcarate al Ayuntamiento de Placencia.

Pero el conflicto de jurisdicciones no derivaba solamente de la controvertida naturaleza de la capellanía o de las pretensiones del Ayuntamiento de ser la única

---

<sup>523</sup> El sacerdote a quien se encargaba el cumplimiento de las cargas espirituales era removible por el patrono, que podía nombrar a otro. Este sacerdote solía ser conocido como capellán cumplidor.

<sup>524</sup> El Concilio de Trento decretó que nadie pudiera obtener un beneficio eclesiástico antes de estar tonsurado y tener cumplidos los catorce años. Concilio de Trento, Ses. XXIII, Dec. Ref., cap. VI.

instancia jurisdiccional en relación con ella. En todas las reclamaciones y protestas contra el auto del obispo estaba presente de forma inevitable la cuestión de la jurisdicción delegada del obispo en todo lo relacionado con las iglesias del Real Patronato. Tanto para el Ayuntamiento como para la Real Cámara, aunque la capellanía fuera realmente eclesiástica, el Obispo no habría estado facultado para realizar ninguna actuación sobre ella sin obtener previamente la aprobación de la Cámara. El regalismo y el control de la jerarquía eclesiástica por parte del poder político, anclado en viejas tradiciones y fortalecido por la política ilustrada era defendido no sólo desde instancias políticas sino también desde las sociales.

### **El Supremo Tribunal de la Cámara. Los intereses del Rey y los de sus súbditos.**

La representación al rey de Miguel Antonio de Jauregui fue atendida, y el asunto pasó a la instancia jurisdiccional competente en las cuestiones relativas al Real Patronato, la Cámara de Castilla<sup>525</sup>. Este consejo recibió la solicitud de Jauregui el 3 de noviembre y el día 9 ordenó que se pasara al fiscal para que dictaminara sobre el mismo. El dictamen del fiscal<sup>526</sup>, emitido el 30 del mismo mes de noviembre, permite conocer que fue una orden de la Cámara del 20 de agosto de 1818 la que confirió al obispo de Calahorra la comisión de visitar las iglesias del Real Patronato sitas en su diócesis.

El regalismo borbónico y la política intervencionista de los ilustrados se habían aliado a la tradicional independencia de las iglesias vascas, protegida por los fueros y por los usos y costumbres, y defendida por los patronos laicos, para evitar la indeseada intromisión de los obispos de Calahorra, Santander y Pamplona en el funcionamiento de sus iglesias. Aunque ya ha sido mencionada anteriormente, es preciso destacar el contenido de la Real Cédula de 9 de agosto de 1770 por la que se regulaba la forma en la que los obispos de Calahorra debían realizar las visitas de las iglesias del Real Patronato, para lo que era preceptivo el permiso del Consejo de la Cámara<sup>527</sup>. El espíritu de esta Real Cédula es el que se encuentra presente en el

---

<sup>525</sup> La Cámara de Castilla, institución de oscuro origen, actuaba como un organismo autónomo del Consejo de Castilla, aunque sus miembros eran elegidos únicamente entre sus consejeros. Sus atribuciones estaban claramente definidas. Estaba formada por tres Secretarías: Gracia, Justicia y la del Real Patronato. La Cámara de Castilla era la depositaria de los derechos del Real Patronato sobre las iglesias y, como tal, por medio de la Secretaría del Real Patronato, intervenía en las propuestas de beneficios y en todo aquello que tuviera relación con las iglesias del Real Patronato, como las propuestas para los arzobispados y obispados y para las dignidades y prebendas de nombramiento real, y el conocimiento universal privativo de los negocios, controversias y pleitos de justicia del Real Patronato. Cfr. FAYARD, Janine, *Los miembros del Consejo de Castilla (1621-1746)*, Madrid, Siglo XXI, 1982.

<sup>526</sup> Dictamen del fiscal, de 30 de noviembre de 1819. AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/1, 55-56. (Apéndice 2, nº 18).

<sup>527</sup> "Os mando como a vuestros subcesores en esa dignidad episcopal que antes de pasar a visitar dichas Iglesias, Hermitas u Hospitales de mi Real Patronato que están sitas en esa Diócesis debeis dar, como os mando deis a mi Consejo de la Cámara por mano de mi infrascrito secretario del Real Patronato cuenta de ello, y obtener ante todas cosas su permiso para empezar la visita la cual hareis y practicareis sin cometerla a persona alguna por vuestra misma persona...". En esta misma Real Cédula se advertía al obispo "que en la práctica de la visita de las Iglesias de mi Real Patronato no procedía, como ordinario, sino como Delegado, y en mi Real nombre". Real Cédula de 9 de agosto de

dictamen del fiscal de la Cámara, quien invocaba las Reales cédulas de 19 de noviembre de 1741, su declaratoria de 14 de marzo de 1756 y las de 10 de febrero y 28 de abril de 1757, también mencionadas en la citada de 1770, como el fundamento de la doctrina de la jurisdicción delegada del obispo en cuanto se refería a las iglesias del Real Patronato.

Repitiendo casi textualmente las frases de Miguel Antonio de Jauregui, el fiscal era de la opinión de que la Cámara podía mandar al obispo que reformase inmediatamente su auto, reponiendo la capellanía al estado que tenía, ya que no sólo había causado una novedad declarando como colativa una capellanía que no era otra cosa que un simple patronato de legos, sino que además había excedido las facultades que le había conferido la Cámara para la visita. Según el fiscal, estas facultades se limitaban a inspeccionar el estado de las iglesias en lo temporal, formando expediente puramente instructivo que debía remitir a la Cámara con las observaciones que creyera oportunas para que ésta tomara las determinaciones que fueran necesarias.

Entre tanto, el plazo de dos meses que el obispo había concedido al patrono para que hiciera una nueva presentación en un sujeto idóneo y capaz había expirado. A Miguel de Mendiguchia, que probablemente tras la negativa que obtuvo del Ayuntamiento a su solicitud a comienzos de 1818 había desistido en sus pretensiones a la capellanía, la resolución del obispo le ofrecía una nueva oportunidad. Así pues, a finales de noviembre, Mendiguchia otorgaba poderes a Manuel de Garro, procurador en el tribunal eclesiástico de Calahorra, para que en su nombre solicitase al Provisor General de la diócesis el nombramiento de capellán como pariente más cercano del fundador. Poco después, el día 10 de diciembre, dio comienzo en el tribunal eclesiástico de Calahorra la causa para la provisión de la vacante producida en la capellanía fundada por Juan Antonio de Azcarate<sup>528</sup>.

El mes de diciembre de 1819 fue fecundo en acontecimientos relacionados con la capellanía. El día 9, nada más conocerse la carta de justicia expedida por el tribunal eclesiástico dando a conocer la vacante, el Alcalde de Placencia dirigió un durísimo escrito al obispo de Calahorra<sup>529</sup> lamentándose de la falta de respuesta a su oficio de 9 de octubre, y considerando su actitud no sólo como una falta de atención sino como un incumplimiento de las leyes que regulaban la forma en la que debían comunicarse las justicias para evitar competencias viciosas. La publicación de la carta de justicia era considerada como una grave usurpación de la Real jurisdicción de la Cámara que se añadía al exceso con el que ya se había propasado el prelado al desnaturalizar una capellanía merelega de una iglesia de Patronato Real, dejando *"margen a vías de hecho que trastornan el orden público"*<sup>530</sup>. Expresaba de forma

---

1770 por la que se regula la forma en la que los obispos de Calahorra deben realizar las visitas de las iglesias del Real Patronato. Copia realizada en Elorrio, el 16 de Junio de 1828: AFB, Patronatos, 1/14.

<sup>528</sup> La provisión de beneficios eclesiásticos se realizaba por medio de un proceso judicial en forma de pleito entre los aspirantes y el fiscal eclesiástico. El proceso comenzaba por medio de la publicación de una carta de justicia en la que se informaba de la vacante y de los aspirantes a la misma por si alguien se consideraba con más derechos o deseaba hacerse oír en el mismo.

<sup>529</sup> Oficio del alcalde de Placencia dirigido al obispo de Calahorra, de fecha 9 de diciembre de 1919. AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/1, 33. (Apéndice 2, nº 19).

<sup>530</sup> *Ibídem*.

retórica su convencimiento de que la actuación del prelado se debía a una falta de información y por tanto su confianza en que se repusieran las cosas al ser y estado que tenían antes de la visita, para terminar con una severa advertencia: "*y si contra toda esperanza no accediese V.S.I. ó no respondiese con nuevo desaire no debiera estrañar V.S.I. que yo como Alcalde use de las facultades que las leyes me conceden para defender la Real jurisdiccion y para no tolerar una publica usurpacion de ella haciendo á V.S.I. ó su Provisor responsables de las consecuencias, pues no permitire en mi territorio una tal usurpacion*"<sup>531</sup>.

En el tribunal eclesiástico se había iniciado ya el proceso para la adjudicación de la capellanía y la correspondiente carta de justicia había sido publicada y fijada en la puerta principal de la iglesia de Placencia. Miguel de Mendiguchia era el único aspirante, ya que, aunque a mediados de enero otro posible pretendiente, Pedro Juan de Zuloeta, vecino de Bergara, pidió una copia de la escritura de fundación de la capellanía con el fin de acreditar sus derechos a la misma, nunca se personó en el proceso<sup>532</sup>.

El 24 de diciembre la Real Cámara, en base al dictamen del fiscal, acordó ordenar al obispo de Calahorra que reformase inmediatamente su auto de 23 de agosto, reponiendo el estado de la capellanía al que tenía antes del despojo que motivó la reclamación de Miguel Antonio de Jauregui<sup>533</sup>. En su resolución la Cámara siguió al pie de la letra la exposición de motivos del dictamen del fiscal, repitiendo palabra por palabra las mismas acusaciones que Jauregui vertió contra el obispo en su representación al rey: que había causado una novedad en haber declarado colativa la capellanía; y que había excedido las facultades que le concedió la Cámara para la visita de las iglesias del Real Patronato. Esta orden de la Cámara delataba una buena sintonía entre este alto tribunal y las pequeñas oligarquías vascongadas.

Se obedece pero no se cumple. Este lema utilizado en ocasiones desde las instituciones forales para evitar el cumplimiento de órdenes superiores que consideraban atentatorias contra los fueros, se encontraba presente en la exposición que hizo Atanasio Puyal a la Real Cámara como respuesta a la mencionada orden de 24 de diciembre. En su exposición del 31 de enero de 1820, el prelado afirmaba: "**Obedece el Obispo de Calahorra la citada Real resolución, pero ... há tenido á bien el exponente suspender su cumplimiento** ..." <sup>534</sup>. Consideraba tan evidente y tan fuera de toda duda que la capellanía de la que se trataba era eclesiástica y colativa que dedicó su exposición a desgranar las que consideraba como pruebas irrefutables de ello con el fin de que a su vista la Cámara revocase su orden y confirmase el auto del 23 de agosto. La escritura de fundación que finalizaba con la suplica de que se hiciera colación de la capellanía para que fuera perpetua e irrevocable la voluntad del fundador, el auto de aprobación del 20 de abril de 1779 con la erección de los bienes temporales en espirituales y eclesiásticos, y el título de

---

<sup>531</sup> *Ibídem*.

<sup>532</sup> Petición de Pedro Juan de Zuloeta de fecha 10 de enero de 1820. AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/2, 36. (Apéndice 2, nº 21).

<sup>533</sup> Real resolución de la Cámara, de 24 de diciembre de 1819. AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/1, 54. (Apéndice 2, nº 20).

<sup>534</sup> *Ibídem*.

colación despachado en favor de su primer capellán, eran las pruebas irrefutables de que se valió el obispo para sostener que la capellanía "*desde su primitiva fundación está erigida en Capellanía Eclesiástica colativa perpetua, y sujeta por consiguiente á la visita del Ordinario*"<sup>535</sup>. Como prueba de sus afirmaciones, acompañaba a su exposición con sendos testimonios de las diligencias realizadas en su tribunal eclesiástico en los años 1778 y 1779.

El prelado calagurritano completaba su argumentación recordando algunos antecedentes que confirmaban la naturaleza de la capellanía y que evidenciaban por otros motivos la nulidad del nombramiento que en 1812 hizo el Consejo Municipal de Placencia para ocupar la vacante. La visita que realizó a la capellanía en 1799 su antecesor el obispo Aguiriano sin reclamación alguna probaba que ésta era eclesiástica, así como también la legitimidad del Ordinario para efectuar la Visita de las capellanías y memorias de misas, al margen de las facultades concedidas para la visita de las iglesias del Real Patronato. En cuanto a la nulidad del nombramiento efectuado en María Bárbara de Aguirre era evidente no sólo por ser una mujer y por tanto no ser apta para ocupar un beneficio eclesiástico, sino porque dicho nombramiento se efectuó en tiempos en que "*el Gobierno intruso había suprimido toda jurisdicción de fuero eclesiástico*"<sup>536</sup>. Terminaba su exposición defendiendo las facultades ordinarias de los prelados para las visitas pastorales, ya que las que el rey les concedía como patrono eran únicamente para inspeccionar el estado de las iglesias del Real Patronato en lo temporal y sobre las rentas de sus fábricas.

Recibida esta exposición por la Cámara, el expediente fue pasado de nuevo al fiscal, quien se ratificó en su anterior dictamen sin dar lugar a ningún tipo de razonamiento ni argumentación<sup>537</sup>. Era la víspera de trascendentales cambios políticos. Dos días después de este dictamen tuvo lugar la última reunión de la Cámara<sup>538</sup> y todos sus asuntos pasaron al Consejo de Estado.

En el tribunal eclesiástico el proceso para la adjudicación de la capellanía seguía adelante, pero con una gran lentitud. Según el auto del obispo, la capellanía se encontraba vacante desde 1812 por lo que era preciso que quien venía percibiendo sus rentas desde entonces dejase de hacerlo. El procurador de Mendiguchia solicitó que se retirase a María Bárbara de Aguirre de la administración de dichas rentas y el 27 de mayo de 1820, el Provisor mandó que se recibiera el pleito y causa a prueba y que el párroco de Placencia nombrase una persona desinteresada para la administración de los bienes de la capellanía con el título de administrador, ordenando asimismo a María Bárbara de Aguirre que cesase en la percepción de

---

<sup>535</sup> Ibídem.

<sup>536</sup> Ibídem.

<sup>537</sup> El dictamen del fiscal fue así de escueto: "*El Fiscal en nueva vista de este expediente, y de la exposicion documentada ultimamente unida a él, y no hallando merito alguno para variar su anterior dictamen, reproduce en todas sus partes su respuesta de 29 de Noviembre ultimo; pero la Camara acordará como siempre, lo mas conforme. Madrid 6 de Marzo de 1820*". AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/2, 112.

<sup>538</sup> "*Aquí concluye este Quaderno por haberse mudado de Gobierno en dicho año de 1820 en Constitucional*". Día 8 de marzo de 1820. AHN, Consejos Suprimidos, Secretaría del Real Patronato, Libros de Matrícula de asuntos despachados, libro 167, folio 276 rº.

sus rentas. Pocos días después el vecino de Placencia José Alejo de Maiztegui fue nombrado administrador de los bienes y rentas de la capellanía<sup>539</sup>.

El despacho del Provisor en el que se comunicaba a María Bárbara de Aguirre la orden de cesar en la percepción de las rentas de la capellanía fue comunicado a la interesada por el escribano de Bergara el 16 de junio<sup>540</sup>. Se dio por enterada y expuso que no reconocía al Provisor por juez competente por cuanto la orden que la Cámara remitió al obispo mandaba a éste que reformase inmediatamente su auto de 23 de agosto pues, no sólo había causado una novedad declarando colativa la capellanía sino que además se había excedido en las facultades que le habían sido concedidas. Por ello consideraba nula cualquier diligencia que practicara el tribunal eclesiástico mientras no se le exhibiera una orden que derogase la de la Cámara.

Esta actitud de firmeza de María Bárbara de Aguirre motivó una dura reacción por parte del procurador de Miguel de Mendiguchia. En un escrito presentado al tribunal eclesiástico en el que volvía a reclamar la adjudicación de la capellanía para su representado calificaba su respuesta de "*orgullosa, insubordinada, falta de todo respeto, vilipendiadora de la Autoridad eclesiástica, y altamente repugnante a la Potestad de un Juez eclesiástico, y la elevadísima dignidad del sucesor de los Apóstoles*"<sup>541</sup>. Le acusaba de querer ejercer las facultades de un tribunal metropolitano tratando de inhibir del conocimiento de la causa al tribunal diocesano, y detectaba indicios de criminalidad en una respuesta que consideraba como un insulto digno de ser tenido en cuenta por el fiscal general eclesiástico.

El 1 de julio un auto del Provisor mandaba que en vista de la respuesta de María Bárbara de Aguirre se pasara el expediente al fiscal para que en su vista expusiera y pidiera lo que correspondiese<sup>542</sup>. Pero hasta el 9 de octubre el fiscal no emitió su informe de censura en el que reclamaba la escritura de fundación de la capellanía con el fin de poder determinar su naturaleza<sup>543</sup>. También pedía en su informe que fuera citada y oída María Bárbara. En consecuencia, algunos días después el Provisor dictó un auto ordenando la compulsa de la escritura de fundación, emplazando a Miguel Antonio de Jauregui a que se personara en la causa<sup>544</sup>. En consecuencia de estas disposiciones el escribano de Orio requirió a Jauregui la presentación para su compulsa del libro de la capellanía, pero éste respondió que el citado libro no se hallaba en su poder y "*que aun en el caso de tenerlo no pretende*

---

<sup>539</sup> Auto del cura de la parroquial de Placencia informando del nombramiento de José Alejo de Maiztegui como administrador de los bienes y rentas de la capellanía: AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/2, 24vº-25.

Notificación por el escribano de Bergara del nombramiento de administrador a José Alejo de Maiztegui, vecino de Placencia. Escritura de aceptación, obligación y fianza, poniendo como fiador a Ángel de Galarra, también vecino de Placencia. AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/2, 25-26.

<sup>540</sup> Notificación a María Bárbara de Aguirre del despacho del Provisor del 31 de Mayo de 1820. AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/2, 26. (Apéndice 2, nº 24).

<sup>541</sup> Escrito de Juan Manuel de Garro reclamando la capellanía para Miguel de Mendiguchia. 22 de septiembre de 1820. AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/2, 30-31. (Apéndice 2, nº 26).

<sup>542</sup> AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/2, 29vº.

<sup>543</sup> AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/2, 32vº-33.

<sup>544</sup> El fiscal había pedido que fuera citada María Bárbara de Aguirre. Sin embargo, el auto del Provisor emplazaba a su marido. Auto del Provisor del 13 de octubre de 1820. AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/2, 33vº.

*someterse a lo que le ordena el referido despacho, por no ser Juez competente...*"<sup>545</sup>.

No había ninguna duda de que, amparados en la orden de la Cámara, Miguel Antonio de Jauregui y su mujer no aceptarían lo que ellos consideraban una intromisión de las autoridades eclesiásticas en un asunto que no era de su competencia. Las más altas instituciones de la monarquía habían apoyado su reclamación y se sentían con la fuerza suficiente para enfrentarse a los tribunales eclesiásticos.

El procurador de Mendiguchia, en un escrito remitido algunos días después, con el fin de encontrar una salida al bloqueo en el que se encontraba el proceso solicitó que se llevara a efecto el encargo de la administración de las rentas de la capellanía al administrador nombrado para ello, expidiéndole el título correspondiente, ya que impidiendo a Jauregui y su mujer el cobro de los réditos, probablemente comparecerían ante el tribunal con el fin de defender sus pretendidos derechos<sup>546</sup>. Pero el 13 de noviembre, inexplicablemente, un auto del Provisor ordenaba que se suspendieran "por ahora" los apremios para la entrega del libro y demás documentos pertenecientes a la capellanía, al igual que la expedición del título de administrador a quien había sido nombrado para ello<sup>547</sup>. Esta orden del Provisor significaría en la práctica la paralización del proceso. La compleja situación política y las delicadas relaciones entre el poder político y la Iglesia impondrían la prudencia en las actuaciones de esta última, evitando innecesarios enfrentamientos.

### **El Consejo de Estado.**

Sin embargo, el expediente que en relación con esta capellanía obraba en la Cámara había sido trasladado al Consejo de Estado, y éste había encargado a su Comisión de Gracia y Justicia un dictamen sobre el mismo. La Comisión se pronunció el 8 de septiembre de 1820 con un dictamen favorable al auto del obispo y en contra de la orden de la Cámara del 24 de diciembre anterior, y por lo tanto de las reclamaciones realizadas por Miguel Antonio de Jauregui<sup>548</sup>. Tras un breve pero minucioso repaso de la historia de la capellanía en el que se recogían los hitos y las noticias más relevantes sobre la misma: la memoria testamentaria de Juan Antonio de Azcarate; la escritura de fundación, la aprobación, espiritualización de sus bienes y colación por el ordinario eclesiástico en el primer capellán; el nombramiento que en 1812 hizo el Ayuntamiento de Placencia en María Bárbara de Aguirre; la reclamación que presentó Mendiguchia ante el Ayuntamiento; la visita del obispo y el auto que dictó en 1819; la orden de la Cámara; la exposición que hizo el obispo posteriormente; y finalmente la ratificación de su anterior dictamen del fiscal del Consejo de Castilla, quien "*sin esponer fundamento alguno, manifestó no hallar*

<sup>545</sup> AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/2, 34vº.

<sup>546</sup> Escrito de Juan Manuel de Garro, del 9 de noviembre de 1820. AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/2, 35. (Apéndice 2, nº 27).

<sup>547</sup> Auto del Provisor del 13 de noviembre de 1820. AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/2, 35vº. (Apéndice 2, nº 28).

<sup>548</sup> Dictamen de la Comisión de Gracia y Justicia del Consejo de Estado, del 8 de septiembre de 1820. AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/1, 12-18. (Apéndice 2, nº 25).

*merito para variar su anterior dictamen*"<sup>549</sup>. El dictamen concluía afirmando que de la información que se disponía se deducía que la capellanía en cuestión no era un simple patronato de legos como creyó la extinguida Cámara de conformidad con su fiscal, sino una capellanía eclesiástica colativa perpetua y sujeta por consiguiente a la visita del obispo. Esto se deducía del contenido de la escritura de fundación y, sobre todo, porque efectivamente se erigieron sus bienes de temporales y profanos en espirituales y eclesiásticos y porque se hizo la colación en su primer capellán. Por todo ello su dictamen era que el obispo había procedido bien, y que en consecuencia debía aprobarse su auto de 23 de agosto de 1819.

Es inevitable hacer notar el contraste entre este meditado dictamen, en el que se aportaban pruebas de las que se deducían conclusiones razonables, y los emitidos por el fiscal de la Cámara que eran un simple traslado de los razonamientos y peticiones del reclamante. Apoyándose en él, el Consejo de Estado emitió el suyo el día 18 de noviembre<sup>550</sup>. En él se exponía el contenido de la reclamación de Miguel Antonio de Jauregui que motivó el inicio del expediente en la extinguida Cámara, y después de hacer una narración de los hechos acontecidos a raíz de dicha reclamación, insertaba literalmente las conclusiones del dictamen de la Comisión de Gracia y Justicia. Este dictamen fue elevado a la consulta del rey quien resolvió que se remitiera "*el expediente al ordinario para que en uso de sus facultades proceda en su vista con arreglo a las Leyes*"<sup>551</sup>. El Consejo de Estado dando por concluido el caso archivó el expediente<sup>552</sup>.

La Real Orden del 15 de diciembre de 1820 daría lugar a diversas interpretaciones, percibiéndose cierta ambigüedad en ella que sería muy difícil precisar si fue deliberada o no. Ateniéndose al dictamen del Consejo de Estado, del que derivaba, su significado era claro. Dado que la capellanía era eclesiástica, el asunto debería pasar a los tribunales eclesiásticos para su resolución. Sin embargo, también se podría interpretar como una ratificación de la orden de la Cámara del 24 de diciembre de 1819, mandando al obispo que procediese conforme a las leyes y a las órdenes que se le habían dado. Esta segunda interpretación fue la que dieron quienes defendían la resolución de la Cámara y se oponían a la supuesta intromisión del obispo en un asunto que no le concernía. No obstante, estos mismos, tras la vuelta al absolutismo, aceptarían la primera interpretación para desautorizarla acto seguido como emanada de un gobierno ilegítimo<sup>553</sup>.

Recibida la Real orden, el 17 de enero de 1821 el obispo decretó su paso al Provisor y Vicario General para que dictase las providencias correspondientes. El 18 de enero, el Provisor dictó un auto mandando que la Carta Real Orden y el decreto del

---

<sup>549</sup> *Ibidem*.

<sup>550</sup> Dictamen del Consejo de Estado del 18 de noviembre de 1820. AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/1, 2-4. (Apéndice 2, nº 29).

<sup>551</sup> Carta Real Orden del 15 de diciembre de 1820. AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/1, 1. (Apéndice 2, nº 30).

<sup>552</sup> El expediente fue archivado el 18 de diciembre de 1820. AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/1, 1.

<sup>553</sup> Miguel Antonio de Jauregui llegaría a referirse a los autos que fueron remitidos al tribunal eclesiástico en virtud de dicha Real Orden como "*los autos arrancados por los revolucionarios*". AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/1, 26.

obispo se leyeron en la audiencia pública del tribunal eclesiástico y se hiciese saber en persona a las partes interesadas<sup>554</sup>, y el 26 de enero mandó que se incorporase dicha Real orden al expediente del proceso sobre la adjudicación de la capellanía<sup>555</sup>. Durante todo el año 1821 el proceso sufrió una total paralización.

## La legislación del Trienio

Determinados hechos, como el auto del obispo, probablemente hicieron confiar a Miguel de Mendiguchia en una rápida resolución del pleito de forma favorable a sus intereses cuando a finales de 1819 se presentó como aspirante a la capellanía. Sin embargo, el proceso no sólo se alargaba excesivamente en el tiempo sino que empezaba a resultar excesivamente gravoso para su economía. Por ello, a comienzos de 1821, su procurador promovió ante el tribunal eclesiástico una información de indigencia a fin de obtener su defensa como pobre, lo que garantizaba la tramitación del proceso sin coste alguno para él<sup>556</sup>. Los testigos llamados para la información de pobreza que tuvo lugar el 27 de marzo en Elgeta, declararon que Miguel de Mendiguchia era *"pobre y miserable, que vive y se mantiene con el trabajo de su persona en el oficio de cagero de armas"*<sup>557</sup>. La situación económica de quienes se dedicaban a la fabricación de armas debió de ser especialmente crítica durante los años del Trienio, ya que muchos de los talleres tanto en Placencia como en los pueblos de su entorno habían sido cerrados<sup>558</sup>. La declaración de pobreza de Mendiguchia no llegó hasta el mes de marzo del año siguiente<sup>559</sup>. Casi un año tardó el fiscal eclesiástico en emitir su dictamen. La lentitud en resolver este asunto hace pensar en una paralización generalizada del tribunal eclesiástico ante la incertidumbre originada por las numerosas medidas adoptadas por las Cortes que afectaban directamente a las competencias de la jurisdicción

---

<sup>554</sup> AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/2, 113vº.

<sup>555</sup> AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/2, 46vº.

<sup>556</sup> El procurador de Miguel de Mendiguchia manifestaba que su parte *"no puede continuar las diligencias que se siguen en la causa sobre pertenencia de la capellanía fundada por Juan Antonio Azcarate, solicitando se reciba información de testigos, a fin de que en concepto de tal pobre sea defendido en las sucesivas diligencias"*. AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/2, 114-115.

<sup>557</sup> AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/2, 116-118.

<sup>558</sup> En el Diario de las Sesiones de Cortes del 30 de agosto de 1820, se daba cuenta del debate surgido como consecuencia de una queja presentada por los diputados de los cuatro gremios de la "fábrica de armas de chispa" de Placencia, por el cierre de "aquellos interesantes talleres" y porque en consecuencia se había dejado de pagar a sus individuos. Algunos diputados solicitaron que se pidiese al Gobierno la adopción de las providencias que fueran necesarias para evitar que se cerrasen las fábricas de armas que eran tan necesarias para poder armar a la Milicia Nacional para la que se necesitarían un millón de fusiles. El diputado Romero Alpuente, pidió que se pasase la representación al Gobierno con *"orden de que diese cuenta de la razón por que habían cesado aquellas fábricas en sus trabajos"*. Diario de las Sesiones de Cortes, número 57, del 30 de agosto de 1820, pag. 716.

<sup>559</sup> Dictamen del fiscal eclesiástico del 20 de marzo de 1822. AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/2, 120. Auto del Provisor por el que se manda que se declare por pobre a Miguel de Mendiguchia y como a tal se le defienda en la causa sin llevarle derechos algunos. AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/2, 121vº.

eclesiástica, tanto con respecto al patrimonio eclesiástico<sup>560</sup> como en todo lo relacionado con la provisión de beneficios<sup>561</sup> y de capellanías de sangre<sup>562</sup>.

El 24 de abril de 1822, una vez obtenida la declaración de pobreza, el procurador de Mendiguchia, remitió al tribunal eclesiástico un escrito de inusitada dureza y no exento de ironía, en el que de nuevo reclamaba la capellanía para su representado, apoyándose para ello en la Real orden del 15 de diciembre<sup>563</sup>. Denunciaba los "*desórdenes escandalosos*" en que había incurrido el Ayuntamiento de Placencia, la complicidad de Jauregui con el Ayuntamiento y su pretensión de "*apoiarse en el real Trono*" con el fin de hacer prosperar su injusta reclamación contra el auto del obispo de Calahorra. Por segunda vez, tal como lo había hecho en su escrito del 22 de septiembre de 1820, reiteraba su denuncia de la actuación de María Bárbara de Aguirre quien, al no ser soltera ni viuda, no estaba autorizada por las leyes para administrar bienes ni manejar caudales, acusándole de cancelar "*la autoridad de un marido presentandose en juicio, ó contextando a los mandatos del tribunal, sin anuencia expresa ni tacita de este*"<sup>564</sup>.

El Provisor, en un tono similar al empleado en su auto del 13 de noviembre de 1820<sup>565</sup>, despachaba la anterior solicitud con un "*No ha lugar por ahora a lo que se solicita por la parte de Garro*"<sup>566</sup>. En el mismo auto ordenaba que se librase el despacho acordado en su auto del 18 de enero de 1821 en el que se mandaba hacer saber a las partes interesadas el contenido de la Real orden de 15 de diciembre de 1820. Más de un año después el proceso para la adjudicación de la capellanía echaba a andar de nuevo, ya que el 27 de junio de 1822 se libró finalmente el mencionado despacho con inserción de la Real Orden comunicada en 15 de Diciembre de 1820, decreto del Obispo del 17 de Enero de 1821, Auto del 18 de Enero, y Carta de Justicia para que en el término de seis días pudieran presentar sus peticiones o alegaciones todos los interesados en la causa de que se trataba<sup>567</sup>.

---

<sup>560</sup> El decreto de 29 de junio de 1821, "Instrucción para la amortización de la deuda nacional", disponía que los bienes procedentes de amortización eclesiástica pasaran a favor de la extinción de la deuda nacional, con la excepción de los bienes de las capellanías tanto laicales como colativas de patronato pasivo de sangre que deberían volver en clase de libres a las familias respectivas.

<sup>561</sup> El decreto de las Cortes Generales y Extraordinarias del 1 de diciembre de 1810, que había sido restablecido el 3 de junio de 1820, mandaba suspender la provisión de los beneficios que no tuviesen aneja cura de almas. Cfr: *Memoria sobre el estado de los negocios concernientes a la Secretaría del Despacho de Gracia y Justicia en principios de Marzo de 1822*, Madrid, Imprenta de Alban y Cía., 1822, p. 4.

<sup>562</sup> La Memoria presentada a las Cortes en marzo de 1822 por la Secretaría de Gracia y Justicia informaba de la vigilancia del Gobierno para que se cumpliesen las resoluciones que impedían la provisión de capellanías de sangre que no recayeran sobre sujetos ya ordenados *in sacris* hasta que no se llevara a cabo el arreglo del clero. Cfr: *Memoria sobre el estado de los negocios concernientes a la Secretaría del Despacho de Gracia y Justicia en principios de Marzo de 1822*, Madrid, Imp. de Alban y Cía., 1822, p. 5.

<sup>563</sup> Escrito de Juan Manuel de Garro del 24 de abril de 1822. AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/2, 122-123. (Apéndice 2, nº 31).

<sup>564</sup> *Ibídem*.

<sup>565</sup> Auto del Provisor del 13 de noviembre de 1820. AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/2, 35vº. (Apéndice 2, nº 28).

<sup>566</sup> AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/2, 123. (Apéndice 2, nº 31).

<sup>567</sup> AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/2, 124-125.

Los dos procesos, el de adjudicación de la capellanía por parte del tribunal eclesiástico y el iniciado con la reclamación presentada al rey por Miguel Antonio de Jauregui, confluyeron en uno solo. Pero la situación había variado y nuevos elementos entraron en juego a partir de este momento. El debate acerca de la naturaleza de la capellanía seguía siendo la base del conflicto, ya que era lo que condicionaba la validez del auto del obispo y la jurisdicción a la que correspondía la resolución del mismo. La legitimidad del obispo y del tribunal eclesiástico era la segunda cuestión, pero subordinada a la anterior. Un elemento nuevo lo constituía la legislación de las Cortes constitucionales relacionada con la desamortización de las propiedades eclesiásticas, con la desvinculación, con el pago de la deuda nacional y con la reducción del diezmo por cuanto afectaban directamente a las capellanías de cualquier clase que fueran.

El 5 de julio Miguel Antonio de Jauregui otorgó poder a favor del procurador Juan Manuel Díez<sup>568</sup>, y el día 10 dicho procurador presentó un escrito en el que solicitaba del tribunal eclesiástico su inhibición en la causa a favor de los tribunales civiles<sup>569</sup>. Para ello se exponían una vez más las razones que probaban que se trataba de una capellanía puramente laical. Eran las mismas razones que ya habían sido expuestas por Jauregui en otras ocasiones: que la obligación de cumplir con las cargas no era personalísima; que el fundador había dispuesto que el goce de la capellanía correspondiese a su pariente más cercano sin excluir a ninguno; y que designó por patrono al Ayuntamiento con facultad para decidir en cualquier litigio. Pero en este escrito aparece un nuevo argumento. Según éste, ya que el fundador no dispuso que la capellanía fuera colativa ni que sus bienes debieran espiritualizarse, debería entenderse que era merelega, "*debiendo pues considerarse por merelega y laical toda Capellanía mientras lo contrario no se disponga por el fundador*"<sup>570</sup>.

Ante la dificultad existente en muchas ocasiones para distinguir la naturaleza de las capellanías, y debido a que de la consideración de una capellanía como laical o como colativa se derivaban importantes consecuencias económicas, principalmente relacionadas con los procesos desvinculadores y desamortizadores, durante el siglo XIX esta cuestión fue estudiada con detenimiento por los canonistas, quienes llegaron a elaborar reglas precisas que permitieran discernir la naturaleza de las mismas. Al contrario de lo que hacía el procurador de Jauregui en su escrito, en caso de duda, la tendencia general de los canonistas era la de reputarlas como eclesiásticas, acaso por ser lo más favorable para la Iglesia<sup>571</sup>. Para dilucidar esta cuestión, Gómez-Salazar aportaba varias reglas que permitían conocer si una capellanía era laical o eclesiástica. Siguiendo a Berardi<sup>572</sup>, afirmaba que una capellanía era eclesiástica cuando se erigió con licencia y consentimiento del obispo,

<sup>568</sup> AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/2, 127.

<sup>569</sup> Escrito presentado por Juan Manuel Díez el 10 de julio de 1822. AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/2, 129-131. (Apéndice 2, nº 32).

<sup>570</sup> Ibídem.

<sup>571</sup> "*In dubio Capella fundata ad serviendum in ea Deo, licet non appareat de approbationi Episcopi, praesumitur beneficium*". LEURENIO, *Forum beneficiale sive Quaestiones et responsa canonica, materiam de Beneficiis universam*, Coloniae Agripinae, 1714, Par. I, Cap. III, Par. I, q. 87. Citado por VÁZQUEZ GARCÍA-PENUELA, J. M., *Las capellanías colativo-familiares*, Pamplona, EUNSA, 1992, p. 37.

<sup>572</sup> BERARDI, *Comment in Jus Eccles. univ.*, tomo II, apéndice., *De Benef. improp.*

aun cuando el fundador hubiera dispuesto que su provisión se hiciera por el patrono sin ser necesaria la institución canónica. En otra de las reglas, citaba a Vecchiotti<sup>573</sup>, para indicar que *"si el fundador se expresó con palabras ambiguas; de manera que es difícil conocer la naturaleza de la capellanía y por otra parte faltan documentos que aclaren esta duda, entonces habrá de considerarse como capellanía eclesiástica"*<sup>574</sup>.

En el escrito del procurador de Jauregui se recordaba la orden de la Cámara que debía haber sido cumplida por el obispo, y consideraba la Real orden del 15 de diciembre de 1820 como una ratificación de aquella, ya que *"le previene proceda en el asunto con arreglo á las Leyes; es decir en conformidad de lo ordenado por el Supremo Consejo, que no se altera ni revoca por aquella Real Orden"*<sup>575</sup>. Es decir, la poca precisión con la que se redactó la Real orden de 15 de diciembre era utilizada para ratificar la orden de la extinguida Cámara, ignorando por completo el dictamen del Consejo de Estado que había dado lugar a dicha Real orden.

Si estaba claro, según el punto de vista expuesto por el procurador de Jauregui, que la capellanía era laical y por tanto jamás habría podido sujetarse a la jurisdicción eclesiástica, otras leyes mucho más recientes que cualquier otra de las mencionadas obligaban a la jurisdicción eclesiástica a sobreseer la causa ineludiblemente. Para ello, Jauregui se acogía al artículo 3º del decreto de 29 de junio de 1821, *Instrucción para amortización de la deuda nacional*<sup>576</sup>, y al artículo 17 del de 20 de noviembre de 1820, sobre pago de la deuda nacional<sup>577</sup>. En virtud del primero de ellos, los capitales y réditos de las capellanías laicales y colativas de llamamiento y patronato pasivo de familias, una vez muertos sus poseedores, deberían pasar en clase de bienes seculares y libres a las familias respectivas. Ya no era necesario, por tanto, demostrar si la capellanía era laical o colativa, ya que

<sup>573</sup> VECCHIOTTI, *Inst. Canon.*, lib. III, cap. II, par. 12.

<sup>574</sup> GÓMEZ-SALAZAR, F., *Instituciones de Derecho Canónico*, tomo III, León, 1891, p. 310. Este mismo autor expone varios complicados casos prácticos en GÓMEZ-SALAZAR, F. y DE LA FUENTE, V., *Tratado teórico-práctico de procedimientos eclesiásticos*, Madrid, Imprenta de la viuda de Aguado e hijo, 1868, tomo IV, pp. 338-345.

<sup>575</sup> AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/2, 129-131. (Apéndice 2, nº 32).

<sup>576</sup> Decreto LXXX, de 29 de junio de 1821, "Instrucción para amortización de la deuda nacional", en *Colección de los Decretos y Órdenes generales expedidos por las Cortes ordinarias de los años 1820 y 1821 en el segundo periodo de su Diputación*, tomo VII, Madrid, Imprenta Nacional, 1821, pp. 355-362. El artículo 3º disponía: *"Se extinguen todos los capitales y réditos procedentes de amortización eclesiástica, quedando sus resultados á favor de la deuda nacional, además de los señalados en los artículos de que trata el 17 de dicho decreto de 9 de Noviembre de 1820, exceptuándose los réditos pertenecientes á Capellanes, y los capitales y réditos de las capellanías laicales y colativas de llamamiento y patronato pasivo de familias, que muertos los actuales poseedores deben volver en clase de bienes seculares y libres á las familias respectivas..."*. Lo mismo estaba dispuesto por el artículo 4 del Decreto LXVII de 29 de junio de 1821 sobre reducción del diezmo y primicia.

<sup>577</sup> Decreto CII, de 9 de noviembre de 1820, "Sobre pago de la deuda nacional", en *Colección de los Decretos y Órdenes generales de la primera legislatura de las Cortes ordinarias de los años 1820 y 1821*, tomo VI, Madrid, Imprenta Nacional, 1821, pp. 385-395. Según el artículo 17, quedaban aplicados a la extinción de la deuda pública, entre otros, los bienes raíces, derechos, rentas y acciones de capellanías que no fueran de llamamiento de familias y cuyos bienes no estuvieran espiritualizados ni formaran parte de la congrua de los ministros del altar. Por tanto, esta desamortización no afectaba ni a las capellanías colativas, pues sus bienes estaban espiritualizados, ni a las laicales o eclesiásticas cuya renta formaba parte de la congrua de un "ministro del altar", ni a las de patronato pasivo, fueran laicales o eclesiásticas.

simplemente el hecho de ser de patronato pasivo de familias era suficiente para que se le pudiese aplicar esta ley. Y la disposición del fundador de que para capellán se eligiese a su pariente más cercano era suficiente prueba de que se trataba de un patronato pasivo de familias. En cualquier caso, la ejecución de los decretos de las Cortes era suficiente para solicitar la inhibición del tribunal eclesiástico, ya que ésta estaba confiada exclusivamente a las autoridades civiles.

El proceso había entrado en una nueva dinámica y la respuesta de la parte contraria no se hizo esperar mucho. Juan Manuel Garro, procurador de Mendiguchia, respondía a la declinatoria presentada por la parte de Jauregui el día 18 del mismo mes de julio, pidiendo que fuera desatendida y declarando el derecho "*incontrastable*" de Miguel de Mendiguchia. Además se pedía que Miguel Antonio de Jauregui fuera condenado en las costas por los daños y perjuicios que ocasionaba su solicitud<sup>578</sup>. El principal argumento utilizado en este escrito para responder a los de Jauregui y demostrar la naturaleza eclesiástica y colativa de la capellanía fue uno de los que ya se había servido el obispo: en la escritura de fundación se hizo constar claramente la solicitud de que fuera aprobada por el ordinario haciéndose la colación y canónica institución en el primer capellán. Señalaba que no se estaba discutiendo el derecho de presentación del patrono, sino que éste lo había ejercido en un sujeto "*inapto, inhabil é irregular por defecto de naturaleza*"<sup>579</sup>. En cuanto a la Real Orden del 15 de diciembre de 1820, su interpretación era opuesta a la de Jauregui, ya que si se hubiera tratado efectivamente de un patronato de legos no habría sido necesario remitir el asunto para su deliberación al Ordinario, tal como hacía dicha Real Orden.

El procurador de Mendiguchia tuvo que hacer equilibrios para responder a la nueva argumentación que se apoyaba en las disposiciones sobre capellanías de las leyes vigentes. Sin citar ninguna disposición que respaldase sus afirmaciones y recurriendo a la novedad de considerar que la capellanía tenía agregada la cura de almas, aportaba dos razones para excluirla de la legislación a la que se acogía Jauregui: que las capellanías que tenían agregada la cura de almas, como la fundada por Azcarate<sup>580</sup>, se hallaban excluidas de las disposiciones legales mencionadas; y que la vacante se había producido en tiempos anteriores a dichas leyes, las cuales no tenían poder retroactivo.

Estas dos razones fueron las esgrimidas por el fiscal eclesiástico en su informe de censura del día 22 de julio en el que rechazaba la declinatoria solicitada por el procurador de Miguel Antonio de Jauregui<sup>581</sup>. Según el fiscal, era indudable que la capellanía era colativa porque así se pidió en la escritura de fundación, fue aprobada por el Ordinario, sus bienes fueron espiritualizados y se despachó título de colación en forma a su primer capellán. Recordaba la visita y el auto del obispo y la reclamación de Jauregui, pero no mencionaba la orden de la Cámara dirigida al

<sup>578</sup> Escrito de Juan Manuel de Garro del 18 de julio de 1822. AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/2, 132-133. (Apéndice 2, nº 33).

<sup>579</sup> Ibídem.

<sup>580</sup> Podría deducirse esta circunstancia de la disposición del fundador de que el capellán atendiese el confesionario.

<sup>581</sup> Informe de censura del fiscal eclesiástico del 22 de julio de 1822. AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/2, 134-135. (Apéndice 2, nº 34).

obispo para que reformase su auto, aunque sí aludía a la Real Orden del 15 de diciembre de 1820. Descalificaba la pretensión de Jauregui considerándola como "*la más arrojada y temeraria queriendo hechar (sic) por tierra un edificio tan solidamente fundado*"<sup>582</sup>. Finalizaba su argumentación reproduciendo las referidas dos razones que justificaban no ser de aplicación las disposiciones vigentes sobre capellanías, dando por válida la afirmación de que se trataba de una capellanía que tenía anexa la cura de almas.

Entre tanto, Miguel Antonio de Jauregui, acogiendo a las últimas disposiciones sobre capellanías de sangre, solicitó al Juez de primera instancia del partido de Bergara que se le confiriera la posesión de los bienes de la capellanía en clase de seculares y libres según lo establecido en el decreto de 29 de junio de 1821<sup>583</sup>. El escrito que remitió el 13 de agosto de 1822 con dicha solicitud aportaba una importante novedad al debate acerca de la naturaleza laical o colativa de la capellanía. En la exposición de los antecedentes con los que apoyaba su solicitud, aun no siendo estrictamente necesario, puesto que la disposición legal a la que pretendía acogerse era válida tanto para las capellanías laicales como para las colativas con tal de que fueran de patronato pasivo de sangre, presentaba una nueva prueba, nunca utilizada hasta entonces, que invalidaba uno de los principales argumentos con los que tanto el obispo como el fiscal eclesiástico habían defendido la naturaleza de colativa de la capellanía. Jauregui desautorizaba la fundación llevada a cabo por Francisco Ignacio de Ibarra como apoderado de los albaceas testamentarios del fundador, afirmando que las funciones de los albaceas y comisarios son personalísimas y por tanto no podían confiarlas a terceros, "*porque solo se les habilita para ejercerlas por si mismos con atencion á sus circunstancias personales, y por la confianza que le han merecido al testador o comitente*"<sup>584</sup>. Según este razonamiento, que a partir de aquel momento sería la base de la defensa de la naturaleza laical de la capellanía, la fundación efectuada por Francisco Ignacio de Ibarra sería nula y todo lo obrado en base a ella también, siendo la memoria testamentaria de Juan Antonio de Azcarate el único documento válido y por tanto la capellanía existiría únicamente "*á virtud de la citada memoria como si en ella se hubiese fundado*"<sup>585</sup>.

Concluía su escrito solicitando que se le adjudicase, en nombre de su mujer, la posesión de los bienes de la capellanía en clase de seculares y libres, tal como estaba dispuesto en el artículo 3 del decreto de las Cortes del 29 de junio de 1821, teniendo en cuenta que no era necesario esperar a que se produjese ninguna

---

<sup>582</sup> Ibídem.

<sup>583</sup> Escrito de Miguel Antonio de Jauregui remitido al Juez de primera instancia del partido de Bergara. 13 de agosto de 1822. AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/1, 38-39. (Apéndice 2, nº 35).

<sup>584</sup> Ibídem. El Derecho Civil actual considera el albaceazgo como de carácter personalísimo y por tanto indelegable. Según el art. 909 del Código civil, "*el albacea no podrá delegar el cargo si no tuviese expresa autorización del testador*". Ahora bien, el Tribunal Supremo se ha pronunciado en favor de que lo que es indelegable es el "cargo" de albacea, salvo que el testador lo haya autorizado expresamente, cosa que, en teoría, cabe, pero que el encargo de determinadas funciones del albacea a terceros, de naturaleza puramente material, ya sea por razones técnicas o de conveniencia, es plenamente admisible, sin admitir, en cambio, la delegación íntegra. Claro que, esto el Tribunal Supremo lo dijo el 2 de junio de 1962. Cfr. CASTÁN TOBEÑAS, José, Derecho Civil español, común y foral, Madrid, 1979, tomo VI.

<sup>585</sup> AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/1, 38-39. (Apéndice 2, nº 35).

vacante puesto que no había capellán eclesiástico a quien se perjudicase con la transmisión de dichos bienes a la familia sucesora.

Pocos días más tarde, el 23 de agosto, el Juez de Primera Instancia del partido de Bergara por hallarse, según declaró, ocupadísimo en la instrucción de varios crímenes de conspiración, mandó que el expediente relacionado con la petición de Jauregui pasase al alcalde constitucional primero de la villa de Bergara, quien por razones de parentesco con el solicitante delegó en el alcalde constitucional segundo<sup>586</sup>. Éste, el día 26, dictó un auto declarando que la capellanía fundada por Juan Antonio de Azcarate era de llamamiento y patronato pasivo de familias<sup>587</sup>, y mandando que, en virtud del artículo tercero del mencionado decreto, sus bienes volvieran a la familia del fundador, dando posesión de los mismos a María Bárbara de Aguirre y en su representación a su marido<sup>588</sup>.

Poco después, ante el tribunal eclesiástico, se presentaba la contestación del procurador de Jauregui a la censura del fiscal insistiendo en que fuese tenido en cuenta el artículo inhibitorio que había propuesto<sup>589</sup>. En un tono irónico de gran aspereza, se descalificaban los argumentos a los que había acudido el fiscal considerándolos como insultantes<sup>590</sup>. En contra de lo expuesto por el fiscal que invocaba a la escritura de fundación pretendiendo demostrar con ello que se trataba de una capellanía colativa, recurría al mismo razonamiento expuesto por Jauregui en la solicitud que dirigió al juez de primera instancia del partido de Bergara. Puesto que las funciones de los albaceas eran personalísimas carecía de validez la fundación efectuada por su apoderado. Tenía el mismo valor "*que un solo cero en lo numérico*"<sup>591</sup>. Estimaba que Francisco Ignacio de Ibarra había propasado "*caprichosamente a disponer que se hiciese colativa la capellanía mandada fundar por Azcarate, contra su voluntad clara y terminante de que fuese laical*"<sup>592</sup>, por lo que la capellanía solamente debía su existencia a la memoria testamentaria de Azcarate y según ella había de regirse. Y para demostrar que la voluntad del fundador habría sido la de que fuera laical acudía a los argumentos habituales: el orden de sucesión, la forma de cumplir los gravámenes, y la autoridad a la que se confiaba la resolución de litigios. De nuevo se interpretaba el sentido de la Real Orden de 15 de diciembre de 1820 de forma favorable a la emitida anteriormente por la Cámara: "*No se persuada pues, que en virtud de la expresion generica de que procediese con*

<sup>586</sup> AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/1, 39vº. El alcalde constitucional primero de Bergara era Andrés Agustín de Beiztegui, preceptor de Gramática en el Real Seminario de Bergara, quien estaba emparentado con María Bárbara de Aguirre y era padre de quien algunos años después ocuparía la capellanía. AAB, documentación de los años 1820-1822 sin catalogar.

<sup>587</sup> No se hacía referencia a su naturaleza de laical o colativa, puesto que en este caso era indiferente.

<sup>588</sup> Auto del alcalde constitucional segundo de la villa de Bergara, del 26 de agosto de 1822. AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/1, 40. (Apéndice 2, nº 36).

<sup>589</sup> Escrito de Juan Manuel Díez del 25 de septiembre de 1822. AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/2, 136-140. (Apéndice 2, nº 37).

<sup>590</sup> Comienza el escrito manifestando "*el desprecio que se merecen los insultos y desatinados supuestos tanto de la contraria, como del Fiscal*". Para afirmar más adelante que "*es tan ageno del conocimiento de S.S.I. y del Provisor el de esta capellanía, como lo puede ser del gran señor de Hungría*". Ibídem.

<sup>591</sup> Ibídem.

<sup>592</sup> Ibídem.

*arreglo a las leyes, haya adquirido S.S. facultades que no le competían*"<sup>593</sup>, pues si se devolvió el expediente al obispo era para que conforme a las leyes dejase correr el nombramiento de capellán efectuado por la Justicia y Ayuntamiento de Placencia tal como estaba, sin mezclarse en asuntos que no eran de su incumbencia. En cuanto a la consideración que hacía el fiscal con respecto a que la capellanía tenía anexa la cura de almas, se limita a afirmar que *"solamente una imaginación tan obcecada, que es incapaz de reconocer su propia existencia, puede confiar a la pluma semejante desatino"*<sup>594</sup>.

La aplicación de las leyes de desamortización eclesiástica, la supresión de monacales, las órdenes que mandaban suspender las ordenaciones y la reducción de diezmos, entre otras, fueron el origen de cierto desconcierto en los ambientes eclesiásticos. Ante todos estos acontecimientos es muy probable que el tribunal eclesiástico tuviera numerosas dudas acerca de cuál debiera de ser su actuación, aconsejándole la prudencia esperar.

Las diligencias relativas al asunto de la capellanía de Azcarate de nuevo se vieron paralizadas. El proceso continuaba, pero no se adoptaban resoluciones. Jauregui solicitó un compulsorio de los autos posesorios incoados en el juzgado de primera instancia en virtud del decreto de 29 de junio de 1821, y a partir de ese momento se sucedieron las peticiones, reclamaciones y aplazamientos del término de prueba hasta la presentación de las compulsas solicitadas el 10 de febrero de 1823<sup>595</sup>. Después el silencio fue absoluto. Los Cien Mil Hijos de San Luis cruzaron el Bidasoa el 20 de marzo de 1823, el 6 de abril una declaración de la Regencia mandaba *"no reconocer y mirar como si jamás hubieran existido todas las providencias del gobierno erigido por la rebelión"*<sup>596</sup>, y el 31 de mayo por orden de la Regencia se reunía de nuevo el Supremo Tribunal de la Cámara<sup>597</sup>.

## La vuelta al absolutismo

La nueva situación política supuso una vez más cambio en el rumbo de los acontecimientos relacionados con la capellanía que fundó Juan Antonio de Azcarate. Inmediatamente, Juan Manuel de Garro, en nombre de Miguel de Mendiguchia, remitió un escrito al tribunal en el que consideraba invalidados todos los argumentos expuestos por la parte contraria por apoyarse en los decretos de las Cortes que ya no tenían efecto<sup>598</sup>, y el día 4 de junio el Provisor mandaba que se comunicase el expediente al fiscal general eclesiástico del obispado a fin de que expusiera y pidiera lo que creyera conveniente<sup>599</sup>. En consecuencia, el 11 de junio el fiscal emitía un

---

<sup>593</sup> *Ibíd.*

<sup>594</sup> *Ibíd.*

<sup>595</sup> AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/2, 157-158.

<sup>596</sup> AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/2, 160.

<sup>597</sup> AHN, Consejos Suprimidos, Secretaría del Real Patronato, Libros de Matrícula de asuntos despachados, libro 167, folio 275 rº.

<sup>598</sup> AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/2, 159.

<sup>599</sup> AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/2, 159vº.

nuevo dictamen<sup>600</sup> en el que se reafirmaba en el anterior de 22 de julio de 1822, insistiendo en las razones que justificaban que se considerase como colativa la capellanía. Declaraba que *"es una temeridad sin exemplo la de Don Miguel Antonio de Jauregui de pretender con tanto esfuerzo la inhibición de un tribunal a quien por tantos títulos le corresponde su conocimiento"*<sup>601</sup> y exponía que no sólo no debía accederse al artículo inhibitorio propuesto por Jauregui, sino que además debía declararse nula la presentación que hizo el Ayuntamiento de Placencia, nula la posesión dada en su virtud, y nulo todo lo obrado por el Alcalde constitucional de Bergara *"que mandó volver los bienes de la Capellanía en clase de seculares y libres a la familia del fundador, como hecho todo en fuerza de un decreto de las llamadas Cortes a el que principalmente se acoge el citado Jauregui, y que está ya declarado nulo con todos los demás que de aquella cenagosa fuente salieron, mediante la manifestación que el Gobierno Real Español hizo en seis de Abril último de no reconocer y mirar como si jamás hubieran existido todas las providencias del gobierno erigido por la rebelión"*<sup>602</sup>.

En base a este dictamen, el Provisor y Vicario General, el Doctor Baeza, dictó un auto el 3 de julio desestimando el artículo inhibitorio introducido por la parte de Diez en su escrito de 10 de julio de 1822, y mandando que el expediente *"corra según su estado sobre el punto remitido a este Tribunal por la Real Cámara de Castilla en orden a la Capellanía en cuestión"*<sup>603</sup>. No está claro lo que quiso decir el Provisor, ya que si se refería a la orden de la Real Cámara, tendría que ser a la del 24 de diciembre de 1819 por la que mandaba al obispo reformar su auto de 23 de agosto. Lo más probable es que se refiriera a la Real Orden de 15 de diciembre de 1820 por la que el asunto pasaba al tribunal eclesiástico para su resolución, aunque en este caso al tratarse de una orden dada en la época del gobierno constitucional podría ser puesta en duda su legitimidad. Contra este auto, Miguel Antonio de Jauregui presentó apelación ante el tribunal metropolitano de Burgos el día 7 de julio<sup>604</sup>, aunque el Provisor no dictó el auto admitiéndola hasta el 23 de marzo del año siguiente<sup>605</sup>.

El 1 de octubre de 1823 Fernando VII, de nuevo como rey absoluto, promulgó el decreto por el que se declaraban nulos y de ningún valor los actos del Gobierno llamado constitucional. Los decretos de las Cortes a los que se había acogido Jauregui no tenían ningún valor y la capellanía recuperaba su carácter de propiedad vinculada. Por otra parte el proceso sobre su adjudicación continuaba pendiente en el tribunal diocesano de Calahorra que, como consecuencia de la apelación de Jauregui, pasó al metropolitano de Burgos. Por otra parte, poco tiempo después la Cámara reclamaría de nuevo el expediente al tribunal eclesiástico.

Para complicarlo todo aún más, el día 3 de octubre de 1823 fallecía en Pamplona Miguel de Mendiguchia a la edad de 38 años. Un nuevo aspirante, su hermano José

<sup>600</sup> Dictamen del fiscal general eclesiástico, del 11 de junio de 1823. AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/2, 160. (Apéndice 2, nº 38).

<sup>601</sup> Ibídem.

<sup>602</sup> Ibídem.

<sup>603</sup> AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/2, 161.

<sup>604</sup> AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/2, 162.

<sup>605</sup> AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/2, 171vº.

María, de 23 años, se presentó a la capellanía, solicitando también la declaración de pobreza "*para el seguimiento de esta causa con unas partes poderosas como son las contrarias*"<sup>606</sup>. El 15 de marzo de 1824, Juan Manuel de Garro, procurador del nuevo aspirante, remitió un escrito al tribunal lamentándose de los retrasos que se estaban produciendo, a la vez que denunciaba las maniobras dilatorias utilizadas por la parte contraria, que perjudicaban a los intereses de su representado y sólo beneficiaban a los de quien disfrutaba de las rentas de la capellanía "*a pesar de la clausula que contiene de asistir a el Confesonario y oir en penitencia, cuya circunstancia sola hace despreziable la pretensión contraria y motiva las dilaciones que se dexan conocer*"<sup>607</sup>. Confiando en el descrédito que podía suponer la connivencia con el anterior régimen constitucional no desperdició la ocasión de acusarles de dilatar "*el curso de este expediente sin perdonar el acogerse a todos los decretos del tiempo de la Constitución*"<sup>608</sup>.

El 28 de abril de 1824, por medio de unas Letras ordinarias de los Gobernadores Provisores Vicarios Generales del Arzobispado de Burgos, sede vacante, se admitía la apelación de Jauregui y se mandaba al Ordinario eclesiástico de Calahorra su inhibición del conocimiento de la causa, mandando al notario originario que entregase una copia íntegra y foliada de todo el expediente, y citando al fiscal general eclesiástico y a todas las partes litigantes para que compareciesen en el tribunal Metropolitano de Burgos<sup>609</sup>.

Como sería expresado por el Ayuntamiento, "*restablecido el gobierno legítimo de V.M. en la plenitud de sus Reales prerrogativas y atribuciones*"<sup>610</sup>, tanto Miguel Antonio de Jauregui como el Ayuntamiento de Placencia se dirigieron al rey por medio de sendos escritos, acogiendo a su soberana protección y amparo, para reclamar la inmediata devolución a la Cámara de los autos que quedaron pendientes el 6 de marzo de 1820, cuando "*sobrevinieron las funestas novedades causadas por los revolucionarios*"<sup>611</sup>. El Ayuntamiento de Placencia pedía la protección y el Real amparo por considerar que se le había privado de las facultades y de la jurisdicción que el fundador de la capellanía le había confiado. Miguel Antonio de Jauregui, en cambio, porque el obispo les había despojado a él y a su mujer de su legítimo derecho a la capellanía. El antecedente inmediato de la redacción de ambos escritos fue la escritura de poder que Jauregui otorgó a favor de Mariano de Vergara, marido de María Manuela de Aguirre, hermana de María Bárbara y, según afirmaba en la propia escritura de poder, inmediata sucesora de la capellanía. El escrito que envió al rey el Ayuntamiento el 11 de junio<sup>612</sup> y el del propio Miguel Antonio de Jauregui del

---

<sup>606</sup> AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/2, 149-170.

<sup>607</sup> Escrito de Juan Manuel de Garro del 15 de marzo de 1824. AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/2, 171.

<sup>608</sup> *Ibidem*.

<sup>609</sup> AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/2, 172-173.

<sup>610</sup> Escrito del Ayuntamiento de Placencia dirigido al rey, de fecha 11 de junio de 1824. AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/1, 30.

<sup>611</sup> Escrito súplica de Miguel Antonio de Jauregui dirigido al rey el 25 de junio de 1824. AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/1, 23.

<sup>612</sup> Escrito del Ayuntamiento de Placencia dirigido al rey, de fecha 11 de junio de 1824. AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/1, 29-30. (Apéndice 2, nº 41).

día 25 del mismo mes<sup>613</sup>, son una copia casi literal de lo expuesto en la citada escritura de poder. Se adivina una buena sintonía entre el maestro arquitecto de Bergara y el Ayuntamiento de la villa de Placencia.

La apelación al tribunal metropolitano de Burgos en relación con el artículo de incompetencia propuesto para la inhibición en la causa del tribunal eclesiástico había sido admitida y era previsible que hubiera que esperar un tiempo antes de que se resolviese. La opción de recurrir al Real auxilio podría ser la forma de acelerar el proceso y conseguir la inhibición de los tribunales eclesiásticos, que de todas formas no era seguro que se pudiera conseguir por medio de la apelación presentada. Jauregui otorgó la escritura de poder a favor de Mariano de Vergara con este fin: *"para que en mi nombre y representación y de la misma mi consorte presentándose por sí, ó por medio de substituto ante S.M. (Dios le guarde) su Real Consejo, y demás tribunales competentes pida y suplique se libren los correspondientes Reales Despachos y provisiones para que el Illmo. Señor Obispo de Calahorra y el Metropolitano de Burgos en su caso, remitan inmediatamente los autos que quedaron pendientes en seis de Marzo de mil ochocientos y veinte..."*<sup>614</sup>.

En esta escritura se exponían los antecedentes que motivaban la reclamación para la que se otorgaba el poder, insistiendo en los fundamentos de la misma. La capellanía que ocupaba su mujer era sin ninguna duda un simple patronato de legos, y las razones en las que se apoyaba para esta afirmación eran las mismas que había expuesto en anteriores ocasiones. Esencialmente que *"la voluntad clara y terminante"*<sup>615</sup> del fundador no había sido respetada por quien nualmente se propasó arbitrariamente en fundarla como colativa. El recurso a la nulidad de la fundación por no haber sido hecha por los albaceas, cuya función debía ser personalísima, era el centro de la argumentación desde que fue utilizado por primera vez en el escrito remitido el 13 de agosto de 1822 al juez de primera instancia del partido de Bergara. Las razones por las que se consideraba que la voluntad del fundador era clara y terminante en el sentido de que la capellanía fuera laical eran las mismas de siempre: por la forma de hacer frente a los gravámenes, por el orden de suceder establecido, y por el juez a quien se confió *"no tan solamente el Patronato, sino también el conocimiento en los casos contenciosos con absoluta independencia del ordinario y tribunales Eclesiásticos"*<sup>616</sup>.

---

<sup>613</sup> Escrito súplica de Miguel Antonio de Jauregui dirigido al rey el 25 de junio de 1824. AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/1, 22-23. (Apéndice 2, nº 42).

<sup>614</sup> Escritura de poder otorgada por Miguel Antonio de Jauregui el 31 de mayo de 1824 a favor de Mariano de Vergara. AHN, Consejos Suprimidos, 2/1, 24-27. (Apéndice 2, nº 40).

<sup>615</sup> *Ibidem*.

<sup>616</sup> *Ibidem*. Este fue siempre el principal argumento utilizado por el Ayuntamiento de Placencia, institución que, como patrono de la capellanía, en las vacantes debía hacer la presentación a la misma en quien más derechos tuviera. En ningún momento encomendó el fundador al Ayuntamiento otras funciones que no fueran las del patronato, tal como se afirma en el escrito de Jauregui, confiándole el conocimiento en los casos contenciosos con absoluta independencia del ordinario y tribunales eclesiásticos. Lo que dispuso el fundador en su memoria testamentaria fue lo siguiente: *"el patrono de la Capellanía será el Ayuntamiento y Justicia de dicha villa para que en cualquier litigio que se pueda ofrecer entre los Parientes en la pretensión de capellán decida dicho Ayuntamiento en quien mejor derechos tuviere"*. AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/1, 46. (Apéndice 2, nº 1).

Lo más novedoso tanto en la escritura de poder como en los escritos que remitieron al rey el Ayuntamiento y Miguel Antonio de Jauregui, era el relato de los acontecimientos ocurridos desde la visita del obispo en el verano de 1819. Ambos trataban de enmarcar su reclamación en el conjunto de medidas adoptadas como consecuencia del restablecimiento del poder absoluto del rey<sup>617</sup>, ya que, según exponían en sus escritos, los autos habían sido arrancados de la jurisdicción real por los revolucionarios, para pasarlos al tribunal eclesiástico, convirtiendo al obispo de Calahorra en juez de su propia causa. Cuando todo parecía resuelto como consecuencia de la orden de la Cámara que mandaba al obispo reformar su auto y reponer la capellanía al estado que tenía antes de la visita, *"sobrevinieron las funestas novedades causadas por los revolucionarios"*. Si en anteriores escritos, redactados durante la vigencia del régimen constitucional, estos mismos interpretaban la Real Orden de 15 de diciembre de 1820 como una continuación de la orden de la Cámara del año anterior, en esta ocasión ésta era desacreditada y desautorizada al considerarla como dictada por el *"pretendido gobierno constitucional, con arreglo a un decreto de las llamadas cortes"*<sup>618</sup>. Las actuaciones llevadas a cabo en el tribunal eclesiástico de Calahorra en virtud de esta orden se consideraban por tanto nulas e ilegales. Lo que no dijo Jauregui en ningún momento es que él se había acogido por propia iniciativa a leyes dadas por esos mismos revolucionarios.

Tanto Jauregui como el Ayuntamiento de Placencia concluían en sus escritos que como consecuencia de haberse repuesto el gobierno legítimo y por tanto vueltas las cosas al ser y estado que tenían antes del 7 de marzo de 1820, los autos deberían volver a donde pendían. Por ello se suplicaba que fueran librados los despachos y provisiones necesarios para que el obispo de Calahorra y el metropolitano de Burgos remitiesen inmediatamente los autos a la Cámara, con el fin de reponer a la capellanía en el estado que tenía. En la escritura de poder, Jauregui iba más allá, y entre las facultades para las que otorgaba su poder incluía la de solicitar que se declarasen ilegales, nulos y de ningún valor ni efecto los procedimientos causados por el obispo de Calahorra, *"reprendiéndole severamente para que en los sucesos se conduzca con mas moderacion en un asunto tan ageno de sus facultades"*<sup>619</sup>.

El 18 de agosto, el fiscal, en una breve nota, expresaba su parecer para que la Cámara accediese a la solicitud de Miguel Antonio de Jauregui expidiéndose la correspondiente orden al Obispo de Calahorra<sup>620</sup>, el día 30 se produjo el acuerdo de la Cámara y el 2 de septiembre ésta cursaba un oficio al Obispo de Calahorra para que remitiera los autos originales que fueron enviados al tribunal eclesiástico en virtud de consulta elevada a S. M. por el Consejo de Estado Constitucional en

<sup>617</sup> *"repuestas felizmente las cosas en el ser y estado que tenían antes de 7 de Marzo de 1820, y restablecido el gobierno legitimo de V.M. en la plenitud de sus Reales prerrogativas y atribuciones"*. Escrito del Ayuntamiento de Placencia dirigido al rey, de fecha 11 de junio de 1824. AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/1, 30vº.

<sup>618</sup> Escrito del Ayuntamiento de Placencia dirigido al rey, de fecha 11 de junio de 1824. AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/1, 30.

<sup>619</sup> Escritura de poder otorgada por Miguel Antonio de Jauregui el 31 de mayo de 1824 a favor de Mariano de Vergara. AHN, Consejos Suprimidos, 2/1, 27.

<sup>620</sup> AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/1, 57.

1820<sup>621</sup>. El 24 de septiembre, por medio de un escueto oficio firmado por Atanasio Puyal, obispo de Calahorra, cumpliendo lo que se le ordenaba, se remitían a la Cámara los originales de los autos de la capellanía fundada por Juan Antonio de Azcarate.

El expediente sobre la capellanía había sido devuelto a la Cámara, pero, casi un año después, la apelación presentada por Jauregui todavía se encontraba pendiente en el tribunal metropolitano de Burgos. Ciertos indicios hacen suponer que María Bárbara de Aguirre y su marido temían que la resolución de dicha apelación no fuese favorable a sus intereses, pues en un escrito enviado a la Cámara el 2 de julio de 1825 solicitaban que se les extendiera una certificación con la que acreditar que los autos referidos a la capellanía se encontraban en dicho supremo tribunal, dado que el tribunal metropolitano continuaba en el conocimiento de dicho pleito<sup>622</sup>. En este escrito exponía que el obispo de Calahorra, desobedeciendo las órdenes de la Cámara, "espiritualizó" la capellanía en 1820, y que al no existir ya el tribunal de la Cámara, ella y su marido apelaron al metropolitano, sin embargo estimaba que este paso dado entonces le perjudicaba en el momento de redactar la carta, ya que, aunque los autos originales se encontraban ya en la Cámara, el metropolitano continuaba en el conocimiento de los mismos. La certificación solicitada se emitió por la Cámara el día 11 de julio<sup>623</sup>.

Finalmente, un mes más tarde, el 23 de agosto, el tribunal metropolitano de Burgos dictaba el auto definitivo<sup>624</sup>, por el que se resolvía la apelación en segunda instancia con título de agravios promovida por Miguel Antonio de Jauregui. Confirmando el Auto dado a 3 de julio de 1823 por el Ordinario de Calahorra, se desestimaba el artículo de inhibición propuesto por Miguel Antonio de Jauregui, devolviendo el conocimiento de esta causa al Ordinario de Calahorra, y condenando a las costas de esta segunda instancia a Miguel Antonio de Jauregui.

El asunto fue devuelto al tribunal eclesiástico de Calahorra, pero de allí ya había sido remitido anteriormente a la Cámara. Ésta se había mostrado siempre favorable a los intereses de Miguel Antonio de Jauregui y su mujer, por lo que tendrían alguna esperanza de que finalmente la Cámara interviniera a su favor. Probablemente esta sería la razón por la que, aunque en un primer momento Jauregui apeló el auto de

---

<sup>621</sup> Oficio de la Cámara del 2 de septiembre de 1824. AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/1, 58. (Apéndice 2, nº 43).

<sup>622</sup> AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/1, 61. Este escrito aparece como remitido por María Manuela de Aguirre. María Manuela era hermana de María Bárbara. Lo más probable es que se tratara de una equivocación en la transcripción del nombre, pues en el cuerpo del escrito afirma que ella y su marido apelaron al metropolitano. AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/1, 61.

<sup>623</sup> Certificación expedida por el Secretario de Decretos y Oficial Mayor de la Secretaría de la Cámara, en la que se acreditaba que los autos originales del asunto se encontraban en la Cámara. AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/1, 62. Hay una gran confusión en cuanto al nombre de la solicitante, ya que en esta certificación aparece de tres formas diferentes: María Manuela de Aguirre, María de Aguirre y María Ramona de Aguirre. En realidad parece tratarse de María Bárbara.

<sup>624</sup> El auto definitivo se encuentra transcrito en un despacho remisorial del tribunal eclesiástico metropolitano de Burgos dirigido al Ordinario de Calahorra con fecha 27 de octubre de 1825. ACC, Capellanías, 16/972/107. (Apéndice 2, nº 45).

23 de agosto, posteriormente se apartaría de dicha apelación, haciendo efectivo el pago de las costas a José María de Mendiguchia<sup>625</sup>.

Ambas instancias, la eclesiástica y la civil, seguían entendiendo en la causa de la capellanía sin llegar a pronunciarse sobre su naturaleza y sobre los derechos de la poseedora y del aspirante a la misma cuando un nuevo aspirante apareció en escena: se trataba de Juan Bautista de Beiztegui, presbítero, pariente del fundador de la capellanía por otra línea.

Atanasio Puyal, el obispo de Calahorra, falleció el 21 de octubre de 1827. En enero de 1828, el tribunal eclesiástico de Calahorra dictó sentencia por la que se resolvía el pleito por la posesión de la capellanía a favor de Juan Bautista Beiztegui, a quien Miguel Antonio de Jauregui y su mujer hicieron entrega de todos los réditos obtenidos hasta entonces. Obtuvo la colación y canónica institución, llegando a ordenarse a título de la capellanía.

Cuando finalmente, el fiscal de la Cámara emitió su dictamen en relación con este expediente, el 8 de marzo de 1833<sup>626</sup>, Beiztegui ya ocupaba la capellanía en concepto de colativa. El fiscal declaró ser de la misma opinión que manifestó su antecesor en el oficio fiscal en 1819, por lo que se debía comunicar nueva orden al obispo para que cumpliese terminantemente con lo que se le comunicó en 24 de diciembre de 1819.

Sin embargo, Beiztegui fallecía pocos días después. El tribunal eclesiástico nombró para sucederle, sin esperar a la presentación del patrono, a su hermano José Matías de Beiztegui, y el Ayuntamiento, como patrono, a José Cruz de Azcaray. La capellanía tenía dos capellanes. Uno de ellos en concepto de colativa y el otro en el de laical. Se inició un nuevo pleito, pero esta vez ante el tribunal del Corregimiento de Gipuzkoa. El pleito fue sobreseído debido al traslado de las oficinas del tribunal con motivo de la guerra civil., y el aspirante José Matías de Beiztegui trasladó su residencia a Burdeos, contrayendo matrimonio en 1847, por lo que renunció a sus pretensiones. José Cruz de Azcaray poseyó la capellanía en concepto de laical hasta su fallecimiento en 1865.

---

<sup>625</sup> La resolución del tribunal metropolitano fue apelada en tiempo y forma por Miguel Antonio de Jauregui, a quien se le mandó dar testimonio para su mejora en el tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica. Sin embargo, habiéndose librado, a instancia de José María de Mendiguchia, el mandamiento de estilo con el término y apercibimiento ordinarios para que Miguel Antonio de Jauregui presentase la mejora de dicha apelación, éste desistió de la misma, "por no ser su ánimo de seguirla". ACC, Capellanías, 16/972/107.

<sup>626</sup> Dictamen del fiscal de fecha 8 de marzo de 1833. AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/1, 63-64. (Apéndice 2, nº 46). Los autos originales y los antecedentes del asunto se pasaron al fiscal por decreto de la Cámara del 4 de octubre de 1824. AHN, Consejos Suprimidos, leg. 15754, 2/1, 62vº.

## Cien años después.

Casi cien años después de que Juan Antonio de Azcarate redactase, en Guadalajara de Indias, su memoria testamentaria, en la que expresaba su voluntad de que se fundase una capellanía en la iglesia de su villa natal, y tras los innumerables pleitos a los que había dado lugar, al menos tres aspirantes se consideraban con el mejor derecho a ocupar la vacante recientemente producida. Era el año 1866. Desde que Juan Antonio de Azcarate dejara escrita su voluntad al respecto habían transcurrido noventa y cuatro años, y cincuenta y cuatro desde que con el fin de poder aspirar a ella y ocuparla con éxito durante más de veinte, Miguel Antonio de Jauregui y María Bárbara de Aguirre la hicieron pasar por un simple patronato de legos. Como tal fue ocupada por su último poseedor, José Cruz de Azcaray, un nieto de la hermana de María Bárbara, durante los últimos treinta y dos años.

Una abundante, compleja y en muchas ocasiones contradictoria legislación afectó durante aquellos años a las capellanías. Entre la legislación genérica sobre desvinculaciones y las leyes desamortizadoras de las propiedades eclesiásticas, fue abundante la legislación que se ocupó directamente de las capellanías, especialmente de las familiares, también llamadas "de sangre". La participación de numerosos intereses particulares junto con los de la Iglesia hacía especialmente difícil la aplicación de las medidas desamortizadoras sobre unos bienes que no siempre estaba claro a quién pertenecían y cuya propiedad disputaban la Iglesia y los sucesores del fundador.

La desamortización fue un complejísimo proceso que se desarrolló a lo largo de prácticamente todo el siglo XIX y que tuvo connotaciones económicas, jurídicas, políticas, sociales y religiosas. Este proceso afectó a la mayor parte de las propiedades de la Iglesia y se vio influenciado por los constantes cambios políticos que dieron lugar a normativas en muchos casos contradictorias cuya aplicación fue enormemente compleja. Las capellanías fueron objeto de una legislación específica, especialmente las familiares, siendo excluidas generalmente de las leyes desamortizadoras<sup>627</sup>.

Un decreto del 30 de agosto de 1836 restablecía la ley de 11 de octubre de 1820 por la que se suprimían todo tipo de vinculaciones<sup>628</sup>. El artículo 14 de la ley de 1820 establecía que en lo sucesivo nadie pudiera "*fundar mayorazgo, fideicomiso, patronato, capellanía, obra pía, ni vinculación alguna sobre ninguna clase de bienes*

---

<sup>627</sup> En relación con la legislación específica sobre capellanías colativas constituye una referencia indispensable: VÁZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA, José María, *Las capellanías colativo-familiares (Régimen vigente)*, Pamplona, EUNSA, 1992. Sobre legislación en general sobre capellanías: FRANCO ORTIZ, J. M. y BRAVO Y TUDELA, A., *Novísima legislación comentada sobre Capellanías colativas de sangre, y fundaciones análogas*, Madrid, 1868.

<sup>628</sup> En su artículo 1º disponía: "*Se restablece en toda su fuerza y vigor el Decreto de las Cortes de 27 de septiembre de 1820, publicado en las mismas como ley en 11 de Octubre del mismo año, por el que quedaron suprimidas las vinculaciones de toda especie, y restituidas a la clase de absolutamente libres los bienes de cualquiera naturaleza que las compongan*".

*o derechos, ni prohibir directa ni indirectamente su enajenación*"<sup>629</sup>. Sin embargo, aquella ley no era clara en cuanto a la supresión de las capellanías existentes, pues en su artículo primero no las mencionaba explícitamente, aunque al referirse a los patronatos se entendiera que entre ellos estaban incluidos los patronatos de legos, es decir las capellanías laicales de patronato activo o pasivo de familias. Según esta ley, los poseedores de las vinculaciones que se suprimían por su artículo primero, pasarían a disponer libremente de la mitad de los bienes en que consistieran, y la otra mitad pasaría después de su muerte al inmediato sucesor en el vínculo o mayorazgo de que se tratara.

La primera medida desamortizadora de carácter general que afectó a los bienes del clero secular fue la Ley de 29 de julio de 1837 sobre dotación del culto y clero. Su artículo segundo declaraba como bienes nacionales todas las propiedades del clero secular, pero el artículo tercero exceptuaba a las prebendas, capellanías, beneficios y demás fundaciones de patronato pasivo de sangre. Sin embargo, la Ley de 2 de septiembre de 1841, promovida por Espartero, y de una mayor aplicación que la anterior, excluía de la desamortización tanto las capellanías de patronato activo como pasivo de sangre. La última acometida desamortizadora, obra de Madoz, se llevó a cabo por medio de la ley de 1 de mayo de 1855. En esta ley no se exceptuaban explícitamente los bienes de las capellanías colativas de sangre, pero al año siguiente, por medio de la ley de 11 de julio de 1856, las dudas quedaron despejadas, ya que en esta ocasión fueron excluidas explícitamente de los bienes del clero que debían ser vendidos.

La ley que, relativa a las capellanías colativas de llamamiento de familias, sirvió de referencia para todas las demás durante gran parte del siglo XIX, fue la del 19 de agosto de 1841. Esta ley permitía a las familias de los fundadores la posibilidad de hacerse con la propiedad de los bienes con los que se habían fundado las capellanías, aun cuando se mantenía la obligación de cumplir con las cargas civiles y eclesiásticas a las que estuvieran afectas. A pesar de los acuerdos alcanzados sobre las propiedades de la Iglesia como consecuencia del Concordato de 1851, las adjudicaciones de los bienes de capellanías colativas continuaron hasta la promulgación del Real Decreto de 30 de abril de 1852 en el que se disponía que desde la publicación del Concordato la ley de 19 de agosto de 1841 debería considerarse como derogada. Este Real Decreto, declaró como subsistentes a las capellanías colativas que aún no habían sido adjudicadas a las familias, su adjudicación correspondería a los tribunales eclesiásticos y servirían como título de ordenación siempre que fueran congruas. Sin embargo, durante el bienio progresista, el Real Decreto del 6 de febrero de 1855 volvía a poner en vigor la ley de 1841 sobre capellanías de sangre, hasta que de nuevo fue derogada, tras la vuelta al gobierno del partido moderado, por medio del Real Decreto de 28 de noviembre de 1856. Este Real Decreto suspendió la adjudicación de los bienes de las capellanías colativas de sangre como un paso previo a una solución definitiva del asunto, que llegaría con el Convenio-Ley de Capellanías de 1867.

---

<sup>629</sup> Decreto XXXVIII, de 27 de setiembre de 1820, "Supresión de toda especie de vinculaciones", en *Colección de los Decretos y Órdenes generales de la primera legislatura de las Cortes ordinarias de los años 1820 y 1821*, tomo VI, Madrid, Imprenta Nacional, 1821, p. 148.

Así pues, cuando en 1865 falleció José Cruz de Azcaray, las capellanías colativas que no habían sido adjudicadas a las familias continuaban subsistentes. No obstante, José Cruz de Azcaray ocupó la capellanía como simple patronato de legos, y por tanto sujeto a las disposiciones de la ley de 11 de octubre de 1820 de supresión de toda clase de vinculaciones. De lo que se deduce del escrito que envió su hermano Ramón de Azcaray al Ayuntamiento de Placencia, como patrono de la capellanía, José Cruz se habría acogido a dicha ley, puesto que afirmaba que se hallaba en posesión y propiedad de la mitad de los bienes de la capellanía como heredero de su hermano<sup>630</sup>, pretendiendo que el Ayuntamiento hiciera en él la presentación en la parte que restaba de la capellanía. No hay duda de que Ramón de Azcaray pretendía hacerse con la otra mitad de los bienes, tal como establecía la mencionada ley de 1820 restablecida en 1836. Sin embargo, aun pretendiendo acceder a la capellanía en concepto de patronato de legos, no sólo hacía valer su parentesco con el fundador sino que añadía su condición de sacerdote como una circunstancia adicional que debería contribuir a que fuera preferido a los demás aspirantes.

En esta ocasión se presentaron al menos otros dos aspirantes a la capellanía. Uno de ellos, José Antonio Azula la reclamaba para su hijo Anacleto. La madre de José Antonio Azula, Micaela Beiztegui, era hermana del padre de Juan Bautista de Beiztegui, quien ocupó la capellanía como colativa entre 1828 y 1833 ordenándose a título de ella. José Antonio Azula remitió un breve escrito al Ayuntamiento de Placencia acompañado del árbol genealógico que acreditaba su parentesco con el fundador<sup>631</sup>. En él reclamaba para su hijo la capellanía como colativa, puntualizando que con arreglo a la legislación vigente aquella clase de capellanías se consideraban subsistentes.

También la reclamó como colativa José Matías de Beiztegui quien, según su propio testimonio, ya fue nombrado para sustituir a su hermano en 1833. En esta ocasión la reclamaba para su hijo Francisco José, natural de Burdeos, de quince años de edad y estudiante con la prima tonsura<sup>632</sup>. Beiztegui envió dos escritos al Ayuntamiento, en el primero de ellos, de fecha 4 de enero de 1866, se limitaba a solicitar para su hijo la vacante producida en la capellanía por el fallecimiento de José Cruz de Azcaray. Algunos días más tarde, el 19 de enero, enterado de que se habían presentado más pretendientes, remitió un extenso memorial en el que exponía las circunstancias en las que en 1833 el Ayuntamiento había nombrado a José Cruz de Azcaray para ocupar la vacante producida por la muerte de su hermano Juan Bautista<sup>633</sup>. Concluía su memorial advirtiéndole al Ayuntamiento que si el tribunal eclesiástico había desposeído en el año 1827 a Miguel Antonio de Jauregui y a su esposa María Bárbara de Aguirre de la capellanía, condenándoles a entregar a su hermano Juan Bautista de Beiztegui todos los réditos mal percibidos, era de suponer

---

<sup>630</sup> Escrito dirigido al Ayuntamiento de Placencia por Ramón de Azcaray, el 4 de enero de 1866. AMS, 77A. (Apéndice 2, nº 49).

<sup>631</sup> Escrito dirigido al Ayuntamiento de Placencia por José Antonio de Azula, el 22 de diciembre de 1865. AMS, 77A. (Apéndice 2, nº 48).

<sup>632</sup> Escrito dirigido al Ayuntamiento de Placencia por José Matías de Beiztegui, el 4 de enero de 1866. AMS, 77A.

<sup>633</sup> Escrito de José Matías de Beiztegui, de fecha 19 de enero de 1866. AHS, 77A. (Apéndice 2, nº 50).

que el mismo tribunal, enterado de los antecedentes por él expuestos, condenase igualmente a quienes habían gozado indebidamente de la capellanía en el mismo concepto que lo habían hecho Jauregui y su esposa.

Casi cien años después de la fundación de la capellanía colativa y más de cincuenta desde que María Bárbara de Aguirre fuera nombrada por el Consejo Municipal de Placencia como poseedora de la misma en concepto de merelega, continuaba la controversia sobre la naturaleza de la capellanía. Cada uno de los aspirantes defendía lo que era más adecuado para sus intereses.

## Conclusiones.

*... por lo menos en algunos casos, lo peor de las conclusiones no es tanto que sean en ocasiones precipitadas, sino que sean, simplemente, conclusiones.*

José Saramago, *La caverna*.

Intereses privados e interés general de la Iglesia confluyeron durante muchos siglos en una institución eclesiástica en cuyo origen se encontraba la preocupación ante el más allá, el miedo al castigo eterno y la esperanza en la salvación. Las capellanías constituían uno de los medios más eficaces para comprar el descanso eterno, puesto que su fundación aseguraba la perpetuidad de los sufragios por el alma del fundador. Pero, y sobre todo en el caso de las llamadas familiares o de sangre, los auténticos beneficiarios de ellas eran la familia del fundador y la Iglesia.

Para la Iglesia, las capellanías constituyeron una forma privilegiada de aumentar su patrimonio temporal y uno de los procedimientos más socorridos para la creación de nuevos beneficios eclesiásticos capaces de asegurar el sustento a un número creciente de clérigos y de garantizar el sostenimiento y el aumento del culto.

Para las familias de los fundadores, consolidaban unas rentas con las que algunos de sus miembros, generación tras generación, podían acceder a la carrera eclesiástica, garantizando, además, gracias al formidable ascendiente social de la Iglesia, el mantenimiento de la preeminencia social y la integración en las redes de poder, a través de su entrada en el estamento clerical, del acceso a los sistemas de patronazgo y de las innumerables posibilidades que ofrecían de relaciones con las instancias del poder político. El ideal de perpetuación de la familia o del linaje quedaba legitimado por la Iglesia y asegurado por medio de la vinculación y la acumulación del patrimonio. Gracias a la función legitimadora de la religión, las estrategias de dominación eran sacralizadas por medio de la intervención de la Iglesia. Es indudable que en muchos casos las capellanías eran un instrumento de movilidad social para determinadas familias que aspiraban a integrarse en las redes de poder locales, pues eran la única posibilidad de vincular pequeños patrimonios y de equipararse a la nobleza.

La Iglesia era a finales del siglo XVIII mucho más que una institución. Lo impregnaba absolutamente todo. Su poder de control social, su autoridad sobre las conciencias, su influjo sobre las mentalidades y sobre los comportamientos, tanto individuales como sociales, era inmenso. La Iglesia regulaba y reglamentaba prácticamente todos los aspectos de la vida desde el nacimiento hasta la muerte. Por medio de la tributación decimal, de las limosnas, legados y fundaciones, se había convertido en una de las principales instituciones financieras y reguladoras de la economía y de la redistribución de la riqueza. Este enorme poder, que ya había comenzado a ser puesto en cuestión desde determinadas instancias políticas, sociales y económicas, se asentaba sobre un incalculable patrimonio y sobre una estructura fuertemente jerarquizada de amplísima implantación y con vocación de universalidad.

El poder de la Iglesia era un espléndido instrumento en manos de las oligarquías y de la propia institución monárquica, y un excelente medio para su legitimación, pero al mismo tiempo era también una amenaza para sus intereses. No cabe duda de que una institución cuyo ámbito de actuación superaba el de las monarquías europeas y con un poder como el que tenía en todos los terrenos, constituía una amenaza permanente para dichas monarquías y para sus grupos privilegiados. Bajo el pretexto del amparo y de la protección de la religión y de la Iglesia, quienes manejaban los hilos del poder a todos los niveles procuraban utilizar los recursos que aquélla les ofrecía, al tiempo que ejercían sobre ella el necesario control destinado a contener la posible amenaza para su predominio.

Mientras estuviera bien controlada y las jerarquías fueran lo suficientemente sumisas, la Iglesia constituía una maquinaria perfecta en torno a la cual se tejían los mecanismos y las estrategias de poder. El Real Patronato era una de sus claves. Por algo, la Secretaría del Real Patronato dependía directamente de uno de los principales órganos de la corona, de la Cámara de Castilla. El Real Patronato ponía en manos de la corona la elección de los obispos y por tanto garantizaba su obediencia y su docilidad. Las iglesias de patronato real permitían a la monarquía extender su red de control de la Iglesia hasta el nivel parroquial, participando en la percepción de diezmos y en la presentación de beneficios. Aunque esta red normalmente no era controlada directamente por la monarquía, sino que en base a la concesión de mercedes, el monarca creaba un complejo sistema de intercambio de solidaridades por medio de la cesión de los derechos de patronato como recompensa por ciertos servicios. De esta manera se conformaba una compleja red en la que los intereses particulares dependían del interés de la Corona y viceversa.

Los llamados patronatos de legos, patronatos laicos, capellanías de sangre, los fundadores de misas y aniversarios y los aspirantes a la ocupación de beneficios patrimoniales, así como las diversas clases de perceptores y arrendadores de diezmos, completaban la enmarañada trama que se articulaba en torno a las posibilidades que ofrecía la Iglesia como instrumento de poder.

Las capellanías sirvieron durante bastantes siglos como uno más de los mecanismos que garantizaban la reproducción social de las familias notables, o que aspiraban a serlo, y de su patrimonio, al tiempo que proporcionaban a la Iglesia un sistema para acrecentar su propio patrimonio y su poder de control y de influencia social. Fueron utilizadas por las pequeñas y medianas oligarquías para lograr el ascenso social, para acrecentar su poder y para perpetuarse en él, proporcionándoles no sólo un medio de prestigio, de preeminencia y de control de la colectividad, sino unas rentas tanto materiales como inmateriales que les permitían afianzar su posición en el entramado comunitario. Sin embargo, la complejidad inherente a las mismas propiciaría numerosos conflictos y daría lugar al desarrollo de una gran diversidad de estrategias encaminadas a su resolución. Se trataba de una institución en la que confluían muchos intereses que, en ocasiones, aunque no siempre, eran contrapuestos e incompatibles.

Como se ha podido comprobar en este trabajo, el caso de la capellanía fundada por Juan Antonio de Azcarate revela además de la preocupación del fundador por la

perpetuidad de los sufragios por su alma y la de sus padres, su interés por beneficiar a su familia mediante la vinculación de un patrimonio y por el prestigio que le otorgaría tanto a él como a los suyos. No hay duda de que a la Iglesia también le interesó su fundación, ya que, tras asegurarse la perpetuidad de las rentas, la aprobó, sus bienes fueron espiritualizados, es decir, pasaron a incrementar su patrimonio, y a título de ella obtuvo la prima tonsura y posteriormente hizo toda la carrera eclesiástica el primer llamado por el fundador.

La capellanía estudiada en esta investigación, de acuerdo con una mentalidad hábilmente manipulada por la Iglesia, se suponía que beneficiaba al fundador y a sus padres, a quienes aseguraba los sufragios por sus almas mediante la celebración de determinado número misas con la solemnidad adecuada. Pero de lo que no hay ninguna duda es de que benefició a su familia, en cuyo provecho quedó vinculado un patrimonio, del cual el primer favorecido fue un sobrino suyo, quien logró un medio de vida y una forma de iniciar una carrera que le condujo hasta el sacerdocio y, gracias a él, a la obtención de un beneficio parroquial, que le permitió alcanzar incluso la cura de almas, y conseguir de esta forma una posición relevante y de notable influencia social. Tras el fallecimiento del primer capellán, una hermana de éste y su marido se beneficiaron de unas rentas modestas, pero nada despreciables, además del importante capital relacional que la capellanía les aportaba, contribuyendo positivamente a su integración en las redes de poder municipal por medio de sus relaciones con el cabildo eclesiástico y con el ayuntamiento de la villa de Placencia. La riqueza adquirida en América por un pariente reverteó en una familia de escasos recursos, proporcionándole un capital tanto material como inmaterial que le permitieron mejorar su posición social e integrarse en las redes de poder local.

Por otra parte, la Iglesia aumentó su patrimonio y consiguió un nuevo beneficio eclesiástico perpetuo y la celebración de un importante número de misas, aumentando el culto y los actos litúrgicos con los que acrecentaba su presencia activa entre los fieles. Así mismo, la iglesia parroquial de Placencia también se benefició con esta fundación, ya que las misas de la capellanía de Azcarate constituyeron durante algunos años una fuente adicional de ingresos para los miembros de su cabildo.

Sin embargo, los intereses de todas las partes involucradas no siempre resultaron compatibles, por lo que fueron frecuentes las tensiones y los pleitos en las que aquéllas solían derivar. Pocos años después de fundada la capellanía tuvo lugar el primero. En él, el primer capellán se enfrentó al cabildo eclesiástico con motivo de la celebración de las misas y del estipendio de las mismas. Posteriormente, como consecuencia de otro pleito entre el primer capellán y el fiscal eclesiástico se conmutaron las misas de cantadas a rezadas a petición del propio capellán, quien, de esta forma, vio considerablemente aumentadas sus rentas. Otro pleito le enfrentaría de nuevo al mismo capellán con el cabildo, precisamente por la conmutación de misas lograda en el tribunal eclesiástico. El interés del capellán entró en conflicto no sólo con el del cabildo sino también con el del fundador, e incluso con el de la Iglesia por enaltecer el culto y dar solemnidad a los actos litúrgicos. De lo que no hay ninguna duda es de que el interés económico de las

distintas partes en conflicto estuvo desde el principio por encima del interés del fundador, preocupado por la salvación de su alma y la de sus padres, y del de la Iglesia por el mantenimiento y el enaltecimiento del culto.

Cuando la tensión entre los intereses de la familia y los de la Iglesia alcanzó su máximo grado fue cuando el patrono nombró como sucesora en la capellanía a la hermana del primer capellán. El obispo, defendiendo el interés de la Iglesia por no perder un patrimonio y un beneficio eclesiástico, y reivindicando la independencia de la jurisdicción eclesiástica, se opuso frontalmente a los intereses particulares. Pero éstos, desde el primer momento, encontraron un firme apoyo en la monarquía.

En relación con la capellanía fundada por Azcarate, al igual que en muchos otros casos, la pretendida alianza del trono y el altar se trocó en alianza del trono y el interés particular. El altar había sido siempre un buen aliado tanto de la monarquía como de la nobleza y de las pequeñas oligarquías. Pero las alianzas no las determinaban sólo las ideologías y las tradiciones, sino, sobre todo, las necesidades y los intereses. Llama la atención poderosamente el interés de las más altas instancias de la monarquía por un caso aparentemente sin importancia y su firme defensa de los mezquinos intereses de unos pequeños hidalgos guipuzcoanos frente al interés más general de la Iglesia. El apoyo que la monarquía absoluta de Fernando VII prestaba a las pequeñas oligarquías vascongadas y a sus intereses ponía en evidencia su propia debilidad.

Pero no sólo la monarquía absoluta, también el Estado liberal fue un seguro protector y garante de los intereses particulares de las familias. La legislación específica sobre capellanías colativas de llamamiento de familias fue diseñada con el objetivo de asegurar a éstas la posesión de unos bienes que, aunque habían pasado al patrimonio de la Iglesia, se consideraban parte indisociable del patrimonio de las familias.

Así pues, Los intereses de las familias que integraban las elites sociales siempre estuvieron a salvo. La monarquía absoluta se había apoyado en ellos para ejercer su poder y el nuevo Estado liberal, fundamentó y justificó todo su poder en su defensa a ultranza. La concesión de mercedes y el amparo ofrecido por la Corona fue sustituido por una compleja legislación que tenía como uno de sus principales objetivos la defensa del "sagrado" derecho de propiedad.

En cuanto a la conversión de los bienes de las capellanías colativas familiares en propiedad libre de las familias, los objetivos pretendidos con la legislación de los gobiernos liberales durante la primera mitad del siglo XIX no distaron demasiado de lo que se venía haciendo anteriormente, ni de lo que pretendieron Miguel Antonio de Jauregui y su mujer, María Bárbara de Aguirre, apoyados por las más altas instituciones de la monarquía absoluta. El nuevo orden político y jurídico que se estaba diseñando ofrecía a las familias notables nuevas formas de poner en práctica las mismas estrategias de siempre en defensa de sus propios intereses.

Sin embargo, en el pleito estudiado en este trabajo, hubo un momento en el que la razón y una interpretación literal de la legalidad vigente se situó por encima de los intereses particulares. Aunque pudiera parecer paradójico, fue precisamente una institución de la monarquía constitucional de la época del Trienio Liberal, el Consejo de Estado, la que elaboró un dictamen, radicalmente opuesto al que había emitido anteriormente la Cámara de Castilla, en el que se defendían las tesis del obispo y la competencia en el asunto de la jurisdicción eclesiástica. El idealismo de algunos liberales convencidos puede explicar una actuación en la que destaca la honestidad de una resolución que contrasta con la orientación de las medidas legislativas adoptadas posteriormente.

Por otro lado, la facilidad con la que durante los años del Trienio los poseedores de la capellanía fundada en Placencia por Juan Antonio de Azcarate, se acogieron a la legislación vigente solicitando la posesión de sus bienes en clase de seculares y libres, muestra su capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias. Su reclamación fue favorablemente atendida por unas instituciones con las que también estaban bien relacionados, pero de nuevo, tras la caída del sistema constitucional, quienes se habían acogido a la legislación de las Cortes constitucionales, culparían de la situación en la que se encontraba su pleito con el obispo a los desórdenes producidos por la etapa dominada por "los revolucionarios", y acudirían de nuevo a ponerse bajo el amparo de la Corona. Tampoco hay que olvidar que estos mismos poseedores de la capellanía habían obtenido la presentación a la misma del Consejo Municipal creado en Placencia durante la época del bonapartista Gobierno de Vizcaya. La versatilidad y facilidad de adaptación a los vaivenes políticos era una característica fundamental de la estrategia de quienes en todo momento supieron aliarse con quien mejor podía defender sus intereses.

Casi cien años después de la fundación de la capellanía, ésta continuaba ofreciendo a los descendientes del fundador una posibilidad de ascenso social, una forma de vida decente o una mejora de sus rentas. Hay que tener en cuenta que los aspirantes a la misma, a pesar de los grandes cambios legislativos y del nuevo marco político e institucional, se valieron para justificar sus derechos de los mismos argumentos utilizados cincuenta años antes, entre ellos la voluntad del fundador y la salvación de su alma.

No obstante, la primacía del interés económico y material de la familia sobre el espiritual y religioso de la Iglesia fue una constante a lo largo de los casi cien años de existencia de la capellanía estudiados en este trabajo. Las rentas que ésta proporcionó a quienes la ocuparon les posibilitaron el acceso a una carrera, la eclesiástica en el caso de José María de Aguirre y la jurídica en el de José Cruz de Azcaray, por medio de la cual se aseguraron una posición de cierta influencia social, útil no sólo para ellos sino para el resto de su familia. A María Bárbara de Aguirre y a su marido les proveyó de un recurso adicional con el que mantener su posicionamiento en las redes de intercambio y de solidaridad y con el que mejorar su prestigio social. Es evidente que fue la defensa de estos intereses la única causa que motivó los constantes pleitos en los que se vieron involucrados aspirantes y poseedores de la misma.

De la forma en la que se resolvieron estos pleitos se deduce que el interés particular de quienes, hallándose bien posicionados en las tramas que configuraban las redes de solidaridad, tenían la suficiente fuerza y autoridad para defenderlo frente a los grandes poderes representados por la Iglesia y por la Corona, había sido y continuaba siendo durante el siglo XIX el que condicionaba las alianzas, las reformas, la legislación y en general la resolución de todo tipo de conflictos.

A nivel local conseguir el apoyo de Ayuntamientos y cabildos eclesiásticos era fácil para las familias que integraban los entramados de poder local y provincial, pues se encontraban sometidos a su control. El sometimiento de la Iglesia como institución a sus intereses era más complejo y en ocasiones se generaban importantes tensiones que generalmente se resolvían en beneficio de quienes se hallaban bien situados en las redes de poder. La legislación liberal facilitó el sometimiento de la Iglesia a los intereses de los propietarios, de tal forma que los intereses de la Iglesia y del Estado se subordinaban a la consecución de los de quienes utilizaban sus mecanismos.

No cabe duda de que el nuevo marco institucional y jurídico instaurado durante el siglo XIX condicionó notablemente las estrategias de los grupos dominantes y de las elites de poder, pero no se advierte una radical transformación de las mismas, al menos a nivel local. La desaparición de los privilegios estamentales y de las formas de propiedad consideradas como características del Antiguo Régimen tampoco fue decisiva para la transformación de la elites dominantes, ya que su poder estaba suficientemente arraigado y los mecanismos de su perpetuación y reproducción se adaptaron fácilmente a la nueva situación. El estatuto jurídico perdió el valor teórico que había tenido para la reproducción del sistema social, pero los principales mecanismos por medio de los cuales se aseguraba ésta continuaron siendo los mismos: la riqueza, el prestigio, la posesión de cargos públicos, y la participación de forma directa o indirecta en los principales órganos de poder local o de la Iglesia, aunque esta última fuera perdiendo la importancia que había tenido, especialmente en los ámbitos urbanos.

El inmenso poder que había tenido la Iglesia fue transformándose paulatinamente, pero continuó siendo un factor decisivo como parte de las estrategias de los grupos sociales que siguieron obteniendo importantes ventajas de su función legitimadora y del desmantelamiento de su patrimonio. A nivel local, al menos en las pequeñas poblaciones, la Iglesia mantuvo su control sobre todos los aspectos de la vida y sobre la sociedad, y en torno a ella se siguieron tejiendo las redes del poder y de la influencia de hecho, reforzándose incluso, como una forma de reacción contra lo que se consideraban injustos ataques contra la religión y contra la Iglesia.

Como conclusión, se puede afirmar, en primer lugar, que en el periodo de tiempo que transcurre entre el último tercio del siglo XVIII y la mitad del siglo XIX, a pesar de los importantes cambios políticos y de la abundante producción legislativa relacionada con la Iglesia, las pequeñas oligarquías vascongadas, tal como lo hicieron los descendientes de Juan Antonio de Azcarate hasta bien avanzado el siglo XIX, continuaron utilizando los resortes que el poder de la Iglesia ponía en sus manos para ampliar su red de relaciones y por tanto su influjo social, y para aumentar su patrimonio.

En segundo lugar, se ha podido comprobar que estas mismas oligarquías encontraron el apoyo tanto de la monarquía absoluta como del Estado liberal. La transformación del sistema político e institucional que fue consecuencia de la llamada revolución liberal no entrañó cambios sustanciales en la configuración de las redes a través de las cuales se ejercía a nivel local el poder de hecho. Estas redes estaban integradas por determinadas familias cuyos intereses habían sido defendidos por la monarquía absoluta con el fin de conseguir su apoyo y que en la nueva situación constituían el elemento fundamental en el que se sustentaba el nuevo sistema político. De hecho, fue precisamente con el régimen político liberal cuando las pequeñas oligarquías locales consolidaron sus derechos sobre una gran parte del patrimonio de la Iglesia.

En tercer lugar, ha quedado demostrado que las estrategias que utilizaron para perpetuarse en el poder y para defender sus propios intereses no variaron en lo fundamental sino que fueron objeto de adaptaciones coyunturales, como queda patente en la facilidad con la que el matrimonio Jauregui supo adaptarse a las variables circunstancias que fueron consecuencia de los constantes vaivenes de la política durante los años del reinado de Fernando VII. Por otra parte, es evidente que el desmantelamiento del patrimonio de la Iglesia, que se produjo durante el siglo XIX como consecuencia de las medidas desamortizadoras, no constituyó en todos los casos una ruptura con respecto al pasado, pues este patrimonio, muy frecuentemente y desde hacía mucho tiempo, ya venía siendo utilizado para fines particulares y para el mantenimiento del poder de las grandes familias. Un capital que como consecuencia de la fundación que mandó hacer Juan Antonio de Azcarate había pasado a formar parte del patrimonio de la Iglesia, fue reivindicado con éxito por sus descendientes quienes disfrutaron de sus rentas como si de un patrimonio familiar se tratara. Habitualmente, cuando los intereses de la Iglesia entraban en conflicto con los de las familias, eran estos últimos los que solían salir triunfantes.

Por último, es preciso hacer notar que el férreo control de la Iglesia y de sus instituciones tampoco fue una pretensión novedosa introducida por los gobiernos liberales del siglo XIX. Como se ha podido comprobar en este trabajo, las limitaciones impuestas por el Patronato Real y por los patronatos particulares a la actuación de los obispos en determinados ámbitos tenían su origen en tiempos remotos y de ellas se servían tanto la monarquía como los poderes intermedios para evitar la intromisión de la Iglesia en los asuntos en los que estaban en juego sus intereses. La intromisión del obispo de Calahorra en la capellanía fundada por Azcarate fue denunciada unánimemente por quienes disfrutaban de sus rentas, por el Ayuntamiento de la villa como patrono, y por la Cámara de Castilla. Todos ellos acusaron al obispo de haberse excedido en sus funciones, que deberían haberse limitado al cumplimiento de lo ordenado por la Cámara de Castilla, es decir, a la inspección de las iglesias de patronato real exclusivamente en lo relativo a lo temporal.

En resumen: el poder que proporcionaba la Iglesia fue un factor fundamental en las estrategias de ascenso y de reproducción social de los grupos de poder intermedios formados por las pequeñas oligarquías locales, tanto para legitimarse como para

afianzar su situación. Esto fue así en el modelo político de la monarquía absoluta y continuó siéndolo en el del Estado liberal, puesto que las elites de poder y sus intereses, aunque de distinta forma, eran la base en la que se apoyaban tanto el sistema político absolutista como el liberal, constatándose que sus estrategias para perpetuarse y reproducirse se adaptaban fácilmente a las cambiantes circunstancias políticas y legislativas. Ni la defensa a ultranza del interés particular de las pequeñas y medianas oligarquías fue exclusiva del sistema liberal, ni la utilización de los resortes que proporcionaba el poder de la Iglesia desapareció con el nuevo sistema político. La lógica con la que funcionaban a nivel local las redes de poder y los mecanismos de sociabilidad utilizados, apenas cambiaron con el advenimiento del Estado liberal, pues las estrategias basadas en el parentesco, la fidelidad personal, el clientelismo y el patronazgo, en la práctica siguieron siendo las mismas.

## Fuentes impresas

*Colección de leyes, decretos y declaraciones de las Cortes, 1814-1886*, Madrid, 1816-1887.

*Colección de los Decretos y Órdenes Generales de las Cortes de 1820-1823*, Madrid Imprenta Nacional, 1821-1823.

*Defensa de las Cortes, y de las regalías de la Nación, en contestación a la instrucción pastoral de los seis reverendos refugiados en Mallorca*, Cádiz, 1813.

*Diarios de Sesiones de Cortes*, Madrid, Congreso de Diputados, 2002.

*Exposición que dirigen a las Cortes varios partícipes legos en diezmos en reclamación del proyecto de ley... sobre el modo de ocurrir a la dotación del culto y del clero*, Madrid, Imp. Norberto Llorenci, 1839.

*Exposiciones y proyecto de ley sobre el modo de ocurrir a la dotación del culto y del clero e indemnizar a los partícipes legos y al Estado del importe de sus percepciones en diezmos*, Madrid, Imprenta Nacional, 1839.

*Extractos de las Juntas Generales celebradas por la RSBAP en la ciudad de Vitoria por Julio de 1792*, R.S.B.A.P., 1792.

*Fueros, Franquezas, y Libertades*, de Vizcaya, Bilbao, Antonio de Zafra, 1704.

*Resumen de Actas de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País en sus Juntas Generales*, San Sebastián, 1985.

ABAD Y QUEIPO, Manuel, "Representación a nombre de los labradores y comerciantes de Valladolid de Michoacan en que se demuestran con claridad los gravísimos inconvenientes de que se ejecute en las Américas la Real Cédula de 26 de Diciembre de 1804, sobre enajenación de bienes raíces y cobro de capitales de capellanías y obras pías para la consolidación de vales", 1805, en MORA, J.M.L., *Obras sueltas*, Mexico, 1963.

AGUILERA Y VELASCO, Alberto, *Colección de Códigos y Leyes de España*, Madrid, 1866.

AGUIRIANO, Francisco Mateo, "Informe a las Cortes de Cádiz del Obispo de Calahorra Don Francisco Mateo Aguiriano y Gómez", en MUTILOA POZA, J. M., *Desamortización, fueros y pronunciamientos en Alava en el siglo XIX*, Apéndice XXI, Vitoria, Diputación Foral de Álava, 1975.

AGUIRIANO, Francisco Mateo, "Pastoral de 26 de setiembre de 1794", en MUTILOA POZA, J.M., *Desamortización, fueros y pronunciamientos en Alava en el siglo XIX*, Apéndice XXI, Vitoria, Diputación Foral de Álava, 1975.

AGUIRRE, Joaquín, *Curso de disciplina eclesiástica general y particular de España*, Madrid, 1858.

ALONSO PERUJO, N. y PÉREZ ANGULO, J., *Diccionario de ciencias eclesiásticas*, Barcelona, 1885.

ALVARADO, Francisco, *Carta crítica de un filósofo Rancio que impugna a la española antigua y no a la francesa, el discurso del Sr. diputado Argüelles sobre contribución de diezmos y los dictámenes de otros varios diputados que distraen a las Cortes de su principal objeto*, Isla de León, En la oficina de Perín, 1811.

ALVARADO, Francisco, *Cartas críticas que escribió el Rmo. Padre maestro Fr. Francisco Alvarado o sea el Filósofo Rancio*, Madrid, 1824.

- ALVAREZ Y GÓMEZ, Mariano, *Manual de capellanías y pías memorias*, Vitoria, 1903.
- ÁLVAREZ Y MENDIZABAL, Juan, *Memoria sobre reforma del sistema actual de diezmos. Leída a las Cortes por D. Juan Álvarez Mendizabal el 21 de febrero de 1837*, Madrid, Imp. de Miguel de Burgos, 1837.
- ALZOG, Juan, *Historia eclesiástica de España*, 1859.
- AMAT, Félix, *Observaciones pacíficas sobre la potestad eclesiástica, dadas a luz por D. Macario Padua Melato*, Barcelona, 1817-1822.
- ANGULO LAGUNA, Diego, *Derecho privado de Vizcaya*, Madrid, 1903.
- ANTEQUERA, J. M., *La Desamortización eclesiástica*, Madrid, 1885.
- ARIAS Y TEYXEIRO, Veremundo, *Carta pastoral del ilustrísimo señor D. F. Veremundo Arias Teyxeiro, Obispo de Pamplona, al clero y pueblo de su Diócesis*, Pamplona, Joaquín Domingo, 1814.
- ARRIQUIBAR, Nicolás de, *Recreación política. Reflexiones sobre el amigo de los hombres en su tratado de población, considerado con respecto a nuestros intereses*, Vitoria, RSBAP, 1779.
- ARTIÑANO Y ZURICALDAY, Arístides de, *El Señorío de Bizcaya, histórico y foral*, Barcelona, 1885.
- AZCÁRATE, G., *Historia del derecho de propiedad*, Madrid, 1883.
- AZPILCUETA NAVARRO, Martín de, *Tractado de las rentas de los beneficios Ecclesiasticos: para saber en que se han de gastar, y a quien se han de dar, y dexar*, Valladolid, 1566.
- BALMES, Jaime, *Observaciones sociales, políticas y económicas sobre los bienes del clero*, Obras Completas, tomo IV, p. 39-168, Barcelona, 1925.
- BAQUERO ALMANSA, A., *Hijos ilustres de la Provincia de Albacete*, Madrid, A. Pérez Dubrull, 1884.
- BELAUSTEGUIGOITIA, Ramón de, *La cuestión de la tierra en el País Vasco*, Bilbao, Grijelmo, 1918.
- BENÍTEZ DE LUGO, Félix, *Apuntes sobre Capellanías*, Madrid, 1907.
- BRAVO Y TUDELA, Antonio, *Derecho vigente sobre capellanías colativas de sangre, beneficios y legados píos, patronatos laicales y fundaciones de la propia índole*, Madrid, 1879.
- BRAVO Y TUDELA, Antonio; FRANCO Y ORTIZ, José María, *Novísima legislación comentada sobre Capellanías colativas de sangre, y fundaciones análogas*, Madrid, Imprenta de Miguel Campo Redondo, 1868.
- CABARRUS, Francisco, *Cartas sobre los obstáculos que la naturaleza, la opinión y las leyes oponen a la felicidad pública*, Madrid, Ferreira, 1833.
- CADENA Y ELETA, J., *Tratado teórico-práctico de procedimientos eclesiásticos en materia civil y criminal*, Madrid, 1894.
- CAMPOS Y PULIDO, José M., *Las capellanías colativas en España*, Madrid, Hijos de Reus, 1910.
- CANGA ARGÜELLES, José, *Diccionario de Hacienda*, Madrid, 1833-1834.
- CAPARROS, Juan Julián, *Disciplina eclesiástica, general del Oriente y Occidente, particular de España, y última del Santo Concilio de Trento*, Madrid, Gómez Fuentenebro y Compañía, 1807.

CÁRDENAS, Francisco de, *Ensayo sobre la historia de la propiedad territorial en España*, Madrid, 1873.

CARRASCO, Francisco, *Representación hecha al Rey Nuestro Sr. por el Ilmo. Sr. D. Francisco Carrasco, Marqués de la Corona, del Consejo de Castilla y Fiscal en él de Hacienda, sobre amortización, o bien sea poner límite a las adquisiciones de bienes raíces por las manos muertas, que de Real orden fue remitida al Consejo pleno de Castilla y Dictamen dado en calidad de tal Fiscal en el año de 1764...*, Madrid, Imp. de Cruz González, 1835.

CARRASCO, Francisco, *Suplemento a la respuesta dada por el fiscal de Hacienda sobre que se ponga límite a las adquisiciones de manos muertas*, Madrid. 1765.

CAVALARIO, Domingo, *Instituciones del Derecho Canónico*, traducción de Juan Tejada y Ramiro, París, Vicente Salvá, 1846.

CIRER Y ZERDA, Miguel, *Propugnáculo histórico-canónico-político-legal que descubre los fondos de la más preciosa piedra de la Corona de España, y comprueba con sus antiguos monumentos, y Memorias el incontrastable derecho de sus Monarcas, a la protección de las Iglesias de su Monarquía, y al Universal Patronato de los Beneficios de ellas. Derivado de la Catholica piedad de sus primeros gloriosos Reyes, en fundarlas: De su gloriosa liberalidad, en enriquecerlas: De su invencible valor, y poder, en restaurarlas: De su vigilante providencia, en defenderlas: Y de su Real solicitud, en conservarlas. Elucidación canónico-legal, de la Ley XVIII. Título V. Partita I, y sus Concordantes. Sobre el Real Patronato de la Corona de España. Consagrale a la Augusta, Catholica Magestad del Rey Nuestro Señor Don Phelipe Quinto, por mano del Excelentissimo Señor Don Joseph Patiño, Cavallero de la Insigne Orden del Toyson de Oro, Comendador de Alcuesca, en la de Santiago, del Consejo de Estado de su Magestad, &c.*, Madrid, 1736.

CORONAS GONZÁLEZ, Santos M., *El libro de las leyes del siglo XVIII. Colección de impresos legales y otros papeles del Consejo de Castilla (1708-1781) mandada formar por Pedro Rodríguez de Campomanes*, Madrid, B.O.E., 1996.

D. F. C., *SEMINARIO DE VERGARA: Por el inspector que fue de dicho establecimiento D. F. C. Dedicado a los maestros inspectores*, Coruña, 1821.

Despacho de Gracia y Justicia Secretaría, *Memoria sobre el estado de los negocios concernientes a la Secretaría del Despacho de Gracia y Justicia en principios de Marzo de 1822*, Madrid, Imp. de Alban y Cía., 1822.

DIEGO DE NOCHE (seud.), *Las cuentas de Mendezabal; los diezmos, la revolución, y otros tratados tan graves como amenos: Opúsculo político-filosófico-moral. Dedicado al Sargento García por Don Diego de Noche*, Madrid, Imp. de la Compañía tipográfica, 1837.

DÍEZ DE LUCO, Juan Bernal, *Aviso de curas*, Alcalá, 1543, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1996.

ECHEGARAY, Carmelo de, *Compendio de las Instituciones Forales de Guipúzcoa*, San Sebastián, 1924.

EGAÑA, B. A., *Instituciones y colecciones histórico-legales pertenecientes al gobierno municipal, fueros, privilegios y exempciones de la M.N. y M.L. provincia de Guipúzcoa*, San Sebastián, 1783.

ESCOSURA, Antonio de la, *Juicio crítico del feudalismo en España*, Madrid, 1856.

ESCRICHE, Joaquín, *Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia*, Madrid, 1874.

FEBRERO, Josef, *Librería de escribanos e instrucción jurídica theorico práctica de principiantes. Parte Primera dividida en tres tomos. Trata de testamentos y contratos*, Madrid, Viuda e Hijo de Marín, 1797.

FORT, Carlos Ramón, "Tratado de los obispos españoles titulares de iglesias in partibus infidelium, o auxiliares en las de España", en *España Sagrada*, tomo LI, Madrid, 1879.

GAMAZO, Germán, *Origen y naturaleza del Patronato Eclesiástico*, Madrid, 1865.

GARCÍA DE SALAZAR, Lope, "Titulo de como este Rey Don Enrique gano del Santo Padre los Veneficios a las Yglesias para los prelados", en *Las Bienandanzas e Fortunas*, Echévarri, Amigos del Libro Vasco, 1985.

GARCÍA DE SALAZAR, Lope, "Titulo que abla de los monesterios que posen los caballeros y legos de Bizcaya", en *Las Bienandanzas e Fortunas*, Echévarri, Amigos del Libro Vasco, 1985.

GARCÍA ORMAECHEA, Rafael, *Supervivencias feudales en España. Estudio de legislación y jurisprudencia sobre Señoríos*, Madrid, Reus, 1932.

GARCÍA VILLADA, Zacarías, *Historia eclesiástica de España*, Madrid, Compañía General de Artes Gráficas, 1932-1936.

GARROTE MARTÍN, Ángel, *El Derecho de patronato en la presentación a beneficios eclesiásticos según las leyes canónicas y el derecho particular de España*, Lugo, La voz de la verdad, 1921.

GOLMAYO, Pedro Benito, *Instituciones del Derecho Canónico*, Madrid, Imp. de D. F. Sánchez, 1859.

GÓMEZ MORÁN, Luis, *La mujer en la historia y en la legislación*, Madrid, 1900.

GÓMEZ ZAMORA, M., *Regio patronato español e indiano*, Madrid, 1897.

GÓMEZ-SALAZAR, Francisco, *Instituciones de Derecho Canónico*, León, Imp. de Herederos de Miñón, 1891.

GÓMEZ-SALAZAR, Francisco, *Lecciones de disciplina eclesiástica*, Madrid, 1874.

GÓMEZ-SALAZAR, Francisco y FUENTE, Vicente de la, *Tratado teórico-práctico de procedimientos eclesiásticos*, Madrid, 1868.

GONZÁLEZ DE CASTILLO, Pedro, *Constituciones Synodales del Obispado de Calahorra y La Calzada. Hechas y ordenadas por su Señoría del Señor don Pedro Gonçalez de Castillo, Obispo de Calahorra y la Calçada, Predicador de Su Magestad, y de su Consejo en el Synodo Diocesano que se celebrou en la ciudad de Logroño en el año de mil y seyscientos y veynte*, Logroño 1622.

GONZÁLEZ, Tomás, *Colección de cédulas, cartas-patentes, provisiones, reales órdenes y otros documentos concernientes á las Provincias Vascongadas*, Madrid, 1829-1833.

GOROSABEL, Pablo, *Diccionario histórico-geográfico-descriptivo de los pueblos, valles, partidos, alcaldías y uniones de Guipúzcoa*, Tolosa, Imp. De Pedro Gurruchaga, 1862.

GUERRA, Juan Carlos de, *Ensayo de un padrón histórico de Guipúzcoa, según el orden de sus familias pobladoras*, San Sebastián, Joaquín Muñoz-Baroja, 1928.

HERREZUELO, Miguel, *Disertación teológica-jurídica en defensa del precepto que obliga a todos los fieles cristianos a pagar diezmos y primicias a la Iglesia de Dios y del derecho de propiedad que el clero secular y regular tiene en los bienes de sus iglesias y monasterios, y de la notoria justicia que le asiste, a que el Gobierno le ampare y conserve en posesión de ellos*, Madrid, Francisco Martínez Dávila, 1820.

HONTALBA Y ARZE, Pedro, *Dictamen en justicia sobre la jurisdiccion de los Señores Reyes de Castilla, y su Supremo Consejo de la Camara, para el conocimiento de todos los negocios*

*pertenecientes al Real Patronato de la Corona... / escribe Don Pedro de Hontalba y Arze...*, Madrid, Oficina de Diego Miguel de Peralta, 1738.

IBAÑEZ, Domingo, "De las capellanías laicales", en *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, t. XVII (1860), pp.510-516.

INGUANZO, Pedro, *Carta sobre el dominio sagrado de la Iglesia en sus bienes temporales*, Madrid, 1820.

LABAYRU, Estanislao Jaime de, *Historia General del Señorío de Bizcaya*, Ed. Facsimil: Bilbao, La Gran Enciclopedia Vasca, 1967.

LAMBERTINI, C., DE CURTE, R., DE CITIDINIS, P., NICOLAI, I., *Tractatus de iure patronatus*, Lugduni, 1580.

LANDAZURI Y ROMARATE, Joaquin Josef de, *Historia eclesiástica de la M. N. y M. L. Provincia de Alava. Origen, extension, y límites del Obispado Alavense, con expresion individual de los Prelados de esta Sede, y de su union con la de Calahorra*, Pamplona, Imprenta de Miguel de Cosculluela, 1797.

LANGE, *La nouvelle pratique civile, criminelle et beneficiale, ou le nouveau praticien francois*, Cologne, 1731.

LEPE, Pedro de, *Constituciones Synodales antiguas, y modernas del Obispado de Calahorra y La Calzada. Reconocidas, reformadas y aumentadas novissimamente por el Ilustrissimo Señor Don Pedro de Lepe Obispo deste Obispado, del Consejo de Su Magestad, &c, en el Synodo Diocesano, que celebro en la ciudad de Logroño, en el año de mil y seiscientos y noventa y ocho*, Madrid, 1700.

LLORENTE, Juan Antonio, Discursos histórico-canónicos sobre los Beneficios Patrimoniales de las Iglesias Parroquiales del Obispado de Calahorra y la Calzada, Pamplona, 1789.

LLORENTE, Juan Antonio, *Noticia biográfica de D. Juan Antonio Llorente, o Memorias para la historia de su vida escritas por él mismo*, Paris, 1818.

LLORENTE, Juan Antonio, *Apología católica del proyecto de constitución religiosa*, Madrid, 1822.

MANSO, Pedro, *Constituciones Synodales del Obispado de Calahorra y La Calzada. Hechas y ordenadas por el Señor Obispo Don Pedro Manso, Obispo del dicho Obispado en el Synodo Diocesano que se celebró en la ciudad de Logroño y se acabó en el año de 1601...*, Logroño, 1602.

MARTÍN, Andrés (Presbítero y párroco de Ustároz, Navarra), *Historia de la guerra de la división real de Navarra, contra el intruso sistema, llamado constitucional, y su gobierno revolucionario*, Pamplona, Imprenta de Javier Gadea, 1825.

MARTÍNEZ ALCUBILLA, Marcelo, *Diccionario de la Administración española*, Madrid, 1892.

MERINO, J. A. y CARRASCO, B. A., *Colección eclesiástica española comprensiva de los Breves de S.S., notas del R. Nuncio, Representaciones de los SS. Obispos a las Cortes, Pastorales, Edictos, &c. Con otros documentos relativos a las innovaciones hechas por los constitucionales en materias eclesiásticas desde el 7 de marzo de 1820*, Madrid, Imprenta de E. Aguado, 1823.

MOYA TORRES Y VELASCO, Francisco Máximo de, *Manifiesto Universal de los males envejecidos que España padece, y de las causas de que nacen, y remedios que a cada uno en su clase corresponde, sin que tenga nota de arbitrio, antes sí para que se conozca el daño de los que se establecieron...*, Madrid, 1727, ed. Facsímil de Antonio Domínguez Ortiz: Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1992.

MUNIZ, T., *Procedimientos eclesiásticos*, Sevilla, 1919.

MUNIZ, T., *Derecho parroquial según el codex iuris canonici*, Madrid, 1918.

OLIDEN, Gaspar, *Tratado de diálogos del Purgatorio*, Alcalá de Henares, 1732.

PALAFIX Y MENDOZA, Juan (Obispo de Osma), *Carta pastoral de la devida paga de los diezmos, y primicias. Ofrecela al aprovechamiento espiritual de los fieles del Obispado de Osma, el Ilustrísimo y Reuerendísimo Señor Don Juan de Palafox y Mendoza, Obispo del Burgo de Osma, y del Consejo de su Magestad. Dada en la villa del Burgo a ocho de Enero de mil y seiscientos y cincuenta y siete*, Madrid, María de Quiñones, 1661.

PALAFIX Y MENDOZA, Juan (Obispo de Osma), *Luz a los vivos y escarmiento en los muertos*, Madrid, María de Quiñones 1661.

PÉREZ DE LARA, Ildefonsus, *De aniversariis et capellaniis. Libri duo*, Matriti, 1608.

PITILLAS Y RUESGA, Andrés de, *Tratado de medias annatas de los Beneficios, Prestamos, y Capellanías, &c.*, Alcalá, 1698.

PLANA, A., *Discurso sobre abolición de diezmos y primicias propuesta en las Cortes Ordinarias*, Zaragoza, Imp. de Luis de Cueto, 1820.

POSTÍUS Y SALA, Juan, *Apología de los bienes del clero español según el Dr. D. Jaime Balmes*, Pbro., VICH, 1925.

POSTÍUS Y SALA, Juan, *El Código Canónico aplicado a España*, Madrid, 1926.

Real Academia de la Historia, *Diccionario Geográfico-Histórico de España*, Madrid, 1802. Ed. Facsimil: Bilbao, La Gran Enciclopedia Vasca, 1968.

RÍOS, Juan Miguel de los, *Código español del reinado intruso de José Napoleón Bonaparte, o sea colección de sus más importantes leyes...*, Madrid, 1845.

RISCO, Manuel, *España Sagrada. Tomo XXXIII. Antigüedades civiles y eclesiásticas de Calahorra*, Madrid, 1781.

RODRÍGUEZ DE CAMPOMANES, Pedro, *Tratado de la regalía de amortización*, Madrid, 1765.

RODRÍGUEZ DE CAMPOMANES, Pedro, *Tratado de la regalía de España, o sea el derecho Real de nombrar a los beneficios eclesiásticos de toda España y guarda de sus iglesias vacantes*, Oviedo, Junta General del Principado de Asturias, 1994.

ROJAS Y SANDOVAL, Bernardo de, *Constituciones Synodales del Obispado de Pamplona. Copiladas, hechas, y ordenadas por Don Bernardo de Rojas, y Sandoual, Obispo de Pamplona, del Consejo de Su Magestad, &c. En la Synodo que celebros en su Iglesia Cathedral, de la dicha ciudad, en el mes de Agosto, de MDXC años*, Pamplona, 1591.

ROMERO, Cayetano, *Observaciones sobre la reforma del sistema actual de diezmos*, Madrid, Imp. de Julián Viana, 1837.

ROS, M., *Historia de las rentas de la Iglesia de España*, Madrid, 1793.

RUIZ DE VELASCO, Francisco, *Método práctico para los párrocos. Reclamación de memorias-aniversarios y reivindicaciones de bienes de capellanías*, Madrid, 1909.

SALMON, P. Maestro, del orden de San Agustín, *Resumen histórico de la Revolución de España. Año de 1808*, Madrid, 1820.

SÁNCHEZ, Santos, *Coleccion de todas las pragmáticas, cédulas, provisiones, circulares, autos acordados, vandos y otras providencias publicadas en el actual reynado del Señor Don Carlos IV*, Madrid, 1794-1799.

SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Claudio, *La reforma agraria y la experiencia histórica*, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1932.

SEMPERE, Juan, *Historia de las rentas eclesiásticas de España*, Madrid, 1822.

SEMPERE, Juan, *Historia de los vínculos y mayorazgos*, Madrid, 1805.

SIERRA Y PAMBLEY, Felipe de, *Memoria leída a las Cortes en la sesión pública de 5 de marzo de 1822 por el Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda*, Madrid, Imprenta Nacional 1822.

TEJADA Y RAMIRO, Juan, *Colección de cánones y de todos los concilios de la Iglesia española*, Madrid, 1855.

Un Prebendado de estos Reinos, *Abusos introducidos en la disciplina de la Iglesia, y potestad de los príncipes en su corrección que a la soberanía de la nación en sus Cortes Generales ofrece un Prebendado de estos Reynos*, Madrid, 1813.

Un Presbítero secular, *Historia y origen de las rentas de la Iglesia de España desde su fundación*, Madrid, 1828.

VÉLEZ, Rafael de, *Preservativo contra la irreligión, o los planes de la filosofía contra la religión y el Estado, realizados por la Francia para subyugar la Europa, seguidos por Napoleón en la conquista de España, y dados a luz por algunos de nuestros sabios en perjuicio de nuestra patria*, Valencia, Imprenta de Francisco Brusola, 1813.

VILLANUEVA, Joaquín Lorenzo, *Apuntes sobre el arresto de los vocales de Cortes, egecutado en mayo de 1814*, Madrid, Imprenta de Don Diego García y Campoy, 1820.

VILLANUEVA, Joaquín Lorenzo, *Cartas de Don Roque Leal a un amigo suyo, sobre la representación del Arzobispo de Valencia a las Cortes, fecha a 20 de octubre de 1820*, Madrid, Imprenta que fue de Fuentenebro, 1820.

VILLANUEVA, Joaquín Lorenzo, *Nuevos apuntes del diputado Villanueva sobre las cartas del señor Alcalá Galiano*, Madrid, Mateo Repulles, 1821.

VILLANUEVA, Joaquín Lorenzo, *Viage literario a las Iglesias de España*, 1804.

VINUESA BLÁZQUEZ, José de, *Diezmos de legos en las iglesias de España*, Madrid, 1791.

## Bibliografía

AA. VV., *El Derecho Patrimonial Canónico en España*, Actas de la XIX Semana española de Derecho Canónico, Salamanca del 17 al 21 de septiembre de 1984, Salamanca, 1985.

AA. VV., *El Patrimonio eclesiástico*, Estudios de la III Semana de Derecho Canónico, Salamanca, 1950.

AA. VV., *Fuentes jurídicas medievales del Señorío de Vizcaya. Cuadernos Legales, Capítulos de la Hermandad y Fuero Viejo (1342-1506)*, Fuentes documentales medievales del País Vasco, nº 8, San Sebastián, Eusko-Ikaskuntza, 1986.

AA. VV., *Fuentes jurídicas medievales del Señorío de Vizcaya. Fueros de las Encartaciones, de la Merindad de Durango y de las Ferrerías*, Fuentes documentales medievales del País Vasco, nº 51, San Sebastián, Eusko-Ikaskuntza, 1994.

AA. VV., *Historia del País Vasco (siglo XVIII)*, Bilbao, Univ. de Deusto, 1985.

AA. VV., *I Semana de estudios de Historia eclesiástica del País Vasco*, Vitoria, 1981.

AA. VV., *La historia de la Iglesia en España y el mundo hispano*, Murcia, UCAM-AEDOS, 2001.

AA. VV., *La religiosidad popular. Vida y muerte*, tomo II, Barcelona, Anthropos, 1989.

AA. VV., *Religiosidad y sociedad en el País Vasco (s. XIV - XVI)*, Bilbao, U.P.V., 1994.

ACHÓN INSAUSTI, José Ángel, "La 'Casa Guipúzcoa'. Sobre cómo una comunidad territorial llegó a concebirse en términos domésticos durante el Antiguo Régimen", en IMÍZCOZ, José María (dir.), *Redes familiares y patronazgo. Aproximación al entramado social del País Vasco y Navarra en el Antiguo Régimen (siglos XV-XIX)*, Bilbao, UPV-EHU, 2001, pp. 113-137.

ACOSTA BARROS, L. M., "Las capellanías de la isla de El Hierro durante el Antiguo Régimen", en *Anuario de Estudios Atlánticos*, 38 (1992), pp. 141-198.

AGIRREAZKUENAGA, Joseba, *Vizcaya en el siglo XIX: Las finanzas públicas de un estado emergente*, Vitoria, UPV-EHU, 1987.

AGIRREAZKUENAGA, Joseba (dir.), *Diccionario biográfico de los Diputados Generales, burócratas y patricios de Bizkaia (1800-1876)*, Bilbao, 1995.

AGUILERA SOLER, Carlos, *Fundaciones, capellanías y causas pías en el patrimonio de la Iglesia*, Salamanca, 1979.

AGUINAGALDE, F. Borja de, *Guía para la reconstrucción de familias en Gipuzkoa (s.XV-XIX)*, San Sebastián, Diputación Foral de Gipuzkoa, 1994.

ALDEA VAQUERO, Quintín, MARÍN MARTÍNEZ, Tomás, VIVES GATELL, José (dir.), *Diccionario de Historia eclesiástica de España*, Madrid, Instituto Enrique Flórez CSIC, 1972.

ALDEA VAQUERO, Quintín, "La economía de las iglesias locales en la Edad Media y Moderna", en *Hispania Sacra*, 26 (1973).

ALDEA VAQUERO, Quintín, "Poder y elites en la España de los siglos XV al XVII", en AA. VV., *Política y religión en los albores de la Edad Moderna*, Madrid, Real Academia de la Historia, 1999.

ALEMÁN ILLÁN, Anastasio, *Actitudes colectivas ante la muerte en Murcia durante el siglo XVIII*, Murcia, Biblioteca Virtual Cervantes, 1992.

ALFONSO SANTORIO, P., "Religiosidad y nobleza. La fundación de capellanías. Un ejemplo malagueño", en *Religiosidad popular en España*, San Lorenzo de El Escorial, 1997.

ALONSO GARCÍA, Gregorio, "Ciudadanos católicos: Identidad y conflicto en el nacimiento de la España liberal", en *Congreso Internacional. Orígenes del Liberalismo. Universidad, Política, Economía*, Salamanca, 2002.

ÁLVAREZ ALONSO, Clara, "Un Rey, una Ley, una Religión (Goticismo y Constitución histórica en el debate constitucional gaditano)", en *Historia Constitucional*, num. 1, Oviedo, 2000.

ÁLVAREZ GILA, Óscar, ANGULO MORALES, Alberto (eds.), *Las migraciones vascas en perspectiva histórica (siglos XVI-XX)*, Bilbao, UPV-EHU, 2002.

AMADOR CARRANDI, Florencio, *Catálogo de Genealogías*, Bilbao, 1958.

AMANN, Emile; DUMAS, Auguste, "L'Église au pouvoir des laïques (888-1057)", en FLICHE, A., MARTIN, V. (dir.), *Histoire de l'Église depuis les origines...*, Paris, 1948.

ANDRÉS-GALLEGO, José; PAZOS, Antón M., *La Iglesia en la España contemporánea. 1800-1936*, Madrid, Encuentro, 1999.

ANES, Gonzalo, *El Antiguo Régimen: Los Borbones*, Madrid, 1979.

ANGUERA, Pere, "¿Por qué eran combatientes carlistas?", en *Vasconia*, 26, San Sebastián, Eusko Ikaskuntza, 1998, pp. 111-124.

ARAGUÁS, A., "Puyal y Poveda, Atanasio", en *Diccionario de Historia Eclesiástica de España*, Madrid, Instituto E. Florez CSIC, 1973.

ARAMBURU, J. M. y USUNÁRIZ, J. M., "La emigración de navarros y guipuzcoanos hacia el Nuevo Mundo durante la Edad Moderna. Fuentes y estado de la cuestión", en EIRAS ROEL, A. (ed.), *La emigración española a Ultramar, 1492-1914*, Madrid, Tabapress, 1991.

ARANEGUI, Manuel de, "La nobleza en Guipúzcoa", en *Hidalguía*, nº 38, Enero-Febrero, 1960.

ARDIT, Manuel, *Revolución liberal y revuelta campesina. Un ensayo sobre la desintegración del régimen feudal en el País Valenciano (1793-1840)*, Barcelona, Ariel, 1977.

ARIÈS, Philippe, *La muerte en Occidente*, Barcelona, 1982.

ARIZCUN CELA, A., *Economía y sociedad en un valle pirenaico de Antiguo Régimen. Baztán, 1600-1841*, Pamplona, Departamento de Educación y Cultura, 1988.

ARMILLAS VICENTE, José A. (coord.), *La Guerra de la Independencia. Estudios*, Congreso Internacional celebrado en Zaragoza, 3-5 de diciembre de 1997, Zaragoza, Ministerio de Educación y Cultura, 2001.

ARNABAT MATA, Ramón, "Violencia política y guerra civil durante el Trienio Liberal en Catalunya (1820-1823)", en *Vasconia*, 26 (1998), pp. 49-62.

AROCENA, Fausto, *Diccionario biográfico vasco*, San Sebastián, 1963.

ARPAL POBLADOR, J., *La sociedad tradicional en el País Vasco (El estamento de los hidalgos en Guipúzcoa)*, San Sebastián, L. Haranburu, 1979.

- ARTOLA, Miguel, *La burguesía revolucionaria (1808-1869)*, Madrid, Alianza, 1973.
- ARTOLA, Miguel, *La Hacienda del siglo XIX. Progresistas y moderados*, Madrid, Alianza, 1986.
- ARTOLA, Miguel (dir.), *Diccionario biográfico de historia de España*, Madrid, Alianza, 1995.
- ARTOLA, Miguel (dir.), *Diccionario temático de Historia de España*, Madrid, Alianza, 1995.
- ASTIAZARAIN ACHABAL, M. I., *Arquitectos guipuzcoanos del siglo XVIII: Martín de Zaldúa, José de Lizardi, Sebastián de Lecuona*, San Sebastián, Gobierno Vasco, 1988.
- ASTIAZARAIN ACHABAL, M. I., "El arquitecto Tomás de Jáuregui y el escultor Juan Bautista Mendizábal en el retablo mayor de Zumárraga", en *Boletín de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País*, vol. XLVI-3,4 (1990), pp. 359-397.
- ASTIAZARAIN ACHABAL, M. I., "El pórtico y el cancel de Santa María de Tolosa: Tomás de Jáuregui y José Ignacio de Lavi", en *Archivo Español de Arte*, nº 252 (1990), pp. 633-640.
- ASTIAZARAIN ACHABAL, M. I., "Un ejemplo de arquitectura industrial en la Guipúzcoa del siglo XVIII. La Real Fábrica de Armas de Placencia", en *Cuadernos de Sección. Artes Plásticas y Documentales*, 10 (1992), pp. 9-28.
- ASTIAZARAIN ACHABAL, M. I., *Gipuzkoako erretablistika. I. Tomás de Jauregui*, San Sebastián, Gipuzkoako Foru Aldundia, 1994.
- ASTIGARRAGA, Jesús, *Los Ilustrados vascos. Ideas, instituciones y reformas económicas en España*, Barcelona, Crítica, 2003.
- ASTORGANO ABAJO, Antonio, "El pensamiento regalista de Meléndez Valdés y la legislación josefista sobre las relaciones Iglesia-Estado", en *La Guerra de la Independencia. Estudios*, Congreso Internacional celebrado en Zaragoza, 3-5 de diciembre de 1997, t. II, pp. 689-731, Zaragoza, Ministerio de Educación y Cultura, 2001.
- ATIENZA HERNÁNDEZ, Ignacio, "La nobleza en el Antiguo Régimen: Clase dominante, grupo dirigente", en *Estudios de Historia Social*, 36-37 (1986), pp. 465-495.
- ATIENZA HERNÁNDEZ, Ignacio, "Las mujeres nobles: clase dominante, grupo dominado. Familia y orden social en el Antiguo Régimen", en *Ordenamiento jurídico y realidad social de las mujeres. Actas de las cuartas jornadas de investigación interdisciplinaria*, pp. 149-167, Madrid, Instituto Universitario de Estudios de la Mujer, UAM, 1986.
- ATIENZA HERNÁNDEZ, Ignacio, "Grupos de elite en la España moderna y contemporánea: Ensayos de sociología histórica. Introducción. Unas relaciones tormentosas: Sociología e Historia", en *Revista Internacional de Sociología*, 45 (1987), pp. 7-23.
- ATIENZA HERNÁNDEZ, Ignacio, *Aristocracia, poder y riqueza en la España moderna. La casa de Osuna, siglos XV-XIX*, Madrid, Siglo XXI, 1987.
- ATIENZA HERNÁNDEZ, Ignacio, "Pater familias, señor y patrón: Economía, clientelismo y patronato en el Antiguo Régimen", en PASTOR DE TOGNERI, Reyna (comp.), *Relaciones de poder, de producción y parentesco en la Edad Media y Moderna*, pp. 411-458, Madrid, CSIC, 1990.
- ATIENZA HERNÁNDEZ, Ignacio, "El señor avisado: Programas paternalistas y control social en la Castilla del siglo XVII", en *Manuscr. Revista d'història moderna*, 9 (1991), pp. 155-204.
- ATIENZA HERNÁNDEZ, Ignacio, "Consenso, solidaridad vertical e integración versus violencia en los señoríos castellanos del siglo XVIII y la crisis del Antiguo Régimen", en SARASA SÁNCHEZ, E. y

SERRANO MARTÍN, E. (eds.), *Señorío y Feudalismo en la Península Ibérica (ss. XII-XIX)*, Congreso celebrado en Zaragoza en diciembre de 1989, tomo II, pp. 275-318, Zaragoza, 1993.

ATIENZA HERNÁNDEZ, Ignacio; SIMÓN LÓPEZ, Mina, "Patronazgo Real, rentas, patrimonio y nobleza en los siglos XVI y XVII: Algunas notas para un análisis político y socioeconómico", en *Revista Internacional de Sociología*, 45 (1987), pp. 25-75.

AURELL, Jaume, "La vivencia de la muerte del hombre medieval: entre la precariedad de lo corporal y la durabilidad de lo espiritual", en *Congreso "Milenio: Miedo y Religión"*, Universidad de La Laguna, Tenerife, Febrero-2000, Tenerife, 2000.

AYERBE IRIBAR, María Rosa, "Confluencias de la jurisdicción eclesiástica en las caserías de Hernani en relación con los pagos de diezmos y primicias (1610)", en *Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián*, 18 (1984), pp. 3-38.

AYERBE IRIBAR, M<sup>a</sup> Rosa, *Catálogo del Fondo documental de las MM Canónigas Regulares Lateranenses de San Agustín 1511-1990. Monasterio de Santa Ana. Sorluze-Placencia de las Armas*, Placencia de las Armas, Ayuntamiento de Placencia de las Armas, 1998.

AYMES, J. R., *La guerra de la Independencia en España, 1808-1814*, Madrid, Siglo XXI, 1990.

AZANZA LÓPEZ, José Javier, "La actividad del veedor de obras de cantería en los arciprestazgos vascongados de la diócesis de Pamplona (siglos XVII y XVIII)", en *Ondare. Cuadernos de artes plásticas y monumentales*, 19 (2000), pp. 277-291.

AZCONA, Tarsicio de, *Juan de Castilla, Rector de Salamanca: su doctrina sobre el derecho de los Reyes de España a la presentación de obispos. Edición crítica de la "Conclusión" de Juan de Castilla*, Salamanca, Universidad Pontificia, 1975.

AZCONA, Tarsicio de, "Historia de la Iglesia en el País Vasco. Otoño de la Edad Media: 1378-1516", en *I Semana de estudios de Historia eclesiástica del País Vasco*, p. 69-106 Vitoria 1981.

AZNAR GIL, F. R., *El Derecho patrimonial canónico en España*, Salamanca, 1985.

AZURMENDI, Mikel, *Nombrar, embrujar. Para una historia del sometimiento de la cultura oral en el País Vasco*, Irún, Alberdania, 1993.

BARBASTRO GIL, Luis "El Catolicismo Liberal de Villanueva, Bernabeu y Cortes. Una contribución decisiva al primer Liberalismo (1808-1823)", en *Congreso Internacional. Orígenes del Liberalismo. Universidad, Política, Economía*, Salamanca, 2002.

BARREIRO MALLÓN, B. "El sentido religioso del hombre ante la muerte en el Antiguo Régimen, un estudio sobre archivos parroquiales y testamentos notariales", en *I Jornadas de Metodología aplicada a las Ciencias Históricas*, vol. 5, p. 181-197, Santiago de Compostela, 1973.

BARRIO GOZALO, Maximiliano, "Perfil socio-económico de una elite de poder: Los obispos de Castilla la Vieja, 1600-1840", en *Anthologica Annua*, 1981-1982, (28-29), pp. 71-138.

BARRIO GOZALO, Maximiliano, *Estudio socioeconómico de la Iglesia de Segovia en el siglo XVIII*, Segovia, 1982.

BARRIO GOZALO, Maximiliano, "Los diezmos y primicias en la diócesis de Segovia en el siglo XVIII", en *Cuadernos de Investigación Histórica. Seminario "Cisneros"*, 7 (1983), pp. 133-145.

BARRIO GOZALO, Maximiliano, "La economía de las mitras catalanas en la segunda mitad del siglo XVIII y su relación con el conjunto español. Apuntes para su estudio", en *Pedralbes. Revista d'Història Moderna*, 8-tomo 2 (1988), pp. 447-457.

BARRIO GOZALO, Maximiliano, "El sistema Beneficial en la España del siglo XVIII. Pervivencias y cambios", en *Cuadernos Dieciochistas*, vol. 2 (2001), Salamanca, Universidad de Salamanca, 2001.

BASANTA DE LA RIVA, Alfredo, *Nobiliario documental de Guipúzcoa*, Valladolid, 1944.

BASURTO, Román, "Viajeros, hidalgos y burgueses: Vizcaya y Guipúzcoa en la segunda mitad del siglo XVIII", en *Symbolae Ludovico Mitxelena Septuagenario Oblatae*, Vitoria, 1985.

BAUBEROT, Jean, "La peur de la religion dans la construction de la laïcité française", en *Congreso "Milenio: Miedo y Religión"*, Universidad de La Laguna, Tenerife, Febrero-2000.

BAYLE, C., "Un obispo auxiliar de Madrid en 1790 y un Decreto de José Napoleón en 1810", en *Razón y Fe*, num. 661 (1953), pp. 171-177.

BEJARANO RUBIO, Amparo, "Capellanía fundada por D. Francisco de Onteniente, Arcediano de Lorca (1508)", en *Homenaje al Profesor Juan Torres Fontes*, 1987, pp. 139-149.

BENITO AGUADO, María Teresa, *La sociedad vitoriana en el siglo XVIII: el clero, espectador y protagonista*, Bilbao, 2001.

BERGARA LARRAÑAGA, Elixabete, *Inventario del fondo del Real Seminario de Vergara*, Bergara, 1994.

BERNAL, A. M., "La transición de la feudalidad en España", en SARASA SÁNCHEZ, E. y SERRANO MARTÍN, E. (eds.), *Señorío y Feudalismo en la Península Ibérica (ss. XII-XIX)*, Congreso celebrado en Zaragoza en diciembre de 1989, tomo II, Zaragoza, 1993, pp. 515-530.

BERRUEZO, J., "Guipúzcoa en la Guerra de la Independencia", en *Estudios de la Guerra de la Independencia*, tomo I, Zaragoza, 1964.

BETHENCOURT MASSIEU, Antonio de, "La patrimonialidad de los Beneficios en la Diócesis de Canarias. Fenómeno de larga duración", en *Revista de Historia Canaria*, 176 (1992), pp. 29-62.

BIDAGOR, R., *La Iglesia propia en España. Estudio histórico-canónico*, Roma 1933.

BILBAO, L. M., "El clero y el régimen patronal de las iglesias del País Vasco, en 1616, ante el juicio de su obispo. Glosa aun documento inédito", en *Scriptorium Victoriense*, 29 (1982), pp. 107-126, Vitoria, 1982.

BILBAO, Luis M.; FERNÁNDEZ DE PINEDO, E., "La producción agrícola en el País Vasco (1537-1850)", en *Cuadernos de Sección. Historia-Geografía*, 2 (1983), pp. 87-196.

BLASCO DE IMAZ, Carlos, *Los Fueros. Apuntes guipuzcoanos*, Irún, 1966.

BLOCH, Marc, *La tierra y el campesino. Agricultura y vida rural en los siglos XVII y XVIII*, Barcelona, Crítica, 2002.

BOUZA ÁLVAREZ, J. L., *Religiosidad contrarreformista y cultura simbólica*, Madrid, C.S.I.C., 1990.

BUJANDA, F., *Episcopologio calagurritano*, Calahorra, 1944.

BULDAIN JACA, Blanca, *Régimen político y preparación de Cortes en 1820*, Madrid, Congreso de los Diputados, 1988.

CABREROS DE ANTA, Marcelino, "La enajenación de bienes eclesiásticos", en *Estudios de la III Semana de Derecho Canónico*, pp. 155-190, Salamanca 1950.

CABREROS, M., ALONSO LOBO, A., ALONSO MORÁN, S., *Comentarios al Código de Derecho Canónico*, Madrid, B.A.C., 1963.

CADENAS Y VICENT, Vicente de, *Pleitos de Hidalguía que se conservan en el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Extracto de sus expedientes. Siglo XVIII*, Madrid, Hidalguía, 1981.

CAJAL VALERO, Arturo, *"Paz y Fueros". El Conde de Villafuertes. Guipúzcoa entre la "Constitución de Cádiz" y el Convenio de Vergara (1813-1839)*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2002.

CALVO POYATO, J., "La crisis de las capellanías. El caso de la villa de Cabra", en *Homenaje a Antonio Domínguez Ortiz*, pp. 551-571, Madrid, 1981.

CANALES, Esteban, *Decadencia y abolición de los diezmos en España* Barcelona, UAB, 1981.

CANALES, Esteban, "El Diezmo a fines del Antiguo Régimen", en AA.VV., *La economía española al final del Antiguo Régimen*, Madrid, Alianza, 1982, t. I, pp. 105-187.

CANALES GILI, Esteban, "Diezmos y primicias en la crisis del Antiguo Régimen en España", en *L'Avenç*, 59 (1983), pp. 31-37.

CANDEL CRESPO, Francisco, "Tres obispos albacetenses en la España de Fernando VII", en *Al-Basit*, 20, n.35 (1994), pp. 113-130.

CANDEL CRESPO, Francisco, *Rectores del Seminario de San Fulgencio de Murcia (1700-1961)*, Murcia, 1995.

CÁRDENAS PIERA, Emilio de, "Capellanías, Memorias, Fundaciones", en *Veinticinco años de la escuela de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria*, pp. 165-193, 1985.

CARDESÍN, José María, "Miseria de la teoría... de la modernización: una revisión de algunos estudios sociológicos sobre el mundo rural contemporáneo", en *Agricultura y Sociedad*, 84 (1997), pp. 141-164.

CARO BAROJA, Julio, *Las formas complejas de la vida religiosa : religión, sociedad y carácter en la España de los siglos XVI y XVII*, Madrid, 1978.

CARO BAROJA, Julio, *Los vascos y la Historia a través de Garibay*, Madrid Caro Raggio, 2002.

CARO LÓPEZ, Ceferino, "Propietarios y distraídos. Algunas razones de la política religiosa de la Ilustración", en *Hispania Sacra*, 47 (1995), pp. 217-246.

CARRASCO GONZÁLEZ, M<sup>a</sup> Guadalupe, *Los instrumentos del comercio colonial en el Cádiz del siglo XVII (1650-1700)*, Madrid, Banco de España, Estudios de Historia Económica, num. 35, 1996.

CARRIÓN, I. M., *La siderurgia guipuzcoana en el siglo XVIII*, Bilbao, UPV-EHU, 1990.

CASTÁN TOBEÑAS, José, "El albaceazgo. Generalidades", en *Derecho Civil español, común y foral*, t. 6, pp.354-359, Madrid, Reus, 1979.

CASTÁN TOBEÑAS, José, *Derecho Civil español, común y foral*, Madrid, Reus, 1979.

CASTELLS, Irene y MOLINER, Antonio, *Crisis del Antiguo Régimen y Revolución Liberal en España (1789-1845)*, Barcelona, Ariel, 2000.

CASTRO, Concepción de, *Campomanes. Estado y reformismo ilustrado*, Madrid, Alianza Universidad, 1996.

CATALÁN MARTÍNEZ, Elena, "La pervivencia del derecho patrimonial en la iglesia vasca durante el feudalismo desarrollado", en *Hispania*, LV/2, num. 190 (1995), pp. 567-587.

CATALÁN MARTÍNEZ, Elena, "El fin de un privilegio: la contribución eclesiástica a la Hacienda Real (1519-1794)", en *Studia Historica. Historia Moderna*, 16 (1997), pp. 177-200.

CATALÁN MARTÍNEZ, Elena, *El precio del purgatorio. Los ingresos del clero vasco en la Edad Moderna*, Bilbao, UPV-EHU, 2000.

CENDOYA ECHÁNIZ, Ignacio, "Tomás de Jáuregui. Maestro retablista guipuzcoano del siglo XVIII", en *Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología*, t. LVII (1991), pp. 471-486.

CENDOYA ECHÁNIZ, Ignacio, "El retablo mayor de la iglesia parroquial de Asteasu", en *Cuadernos de Sección. Artes plásticas y documentales*, 10 (1992), pp. 153-176.

CHACÓN JIMÉNEZ, F. y otros, *Poder, familia y consanguinidad en la España del antiguo régimen*, Barcelona, Anthropos, 1992.

CHACÓN JIMÉNEZ, F. y otros (eds.), *Familia, grupos sociales y mujer en España (s. XV-XIX)*, Murcia, 1991.

CHACÓN JIMÉNEZ, Francisco y HERNÁNDEZ FRANCO, Juan (eds.), *Familia, poderosos y oligarquías*, Murcia, Universidad de Murcia, 2001.

CHAUNU, Pierre, *La memoria de la eternidad*, Madrid, 1979.

CHAUNU, Pierre, *La mort a Paris: XVI, XVII et XVIII siècles*, Paris, 1978.

CHRISTIE, Florence, *La porción del Señor o diezmos y ofrendas*, Barcelona, Imp. Salvadó, 1967.

CIFUENTES PAZOS, José Manuel, *La economía de las iglesias vizcaínas en el siglo XVII*. Bilbao, edicionesbeta, 2000.

CLAVERO, Bartolomé, *Mayorazgo : propiedad feudal en Castilla 1369-1836*, Madrid, Siglo XXI, 1974.

COMELLAS, José Luis, *Los realistas en el Trienio Constitucional, 1820-1823*, Pamplona, 1953.

COMELLAS, José Luis, *El Trienio Constitucional*, Madrid, 1963.

COVIÁN, Víctor, "Capellanías", en *Nueva Enciclopedia Jurídica*, tomo III, Barcelona, Francisco Seix, 1978.

CUENCA TORIBIO, J. M., "La Iglesia española en el Trienio Constitucional (1820-1823)", en *Hispania Sacra*, 18 (1965), pp. 333-362.

CUENCA TORIBIO, J. M., *La Iglesia española ante la revolución liberal*, Madrid, 1971.

CUENCA TORIBIO, J. M., *Estudios sobre la Iglesia española del XIX*, Madrid, 1973.

CUENCA, J. M., *Sociología del episcopado español e hispanoamericano (1789-1985)*, Madrid, 1986.

DACOSTA MARTÍNEZ, Arsenio F., "De dónde sucedieron unos en otros. La historia y el parentesco vistos por los linajes vizcaínos bajomedievales", en *Vasconia*, 28 (1999), pp. 57-70.

DE LA FUENTE COBOS, Concepción, "La documentación sobre patronato eclesiástico de Castilla", en *Hispania Sacra*, v. 47 (96), pp. 625-655.

DEL VAL VALDIVIELSO, M<sup>a</sup> Isabel, "El clero vasco a fines de la Edad Media", en *Cuadernos de Sección. Historia – Geografía (Eusko Ikaskuntza)*, 23 (1995), pp. 31-53.

DENIS, J., "Chapellenie", en *Dictionaire de Droit Canonique*, t. III Paris, 1942.

DIAGO HERNANDO, Máximo, "Las iglesias propias de monasterios en la Castilla bajomedieval. Algunos ejemplos riojanos", en *Hispania Sacra*, 49, n. 100 (1997), p. 625-651.

DÍAZ BODEGAS, Pablo, *Libro de visita del licenciado Martín Gil*, Logroño, 1998.

DÍAZ DE CERIO, F., "Notas sobre el jansenismo español en 1820-1825", en *Scriptorium Victoriense*, 23 (1976), pp. 303-341.

DÍAZ DE DURANA ORTÍZ DE URBINA, José Ramón, "Patronatos, patronos, clérigos y parroquianos. Los derechos de patronazgo sobre monasterios e iglesias como fuente de renta e instrumento de control y dominación de los Parientes Mayores guipuzcoanos (siglos XIV al XVI)", en *Hispania Sacra*, 50, n. 102 (1998), pp. 467-508.

DÍAZ MORENO, J. M., *La regulación jurídica de la cura de almas*, Granada, 1972.

DOMÍNGUEZ ORTÍZ, Antonio, "Un alegato de los párrocos de la diócesis toledana contra el desigual reparto de diezmos", en *Hispania Sacra*, 33, 68 (1981), pp. 533-539.

DONEZAR DIEZ DE ULZURRUN, J.M., *Riqueza y propiedad en la Castilla del Antiguo Régimen. La provincia de Toledo en el siglo XVIII*, Madrid, Labor, 1984.

DOUGLASS, W. A., *Muerte en Murélag. El contexto de la muerte en el País Vasco*, Barcelona, Barral, 1973.

DOUGLASS, W. A. y BILBAO, Jon, *"Amerikanuak". Los vascos en el Nuevo Mundo*, Bilbao, UPV-EHU, 1986.

DUFOUR, Gérard, "Las ideas político-religiosas de Juan Antonio Llorente", en *Cuadernos de Historia Contemporánea*, 10 (1988).

DUFOUR, Gerard, *Sermones revolucionarios del Trienio Liberal (1820-1823)*, Alicante, Instituto Juan Gil-Albert, 1991.

ECHEVERRÍA GOÑI, Pedro Luis, *Retablos de Euskadi*, Vitoria, 2001.

ECHEVERRÍA, Lamberto de, "Fundaciones piadosas", en *Actas de la XIX Semana española de Derecho Canónico*, celebrada en Salamanca del 17 al 21 de septiembre de 1984, p. 99-126, Salamanca 1985.

ELORZA MAIZTEGUI, Javier, *Eibar: orígenes y evolución (siglos XIV-XVI)*, Eibar, Eibarko Udala, 2000.

ERDOZAIN, Pilar y MIKELARENA, Fernando, "Algunas consideraciones en torno a la investigación del régimen de herencia troncal en la Euskal Herria tradicional", en *Vasconia*, 28 (1999), pp. 71-91.

ESPINOSA MORO, M<sup>a</sup> J., "Fundación de capellanías y otros destinos de las rentas de oro y plata enviadas por zamoranos residentes en Indias. Siglos XVI-XVII", en *Anuario de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo*, 1989-1990, pp. 543-614 y 483-546.

F. REGATILLO, Eduardo, "Problemas que plantea el canon 1513", en *El Patrimonio Eclesiástico. Estudios de la III Semana de Derecho Canónico*, pp. 327-354 Salamanca, 1950.

F. REGATILLO, Eduardo, *Derecho parroquial*, Santander, Sal Terrae, 1959.

FACI, J., "El cristianismo en Vascongadas", en GARCÍA VILLOSLADA, R. (dir.), *Historia de la Iglesia en España*, tomo II-1º, Madrid, B.A.C., 1982.

FACI, J., "Estructuras sociales de los reinos cristianos (s. VIII-XI). La iglesia propia en España" GARCÍA VILLOSLADA, R. (dir.), *Historia de la Iglesia en España*, tomo II-1º Madrid B.A.C. 1982.

FACI, J., "La reforma gregoriana en Castilla y León", en GARCÍA VILLOSLADA, R. (dir.), *Historia de la Iglesia en España*, tomo II-1º, Madrid, B.A.C., 1982.

FATJÓ GÓMEZ, Pedro, *La contabilidad de una institución eclesiástica desde la perspectiva del historiador económico*, Barcelona, UAB, 2001.

FAYARD, Janine, *Los miembros del Consejo de Castilla (1621-1746)*, Madrid, Siglo XXI, 1982.

FEIJÓO CABALLERO, Pilar, *Bizkaia y Bilbao en tiempos de la Revolución francesa*, Bilbao, 1991.

FERNÁNDEZ ALBALADEJO, P., *La crisis del Antiguo Régimen en Guipúzcoa, 1766-1833. Cambio económico e historia*, Madrid, 1975.

FERNÁNDEZ ALBALADEJO, P., "Iglesia y configuración del poder en la Monarquía Católica: algunas consideraciones. Siglos XV-XVII", en *Etat et Eglise dans la genese de l'Etat Moderne*, Madrid, 1986.

FERNÁNDEZ CATÓN, J. M., *Los archivos de la Iglesia en España*, 1978.

FERNÁNDEZ DE PINEDO, E., *Crecimiento económico y transformaciones sociales del País Vasco (1100-1850)*, Madrid, Siglo XXI, 1974.

FERNÁNDEZ DE PINEDO, E., "Etapas del crecimiento de la economía vasca (1700-1850)", en *Papeles de Economía española*, 20 (1984), pp. 309-318.

FERNÁNDEZ DE PINEDO, E., "Els contractes emfitèutics al País Basc", en *Estudis d'Historia Agrària*, 7 (1987), pp. 27-39.

FERNÁNDEZ DE PINEDO, E., "Haciendas forales y revolución burguesa: las haciendas vascas en la primera mitad del siglo XIX", en *Hacienda Pública española*, 108-109 (1987), pp. 197-220.

FERNÁNDEZ DE PINEDO, E., *La emigración vasca a América, siglos XIX y XX*, en colección "Cruzar el Charco", nº 6, Principado de Asturias, ediciones Jucar, Caja de Ahorros de Asturias, 1993.

FERNÁNDEZ DE PINEDO, E., "El campesino parcelario vasco en el feudalismo desarrollado (s. XV-XVIII)", en *Saioak. Revista de Estudios Vascos*, 1 (1997), pp. 136-147.

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Ángel I., "La supresión del diezmo y el establecimiento de la contribución territorial. La fiscalidad agraria directa en la España del siglo XIX", en *Hacienda Pública Española. Monografías*, MON6 (1996), pp. 41-52.

FERNÁNDEZ LLAMAZARES, J., *Historia de la Bula de la Santa Cruzada*, Madrid, 1859.

FERNÁNDEZ PARDO, Francisco, *Juan Antonio Llorente, español "maldito"*, San Sebastián, 2001.

FERRER BOSCH, María Antonia, "Una réplica al periodo liberal: Jaume Creus, arzobispo de Tarragona y presidente de la Junta de Fe (1823-1825)", en *Quaderns d'Història Contemporània*, 6 (1984), pp. 7-18.

FONTANA, Josep, *La crisis del Antiguo régimen (1808-1833)*, Barcelona, Crítica, 1979.

FONTANA, Josep, *Historia: análisis del pasado y proyecto social*, Barcelona, Crítica, 1982.

- FONTANA, Josep, *Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX*, Barcelona, Ariel, 1983.
- FONTANA, Josep, *La historia de los hombres*, Barcelona, Crítica, 2001.
- FONTANA, Josep, *La quiebra de la monarquía absoluta. 1814-1820*, Barcelona, Crítica, 2002.
- FUENMAYOR, Amadeo de, "Problemas que plantean los cánones 1499, 1, y 1513", en *El Patrimonio Eclesiástico. Estudios de la III Semana de Derecho Canónico*, pp. 357-384, Salamanca, 1950.
- FUENTES, Juan F., ROURA, Lluís (eds.), *Sociabilidad y liberalismo en la España del siglo XIX. Homenaje a Alberto Gil Novales*, Lleida, Milenio, 2001.
- G. BARBERENA, Tomás, "Las fuentes de derecho privado del patrimonio eclesiástico", en *Estudios de la III Semana de Derecho Canónico*, pp. 99-118, Salamanca, 1950.
- GALARRAGA, L. M., "Los beneficios patrimoniales", en *Scriptorium Victoriense* (1956), pp. 113-143.
- GAMBRA, Rafael, *La primera guerra civil de España (1821-1823). Historia y meditación de una lucha olvidada*, Madrid, 1950.
- GÁRATE OJANGUREN, M<sup>a</sup> Montserrat, *El proceso de desarrollo económico en Guipúzcoa*, San Sebastián, 1976.
- GÁRATE OJANGUREN, M<sup>a</sup> Montserrat, *La Real Compañía de Caracas*, San Sebastián, Sociedad Guipuzcoana de ediciones y publicaciones, 1990.
- GARCÍA DE CORTÁZAR, F., "Guerra y religión en el País Vasco (1808-1814)", en *Saioak. Revista de estudios vascos*, 3 (1979), pp.140-168.
- GARCÍA DE CORTÁZAR, Fernando, "La Iglesia vasca y la implantación del liberalismo (1808-1876)", en *I Semana de estudios de Historia eclesiástica del País Vasco*, pp. 123-160, Vitoria, 1981.
- GARCÍA GAINZA, María Concepción, "Los retablos de Lesaca", en *Homenaje a Don José Esteban Uranga*, pp. 327-343, Pamplona, 1971.
- GARCÍA GALLO, Alfonso, *El Concilio de Coyanza. Contribución al estudio del Derecho canónico español en la Alta Edad Media*, Madrid, Anuario de Historia del derecho Español, 1951.
- GARCÍA HERREROS, Almudena, "Órdenes y Beneficios en Palencia", en MARTÍNEZ DE VELASCO, Ángel (Dir.), *La Iglesia y la crisis del Antiguo Régimen. Actas del I Congreso Virtual de Historia Contemporánea de España. Madrid, 1 de julio al 12 de octubre de 2000*, Madrid, 2000, edición en CdRom. ISBN 84-607-1345-8. Para mayor información, se puede encontrar en la Biblioteca Nacional, con la signatura DGcd/306.
- GARCÍA LOBO, Vicente, "A propósito del Patronato Real. Un documento de 1419", en *Hispania Sacra*, vol. XXXVI, nº 74 (1984), pp. 457-484.
- GARCÍA VILLOSLADA, Ricardo (dir.), *Historia de la Iglesia en España*, Madrid, B.A.C. 1982.
- GARCÍA-ABÁSULO GONZÁLEZ, A., "Inversiones indianas en Córdoba. Capellanías y patronatos como entidades financieras", en *Actas de las II Jornadas de Andalucía y América*, I, pp. 427-453, Sevilla, 1983.
- GARZÓN PAREJA, Manuel, *Historia de la Hacienda de España*, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1984.

GASTAÑAZPI, Eva, "Redes eclesiásticas diocesanas en el País Vasco (s. XIV - XVI)", en AA.VV., *Religiosidad y sociedad en el País Vasco*, Bilbao, 1994.

GELLNER, E. y otros, *Patronos y clientes en las sociedades mediterráneas*, Barcelona, 1986.

GIL MASSA, Jesús Ángel, "Vivienda y prestigio social: los indianos y sus moradas en la Bergara barroca", en *Ondare. Cuadernos de Artes plásticas y monumentales*, 19 (2000), pp. 359-370.

GIL NOVALES, Alberto (dir.), *Diccionario biográfico del Trienio Liberal*, Madrid, El Museo Universal, 1991.

GIL NOVALES, Alberto, *El Trienio Liberal*, Madrid, Siglo XXI, 1980.

GINZBURG, Carlo, *Mitos, emblemas, indicios: Morfología e historia*, Barcelona, Gedisa, 1989.

GINZBURG, Carlo; PONI, Carlo, "El nombre y el cómo: intercambio desigual y mercado historiográfico", en *Historia Social*, 10 (1991), pp. 63-70, Valencia, 1991.

GIRALT, E., "Desamortizaciones, transferencias de propiedad y transformaciones agrarias en la época contemporánea", en AA.VV., *Actas de las I Jornadas de metodología aplicada de las Ciencias Históricas*, t. IV, pp. 33-36, Santiago de Compostela, 1975.

GÓMEZ NAVARRO, Soledad, *El sentido de la muerte y la religiosidad a través de la documentación notarial cordobesa (1790-1814)*, Granada, Boletín de información de la Academia granadina del notariado, 1985.

GÓMEZ NAVARRO, Soledad, *Una elaboración cultural de la experiencia del morir : Córdoba y su provincia en el Antiguo Régimen*, Córdoba, 1998.

GÓMEZ ZORRAQUINO, José Ignacio, "Los lazos familiares como estrategia para la formación y gestión de los patrimonios de la burguesía mercantil. El ejemplo de la familia Romeo de Estronad (1703-1848)", en *VII Congreso de la Asociación de Historia Económica*, Zaragoza, 2001.

GONZÁLEZ DE LANGARICA RUIZ DE GAUNA, Alberto, "La legislación canónica y los diezmos en Álava", en *Sancho el Sabio. Revista de Cultura e Investigación Vasca*, 1 (1991), pp. 335-351.

GONZÁLEZ RUIZ, Manuel, "Vicisitudes de la propiedad eclesiástica en España durante el siglo XIX", en *Revista Española de Derecho Canónico*, 1946, t. I, pp. 383-424.

GONZÁLEZ RUIZ, M., "Las capellanías españolas en su perspectiva histórica", en *El Patrimonio eclesiástico, III Semana de Derecho Canónico*, pp. 413-441, Salamanca, 1950.

GONZÁLEZ SÁNCHEZ, C. A., *Dineros de ventura. La varia fortuna de la emigración a Indias (siglos XVI-XVII)*, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1995.

GONZALVO VALLESPÍ, José Carlos, "La abolición del diezmo y la disolución del régimen señorial en el ducado de Híjar", en SARASA SÁNCHEZ, E. y SERRANO MARTÍN, E. (eds.), *Señorío y Feudalismo en la Península Ibérica (ss. XII-XIX)*, Congreso celebrado en Zaragoza en diciembre de 1989, tomo IV, pp. 397-411, Zaragoza, 1993.

GOÑI GAZTAMBIDE, J., *Historia de la Bula de la Cruzada en España*, Vitoria, RIOL, 1958.

GRASES, Pedro, "Estudio crítico sobre la bibliografía de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas", en *Los Vascos y América. Actas de las jornadas organizadas por la Fundación Banco de Vizcaya*. Octubre, 1988, pp. 225-286, Bilbao, Laida, 1989.

GUERREAU, Alain, *El Feudalismo. Un horizonte teórico*, Barcelona, Crítica, 1984.

GUEZALA, Luis de, *Las instituciones de Bizkaia a finales del Antiguo Régimen (1793-1814)*, Bilbao, 1992.

GURRUCHAGA, Ildefonso, "El Decreto del año 1051 de liberación de las iglesias vizcaínas del dominio de los etxe-abade. El derecho señorial de jauría. La actitud del Señor de Vizcaya", en *Príncipe de Viana*, 140-141 (1975), pp. 447-463.

HERMANN, Christian, "Iglesia y poder: el encuadramiento pastoral en el siglo XVIII", en *Cuadernos de Investigación Histórica*, VI (1982), pp. 137-149.

HERMANN, Christian, *L'Eglise d'Espagne sous le patronage royal (1476-1834): essai d'ecclésiologie politique*, Madrid, 1988.

HERNÁNDEZ FRANCO, Juan (ed.), *Familia y poder. Sistemas de reproducción social en España (siglos XVI - XVIII)*, Seminario Familia y élite de poder en el reino de Murcia, siglos XV-XIX, Murcia, Universidad de Murcia, 1995.

HERNÁNDEZ MONTALBÁN, Francisco J., "Absolutismo y crisis del régimen señorial 1814-1833", en SARASA SÁNCHEZ, E. y SERRANO MARTÍN, E. (eds.), *Señorío y Feudalismo en la Península Ibérica (ss. XII-XIX)*, Congreso celebrado en Zaragoza en diciembre de 1989, tomo II, pp. 533-566, Zaragoza, 1993.

HERNÁNDEZ MONTALBÁN, Francisco J., *La abolición de los señoríos en España (1811-1837)*, Madrid, Biblioteca Nueva, 1999.

HERR, Richard, *España y la revolución del siglo XVIII*, Madrid, Aguilar, 1964.

HERR, Richard, "Hacia el derrumbe del Antiguo Régimen: crisis fiscal y desamortización bajo Carlos IV", en *Moneda y Crédito*, 118 (1971), Madrid, 1971.

HERR, Richard, *Hacienda Real y cambios rurales en España a fines del Antiguo Régimen*, Madrid, 1991.

HERRERO, Javier, *Los orígenes del pensamiento reaccionario español*, Madrid, Edicusa, 1973.

HIGUERUELA DEL PINO, Leandro, "Los concursos a parroquias en la Diócesis de Toledo durante el pontificado del Cardenal Borbón (1800-1823)", en *Hispania Sacra*, 27 n. 53-54 (1974), pp. 237-284.

HUSSEY, Ronald, *The Caracas Company, 1728-1784*, Cambridge, Harvard University Press, 1934.

IBÁÑEZ RODRÍGUEZ, Santiago, *El pan de Dios y el pan de los hombres. Diezmos, primicias y rentas en la diócesis de Calahorra*, Logroño, Universidad de La Rioja, 1999.

IMBART DE LA TOUR, *Les origines religieuses de la France. Les paroisses rurales du IV au XI siècle*, Paris, 1900.

IMÍZCOZ, José María (dir.), *Redes familiares y patronazgo. Aproximación al entramado social del País Vasco y Navarra en el Antiguo Régimen (siglos XV-XIX)*, Bilbao, UPV-EHU, 2001.

INSAUSTI TREVIÑO, Sebastián, *Las Parroquias de Guipúzcoa en 1862*, San Sebastián, 1964.

IPARRAGIRRE BURGOA, Gotzon, *Txano frigarretik karlisten txapelera. Irun, 1789-1839*, Boletín de Estudios del Bidasoa, Estudios IV, Irún, Luis de Uránzu Kultur Taldea, 1999.

IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio, "Clero secular, familia y movilidad social: Actores y directores. (Murcia, Siglo XVII)", en CHACÓN JIMÉNEZ, Francisco y HERNÁNDEZ FRANCO, Juan (eds.), *Familia, poderosos y oligarquías*, pp. 131-152, Murcia, Universidad de Murcia, 2001.

IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio y PÉREZ ORTIZ, Antonio L. (eds.), *Familia, transmisión y perpetuación (Siglos XVI-XIX)*, Murcia, Universidad de Murcia, 2002.

ITURRIOZ MAGAÑA, A., *Estudio del subsidio y excusado (1561-1808). Contribuciones económicas de la Diócesis de Calahorra y la Calzada a la Real Hacienda*, Logroño, 1987.

JIMÉNEZ DE GREGORIO, F., "Las capellanías en el año 1697 (para la historia socioeconómica de Valdepeñas)", en *Cuadernos de Estudios Manchegos*, 20 (1990), pp. 317-332.

JIMÉNEZ MONTESERÍN, M., "La abolición del diezmo en el obispado de Cuenca (1815-1840)", en *Cuenca*, 23-24 (1984), pp. 79-94.

JIMÉNEZ SUREDA, Montserrat, "Una parte de la gestación del poder y el patrimonio. La adquisición de Capellanías en la sede de Girona durante la época medieval", en *Annals de l'Institut d'Estudis Gironins*, 38 (1996-1997), pp. 1555-1568.

JIMÉNEZ SUREDA, Monserrat, *L'Eglésia catalana sota la monarquia dels Borbons: la catedral de Girona en el segle XVIII*, Barcelona, 1998.

JOVER AVELLÀ, Gabriel, "Ingresos y estrategias patrimoniales de la nobleza durante la crisis de seiscientos. Mallorca, 1600-1750", en *VII Congreso de la Asociación de Historia Económica*, Zaragoza, 2001.

LA PARRA LÓPEZ, Emilio, *El primer liberalismo español y la Iglesia. Las Cortes de Cádiz*, Alicante, 1985.

LAFARGA, Adolfo, "De la Real Orden de los Señores de la Cámara, para la aberiguación de los Patronatos dettentados en este Señorío", en *Hidalguía*, 38, Enero-Febrero, 1960.

LAFARGA, Adolfo, "Los Patronatos y Prebostadas del Real Patrimonio en Vizcaya en 1416", en *La Gran Enciclopedia Vasca*, Tomo II, 1966.

LAFARGA, Adolfo, "Noticia de los Reales Patronatos del Señorío de Vizcaya y la Representación que hace el Señor Corregidor Juez de Primera Instancia", en *Hidalguía*, XVII, n. 103 (1970), pp. 839-844.

LAMA CERECEDA, Enrique de la, "Llorente. Retrato a vuelo pluma", en *Kalakorikos*, n. 4, pp. 195-212, Calahorra, 1999.

LAMA CERECEDA, Enrique de la, *J. A. Llorente, un ideal de burguesía. Su vida y su obra hasta el exilio en Francia (1756-1813)*, Pamplona, EUNSA, 1991.

LAMADRID, R. S. de, *El Derecho Público de la Iglesia Católica*, Granada, 1942.

LARA RAMOS, Antonio, *Iglesia y poder: propiedad y diezmos en la crisis del Antiguo Régimen: Guadix y su obispado (1750-1808)*, Granada, Universidad de Granada, 2001.

LARRAÑAGA, Ramiro, *Placencia de las Armas*, San Sebastián, Caja de Ahorros Municipal, 1970.

LARRAÑAGA, Ramiro, *Síntesis histórica de la Armería Vasca*, San Sebastián, Caja de Ahorros provincial de Guipúzcoa, 1981.

LARRAÑAGA, Ramiro, *Armeros vascos. Repaso histórico. Raíces y desarrollo*, Eibar, Ayuntamiento de Eibar, 2001.

LARREA BEOBIDE, Ángel, *El patronato laico vizcaíno en el Antiguo Régimen*, Bilbao, edicionesbeta, 2000.

- LASA, J. Ignacio, "Fundación para las ánimas en la iglesia de Santa María de San Sebastián", en *Boletín de estudios históricos de San Sebastián*, 1982-1983, t. I, pp. 514-521.
- LASA, José Ignacio, "Los diezmos y las primicias", en *Aranzazu*, 1962, pp. 361-363.
- LE GOFF, Jacques, *El nacimiento del purgatorio*, Madrid, Taurus, 1985.
- LE GOFF, Jacques, *La bolsa y la vida. Economía y religión en la Edad Media*, Barcelona, 1987.
- LEAL DE CASTRO, Roque, *Carta cuarta de Don Roque Leal sobre los diezmos*, 1820?
- LEBRATO FUENTES, F., "Trujillanos: sus fundaciones, capellanías y obras pías", en *Revista de Estudios Extremeños*, 41 (1985), pp. 97-122.
- LEVAGGI, Abelardo, *Las capellanías en la Argentina. Estudio histórico-jurídico*, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio L. Gioja, 1992.
- LLAGUNO Y AMIROLA, Eugenio; CEAN-BERMUDEZ, Juan Agustín, *Noticias de los arquitectos y arquitectura de España desde su restauración. Ilustradas y acrecentadas con notas, adiciones y documentos por D. Juan Agustín Cean-Bermúdez*, Madrid, Turner, 1977.
- LLANOS ARAMBURU, Félix, *El Trienio Liberal en Guipúzcoa (1820-1823). Antecedentes de las Guerras Carlistas en el País Vasco*, San Sebastián, 1998.
- LÓPEZ TABAR, Juan, *Los famosos traidores. Los afrancesados durante la crisis del Antiguo Régimen (1808-1833)*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2001.
- LÓPEZ TORRES, M<sup>a</sup> Francisca; PRADA SANTAMARÍA, Antonio, "Problemas de las vicarías donostiaras a raíz de la Guerra de la Independencia", en *Congreso Internacional. Orígenes del Liberalismo. Universidad, Política, Economía*, Salamanca, 2002.
- LÓPEZ, Roberto J., *Comportamientos religiosos en Asturias durante el Antiguo Régimen*, Gijón, 1989.
- LORING GARCÍA, M<sup>a</sup> Isabel, "Nobleza e iglesias propias en la Cantabria Altomedieval", en *Studia Historica. Historia Medieval*, V (1987), pp. 89-120.
- LUENGAS OTAOLA, Vicente F., "Diezmos y Patronatos", en *Boletín R.S.B.A.P.*, XLV (1989), p. 267-280.
- MADARIAGA ATEKA, Javier, "El conflicto de los diezmos en Vizcaya. El voto de Santiago. Una aproximación histórico-bibliográfica", en *Letras de Deusto*, 29, 85 (1999), pp. 235-243.
- MADARIAGA ORBEA, Juan, *Historia social de Bergara en su época preindustrial*, Bergara, 1991.
- MADOZ, P., *Reseña sobre el clero español y examen de la naturaleza de los bienes eclesiásticos*, Barcelona, 1835.
- MADURELL MARIMÓN, José María, "Patronatos Reales Eclesiásticos en los reinos de Aragón", en *Hispania Sacra*, 1960, vol. XIII, 26 (1960), pp. 413-421.
- MALDONADO Y F. DEL TORCO, José, *Herencias en favor del alma en el Derecho español*, Madrid, Revista de Derecho Privado, 1944.
- MALDONADO, J., "Las causas pías ante el Derecho civil", en *El Patrimonio eclesiástico. Estudios de la III Semana de Derecho Canónico*, pp. 385-412, Salamanca, 1950.
- MAÑARICUA, Andrés E. de, "Problemas Religiosos en la Vizcaya de los siglos XIV y XV, Régimen Monasterial, Jurisdicción Episcopal y decadencia Religiosa", en AA.VV., *La sociedad vasca rural y*

urbana en el marco de la crisis de los siglos XIV y XV, II Simposio celebrado en marzo de 1973, RSBAP, 1973.

MAÑARICUA, Andrés E. de, *Las nuevas Diócesis de Bilbao y San Sebastián y sus antecedentes históricos*, Salamanca, 1951.

MARTI GILABERT, Francisco, *La Iglesia en España durante la Revolución Francesa*, Pamplona, EUNSA, 1971.

MARTÍN HERNÁNDEZ, Francisco, *Los seminarios españoles. Historia y Pedagogía I (1563-1700)*, Salamanca, Sígueme, 1964.

MARTÍNEZ DE VELASCO, Ángel, "Estudio del clero toledano a través del concurso parroquial de 1825", en *Hispania Sacra*, vol. XXV (1972).

MARTÍNEZ DÍAZ, A., "Diputación patriótica y Diputación afrancesada en Vizcaya en 1811 y 1812", en *Estudios de la Guerra de la Independencia*, tomo I, Zaragoza, 1964.

MARTÍNEZ GORRIARAN, Carlos, *Casa, Provincia, Rey. Para una historia de la cultura del poder en el País Vasco*, Irún, Alberdania, 1993.

MARTÍNEZ RUEDA, Carlos, "Crónica de una crisis: el cabildo de Bilbao en el siglo XVIII", en *Letras de Deusto*, 18, 42 (1988), pp. 73-91.

MARTÍNEZ RUEDA, Fernando, "Comunidad y poder local: el Valle de Gordejuela en el siglo XVIII", en *Cuadernos de Sección. Historia-Geografía*, 22 (1994), pp. 147-169.

MARTÍNEZ RUEDA, Fernando; URQUIJO GOITIA, Mikel, "Estrategias familiares y poder", en *Boletín de la Asociación de Demografía Histórica*, 12, 2-3 (1994), pp. 79-92.

MARTÍNEZ RUEDA, Fernando, *Los poderes locales en Vizcaya: del Antiguo Régimen a la Revolución Liberal (1700-1853)*, Bilbao, 1994.

MARTÍNEZ RUEDA, Fernando, "Familia y poder en el siglo XVIII en Vizcaya: la casa La Cuadra", en *Vasconia. Cuadernos de Historia-Geografía*, 29 (1999), pp. 91-106.

MARTÍNEZ RUIZ, Julián, *Filiación de los seminaristas de Real Seminario Patriótico Bascongado y de Nobles de Vergara*, San Sebastián, 1972.

MARTÍNEZ SAN CELEDONIO, Félix Manuel, *Bajo dos banderas. Calahorra 1808-1813*, Calahorra, 1981.

MARTÍNEZ YAGÜES, F., *Antología de las Cortes de 1821 a 1823*, Madrid, 1914.

MAS GALVAN, Cayetano, "Un aspecto de la influencia valenciana en la renovación de los estudios: José Pérez y la reforma del Seminario de San Fulgencio de Murcia", en *La Ilustración Española. Actas del Coloquio Internacional celebrado en Alicante, 1-4 octubre 1985*, págs. 151-173, Alicante, 1985.

MAS GALVÁN, Cayetano, "De la Ilustración al Liberalismo. El Seminario de San Fulgencio de Murcia (1774-1823)", en *Trienio. Ilustración y Liberalismo*, 12 (1988), pp. 102-175.

MASCARENAS, Carlos E., *Nueva Enciclopedia Jurídica*, Barcelona, F. Seix, 1978.

MAULEÓN GÓMEZ, J. R., *Estrategias familiares y cambios productivos del caserío vasco*, Vitoria, Gobierno Vasco, 1998.

MAULEON ISLA, Mercedes, *La población de Bilbao en el siglo XVIII*, Valladolid, 1961.

MENDIOLA QUEREJETA, Rufino, *Los estudios en el Real Seminario de Vergara*, Vergara, 1961.

MERCADER RIBA, Juan "La desamortización española bajo José Bonaparte", en AA.VV., *Actas de las I Jornadas de metodología aplicada de las Ciencias Históricas*, t. IV, p. 83-95, Santiago de Compostela, 1975.

MERCADER RIBA, Juan, *José Bonaparte rey de España, 1808-1813. Historia externa del reinado*, Madrid, 1971.

MIGUÉLEZ, Lorenzo, "Situación actual del problema de las Capellanías en España", en *El Patrimonio eclesiástico. Estudios de la III Semana de Derecho Canónico*, Salamanca, 1950.

MINA APAT, María Cruz, *Fueros y revolución liberal en Navarra*, Madrid, Alianza, 1981.

MIQUEL IBARGÜEN, Luis M., "Capellanías colativas y laicales", en *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, t. LXIV (1884), p.424-437.

MONASTERIO ASPIRI, Itziar, "El pacto sucesorio y la disposición de la herencia a favor del sucesor único", en *Vasconia*, 28 (1999), pp. 217-233.

MONTOLÍO HERNÁNDEZ, Ricardo, "El medio diezmo. Un episodio en la reforma eclesiástica del trienio liberal (1820-23)", en *Hispania Nova*, 2000.

MONTOYA, Pío de, *La intervención del clero vasco en las contiendas civiles. 1820-1823*, San Sebastián, Izarra, 1971.

MORAL RUIZ, Joaquín del, "La presión fiscal en el Trienio Constitucional (1820-1823)", en *Hacienda Pública Española*, 27 (1974), pp. 47-73.

MORENO GARBAYO, Natividad, *Colección de Reales Cédulas del AHN*, Madrid, 1977.

MORGADO GARCÍA, Arturo, "Provisión de Beneficios eclesiásticos en la Diócesis de Cádiz durante el Antiguo Régimen (1700-1836)", en *Chronica Nova*, 18 (1990), pp. 343-363.

MORGADO GARCÍA, Arturo, *Ser clérigo en la España del Antiguo Régimen*, Cádiz, 2000.

MOSTAZA RODRÍGUEZ, Antonio, "Derecho patrimonial canónico", en AA.VV., *Derecho canónico*, Pamplona, EUNSA, 1974.

MOXÓ, Salvador de, *La disolución del régimen señorial en España*, Madrid, 1965.

MUÑOZ DUEÑAS, María Dolores, "Las resistencias al diezmo", en *Hacienda Pública Española. Monografías*, 1 (1994), pp. 155-165.

MUÑOZ GARCÍA, María José, *Limitaciones a la capacidad de obrar de la mujer casada: 1505-1975*, Madrid, UNEX, 1991.

MURO ABAD, Juan Robert, "El clero diocesano vasco en los siglos XV y XVI: una imagen", en AA.VV., *Religiosidad y sociedad en el País Vasco*, Bilbao, 1994.

MUTILOA POZA, José M., "Informe a las Cortes de Cádiz del Obispo de Calahorra Don Francisco Mateo Aguiriano y Gómez (Reformas, Fueros, Monarquía, Clero)", en *Letras de Deusto*, vol. 4, num. 7 (1974).

MUTILOA POZA, J. M., "Metodología para el estudio de las fuentes de la desamortización", en AA.VV., *Actas de las I Jornadas de metodología aplicada de las Ciencias Históricas*. t. IV, p. 101-110, Santiago de Compostela, 1975.

MUTILOA POZA, J. M., *Desamortización, fueros y pronunciamientos en Álava en el siglo XIX*, Vitoria, Diputación Foral de Álava, 1975.

NAVARRO GODOY, Mario J., "Un intento de desvinculación de propiedades eclesiásticas: el caso de una capellanía fundada por D. Antonio Sánchez de Ayala en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de las Mercedes de Oria", en *Roel*, 5 (1984), pp. 135-145.

NIETO SORIA, José Manuel, "Algunas consideraciones sobre el Patronato Real castellano-leonés en los siglos XIII y XIV", en *Anuario de Estudios Medievales*, 15 (1985).

OLEA ÁLVAREZ, Pedro, "El Real Patronato (1868-1876)", en *Hispania Sacra*, vol. XLI, 84 (1989), pp. 667-697.

OLLERO DE LA TORRE, J. L., *Un riojano en las Cortes de Cádiz: el obispo de Calahorra Don Francisco Mateo Aguiriano y Gómez*, Logroño, 1981.

ORTIZ DE ORRUÑO, José María, "La militarización de la sociedad vasca en tiempos de paz: los naturales armados (1823-1833)", en *Vasconia*, 26 (1998), pp. 23-40.

OTAZU Y LLANA, Alfonso, *La burguesía revolucionaria vasca a fines del siglo XVIII*, San Sebastián, Txertoa, 1982.

OTAZU Y LLANA, Alfonso, *El igualitarismo vasco: Mito y realidad*, San Sebastián, Txertoa, 1986.

PASTOR DE TOGNERI, Reyna (comp.), *Relaciones de poder, de producción y parentesco en la Edad Media y Moderna*, Madrid, CSIC, 1990.

PASTORA Y NIETO, Isidro de la, *Diccionario de Derecho Canónico*, Madrid, 1847.

PEÑA GARCÍA, Carmen, "Status jurídico de la mujer en el ordenamiento de la Iglesia", en *Revista española de Derecho Canónico*, 54 (1997), pp. 685-700.

PEÑAFIEL RAMÓN, Antonio, *Testamento y buena muerte (Un estudio de mentalidades en la Murcia del siglo XVIII)*, Murcia, Academia Alfonso X el Sabio, 1987.

PÉREZ ALHAMA, Juan, *La Iglesia y el Estado español*, Madrid, 1967.

PÉREZ NUÑEZ, Javier, "Las diputaciones carlistas de Vizcaya durante el primer enfrentamiento civil (1833-1839)", en *Sancho el Sabio*, 6 (1996), pp. 81-115.

PÉREZ NÚÑEZ, Javier, *La Diputación Foral de Vizcaya. El régimen foral en la construcción del Estado Liberal (1808-1868)*, Madrid, 1996.

PERLADO, Pedro Antonio, *Los obispos españoles ante la amnistía de 1817*, Pamplona, EUNSA, 1971.

PESET, Mariano, *Dos ensayos sobre la historia de la propiedad de la tierra*, Madrid, Edersa, 1982.

PETIT, Carlos, *La Compañía mercantil bajo el régimen de las Ordenanzas del Consulado de Bilbao (1737-1829)*, Sevilla, 1979.

PILDAIN SALAZAR, M. Pilar, *Ir a América. La emigración vasca a América (Guipúzcoa 1840-1870)*, San Sebastián, Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones, 1984.

PIQUERAS ARENAS, J. Antonio, "La revolución burguesa española. De la burguesía sin revolución a la revolución sin burguesía", en *Historia Social*, 24 (1996).

PIQUERO, Santiago, *Demografía guipuzcoana en el Antiguo Régimen*, Bilbao, 1991.

PITARQUE DE LA TORRE, Jesús María, "Los Patronatos de Laicos en la crisis del Antiguo Régimen: el Señorío de Vizcaya", en *Hispania Nova*, 2000.

PONS, A., y SERNA, J., "El ojo de la aguja. ¿De qué hablamos cuando hablamos de microhistoria?", en RUIZ TORRES, P. (ed.), "La Historiografía", *Ayer*, 12 (1993), pp. 93-133.

PONS, A., y SERNA, J., *Cómo se escribe la microhistoria. Ensayo sobre Carlo Ginzburg*, Madrid, Cátedra, 2000.

PORRES MARIJUÁN, Rosario, "Oligarquías y poder municipal en las villas vascas en tiempos de los Austrias", en *Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante*, 19 (2001).

PORTERO, J. A., *Púlpito e ideología en la España del siglo XIX*, Zaragoza, 1978.

PORTILLO, José María, *Los poderes locales en la formación del régimen foral en Guipúzcoa (1812-1850)*, Bilbao, 1987.

PORTILLO VALDÉS, José M<sup>a</sup>, *Monarquía y gobierno provincial. Poder y Constitución en las provincias vascas (1760-1808)*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1991.

PORTU, Florentino, *Hondarribia: notas históricas y curiosidades*, Hondarribia, 1989.

PRADA SANTAMARÍA, Antonio, *El paso del Antiguo al Nuevo Régimen en el alto valle del Urola y su zona de influencia*, Editado por el autor, 1998.

PRADA SANTAMARÍA, Antonio, *Aspectos de la Historia Eclesiástica de Zumarraga. Los templos de Santa María*, Zumarraga, Parroquia de Santa María de la Asunción, 1999.

PRADA SANTAMARÍA, Antonio, "El territorio del Obispado de Pamplona bajo los carlistas. El Tribunal Diocesano de Estella", en *Príncipe de Viana*, año LXIII, 226 (2002), pp. 391-430.

PRADA SANTAMARÍA, Antonio, "Los planes beneficios en los templos parroquiales del Alto Valle del Urola", en *Hispania Nova*, 2002.

PRO RUIZ, Juan, "Las capellanías: familia, iglesia y propiedad en el Antiguo Régimen", en *Hispania Sacra*, XLI (1989), pp. 585-602.

PRO RUIZ, Juan, "Las élites de la España liberal: clases y redes en la definición del espacio social (1808-1931)", en *Historia Social*, 21 (1995), pp. 47-69.

PRO RUIZ, Juan, "Las tierras de las ánimas ante el mundo moderno: una interpretación del proceso desamortizador de las capellanías en los siglos XVIII y XIX", en *In memoriam. Estudios dedicados a Antonio María Calero*, Córdoba, Ayuntamiento de Pozoblanco/Diputación de Córdoba, 1998.

PRO RUIZ, Juan, "Socios, amigos y compadres: Camarillas y redes personales en la sociedad liberal", en CHACÓN JIMÉNEZ, Francisco y HERNÁNDEZ FRANCO, Juan (eds.), *Familia, poderosos y oligarquías*, pp. 131-152, Murcia, Universidad de Murcia, 2001.

PUIGVERT GURT, Xavier, "La introducción del diezmo en la Marca Hispánica", en *Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia*, 13 (1992), pp. 117-125.

PUIGVERT I SOLÀ, Joaquim M., *Una parròquia catalana del segle XVIII a través de la seva consuetat (Riudellots de la Selva)*, Barcelona, 1986.

PUIGVERT I SOLÀ, Joaquim M., "Les obres parroquials i la pagesia benestant. La diòcesi de Girona, segles XVII-XIX", en CONGOST, R. (coord.), *Homes, masos, història. La Catalunya del Nord-Est. Segles XIX-XX*, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1999.

RECARTE BARRIOLA, M. Teresa, *Ilustración Vasca y renovación educativa: La Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País*, Salamanca, 1990.

REDER GADOW, Marion, *Morir en Málaga, testamentos del siglo XVIII*, Málaga, 1986.

REHER, David-Sven, "Familia y sociedad: el legado de la historia en el mundo contemporáneo", en *Vasconia*, 28 (1999), pp. 11-27.

REVUELTA GONZÁLEZ, M., "Los planes de reforma eclesiástica durante el Trienio Constitucional", en *Miscelánea Comillas*, XXX, nº 56-57 (1972).

REVUELTA GONZÁLEZ, M., *Política religiosa de los liberales en el siglo XIX. Trienio constitucional*, Madrid, 1973.

REVUELTA GONZÁLEZ, Manuel, "Clero viejo y clero nuevo en el siglo XIX", en *III Semana de Historia Eclesiástica de España Contemporánea*, San Lorenzo de El Escorial, Biblioteca "La Ciudad de Dios", 1979.

REVUELTA, Manuel, "La Iglesia española ante la crisis del Antiguo Régimen (1808-33)", en GARCÍA VILLOSLADA, R.(dir.), *Historia de la Iglesia en España*, tomo V, Madrid, B.A.C., 1979-1982.

REY CASTELAO, Ofelia, "La crisis de las rentas eclesiásticas en España. El ejemplo del voto de Santiago", en *Cuadernos de Investigación Histórica. Seminario "Cisneros"*, 11 (1987), pp. 53-87.

RILOVA JERICÓ, Carlos, "Fueros, nobleza universal, honor y muerte", en *Boletín de Estudios del Bidasoa*, 16 (1998).

RILOVA JERICÓ, Carlos, *El honor de los vascos: el duelo en el País Vasco, fueros, nobleza universal, honor y muerte. Estudio sobre el sistema político vigente en algunos territorios vascos durante el antiguo régimen*, San Sebastián, 1998.

RILOVA JERICÓ, Carlos, "Brujería en la comarca del Bidasoa. El problema de la incredulidad en el siglo XVIII", en *Vasconia. Cuadernos de Historia-Geografía*, 29, (1999), ppp. 145-167.

RILOVA JERICÓ, Carlos, *Dueño y señor de su estado. Un ensayo sobre la persistencia del feudalismo. El señorío colectivo de la ciudad de Hondarribia (1499-1834)*, en *Boletín de Estudios del Bidasoa*, Estudios nº 3, Irún, Luis de Uránzu Kultur Taldea, 2000.

RILOVA JERICÓ, Carlos, "La última caza de brujas. En el nombre de Dios y de la Ilustración. La ciudad de San Sebastián en las navidades del año 1818", en *Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián*, 35 (2001), pp. 129-151.

RÍO ALDAZ, Ramón del, "La violencia en la Guerra Civil revolucionaria del Trienio Liberal", en *Vasconia*, 26 (1998), pp. 41-48.

RIVAS ÁLVAREZ, J. A., *Miedo y piedad: testamentos sevillanos del siglo XVIII*, Sevilla, 1986.

RODRÍGUEZ DE CORO, Francisco, *País Vasco, Iglesia y Revolución liberal*, Vitoria, 1978.

RODRÍGUEZ DE CORO, F., "La Iglesia vasca en la regencia de María Cristina (1836-1840)", en *Boletín de la R.S.B.A.P.*, 38, 1-4 (1982), pp. 227-256.

RODRÍGUEZ DE CORO, Francisco, *La Iglesia vasca en la época liberal (1808-1876)*, San Sebastián, Eusko-Ikaskuntza, 1984.

RODRÍGUEZ GIL, Magdalena, "Consideraciones sobre una antigua polémica: las Iglesias propias", en *Cuadernos de Historia del Derecho*, 1999, VI, 247-272.

RODRÍGUEZ LÓPEZ-BREA, Carlos M., "Iglesia y fiscalidad durante la Guerra de Independencia Española (1808-1814)", en *TRIENIO*, 36 (2000), pp. 5-27.

RODRÍGUEZ LÓPEZ-BREA, Carlos M., "¿Alianza entre trono y altar? La Iglesia y la política fiscal de Fernando VII en la diócesis de Toledo (1814-1820)", en *Spagna Contemporánea*, 19 (2001), pp. 29-46.

RODRÍGUEZ R. LAMA, Ildefonso, *Guía inventario del Archivo Diocesano de Calahorra y La Calzada: Capellanías, Órdenes sagradas...*, Calahorra, 1982.

ROSSELLÓN VAQUER, Ramón, "La décima eclesiástica", en *Bolletí de la Societat Arqueològica Luliana*, 41, n. 839, (1985), pp. 99-114.

ROVIRA GÓMEZ, Salvador J., "La Junta Diocesana del Arzobispado de Tarragona (1821-1823)", en *Anuari de la Societat d'Estudis d'Història Eclesiàstica Moderna i Contemporània de Catalunya*, 1989, pp. 25-51.

RUBIO POBES, Coro, *Revolución y tradición. El País Vasco ante la revolución liberal y la construcción del Estado español, 1808-1868*, Madrid, Siglo XXI, 1996.

RUEDA HERNANZ, Germán, *La desamortización en España: un balance (1766-1924)*, Madrid, ARCO, 1997.

RUIZ DE AEL, Mariano J., *La Ilustración artística en el País Vasco. La Real Sociedad Bascongada de Amigos del País y las artes*, Vitoria, 1993.

RUIZ HOSPITAL, Gonzalo, *El gobierno de Guipuzkoa al servicio de su rey y bien de sus naturales. La Diputación provincial de los fueros al liberalismo (siglos XVI-XIX)*, San Sebastián, 1997.

RÚJULA LÓPEZ, Pedro, "Elites y base social: el apoyo popular en la Primera Guerra Carlista", en *Vasconia*, 26 (1998), pp. 125-138.

SAAVEDRA, Pegerto, y VILLARES, Ramón (eds.), *Señores y campesinos en la Península Ibérica, siglos XVIII-XX*, Barcelona, Crítica, 1991.

SÁEZ MARÍN, Juan, *Datos sobre la Iglesia española contemporánea (1768-1868)*, Madrid, 1975.

SÁINZ RIPA, Eliseo, *Sedes Episcopales de La Rioja. Siglos XVIII y XIX*, Logroño, 1997.

SALINAS QUIJADA, Francisco, "Los Monasterios y las sustituciones fideicomisarias en el Derecho Foral Navarro", en *Príncipe de Viana*, 3 (1941), pp. 40-47.

SAN MARTÍN, Jesús, *El diezmo eclesiástico en España hasta el siglo XII*, Palencia, 1940.

SÁNCHEZ DE OCAÑA, Ramón, *Estudio crítico de las diversas especies de censos en la historia, en la legislación y en las costumbres*, Madrid, Imprenta y Litografía de los Huérfanos, 1892.

SÁNCHEZ DIANA, J. M., "El Obispado de Calahorra y de la Calzada durante la Guerra de la Independencia", en *Estudios de la Guerra de la Independencia*, tomo I, Zaragoza, 1964.

SÁNCHEZ GONZÁLEZ, R., "Las capellanías en el Antiguo Régimen (siglos XVI-XIX): estudio de la zona de la Sagra", en *Anales Toledanos*, 23 (1985), pp. 101-147.

SÁNCHEZ TERRADILLOS, Josu, *El Señorío de Vizcaya durante el primer período constitucional (1808-1814)*. Tesis doctoral inédita, 1998.

SANZ MARTÍN PAYO, V. J., *El diezmo eclesiástico en España hasta el siglo XII*, Palencia, Pontificia Universita Gregoriana, 1949.

SARMIENTO PÉREZ, José, "Represión eclesiástica liberal en la diócesis de Badajoz, 1820-1823", en *Revista de Estudios extremeños*, 53 (1997), pp. 913-935.

SARMIENTO, José, *La Reforma Beneficial en la Diócesis de Badajoz*, Tesis doctoral inédita, 2002.

SARRAILH, Jean, *La España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII*, México, 1957.

SIEGRIST DE GENTILE, Nora L. y ÁLVAREZ GILA, Oscar, "Herencias e institución de legados en sucesiones vascas en Buenos Aires, 1750-1845", en *Vasconia*, 28 (1999), pp. 249-259.

SIERRA, Luis, *Alfonso Aguado y Xarabo: un obispo intruso en Calahorra durante la Guerra de la Independencia*, 1812, Bilbao, 1964.

SOLA, Ángeles, "Una fuente para el estudio de la desamortización eclesiástica: Los protocolos notariales", en AA.VV., *Actas de las I Jornadas de metodología aplicada de las Ciencias Históricas*, t. IV, p. 79-82, Santiago de Compostela, 1975.

SOLANO ANTOÑANZAS, José María, *El Gobierno Eclesiástico de la vasta Diócesis de Calahorra. Sus obispos durante XX siglos*, Calahorra. Imprenta Gutemberg, 1967.

SORIA MESA, Enrique, "Las capellanías en la Castilla moderna: familia y ascenso social", en IRIGOYEN, A. y PÉREZ ORTIZ, A., *Familia, transmisión y perpetuación (siglos XVI-XIX)*, pp. 135-148, Murcia, Universidad de Murcia, 2002.

STEIN, Stanley, "Francisco Ignacio de Yraeta y Azcarate, almacenero de la ciudad de Mexico, 1732-1797. Un ensayo de microhistoria", en *Historia Mexicana*, L, 3 (2001), pp. 459-512.

SUÁREZ MENÉNDEZ, Roberto, "La industria militar ante la Guerra de la Independencia", en *La Guerra de la Independencia. Estudios*. Congreso Internacional celebrado en Zaragoza, 3-5 de diciembre de 1997, t. I, pp. 453-477, Zaragoza, Ministerio de Educación y Cultura, 2001.

TEJADA, Luis Alonso, *Ocaso de la Inquisición en los últimos años del reinado de Fernando VII: Juntas de Fe, Juntas Apostólicas, conspiraciones realistas*, Madrid, 1969.

TELLECHEA IDÍGORAS, J. I., "Datos demográficos de Guipúzcoa", en *Boletín de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País*, XXVII, 1971, pp. 173-176.

TELLECHEA IDÍGORAS, J. I., "Agustín de Leiza Latijera. De Andoain a San Salvador de Jujuí pasando por San Sebastián. El raro testamento de un indiano", en *Boletín de estudios históricos sobre San Sebastián*, nº 6, 1972.

TELLECHEA IDÍGORAS, J. I., "El diezmo viejo de San Sebastián (1511-1571)", en *Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián*, 11 (1977), pp. 49-68.

TELLECHEA IDIGORAS, J. I., "Noticias sobre el Real Seminario de Vergara (1805-1807)", en *Boletín de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País*, XXXV (1979).

TELLECHEA IDÍGORAS, J. I., "Del Concilio de Trento a la Ilustración", en *I Semana de estudios de Historia eclesiástica del País Vasco*, pp. 107-121, Vitoria, 1981.

TERUEL, Manuel, *Obispos liberales*, Lleida, 1996.

- TERUEL, Manuel, *Vocabulario básico de la Historia de la Iglesia*, Barcelona, Crítica, 1993.
- THOMAS, P., *Le droit de propriété des laïques sur les églises et le patronage laïque au moyen âge*, Paris, 1906.
- TOMÁS Y VALIENTE, Francisco, "Problemas metodológicos en el estudio de la desamortización en España: El empleo de las fuentes jurídicas", en *Actas de las I Jornadas de metodología aplicada de las Ciencias Históricas*, t. IV, p. 37-43, Santiago de Compostela, 1975.
- TOMÁS Y VALIENTE, Francisco, *Manual de historia del Derecho español*, Madrid, Tecnos, 1979.
- TOMSICH, M<sup>a</sup> Giovanna, *El jansenismo en España*, Madrid, Siglo XXI, 1975.
- TORRAS ELÍAS, Jaime, "En torno a la política tributaria de los gobiernos del Trienio Constitucional (1820-1823)", en *Moneda y Crédito*, 122 (1972), pp. 153-170.
- TORRAS ELÍAS, Jaime, *Liberalismo y rebeldía campesina. 1820-1823*, Barcelona, Ariel, 1976.
- TORRE, Joseba de la, "Guerra, economía y violencia, 1808-1823", en *Vasconia*, 26 (1998), pp. 15-22.
- TORRES LÓPEZ, M., "La doctrina de las Iglesias propias en los autores españoles", en *Anuario de Historia del Derecho español*, 2 (1925) 402-461.
- TORRES LÓPEZ, M., "El origen del sistema de iglesias propias", en *Anuario de Historia del Derecho español*, 5 (1928), pp. 83-217.
- TRAVERSO RUIZ, Francisco, "Una disidencia significativa: el impago del diezmo en el Obispado de Cádiz (s. XVII-XIX)", en *Hispania Sacra*, 39, 79 (1987), pp. 201-210.
- UCERO RAMÓN, Satri-Josep, "Procedimiento administrativo en las colaciones de los curatos durante el reinado de Carlos III", en *Pedralves. Revista d'Historia Moderna*, 8 (1988), pp. 497-502.
- URQUIJO GOITIA, José Ramón, "La Primera Guerra Carlista desde la ideología nacionalista vasca", en *Vasconia*, 26 (1998), pp. 65-110.
- URQUIJO GOITIA, José Ramón, *Diccionario biográfico de los ministros españoles en la Edad Contemporánea (1808-2000)*, Madrid, CSIC, 2000.
- URRUTIKOETXEA, J., "Movilidad poblacional en la Guipúzcoa del siglo XVIII (Libros Parroquiales)", en *Boletín de estudios históricos sobre San Sebastián*, 1982-1983.
- URRUTIKOETXEA, J., "Demografía vasca en el siglo XVIII", en AA. VV., *Historia del País Vasco (siglo XVIII)*, Bilbao, 1985.
- URRUTIKOETXEA, J., *En una mesa y compañía: caserío y familia campesina en la crisis de la sociedad tradicional*, San Sebastián, 1992.
- URRUTIKOETXEA LIZARRAGA, José, "Ets-adi" / "Etse" ("Etxe") - "Familia" / "Casa": a los terrenos de la historia por los vericuetos de la idealización y la ideologización", en *Vasconia*, 28 (1999), pp. 271-294.
- USUNARIZ GARAYOA, Jesús María, "Un aspecto de la emigración navarra hacia el Nuevo Mundo durante el siglo XVIII: las remesas indianas", en *Príncipe de Viana*, Anexo 13 (1991), pp. 383-392.
- VAL VALDIVIESO, María Isabel del, "Vizcaya frente al obispo de Calahorra a finales de la Edad Media", en *Simposio nacional sobre ciudades episcopales*, pp. 81-90, Zaragoza, 1986.

VALDÉS DÁVILA, Alma Victoria, "¿Para Garantizar la Vida Después de la Muerte...? Legados Píadosos al Doblar del Siglo XVIII", en *Historia y Grafía*, 10 (1998), México, 1998.

VÁZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA, José M., *Las capellanías colativo-familiares*, Pamplona, EUNSA, 1992.

VILLOTA, Juan Luis, "El País Vasco visto por Jovellanos a finales del siglo XVIII", en *Estudios Vizcaínos*, 7-8, (1972), pp. 12-54.

VINAO FRAGO, Antonio, "El Colegio-Seminario de San Fulgencio: Ilustración, Liberalismo e Inquisición", en *Áreas. Revista de Ciencias Sociales*, 6 (1986), pp. 19-48.

VINCKE, Johannes, "El derecho de patronato de la Corona de Aragón en el Reino de Valencia", en *Primer Congreso de Historia del País Valenciano*, vol. II, pp. 837-849, Valencia, Universidad de Valencia, 1980.

VON WOBESER, Gisela, *Vida eterna y preocupaciones terrenales. Las capellanías de misas en la Nueva España, 1700-1821*, México, UNAM, 1999.

VOVELLE, M., *La mort et l'occident de 1300 a nos jours*, París, 1983.

YAMAMICHI, Yoshiko, "Discursos sobre una Constitución Religiosa de Juan Antonio Llorente y su censura por el obispado de Barcelona en 1820", en *Estudios de Historia de España*, 11 (1997).

ZUNZUNEGUI, José, "Intervención de los legos en la colación de Beneficios eclesiásticos", en *El Reino de Navarra y su obispado de Pamplona durante la primera época del cisma de Occidente*, San Sebastián, 1942, p. 263-273.

**ASÍ EN LA TIERRA COMO EN EL CIELO**  
**Familia e Iglesia: intereses contrapuestos en torno a una**  
**capellanía guipuzcoana (1778-1866)**

**Apéndices**



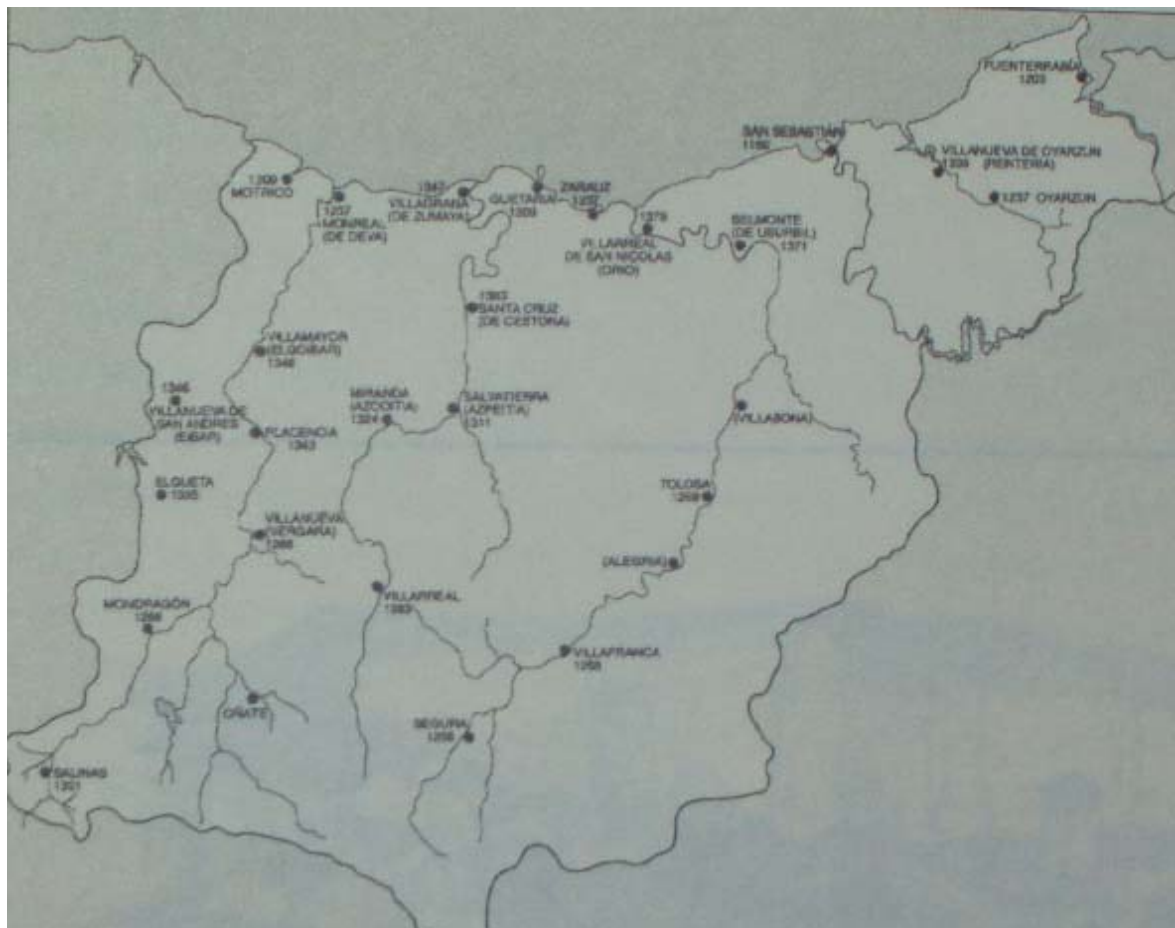
## **Apéndice 1**

### **Documentos gráficos**



Mapa de Guipúzcoa, *Theatrum orbis terrarum*, Abraham Ortelius, Amberes, 1588

(Mapas tomados de CARO BAROJA, Julio, *Los vascos y la historia a través de Garibay*, Edición de Guadalupe Rubio de Urquía, Caro Raggio ed., Madrid, 2002)





Soraluze - Placencia de las Armas. Iglesia de Santa María la Real  
Altar de Jesús Nazareno



Sorluze - Placencia de las Armas. Iglesia de Santa María la Real

## **Apéndice 2**

### **Transcripciones de documentos manuscritos**

## Documento 1

Memoria testamentaria de Juan Antonio de Azcarate. 4 de agosto de 1772. AHN, leg. 15754, 2/1, 46.

*Guadalajara y Agosto quatro de mil setecientos setenta y dos años= Memoria de la distribucion de mis bienes habidos y por haber para que mis Albaceas arreglados a esta memoria les suplico pido y ruego por el amor de Dios executen mi voluntad que es en la forma siguiente=*

### *Clausula 1ª*

*Primeramente es mi voluntad, que saquen de mis bienes y remitan á la villa de Placencia en la Provincia de Guipuzcoa mi Patria cuatro mil pesos fuertes, de modo que lleguen alla libres de todos costos para que con ellos se funde una Capellanía y el capellan tenga la obligacion de decir una Misa cantada todos los Viernes del año con diacono y subdiacono en el Altar principal de la capilla de Jesus Nazareno que es sita en la Parroquia de dicha villa, en la misma conformidad que se dice los sabados á nuestra Señora del Rosario en dicha Parroquia y acabada la misa hechará el responso dicho capellan, ó el que la dijere en la sepultura que estan enterrados mis Padres. Y es mi voluntad que para capellan se elija el Pariente mio mas cercano principiando por los descendientes de mi hermana Ana María y el patrono de la Capellanía sera el Ayuntamiento y Justicia de dicha villa para que en cualquier litigio que se pueda ofrecer entre los Parientes en la pretension de capellan decida dicho Ayuntamiento en quien mejor derechos tubiere. Y al dicho capellan que fuere le encargo asista los Domingos y fiestas de guardar á la Misa mayor y visperas, y al confesonario para el bien y consuelo de sus compatriotas.*

### *Clausula 5ª*

*Ytem se han de despachar cien pesos á la espresada villa de Placencia los ochenta pesos para que apliquen en sufragios en la citada Parroquia por las almas de aquellos á quienes yo les hice daño quando mancebo en robarles las frutas y otras trabesuras, y los veinte pesos restantes en la misma conformidad se aplicaran en sufragios en la Parroquia de San Bartolome de la villa de Elgoibar.*

### *Pie*

*Y por quanto el poder de testar tengo otorgado desde el dia veinte y nueve de Octubre del año pasado de mil setecientos sesenta y cinco, y no tengo en el que innovar y si advierto que aunque tenia desde entonces hecha una memoria de la distribucion de mis bienes, por haberse aumentado mi caudal segun parece en el valance de la tienda, que se acabo en quince de Julio de este presente año de mil setecientos setenta y dos, rompi aquella y esta solamente ha de ser valida. Y para que conste firme en este dicha ciudad de Guadalajara en siete de Agosto de mil setecientos setenta y dos años= Juan Antonio de Azcarate.*

## Documento 2

Traslado, realizado en 7 de agosto de 1822, de la escritura de fundación de capellanía por Francisco Ignacio de Ibarra, por poder que recibió de los albaceas de Juan Antonio de Azcarate. 11 de diciembre de 1778. AHN, Consejos Suprimidos, Leg. 15754, 2/1, 42vº-49.

*En el nombre de la santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, Dn. Francisco Ignacio de Ibarra Presbítero y Beneficiado de la Iglesia Parroquial Santa María la Real de esta villa de Placencia. Digo que Dn. Juan Antonio de Azcarate natural y vecino que fue de esta villa que falleció en la ciudad de Guadalajara del nuevo Reyno de Galicia el año de mil setecientos setenta y dos, en la memoria testamentaria que otorgo en siete de Agosto de mil setecientos setenta y dos por testimonio del Lizdo. Dn. Ignacio de Sierra Escribano de su Magestad, público y del cavildo de dicha ciudad de Guadalajara dispuso entre otras cosas se fundase una capellanía de principalidad de cuatro mil pesos fuertes en dicha Iglesia Parroquial de esta villa nombrando por Capellan, á sus parientes mas cercanos, y por patron á la Justicia y Ayuntamiento de esta dicha villa y por sus Albaceas testamentarios fide y comisarios tenedores de sus bienes á D. Juan de Garate y Bedoña, Dn. Andres Ignacio de Arzamendi y D. José de Sarobe quienes en cumplimiento de su encargo otorgaron Poder cumplido en dicha ciudad de Guadalajara el día seis de Octubre de mil setecientos setenta y siete años ante Antonio de Berroa Escribano de S. M. en primer lugar á favor de D. José Andres de Eguizabal así bien Presbítero Beneficiado de la citada Iglesia en segundo á D. Ramon Elías de Junguitu y Arechaga contador y tesorero de estas Reales fabricas de Armas y en tercero de mi el dicho D. Francisco Ignacio de Ibarra para que en nombre de los suso dichos procediesemos á la celebridad de la fundacion de la citada capellanía con arreglo á la clausula Primera de la referida memoria testamentaria cuyo testimonio remitieron para ello los citados testamentarios y se lo entrego al presente Escribano con el poder suso expresado para insertar aqui y su thenor uno en pos de otro es como sigue.--*

*Sello segundo seis reales, años de mil setecientos y setenta y seis y setenta y siete= En la ciudad de Guadalajara á seis de Octubre de mil setecientos setenta y siete años: Ante mi el Escribano de S. M. y testigos D. Juan de Garate y Bedoña, y D. Andres Ignacio de Arzamendi, vecinos y de este comercio, á quienes doy fe conozco; como Albaceas y testamentarios fide y comisarios de D. Juan Antonio de Azcarate defunto; y usando de la facultad, que les concede, para que puedan de mancomun, ó cada uno insolidum, dar cumplimiento á su voluntad, y en atencion de estar ausente uno de sus tres Albaceas que lo es D. José de Sarobe: digeron: que por cuanto el espresado finado en la clausula primera de su memoria testamentaria, dispone que se funde una capellanía de quatro mil pesos fuertes, servible en la Parroquial de la villa de Placencia, y a favor de los capellanes, y con las condiciones que en ella se espresan: Para que tenga debido efecto la voluntad del citado difunto, otorgan que dan su poder cumplido, bastante en derecho el que se requiera, y sea necesario, mas pueda y deba valer, en primer lugar al Bachiller D. José Andres de Eguizabal, Presbítero Beneficiado de la Iglesia Parroquial Santa María la Real de dicha villa de Placencia, en segundo á D. Ramon Elías de Junguitu Arechaga, contador y Tesorero de la Real fabrica de armas de la citada villa; y en tercero al Bachiller D. Francisco Ignacio de Ibarra Presbítero Beneficiado de la espresada Parroquia; á los tres de mancomun y á cada uno insolidum, para que en nombre de los Poderdantes y representando sus personas derechos, y acciones puedan proceder y procedan á la celebridad de la fundacion de la citada capellanía con arreglo á la enunciada clausula, y á la instruccion que les tienen dada los Poderdantes; y para ello otorguen la Escritura correspondiente con todas las clausulas substanciales, y formularies, fuerzas, obligaciones, y demas requisitos y circunstancias, que para su mayor validacion y firmeza se requieran que como quiera que pareciere fecha y otorgada, desde ahora la aprueban, confirman, ratifican, y revalidan como si á su otorgamiento presentes fuesen; pues para todo y sus incidencias, les dan y confieren este poder cumplido, amplio y sin limitacion, con libre y general administracion, y facultad, de enjuiciar, jurar y substituir nombrar substitutos, y en caso necesario, otros de nuevo que á todos relevan en forma: sin que por falta de clausula, requisito ó circunstancia de escencia ó solemnidad que para ello se requiera, y aqui no se espresen dejen cosa por obrar porque la que fuere, y necesitaren la dan aqui por inserta insinuada y repetida para que no le pare perjuicio: Y a la firmeza de este Poder y de lo que en su virtud se obrare, obligan los otorgantes los bienes de su tenencia, y los someten al fuero, y jurisdicción de los Señores Jueces y Justicias de S. M. de qualesquier parte que sean, en especial á los que de sus causas deban conocer para que á su cumplimiento los compelan y apremien, como si fuese por sentencia pasada en cosa juzgada; renuncian su fuero domicilio y vecindad, Ley si convenerit, las demas de su favor con la general del derecho: En cuyo testimonio así lo otorgaron y firmaron en este registro siendo testigos D. Tiburcio de*

*Berroa D. Jose Ildefonso Bravo y Pedro Jose de Cardenas presentes y vecinos= Juan de Garate y Bedoña= Andres Ignacio de Arzamendi= Ante mi= Antonio de Berroa Escribano Real= Sacose de su registro dia de su otorgamiento en este pliego del sello segundo= En testimonio de verdad= Antonio de Berroa Escribano Real= Los Escribanos del Rey N. S. que aqui signamos y firmamos, certificamos y damos fee que Antonio de Berroa, de quien parece signado, y firmado, el testimonio antecedente, es Escribano de S. M. fiel legal y de entera confianza; En cuya virtud á todos los autos e instrumentos que ante el susodicho ha pasado, y pasan, se les ha dado y da entera fe y credito judicial y estrajudicialmente: Y para que conste donde convenga damos la presente en la ciudad de Guadalajara capital del Reyno de la nueva Galicia de Indias á siete de Octubre de mil setecientos setenta y siete años= Y lo signo= José Vicente Maria de Berroa Escribano Real= Y lo signo= Nicolas Lopez Padilla Escribano Real= Y lo signo= José Antonio Sanchez de Lara Escribano Real.-----*

*Fundacion } D. Francisco Ignacio de Ibarra Presbitero Beneficiado de la Iglesia Parroquial Santa Maria la Real de esta villa de Placencia ante Vmd parezco como mejor haya lugar en derecho y digo que D. Juan Antonio de Azcarate natural y vecino que fue de esta misma villa que falleció en la ciudad de Guadalajara del nuevo Reyno de Galicia el año de mil setecientos setenta y dos en la memoria testamentaria que otorgo en siete Agosto de mil setecientos setenta y dos por testimonio del Licdo. D. Ignacio de Sierra Escribano de S. M. publico y de cavildo de dicha ciudad de Guadalajara dispuso entre otras cosas se fundase una capellanía con la principalidad de quatro mil pesos fuertes en dicha Iglesia como se acredita de un testimonio dado y refrendado por el referido Licdo. D. Ignacio de Sierra y porque este se halla incorporado en los autos de informacion dada por Andres de Aguirre vecino de esta dicha villa como Padre y lexítimo administrador de D. José Maria de Aguirre y Azcarate sobrino del dicho D. Juan Antonio, primer llamado para el goce de la referida capellanía cuyas diligencias pasaron por testimonio de Manuel Antonio de Larreategui Escribano del numero de esta villa el año de mil setecientos setenta y cinco y de ser yo uno de los apoderados de los Albaceas testamentarios fide y comisarios del recordado D. Juan Antonio para proceder a la institucion y fundacion de la citada capellanía, y para ello necesitar de un traslado fe haciente del recordado testimonio por tanto= A Vmd pido y suplico se sirva mandar a dicho Escribano me provea de el interponiendo Vmd. su autoridad y decreto judicial por ser asi de Justicia juro lo necesario &ª= D. Francisco Ignacio de Ibarra.-----*

(Aquí va el traslado de las cláusulas primera y quinta de la memoria testamentaria de Juan Antonio de Azcarate. Ver: Documento 1.)

*El qual dicho testimonio y poder van ciertos y verdaderos concuerdan con su original de que yo el Escribano doy fe, y usando de este ultimo documento y en atencion á haberse escusado los citados D. Joseph Andres de Eguizabal y D. Ramon Elias de Junguitu á la aceptacion de dicho Poder para los efectos en el contenidos por legitimas ocupaciones que les embaraza, en la via y forma que mas haya lugar para honrar y gloria de su Divina Magestad alibio de la Alma del dicho D. Juan Antonio de Azcarate, de sus Padres y demas de su obligacion y benditas Animas del Purgatorio instituyo y fundo la citada Capellanía en la Iglesia Parroquial de esta dicha villa nombrando como desde luego nombro por su primer capellan á D. Jose Maria de Aguirre y Azcarate hijo lexítimo de Andres de Aguirre y Ana Mª de Azcarate hermana del citado Dn. Juan Antonio con la obligacion de decir y que se diga una Misa cantada todos los viernes del año con diacono y subdiacono en el Altar principal de la capilla de Jesus Nazareno de la referida Parroquial de esta villa en la misma conformidad que se dice los sabados en el altar de Ntra Sra del Rosario y acabada la Misa se haya de hechar el responso por el capellan que fuese de esta capellanía ó el que la dijere en la sepultura en que estan enterrados los Padres del referido D. Juan Antonio de Azcarate y por Patrono de ella al Ayuntamiento y Justicia de esta villa para que en cualquiera litigio que se pueda ofrecer entre los Parientes del insinuado Dn. Juan Antonio en la pretension de esta capellanía decida dicho ayuntamiento en quien mejor derecho tubiere. Y arreglandome á la voluntad del espresado D. Juan Antonio de Azcarate encargo al dicho primer capellan y demas que en adelante fueren de esta Capellanía asista los Domingos y fiestas de guardar á la Misa mayor y visperas y al confesonario para el bien y consuelo de sus Parientes y demas feligreses de dicha Iglesia. Y para su perpetuidad señalo el redituado de quatro mil pesos fuertes que se han remitido á esta villa por los enunciados testamentarios libres de todo costo y costas los quales tengo invertidos á censo sobre fincas seguras á razon de dos y medio por ciento por Escritura que paso ante el presente Escribano el dia veinte y siete de Noviembre proximo pasado: Y pido y suplico al Señor Obispo de este obispado de Calahorra y la Calzada á su Provisor y Vicario general para que se le haga canonica institucion y colacion de dicha Capellanía para que sea perpetuamente y revocable (sic) la voluntad del espresado D. Juan Antonio de Azcarate y que se*

*haga la nombracion de sus capellanes en la forma prevenida por el en la clausula de su memoria testamentaria. Y obligo á los citados testamentarios con sus personas y bienes presentes y futuros de haber y tener y que abran y tendran por firme y valedera con las condiciones referidas esta fundacion de Capellanía y nombramiento de ella en el dicho D. Josá Maria de Aguirre y Azcarate y de entregarle la escritura censual suso declarada para que con su renta cumpla la dicha fundacion de la Capellanía con las condiciones suso expresadas. Y para que á todo lo que esta dicho por execucion con costas sean apremiados como por sentencia definitiva pasada en cosa juzgada doy Poder cumplido á qualesquier Jueces y Justicias de S. M. á cuya jurisdiccion someto a mis constituyentes y renuncio el propio fuero y domicilio de ellos y la ley si convenerit de Jurisdictione omnium judicum con las demas leyes y derechos de su favor y la general del derecho en forma. En cuyo testimonio así lo otorgo ante el presente Escribano en dicha villa de Placencia á once de Diciembre del año de mil setecientos setenta y ocho siendo testigos Ignacio de Larreategui, Martin de Larreategui y Juan de Barturen vecinos y estante en ella firmo dicho Señor otorgante y en fe de ello yo el Escribano= D. Francisco Ignacio de Ibarra= Ante mi= Manuel Antonio de Larreategui.*

### Documento 3

Pedimento de Bentura de Molina en nombre de José María de Aguirre, dirigido al tribunal eclesiástico de Calahorra, para que se apruebe la capellanía colativa que mandó fundar Juan Antonio de Azcarate, adjudicándosela a Aguirre como primer llamado a la misma. 27 de diciembre de 1778. ACC, Capellanías, 16/239, 1.

*Bentura de Molina, en nombre de Dn. Joseph Maria de Aguirre y Azcarate, estudiante natural de la villa de Placencia, como mas haya lugar: Digo, que á mayor honra y gloria de Dios nuestro Señor, y sufragio de las benditas Animas del Purgatorio, Dn. Juan Antonio de Azcarate, su tio, residente que fue en los Reynos de Indias, natural, y vecino de la referida villa de Placencia mando fundar en la Iglesia Parroquial de Santa Maria la Real de ella, una capellania perpetua colatiba, destinando por Capital, quatro mil pesos fuertes, y por primer poseedor, á mi parte, segun todo resulta de los instrumentos que con la devida solemnidad presento, y juro, en cuia vista*

*A Vm. suplico, que recivida Información, que incontinenti ofrezco por el tenor de este pedimento, como tambien de no seguirse perxuicio alguno á tercero en que lleve efecto la referida fundacion de Capellanía, ser mi parte primer llamado á su goce, y de haverse impuesto á censo sobre hipotecas ciertas y seguras, los quatro mil pesos fuertes remitidos y destinados para capital, al premio de dos y medio por ciento, se sirva aprobar, y confirmar dicha fundación de Capellanía erigiendo sus vienes de temporales, y Profanos en espirituales, y eclesiasticos para que perpetuamente gocen del fuero de tales, y declarando tocar, y pertenecer á mi parte su goce, y obtención, adjudicarsela, y mandando se dé el testimonio conducente para solicitar la prima tonsura, y en vista de el titulo de ella, despachar á su favor el de Colación, y Canonica institucion de la misma Capellania, para que á su titulo, pueda ascender al sacerdocio, á que aspira, en que recibirá mrd. con X<sup>a</sup> que pido, juro lo necesario &<sup>a</sup>*

Molina

## Documento 4

Auto del Provisor y Vicario General del Obispado de Calahorra, de aprobación de la fundación, erección de los bienes temporales en espirituales, y adjudicación de capellanía perpetua eclesiástica colativa. 20 de abril de 1779. ACC, Capellanías, 16/239, fol. 59vº.

*En la Ciudad de Calahorra à veinte de Abril de mil setecientos setenta y nueve años, el señor Dr. Dn. Joseph Angel Ruiz de Otheo Arzediano titular Dignidad de la Santa Iglesia de esta ciudad Provisor y Vicario general de este obispado de Calahorra y La Calzada, por el Illmo Señor Dn. Juan de Luelmo y Pinto obispo de dicho obispado del Consejo de S.M. &ª= Haviendo visto estos autos que son entre partes de la una Dn. Joseph Maria de Aguirre y Azcarate, estudiante natural de la villa de Placencia, y de la otra el Fiscal general ecco. de este obispado, sobre la aprovacion, ereccion de bienes, y adjudicacion de la capellania que en la Parrochial de dicha villa, mando fundar Dn. Juan Antonio de Azcarate natural que fue de ella, y residente en la ciudad de Guadalajara en los reynos de Indias con el capital de quatro mil pesos fuertes, y en virtud de su disposicion fundo Dn. Francisco Ignacio de Ibarra Presbítero Beneficiado de dicha Iglesia, por testimonio de mi el Notario: Dijo que por lo que de dichos autos resulta, Aprobava, y confirmava, aprovó, y confirmo su merced la dicha fundacion de capellania en quanto há lugar de derecho, y sus bienes erigio de temporales y profanos en espirituales y eclesiasticos para que imperpetuum gozen del fuero de tales, y declarava y declaró tocar y pertenezer su goze, y obtencion al expresado Dn. Joseph Maria de Aguirre como primer llamado à ella, y se la adjudicava y adjudico, y mandava, y mandó se le dé el testimonio conducente para que solicite la prima tonsura, y conseguida con vista del titulo de ella se le reserva despachar colazion. Y asi mismo mando que à dicho Dn. Joseph Maria se le de el testimonio correspondiente con insercion de dicha fundacion, y de este auto, y en relacion del censo sobre que esta fundada, y su ratificacion ultimamente presentada, que se pondra por principio un libro, que hará de conveniente tamaño que lo presentará en todas las visitas. Y por este su auto asi lo proveió, mandó, y firmó su merced de que doy fee=*

*Dr. Otheo*

*Ante mi  
Manuel de Vinuesa*

## Documento 5

Colación y canónica institución a Josef María de Aguirre. 11 de junio de 1779. ACC, Capellanías, 16/239, fol. 61.

*Nos el Dr. Dn. Antonio Carrillo Maioral Canonigo de la Santa Iglesia de esta ciudad Provisor y Vicario general interino de este obispado de Calahorra y La Calzada por el Illmo. Sr. Dn. Juan de Luelmo y Pinto obispo de dicho obispado del Consejo de S.M. &ª= Al Patrono o Patronos Censualistas Arrendatarios y demas personas à cuio cargo es o fuere la paga de las rentas de la capellania nuevamente fundada en la Iglesia Parrochial de la villa de Placencia en conformidad de la voluntad de Dn. Juan Antonio de Azcarate residente que fue en los reynos de Indias, hacemos saver que sobre su aprobacion, ereccion de bienes y adjudicacion se litigo pleito en este Tribunal, entre Dn. Joseph Maria de Aguirre y Azcarate natural de dicha villa, y el fiscal general eclesiastico de este obispado, en el que estando en estado, se dio auto en veinte de Abril pasado de este año, aprovando y confirmando la escritura de fundacion de la citada capellania en quanto à lugar de derecho, y erigiendo sus bienes de temporales, y profanos, en espirituales, y eclesiasticos para que imperpetuum gocen del fuero de tales, declarando tocar y pertenecer su goce y obtención al expresado Dn. Joseph Maria de Aguirre y Azcarate como primer llamado à ella, adjudicandosela, y mandandole dar el testimonio conducente para que solicitase la prima tonsura; y haviendola conseguido con vista del titulo, que presentó ante Nos, le mandamos despachar colacion, en cuia consecuencia y mediante constarnos de la haviidad y suficiencia del susodicho, porque le dispensamos en el examen que devia preceder, y llegar sus rentas à las necesarias para quedar en el estado de colativa Beneficio eclesiastico, de ella le hacemos colacion y canonica institucion por imposicion de un Bonete que pusimos en caveza de Bentura Molina su Procurador en su nombre estando ante Nos de rodillas, y le decretamos expedir titulo en forma, que es el presente. Por cuio tenor mandamos à qualquiera Notario o Escribano que sea requerido de àl dicho Dn. Joseph Maria de Aguirre, ò à quien su poder hubiere la posesion real actual, corporal velquasi de dicha capellania y bienes de su fundacion, y en adelante le haian y tengan por tal capellan de ella y le acudan con los frutos, rentas, y emolumentos que le tocan y pertenecen, guardandole los honores y preeminencias que le deben ser guardadas, y lo cumplan asi pena de excomunion maior y de cinquenta ducados aplicados conforme a concesiones Apostolicas, y con apercibimiento que procederemos a lo demas que en derecho haia lugar. Dada en Calahorra a onze de Junio de mil setecientos setenta y nueve= Dr. Dn. Antonio Carrillo Maioral= Por mdo. del Sr. Provisor= Manuel de Vinuesa.*

## Documento 6

Memorial dirigido al Alcalde y municipales de la villa de Placencia por Miguel Antonio de Jauregui, en el que solicita, en representación de su mujer María Bárbara de Aguirre, la capellanía vacante por fallecimiento de José María de Aguirre, por ser "de sangre y en su principio merelega". 14 de julio de 1812. AHN, Consejos Suprimidos, Leg. 15754, 2/1, 49vº-50.

*Señores Alcalde y municipales de la villa de Placencia= Placencia 14 de Julio de 1812= Muy Señores míos: por fallecimiento de mi hermano político D. José María de Aguirre Cura y Beneficiado de racion entera de la Iglesia Parroquial de esta villa, queda vacante la capellanía que fundo D. Juan Antonio de Azcarate con obligacion de celebrar misa todos los vienes del año en la capilla de Jesus Nazareno de esta Iglesia con otras cargas que impone al capellan que fuere: Omito el decir a Vmds por menor las demas circunstancias porque son muy sabidas y notorias especialmente a Vms, y como dicho mi hermano político obtubo esta capellanía por pariente mas cercano del fundador queriendo y mandando que fuesen preferidos los hijos de su hermana D<sup>a</sup> Ana Maria de Azcarate por cuyo motivo fue nombrado D. José Maria de Aguirre primer capellan por ser hijo lexítimo de dicha D<sup>a</sup> Ana Maria. En representacion de mi muger D<sup>a</sup> Maria Barbara hermana de dicho D. Josá Maria solicito dicha Capellanía por ser de sangre y en su principio merelega pues aunque el primer capellan logro el espiritualizarla, no podia hacer en notable perjuicio del inmediato sucesor como en efecto lo sería si se estendiese á los demas; para que no se subceda y siga el orden regular para que se fundo, esto es, para sufragio de las almas de los Padres del fundador y &<sup>a</sup> cumpliendo con las cargas que le puso, por medio de un sacerdote, inmediatamente sirviese el resto del importe de dicha capellanía de sustento á quien la gozare: repito a Vms que yo en representacion de mi muger, deseo y quiero pedir en donde convenga el que la espresada capellania se adjudique á mi muger bajo de la obligacion de que cumpla debidamente con sus cargas, pero que el residuo ó remanente sirva para su alivio y parte de manutencion atendiendo ademas á los dilatados meritos que tengo contraidos en estos treinta y ocho años de enseñanza publica con que á la nacion y al Rey he servido en el Seminario de Vergara sin intermision de tiempo en esta dilatada serie de treinta y ocho años= Siendo á Vms notorio quanto digo y sabiendo que de la aplicacion de esta capellanía a mi y a mi muger en la forma que digo lejos de resultar agravio al contrario se sigue mayor beneficio en atender a mi distinguido merito y al derecho que por mi muger tengo= Suplico a Vmds con mis mayores veras en que en respuesta al pie de esta me digan que Vmds penetrados de mi razon haran porque logre mi intento aprobando mi pretension en todo y por todo= Ntro Señor guarde a Vms muchos años que puede y desea este su mas atento y obligado seguro servidor Q.S.M.B.= Miguel Antonio de Jauregui.*

## Documento 7

Presentación, por el Consejo Municipal de Placencia, como patronos, de Miguel Antonio de Jauregui y de Barbara de Aguirre para el disfrute de la capellanía. 14 de julio de 1812. AHN, Consejos Suprimidos, Leg. 15754, 2/1, 50-51.

*Congregados como lo tenemos de uso y costumbre en la sala de la casa del consejo de esta villa de Placencia Dn. Martin Ignacio de Arizaga Alcalde y Juez ordinario D. José Manuel de Lascurain y D. Angel de Galarraga Rxsidores que componen la mayor y mas sana parte del cuerpo Municipal prestando en caso necesario voz y caucion por D. José de Aguirrebeña ausente como Patronos unicos que somos de la Capellanía merelega fundada por D. Juan Antonio de Azcarate natural y vecino que fue de esta villa habiendonos enterado de la carta antecedente: decimos que por cuanto nos consta es publico y notorio ser cierto y positivo la narrativa de ella por lo que usando del derecho que nos compete como tales patronos adjudicamos y presentamos dicha Capellanía en D. Miguel Antonio de Jauregui y D<sup>a</sup> Maria Barbara de Aguirre conjuntos lexitimos y esta parienta de sangre del mencionado D. Juan Antonio de Azcarate, entendiendose sin perjuicio. Placencia y Julio 14 de 1812= Martin Ignacio de Arizaga= José Manuel de Lascurain= Angel de Galarraga= Por el consejo municipal de Placencia su secretario= Manuel Antonio de Larreategui.*

## Documento 8

Posesión real, corporal, velquasi de la capellanía, dada a Miguel Antonio de Jauregui, en representación de su mujer María Bárbara de Aguirre. 1 de agosto de 1812. AHN, Consejos Suprimidos, Leg. 15754, 2/1, 52.

*En la villa de Placencia y casa propia y de habitacion morada que fue de D. Jose Maria de Aguirre, Presbitero Beneficiado de entera racion como Cura de la Iglesia Parroquial Santa Maria la Real de esta dicha villa, y capellan merelega (sic) que instituyo y fundo D. Juan Antonio de Azcarate natural y vecino que tambien fue de esta dicha villa, á primero de Agosto de mil ochocientos y doce, por testimonio de mi el infraescrito Escribano de S. M. del numero unico de esta referida villa, Antonio de Barrenechea Alguacil del juzgado de ella en uso de la comision conferida en el auto antecedente dio posesion, real, corporal, velquasi de la citada capellanía merelega, en voz, nombre, y representacion de D<sup>a</sup> Maria Barbara de Aguirre á Dn. Miguel Antonio de Jauregui su conjunto legitimo vecinos de la villa de Bergara, el qual la aprendio y tomo habiendose apoderado del Libro en que se halla estampada dicha capellania, y demas diligencias concernientes á ella, y otros Papeles, cuya posesion la tomo quieta y pacificamente, en la que le amparo el mencionado Alguacil para que no sea despojada de ella dicha D<sup>a</sup> Maria Barbara y nadie la inquiete ni perturbe pena de forzadores y de cinquenta mil mrs aplicados en la forma ordinaria de todo lo qual dicho D. Miguel Antonio de Jauregui, pidió se le dé y provea de testimonio en manera fehaciente á lo qual se hallaron presentes por testigos, José Andres, José Alejo de Maiztegui y Antonio Ramon de Zameza vecinos de esta villa firmó dicho D. Miguel Antonio, no lo hizo el mencionado Alguacil por no saber y á su ruego lo verificó uno de dichos testigos y en fe y certificacion de todo ello yo el dicho Escribano= Miguel Antonio de Jauregui= Francisco José Alejo de Maiztegui= Ante mi= Manuel Antonio de Larreategui.*

## Documento 9

Dictamen del Doctor Juan Bautista de Cortavarria en respuesta a la consulta realizada por Bárbara de Aguirre. 23 de septiembre de 1817. AHN, Consejos Suprimidos, Leg. 15754, 2/2, 66-69.

*Departa de D<sup>a</sup> Maria Barbara de Aguirre, y Azcarate se me ha hecho relación de que habiendo vacado hace ya cinco años la capellania fundada por Dn. Juan Antonio de Azcarate en la villa de Placencia, el Ayuntamiento y Justicia de esta como Patrono legítimo que es por disposicion del mismo fundador, hizo formal presentacion en ella como en pariente mas cercana, que es de linea predilecta, y se halla en su pacífica posesión en todo el referido tiempo de cinco años; en cuyo supuesto con ocasión de haber llegado a su noticia algun rumor de que se piensa en turbarle de dicha posesión, y disputarle el goce sucesivo a la sombra y pretexto de la fundacion de la misma capellania, presentandome el contexto substancial de las cinco clausulas de ellas se me pregunta= ¿Si con arreglo á ellas podra en dichas circunstancias considerarse con titulo eficaz, y fundado para continuar gozandola como hasta aqui?= A cuya pregunta satisfaciendo con vista de dichas clausulas, y despues de examinado el espiritu de ellas, digo que la precitada presentación en si reúne todos los caracteres de justa y legitima, como hecha por Patrono competente, en pariente de grado mas proximo, y linea predilecta, y en forma publica judicial, y la pacífica posesion de cinco años continuados á ciencia y paciencia de los actuales competidores presuntos, le corrobora, y aumenta vigor, y subsistencia legal, en cuyo concepto tiene la D<sup>a</sup> Maria Barbara un derecho autorizado y eficaz para continuar en el goce de dicha capellania mientras sus dias: Me fundo en que siendo la voluntad del fundador la suprema ley, que en la materia debe dar norma, resulta aquella reducida en lo substancial, á que al paso que desea sufragar a las almas de sus padres y deudos, proporcionando justamente una misa cada vienes, y algun desahogo de confesonario en los Domingos al vecindario de Placencia, trata de faborecer a sus interesados, principalmente a los descendientes de su hermana D<sup>a</sup> Ana Maria, aplicandoles el producto de los 80 mil reales que era el capital de la capellania, con su cargo respectivo, baxo la inspeccion de dicha villa, a la que nombró por Patrona con facultad de determinar las diferencias que quiza se suscitasen en el particular: en cuio supuesto siempre que se llegue a salvarse dichos extremos, esto es, el sufragio semanal con misa y responso, y alguna asistencia al confesonario, y la aplicacion del producto, y su cargo respectivo a la linea de parientes asignada, queda cumplida la voluntad del fundador; y como en el caso en cuestión la D<sup>a</sup> Maria Barbara se supone hija legítima de dicha D<sup>a</sup> Ana Maria en quien como en tal descendiente de linea predilecta hizo el Ayuntamiento de Placencia la presentación; y que al mismo tiempo cumple con los sufragios y ministerios prescritos, resulta legitima dicha presentacion hecha en ella, y en su virtud funda un autorizado derecho al goce de la capellania; particularmente hallandose en pacífica posesion de ella por tantos años, por ser constante que la posesion, que provenga de justo titulo, y sea continuada pacificamente por años, participa de efectos autorizados, que le presta la ley= Opondrase acaso en este particular el contexto literal de las primeras expresiones de la 2<sup>a</sup> clausula de la fundacion, en que suena, que el capellan tenga obligacion de decir una misa todos los vienes del año; y el de la 5<sup>a</sup> en que se encarga al mismo, asista á misa mayor, visperas, y confesonario en los Domingos y fiestas de guardar; deduciendose quiza de aqui una calidad sacerdotal de la capellania, y excluyendo de ella en este concepto a las hembras como incapaces de ser sacerdotes, ó decir misa, y de asistir al confesonario; pero convence de lo contrario en esta parte la espresa disposicion final de dicha clausula 2<sup>a</sup> en la que despues de haberse de la dicha obligacion de decir misa concluye en seguida diciendo que "acabada la misa, hechara el responso dicho capellan ó el que la dijese" De lo que se colige claramente que no es preciso que el mismo capellan diga la misa, y heche el responso, sino que igualmente las puede hacer decir, y hechar á otro sacerdote; pues el fundador no se lo prohíbe, antes le deja entera libertad de hacerlo, segun lo indica dicha alternatiba "el capellan ó el que la dijere" Y siendo asi respecto de la misa, y responso, con mucha mas razon en quanto a la asistencia festibal de oficios Divinos, y confesonario, pues que en orden á ella tampoco hay impuesta obligacion, sino un mero encargo; de suerte que lo que precisamente manda el fundador es el que se verifique el sufragio, diciendose la misa, y hechandose el responso semanalmente, pero de ningun modo que esta misa, y responso se diga, y heche por el mismo capellan: Para esto tenemos por otra parte que en la misma conformidad pone por requisito preciso en orden a la sucesion de la capellania, que para esto sean preferidos los descendientes de la D<sup>a</sup> Ana Maria su hermana, principiandose por ellos, y no dando lugar á otra linea mientras existan descendientes de ella: Con que es decir en substancia, que recayendo la presentacion de la capellania en descendientes de dicha linea (qual es la D<sup>a</sup> Maria Barbara) y en verificandose (como tambien sucede de parte de ella) el cumplimiento de la obligacion de misa, y responso, y del encargo de la asistencia á oficios Divinos, y confesonario (sea quien fuere el que diga la misa, heche el*

responso, y asista a dichos ministerios de Iglesia) esta salvada la voluntad del fundador, y resulta de consiguiente autorizado el derecho de dicha D<sup>a</sup> Maria Barbara al goce sucesivo mientras sus días= Tampoco puede obstar en la materia la circunstancia de que aún se hubiese ultimamente colado la capellanía por el comisionado Dn. Francisco Ignacio de Ibarra; porque en primer lugar el fundador no ordenó que precisamente hubiese de ser espiritualizada, ó colativa, sino que su voluntad aparece reducida unicamente á que con los 80 mil reales se fundase una capellanía, y esta igualmente podía entenderse merelega con carga de los referidos sufragios que colativa, que si se ha de formar concepto de su intencion por el resto de las siguientes clausulas, parece haber sido esta mas adaptable a la primera calidad merelega, supuesto que llamando al goce á los descendientes en general de una linea en primer lugar, y en su defecto a los de otra, les dejaba libertad de poder cumplir por tercera persona las cargas prescritas, cuyo supuesto puede inclinar a dudar si dicho comisionado tubo, ó no facultades, para proceder á la espiritualización: Prescindiendo de esto aún quando por el mismo hecho de no haber prevenido el fundador espresamente que fuese merelega, ni de consiguiente prohibido la espiritualización, se quiera suponer que se le dejaba libertad de espiritualizarla, y husando de dicha libertad la haya hecho colativa, de todos modos esta gestion delegada debe entenderse en terminos que guarde consecuencia con lo dispuesto por el mismo principal, y no se oponga a las clausulas de la fundacion ordenadas por este, interín no resulten franqueadas facultades aún para alterar sus mismas disposiciones fundamentales; y como en las clausulas de la fundación aparece espresamente predilecta la linea de descendientes de D<sup>a</sup> Ana Maria, en terminos que es la primera llamada al goce, y sin extinguirse del todo ella no puede pasarse á otra; como el concepto general de descendientes abraza igualmente varones, y hembras; y a mas por la dicha fundación se deja la libertad de desempeñar por tercera persona los ministerios prescritos en sufragio de las almas de sus deudos, y utilidad del vecindario de Placencia, se hace consiguiente que apesar de dicha espiritualización debe quedar imvariable aquel derecho que por la misma fundación se habia radicado ya en favor de los descendientes de la D<sup>a</sup> Ana Maria, entendiendose el resultado de la tal espiritualización en terminos que pueda valerse de ella el presentado legitimamente, y ordenarse a su titulo siendo capaz, si es que le conviniese; pero de ningun modo en el concepto de que altere el orden de los llamamientos espresos en la misma fundacion , ni en el de que precisamente obligue á ordenarse á titulo de ella al pariente de la linea correspondiente, sea varon, ó hembra, en quien hubiere recaydo devidamente la presentación, puesto que segun la misma fundación tiene libertad de desempeñar por tercera persona los ministerios, y cargas de su incumbencia. Asi lo siento, salbo meliori X<sup>a</sup>= Oñate veinte y tres de Septiembre de mil ochocientos diez y siete= Dr. Dn. Juan Bautista de Cortavarria=

## Documento 10

Dictamen del Licenciado José de Apoita Mallagaray ante la consulta realizada por Miguel de Mendiguchia acerca de sus derechos a la capellanía. 20 de diciembre de 1817. AHN, Consejos Suprimidos, Leg. 15754, 2/2, 62-64.

*Dn. Juan Antonio de Azcarate natural de la villa de Placencia por su memoria testamentaria que otorgo en siete de Agosto de mil setecientos setenta y dos ante el Escribano Dn. Ignacio de Sierra en la ciudad de Guadalajara del nuevo Reyno de Galicia, mandó se fundase una Capellanía en la Parroquial de dicha villa de Placencia dotandola con quatro mil pesos fuertes de capital é imponiendo al capellan la obligacion de decir misa cantada con Diaconos en todos los vienes del año, y echar responso en las sepulturas de sus Padres, encargandole al mismo tiempo la asistencia a la misa mayor visperas, y confesonario en todos los Domingos, y fiestas de Guardar: Manifestó su voluntad de que para Capellan se elijiese al Pariente suio mas cercano principiando por los descendientes de Ana Maria su hermana, y de que el Patrono de dicha Capellanía fuese el Ayuntamiento y Justicia de la referida villa de Placencia: En vista de esta disposicion, y poder formal de los Albaceas, y testamentarios de dicho Dn. Juan Antonio de Azcarate hizo fundación en toda forma de la indicada Capellanía Dn. Francisco Ignacio de Ibarra Presvitero Beneficiado de Placencia el dia once de Diciembre de mil setecientos setenta y ocho ante el Escribano Dn. Miguel (sic) Antonio de Larreategui nombrando por primer Capellan á Dn. José Maria de Aguirre con las obligaciones insinuadas, y encargo de asistencia á Misas maiores visperas, y confesonario y pidiendo al Illmo Señor obispo de este obispado ó su Provisor Vicario General, se sirviese hacer la canonica institucion para perpetuar la voluntad del principal fundador Dn. Juan Antonio de Azcarate: Hecha en efecto la canonica institucion en el nominado Dn. José Maria de Aguirre la obtubo este habiendose ordenado á titulo de ella hasta que murió en el año de mil ochientos y doce, y desde entonces percibe sus rentas D<sup>a</sup> Barbara de Aguirre hermana de él, y mujer lexitima de Dn. Miguel Antonio de Jauregui vecinos de la villa de Vergara sin embargo de haber estado dicha Capellanía en concepto de Colatiba.*

*En este estado se me pregunta por parte de Dn. Jose Maria de Mendiguchia hijo lexitimo de Domingo de Mendiguchia y de Josefa de Olañeta; nieto de Miguel de Mendiguchia, y de Ana M<sup>a</sup> de Azcarate Gongueta; visnieto de Jose de Azcarate Gongueta, y Ana María de Irigoen; y tercer nieto de Juan Garcia de Azcarate, y Graciana de Gongueta Abuelos estos del fundador Dn. Juan Antonio de Azcarate= si la referida D<sup>a</sup> Barbara de Aguirre puede tener derecho fundado para percibir los productos de la citada Capellanía, ó si esta corresponde al consultante como pariente mas cercano del fundador, y puede pretender su presentacion con exito favorable sin embargo de no hallarse tonsurado, y si con deseos de entrar en el Estado Eclesiastico.= He visto los documentos de fundacion, y enterado de ellos en contestacion a la pregunta Digo, que la Capellanía de que se trata debe considerarse Eclesiastica, y colatiba; ya por la expresion general del fundador que manifestó su voluntad de que se fundase una Capellanía pues que por lo mismo hecho es visto querer arreglarse a la disposicion del derecho segun el que quando se trata de fundacion de capellanías deben entenderse Eclesiásticas no expresandose lo contrario; ya porque las cargas, y obligaciones de celebrar misas, y asistir a las populares visperas, y confesonario son propias de fundaciones Eclesiasticas, y conformatorias de la razon precedente; ya por ultimo porque en la misma fundacion se suplico la canonica institucion para perpetuar la fundacion, y echa esta Eclesiastica como se hizo por la despachada al primer capellan no puede salir de esta clase ni reducirse á Laical. Siendo pues Eclesiastica la citada Capellanía no puede obtenerla muger alguna, ni percivir sus productos como propios, y qualquiera posesión que hubiese aprendido D<sup>a</sup> Barbara de Aguirre fué nula, aunque hubiese precedido nombramiento, ó abilitación del Patrono el Ayuntamiento, y Justicia de la villa de Placencia que tambien es de ningun efecto por falta de idoneidad en la persona nombrada.= Por consiguiente debe procederse al nombramiento de persona idonea que sea el Pariente mas cercano del fundador para la obtencion de la expresada Capellanía, y siendo Dn. Jose Maria de Mendiguchia, segun se supone debe hacerse en este la presentación sin embargo de no hallarse tonsurado, pues no es impedimento esta circunstancia en las capellanías de sangre siempre que se disponga a recibir la prima tonsura para el tiempo que el tribunal le señale á efecto de hacerle la canonica institucion.= A el intento de dicho Mendiguchia consultante debe este hacer la solicitud de la presentacion por el Memorial que para ello tiene dispuesto, y caso de no estimarlo el Ayuntamiento, y Justicia de Placencia recurrir con el testimonio de la negativa al Tribunal Eclesiástico en donde considero será favorable el exito= Asi lo siento salbo X<sup>a</sup>. Durango y Diciembre veinte de mil ochocientos diez y siete= Lizdo. Dn. José de Apoita Mallagaray=*

## Documento 11

Memorial de Miguel de Mendiguchía (aparece como José María de Mendiguchia, aunque en la relación de firmantes aparece como Miguel) dirigido a los Señores Justicia y Reximiento de la villa de Placencia. 12 de noviembre de 1817. AHN, Consejos Suprimidos, Leg. 15754, 2/2, 64-65.

*Jose Maria de Mendiguchia natural de la villa de Elgueta con el respeto debido hace presente á V.S. Que por fallecimiento de Dn. Jose Maria de Aguirre ha quedado vacante la Capellanía fundada en la Iglesia Parroquial de esta villa por Dn. Juan Antonio de Azcarate, natural y vecino que fue de ella. En la memoria testamentaria en que se hizo la fundacion previno espresamente el fundador que se eligiese para capellan el pariente suyo mas cercano principiando por los descendientes de su hermana Ana Maria de Azcarate, y nombró por Patrono de la Capellanía a la Justicia y Regimiento de esta misma villa para que pudiese decidir en qualquiera litigio ó disputa que ocurriese adjudicandola a quien mejor derecho tubiera. Muerto el primero y ultimo poseedor Dn. Jose Maria de Aguirre, al esponente toca derechamente la capellanía, porque es hijo lexítimo de Domingo Mendiguchia y Nieto de Miguel de Mendiguchia y Ana Maria de Azcarate que fue prima carnal del fundador lo que acredita con el arbol de parentesco y partidas de bautizados y casados que presenta, y el pariente mas cercano de quantos pueden presentarse pretendientes a la Capellanía. Sin embargo de esto que es publico y notorio, y esta pronto a justificarlo en debida forma, hace ya quatro años poco mas ó menos que esta vacante la referida Capellanía y gozando sus rentas D<sup>a</sup> Barbara de Aguirre muger lexítima de Dn. Miguel Antonio de Jauregui vecino de Vergara y hermana del ultimo poseedor, contra todo derecho sin titulo ninguno y contra las miras del fundador, y en perjuicio conocido del exponente. La Capellanía es indudablemente eclesiastica y colativa: por consiguiente no puede obtenerla ni gozarla una muger. Son personales las obligaciones que tiene sobre si de decir una Missa y hechar el responso, asistir los dias de fiesta á Misa mayor y visperas, y al confesonario, que no las puede desempeñar una muger. En esta segura inteligencia y en la de que ya es tiempo de que se provea dicha Capellanía y de que no hay ninguno de los parientes del fundador que se halle en mejor grado ni en disposición de cumplir personalmente las obligaciones. Suplica a V.S. rendidamente se sirva hacer en el desde luego la presentación de la mencionada Capellanía, y en defecto proveerle del testimonio correspondiente para el uso de sus legítimos derechos. Así lo espera de la vondad y justificacion de V.S. cuius vida guarde Dios muchos años. Elgueta y Noviembre doce de mil ochocientos diez y siete= Miguel de Mendiguchia= Señores Justicia y Reximiento de la villa de Placencia.*

## Documento 12

Memorial de Miguel Antonio de Jauregui solicitando del Ayuntamiento de Placencia se sirva declarar que no hay facultades en él para acceder a la solicitud de Mendiguchia. 27 de enero de 1818. AHN, Consejos Suprimidos, Leg. 15754, 2/2, 78vº-79.

*Señores del Ayuntamiento de la N. villa de Placencia= Dn. Miguel Antonio de Jauregui marido y conjunta persona de D<sup>a</sup> Maria Barbara de Aguirre evacuando el traslado que se le ha conferido del Memorial presentado por Dn. Miguel de Mendiguchia vecino de la villa de Elgueta, por el que solicita que V. haga en el el nombramiento de capellan de la capellania mandada fundar por Dn. Juan Antonio de Azcarate como Patrono de ella, vaxo de unos supuestos inciertos, con el debido respecto le expone: que dicha solicitud no puede tener lugar en V. lo primero por las razones, que contiene este dictamen del Dr. Cortavarria, que presento por el que y por otra consulta dada por el Dr. Dn. Francisco Xabier de Ureley el dia cinco de Mayo de mil setecientos setenta y ocho resulta, que se le conceptua por capellania merelega, y lo segundo porque V. como Patrono de ella hizo su adjudicacion y presentacion el dia catorce de Julio de mil ochocientos y doce, en la referida D<sup>a</sup> Maria Barbara de Aguirre mi lexitima consorte, y en su virtud el dia primero de Agosto del mismo año aprendio la posesión de dicha Capellania merelega Judicialmente (y desde entonces esta cumpliendo sus cargas, sin embargo de que no se cobran por haora los productos) como resulta todo por este testimonio que en devida forma exive, y pide su debolucion a su tiempo: en estas circunstancias por el citado nombramiento hecho en dicha D<sup>a</sup> Maria Barbara muger del esponente fenecieron sus facultades para hacer mas nombramientos por muerte de Dn. Jose Maria de Aguirre poseedor anterior y se privo de hacer otro, hasta otra bacante, porque semejantes nombramientos hechos una vez, no se pueden reiterar en favor de otros en cuya atencion= A V. suplica con toda sumisión, que habiendo por presentados, y exhibidos la referida consulta y testimonio de nombramiento y posesion, se sirva declarar que no hay facultades en V. para acceder a la solicitud del citado Mendiguchia, cuya gracia espera de su notoria justificacion= Dios guarde a V muchos años como lo desea su mas atento y seguro servidor Q.S.M.B.= Vergara veinte y siete de Enero de mil ochocientos diez y ocho=*

## Documento 13

Auto Asesorado del Alcalde de Placencia, con acuerdo de asesor, por el que se declara no haber lugar por ahora al nombramiento solicitado por Mendiguchia. 29 de enero de 1818. AHN, Consejos Suprimidos, Leg. 15754, 2/2, 80.

*Mediante á que por el testimonio presentado por Dn. Miguel Antonio de Jauregui Marido lexítimo de D<sup>a</sup> Maria Barbara de Aguirre resulta, que la Capellanía cuya presentacion solicita Dn. Miguel de Mendiguchia, adjudicó y presento la Justicia y Ayuntamiento de esta villa, como Patrona, el dia catorce de Julio de mil ochocientos y doce á Dn. Miguel Antonio de Jauregui, y su legitima consorte D<sup>a</sup> Maria Barbara de Aguirre, en concepto de tenerse y reputarse por merelega, y que en su consecuencia el dia primero de Agosto del mismo tomaron Judicialmente su posesion, se declara no haber lugar aora al nombramiento solicitado por dicho Dn. Miguel de Mendiguchia en su Memorial del dia doce de Noviembre del año proximo pasado. Asi con acuerdo del subscrito asesor lo provehió, y mando, y firmo el Señor Dn. Domingo Ignacio de Ciaran Alcalde y Juez ordinario de la villa de Placencia en ella a veinte y nueve de Enero de mil ochocientos y diez y ocho. Domingo Ignacio de Ciaran= Lizdo. Dn. Jose Antonio de Orbegozo= Ante mi= Manuel Antonio de Larreategui.*

## Documento 14

Traslado del Auto de visita de la capellanía del obispo de Calahorra, cuyo original se hallaba en el libro de la capellanía. 23 de agosto de 1819. AHN, Consejos Suprimidos, Leg. 15754, 2/2, 82-84.

*En la villa de Elgoivar á veinte y tres de Agosto de mil ochocientos diez y nueve: El Illmo Señor D. Atanasio Puyal y Pobeda, por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostolica, Obispo de Calahorra y la Calzada, Señor de la villa de Arnedillo del Consejo de S. M. &. Por antemi el infraescrito su vice secretario visito S.S.I. este Libro de la Capellania Colativa que en la Parroquial de Santa Maria de la villa de Placencia fundó D. Juan Antonio Azcarate, natural que fué de ella, por la memoria testamentaria que dejó y baxo la qual falleció en la ciudad de Guadalajara del nuevo Reyno de Galicia, y la otorgó en siete de Agosto de mil setecientos setenta y dos ante el Lizenciado D. Antonio Sierra Escrivano Real y del Cavildo de dicha Ciudad, dotandola con quatro mil pesos fuertes que se havían de remitir a dicha villa libres de todos costos, imponiendo á los capellanes la obligacion de decir una Misa cantada todos los vienes del año con Ministros en el Altar principal de la capilla de Jesus Nazareno de la citada Iglesia, con su responso al fin sobre la sepultura de los padres del fundador; y la de asistir los Domingos y fiestas de guardar á la Misa mayor y visperas y al confesonario. Nombrando por Patronos al Ayuntamiento y Justicia de la citada villa; queriendo fuese colativa dicha capellania, y que el ordinario de esta Diocesi hiciese canonica institucion y colacion á los poseedores para que fuese perpetuamente irrevocable la voluntad del instituyente, nombrando por primer capellan á D. Jose Maria de Aguirre, y haviendose aprobado y espiritualizado dicha fundacion, se despacho a su favor el titulo de colacion correspondiente en once de Junio de mil setecientos setenta y nueve, como por menor con otras cosas aparece de la fundación y testimonio que se halla en este libro, y anteriores visitas. En la ultima celebrada en el año de mil setecientos noventa y nueve se hizo relacion de que haviendose suscitado pleito entre dicho primer Capellan y el Cavildo de la citada Iglesia sobre el modo de cumplir las Misas cantadas, se declaró que interin el capellan no ascendiese al Presviterado cumpliria con satisfacer al cavildo con diez y seis reales por cada una de dichas misas cantadas, y que posteriormente por auto del Tribunal Eclesiastico de esta Diocesi dado en el año de mil setecientos noventa y dos á instancia del mismo D. Jose Aguirre se conmutaron las misas cantadas á rezadas, celebrandolas en el altar de la Capilla de Jesus Nazareno aumentando su numero hasta el de sesenta por razon de la solemnidad que se les quitava existiendo corriente el capital de los quatro mil pesos con que fue dotada= El referido D. Jose Maria de Aguirre continuo en la obtencion de esta capellania hasta el dia doce de Julio de mil ochocientos doce, haviendo dexado certificado el cumplimiento de las sesenta misas anuales hasta el de mil ochocientos quatro, y por sus hermanos y testamentarios se ha certificado por los asientos del difunto tenerlas cumplidas hasta su fallecimiento como asi lo declara S.S.I.= Desde el citado de mil ochocientos doce en que se verificó este, han disfrutado las rentas de esta Capellania en el concepto de Merelega D<sup>a</sup> Maria Barbara de Aguirre como sobrina que parece es del fundador y conjunta persona de D. Miguel Antonio de Jauregui Maestro Arquitecto pensionado de la Real Academia Española de San Fernando y de Dibujo del Real Seminario de Alumnos de Vergara, quienes han hecho celebrar las misas que han correspondido y cumplido con las demas cargas que previene la fundacion hasta treinta de Junio del presente año, por cuyo tiempo asi se declara y que el capital de los cuatro mil pesos se halla corriente en Escrituras de censo. Y por quanto la mente del instituyente de esta capellania fué fundarla en concepto de puramente Eclesiastica colativa, como consta de varios capitulos de la fundacion misma y que como tal fué aprovada y eregidos sus bienes en Eclesiasticos despachando la correspondiente colacion al primero y ultimo poseedor, por ello y no haver recaido la presentacion en sugeto idoneo y capaz para obtenerla, se deve reputar por nula y considerarse por lo mismo vacante desde la muerte del D. Jose Maria, por lo qual y ser pasado con exceso el termino que el derecho concede a los patronos correspondia á S.S.I. su presentacion jure devoluto, pero suspendiendo el proceder á ella por esta vez mandava y mandó a los citados Patronos que en el termino de dos meses de la fecha de este auto executen la presentacion de esta Capellania en sugeto haviil, idoneo y capaz, que con arreglo a la fundacion pueda cumplir sus cargas y obligaciones y pasado y no verificandola encarga S.S.I. al vicario de este Partido lo comunique al Fiscal general Eclesiastico de este Obispado, para que en su vista pida lo que a su oficio convenga. Y al electo manda S.S.I. que todos los años celebre las sesenta misas en el citado altar y cumpla las demas cargas impuestas por la fundacion certificando cada año en este libro haverlo executado, pena de quatro reales por cada una que se omitiere. Procurando tener corrientes los censos haciendolos reconocer de diez en diez años dando principio en el presente, y siempre que las hipotecas pasen á terceros poseedores, sacando copia de las Escrituras poniendolas á seguida de las primordiales, todo en segura custodia, y en este libro y folios separados un Imbentario de todos los censos, expresando su principal, redito, y quien lo paga,*

*para que conste en lo sucesivo: lo que cumpla pena de los daños que por su omision se siguieren y causaren y con apercibimiento que se procederá á lo que haya lugar. Y por este auto, así lo proveió, mandó y firmo S.S.I. de que certifico= Atanasio Obispo de Calahorra y la Calzada= Antemi D. Marcos de Mendivil S. Secretario=*

*Yo el infraescrito Notario notifique é hice saver el auto precedente de S.S.I. á D. Ignacio Zavala Salavarría Alcalde de la villa de Placencia en ella á tres días del mes de Setiembre de mil ochocientos diez y nueve= Dn. Millan Iñiguez.*

## Documento 15

Representación dirigida al Rey por Miguel Antonio de Jauregui pidiendo que no se despoje a la Capellanía de su naturaleza de merelega, ni a María Bárbara de la posesión en que se halla. 7 de octubre de 1819. AHN, Consejos Suprimidos, Leg. 15754, 2/2, 86-87.

Señor.

*Dn. Miguel Antonio de Jauregui vecino de la Villa de Vergara en Guipuzcoa, marido y conjunta persona de D<sup>a</sup> Maria Barbara de Aguirre y Azcarate se acoge á la soberana justificacion y proteccion de V. M. y con respeto expone: Que se halla esta en posesion de una Capellania ó memoria de Misas lega, fundada en la Parroquia de la Villa de Placencia, y que há llegado á entender que V.M. há comunicado orden al Reverendo Obispo de Calahorra para que pueda visitar las Iglesias de Real Patronato como és la de Placencia, encargandole que no hiciese novedad en el estado de las cosas de cada Iglesia sin dar cuenta a V.M. Lejos de arreglarse el Reverendo Obispo al encargo ó mandamiento de V.M. durante su visita en la Parroquial de Elgoibar há proveido un auto desnaturalizando una memoria de Misas ó Capellania fundada en la Iglesia de Placencia, intentando hacerla colativa como se manifiesta con ... de V.M.: Que D. Juan Antonio de Azcarate natural que fué de dicha villa de Placencia fundó una Capellania en su Iglesia Parroquial dotandola con cuatro mil pesos fuertes y la obligacion de celebrar las Misas cantadas que ... la fundacion, llamando para su goce y obtencion al pariente mas cercano principiando por los descendientes de su hermana Ana Maria y nombrando por Patrono á la Justicia y Ayuntamiento de dicha villa de Placencia con facultad y ... para conocer en cualquiera litigio que pudiese ofrecerse entre los parientes aspirantes á la obtencion de la Capellania, como todo aparece de la misma fundacion que presento á V.M. Habiendo tenido esta Capellania D. Jose Maria de Aguirre que le acomodó colar para solo su vida y elevarse con ello al sacerdocio la coló y con su fallecimiento se restituyó a su propia naturaleza de merelega como muestran la jurisdiccion y facultades que concedió el fundador á Jueces legos para resolver en cualquier duda del mejor ... á ella, y á su consecuencia la Justicia y Ayuntamiento de Placencia nombró y eligió para la obtencion de dicha Capellania á la nominada D<sup>a</sup> Maria Barbara hermana del dicho Dn. Jose Maria el día ... ochocientos doce como descendiente é hija unica de la hermana del Fundador y linea apetecida por este, y aprendió á su consecuencia su posesion quieta y pacíficamente como Capellania merelega en la que se hallaba cuando el Reverendo Obispo de Calahorra á llegado á la visita de la iglesia de Elgoibar, y abiendose presentado el libro de la Capellania haciendo constar el cumplimiento de lo pio declarandolo así el Reverendo Obispo en auto proveido el día 23 de Agosto ultimo bajo la gratuita suposicion de ser voluntad del fundador de la Capellania colativa cuando la material lectura de la fundacion descubre la equivocacion que há padecido por la sugesion que expuso á los que habian de obtenerla de pasar por la declaracion de la Justicia Real ordinaria y Ayuntamiento de Placencia lo que és inconciliable é incompatible con la declaracion del Reverendo Obispo que no debe tomar conocimiento alguno sobre la .... ó pertenencia, y mas cuando no se halla impuesta la obligacion de ser personalisimo el cumplimiento de las Misas, y obligaciones adherentes a la Capellania como se conoce en la impuesta del responso despues de la Misa que permite hacerlo rezar por otro, y sin embargo há declarado vacante la Capellania desnaturalizandola y despojando á la D<sup>a</sup> Maria Barbara de su posesion como consta del testimonio que acompaña y del concepto que há tenido la dicha Capellania de merelega, de cuya naturaleza no puede tampoco despojarla el hecho de la espiritualizacion del primer Capellan porque así le acomodaba, lo cual unido á que habiendo sido nombrada para la Capellania la D<sup>a</sup> Maria Barbara por los Patronos y aprendido sin contradiccion su posesion ha cumplido con todas las obligaciones como lo ha declarado el Reverendo Obispo en el mismo auto, y no obstante que no podia dejar de ... la Justicia ordinaria de Placencia la Justicia Real que le compete arreglandose á las leyes del Reyno sin dejarla usurpar, se apresura ....nente á ponerse bajo la proteccion de V.M. para que mediante a colegirse bien claramente que es merelega la Capellania, y no expresarse en la fundacion que fuese colativa ni personal el cumplimiento de las obligaciones como lo ha hecho la D<sup>a</sup> Maria Barbara, se sirva V.M. ... providencia que fuese necesaria para que no se despoje a la Capellania de la naturaleza de merelega ni á la D<sup>a</sup> Maria Barbara de la posesion en que se halla, lo cual sobre corresponder en justicia tambien conocer que se ha excedido el Obispo en la declaracion hecha sin obtener la aprobacion de V. Real Camara ...zando con la jurisdiccion privativa que le compete, y oponiendose al encargo ú orden de V.M., y á este fin*

*Suplico á V.M. se sirva acordarlo así, que es justicia que pido implorando la justificacion ... de V.M. Vergara 7 de Octubre de 1819. Señor*

*Miguel Antonio de Jauregui*

## Documento 16

Oficio del Ayuntamiento de Placencia dirigido al Obispo de Calahorra y La Calzada en el que se transcribe la Memoria Testamentaria de Juan Antonio de Azcarate y en el que se trata de demostrar que la capellanía es laical y que si se hizo colativa fue solo por los días de su anterior poseedor. 9 de octubre de 1819. AHN, Consejos Suprimidos, Leg. 15754, 2/1, 31-32.

*El día 3 de Setiembre ultimo sin duda por encargo de S.I. se notificó á mi Alcalde D. Ignacio Zabala Salaverria (que subscribirá este papel) por D. Millan Iñiguez el auto proveido por V.S.I. en Santa visita de la villa de Elgoibar el 23 de Agosto anterior en el libro de la capellanía fundada en la Parroquial de esta villa por D. Juan Antonio de Azcarate natural de ella, que, titulando V.S.I. colativa, y sujeta á la jurisdicción eclesiástica contra la manifestada voluntad del fundador y declarando nulo el nombramiento hecho por el Patrono que es la Justicia y Regimiento, que constituimos nosotros, por incapacidad de obtenerla el sugeto nombrado declaró correspondía á V.S.I. jure deboluto su presentacion por el transcurso del tiempo, y á manera de gracia nos concedió el termino de dos meses para que hiciésemos nuevo nombramiento y habiendo indicado dicho Alcalde la delicadeza del asunto para poder contestar sin entenderse con los compatronos, y consultar esta providencia si contra las intenciones de V.S.I. podia perjudicar á la Real jurisdiccion que egerce ha tenido V.S.I. la bondad de encargar que se nos remitiese copia del auto espresado por medio del notorio (sic) de S.I. D. Millan Iñiguez.*

*Habiendo, pues, meditado el tenor de la fundacion con la copia del auto de V.S.I. no debemos ocultarle que acaso se habrá sorprendido su justificación con algun informe poco exacto de la naturaleza de la capellanía en cuestion, y de la voluntad del fundador opuesta á ello pues la conveniencia que resulto á D. José Maria Aguirre de colarla no puede despojar á la Capellanía de la naturaleza de lega, y mucho menos privar á la Real Jurisdiccion del egercicio y conocimiento que le compete con arreglo á su voluntad manifestada clara y literalmente por el fundador que es la Ley que gobierna, debiendo por consiguiente la muerte del D. José M<sup>a</sup> restituirse á la Capellania y sus bienes á la naturaleza de lega, como sucede en los casos que algunos poseedores de bienes profanos para elevarse al sacerdocio suelen espiritualizarlos para sus días, y no puede ocultarse á V.S.I. que en este caso con el fallecimiento del que espiritualizo vuelven a ser profanos dichos bienes y tampoco se ocultara á V.S.I. el que el derecho del capellan D. José no se extendía a mas allá de su muerte para transmitirlo no siendo esta la voluntad del fundador que en el concepto del Patronato que debemos egercer es bien claramente opuesta, ni puede inferirse otra sin oponerse á los principios que rigen en el particular y la literal disposicion.*

*No hallará V.S.I. en la lectura de la fundacion otra espresion que la de una Capellanía sin distincion de lega, ni colativa, pero si hallará V.S.I. una clausula lo mas terminante é integversable (sic) de que la voluntad del fundador, fue la de que fuese lega, y que el juez secular debia administrar justicia y nos ha parecido necesario para descubrir la equivocacion de titularla colativa transcribir la integra y literalmente para no perder su energía: dice pues el fundador:*

(aquí se inserta un traslado de las cláusulas de la memoria testamentaria de Juan Antonio de Azcarate relativas a la fundación de la capellanía)

*A presencia de esta clausula y de no haber la menor inclinacion contraria en toda la fundacion no habra necesidad de ocupar mas la atencion de V.S.I. porque no puede ofrecerse la duda mas material de que la colacion librada á la solicitud del Dn. Jose M<sup>a</sup> bajo ningun concepto puede alterar la naturaleza de la Capellanía, y mucho menos privar á la Justicia del egercicio de su Real jurisdiccion ordinaria á que confió el fundador la declaración de todas las dudas; por lo que si la D<sup>a</sup> Barbara de Aguirre fuese persona incapaz de obtener la capellanía en cuestion nombrada por el patrono y en cuya posesion pacifica se halla ó se creyese alguno con derecho á privarle de ella, y de que se la adjudique podra ocurrir ante el Alcalde y Regimiento de esta villa en cuyo caso puede V.S.I. descansar de que administrará justicia, sino ha de abandonar la obligacion que le imponen las leyes del Reyno y fueros de esta Provincia que V.S.I. ni nosotros lo permitiríamos de no dejar usurpar la Real jurisdiccion que egerce el Señor Alcalde y nos compete en cualquiera duda que ocurre en la Capellanía su presentacion y obtencion no podrá prescindir de una competencia , y de ponerlo en noticia de la superioridad para que acuerde lo que fuere justo, mayormente siendo esta Iglesia Parroquial de Real Patronato, y no egerciendo V.S.I. en ella sino jurisdiccion delegada en virtud de Real Cedula que no dudamos la tenga para la visita; pero nos persuadimos á que sea limitada la*

comision sin inobar el estado de posesion de cosa alguna de la Iglesia sin previa aprobacion del consejo de la Real Camara de donde dimana la comision de V.S.I. y para la visita, y de cuya circunstancia exige necesariamente la inovacion, á cuyo efecto deseando arreglarse el Alcalde á lo prevenido y mandado por S.M. para evitar competencias ya que no puede tener las verbales conferencias encargadas pasamos á V.S.I. este papel misivo confidencial, y especialmente yo D. Ignacio Zabala Salaverria que como Juez Real que he de defender la jurisdiccion que compete á S.M. suplicandole que tomando en consideracion la voluntad del fundador de que la Justicia ordinaria ha de resolver todas las dudas derechos de los aspirantes á la capellanía en egercicio de Real jurisdiccion ordinaria tendra á bien V.S.I. dejar espedita y libre sin precisarle á la formacion de una competencia en asunto el mas claro é indisputable aorrándole el desagradable caso de la formacion de la competencia que en defecto le sera necesario á que esperamos no dara lugar la rectitud de V.S.I. porque así como en lo pio y su cumplimiento no nos mezclamos, y nos hacemos un deber en que V.S.I. egerza su jurisdiccion, nos prometemos que en igual buena armonía dejará espedito y libre el egercicio de la Camara y Real ordinaria que me compete a mí Salaverria como justicia de esta villa. Dios guarde á V.S.I. muchos años. Placencia y 9 de Octubre de 1819.= Alcalde= Ignacio Zabala Salaverria.= Sindico Procurador general= José de Artolazabal= Francisco Martin de Aranguren= Regidor= De segunda mano= José Andres Maiztegui= Regidor= De segunda mano= Tomás de Aguirrebeña= Regidor= Illmo. Sr. Obispo de Calahorra y Calzada.

## Documento 17

Escritura de poder otorgado a Juan Manuel de Garro, Procurador de causas en el Tribunal eclesiástico de la diócesis de Calahorra, por Miguel de Mendiguchia, aspirante a la capellanía fundada por Juan Antonio de Azcarate. 27 de noviembre de 1819. AHN, Consejos Suprimidos, Leg. 15754, 2/2, 3-4.

*Por este instrumento yó Dn. Miguel de Mendiguchia Estudiante natural y vecino de la Villa de Elgueta, y al presente estante en esta de Eybar digo, que hace seis, ó siete años que se halla vacante la capellania colativa que en la Iglesia Parroquial de Santa Maria la Real de la Villa de Placencia instituió y fundó Dn. Juan Antonio de Azcarate, por muerte de su ultimo poseedór Dn. José Maria de Aguirre Presvitero Beneficiado que fué de la misma Iglesia, y su hermana D<sup>a</sup> Barvara de Aguirre vecina de la Villa de Vergara posée, ó administra los vienes pertenecientes á dicha capellania, sin que me conste con que titulo; y aunque como pariente más cercano que sóy del referido fundadór recurrí a la Justicia de dicha Villa de Placencia Patrona de la citada capellania vacante con la solicitud de que me haga nombramiento de ella, no há tenido efecto hasta ahora con pretextos infundados; y por quanto expiró el termino ordinario en que dicha Patrona devió hacér su nombramiento, con años más que hán pasado, y por lo mismo perdió el derecho de hacerlo, y en este caso toca y corresponde al Señor Provisor de esta Diocesis de Calahorra el verificarlo, Otorgo que doy todo mi poder cumplido, qual por derecho se requiere y és necesario expECIAL, á D. Juan Manuel de Garro Procurador de causas en el Tribunal Eclesiastico de dicha Diocesis para que en mi nombre y representacion pida al mismo Señor Provisor, que usando del derecho y facultades que por la citada inaccion de la Patrona le competen, se sirva hacerme el nombramiento de capellan de la referida capellania vacante que me corresponde como á pariente más cercano del expresado Dn. Juan Antonio de Azcarate su fundadór, adjudicando y haciendome su colazion y canonica institucion en forma para que cobre sus rentas vencidas desde la muerte de dicho su ultimo poseedor D. José Maria de Aguirre y cumpla con sus cargas y obligaciones: Y en su particular hasta que consiga lo referido haga pedimentos, requerimientos, demandas, contradiciones, recusaciones y desistimientos; pida execuciones, costas, prisiones, ventas, trances y remates de vienes; tome posesion de ellos, ofrezca y dé informaciones, presente escritos, escrituras, testigos, provanzas y demas documentos necesarios; alegue tachas, pida terminos, oiga autos interlocutorios y sentencias difinitivas, acepte en lo favorable y de lo contrario en todo, ó en parte apele, suplique y siga ante la devida superioridad, y en caso necesario se aparte y desista de las que interpusiere, y practique todas las demás diligencias judiciales y extrajudiciales del caso: El Poder que para todo lo relacionado, y lo anejo y concerniente se requiere, el mismo le doy al expresado Procurador Dn. Juan Manuel de Garro con todas las clausulas necesarias, aunque aquí no se declaran, libre, franca y general administracion, sin limitacion alguna, clausula de que lo pueda substituir revocár y nombrár otros y con relevacion en forma, y asu firmeza y de quanto en su virtud se hiciere y obrare obligo mis vienes presentes y futuros: Asi lo otorgo y firmo ante el presente escribano Real de S.M., y del numero de esta dicha Villa de Eybar, en ella á veinte y siete de Noviembre de mil ochocientos diez y nueve, siendo testigos Francisco Ignacio de Guerra y Pedro Felix de Aramberri vecinos de la misma, que tambien firman, y en su fé y de que conozco al otorgante, lo hice yó el escribano= Miguel de Mendiguchia= Francisco Ignacio de Guerra=Pedro Felix de Aramberri=Antemi Sebastian de Arguiano=*

## Documento 18

Dictamen del Fiscal de la Cámara, en el que resuelve que el Obispo reforme su auto de 23 de agosto y se reponga la capellanía al estado que tenía. 30 de noviembre de 1819. AHN, Consejos Suprimidos, Leg. 15754, 2/1, 55-56.

*El Fiscal en vista de la instancia documentada de Dn. Miguel Antonio de Jauregui, vecino de Vergara, como marido de D<sup>a</sup> Maria Barbara de Aguirre en que solicita que la Camara acuerde las providencias oportunas para que no se despogue á su muger de la posesion de cierta capellanía que obtiene, ni á esta de la naturaleza de merelega en que la constituyo el fundador; y enterado tambien de los antecedentes citados dice: que por los documentos que este interesado acompaña a su esposicion, se acredita que D. Juan Antonio de Azcarate natural que fue de la villa de Placencia por su memoria testamentaria otorgada en la ciudad de Guadalajara del nuevo Reyno de Galicia á 7 de Agosto de 1772 mandó fundar, y se fundo en efecto por sus Albaceas y Testamentarios á virtud de poder formal en 1778, una capellania merelega en la Parroquial de dicha villa, para cuya obtencion llamó al Pariente suyo mas cercano principiando por los descendientes de su hermana Ana Maria, y nombro por patrono á la Justicia y Ayuntamiento de dicha villa con facultad y jurisdiccion para que en cualquiera litigio que pudiera ofrecerse entre los Parientes sobre la obtencion de la capellanía decidiera á favor del que mejor derecho tubiere=*

*Habiendo vacado esta por fallecimiento de su ultimo poseedor D. José Maria de Aguirre el ayuntamiento de Placencia procedió a nombrar y nombró por su acuerdo de 14 de Julio de 812 á D. Miguel Antonio de Jauregui, y D<sup>a</sup> Maria Barbara de Aguirre parienta de sangre del fundador para que la disfrutara; á cuya consecuencia se les confirió la posesion Real, corporal, velquasi de dicha capellanía bajo el concepto de merelega, ó patronato de legos; mas el R. Obispo de Calahorra, á consecuencia de la comision que la Camara se sirvió conferirle en orden de 20 de Agosto de 1818 para que visitara en calidad de comisionado suyo las Iglesias de Real patronato situadas en su Diocesis y en el Señorío de Vizcaya con arreglo á lo prevenido en las Reales cédulas de 19 de Noviembre de 1741 su declaratoria de 14 de Marzo de 1756, 10 de Febrero y 28 de Abril de 1757, y fundandose en que el nombramiento ultimamente hecho por el ayuntamiento á favor de los dos espresados cónyuges, no habia recaído en sugeto ydoneo y capaz de obtener la capellanía que en su concepto era colativa proveyó auto en 23 de Agosto proximo pasado declarandole nulo, y de ningun valor ni efecto, considero esta por vacante desde la muerte del último poseedor acaecida en el año de 812 y de consiguiente por pasado el termino que el derecho concede a los Patronos; en cuya virtud dijo corresponder la presentación á su dignidad jure deboluto, pero suspendiendo proceder á ello por esta vez mandó que los Patronos executaran la presentacion en el termino de dos meses en sugeto idoneo, habil y capaz, que pueda por si mismo desempeñar las cargas de la fundacion.*

*El que responde hecho cargo de quanto queda referido advierte que aquel Prelado no solo ha causado una novedad en haber declarado colativa esta Capellanía que no es otra cosa que un simple patronato de Legos, sino que ha escedido las facultades que la Camara le confirió para la visita de las Iglesias del Patronato, pues que esta debió entenderse para el efecto preciso de inspeccionar y averiguar el estado de aquellas Iglesias en lo temporal y ramos á ellos respectivos formando expediente puramente instructivo separado del ordinario de visita Eclesiástica en lo espiritual y remitiendole á la Camara con las observaciones que creyese oportunas á fin de que poniendolas en la Real consideracion se dignara S.M. tomar la determinacion que fuera de su Real agrado; y por todo entiende; que la Camara siendo servida podrá mandar se comuniquen orden al mismo R. Obispo para que inmediatamente reforme su auto de 23 de Agosto y reponga el estado de la capellanía al que tenia antes de haber causado el despojo que motiva la reclamacion de D. Antonio de Jauregui, ó acordara como siempre lo mas conforme. Madrid 30 de Noviembre de 1819.*

## Documento 19

Oficio del Alcalde de Placencia dirigido al Obispo de Calahorra, ante la falta de respuesta al anterior, en defensa de la jurisdicción ordinaria para el nombramiento de Capellán en la Capellanía fundada por Juan Antonio de Azcarate. 9 de diciembre de 1819. AHN, Consejos Suprimidos, Leg. 15754, 2/1, 33.

*En fecha de 9 de Octubre de este presente año pase á V.S.I. un oficio que entregado en propias manos á V.S.I. por D. Miguel de Joaristi un vecino de esta villa bien estimado por sus virtudes y cualidades en la ciudad de Vitoria á presencia del visitador y Secretario de V.S.I. fue del tenor siguiente.= Quando nos persuadimos á que V.S.I. se había convencido á la luz de las reflexiones que en el hacíamos y de la Justicia con que oficiabamos á V.S.I. y que por consiguiente habría repuesto el auto proveido en Elgoibar en lo relativo á la Capellanía fundada en la Parroquial de esta villa que es de Real Patronato nos ha sorprendido la publicacion en ella que de la carta de Justicia el dia de hoy se ha verificado á instancia de D. Miguel de Mendiguchia llamando a los aspirantes á ella.*

*No debía ignorar V.S.I. su Provisor ó visitador que no solo por un efecto de atencion sino por rigurosa justicia y segun está prevenido por Reales Cédulas que las justicias deben para evitar competencias viciosas entenderse por papeles confidenciales y misivos cuyo cumplimiento corresponde á V.S.I. como al Alcalde de esta villa á que faltando V.S.I. y con poca nota de los que deben tener noticia de la fundacion y lo ocurrido posteriormente á la visita de Elgoibar se ha expedido la Carta de justicia que se ha publicado en esta villa con usurpacion de la Real Jurisdiccion del consejo de la camara de S.M. con exceso de la comision conferida por este supremo Tribunal para la visita propasandose á desnaturalizar la capellanía merelega de una Iglesia de Real patronato despojando de hecho á su poseedora que tanto resisten y aborrecen las leyes Reales, Eclesiásticas y la política de la misma para no dejar margen á vias de hecho que trastornan el orden publico.*

*Esta bien asegurado el Patronato de la referida Capellanía fundada por dicho Azcarate que no compete á V.S.I. el conocimiento de la justicia ó injusticias del nombramiento para dicha Capellanía, por haber confiado y transmitido el fundador al Patronato y de ningun modo al Eclesiastico sus facultades y con superioridad de razon en una Iglesia de Real Patronato en que V.S.I. no ha podido innober sin dar cuenta al Consejo de la Real Camara y esperar á lo menos su aprovacion, que no es capaz de privar á la Real jurisdiccion ordinaria de su jurisdiccion y regalías como V.S.I. lo intenta desentendiendose aun no solo de consideracion que se debe á los constituyentes de esta villa que por esta calidad merecemos atencion sino de mi D. Ignacio Zabala Salaverría que exerzo la Real jurisdiccion que no dejare de hacerla respetar ni permitir desairarla con una falta de contestacion á un oficio que qualquiera debe prometerse de V.S.I. en un asunto en que sobre la obligacion que me imponen las leyes y fueros de esta Provincia bastaba el sagrado nombre de S.M. y su soberanía para que sostuviese la Real jurisdiccion hasta la resolucion de la superioridad.*

*Me persuado yo D. Ignacio Zabala Salaverría como Alcalde de esta villa á que V.S.I. si se le hubiese informado de la naturaleza de esta capellanía no me hubiera puesto en la necesidad de defender la Real jurisdiccion ordinaria y de ocupar la atencion de V.S.I. con este segundo oficio por no haberse respondido al primero y espero que tomando V.S.I. en consideracion lo resultante de la fundacion y lo espuesto sobrepasara en el conocimiento que ha tomado en la causa que motiva este oficio reponiendo las cosas al ser y estado que tenian antes de la visita de Elgoibar dejando á las partes su derecho á salvo para que usen en mi juzgado ó donde sea competente de el y si contra toda esperanza no accediese V.S.I. ó no respondiese con nuevo desaire no debiera estrañar V.S.I. que yo como Alcalde use de las facultades que las leyes me conceden para defender la Real jurisdiccion y para no tolerar una publica usurpacion de ella haciendo á V.S.I. ó su Provisor responsables de las consecuencias, pues no permitire en mi territorio una tal usurpacion.*

*Espero que V.S.I. accedera á los deseos justos del patronato y de mi el Alcalde que exhorto á V.S.I. á que no me ponga en la necesidad de desplegar todo el poder que las justicias del Reyno tienen para sostener y defender la Real jurisdicción que se intenta usurpar.*

*Dios guarde á V.S.I. muchos años. Placencia 9 de Diciembre de 1819=*

## Documento 20

Real Resolución de la Cámara para que el Obispo reforme su auto del 23.08.1819 y reponga el estado de la Capellanía al que tenía. 24 de diciembre de 1819. AHN, Consejos Suprimidos, Leg. 15754, 2/1, 54.

*Illmo. Señor*

*D. Miguel Antonio de Jauregui vecino de la villa de Vergara en Guipuzcoa como marido de D<sup>a</sup> Maria Barbara de Aguirre, acudio á la Camara con una instancia documentada exponiendo que Dn. Juan Antonio de Azcarate fundo una Capellanía merelega en la Iglesia Parroquial de Placencia que es del Real Patronato, en esta diócesis, llamando para su goce al pariente mas cercano, y nombrando por Patrono á la Justicia y Ayuntamiento de dicho Pueblo con facultad de conocer en qualquiera litigio que ocurriese entre los aspirantes, a la citada capellanía; á cuya virtud declaro dicho Ayuntamiento en el año de 1812, que la correspondia a su expresada muger D<sup>a</sup> Maria Barbara de Aguirre, sin embargo de haberla obtenido en concepto de colativa su anterior poseedor Dn. Jose Maria de Aguirre; y que no obstante de hallarse en la quieta y pacifica posesion de la Capellania bajo el concepto de merelega, habia proveido V.I. un auto en 23 de Agosto ultimo declarandola colativa, y vacante y nulo el nombramiento hecho en la citada D<sup>a</sup> Maria Barbara, mandando que los Patronos executaran otro en persona idonea; por lo qual solicito, que se acordasen las providencias oportunas, para que no se despojase á la referida Capellania de la naturaleza de Merelega que tenía, ni á la D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Barbara de su posesion.*

*Y enterado dicho supremo Tribunal de esta solicitud, y documentos que la ácomparon (sic), como de lo expuesto por el Señor Fiscal, ha declarado, que V.I. no solo ha causado una novedad en haber declarado colativa dicha Capellania, que no es otra cosa que un simple Patronato de legos, sino que ha excedido las facultades que concedió á V.I. la Camara para la visita de las Iglesias del Real Patronato, reducidas á solo inspeccionar el estado de ellas, en lo Temporal, y dar cuenta de lo que creyese de oportuno remedio; en cuya consecuencia ha acordado al mismo tiempo, que V.I. reforme inmediatamente su citado auto de 23 de Agosto ultimo, y reponga el estado de la Capellanía al que tenía antes del despojo que ha motivado la reclamacion del mencionado Dn. Miguel Antonio de Jauregui.*

*Lo que participo á V.I. de acuerdo de la Camara para su inteligencia y cumplimiento= Dios guarde muchos años. Madrid 24 de Diciembre de 1819= Miguel de Gordon.*

## Documento 21

Petición de Pedro Juan de Zuloeta, vecino de Vergara, de copia de la escritura de fundación de la capellanía, y decreto del alcalde de Placencia para que se le provea de la misma. 10 de enero de 1820. AHN, Consejos Suprimidos, Leg. 15754, 2/2, 36.

*Pedro Juan de Zuloeta, vecino de la villa de Vergara, ante V. en la mejor forma de derecho parezco y digo: que Dn. Juan Antonio de Azcarate, natural y vecino que fue de esta villa, y fallecio en la Ciudad de Guadalajara de America, y en su nombre, y como Apoderado de sus Testamentarios, Dn. Francisco Ignacio de Ibarra, Presvitero Beneficiado que fue de la Iglesia Parroquial Santa Maria la Real de esta villa de Placencia, hizo fundacion de una Capellania en esta dicha Parroquia en once de Diciembre de mil setecientos setenta y ocho, ante Dn. Manuel Antonio de Larreategui Escribano que fue de esta villa; y conviniendome tener una copia autentica de esta fundacion*

*Suplico a V. se sirva mandar al Escribano sucesor de los Registros del citado me provea de dicha copia fe haciente para acreditar el derecho que tengo, y tienen mis hijos, a dicha Capellania, por sus justos derechos; pues es xusticia que la pido juro &<sup>a</sup>*

*Pedro Juan de Zuloeta*

## Documento 22

Exposición del Obispo a la Real Cámara sobre la naturaleza de la capellanía, suplicando se revocase lo acordado por la Cámara y se confirmase el auto de visita del 23 de agosto de 1819. 31 de enero de 1820. AHN, Consejos Suprimidos, Leg. 15754, 2/2, 110-111.

Señor.

*El Obispo de Calahorra, y la Calzada á V.M. expone: Que con fecha de 24 de Diciembre ultimo se le comunicó la Real resolución de ese Supremo Tribunal declarando que no solo había causado una novedad en haber declarado colativa la capellanía que en la Iglesia Parroquial de Placencia en Guipuzcoa fundó Dn. Juan Antonio de Azcarate, no siendo otra cosa que un simple Patronato de Legos, sino que había excedido las facultades concedidas al exponente para la visita de las Iglesias del Real Patronato, y acordando en su consecuencia que reformase el auto de visita de 23 de Agosto proximo pasado por el que se declaró colativa y vacante la citada capellanía, y nulo el nombramiento hecho en D<sup>a</sup> Maria Barbara de Aguirre, y repusiese el estado de la misma capellanía al que tenía antes del despojo que se supone por Dn. Miguel Antonio de Jauregui, como marido de la mencionada D<sup>a</sup> Maria Barbara.*

*Obedece el Obispo de Calahorra la citada Real resolución, pero como esta se motiva en el presupuesto de que dicha capellanía es un simple Patronato de Legos, há tenido á bien el exponente suspender su cumplimiento hasta manifestar á V.M. con toda evidencia que la mencionada capellanía há sido, y es en todo rigor Eclesiastica colativa desde el año de 1779; para que en su vista se sirva V.M. revocar dicha Real Orden, y confirmar el indicado auto de visita de 23 de Agosto ultimo.*

*Del testimonio que acompaña resulta que el Fundador Dn. Juan Antonio de Azcarate previene en la clausula primera de su Memoria Testamentaria que con cuatro mil pesos fuertes se funde en la Iglesia Parroquial de Placencia una capellanía, y que el capellan tenga la obligacion de decir una Misa cantada todos los viernes del año, y asistir todos los Domingos y Fiestas de guardar al confesonario, y que á su consecuencia el Presbitero Dn. Francisco Ignacio de Ibarra como poder habiente de los Testamentarios de dicho Dn. Juan Antonio de Azcarate, otorgó la correspondiente Escritura de fundacion de capellanía en 11 de Diciembre de 1778, imponiendo á los Capellanes la misma obligacion de decir una Misa cantada todos los viernes del año, y asistir a confesonario los Domingos y Fiestas de guardar para el bien y consuelo de sus compatriotas: concluyendo la indicada Escritura de fundacion con estas terminantes palabras: "Y pido, y suplico al Señor Obispo de este Obispado de Calahorra y La Calzada, ó su Provisor y Vicario General para que se le haga canonica institucion y colacion de dicha capellania para que sea perpetuamente é irrevocable la voluntad del expresado Dn. Juan Antonio Azcarate". Consta igualmente del indicado testimonio que Dn. José Maria de Aguirre, primer llamado al goce de ella, acudió al Tribunal Eclesiastico de Calahorra presentando la referida Escritura de fundacion pidiendo su aprobacion y confirmacion y que se erigiesen sus bienes de temporales y profanos en espirituales y Eclesiasticos para que perpetuamente gozasen del fuero de tales; en cuya virtud se libró por dicho Tribunal carta de justicia citatoria de los interesados en los bienes que comprendía la citada Escritura de fundacion, y practicadas todas las diligencias acostumbradas en tales casos, se dió por el indicado Tribunal Eclesiastico auto de aprobacion en la ciudad de Calahorra á 20 de Abril de 1779, confirmando dicha fundacion de capellania, y erigiendo sus bienes de temporales y profanos en espirituales y Eclesiasticos para que inperpetuum gozasen del fuero de tales: Y que ultimamente á consecuencia de todo se despachó el correspondiente Titulo de colacion y canónica institucion á favor de Dn. José María Aguirre.*

*Esta sencilla relacion convence de lleno que la insinuada capellanía desde su primitiva fundacion está erigida en Capellanía Eclesiastica colativa perpetua, y sujeta por consiguiente á la visita del Ordinario, la qual executó sin reclamacion alguna el Obispo Dn. Francisco Aguiriano en el año de 1799; y á su consecuencia que fué notoriamente nulo el nombramiento que en el año de 1812 se hizo de ella en una muger por la Justicia y Ayuntamiento de la villa de Placencia: é igualmente se demuestra que el Obispo de Calahorra no há despojado á esta capellanía, ni há podido despojarla de la naturaleza de merelega que nunca había tenido, sino que mas bien el Ayuntamiento, como Patrono, há sido el que la despojó de la naturaleza de capellanía Eclesiastica colativa y perpetua que desde su fundacion tenía, en el año de 12, y de propia autoridad, sin audiencia del Fiscal Eclesiastico, cuyo procedimiento, si se executó así porque en aquel tiempo el Gobierno intruso habia suprimido toda jurisdiccion de fuero Eclesiastico, aun és mas notoriamente nulo quanto en su virtud hizo el Ayuntamiento. Siendo ciertos como son estos presupuestos, no alcanza el Obispo en qué pueda haber excedido las facultades que se le concedieron para la visita de las Iglesias del Real Patronato, puesto que en ellas por sus facultades Ordinarias visita todas las Capellanias y Memorias de*

*Patronatos particulares; y las facultades que S.M. le dá como Patrono, son unicamente para inspeccionar el estado de ellas en lo temporal, y sobre las rentas de sus Fabricas, dando cuenta de lo que creyese necesitar oportuno remedio, sin dar por su parte providencia ni decreto ninguno. Lo qual há cumplido exactamente en la dicha Iglesia de Placencia, en cuya Fabrica, no habiendo encontrado cosa ninguna que notar, no há tenido motivo de hacerlo presente á S.M.*

*Por todo lo qual á V.M. suplica se sirva así declararlo, y á su consecuencia revocar dicha Real Orden, y confirmar el insinuado auto de visita de 23 de Agosto ultimo, como lo lleva indicado. Calahorra y Enero 31 de 1820.*

*Señor*

*Athanasio Obispo de Calahorra y la Calzada*

## Documento 23

Despacho del Provisor dando comisi3n en forma al cura de la Parroquial de Placencia para que nombre un administrador, y mandando a B3rbara de Aguirre que cese en la percepci3n de las rentas de la capellan3a. 31 de mayo de 1820. AHN, Consejos Suprimidos, Leg. 15754, 2/2, 24.

*Nos el Dr. Dn. Francisco Baeza y Baeza Presb3tero Abogado de los Reales Consejos Provisor y Vicario general de este obispado de Calahorra y La Calzada con Real aprobacion &a=*

*Por las presentes damos comision en forma al cura de la Parroquial de Placencia para que nombre persona desinteresada y de su satisfacc3n que administre los bienes y rentas de la capellan3a que en aquella Parroquial fund3 Dn. Juan Antonio Azcarate, que se halla vacante por muerte de Dn. Josef Maria de Aguirre su ultimo poseedor, y 3 la que nombr3se le recib3r3 fianza lega, llana, y abonada, bajo Escritura formal que otorgar3 ante Notario 3 Escribano con sumision 3 este tribunal, y con su auto de aprobacion la remitir3 dicho cura ante Nos, para despach3r al nombrado el titulo de Administracion correspondiente. Otrosi mandamos 3 D<sup>a</sup> Barbara de Aguirre hermana del ultimo poseed3r que siendo requerida con estas Letras sobrese3 y c3se inmediatamente en la intervencion y percepcion de los bienes y rentas de dicha capellan3a, y se prevenga para d3r cuenta con pago al Administrador que por este tribunal se le autorice con el titulo correspondiente, lo que c3mpla pena de veinte ducados vellon y con apercibimiento y bajo la de quatro la notifique y ponga por diligencia qualquier Notario 3 Escribano requerido. Que por auto por nos proveido en veinte y siete del corriente con vista de lo pedido por Dn. Miguel de Mendiguchia natural de la villa de Elgueta asi est3 mandado. Dada en Calahorra a treinta y uno de Mayo de mil ochocientos veinte=*

*Dr. Baeza*

*Por mandado del Se3or Provisor  
Antonio Llorente*

## Documento 24

Notificación por el escribano de Vergara del despacho del Provisor del 31 de Mayo, a María Bárbara de Aguirre y respuesta de la misma. 16 de junio de 1820. AHN, Consejos Suprimidos, Leg. 15754, 2/2, 26.

*En la Villa de Vergara á diez y seis de Junio de mil ochocientos y veinte, yo el infraescrito Escribano del Rey nuestro Señor y del Numero de ella, habiendo precedido el correspondiente recado de atencion, hice saber y notifiqué en persona el despacho antecedente á D<sup>a</sup> Barbara de Aguirre, muger legitima de Dn. Miguel Antonio de Jauregui, y hermana de Dn. José Maria de Aguirre ya difunto, vecina de esta dicha villa, la cual enterada dijo: que no reconoce por Juez competente, para la causa que expresa dicho despacho al Señor Provisor, por quien se halla expedido, mediante á que la Camara remitió al Illmo. Señor Obispo la orden conveniente sobre el particular en veinte y cuatro de Diciembre de mil ochocientos diez y nueve, habiendo declarado que dicho Illmo. Señor no solo habia causado una novedad en haber declarado colativa la capellania, que expresa dicho despacho, que no és otra cosa que un simple Patronato de Legos, sino que habia excedido las facultades que concedió á S.I. la Camara para la visita de las Iglesias del Real Patronato, reducida á solo inspeccionar el estado de ellas en lo temporal, y dar cuenta de lo que creyese de oportuno remedio, acordando al mismo tiempo que S.I. reformase inmediatamente su auto de veinte y tres de Agosto anterior, reponiendo el estado de la capellania al que tenia antes del despojo; por cuyo motivo protestaba la nulidad de cualquiera diligencia que se practique en el asunto, inovando su estado en virtud de despacho del referido Tribunal Eclesiastico, interin que de parte de este no se la exhiba orden contraria que derogue la precitada que expidió la Real Camara de Castilla, y en su conformidad pedia testimonio con insercion de esta exposicion y despacho que motiva esta diligencia: Esto respondió y firmó, y en fé de ello yo el Escribano=*

*Maria Barbara de Aguirre*

*Dn. Diego Manuel de Lesarri*

## Documento 25

Dictamen de la Comisión de Gracia y Justicia para que se apruebe el Auto de visita del Obispo de 23 de agosto de 1819. 8 de septiembre de 1820. AHN, Consejos Suprimidos, Leg. 15754, 2/1, 12-18.

Señores de la Comisión:

García

Piedrablanca

Ibar-Navarro

*La Comisión ha reconocido este espediente y dice que sin mas que hacer una sencilla relacion de su origen, progresos y estado, se convencerá el Consejo de que la Capellanía de que se trata no es un simple patronato de legos, como creyó la estinguida Cámara de conformidad con su fiscal, sino una Capellanía Eclesiástica colativa perpetua, y sujeta por consiguiente á la visita del Diocesano, como manifestó el de Calahorra en su informe de 31 de Enero de esta presente año.*

*Dn. Juan Antonio Azcarate, natural de Placencia, Provincia de Guipuzcoa, y vecino que fué de Guadalajara en la nueva Galicia, previno en su memoria testamentaria hecha en aquella Ciudad á 4 de Agosto de 1772 que con el capital de 4.000 pesos fuertes se fundase en la Parroquial de la villa de Placencia una Capellanía, y que el Capellan tubiese la obligacion de decir una misa cantada todos los viernes del año, con Diacono, y Subdiacono, y que acabada la misa, el Capellan, ó el que la dijere, rezase un responso en la sepultura de sus Padres: que para Capellan se eligiese al pariente suyo mas cercano, principiando por los descendientes de su hermana Ana Maria: Que el Patrono de la Capellanía fuese el Ayuntamiento y Justicia de Placencia para que en cualquier litigio que pudiera ofrecerse lo decidiese en quien mejor derecho tubiese á la Capellania, encargando al Capellan asistiese los domingos y fiestas de guardar á la misa mayor y visperas, y al confesonario para el bien y consuelo de sus compatriotas.*

*A consecuencia de esta disposicion los testamentarios de Azcarate dieron su poder y a cada uno insolidum al Presbitero Dn. Francisco Ignacio de Ibarra, el cual por haberse escusado los dos á quien igualmente benia conferido, procedió a la fundacion de la Capellania en 11 de Diciembre de 1778 nombrando desde luego por su primer poseedor á Dn. José Maria de Aguirre y Azcarate, hijo de la dicha Maria Ana, con las obligaciones referidas, y concluyendo la escritura de fundacion con estas terminantes palabras "Y pido y suplico al Sr. Obispo de este obispado de Calahorra y la Calzada, ó su provisor y vicario general para que se le haga canonica institucion y colacion de dicha Capellanía para que sea perpetuamente é irrevocable la voluntad del espresado Dn. Juan Antonio de Azcarate, y que se haga la nombracion de sus capellanes en la forma prevenida por el, en la clausula de su memoria testamentaria".*

*No solo consta de los testimonios que obran en el Espediente todas estas disposiciones, sino tambien que habiendo acudido el Dn. José Maria Aguirre, primer llamado al goze de la Capellania, al tribunal Eclesiástico de Calahorra, pidiendo la aprovacion y confirmacion de dicha Escritura que presentó, despues de practicadas con citacion de los interesados, y audiencia del fiscal Eclesiástico las diligencias acostumbradas en tales casos, se proveyó auto por el provisor en 20 de Abril de 1779, por el cual aprobó y confirmó la fundacion quanto había lugar en derecho, y erigió sus bienes de temporales y profanos en espirituales y Eclesiásticos para que in perpetuum gozasen del fuero de tales; y á su consecuencia en 11 de Junio siguiente se hizo al citado Aguirre la colacion y canonica institucion, despachandosele el correspondiente titulo en forma. Muerto Aguirre que fué el primero y ultimo Capellan, el Ayuntamiento de Placencia en 14 de Julio de 1812 la adjudicó a D<sup>a</sup> Maria Barbara de Aguirre en concepto de ser esta Capellania merelega, ó Patronato de Legos, y declarando se entendiese sin perjuicio, y a su consecuencia se le dió la posesion con dicha calidad en primero de Agosto siguiente.*

*Así las cosas se presentó á la misma justicia otro Pariente del fundador en solicitud de que le nombrase para servir la referida Capellania, la cual por ser Eclesiástica y colativa no podía gozarla una muger. Sin que aparezca providencia alguna á cerca del particular, resulta que hallandose despues el Obispado de Calahorra con Comision de la Camara para la visita de las Iglesias del Real Patronato situadas en su Diocesis y advirtiendole que el nombramiento hecho en la D<sup>a</sup> Barbara, no había recaído en sugeto idoneo para obtener esta Capellanía, que en su concepto era puramente Eclesiástica y colativa segun las clausulas de la fundacion y que como tal la había visitado, sin*

*reclamacion alguna en el año de 1799 su antecesor el Obispo Dn. Francisco Aquiliano (sic); proveyó auto en 23 de Agosto de 1819 declarando nulo y de ningun valor ni efecto dicho nombramiento: y considerando por vacante la Capellania, y pasado el termino que el derecho concede á los patronos, en cuya virtud dijo corresponder la presentacion á su dignidad jure devoluto; pero suspendiendo proceder á el por esta vez, mandó que los patronos egecutaran la presentacion en el termino de dos meses en sugeto idoneo, habil y capaz de desempeñar por sí mismo las cargas de la fundacion.*

*Sin embargo la estinguida Camara conforme con el parecer de su fiscal, creyó que el Obispo, no solo habia causado una novedad en haber declarado colativa esta Capellania, que en su concepto no era otra cosa que un simple Patronato de Legos, sino que se habia escedido de las facultades que la Camara le confirió para la visita de las Iglesias del Real Patronato pues que esta debía entenderse para el efecto preciso de inspeccionar y averiguar el estado de las Iglesias en lo temporal, y ramos á ella respectivos, formando espediente instructivo á informativo, separado del ordinario de visita Eclesiástica en lo espiritual, dando cuenta de él: y en consecuencia de todo se le participo así al Obispo en acordado de 24 de Diciembre de 1819 previniéndole reformase inmediatamente su auto de 23 de Agosto anterior, y repusiese el estado á la Capellania , al que tenia antes del despojo, que se habia reclamado á nombre de la D<sup>a</sup> María Barbara de Aguirre.*

*De sus resultas demostró el obispo de Calahorra en su citado informe, que ni se habia escedido de las facultades de su comision, ni despojó á la Capellanía de la naturaleza de merelega que nunca habia tenido, y que el Ayuntamiento de Placencia como Patrono fué quien en el año de 1812, de autoridad propia, y sin audiencia del fiscal Eclesiástico despojó á esta Capellania de la naturaleza de Eclesiástica colativa, y perpetua que tubo desde su fundacion, pues en aquel tiempo el gobierno intruso habia suprimido toda jurisdiccion de fuero Eclesiástico, lo que hacía notoriamente nulo cuanto en su virtud hizo el Ayuntamiento. El Obispo concluyó suplicando á la Camara lo declarase así, y revocando su orden confirmase el auto de 23 de Agosto de 1819.*

*Sobre esta esposición no recayó providencia alguna de la Camara sin duda por haber sido suprimida; pero consta que su fiscal en respuesta de 6 de Marzo ultimo, sin esponer fundamento alguno, manifestó no hallar merito para variar su anterior dictamen.*

*En tal estado se ha dado cuenta al Consejo, que acordó pasase á la Comision de Gracia y Justicia, la cual enterada de cuanto resulta de este Espediente, comprende que la Capellanía de que se trata és no merelega, sino Eclesiástica y colativa perpetua, sujeta por consiguiente á la visita del Ordinario, siendo como es cierto, que en la Escritura de su fundacion se suplicó al Prelado, ó su Provisor, que hiciese al que fuere presentado la canonica institucion y colacion para que fuese perpetua é irrevocable la voluntad del fundador, y constando como tambien consta, que efectivamente se erigieron sus vienes de temporales y profanos en espirituales y Eclesiásticos para que in perpetuum gozasen del fuero de tales; y finalmente que se hizo la colacion y Canonica institucion de esta Capellania á su primero y ultimo obtentor D. José María de Aguirre y Azcarate.*

*En inteligencia de cuanto vá referido, la Comision és de dictamen, que el R. Obispo de Calahorra ha procedido bien, y que en su consecuencia debe aprobarse su auto de 23 de Agosto de 1819. Sin embargo el Consejo de Estado acordará y consultará á S.M. lo que estime mas acertado. Palacio 8 de Septiembre de 1820.*

## Documento 26

Escrito de Juan Manuel de Garro volviendo a reclamar la capellanía y pidiendo que se adopten medidas para corregir los excesos de la respuesta dada por María Bárbara de Aguirre a la notificación de los Autos del Provisor. 22 de septiembre de 1820. AHN, Consejos Suprimidos, Leg. 15754, 2/2, 30-31.

*Autos 22 de Setiembre*

*Juan Manuel de Garro, en nombre de Dn. Miguel de Mendiguchia, natural de la villa de Elgueta, en el espediente con el fiscal general eclesiastico de este Obispado, sobre la adjudicacion de una Capellania colativa fundada en la Villa de Plasencia de las armas por Dn. Juan Antonio Azcarate, vacante por fallecimiento de Dn. José Maria Aguirre su ultimo poseedor, digo que con vista de la respuesta fiscal, contextacion de D<sup>a</sup> Barbara Aguirre, hermana del Capellan fallecido de esta institucion canonica, y providencia del primero del mes pasado de Julio, V.S. se ha de servir adjudicar esta capellania á mi Constituyente como unico opositor que con los datos hasta aqui presentados se manifiesta su derecho, y que D<sup>a</sup> Barvara Aguirre se le desposea del figurado titulo de administradora de estas fincas eclesiasticas, y en caso de una resistencia, que es presumible, se imparta el auxilio del brazo secular, compeliendola á que rinda cuentas formales de todo el tiempo que haya intervenido en el manejo de caudales, tomandoselas con todo rigor el administrador nombrado en la comision de orden del tribunal, y que cuando estos medios no surtan los efectos deseados justamente se use de las prevenciones, y penas espirituales hasta la fulminacion de censuras.*

*Es cierto que la pretension del fiscal general eclesiastico está ceñida á los terminos mas rigurosos de la justicia; dicta su censura á que se presente en autos un tanto de la fundacion de la Capellania, como que sin ella, parece, falta el origen donde deben estribar todos los medios de direccion, y que D<sup>a</sup> Barbara de Aguirre sea citada al tribunal para que deducga en el las acciones que le parezcan competirle; pero aun cuando el titulo de fundacion no se presentase en este espediente, no por eso se procedería á ciegas, ó el tribunal podria suspender la providencia de adjudicacion en Dn. Miguel de Mendiguchia; justifica el fallecimiento del ultimo poseedor de la capellania en cuestion, el parentesco segun los llamamientos, las letras dirigidas al concurso, y la ninguna comparecencia de otro alguno, todo este conjunto de cosas hacen ver que Dn. Miguel de Mendiguchia tiene todos los comites necesarios para obtener la capellania que en la Iglesia Parroquial de la Villa de Plasencia de las armas fundó Dn. Juan Antonio Azcarate, que es la que se ventila*

*Precisamente le ha chocado al tribunal la administracion de los bienes, y efectos de esta Institucion espiritual, personada en D<sup>a</sup> Barvara de Aguirre, y el fiscal previene en primera censura los inconvenientes que pueden resultar de esta tolerancia y el tribunal toma las precauciones debidas en los primeros progresos, pero ¿cuales han sido las resultas de la comision? La persistencia de la titulada administradora en la direccion de los bienes capellanes. El comisionado Dn. Ramon Francisco de Aldasoro cura y beneficiado de Santa Maria la Real de Plasencia desempeña su encargo con la energia que puede desear el tribunal, y no obstante la respuesta dada por D<sup>a</sup> Barbara Aguirre aprueba la nominacion de administrador de los caudales de esta capellania, conferido en Dn. José Alejo de Maiztegui vecino de la de Plasencia; parecia que las resultas en la contextacion hubieran hecho parar las procedencias de la comision, pero este cura se revistio de la entereza de un digno egecutor de las ordenes superiores.*

*La respuesta dada por D<sup>a</sup> Barvara Aguirre merece que se reflexione, y que el tribunal tome las medidas mas arregladas para oponerse á la desmesuracion de sus espresiones. Hasta ahora se ignoraba que D<sup>a</sup> Barvara estaba casada con Dn. Miguel Antonio de Jauregui, y se le consideraba, ó en clase de soltera, ó en el estado de viuda, circunstancias que le habilita la ley en ciertos casos para disponer, y manejar caudales, pero cuando ahora savemos con certeza que está casada se redobra el esceso de administrar bienes, y mucho mas denominarse administradora de la capellania litigiosa ¿Quien habilitó á esta muger para ello? Ella misma, y creo con graves fundamentos que cuando en estos bienes espirituales egerce todas estas funciones, los domesticos, ó de sociedad coniuugal corran igual suerte; pudiera haber dado algun colorido diciendo que su marido era el administrador: aqui se ve un esceso reprovado por la ley.*

*La caveza de la diligencia en respuesta dada por D<sup>a</sup> Barvara Aguirre es orgullosa, insubordinada, falta de todo respeto, vilipendiadora de la Autoridad eclesiastica, y altamente repugnante a la Potestad de*

*un Juez eclesiastico, y la elevadisima dignidad del sucesor de los Apostoles. Si D<sup>a</sup> Barvara Aguirre se ha podido considerar con algun derecho para conservar titulo de pertenencia ¿por que no se ha presentado al tribunal? Su respuesta lo indica, porque no reconoce al Señor Provisor Juez competente en esta causa; aqui se ve que esta señora ha intentado egercer las facultades de un Metropolitano respecto á un Diocesano iniviendole del conocimiento; sin duda todo esto tiene el aspecto mas evidente de una criminalidad; sigue esta señora sin reparo alguno reformando las zelosas visitas de un Prelado diocesano, lo censura de escesivo, y depresivo, y hace de su legitimo Pator (sic) un detalle circunscriptivo de poco honor: atiendase con examen maduro la respuesta, y se verá un fondo vergonzoso; aparenta que es una narracion, pero no es sino un insulto, digno de que el Fiscal general eclesiastico lo tome de su cuenta y preste al tribunal una censura de corrección.*

*A este cumulo de despropositos era consiguiente que D<sup>a</sup> Barvara Aguirre ni se presentase al tribunal, ni cediese de la degradante administracion, como se demuestra en el espediente ¿Que resta? La fuerza secular en caso de resistencia, y en el de ostinacion la conminacion de censuras, ó la publicacion, y notificacion de ellas: por lo cual*

*A V.S. pido se sirva determinar segun lo espuesto, por ser justicia con costas &<sup>a</sup>.*

*Garro*

*Dr. Gonzalez*

## Documento 27

Escrito de Juan Manuel de Garro reclamando se confiera la administración de los bienes de la capellanía al que fue nombrado para ello. 9 de noviembre de 1820. AHN, Consejos Suprimidos, Leg. 15754, 2/2, 35.

*Autos 9 de Noviembre*

*Juan Manuel de Garro: En nombre de Dn. Miguel de Mendiguchia natural de la villa de Elgueta, en la causa con D<sup>a</sup> Barbara de Aguirre, vecina de Vergara, y en su reveldía con los estrados de esta audiencia sobre adjudicacion de la capellania fundada en la Parroquial de Placencia, por Dn. Juan Antonio Azcarate, como mas convenga digo: Que Dn. Miguel Antonio de Jauregui, siguiendo el sistema de sostener en representacion de su muger la indicada D<sup>a</sup> Barbara, las ideas que en un principio tienen manifestadas de no someterse a este tribunal y de llebar adelante la declinatoria que espusieron en respuesta á otro anterior despacho que no devió ser admitida ni ... merecen aprecio supuesto no formalizaron su pretension en este tribunal, se deniega á entregar ó exhibir el Libro de fundación haciendose ignorante de su paradero, lo que influye tanto mas a que se llebe a debido efecto el encargo de nueva administración, espidiendo el título del nombrado por el cura de Placencia pues si se impide al indicado Dn. Miguel de Jauregui, y su muger la cobranza de reditos, y demas manejo de los vienes de la capellania, compareceran á deducir el derecho que consideren tener, y tendra efecto la compulsa de la fundación y de cualquier otro instrumento que fuese necesario y á ello deven ser obligados por todos los medios, y remedio del derecho: en cuya atencion=*

*A V. suplico que en vista del despacho y notificacion que reporto, se sirba conferir la administracion de los bienes de dicha Capellania al nombrado á virtud del mandato de este tribunal, y espedir a su favor el título conducente, pues es de justicia que pido &<sup>a</sup>*

*Garro*

## Documento 28

Auto del Provisor ordenando se suspendan "por ahora" los apremios para la entrega del Libro de Fundación y la expedición del título de administrador solicitada por Garro. 13 de noviembre de 1820. AHN, Consejos Suprimidos, Leg. 15754, 2/2, 35vº.

*Suspéndanse por ahora los apremios para la entrega del Libro y demás documentos pertenecientes á esta capellania como igualmente la expedicion del titulo de Administrador que solicita la parte de Garro en su anterior Escrito; y en lo principal corra la causa segun su estado practicando dicha parte sus pruebas por los medios que le convengan: Lo mandó y firmó el Señor Provisor de este Obispado en Calahorra a trece de Noviembre de mil ochocientos veinte de que doy fé=*

*Dr. Baeza*

*Antemi  
Antonio Llorente*

## Documento 29

Dictamen del Consejo de Estado considerando la capellanía como eclesiástica y colativa, y por tanto mostrándose favorable al auto del Obispo. 18 de noviembre de 1820. AHN, Consejos Suprimidos, Leg. 15754, 2/1, 2-4.

(al margen: G. y J., Sres. Blake, Ciscar, Borbon, Garcia, Garay, Castaños, Zaballos, Piedrablanca, Ibar Navarro, Romanillos, Aycinena, Requena, Varea)

Señor

*D. Miguel Antonio de Jauregui, como marido de D<sup>a</sup> Maria Barbara de Aguirre, vecino de Vergara, Diócesis de Calahorra, acudió á la extinguida Cámara exponiendo: que D. Juan Antonio de Azcarate, tio de la expresada D<sup>a</sup> Maria Barbara fundó una Capellania mere-lega en la Iglesia de Placencia de dicha Diocesis con la obligacion de que se celebrasen ciertas Misas cantadas; llamando para su goce al pariente mas cercano, y nombrando por Patrono á la Justicia y Ayuntamiento del citado Pueblo con facultad y jurisdiccion para conocer en qualquier litigio que pudiese ofrecerse entre los parientes aspirantes á la capellania: que D. José Maria de Aguirre la obtuvo, y le acomodó hacerla colativa durante su vida para ordenarse de Sacerdote; pero habiendo fallecido se restituyó dicha capellania á su naturaleza de mere-lega, y á su consecuencia, declarándolo así la Justicia y Ayuntamiento de Placencia, como patronos, nombraron para ella á la expresada D<sup>a</sup> Maria Barbara en el año de 1812; se la dió la posesion, y estuvo en ella pacíficamente hasta que, habiendo pasado el Rdo. Obispo de Calahorra á hacer la visita de dicha Iglesia, como comisionado de la Cámara, por ser esta de Real Patronato, declaró colativa la referida Capellania y por vacante, despojando á la poseedora; en lo qual, dice, se há excedido aquel Prelado por haberlo hecho sin dar cuenta ni obtener la aprobacion de la Cámara, que le encargó hacer la visita de las Iglesias de Real Patronato, sin que hiciese novedad en el estado de cada Iglesia sin dar antes parte; y solicitó que se acordase la providencia oportuna para que no se despojase á la Capellania de la naturaleza de mere-lega ni á la D<sup>a</sup> Maria Barbara de su posesion; acompañando documentos en que justifica lo que vá referido.*

*Enterado el Fiscal de esta asunto dijo, que aquel Prelado no solo habia causado una novedad en haber declarado colativa esta Capellania, que no es otra cosa que un simple patronato de legos, sino que habia excedido las facultades, que le concedió la Cámara para la visita de las Iglesias del Real Patronato, pues que esta debió entenderse para el efecto preciso de inspeccionar y averiguar el estado de aquellas Iglesias en lo temporal y ramos á ello respectivos, formando expediente puramente instructivo é informativo separado del ordinario de visita eclesiástica en lo espiritual, y remitiéndole á la Cámara con las observaciones, que creyese oportunas, á fin de que poniéndolas en la Real consideración se dignase V.M. tomar la determinacion que fuera de su Real agrado; por lo que creyó el Fiscal se debia comunicar orden al Rdo. Obispo para que inmediatamente reformase su auto de 23 de Agosto de 1819, y repusiese el estado de la Capellania al que tenia antes del despojo, que motivó la declaracion de Jauregui.*

*Habiéndose conformado la Cámara con el dictamen fiscal, se comunicó la correspondiente orden al R. Obispo, y este Prelado hizo una exposicion diciendo: que la Capellania há sido, y es en todo rigor eclesiástica colativa desde el año de 1779; que el fundador de ella previno, que el Capellan tuviese la obligacion de decir una Misa cantada en todos los viernes, y en los dias festivos asistir al confesonario, en cuya virtud, y para que se cumpliese su memoria testamentaria nombró tres albaceas, y estos dieron su poder á D. Francisco Ignacio de Ibarra para que procediese á la fundacion de la Capellania, como lo ejecutó en 11 de Diciembre de 1778, imponiendo á los capellanes aquellas obligaciones, y añadiendo, que pedia al R. Obispo de Calahorra ó su Provisor, que se le hiciese colacion y canónica institucion de ella para que fuese irrevocable la voluntad del fundador Azcarate: que el primer llamado D. José Maria Aguirre acudió con esta escritura pidiendo su aprobacion, y que se erigiesen los bienes de temporales en espirituales; lo que así se declaró por el Tribunal eclesiástico en 20 de Abril de 1779, y se expidió el título de colacion en favor de aquel; y así es, que el R. Obispo su antecesor visitó esta Capellania sin reclamacion alguna en el año de 1779: todo lo qual convence, que es eclesiástica y colativa, y por lo tanto el Ayuntamiento de Placencia es el que verdaderamente la despojó de la naturaleza de tal en el año de 1812; sin que él se hubiese excedido de las facultades que se le concedieron para la visita de las Iglesias del Real Patronato, puesto que, por las ordinarias, que tiene, visita todas las capellanias y memorias de patronatos, y las que V.M. le dá como Patrono, son unicamente para inspeccionar el estado de ellas en lo temporal;*

*por todo lo qual, pidio dicho Prelado se revocase lo mandado por la Cámara en órden de 24 de Diciembre ultimo, y se confirmase el citado auto de visita. Acompañó á esta exposicion un testimonio de las diligencias obradas en su Tribunal eclesiástico en los años de 1778 y 79 para declarar colativa esta capellania y sus bienes espiritualizados; como así se verificó, segun resulta de ellas.*

*Estos documentos y exposicion con los antecedentes se pasaron al mismo Fiscal, quien dijo que no hallando mérito alguno para variar su anterior dictamen le reproducia en todas sus partes.*

*El Consejo, Señor, comprende que la Capellania de que se trata es no merelega, sino eclesiástica y colativa perpetua, sujeta por consiguiente á la visita del ordinario, siendo como es cierto, que en la escritura de su fundacion se suplicó al Prelado ó su Provisor, que hiciese al que fuere presentado la canónica institucion y colacion para que fuese perpetua é irrevocable la voluntad del fundador, y constando, como tambien consta, que efectivamente se erigieron sus bienes de temporales y profanos en espirituales y eclesiásticos para que in perpetuum gozasen del fuero de tales; y finalmente que se hizo la colacion y canónica institucion de esta Capellania á su primero y último obtentor D. José Maria de Aguirre y Azcarate; es de dictamen, que el Rdo. Obispo de Calahorra há procedido bien, y que en su consecuencia debe aprobarse su auto de 23 de Agosto de 1819.*

*Sin embargo V.M. resolverá lo que estime mas acertado. Palacio 18 de Noviembre de 1820.*

## Documento 30

Carta Real Orden de la Secretaría de Gracia y Justicia en la que se comunica la resolución del Rey de que se remita el expediente al Ordinario. 15 de diciembre de 1820. AHN, Consejos Suprimidos, Leg. 15754, 2/1, 1.

*El Rey en vista del dictamen del Consejo de Estado acerca de que se declare por eclesiástica y colativa una Capellania fundada en la Iglesia de Placencia de la Diócesis de Calahorra, contra lo que solicita Dn. Miguel Antonio de Jauregui; ha tenido á bien resolver se remita el expediente ál ordinario para que en uso de sus facultades proceda en su vista con arreglo a las Leyes. Lo que de Real orden comunico á V.S. para su inteligencia y la del Consejo de Estado.*

*Dios guarde á V.S. ms. as. Palacio 15 de Diciembre de 1820.*

*Manuel Garcia Herreros*

## Documento 31

Escrito de Juan Manuel de Garro, en nombre de Miguel de Mendiguchia, pidiendo que se confiera a éste la capellanía fundada por Juan Antonio de Azcarate, reconociendo injusta la reclamación de Miguel Antonio de Jauregui, y considerando innecesario que se vuelva a citar a éste. 24 de abril de 1822. AHN, Consejos Suprimidos, Leg. 15754, 2/2, 122-123.

*Pide se determine segun se pretende en este Pedimiento y para ello suban los Autos*

*A 24 Abril*

*Juan Manuel de Garro en nombre de D. Miguel de Mendiguchia natural de Elgueta, en el espediente con el fiscal eclesiastico de esta diocesi, y posteriormente con D<sup>a</sup>. Barvara Aguirre á quien ultimamente representó su marido D. Miguel Antonio de Jauregui vecino de Vergara, sobre el goce, y pertenencia de una capellania fundada por Don Juan Antonio Azcarate, é interviniendo y cumplimentando su intencion los facultados para ello, radicada en la Iglesia parroquial de Placencia de las armas. V. S. en justicia se ha de servir conferir esta institucion canonica á Mendiguchia, reconociendo injusta por derecho canonico, y civil la reclamacion de Jauregui, separando de la administracion á su muger, sin permitirle con ningun pretexto continúe en ella, rinda cuentas del producido, y su entrega, llevando á debido efecto la nominacion, ó confirmar al administrador que se autorice por este tribunal, declarando á proveer decreto a esta capellania meramente eclesiastica sin mezcla alguna de laycal, ni patronato de legos condenando en todas las costas daños, y perjuicios que se le hayan podido irrogar a Mendiguchia por la retardacion injusta y maliciosa que le han ocasionado, asi D<sup>a</sup>. Barvara de Aguirre como su marido Don Miguel Antonio de Jauregui, teniendo a la vista la real orden comunicada por el ministerio del quince de Diciembre del año de veinte. Si se reconoce este expediente y se atiende á las formalidades que se han usado, ni el Rey por su patronato real, ni el ministerio por su ejecucion puntal á sus derechos, y mucho menos D<sup>a</sup>. Barvara Aguirre, ni su marido Jauregui tienen motivo alguno de la violacion de sus respectivas atribuciones, ni particulares intereses.*

*El recurso que Don Miguel Antonio de Jauregui hizo á la estinguida Camara está lleno de contradicciones impropias de presentarse ante la ejecucion de la ley, supone con certeza que el predecesor de esta capellania la poseyó en clase de colativa quieta, y pacíficamente con aprovación, y titulo del tribunal eclesiastico, y despues de esta aserción confesada viene esponiendo que es meramente laycal, ó patronato de legos; no ignoraba la clausula del fundador en que suplica, y pide al Ordinario diocesano trasmita los derechos profanos espiritualizandolos, que solamente esta espresion era mas que bastante para confundir al opositor mas engreido.*

*Sin mas motivo que un antojadizo parentesco se convina con el Ayuntamiento patrono, y hacen presentacion de esta capellania en D<sup>a</sup> Barvara Aguirre muger de Jauregui, sin duda ... savia la cualidad precisa en una muger, de poder asistir á las festividades eclesiasticas cantando en el coro, administrar el santo sacramento de la penitencia, y celebrar las misas cantadas como lo ordena estrechamente el fundador: no se reparó en estas minuciosidades.*

*Estaba empeñado el Ayuntamiento á continuar su empresa: no reparó en que se le habia pasado el tiempo prescrito para la presentacion, pero á estos desordenes escandalosos ocurrio el celo apostolico del Señor Illmo. Diocesano predecesor del actual pontificado, mandando en su auto de visita, y declarando ser esta capellania eclesiastica no laycal, corresponder su presentacion á S. Illma. en devolucion y no pertenecer á una muger la posesion ni goce de esta institucion canonica.*

*Pretendió Jauregui con esta declaracion apoyarse en el real Trono, y elevar su queja; sus esperanzas como infundadas han sido repetidas no obstante el empeño del fiscal superior que no fue cumplido, y de sus resultas ha sido remitido el espediente al tribunal para que con arreglo á las leyes sea determinado ¿que nos quiere dar á entender en esta resolucion? que Jauregui elevó una queja injusta, que el Diocesano en su Santa visita procedio bien, sin escenderse los limites del Real Patronato, que en este caso obró como un verdadero Ordinario, no como comisionado de los patronatos meramente laycales: La superioridad lo conocio así, y por ello remitió el espediente para que conformandose con lo que dispone el derecho canonico se confiriese esta capellania en el pariente mas proximo con las circunstancias que se previenen en la fundacion.*

*Fuera inutil refutar cuanto Jauregui espuso en su representacion; ella convence su ningun derecho y será una cosa estraña que se le vuelva a citar para que deduzca sus acciones, lo save, y está evacuado mas que suficientemente.*

*No puedo omitir un acaso chocante en esta causa, que Doña Barvara Aguirre cancele la autoridad de un marido presentandose en juicio, ó contextando a los mandatos del tribunal, sin anuencia espresa ni tacita de este; esta muger se ha hecho reprehensible, y digna de que se le condene en las costas de los retrasos ocasionados: por todo lo cual, y supuesto en el espediente*

*A V.S. pido se sirva resolver como se pide, y demas que es consiguiente á la naturaleza de esta causa: es justicia con costas &a.*

*Garro*

*No ha lugar por ahora a lo que se solicita por la parte de Garro en su anterior escrito: y se libre el despacho acordado en auto de diez y ocho de Enero de año mas proximo con la instruccion e insercion necesaria: Lo mandó y firmó el Señor Provisor de este Obispado en Calahorra a veinte y seis de Abril de mil ochocientos veinte y dos de que doy fé=*

*Doctor Baeza*

*Ante mi  
Antonio Llorente*

## Documento 32

Escrito presentado por el procurador Juan Manuel de Diez, en nombre de Miguel Antonio de Jauregui, por el que presenta poder y pide al tribunal eclesiástico que se inhíba en la causa a favor de los tribunales civiles, formando artículo de previo y especial pronunciamiento, y exponiendo las razones en las que se basa para ello. 10 de julio de 1822. AHN, Consejos Suprimidos, Leg. 15754, 2/2, 129-131.

*Juan Manuel de Diez en nombre y en virtud de poder que presento de Dn. Miguel Antonio de Jauregui, vecino de la villa de Vergara, como marido de D<sup>a</sup> Maria Barbara de Aguirre, ante V.S. como mejor en derecho proceda parezco y digo que en 3 del corriente ha sido citado mi principal á solicitud de Dn. Miguel de Mendiguchia á la instancia incoada sobre la provision de la Capellanía fundada por Dn. Juan Antonio de Azcarate; y sin que sea visto atribuir á V.S. mas jurisdiccion que la que le compete por derecho, y declinando esta en forma, no puedo menos de hacerle presente que en meritos de justicia se ha de servir inibirse ó abstenerse del conocimiento de dicha instancia, mandando que si el citado Mendiguchia ó algun otro tubiese que pedir contra mi principal respecto de dicha capellanía ó sus bienes, lo haga ante el tribunal civil competente, á quien toca privativamente todo conocimiento en la materia; y sobre que asi se estime formo articulo de previo y especial pronunciamiento, fundado en las razones siguientes.*

*Jamas ha podido sugetarse validamente á la jurisdiccion de V.S. la capellanía fundada por Dn. Juan Antonio de Azcarate; y en el día bajo ningun respecto puede entender en razon á su provision. Ella es propriamente una memoria de misas, cumplidera por el pariente mas cercano en la linea llamada á la sucesion; es de consiguiente puramente laical, y no le compete por lo tanto la menor jurisdiccion para conocer y entender en su razon. Las clausulas primera, segunda, tercera y cuarta de la fundacion ponen de manifiesto esta verdad incontestable. Dispuso el fundador en la primera que sacando de sus vienes cuatro mil pesos fuertes se remitiesen á Placencia libres de todo coste para fundar con ellos una Capellanía; sin que recuerde que deba espiritualizarse, ni que sea colada. Debiendo pues considerarse por merelega y laical toda Capellanía mientras lo contrario no se disponga por el fundador, es inocultable que por tal debería ser considerada la fundada por Azcarate aun atendiendo á la disposicion general de esta clausula: mas su voluntad se encuentra declarada claramente en las clausulas siguientes. Dijo en la segunda (haciendo merito de las obligaciones del capellan) que acabada la misa debia hechar el responso dicho capellan ó el que la dijere en la sepultura que estan enterrados sus Padres: de cuya disposicion se viene en conocimiento indisputable de que dicha Capellanía puede ser poseida por Legos cumpliendo con sus cargas por medio del sacerdote de su agrado; y que por consiguiente no es requisito esencial el que sea presvitero el capellan. Pero en la tercera aclara todavia mucho mas este punto. Llamo en ella para el goce de la Capellanía al pariente mas cercano principiando por los descendientes de su hermana Ana María; estableciendo de esta suerte una sucesion ordinaria y regular sin exigir la menor calidad y requisito de que deben estar revestidos los que aspiran a obtener Capellanías colativas; en terminos de que á virtud de este llamamiento particular siempre deben entrar á suceder los parientes mas cercanos indistintamente sean varones ó hembras con preferencia absoluta á los mas remotos. Esto mismo confirma la clausula cuarta, en la que mandó que el patrono de esta Capellanía fuese el Ayuntamiento y Justicia de la villa de Placencia para que en cualquier litigio entre los parientes en la presentacion del capellan decida y aplique al que mejor derecho tubiere. A virtud de esta clausula el Patronato del Ayuntamiento esta limitado al conocimiento contencioso de las disputas y contiendas entre los Parientes; es decirnos aviertamente que dicha capellanía ha de estar bajo la vigilancia y autoridad del Tribunal Secular; cuya decision tampoco puede recaer sino en favor del que mejor derecho tubiere, esto es jamas ha de dejar de observar la sucesion del Pariente mas cercano en la linea predilecta sea varon ó hembra; cuyas disposiciones de ningun modo son acomodables sino á la capellanía merelega y laical. Por consiguiente es claro é incontrovertible que no compete á V.S. la menor jurisdiccion para conocer en su razon; y estando como esta aplicada á mi principal en representacion de su consorte D<sup>a</sup> Maria Barbara de Aguirre por la justicia y Ayuntamiento de la villa de Placencia que es el tribunal autorizado espresamente por el fundador para la decision y aplicacion de ella, devio haber respetado la posesion que quieta y pacíficamente conserva en tantos años. Asi opino el Señor Fiscal del Consejo de Castilla en su respuesta de 30 de Noviembre del año de mil ochocientos diez y nueve; y asimismo dispuso y mando aquel respetable tribunal en su providencia de 24 de Diciembre del mismo año, que comunicada á su S<sup>a</sup> Ilustrisima debio haber sido executada y cumplida, sin que para abrir nuevas instancias le deje arvitrio la Real orden de 15 de Diciembre del año siguiente, que le previene proceda en el asunto con arreglo á las Leyes; es decir en conformidad de lo ordenado por el Supremo*

*Consejo, que no se altera ni revoca por aquella Real Orden. Queda pues demostrado que jamas ha podido sugetarse validamente á la jurisdiccion de V.S. la capellanía fundada por Dn. Juan Antonio de Azcarate, y por consiguiente la necesidad en que se hallaria de abstenerse de todo conocimiento en razon á su provision y de respetar la quieta y pacifica posesion de mi principal, aun cuando otros decretos posteriores no le obligasen á sobreseer en la instancia incoada, como le obliga el de veinte y nueve de Junio del año proximo pasado, sancionado por su M. en 7 de Julio siguiente. Con efecto en su articulo 3º se dispone que quedan estinguidos todos los capitales y renditos procedentes de amortizacion Eclesiastica, quedando sus resultas á favor de la deuda Nacional ademas de los señalados (sic) en los articulos de que trata el 17 del Decreto de 9 de Noviembre de 1820 esceptuandose los renditos pertenecientes á capellanes y los capitales y renditos de las capellanías Laicales y colativas de llamamiento y Patronato pasivo de familias que muertos los actuales poseedores deben volber en clase de vienes seculares y libres á las familias respectivas. A virtud pues de este articulo cesa toda provision y colacion de capellanías, debiendo pasar los vienes que les pertenezcan ó al credito Publico ó á las familias convocadas; siendo indudablemente de esta ultima clase la capellanía fundada por Dn. Antonio de Azcarate, como de llamamiento y Patronato pasivo entre los parientes mas cercanos de su hermana Ana Maria; y correspondiendo por consiguiente los vienes y censos de que se compone á la consorte de mi principal, como hermana del ultimo capellan y pariente mas cercana del fundador y de su citada hermana Ana Maria: de manera que en exacto desempeño de la dispositiva de dicho articulo cuando en el dia disfruta mi principal dichos vienes y censos en clase de capellan, debe entrar forzosamente á su goce en representacion de su consorte en concepto de sucesor, adquiriendo la libre disposicion de todos ellos como de los demas vienes que posee en consorcio; siendo por lo mismo inutil, superfluo, y sumamente viciosa la instancia á que ha sido citado; pues aunque se quisiese reducir á tratar de la sucesion en los vienes y censos de la capellanía, tocaría el conocimiento á los jueces civiles y seculares, y de ningun modo á los á los Eclesiasticos, ya por la calidad y naturaleza de la materia, ya tambien porque la egecucion de los decretos de Cortes esta confiada inmediatamente á las Autoridades civiles. Por todo lo cual á V.S. suplico se sirva estimar y resolver segun el ingreso y capitulos de este escrito llevo solicitado y es justicia que pido con costas juro &ª.*

Diez

Licenciado Dn. Ramon Ibero

## Documento 33

Respuesta de Juan Manuel de Garro, procurador de Mendiguchia, al escrito presentado por Juan Manuel de Diez, procurador de Miguel Antonio de Jauregui. 18 de julio de 1822. AHN, Consejos Suprimidos, Leg. 15754, 2/2, 132-133.

*Juan Manuel de Garro en nombre de Dn. Miguel de Mendiguchia natural de Elgueta, en el espediente con el fiscal eclesiastico y ahora, como articulante, con Dn. Miguel Antonio de Jauregui vecino de Bergara marido de D<sup>a</sup> Barbara Aguirre representando sus derechos y acciones sobre pertenencia á la capellania fundada por Dn. Juan Antonio Azcarate en la Iglesia Parroquial de Plasencia de las armas, digo que contextando á su escrito del diez del corriente en el que solicita inhivir del conocimiento de esta causa al tribunal V.S. usando de las facultades ordinarias, y las comunicadas por la superioridad á S.Illma. y conferidas á la Autoridad de justicia, se ha de servir desatender semejante solicitud, y á su consecuencia declarar el derecho incontrastable de esta fundacion eclesiastica á favor de Dn. Miguel de Mendiguchia, con lo demas que considere oportuno el tribunal, condenando en las costas daños, y perjuicios á Dn. Miguel Antonio de Jauregui.*

*Es necesario ó no haber visto las clausulas de la fundacion ó no quererlas ver para afirmar con tanta seguridad que no es de las colativas, sino un mero patronato de legos: Todos los principios que en su escrito expone Dn. Miguel Antonio de Jauregui tienen una fuerza antiproducente: todos ellos respiran no ser laycal, y si eclesiastica; sus mismas voces estan declamando este legitimo caracter; pone las obligaciones respectivas de los capellanes que la hayan de gozar, que debe hacer despues de celebrar la misa, y despues le impone la necesidad indispensable de asistir á los divinos oficios, y administracion de sacramentos.*

*¿Será laical cuando el fundador en uso de sus facultades, y voluntad declarada suplica al Ordinario eleve á la clase de colativa esta imposicion? Si este fundador se somete á la jurisdiccion eclesiastica, y desea que los bienes profanos se espiritualicen, no es regular que quisiese dejar esta fundacion en el concepto de un patronato meramente laycal, bien al contrario, fundó en tales terminos que no pensó jamas que ni aun el nombre de laycal recaiese sobre su fundacion: No puedo señalar los folios donde constan estas clausulas por no estar demarcados en este espediente, pero bien luego puede el tribunal cerciorarse reconociendo la fundacion, y especialmente al tratar de las obligaciones de los capellanes. No se disputa ahora el derecho de presentacion que pueda tener el patrono por la designacion que hizo el fundador, y solo si del modo con que lo verificó. Azcarate en la denominacion mandó no se excediera de los limites que tenia circunscritos, y el patrono no atendió á clausula alguna; dispuso que la nominación, ó presentacion de esta capellanía recaiese en persona apta para el ministerio sacerdotal y el patrono eligio á un sugeto inapto, inhabil é irregular por defecto de naturaleza para posesionarlo en esta capellanía; posesionó á una muger D<sup>a</sup> Barvara de Aguirre muger de Dn. Miguel Antonio de Jauregui ¿podrá llegar á ser clerigo, y dispensar los santos sacramentos como se le impone por el fundador? La posesion fue nula, ó no hay posesion, no tiene en esta parte título posesorio á que atenerse, porque lo que al principio es nulo, no puede convalecer, ó prevalecer con la duracion: No hay nominacion, presentacion, ni posesion.*

*El dictamen fiscal de la estinguida Camara parece se inclinaba á creer era una fundacion laycal, pero no tenia á la vista todos los datos que oy se reconocen en este espediente para fundarlo; fue una esposicion á la que no accedio el supremo tribunal, y en su vista lo pasó al Ordinario para que en uso de sus facultades deliberase: caso de que fuese patronato de legos serian escusados estos pasos de remesa.*

*Viendo Dn. Miguel Antonio de Jauregui la debilidad de sus esposiciones se acoge á las ordenes vigentes del dia sobre vacantes de capellanías de sangre, y distribucion de sus bienes: estas ordenes no hablan con la capellanía de Azcarate; las que tienen agregada la cura de almas como esta, se hallan fuera del caso, y la vacante sucedio en tiempos muy anteriores á esta disposicion, y ahora se le ha dado el caracter á la ley de no tener un poder retroactivo ni aun para su determinacion.*

*Queda como unico Dn. Miguel Mendiguchia para el derecho a esta capellanía, y desatendible lo solicitado por Jauregui por todo lo cual*

*A V.S. pido se sirva determinar como en este, y anteriores escritos se contiene; es justicia con costas &<sup>a</sup>.*

## Documento 34

Censura del Fiscal en la que rechaza la declinatoria solicitada por el procurador de Miguel Antonio de Jauregui en su escrito del 10 de julio. 22 de julio de 1822. AHN, Consejos Suprimidos, Leg. 15754, 2/2, 134-135.

*Haviendo visto este expediente instaurado por D. Miguel de Mendiguchia para la provision y adjudicacion de la Capellanía que mandó fundar en la Parroquial de Placencia Dn. Juan Antonio Azcarate, y el escrito ultimo presentado á nombre de Dn. Miguel Antonio de Jauregui en virtud de la citacion que se le hizo en 3 del actual, por el que declinando la jurisdiccion eclesiastica solicita se inhiba y abstenga el tribunal del conocimiento de la causa alegando ser dicha Capellanía laical y que por lo mismo corresponde conocer de ella al tribunal civil; Digo que la referida declinatoria y pretension no debe tener cabimiento en este expediente segun la instruccion documental que ha tomado y que era necesaria para caminar en el á pie firme. Resulta pues que el fundador de esta Capellanía la quiso instituir colativa eclesiastica y asi lo pidió y suplicó arreglandose á la voluntad del testador el expresado Azcarate; en su virtud no haviendo hallado reparo el Fiscal General para la espiritualizacion de sus bienes, recayo auto de aprobacion en 20 de Abril de 1779, erigiendose aquellos de temporales y profanos en espirituales y eclesiasticos; se adjudicó al mismo tiempo en concepto de tal Capellanía eclesiastica colativa á su pretendiente primer llamado D. José Maria de Aguirre; se le dio el testimonio conducente para que solicitase la prima tonsura, y conseguida esta se le despachó el titulo de colacion en forma con fecha de 11 de Junio de dicho año. Como eclesiastica colativa ha sido visitada por los Prelados Diocesanos haviendolo sido la ultima vez en 23 de Agosto de 1819. Asi resulta del expediente y resulta tambien que haviendo tenido necesidad el Illmo. Señor Obispo actual de recurrir á la Real Camara á manifestar todo esto y la justicia de sus procedimientos en la citada visita con motivo del recurso que hizo á dicho tribunal el expresado Jauregui quejandose de ellos y diciendo ser un patronato de legos, se expidió la Real Orden de 15 de Diciembre de 1820 para que el Señor Illmo. en uso de sus facultades procediese con arreglo á las leyes, en cuya virtud se pasó el expediente al tribunal para dictar en el las providencias que fuesen arregladas á derecho. A vista de todo esto no podemos menos de graduar la pretension de Jauregui de la mas arrojada y temeraria queriendo hechar por tierra un edificio tan solidamente fundado. Si pues con arreglo á lo que queda expuesto tenemos en estos autos fundada una Capellanía colativa eclesiastica, no hay para que detenernos en asentar que el conocimiento sobre su provision y adjudicacion corresponde privativamente al tribunal eclesiastico segun lo esta practicando sin contravenir á ninguna ley establecida aun entre las nuevas instituciones, puesto que no la hay hasta ahora que quite este conocimiento; antes por el contrario se han dictado algunas que arreglan su provision dejando fuera de toda suspension á las capellanías que tienen anexa la cura de almas de cuya clase es la que se trata, ademas de que aunque la hubiera de suspension aun con respecto á estas, como que la vacante y oposicion ocurrió con anterioridad, no debia darse un efecto retroactivo. He dicho, y el tribunal providenciara lo que juzgue mas arreglado: Calahorra 22 de Julio de 1822.*

*Por indisposicion del Fiscal General  
Licenciado D. Benito Marcilla*

## Documento 35

Escrito de Miguel Antonio de Jauregui, al Juez de Primera Instancia del partido de Vergara, en el que tras una detallada exposición de hechos, solicita que se declare la Capellanía como de patronato pasivo de familias, y que, en virtud de lo establecido en el decreto de 29 de Junio de 1821, se le confiera la posesión de todos sus bienes en clase de seculares y libres. 13 de agosto de 1822. AHN, Consejos Suprimidos, Leg. 15754, 2/1, 38-39.

*D. Miguel Antonio de Jauregui, como marido de D<sup>a</sup> Maria Barbara de Aguirre y Azcarate, vecino de esta villa de Bergara; ante Vmd. como mejor en derecho proceda parezco y digo que D. Juan Antonio de Azcarate en la memoria testamentaria que otorgo en siete de Agosto de mil setecientos setenta y dos por testimonio del Licenciado D. Ignacio de la Sierra Escribano de S.M. publico y de cavildo de la ciudad de Guadalajara del nuevo Reyno de Galicia, dispuso entre otras cosas se fundase una capellanía con la principalidad de quatro mil pesos fuertes en la Iglesia Parroquial de la villa de Placencia, llamando para capellanes á sus parientes mas cercanos, principiando por los descendientes de su hermana Ana María y nombrando por Patrono de ella al Ayuntamiento y justicia de dicha villa de Placencia para que en cualquiera litigio que ofreciese entre sus parientes en la pretension de capellan decidiese en favor del que mejor derecho tubiese. Quando á esta disposición debian executarle los albaceas y comisarios, que el recordado D. Juan Antonio nombró en su final testamento fundando por si mismos la capellanía con arreglo á la voluntad manifestada en dicha memoria, dieron poder los nombrados para su fundacion a D. José Andres Eguizabal, a D. Ramon Elias Junguitu y á D. Francisco Ignacio Ibarra; y habiendose excusado los dos primeros fundó a consecuencia el ultimo la citada Capellanía en once de Diciembre de mil setecientos setenta y ocho, propasando de propio motu á disponer que fuese colativa contra la voluntad clara y terminante del despositor de la memoria: Mas siendo inocultable que los Albaceas y comisarios no pudieron confiar á tercero sus funciones personalisimas; porque solo se les habilita para ejercerlas por si mismos con atencion á sus circunstancias personales, y por la confianza que le han merecido al testador o comitente; y por lo tanto fue nulo asi el poder otorgado por ellos, como igualmente todo lo obrado a su virtud por Ibarra no puede contar en el dia con otro apoyo dicha Capellanía que la memoria, asi en razon a su existencia, como en su calidad y serie de sucesion; pues que es claro que constando la voluntad del testador quando los comisarios dejan de hacer ó lo executan de una manera impropia y nulo que dispuso; se pone en execucion aquella con arreglo á su intencion sin hacer aprecio del olvido y descuido de los comisarios ni de sus gestiones ajenas de sus atribuciones; debiendo por consiguiente concluirse que la capellanía mandada fundar , y que se fundo impropriamente, es merelega ó laical, y de sangre y familiar, y que existe y obra á virtud de la citada memoria como si en ella se hubiese fundado. Bajo este concepto inalterable el Ayuntamiento de la villa de Placencia hizo en mi eleccion de capellan en el año de mil ochocientos doce, como á marido de D<sup>a</sup> Maria Barbara de Aguirre hermana del poseedor anterior D. José Maria de Aguirre é hija y sobrina de Ana Maria y del fundador; y a consecuencia tomo posesion de ella; como todo resulta de estas compulsas, que en debida forma acompañan. A virtud de esta eleccion, conforme á la voluntad del fundador, poseo las rentas y emolumentos de dicha Capellanía dando frente á sus cargas y obligaciones por medio de sacerdote de mi confianza: Mas disponiendose en el articulo 3 del decreto de cortes de 29 de Junio del año proximo pasado ; sancionado en 7 de Julio siguiente: que los capitales y reditos de las capellanias laicales y colativas de llamamiento y patronato pasivo de familias, muertos los actuales capellanes deben volver en clase de bienes seculares y libres á las familias respectivas, parece consiguiente que a mi consorte se apliquen los reditos y capitales de la citada capellanía, en clase de sucesora, no habiendo, como no hay capellan Eclesiastico, á quien se perjudique en la transmision de ellos á la familia sucesora; y estando por lo tanto en el caso de fixar y arreglar la sucesion por no haber capellan que personalmente interese en la subsistencia del destino: Por lo que presentando tambien las partidas bautismales, que acreditan que mi muger es hija legitima de Ana Maria de Azcarate sobrina del fundador y hermana del ultimo poseedor capellan, á Vmd suplico que habiendolas por presentadas en union con las demas compulsas, se sirva en su vista declarando á dicha capellanía por de llamamiento y patronato pasivo de familias, y que toca y corresponde la sucesion en los bienes de que se compone a mi muger, mandar se me confiara como a su marido posesion de todos ellos en clase de seculares y libres, sin perjuicio de otro que mejor derecho tubiere, segun es de Justicia que pido, y costas, juro &<sup>a</sup>= Miguel Antonio de Jauregui= Licenciado Ibere.*

## Documento 36

Auto del Alcalde Constitucional segundo de la villa de Vergara, en sustitución del Juez de primera instancia del partido de Vergara, declarando que la capellanía fundada por Juan Antonio de Azcarate es de llamamiento y patronato pasivo de familias, y mandando que, en virtud del artículo tercero del decreto de 29/6/1821, sus bienes vuelvan a la familia del fundador, dando posesión de los mismos a María Bárbara de Aguirre y en su representación a su marido. 26 de Agosto de 1822. AHN, Consejos Suprimidos, Leg. 15754, 2/1, 40.

*En atencion á los documentos producidos se declara, que la capellanía fundada por D. Juan Antonio de Azcarate es de llamamiento y patronato pasivo de familias, y que su consecuencia y cumplimiento del articulo tercero del decreto de cortes de veinte y nueve de Junio del año ultimo los capitales en que consiste dicha capellania, y sus renditos deben volver en clase de bienes seculares y libres á la familia del fundador, y en este concepto se manda dar su posesion a D<sup>a</sup> Maria Barbara de Aguirre y Azcarate y en su representacion á D. Miguel Antonio de Jauregui su marido sin perjuicio de tercero que mejor derecho tenga, y se comisiona al efecto á los Alcaldes constitucionales de este partido, y ordena que los deudores censualistas le acudan con los renditos vencidos y que vencieren pertenecientes á dicha capellanía.= Lo mando con asesor el Señor Alcalde constitucional segundo de esta villa de Vergara sustituyendo al Señor Juez de primera instancia de este partido á veinte y seis de Agosto de mil ochocientos veinte y dos.= Licenciado Aldasoro= Pedro Sanchez= Ante mi= D. Diego Manuel de Lesarri=*

## Documento 37

Escrito de Juan Manuel de Diez, procurador de Miguel Antonio de Jauregui, en respuesta al escrito de la parte contraria y a la censura del Fiscal. 25 de septiembre de 1822. AHN, Consejos Suprimidos, Leg. 15754, 2/2, 136-140.

*Juan Manuel Diez en nombre de Dn. Miguel Antonio de Jauregui, como marido de D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Barbara de Aguirre; en autos con Dn. Miguel de Mendiguchia; sobre pertenencia de la capellania fundada por Dn. Juan Antonio de Azcarate en la Iglesia Parroquial de la villa de Placencia, en vista del escrito contrario, y de la respuesta fiscal, que me han sido comunicados; digo que con el desprecio que se merecen los insultos y desatinados supuestos tanto de la contraria, como del Fiscal, V.S. en meritos de justicia se ha de servir estimar el articulo que tengo propuesto, con imposicion de costas procesales a Mendiguchia; pues asi es de hacer por las razones propuestas anteriormente ... y demas que se dira=*

*Con tono ... satisfactorio se nos dice por la contraria, y por el Fiscal que el fundador en uso de sus facultades y voluntad declarada, suplico al ordinario que a la capellanía en question elevase a la clase de colativa; pero ninguno de ellos se ha tomado el trabajo de indicarnos qual sea el fundador a quien atribuyen semejante suplica, a la que consideran de tan seguro valimiento ¿Si hablaran estos señores del titulado fundador Dn. Francisco Ignacio de Ibarra? Si a ... original acuden con tanta confianza, mal negocio traen entre manos, titular fundador ni reconocer por valera la fundacion de un apoderado de contrarios, no cabe en quienes hayan saludado los rudimentos de jurisprudencia, y contendien sin lesión el uso de la razon. Las funciones de los comisarios son personalisimas; ni pueden extenderse mas alla de los limites prescriptos por el comitente. A ellos solos les habilita para la execucion de su voluntad; porque atiende y mira a sus circunstancias y qualidades personales, que le pueden ser desconocidas respecto de otras personas. No hay, de consiguiente, ... que ignore que los comisarios no pueden validamente cometer a tercera persona sus funciones privativas ¿Que valor, pues, tendrá en lo legal la fundación de Dn. Francisco Ignacio de Ibarra? El mismo que tiene un solo cero en lo numerico. Nulo y abusivo de la confianza hecha, fue el poder otorgado por los comisarios de Dn. Juan Antonio de Azcarate en favor de Dn. Jose Andres Eguizabal, Dn. Ramon Elias Junguitu, y Dn. Francisco Ignacio Ibarra. Nulo, por consiguiente, quanto este obro a su virtud a consecuencia de haberse excusado los dos primeros; propasando caprichosamente a disponer que se hiciese colativa la capellania mandada fundar por Azcarate, contra su voluntad clara y terminante de que fuese laical. Nulas por lo mismo todas las gestiones que a resultas se hicieron por el primer capellan ante S.S.I., quien a proceder con delicadeza debió haberse abstenido de ingerirse en este asunto, bien ageno de sus atribuciones, mandando que los interesados se arreglasen a lo dispuesto por Azcarate en la memoria testamentaria, sin hacer aprecio de la impropia, chocante y nula fundacion de Ibarra.*

*Quando los comisarios dejan de hacer lo que el testador dispone, o lo executan de una manera impropia y nula, su voluntad debe ser puesta en execucion sin hacer aprecio del olvido o descuido de los comisarios, ni de sus gestiones ajenas de sus atribuciones. Por lo tanto no habiendo los comisarios de Azcarate fundado por si mismos la capellania que se les encargo la fundacion, la que existe no reconoce otro apoyo que la memoria testamentaria del mismo Azcarate. A ella debe su ser y existencia y segun ella ha de regir, y ha de ser observada y disfrutada: ella es la fundacion; y Azcarate el unico fundador ¿Que clausula ni expresion contiene que la haga colativa? Quantas en ella se leen, manifiestan la voluntad mas clara y decidida de que fuese puramente laical. Todos los autores practicos recomiendan constantemente que para conocer y decidir a que clase pertenece una capellania, esto es si es laical o colativa, se atienda a la serie de sucesion que se establece, a los gravámenes que se imponen, y ultimamente lo que es mas esencial y pone fuera de duda la clase, a que Juez se confia el conocimiento en los casos contenciosos. Si examinamos la serie de sucesion marcada por Azcarate, nos sera preciso convenir en que solo es acomodable a capellanias puramente laicales: Asi es que llama a la sucesion a los parientes mas proximos por orden riguroso, principiando por los de su hermana Ana Maria; sin distincion de sexo; y sin exigir qualidades algunas personales, que son indispensables y se requieren para la obtencion y goce de las colativas. Si miramos a los gravámenes que impone, nos confirman y aseguran en el mismo concepto: Asi es que establece por ... fixo que pueden ser sobrellevados por el mismo capellan, o por el que celebre la Misa; manifestandonos con toda claridad que el capellan puede llevar o dar frente a los gravámenes por medio de otro; lo que tampoco es acomodable a capellanias colativas. Finalmente si atendemos al Juez o autoridad a quien confia la decision de las questiones y diferencias entre parientes sobre sucesion es preciso obcecarse, en terminos de que se niegue la existencia del sol a medio dia, para*

*dexar de confesar de que la capellania de Azcarate, es meramente laical: Asi vemos que a la Justicia y Ayuntamiento de Placencia confia la decision en casos contenciosos habilitandole para que decida en favor del que mejor derecho tuviere; a virtud de cuya disposicion es tan ageno del conocimiento de S.S.I. y del Provisor el de esta capellanía, como lo puede ser del gran señor de Hungría. Estas doctrinas incontestables, tuvo muy presentes el Señor Fiscal del Consejo de Castilla; como igualmente la Real Camara; y a pesar de la impropia e infundada instancia de S.S.I no pudo menos de insistir en su fundado dictamen; con arreglo al qual y a lo resuelto por la Camara, se devolvieron los papeles para que procediese conforme a las leyes; que era decirle que obrase no por su antojo y capricho, sino segun previenen y exigen las clarissimas que existen y sugieren la materia; absteniendose de conocimientos, que no son de su incumbencia, y dexando correr al nombramiento de capellan executado por la Justicia y Ayuntamiento de Placencia, unica autoridad competente. No se persuada pues, que en virtud de la expresion generica de que procediese con arreglo a las leyes, haya adquirido S.S. facultades que no le competian: El gobierno debía confiar de la rectitud que debe acompañar a los actos y proceder de un prelado, que al asunto le daría el rumbo prevenido por las leyes; y por ello y no por habilitaciones impropias y chocantes, se le devolvieron los papeles; y hablando con toda modestia, no podemos menos de asegurar que manifiesta en su procedimiento irregular muy poca o ninguna delicadeza, desentendiendose de lo mandado por la respetable Camara de Castilla; y de los dictámenes de su Señor Fiscal, que no se han innovado por el Gobierno en la resolucion.*

*Si la contraria y el Fiscal han desatinado en quanto aseguran ser colativa dicha capellanía, no lo han hecho menos respecto de considerarla que la asiste la cura de almas. Solamente una imaginacion tan obcecada, que es incapaz de reconocer su propia existencia, puede confiar a la pluma semejante desatino. Una capellanía merelega, de sucesion rigurosa de sangre, y sin otros gravámenes que el de una Misa semanal, de un responso, y asistencia en los Domingos a misa mayor y visperas y al confesonario, cumplideros todos por medio de quien le acomode al capellan, esta distante de embolver la cura de almas; y de no hallarse comprendido en el decreto de Cortes de 29 de Junio de 1821, sancionado por S.M. en 7 de Julio siguiente; a cuya virtud ha recaido la sucesion en la consorte de mi parte, segun lo tiene solicitado ante las autoridades civiles; y se declarara en su favor como debe hacerse.*

*Por lo que a V.S. suplico se sirva estimar dicho articulo, y no haciendolo asi protesto valerme del Real auxilio contra la fuerza en la forma ordinaria segun es de Justicia que pido y costas juro &<sup>a</sup>*

*Diez*

*Licenciado Dn. Ramon Ibero*

## Documento 38

Dictamen del Fiscal general eclesiástico del obispado de Calahorra. Se reafirma en su dictamen de 22 de julio de 1822 e insiste en las razones que justifican que se considere como colativa la capellanía. 11 de junio de 1823. AHN, Consejos Suprimidos, Leg. 15754, 2/2, 160.

*El fiscal con vista del expediente que se le ha comunicado por auto de quatro del que rige sobre la presentacion de la Capellania que mandó fundar en la Parroquial de Placencia D. Juan Antonio Azcarate, y del escrito ultimamente presentado por la parte de D. Miguel Antonio de Jauregui insistiendo en el articulo de inhibicion del conocimiento de esta causa por esta tribunal eclesiastico, Dice: que en su respuesta anterior obrante al folio 134,, se dieron las razones incontrestables (sic) que afianzaban el conocimiento que el tribunal ha tomado las que se reproducen aora por conclusion, añadiendo nuevamente que con arreglo á la mente del testador Azcarate manifestada en la primera clausula de su memoria testamentaria, no podia fundarse la Capellanía en otro concepto que el de eclesiastica colatiba puesto que al Capellan le impuso la carga (dejando aparte la celebracion de la misa cantada y responso en todos los biernes de el año) de asistir á la mayor, visperas y confesonario en los Domingos y fiestas de guardar. Asi lo executó, qual no podia menos, el Presbitero D. Francisco Ignacio de Ibarra poderhabiente de los testamentarios del dicho Azcarate, y habiendo despues recaido la aprobacion y confirmacion por este tribunal eclesiastico de la escritura de fundacion á instancia de D. José Maria Aguirre primer llamado al goce de la citada Capellanía, es una temeridad sin exemplo la del D. Miguel Antonio Jauregui de pretender con tanto esfuerzo la inhibicion de un tribunal á quien por tantos titulos le corresponde su conocimiento. Lejos pues de accederse al articulo inhibitorio, debe declararse nula la presentacion de el Ayuntamiento patrono hecha en Jauregui y su muger, nula la posesion dada en su virtud y nulo todo lo obrado por el Alcalde constitucional de Bergara que mandó volber los bienes de la Capellanía en clase de seculares y libres á la familia de el fundador, como hecho todo en fuerza de un decreto de las llamadas Cortes á el que principalmente se acoge el citado Jauregui, y que está ya declarado nulo con todos los demas que de aquella cenagosa fuente salieron, mediante la manifestacion que el Gobierno Real Español hizo en seis de Abril ultimo de no reconocer y mirar como si jamas hubieran existido todas las providencias de el gobierno erigido por la rebelion: por todo lo qual se halla el tribunal en el caso de continuar el conocimiento de la causa con arreglo al estado que tenia antes de la introduccion de el articulo inhibitorio que debe desestimarse rotundamente como destituido de todo apoyo legal. Asi lo siente el fiscal. Calahorra 11 de Junio de 1823,,*

*Por ausencia del Fiscal General  
Licenciado Marcilla*

## Documento 39

Escrito presentado por Juan Manuel Díez, en nombre de Miguel Antonio de Jauregui, en el que se pide se admita la apelación interpuesta el 7 de julio. 8 de agosto de 1823. AHN, Consejos Suprimidos, Leg. 15754, 2/2, 163-164.

Autos Agosto 8,,

*Juan Manuel Díez, en nombre de Dn. Miguel Antonio de Jauregui, vecino de la villa de Vergara, como marido de D<sup>a</sup> Maria Barbara de Aguirre, en el pleyto con Dn. Miguel de Mendiguchia, sobre pertenencia de la Capellania, (simple patronato de legos) fundada por Dn. Juan Antonio de Azcarate, como mas haya lugar en derecho, ante V.S. digo, que citado mi parte, para que compareciese en este tribunal, lo hizo, solicitando se declarase incompetente, y pidiendo se mandase, que quien tubiese, que deducir contra el, respecto de dicha capellania, ó sus vienes, lo hiciese ante el tribunal civil, competente, á quien toca el conocimiento en la materia.*

*Seguida la instancia con dicho Mendiguchia, y con el Fiscal Eclesiastico, recayó providencia en tres de Julio, proximo pasado, en que se desestimó el articulo introducido, por mi parte, en su escrito de diez de Julio del año anterior, que obra al folio ciento veinte, y nueve; de cuya providencia interpose apelacion, en tiempo y forma devida; y comunicado traslado á la contraria, nada dice, y de su inaccion resulta conocido perjuicio á mi parte.*

*En este estado me es indispensable insistir en dicha apelacion á fin de que se me admita libremente, y en ambos efectos, haciendo, para ello presente, que de la memoria del fundador, unico documento, en que se apoya esta fundacion, no puede deducirse, que su voluntad fuese erijir Capellania Eclesiastica, puesto que en toda ella no hay una palabra, que lo indique, y si muchas, que persuaden lo contrario, como son, hablando del lewantamiento de cargas, la facultad de hacerlo el capellan, por si ó por otra persona; el llamamiento de parientes; y principalmente el patronato dado al Ayuntamiento y justicia de la villa de Placencia, con facultad de decidir en las cuestiones, y pleytos, que entre los parientes se ofrezcan, en la pretension de dicha Capellania.*

*Es preciso no confundir la memoria del fundador, con hechos posteriores; y aunque este dejo sus facultades á Dn. Juan de Garate, y Bedoña, Dn. Andres Ignacio de Arzamendi, y Dn. Jose Sarobe, Albazeas testamentarios, no debe hecharse en olvido, lo primero, que estos nada pudieron hacer, que no fuese arreglado á la voluntad de dicho Azcarate, conforme á su memoria; y lo segundo, que las facultades dadas á estos eran personalisimas, por la confianza, que tenia en ellos, y no pudieron transmitir las á un tercero, que acaso no fuese de la confianza del fundador, y pudiese alterar su disposicion, como efectivamente sucedio asi; pues que dichos fide comisarios otorgaron poder, para el cumplimiento, en favor de Dn. Jose Andres de Eguizabal, de Dn. Ramon Elias de Junguitu, y Arechaga, y de Dn. Francisco Ignacio de Ibarra; y por haversen (sic) escusado los dos primeros, procedio este ultimo á la fundacion, no asi como quiera, ni menos arreglandose á la disposicion el bien hechor, Azcarate, sino separandose de su voluntad, y abrogandose facultades, que no tenia, suplico al Señor Obispo la erijiese en Capellania colatiba (espresion, que está muy distante de la memoria de Azcarate) y sacando los bienes de la clase de profanos, los erijiese á Eclesiasticos; y nombrado por primer Capellan, Dn. Jose Maria de Aguirre, y Azcarate, ocurrio á este tribunal relacionando, que el Dn. Juan Antonio de Azcarate habia mandado fundar la referida Capellania, perpetua, colatiba; pidio su abrovacion; y que declarando pertenecerle, se le adjudicase, mandando se le diese testimonio, para solicitar la prima tonsura; y obtenida despacharle colacion, y canonica institucion, para ascender á su titulo al sacerdocio.*

*Aqui estubo la alteracion de la voluntad de Azcarate, porque contra lo establecido en su memoria, se hizo la novedad de declarar capellania colatiba, la que solo era de patronato de legos; y se hizo este esceso, sin facultades; por lo que es indispensable su reforma, tomando en ello conocimiento el tribunal civil, á quien se ha despojado de sus facultades; por cuyo motibo protesto usar del real auxilio de la fuerza, que se hace á mi parte, por este tribunal, en conocer, y proceder, en un asunto, que por ningun titulo le pertenece; por tanto=*

*A V.S. suplico se sirva admitir la apelacion, que interpose en siete de Julio proximo pasado, sin perjuicio de usar de dicho real auxilio; por ser justicia, que pido, protestando costas, y demas combeniente, y jurando lo necesario & = Licenciado Dn. Alexandro de Iturburu = Díez*

## Documento 40

Escritura de poder otorgada por Miguel Antonio de Jauregui en favor de Mariano de Vergara, marido de María Manuela de Aguirre, hermana de María Bárbara, e inmediata sucesora de dicha capellanía, para que actúe en su nombre ante los tribunales, para que se reponga la capellanía en el estado que tenía antes del despojo. 31 de mayo de 1824. AHN, Consejos Suprimidos, Leg. 15754, 2/1, 24-27.

*Por el presente instrumento yo D. Miguel Antonio de Jauregui marido y conjunta persona legitima de D<sup>a</sup> Maria Barbara de Aguirre y Azcarate, vecino de la villa de Vergara, en la Provincia de Guipuzcoa, digo: Que D. Juan Antonio de Azcarate natural que fue de la villa de Placencia en su memoria testamentaria otorgada en siete de Agosto de mil setecientos setenta y dos, por testimonio del Licenciado D. Ignacio de la Sierra, dispuso entre otras cosas se fundase una capellania de misas en la Iglesia Parroquial de la misma villa de Placencia, dotandola con la principalidad de quatro mil pesos fuertes, llamando para capellanes a los parientes mas cercanos, principiando por los descendientes de su hermana Ana Maria y nombrando por Patrono a la Justicia y Ayuntamiento de la citada villa de Placencia con facultad y jurisdiccion para conocer y decidir las questões y litigios que pudieren ofrecerse entre los parientes aspirantes a la obtencion de dicha capellania; cuya fundacion encargó a sus alvaceas y Testamentarios D. Juan Garate y Bedoña, D. Andres Ignacio de Arzamendi, y D. José Sarobe, quienes en vez de dar frente a su comision y facultades personalisimas por si mismos arreglandose a la voluntad manifestada por el testador, las transmitieron nulamente en D. José Andres Eguizabal, D. Ramon Elias Junguitu y D. Francisco Ignacio Ibarra: que habiendose escusado los dos primeros hizo el ultimo la fundacion de la referida capellania en once de Diciembre de mil setecientos setenta y ocho propactando arvitariamente á disponer que fuese colatiba contra la voluntad clara y terminante del autor de la memoria, manifestada sin lugar á dudarse que fuere laical, yá en la serie y orden de suceder, llamando a sus parientes mas cercanos, principiando por los de su hermana Ana Maria, yá por la forma de cumplir los grabamenes, disponiendo que se cumpliesen por el mismo capellan, ó por el que celebrase la misa; yá ultimamente por el Juez á que confió no tan solamente el Patronato, sino tambien el conocimiento en los casos contenciosos con absoluta independencia del ordinario y tribunales Eclesiásticos, confiando con efecto esta facultad exclusivamente a la Justicia y Ayuntamiento de la misma villa de Placencia, habilitandole para que decidiese toda disputa y litigio entre aspirantes en favor del que mejor derecho tubiere: que sin embargo en virtud de esta nula fundacion entró al goce de la capellania D. José Maria Aguirre, hijo de la citada Ana Maria Azcarate, á quien le acomodó colar; pero vacada por su muerte, habiendo acudido yó, como marido legitimo de dicha D<sup>a</sup> Maria Barbara Aguirre y Azcarate a la Justicia y Ayuntamiento de la recordada villa de Placencia, unico Juez legitimo para la decision de toda duda y cuestión, demostrando su calidad merelega segun la intencion y voluntad del dispositor de la memoria, eligió y nombró por sucesora de dicha capellania a la misma D<sup>a</sup> Maria Barbara, como hermana del ultimo posehedor, é hija de la recordada Ana Maria Azcarate, y sobrina del principal fundador en catorce de Julio de mil ochocientos y doce; y aprendida su posesion se halló en su goce quieto y pacifico, dando frente a los grabamenes, hasta que el Illmo. Señor Obispo de Calahorra declaró en auto provehido en la visita de la villa de Elgoibar el dia veinte y tres de Agosto de mil ochocientos diez y nueve, que hera colatiba, mandando al Patrono nombrase nuevo capellan idoneo en lugar de la D<sup>a</sup> Maria Barbara mi consorte, á que se resistió y se resiste justamente la Justicia y Ayuntamiento de dicha villa de Placencia desconociendo la menor autoridad en S.S.Illma. para causar semejante novedad: que á consecuencia acudí á S.M. (Dios le guarde) implorando su Real auxilio y proteccion contra la fuerza, y pasados los antecedentes al Sr. Fiscal, tubo a vien declarar en vista de lo espuesto por él, que S.S.Illma., no solo habia causado una novedad en haber declarado colatiba dicha capellania, que no és otra cosa que un simple patronato de legos, sino que excedió las facultades, que le fueron concedidas para la visita de las Iglesias del Real Patronato, reducida á solo inspeccionar el estado de ellas en lo temporal y dár cuenta de lo que creiese de oportuno remedio, mandando que S.S.Illma. reformase inmediatamente su referido auto de veinte y tres de Agosto del año de mil ochocientos diez y nueve, y repusiese a la capellania en el estado que tenia antes del despojo de mi consorte; cuya soberana resolucion dictada en veinte y quatro de Diciembre del mismo año de mil ochocientos diez y nueve fué comunicada y notoriada á S.S.Illma. por quien suspendiendo su execucion y cumplimiento se representó á S.M., y pasados nuebamente los autos al Señor Fiscal se afirmó y ratificó en su anterior dictamen y exposicion en seis de Marzo de mil ochocientos y veinte: que en este estado sobrevinieron las funestas novedades causadas por los revolucionarios, y el pretendido gobierno constitucional, con arreglo á un decreto de las llamadas cortes, dirigió los autos pendientes al mismo Illmo. Señor para que procediese conforme a las Leyes; y á consecuencia creiendose habilitado para obrar a su antojo y capricho, trató de poner en execucion su auto de*

visitas: que habiendose repuesto felizmente las cosas al ser y estado que tenian en siete de Marzo de mil ochocientos y veinte, y aunque restablecido el gobierno legitimo de S.M. con todas sus atribuciones inseparables, toca debolver los autos arrancados por los revolucionarios á donde pendian, no se muebe á ello S.S.Illma. y trata de llebar adelante sus ilegales y nulos procedimientos; procedimientos abusivos de sus facultades, desconocidos por dicha soberana resolucion, ópuestos y contrarios á ella, y muy repugnantes siendo dictadas en asunto proprio: Por lo tanto otorgo que doy y confiero todo mi poder cumplido qual por derecho se requiere, y és necesario especial á D. Mariano de Vergara vecino de dicha villa de Placencia y marido legitimo de D<sup>a</sup> Maria Manuela de Aguirre hermana de dicha D<sup>a</sup> Maria Barbara de Aguirre mi esposa, é inmediata sucesora de dicha capellania, para que en mi nombre y representacion y de la misma mi consorte presentandose por sí, ó por medio de substituto ante S.M. (Dios le guarde) su Real Consejo, y demas tribunales competentes pida y suplique se libren los correspondientes Reales Despachos y provisiones para que el Illmo. Señor Obispo de Calahorra y el Metropolitano de Burgos en su caso, remitan inmediatamente los autos que quedaron pendientes en seis de Marzo de mil ochocientos y veinte, concernientes a la capellania del indicado D. Juan Antonio de Azcarate, y en su vista afirmando y ratificando la citada soberana resolucion de veinte y quatro de Diciembre de mil ochocientos diez y nueve, se sirban reponer a la capellania en el estado que tenia antes del despojo de mi consorte por dicho obispo de Calahorra, declarando á mayor abundamiento valido y subsistente la eleccion y nombramiento causados en la misma mi esposa por la Justicia y Ayuntamiento de la citada villa de Placencia, y á este por unico Juez legitimo para la decision de toda duda que se ofrezca en orden a dicha capellania, haciendo las demas declaraciones que me sean utiles y combenientes: que declaren igualmente por ilegales nulos y de ningun valor ni efecto los injustos procedimientos causados por dicho Illmo. Señor obispo de Calahorra, reprendiendole seberamente para que en lo sucesivo se conduzca con mas moderacion en un asunto tan ageno de sus facultades; y hasta que consiga este mi intento, presente escritos, escrituras, testimonios, certificaciones, representaciones, memoriales, esposiciones, Provisiones Reales, informaciones, provanzas y otros documentos, pida y oiga autos interlocutorios y sentencias difinitivas, consienta en lo favorable, y de lo contrario apele, suplique y siga en todas instancias y tribunales; y finalmente haga todas las demas diligencias judiciales y extrajudiciales que yó haría y hacér podría hallandome presente. El Poder que para todo lo referido, cada cosa y parte, y lo anejo y concerniente se requiere, el mismo le doy y confiero al nominado D. Mariano de Vergara con todas las clausulas necesarias, aunque aqui no ván especificadas y de modo que por falta de alguna no deje de obrar quanto a mi derecho y al de la citada mi esposa combenga, libre franca y general administracion, clausula espresa de que lo pueda substituir, en quien y las veces que quisiere, rebocár y nombrár otros y relebacion de coste y fianza en forma; y a la firmeza de este poder y de quanto en su virtud se hiciese y obrase obligo mis bienes, muebles y raices, habidos y por haber: En cuio testimonio asi lo otorgo y firmo ante el presente Escribano Real de S.M. del numero y Ayuntamientos de esta villa de Eybar, en ella, á treinta y uno de Mayo de mil ochocientos veinte y quatro, siendo testigos D. Juan Domingo y D. Andres Silbestre de Anguiano hermanos, y Francisco Ignacio de Guerra vecinos de esta villa; é yó el escribano doy fé conozco al Sr. otorgante= Miguel Antonio de Jauregui= Antemi= Sebastian de Anguiano=

## Documento 41

Escrito del Ayuntamiento de Placencia dirigido al Rey pidiendo se digne librar una provisión para que el Obispo de Calahorra y el Metropolitano de Burgos remitan a la Cámara los autos que quedaron pendientes en 6 de marzo de 1820. 11 de junio de 1824. AHN, Consejos Suprimidos, Leg. 15754, 2/1, 29-30.

Señor

*El Ayuntamiento de la villa de Placencia en la Provincia de Guipuzcoa se toma la libertad de recurrir a V.M. y con toda sumision dice: que D. Juan Antonio de Azcarate, natural que fue de esta misma villa en su memoria testamentaria otorgada en 7 de Agosto de 1772 por testimonio del Licenciado D. Ignacio de la Sierra dispuso entre otras cosas se fundase una capellanía con la principalidad de quatro mil pesos fuertes en la Iglesia Parroquial de esta recordada villa llamando para capellanes á los parientes mas cercanos, principiando por los descendientes de su hermana Ana María y nombrando por patrono al esponente con facultad y jurisdiccion para conocer y decidir las quëstiones y litigios que pudiesen ofrecerse entre los parientes aspirantes á la obtencion de la capellanía; y encargando su fundacion á sus Albaceas y testamentarios D. Juan Garate Bedoña, D. Andres Ignacio Arzamendi, y D. Jose Sarobe, quienes en vez de dar frente á su comision y facultades personalisimas por sí mismo arreglandose á la voluntad manifestada por el testador, las transmitieron nulamente en D. Jose Andres Eguizabal, D. Ramon Elias Junguitu y D. Francisco Ignacio Ibarra: Habiendose excusado los dos primeros, hizo el ultimo la fundacion de dicha capellanía en 11 de Diciembre de 1778 propasando arbitrariamente á disponer que fuse colativa contra la voluntad clara y terminante del autor de la memoria manifestada sin lugar á dudarse que fuese laical, tanto por la serie y orden de suceder que estableció llamando á sus parientes mas cercanos principiando por los de su hermana Ana María, como por la forma de cumplir los gravámenes, disponiendo que se cumpliesen por el mismo Capellan ó por el que celebrase la Misa, y por el Juez á que confió no tan solamente el Patronato sino tambien el conocimiento en los casos contenciosos con absoluta independencia del ordinario y tribunales Eclesiasticos confiando con efecto exclusivamente esta facultad al exponente, habilitandole para la decision de toda duda y litigio entre aspirantes en favor del que mejor derecho tubiese. Vacada esta capellanía por muerte de D. José María Aguirre hijo lexítimo de Ana Maria Azcarate primer capellan nombrado, acudieron al exponente D<sup>a</sup> Maria Barbara Aguirre, hija asi bien de la misma Ana María Azcarate, y su marido D. Miguel Antonio Jauregui, demostrando la calidad merelega de la citada capellanía segun la intencion y voluntad del despositor de la memoria, y solicitando que como á sobrina del mismo fundador y hermana del capellan anterior, se la nombrase y eligiese en clase de sucesora por el orden regular y conforme al llamamiento del citado fundador; á cuya solicitud se acudio en 14 de Julio del año de 1812. La D<sup>a</sup> Maria Barbara Aguirre y su marido entraron á consecuencia al goce y posesion de la citada capellanía, y dieron frente con toda puntualidad á sus gravámenes, hasta que en la visita celebrada por el Illmo. Señor Obispo de Calahorra en 23 de Agosto de 1819, en la villa de Elgoibar declarando S.S.I. que la recordada capellanía era colativa y que habia expirado el plazo señalado por derecho para la presentacion del capellan por el exponente, mando que sin embargo de ello nombrase el Patrono nuevo capellan idoneo dentro de dos meses en lugar de la D<sup>a</sup> Maria Barbara Aguirre. El exponente no pudo menos de hacer presente á S.S.I. la ninguna autoridad que le competia para causar semejante novedad; pero sin aprecio de sus fundados recuerdos trato de llevar adelante el obgeto que se propuso, llamando á concurso, á los pretendientes: en cuyo estado la D<sup>a</sup> María Barbara y su marido acudieron a V.M. implorando el Real auxilio y proteccion contra la fuerza; y aunque pasados los antecedentes al Señor Fiscal, se declaro que S.S.Illma. no solo habia causado una novedad en haber declarado colativa dicha capellanía, que no es otra cosa que un simple patronato de legos, sino que excedió las facultades que le fueron concedidas para la visita de las Iglesias del Real Patronato, reducidas á solo inspeccionar y dar cuenta de lo que creyere de oportuno remedio mandando que reformase inmediatamente su citado auto de 23 de Agosto de 1819 y repusiese á la capellanía en el estado que tenia antes del despojo, suspendiendo S.S.Illma. su execucion y cumplimiento, represento a V.M. y pasados nuevamente los autos al Señor Fiscal, despues que ratificandose este en su anterior dictamen en 6 de Marzo del año de 1820, se hallaban en estado de acordar providencia; sobrevinieron las novedades causadas por los revolucionarios; y el pretendido gobierno constitucional con arreglo á un decreto de las llamadas cortes dirigió los autos pendientes al mismo Illmo. Señor para que procediese conforme á las leyes. Prevalido de esta ocurrencia, y desentendiendose tanto del fundado articulo de incompetencia propuesto por D<sup>a</sup> Maria Barbara Aguirre y su marido, como de la necesidad de que repuestas felizmente las cosas en el ser y estado que tenian antes de 7 de*

*Marzo de 1820 y restablecido el gobierno legitimo de V.M. en la plenitud de sus Reales prerrogativas y atribuciones, devolviese los autos arrancados por los revolucionarios á donde pendian, trata S.S.Illma. de poner en execucion y cumplimiento su providencia de visita, convirtiendose en Juez en propia causa, y quebrando con abuso de facultades la soberana resolucion de V.M. por cuyo motivo y proceder no puede menos el exponente de implorar Vuestro Real amparo y proteccion por quanto se le priva de las facultades y jurisdiccion confiadas por el fundador de la capellanía: A cuyo efecto*

*A V.M. suplica rendidamente se digne librar vuestra Real provision para que el Illmo. Sr. Obispo de Calahorra ó el Metropolitano de Burgos en su caso remitan inmediatamente á la Real Camara los autos que quedaron pendientes en 6 de Marzo del año de 1820 respectivos á la capellanía de D. Juan Antonio Azcarate, y venidos que sean confirmar la anterior providencia, mandandome execucion y cumplimiento.*

*Dios guarde á V.M. muchos años para felicidad de la España. De mi Ayuntamiento de Placencia á 11 de Junio de 1824.*

*Justo Antonio de Armendia  
Jose Manuel de Lascurain  
Angel de Galarraga  
Francisco Martin de Aranguren  
Jose Antonio de Ansola*

## Documento 42

Escrito-súplica de Miguel Antonio de Jauregui dirigido al rey para que la Cámara retome en sus manos el asunto sobre la capellanía de Placencia. 25 de junio de 1824. AHN, Consejos Suprimidos, Leg. 15754, 2/1, 22-23.

Señor.

Dn. Miguel Antonio de Jauregui, vecino de la villa de Vergara en la Provincia de Guipuzcoa, marido legitimo de D<sup>a</sup> Maria Barbara de Aguirre y Azcarate se acoge a la soberana proteccion de V.M. y con todo respeto dice: Que Dn. Juan Antonio de Azcarate natural que fue de la villa de Placencia en su memoria testamentaria otorgada en 7 de Agosto de 1772 por testimonio del Licenciado Dn. Ignacio de la Sierra, dispuso entre otras cosas se fundase una capellania con la principalidad de cuatro mil pesos fuertes en la Iglesia Parroquial de la misma villa de Placencia, llamando para capellanes a los parientes mas cercanos, principiando por los descendientes de su hermana Ana Maria, y nombrando por Patrono a la Justicia y Ayuntamiento de la citada villa de Placencia con facultad y jurisdiccion para conocer y decidir las questiones y litigios que pudiesen ofrecerse entre los Parientes aspirantes a la obtencion de la capellania, cuya fundacion encargó a sus Albaceas y testamentarios Dn. Juan Garate y Bedoña, Dn. Andres Ignacio Arzamendi, y Dn. Jose Sarobe, quienes en vez de dar frente á su comision y facultades personalisimas por si mismos arreglandose a la voluntad manifestada por el testador, las transmitieron nulamente en Dn. Jose Andres Eguizabal, Dn. Ramon Elias Junguitu, y Dn. Francisco Ignacio Ibarra. Habiendo executado (sic) los dos primeros hizo el ultimo la fundacion de la dicha capellania en once de Diciembre de mil setecientos setenta y ocho, propactando arbitrariamente á disponer que fuese colativa contra la voluntad clara y terminante del autor de la memoria, manifestada sin lugar á dudarse que fuese laical, ya en la serie y orden de suceder, llamando a sus parientes mas cercanos, principiando por los de su hermana Ana Maria, ya por la forma de cumplir los gravámenes, disponiendo que se cumpliesen por el mismo capellan ó por el que celebrase la Misa; ya ultimamente por el Juez, á que confió no tan solamente el Patronato, sino tambien el conocimiento en los casos contenciosos con absoluta independencia del ordinario y Tribunales Eclesiasticos, confiando con efecto esta facultad exclusivamente á la Justicia y Ayuntamiento de la misma villa de Placencia, habilitandole para que decidiese toda disputa y litigio entre aspirantes en favor del que mejor derecho tubiese. Sin embargo en virtud de esta nula fundacion entró al goce de la capellania Dn. Jose Maria Aguirre, hijo de Ana Maria Azcarate, á quien le acomodo colocar (sic); pero vacada por su muerte habiendo acudido el exponente como marido legitimo de D<sup>a</sup> Maria Barbara de Aguirre á la Justicia y Ayuntamiento de la recordada villa de Placencia, unico Juez legitimo para la decision de toda duda y question, demostrando su calidad merelega segun la intencion y voluntad del dispositor de la memoria, eligió y nombró por sucesora de dicha capellania a la misma D<sup>a</sup> Maria Barbara como hermana del ultimo poseedor, é hija de Ana Maria, y sobrina del principal fundador en 14 de julio de 1812 y aprendida su posesion se halló en su goce quieto y pacifico, dando frente a los gravámenes, hasta que el Ilmo. Sr. Obispo de Calahorra declaró en auto proveido en visita de la villa de Elgoibar el dia 23 de Agosto de 1819 que era colativa mandando al Patrono nombrase nuevo capellan idoneo en lugar de la D<sup>a</sup> Maria Barbara, á que se resistio y se resiste justamente la Justicia y Ayuntamiento de la villa de Placencia, desconociendo la menor autoridad en S.S.Illma. para causar semejante novedad. A consecuencia acudio el exponente á V.M. implorando vuestro Real auxilio y proteccion contra la fuerza, y pasados los antecedentes al Sr. Fiscal tubisteis á bien declarar en vista de lo expuesto por él, que S.S.Illma. no solo habia causado una novedad en haber declarado colativa dicha capellania que no es otra cosa que un simple patronato de legos, sino que excedió las facultades que le fueron concedidas para la visita de las Iglesias del Real Patronato, reducida á solo inspeccionar el estado de ellas en lo temporal y dar cuenta de lo que creyese de oportuno remedio, mandando que S.S.Illma. reformase inmediatamente su citado auto de 23 de Agosto del año de 1819, y repusiese á la capellania en el estado que tenia antes del despojo de la consorte del exponente; cuya soberana resolucion dictada en 24 de Diciembre del mismo año de 1819, fue comunicada y notoriada á S.S.Illma., por quien suspendiendo su execucion y cumplimiento se represento á V.M.; y pasados nuevamente los autos al señor Fiscal, se afirmó y ratificó en su anterior dictamen y exposicion en 6 de Marzo del año de 1820. En este estado sobrevinieron las funestas novedades causadas por los revolucionarios, y el pretendido Gobierno constitucional, con arreglo á un decreto de las llamadas cortes dirigió los autos pendientes al mismo Illmo. Sr. para que procediese conforme á las leyes; y a consecuencia creyendose habilitado para obrar á su antojo y capricho, trató de poner en execucion su decreto de visita, despreciando el artículo de mi competencia fundamental propuesto por el suplicante, de cuyo auto interpuso apelacion para el Metropolitano sin perjuicio de reclamar, é implorar vuestra Real proteccion

*y auxilio; en cuyo estado se han repuesto felizmente las cosas en la forma que se hallaban antes del día 7 de Marzo de 1820; y aunque restablecido el Gobierno legitimo de V.M. con todas sus atribuciones inseparables, toca devolver los autos arrancados por los revolucionarios á donde pendian; no se mueve á ello S.S.Illma., y trata de llevar adelante sus ilegales y nulos procedimientos, procedimientos abusivos de sus facultades, desconocidos por vuestra soberana resolucio[n], opuestos y contrarios á esta, y muy repugnantes siendo dictadas en asunto propio, confiado á la decisio[n] de vuestra Real Camara: En cuya atencio[n] acogiendo al Real amparo y proteccio[n] y acompañando los documentos correspondientes en comprobacio[n] de lo espuesto.*

*A V.M. suplica rendidamente se digne librar vuestra Real provision para que el Illmo. Señor Obispo de Calahorra, y el Metropolitano de Burgos en su caso remitan inmediatamente los autos que quedaron pendientes en 6 de Marzo del año de 1820, concernientes á la capellania de Dn. Juan Antonio de Azcarate para su continuacion y oportuna resolucio[n], como lo expresa de la justificacio[n] de V.M. Madrid 25 de Junio de 1824=*

*Señor.*

*En virtud de Poder que presento  
Francisco Ignacio de Arrieta*

## Documento 43

Oficio de la Cámara dirigido al Obispo de Calahorra para que remita los autos originales que fueron enviados al Tribunal eclesiástico en virtud de consulta elevada a S. M. por el Consejo de Estado Constitucional en 1820. 2 de septiembre de 1824. AHN, Consejos Suprimidos, Leg. 15754, 2/1, 58.

*Illmo. Señor*

*Enterada la Camara del expediente instruido en ella á instancia de Dn. Miguel Antonio de Jauregui como marido de D<sup>a</sup> Maria Barbara de Aguirre sobrina de Dn. Juan Antonio de Azcarate fundador de una capellania en la Iglesia Parroquial de la villa de Placencia, quejandose de haberla declarado V.I. colativa; de los tramites que ha tenido dicho expediente, el qual fue remitido á V.I. en el año de 1820 a virtud de lo consultado á S.M. por el Consejo de Estado Constitucional; de las nuevas instancias hechas ahora por el citado D. Miguel de Jauregui, y el Ayuntamiento de dicha villa; y de lo que con presencia de todo ha expuesto el Señor Fiscal, ha acordado este supremo tribunal, que V.I. remita los autos originales que quedaron pendientes en su tribunal de Justicia en Marzo del citado año, y todo lo demas que se haya obrado posteriormente. Y del mismo acuerdo lo participo á V.I. para que disponga su cumplimiento, dandome aviso del recibo de esta.*

*Dios guarde á V.I. muchos años. Madrid 2 de Septiembre de 1824.*

*Señor Obispo de Calahorra y la Calzada*

## Documento 44

Oficio del Obispo de Calahorra con el que se remiten a la Cámara los originales de los autos que quedaron pendientes en el tribunal eclesiástico en marzo de 1820. 24 de septiembre de 1824. AHN, Consejos Suprimidos, Leg. 15754, 2/1, 60.

*Ilmo. Señor*

*Cumpliendo con lo que de orden de esa Real Camara me previno V.S.I. en su oficio de 2 del corriente, remito originales los autos que quedaron pendientes en este tribunal de justicia en Marzo de 1820 sobre la capellania fundada en la Iglesia Parroquial de la villa de Placencia por Dn. Juan Antonio de Azcarate, con todo lo demas que se ha obrado posteriormente, para que s se sirva V.I. elevarlo todo á ese supremo tribunal para los efectos convenientes.*

*Dios guarde á V.I. muchos años. Calahorra y setiembre 24 de 1824.*

*Athanasio Obispo de Calahorra y la Calzada*

*Ilmo. Señor D. Miguel de Gordon*

## Documento 45

Despacho Remisorial del Tribunal Metropolitano de Burgos para el Ordinario de Calahorra por el que se comunica el Auto definitivo de 23 de agosto, devolviendo el conocimiento de la causa a dicho tribunal, con levantamiento de la inhibición y sobresehimiento impuestos, y dando comisión al mismo Ordinario Eclesiástico para que "por los medios más breves, sumarios y executivos" proceda contra Miguel Antonio de Jauregui para que haga el pago a José María de Mendiguchia de las costas causadas en la segunda instancia. 27 de octubre de 1825. ACC, Capellanías, 16/972/107.

*Nos los Provisores Vicarios Generales en todo el Arzobispado de Burgos, y Jueces Metropolitanos en el por el Exmo, é Ilmo. Sr. Dn. Ildelfonso Carredo, y Vigil. Cavallero gran Cruz de la Real y distinguida orden Española de Carlos tercero, Arzobispo de este dicho Arzobispado, de el Consejo de S. M. &<sup>a</sup> Al ordinario Ecco de la ciudad y Diocesis de Calahorra y la de LaCalzada. Salud en Nuestro Señor Jesu Cristo. Hacemos saver los Autos seguidos en primera ynstancia en su tribunal, y en este nuestro Metropolitano en segunda, y grado de apelacion; Entre partes, de la una apelante Dn. Miguel Antonio de Jauregui, Marido lexmo. de D<sup>a</sup> Maria Barvara de Aguirre, vecinos de la villa de Bergara; y de la otra apelado Dn. Jose Maria de Mendiguchia, y el fiscal Gral. Ecco. de dicho obispado; sobre pertenencia de la capellania fundada por Dn. Juan Antonio de Azcarate en la Iglesia Parroquial de la villa de Placencia, y demas deducido; En los quales puestos en estado de difinitiba, probemos en veinte y tres de Agosto de el corriente año, el Auto difinitivo que desde el Dixo, es el siguiente- Dixo, que por lo que de dichos Autos resulta, deducido, alegado, y pedido por una, y otra parte; y sin embargo de lo en esta segunda ynstancia expuesto con titulo de agravios, por la de Dn. Miguel Antonio de Jauregui, Marido de D<sup>a</sup> Barvara de Aguirre producido, y pretendido en ella por la misma: devia de confirmar, y confirmó el Auto dado á tres de Julio de el año pasado de mil ochocientos veinte y tres, por el ordinario de Calahorra, por el que desestimando el Artículo de inhibicion propuesto por dicho Dn. Miguel Antonio, mandó que la causa corriese en su estado, con todo lo demas que contiene. Y para su execucion y cumplimiento en forma, debolvía, y debolvio su Señoría el conocimiento de esta causa a el mismo ordinario por Remisoria que se librará, con levantamiento de la inhibicion, y sobresehimiento impuesto. Asi por este Auto que firmo, con fuerza de difinitibo, é imposicion de las costas de esta Segunda ynstancia, en que asi bien condena a el espresado Dn. Miguel Antonio Jauregui, lo probeyó, declaró, y mandó, de que doy fe, y lo firme= Lizdo Dn. Martin Xavier Roxo= Ante mí. Lic. D. Juan Alonso de Prado= El qual se publicó, y notificó en la audiencia publica de el dia que queda recordado, y aunque de el se apeló en el tiempo, y forma por el mencionado Dn. Miguel Antonio Jauregui Marido lexmo. de la D<sup>a</sup> Maria Barvara, y se la otorgamos en ambos efectos con el termino ordinario, mandandole dar testimonio para su mexora en el tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostolica en estos Reynos; en este estado, y en el de aberse librado a ynstancia de el Dn Jose Maria, el Mandamiento de estilo con el termino, y apercibimientos ordinarios para que el repetido Dn. Miguel Antonio Jauregui presentase la mejora de dicha apelacion; vino desistiendo, y apartandose de ella, por no ser su animo el seguirla, pidiendo le hubiesemos por tal, y mandando subir en relacion con los Autos, en su vista probemos uno en veinte y cinco de el corriente, estimando dicho apartamiento de apelacion, declarando en su virtud el difinitibo inserto, por consentido, y pasado á autoridad de cosa juzgada, mandandole guardase, cumplir, y llevar á execucion en todas sus partes, y que hecha la taasacion de costas que prebiene, se libre el Despacho Remisorial correspondiente; que es el presente para el mencionado ordinario Ecco de la Diocesis de Calahorra, y Lacalzada; por el que le hacemos saver, y notorio quanto va referido, y nuestro Auto difinitibo inserto, para que le lleve, y haga llevar á execucion con el que recuerda en todas sus partes, sin inobar en manera alguna, para lo que le debolvemos el conocimiento de dichos Autos, y causa de su razon, con levantamiento de la inhibicion, y sobresehimiento impuesto en ellos, con la competente reserva en Nos. tambien damos comision al mismo ordinario Ecco de la Diocesis de Calahorra, y Lacalzada, con quantas facultades necesite, sin limitacion alguna, para que por los medios mas breves, sumarios y executivos, proceda contra el repetido Dn Miguel Antonio de Jauregui, sus vienes, efectos, y rentas, hasta hacer pago ál recordado Dn Jose Maria de Mendiguchia de la cantidad de quatrocientos quarenta rs. y seis mrs. vn. que hes la de las costas causadas en esta segunda ynstancia, y satisfechas por este, tasadas conforme á el Real Aranzel, y en que a sido condenado dicho Dn Miguel Antonio Jauregui, con mas las que haga causar hasta que se verifique real, y efectibo, todo sin levantar mano: y en virtud de santa obediencia mandamos á qualquiera Notario, ó Escribano requerido, le notifique, y ponga por fe, sin detencion alguna. Dado en Burgos á veinte y siete de octubre de mil ochozientos veinte y cinco.*

Lizdo Dn Martin Xavier Roxo

## Documento 46

Informe del Fiscal de la Cámara en el que manifiesta ser de la misma opinión que su antecesor. Pide que se remita nueva orden al Obispo similar a la del 24 de diciembre de 1819. 8 de marzo de 1833. AHN, Cons. Supr., Leg. 15754, 2/1, 63-64.

*El Fiscal en vista de este Expediente seguido á instancia de D. Miguel Antonio de Jauregui, vecino de Vergara, como marido de D<sup>a</sup> Maria Barbara de Aguirre en razon de que no se despoje á su muger de cierta capellania que obtubo en calidad de mere lega, y enterado de la ultima exposicion documentada del mismo interesado quejandose del R. Obispo de Calahorra por no haber cumplido las ordenes de esta superioridad Dice: Qué habiendo sido nombrada la D<sup>a</sup> Maria Barbara para la capellania que mandó fundar en la villa de Placencia D. Juan Antonio de Azcarate, por el Ayuntamiento de la misma en concepto de Patrono, el R. Obispo de aquella Diocesis comisionado por la Camara para visitar las Iglesias del Real Patronato, considerando sér esta capellania colativa declaró entre otras cosas nulo el referido nombramiento; mas habiendose quejado Jauregui de semejante determinacion y pasado el asunto al Fiscal propuso en Dictamen de 29 de Noviembre de 1819 que el Prelado habia causado una novedad en haber declarado colativa la capellania que no era otra cosa que un simple Patronato de Legos, y que ademas se habia excedido de las facultades que se le habian concedido para la visita de las Iglesias del Real Patronato, y la Camara en 20 de Diciembre del mismo año mandó comunicar orden al R. Obispo para que reformase inmediatamente el auto de 23 de Agosto del citado año por el que declaró colativa la capellania reponiendola al estado que tenia antes de haber causado el despojo que motivó la reclamacion de Jauregui, y aunque dicho R. Obispo representó contra esta determinacion acompañando varios documentos, el Oficio Fiscal no encontró meritos para variar su anterior Dictamen.*

*Habiendo quedado en tál estado el asunto, con motivo de las desgraciadas ocurrencias del mes de Marzo de 1820 el Consejo de Estado á quien pasó el Expediente opinó de diverso modo y se remitió al Ordinario para que en uso de sus facultades procediese con arreglo á las Leyes, en cuya virtud continuó el asunto en el Tribunal Eclesiastico de Calahorra y después pasó al Metropolitano de Burgos á virtud de apelacion interpuesta por Jauregui el cual ademas há venido quejandose del R. Obispo por no proceder en el negocio con arreglo á lo determinado por este Supremo Tribunal.*

*Supuestos estos antecedentes y abundando el que responde en la misma opinion que manifestó su antecesor en el Oficio Fiscal en sus citados Dictámenes de 29 de Noviembre de 1819 y 6 de Marzo de 1820 és de parecer se comunique nueva orden al R. Obispo de Calahorra para que cumpla terminantemente con la que se comunicó en 24 de Diciembre del referido año 1819, reponiendo la capellania de que se trata al estado que tenia antes del despojo que motivó la reclamacion de D. Miguel Antonio de Jauregui.*

*La Cámara lo podrá asi acordár ó como siempre lo mas acertado. Madrid 8 de Marzo de 1833.*

*Madrid 21 de Marzo de 1833  
Al Relator*

## Documento 47

Escrito de José Azcaray, vecino de la villa de Placencia, padre del recién nombrado para dicha capellanía por fallecimiento de Juan Bautista Beistegui, en el que pide se extienda certificación de la declaración que hizo la Cámara de ser laical esta capellanía, ya que tenía "entendido que uno de los aspirantes trataba de ocurrir al R. Obispo para que volviera a declarar por colativa la capellanía". 1 de junio de 1833. AHN, Cons. Supr., Leg. 15754, 2/1, 65-66.

Señor.

*Don Jose Azcaray, padre y legítimo Administrador de D. Jose Cruz de Azcaray, habido de legítimo matrimonio de D<sup>a</sup> María Josefa de Vergara Aguirre Azcarre, vecino de la villa de Placencia, en la Provincia de Guipuzcoa, recurre á la justificacion de V.M. y con todo respeto dice: Que D. Juan Antonio de Azcarate, natural que fué de la propia villa de Placencia dispuso entre otras en su memoria testamentaria, otorgada en 7 de Agosto de 1772, por testimonio del Licenciado D. Ignacio de la Sierra, se fundase una Capellanía con la principalidad de cuatro mil pesos fuertes en la Iglesia Parroquial de la misma villa, llamando para capellanes á los parientes mas cercanos, principiando por los descendientes de su hermana Ana Maria, y nombrando por Patrono á la Justicia y Ayuntamiento de ella, con facultad y jurisdiccion para conocer y decidir las cuestiones y litigios que pudiesen ofrecerse entre los parientes aspirantes á su obtencion. El primer Capellan, que fue D. Jose Maria de Aguirre, hijo de la citada Ana Maria de Azcarate se elevó al sacerdocio poniendo por congrua dicha Capellanía, y por esta razon pidió y obtuvo su colacion ante el ordinario de esta Diocesis; pero el Ayuntamiento de la referida villa no pudo precindir de desentenderse en todas las vacantes de este paso arvitratario y de pura conveniencia del Capellan que no podia ni puede influir para alterar y variar la voluntad del fundador, que fue indudablemente la de que la mencionada Capellania fuese laical, ó un verdadero patronato de legos, como lo demuestran la forma de cumplir los gravámenes que indicó disponiendo que se cumpliesen por el mismo Capellan, ó por el que celebrase la misa, y el haber nombrado solamente por Patrono al Ayuntamiento de la referida villa, asi como tambien por Juez para el conocimiento de los casos contenciosos con plena independencia del Ordinario y tribunales Eclesiasticos. Asi es que en el año de 1812 eligió dicho Ayuntamiento para el goce de la citada Capellania á D<sup>a</sup> Maria Barbara de Aguirre, muger legítima de D. Miguel Antonio de Jauregui, vecino de la villa de Vergara, y hallandose en quieta y pacífica posesion de ella, vajo el concepto de merelega, el Illmo. Señor Obispo de esta Diocesis, con motivo de la visita que hizo en el año de 1819, abanzó á declarar por colativa y vacante á la mencionada Capellania, y por nulo el nombramiento hecho en la expresada D<sup>a</sup> Maria Barbara, mandando, que los Patronos egecutasen otro en persona idonea. A consecuencia D. Miguel Antonio de Jauregui, acudió á esta Real Camara quejandose del despojo causado á su muger por S. Illma., y suplicando tubiese á bien disponer su reintegro, declarando en caso necesario ser merelega la enunciada Capellania; y en virtud de decreto de la Camara de 24 de Diciembre de 1819 se comunicó orden al R. Obispo de Calahorra, diciendo, que S. Illma. no solo habia causado una novedad en haber declarado colativa dicha Capellania, que no es otra cosa que un simple Patronato de legos, sino que tambien excedió de las facultades que la misma Camara le concedió para la visita de las Iglesias de Real Patronato, reducidas a inspeccionar en el estado de ellas en lo temporal, y dar cuenta de lo que creyese oportuno remedio, disponiendo al mismo tiempo que S. Illma. reformase inmediatamente su auto de visita y repusiese á la Capellania al estado que tenia antes del despojo que motivó la reclamacion del mencionado D. Miguel Antonio Jauregui. A consecuencia de dicha orden acudió á este Supremo tribunal el propio R. Obispo sosteniendo su resolucion y como en este estado y recientemente haya vacado la mencionada Capellanía, por fallecimiento de D. Juan Bautista Beritegui, vecino que fue de la villa de Vergara, há procedido el Patrono al nombramiento en el hijo del exponente, como segundo Nieto de la Ana Maria de Azcarate, y tiene antecedentes de que uno de los aspirantes, cuando no ha podido conseguir que el Patrono lo eligiese ha ocurrido al propio R. Obispo, con solicitud de que vuelva á declararle por colativa, y á disponer que bajo de este caracter se haga la eleccion. En estas circunstancias habiendo el exponente ya tomado posesion de la Capellania, en representacion de su hijo, de mandato de vuestro Corregidor de Guipuzcoa, que entiende y debe entender del asunto por ser profano y laycal, para hacer constar en su tribunal le conviene, y*

A V.M. Suplica se sirva mandar se le dé la correspondiente certificacion de lo ocurrido en este expediente, para el fin referido. Madrid 1º de Junio de 1833.

En virtud de encargo  
Jose Castellana

## Documento 48

Escrito dirigido al Ayuntamiento de Placencia por José Antonio de Azula solicitando la capellanía vacante, por fallecimiento de José Cruz Azcaray, para su hijo Anacleto Azula. 22 de diciembre de 1865. AMS, 77A.

*Ilustre Ayuntamiento de esta villa de Placencia*

*Jose Antonio Azula, vecino de la misma, a V. S. con el debido respeto espone, que por fallecimiento de D. José Cruz Azcaray, vecino que fue de esta villa, y ultimo poseedor de la capellanía colativa fundada por D. Juan Antonio de Azcarate con fecha cuatro de Agosto de mil setecientos setenta y dos, ha quedado vacante dicha pieza eclesiastica.*

*En la primera de las clausulas de dicha fundacion se dispuso que para el goce de esa Capellanía se eligiese el pariente mas cercano del fundador, principiando por los descendientes de su hermana Ana María de Azcarate y que el patrono fuese el Ayuntamiento y justicia de esta villa, segun todo ello debe constar en el libro de la referida capellanía que se a debido quedar entre los papeles y documentos del finado Señor Azcaray, siendo mas que provable que en la Secretaría de V. S. existan también los antecedentes necesarios sobre este asunto.*

*El árbol genealógico que acompaña a esta sencilla esposición demuestra clara e indudablemente que el esponente es uno de los parientes mas proximos del fundador, y apoyado en la citada clausula de la fundacion y en que las capellanías colativas se consideran hoy subsistentes con arreglo a la legislación vigente,*

*Suplica a V. S. el recurrente se sirva hacer la presentación de la enunciada capellanía colativa en su hijo legítimo Anacleto Azula, y cuando por razones que no alcanza el esponente, no pudiese por ahora accederse a esta solicitud, conferirle al menos la administración de los bienes o capitales pertenecientes a la misma capellanía; pues en ello obrará V. S. justicia, dispensando al suplicante un señalado favor, mientras queda rogando a Dios guarde a V. S. muchos años.*

*Placencia 22 de Diciembre de 1865*

*Jose Antonio de Azula*

## Documento 49

Escrito dirigido al Ayuntamiento de Placencia por Ramón de Ascaray y Vergara, hermano de José Cruz de Ascaray, solicitando la capellanía vacante, para lo que se considera el más idóneo ya que al parentesco se une su calidad de sacerdote. 4 de enero de 1866. AMS, 77A.

*Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Placencia*

*Don Ramon de Ascaray y Vergara, Presbitero, vecino de la misma, a V. S. espone: que el Sr. D. Jose Cruz de Ascaray, ya finado, ha sido Capellan de la Capellanía, fundada por D. Juan Antonio de Azcarate, la cual le fue presentada por este Ayuntamiento, como Patrono en el año de mil ochocientos treinta y tres.*

*Tanto derecho cuando menos asiste al esponente, porque a la circunstancia del parentesco reúne la de Sacerdote, y es indudable, que al tenor de la fundación y leyes vigentes el exponente debe ser preferido a todos, como que tambien se halla en posesión y propiedad de su mitad, como heredero de dicho su hermano, y con aspiraciones a la otra con derecho fundado en la proximidad y del de descendiente en la linea del llamamiento de la ya citada Ana María, hermana del fundador, de manera que la presentación en todo caso corresponde en rigor de derecho al esponente, por cuya razon presento el arbol que acredita el parentesco, y =*

*A V. S. suplico, que habiendo por presentado el dicho arbol, se digne hacer la presentación de dicha capellanía, en la parte que resta, al esponente, lo cual sera muy justo y arreglado a la fundacion y demas consideraciones.*

*Dios guarde a V. S. muchos años. Placencia 4 de Enero de 1866.*

*Ramon de Ascaray y Vergara*

## Documento 50

Escrito de José Matías de Beistegui en el que expone detalladamente los acontecimientos relacionados con la posesión de la capellanía fundada por Juan Antonio de Azcarate desde el momento en el que se presentó como aspirante a la misma su hermano Juan Bautista, quien la obtuvo por sentencia del tribunal Metropolitano de Burgos en el año 1828. En base a su exposición reclama para su hijo la capellanía vacante por fallecimiento de José Cruz de Ascaray. 19 de enero de 1866. AMS, 77A.

*Ilustre Señor Alcalde de la N. y L. villa de Placencia*

*Habiendo llegado a saber el fallecimiento de Dn. José Cruz Azcaray, cuya muerte la deploro, tenedor de una Capellanía colativa fundada por Dn. Juan Antonio Azcárate y noticioso de que se han presentado a ese Ilustre Ayuntamiento varios pretendientes, tuve el honor de dirigirme a esa Ilustre corporacion en representación de mi hijo Dn. Francisco José de edad de 15 años y estado tonsurado y quien en mi concepto reúne las condiciones mas ventajosas para su adjudicacion. Sabedor hoy que entre los aspirantes se presenta un miembro de la familia del finado voy a permitirle, Ilustre Señor, a hacerle presente a V. S. con el debido respeto una ligera observación. Los Señores Azcaray que indudablemente fundan su derecho en uno de sus ascendientes que fue el Don Miguel Antonio de Jauregui y su esposa Doña Bárbara Aguirre ambos difuntos, es público y notorio que los citados Señores Jauregui y su consorte Doña Bárbara la poseyeron durante muchos años en concepto de merelega o simple memoria de misas, es así mismo no menos notorio y público y son testigos oculares esos Señores Azcaray, que mi finado hermano el Presbítero Dn. Juan Bautista, penetrado de que aquella Capellanía según el tenor de ella debía considerarse colativa Congrua, Beneficio Eclesiástico y que por consiguiente mal habida por sus tenedores los esposos Jaureguis (sic); en este concepto acudió Beistegui al competente tribunal Eclesiástico de Calahorra y La Calzada, se siguió un litigio entre ambas partes y recayó la sentencia y el fallo de dicho tribunal declarando ser aquella capellanía colativa Congrua Beneficio Eclesiástico y adjudicándola a mi difunto hermano Don Juan Bautista como pariente mas cercano del fundador y adornado de las condiciones requeridas por el fundador, y condenados los esposos Jauregui Aguirre por haberla poseído indebidamente, a devolver al capellán Beistegui todos los réditos y emolumentos percibidos de dicha pieza eclesiástica: acudieron Jauregui y consorte en apelación a la Metropolitana de Burgos y este Tribunal supremo corroboró la sentencia de Calahorra en toda su plenitud: quedó pues de este modo mi finado hermano libre poseedor de esta capellanía: en su consecuencia Beistegui se ordenó de Presbítero a título de ella y cuando trataba de ir a residenciar a Placencia como tal capellan, le sobrevino la muerte 1833. Acto continuo hallandome yo revestido del título de prima tonsura pedí su adjudicacion y el tribunal de Calahorra me expidió el título de colacion en virtud del que tomé posesión ante el Notario Eclesiástico de esa villa el Sr. Treviño en esa parroquia de Sta. Maria la Real: no debo omitir, Ilustre Señor, que al tiempo que el Señor Notario procedía en la sacristía a extender el acto de mi posesión Real vel quasi, se presentó el Sr. Azcaray Padre con cuatro testigos, alegando que aquella capellanía era simplemente memoria de misas o lo que es lo mismo merelega, y que como tal pertenecía a su hijo Jose Cruz niño en la actualidad de edad de dos años: debo advertir a V. S. que cuando Jose Cruz obtuvo el nombramiento de ese Ilustre Ayuntamiento para esta Capellanía, algunos de sus miembros debieron ser sorprendidos y es posible mediaran algunas influencias, pues recuerdo se me aseguró que su Ilustre Sr. Alcalde Don Manuel de Guisasola sabedor sin duda de las sentencias de los tribunales, debió de tratar de esclarecer a los demas Señores miembros sobre los antecedentes y la incompatibilidad de este nombramiento y si mal no me engaño debe constar alguna protesta de aquel Ilustrado Señor en el acta que se redactó a favor de Azcaray.*

*Acto continuo de mi posesion se incoo litigio ante el tribunal civil del Corregimiento de Azpeitia y sin dar lugar a que se presentaran en aquel tribunal los documentos y las egecutorias de Calahorra y Burgos sobre el litigio de Jauregui y Beistegui, documentos que a la simple vista deben anular y destruir el pretendido derecho de un // Azcaray, hubo de sobreeser por cuanto las oficinas de aquel tribunal pasaron a San Sebastián con motivo de los sucesos de la guerra civil: posteriormente desde mi residencia en este reyno, he tratado de ver si se podía gestionar acudiendo a los tribunales y se me ha contestado se aplazaran todas las diligencias hasta nueva orden.*

*Debo tambien observar a V. S. que habiendo yo contraido matrimonio en 1847 conceptuando la incompatibilidad de mi nuevo estado, hice presente a su Ilustre Ayuntamiento para que declarandola vacante recayera su nombramiento en aquel que tuviera mejor derecho, pero ignoro y ni debió ser*

*presentada esta mi renuncia, es pues lo cierto que Dn. José Cruz la ha gozado hasta que el Señor le ha llamado a mejor vida, y la ha poseído en concepto de merela (sic) y ha percibido todos sus réditos y emolumentos, sin mas documentos de nombramiento que un solo y simple mandato de una autoridad incompatible cual era el que obtuvo de un Señor Corregidor de Guipuzcoa. Estos son, Ilustre Señor, los hechos ocurridos sobre los antecedentes de esta Capellanía y es mi súplica muy encarecida los haga conocer a esos Señores miembros de esa Ilustre Corporación para que tomándolos en consideración y animados como estoy convencido de los mejores deseos (sic) de proceder con rectitud y justicia, puedan obrar cuando llegare el caso con pleno conocimiento de causa.*

*No debe ocultarse a la alta sabiduría y perspicacia de V. S. y de esos Señores, que si el finado Dn. Miguel Antonio Jauregui y su esposa Doña Bárbara Aguirre que la poseyeron durante muchos años, hasta el año de 1827 y que fueron desposeídos según llevo dicho y fueron también condenados por los mismos tribunales a devolver a mi hermano Dn. Juan Bautista todos los réditos mal percibidos y habidos, y de esto Señor Alcalde, de un modo seguro y sin la menor duda puedo declararle puesta mi mano en mi conciencia que me consta que el Sr. Jauregui entregó a mi finado hermano todo cuanto habían percibido dicho Señor y su Esposa.*

*Es pues de suponer que este mismo tribunal al hacerse cargo de sus antecedentes y fallar, condene igualmente a los que han gozado indebidamente en el mismo concepto que Jauregui. Este es Ilustre Señor, el parecer de mi humilde persona y lo es también de otras personas competentes.*

*Reciba, Ilustre Señor, el homenaje respetuoso de este su mas Att SS*

*Q. B. S. M.*

*José Matías de Beistegui*

*Vital Carles 9*

*Burdeos 19 de Enero de 1866*